



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales

DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA

Programas de transferencias monetarias condicionadas y temporalidad social. Un análisis del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y su incidencia en el uso del tiempo de la población beneficiaria

María Andrea Delfino

Directora: Dra. Marta Panaia (UBA-CONICET)
Co-Directora: Dra. Adriana Chiroleu (UNR-CONICET)

Rosario
NOVIEMBRE DE 2015

Resumen

La profundización del modelo aperturista a partir de 1991 con la aplicación del Plan de Convertibilidad introdujo cambios profundos en la legislación laboral y dio lugar a una nueva generación de políticas sociales, las cuales, en el caso argentino, no contemplan la temporalidad social. A partir de esta premisa, el objetivo general de esta investigación es indagar la incidencia que los programas de transferencia monetaria condicionados implementados tienen en moldear el uso del tiempo de los beneficiarios, a través del estudio del caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Los programas diseñados para hacer frente a la desocupación a partir de la década del 90, no resultan inocuos en términos de temporalidad social ya que introducen una serie de prescripciones y obligaciones las cuales pueden llegar a profundizar la desestructuración temporal de las poblaciones asistidas. El reconocimiento de esta situación a través de un estudio en profundidad constituye un aporte significativo pues introduce una variable habitualmente ignorada y de fuerte incidencia en la aplicación de estos programas.

La presente investigación de tipo exploratoria se propone como un estudio de caso único encastrado (*embedded single case study*) en la medida en que la indagación empírica se centra en describir y analizar un fenómeno social complejo y contemporáneo dentro de su contexto en el mundo social. Al respecto, se indagarán la temática en estudio con relación a la etapa final de aplicación del PJJHD en la ciudad de Rosario, esto es el año 2006. Por su parte, el abordaje metodológico reúne elementos tanto de la metodología cualitativa como de la cuantitativa, con predominio de esta última.

Agradecimientos

Muchas personas e instituciones contribuyeron de diferentes maneras para que este proyecto se concretara, sin todos ellos este trabajo no hubiera llegado a puerto. El apoyo recibido durante toda mi etapa de formación de un importante número de instituciones de educación pública, fundamentalmente argentinas pero también brasileñas, constituyó el soporte básico durante todo este camino.

Agradezco especialmente a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la cual desarrollé mis estudios de grado y de doctorado y, a través de ella, a un lector anónimo de esta tesis que permitió mejorar la versión final.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través del Programa PROMAC-Pos financiaron parcialmente esta investigación. Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL me brindó el espacio y toda la estructura de trabajo necesaria durante la etapa de redacción final de la tesis.

El encuentro con la doctora Marta Panaia fue fundamental en esta etapa de mi formación. A ella todo mi cariño y respeto por la dirección segura, por el conocimiento compartido y por su generosa guía en los conceptos, autores y en las bases de este proyecto.

A mis compañeras de la cátedra de Estructura Social de la Facultad de Ciencia Política de la UNR: Adriana Chiroleu, María Elena Nogueira y Claudia Voras, por el espacio compartido durante tantos años.

Un agradecimiento especial merece el profesor Hugo Arrillaga que me recibió en la UNL en la etapa de redacción de esta tesis. Hago extensivo este agradecimiento a mis compañeros de la cátedra de Economía Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas y de los proyectos de investigación en los que participo en el marco de la misma institución.

El compromiso y la dedicación de Matías Manna fueron sumamente valiosos durante la etapa del trabajo de campo.

Es fundamental sumar a estos agradecimientos el valioso tiempo dedicado a este proyecto por las beneficiarias y beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y por los coordinadores de los centros comunitarios donde fue desarrollado el trabajo de campo.

A mi familia de sangre y por elección, de acá y de allá.

Introducción

1.- Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis de trabajo	7
2.- Estado de la cuestión	9
3.- Diseño de la investigación, la metodología, el campo de investigación y las técnicas del campo	13
4.- Clasificación de actividades para el análisis del uso del tiempo de los beneficiarios	23
5.- La estructura de la tesis	32

Capítulo 1: El marco teórico-conceptual

1.- La política social como intervención pública sectorial	35
1.1.- El vínculo entre la política social y la política laboral	42
1.2.- Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en el contexto de las transformaciones sociopolíticas	47
1.2.1.- El surgimiento de los PTMC	47
1.2.2.- Los objetivos de los PTMC	51
1.2.3.- Las características de los PTMC	53
1.2.4.- Las bases teóricas de los PTMC	55
2.- La categoría tiempo social	59
2.1.- La noción de uso del tiempo	68
2.1.1.- Aspectos teórico-epistemológicos	68
3.- Tiempo, desempleo y PTMC	69

Capítulo 2: Los programas de transferencias monetarias condicionadas en Argentina y el surgimiento del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados

1.- El contexto socioeconómico nacional	77
1.1.- El giro en las políticas sociales	82
2.- Los antecesores del PJJHD: los programas de empleo transitorio de la década del 90	85
3.- Crisis, emergencia nacional y el surgimiento del PJJHD	88
4.- Las características generales del PJJHD	95
4.1.- Las modalidades del esquema de contraprestación	97
4.2.- La modalidad de gestión del Programa y el lugar de los consejos consultivos	104
4.3.- El financiamiento del PJJHD	113
5.- La redefinición del PJJHD	115
5.1.- El financiamiento de la reformulación del Programa	120
6.- Diferencias y similitudes del PJJHD con los programas de empleo transitorio de la década del 90	122
7.- El Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, ¿un PTMC criollo?	124

Capítulo 3: Orígenes, evolución y contraprestaciones del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en la ciudad de Rosario

1.- El contexto rosarino	137
2.- El PJJHD en la ciudad de Rosario	141
3.- Las actividades de contraprestación en los registros oficiales: territorialización y actividades de supervivencia	145
3.1.- Los microemprendimientos productivos como forma de contraprestación	156

4.- Gestión descentralizada del PJJHD en Rosario y ausencia de contraprestaciones: una mirada desde los informantes clave	158
4.1.- Descentralización administrativa y control social	163
4.2.- Los instrumentos de control	168
4.3.- Las formas en que opera el control social	170
4.4.- Trabajo comunitario y planes sociales: la centralidad del territorio	175
4.5.- Planes y reciprocidad social	179
5.- La redefinición del Programa en la ciudad de Rosario	186
6.- Contraprestaciones, inserción laboral y control social	187

Capítulo 4: Uso del tiempo y actividades instrumentales: las actividades de contraprestación, el trabajo remunerado y los estudios

1.- Algunas características generales de los beneficiarios encuestados	191
2.- Las actividades de contraprestación	194
2.1.- Las horas de contraprestación	194
2.2.- Descripción de los proyectos donde contraprestan los beneficiarios encuestados	199
3.- El trabajo remunerado	213
3.1.- La situación de las mujeres	214
3.1.1.- Las beneficiarias que realizaban un trabajo remunerado	215
3.1.2.- Las beneficiarias que no poseen una ocupación en el mercado	223
3.2.- La situación de los hombres	224
3.3.-El tipo de trabajo	228
3.4.- La jornada de trabajo	235
3.5.- El tiempo de traslado	238
3.6.- La relación entre el trabajo remunerado y las horas de contraprestación	239
4.- Los estudios	245
5.- Tiempo, trabajo y disciplina	246

Capítulo 5: Uso del tiempo y actividades instrumentales: el trabajo no remunerado

1.- El trabajo no remunerado	248
1.1.- El trabajo doméstico y familiar	253
1.1.1.- Trabajo doméstico (en sentido restringido)	258
1.1.2.- Trabajo específico de cuidados	261
1.1.3.- Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia	265
1.2.- El trabajo voluntario	270
2.- Las simultaneidades	272
3.- Necesidades materiales, Estado y desigualdad	273

Consideraciones Finales	278
--------------------------------	-----

Referencias bibliográficas	299
-----------------------------------	-----

Anexo	338
--------------	-----

Índice de cuadros y gráficos

Cuadro Nro. 1	15	Cuadro Nro. 26	216
Cuadro Nro. 2	27	Cuadro Nro. 27	217
Cuadro Nro. 3	28	Cuadro Nro. 28	218
Cuadro Nro. 4	81	Cuadro Nro. 29	218
Cuadro Nro. 5	81	Cuadro Nro. 30	222
Cuadro Nro. 6	126	Gráfico Nro. 5	226
Cuadro Nro. 7	126	Cuadro Nro. 31	227
Cuadro Nro. 8	139	Cuadro Nro. 32	227
Cuadro Nro. 9	140	Cuadro Nro. 33	228
Cuadro Nro. 10	141	Cuadro Nro. 34	231
Gráfico Nro. 1	144	Cuadro Nro. 35	235
Gráfico Nro. 2	145	Cuadro Nro. 36	236
Cuadro Nro. 11	145	Cuadro Nro. 37	236
Cuadro Nro. 12	147	Cuadro Nro. 38	237
Cuadro Nro. 13	149	Cuadro Nro. 39	238
Cuadro Nro. 14	150	Cuadro Nro. 40	242
Cuadro Nro. 15	157	Cuadro Nro. 41	242
Cuadro Nro. 16	160	Cuadro Nro. 42	244
Cuadro Nro. 17	186	Cuadro Nro. 43	246
Cuadro Nro. 18	192	Cuadro Nro. 44	257
Cuadro Nro. 19	192	Cuadro Nro. 45	257
Cuadro Nro. 20	193	Cuadro Nro. 46	259
Cuadro Nro. 21	195	Cuadro Nro. 47	260
Cuadro Nro. 22	195	Cuadro Nro. 48	263
Gráfico Nro. 3	198	Cuadro Nro. 49	264
Cuadro Nro. 23	199	Cuadro Nro. 50	267
Cuadro Nro. 24	201	Cuadro Nro. 51	269
Cuadro Nro. 25	216		

Introducción

1.- Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis de trabajo

La dimensión temporal se presenta como una de las características distintivas de las transformaciones que ha experimentado el capitalismo desde el último cuarto del siglo XX, incidiendo tanto en las formas de organizar la producción como en la magnitud de la población excedentaria. En este sentido, es posible señalar que el desempleo también tiene profundas consecuencias sobre el tiempo vivido por las personas, dando lugar a corrimientos que desorganizan los ritmos y destruyen las referencias temporales.

En Argentina, el proceso de reestructuración social vivenciado a partir de la década del 70 supuso la reestructuración del aparato del Estado, transformaciones profundas en la matriz productiva y en el mercado de trabajo, así como también un aumento sin igual de las formas de fragmentación y vulnerabilidad social. Asimismo, el quiebre del modelo conllevó pérdidas intangibles. La pérdida de la posibilidad de dominio sobre el tiempo constituye uno de los rasgos centrales de este proceso.

La profundización de este modelo a partir de 1991 con la aplicación del Plan de Convertibilidad introdujo cambios profundos en la legislación laboral (reduciendo la estabilidad del empleo, promoviendo el empleo legal precario, bajando los costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresariales) y dio lugar a una nueva generación de políticas sociales que buscaba hacer frente a los elevados índices de pobreza y de desocupación y que se articulaba de manera diversa con las políticas pre-existentes (Martínez Franzoni y Voorend, 2008).

Estas políticas, denominadas de forma genérica programas de transferencias monetarias condicionadas (en adelante, PTMC), suponen auxilios monetarios asistenciales y operan con condicionalidades. Es decir, la entrega del beneficio tiene como contrapartida el cumplimiento, por parte del/los beneficiarios¹, de ciertos requisitos (Cohen y Franco, 2010). Sin embargo para el caso argentino, esta

¹ Utilizamos aquí la noción de “beneficiario” que es la de uso más extendido dentro de la literatura especializada. Unos pocos autores han optado por las nociones de “perceptor” o “receptor”, por considerar que la noción de “beneficiario” supone una nomenclatura de cuño asistencialista (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; CELS, 2010)

introducción de obligaciones y prescripciones sobre los beneficiarios, no contempla la temporalidad social.

Así, el punto de partida de esta investigación es la ausencia de consideraciones acerca de la temporalidad social en los PTMC implementados en Argentina desde mediados de la década del 90. En este sentido, el interrogante general que guía esta investigación refiere a la incidencia que tienen los programas de transferencias monetarias condicionadas en el uso del tiempo de las poblaciones beneficiarias. Es decir, el núcleo del trabajo se centra en explorar las consecuencias que la ausencia de consideración de la dimensión temporal tiene en los esquemas temporales de los beneficiarios.

El reconocimiento de esta situación a través de un estudio en profundidad resulta fundamental pues introduce una variable habitualmente ignorada y de fuerte incidencia en la aplicación de estos programas. En este sentido, consideramos que la asignación y el uso del tiempo -en tanto sistema de comunicaciones- brinda una variable útil para evaluar una serie de resultados de la aplicación de los PTMC escasamente e insuficientemente abordado.

A partir de estas premisas, el objetivo general de esta investigación es indagar la incidencia que estos programas de transferencias monetarias condicionadas tienen en moldear el uso del tiempo de los beneficiarios, a través del estudio del caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD).

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar los programas de transferencias monetarias condicionadas en Argentina y específicamente el caso del PJJHD, poniendo énfasis en la forma que contienen la temporalidad social.
- Explorar y analizar el lugar que las prescripciones, encuadres y obligaciones introducidos por los programas de transferencias monetarias condicionadas adquirieron en la realidad en el esquema temporal de las poblaciones asistidas por el Estado.
- Caracterizar y analizar el tipo de relación que se establece entre las prescripciones introducidas por estos programas y el resto de las actividades laborales mercantiles y no mercantiles.
- Identificar, seleccionar y clasificar los ejes que estructuran los esquemas temporales de las poblaciones asistidas.

El marco teórico desde el cual se buscó dar cuenta de estos objetivos combina el análisis de las políticas sociales (Andrenacci, 2002; Barbeito y Lo Vuolo, 1998; Castel, 1997; Lindenboim y Danani, 2002; Oszlak y O`Donnell, 1976; Repetto, 2001;) y más específicamente el análisis de los PTMC y su impacto (Alvarés Legizamón 2011; Cohen y Franco, 2010;; Midaglia, 2010; Martinez Franzoni y Voorend, 2008; Parker y Skoufias, 2003) con aportes de la sociología del tiempo (Demazière, 2006; Durkheim, 2003; Lewis y Weigert, 1992; Ramos Torre 1998) y dentro de ella con los desarrollos teóricos y empíricos relativos a noción operativa de “uso del tiempo” (Durán, 1997, 2002, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e; Esquivel, 2009; García Sainz, 2005a, 2005b; Glorieux, 1998; Ramos Torre 1990b).

La hipótesis que se desprende de los objetivos planteados sostiene que los encuadres, obligaciones y prescripciones introducidos por estos programas -junto a la disciplina derivada de la lucha por la sobrevivencia cotidiana- profundizan la temporalidad fragmentada que caracteriza a las poblaciones asistidas.

De esta hipótesis general se desprenden dos hipótesis secundarias:

- Desde el punto de vista del ordenamiento temporal, el cotidiano de las poblaciones asistidas por el Estado se caracteriza por la creciente tensión entre la pluralidad de tiempos sociales produciendo la desestructuración de los ritmos sociales y el quiebre de las referencias temporales.
- Desde el punto de vista de la noción de trabajo (en sentido amplio), la existencia de las poblaciones asistidas por el Estado se caracteriza por múltiples, simultáneas y/o fragmentadas jornadas.

2.- Estado de la cuestión

En nuestro país se han realizado una amplia variedad de investigaciones centradas en los efectos, resultados o impactos que han tenido los diferentes PTMC. Algunos trabajos se enfocaron en medir los resultados que estos programas han tenido aplicando herramientas estadísticas tradicionales, tales como sus impactos en términos de tasas de desocupación, pobreza, e indigencia (CELS, 2003; Neffa, 2009; Pautassi, 2004). Otros estudios evaluaron los programas en clave de cultura política, reflexionado sobre la efectiva participación de la sociedad civil en su implementación,

problematizando el vínculo entre el clientelismo político y la asignación de los beneficios o planteando las escasas posibilidades de reinserción laboral de los beneficiarios producto del tipo de contraprestación prevaleciente en los mismos (Arcidiácono y Zibecchi, 2007; CELS, 2003; Kessler y Roggi, 2005; Rodríguez Enríquez, 2007a y 2007b; Sala, Golovanensky y Ramírez, 2001). Es posible señalar también un conjunto de trabajos que se centraron en la relación entre el concepto de trabajo contenido en este tipo de programas y las representaciones de la población beneficiaria y/o en su contribución al mantenimiento de hábitos laborales y al fortalecimiento de la autoestima (Correa y Hermida, 2005; Roca, Schachtel, Berho, Langeri, 2005).

Una segunda vertiente de trabajos vinculados a la problemática de esta tesis se relaciona con los estudios que abordaron desde diferentes perspectivas y con diferentes objetivos la temporalidad social; es decir aquellos estudios que se centraron en ordenamiento temporal de los procesos y acontecimientos sociales y en la manera específica que tienen los grupos sociales de ordenarse temporalmente². Así, por un lado, es posible mencionar los trabajos centrados en analizar los datos surgidos de encuestas de uso del tiempo. En estos análisis se le ha otorgado un lugar preponderante al objetivo de evidenciar y mostrar la importancia del trabajo de reproducción social no remunerado, intentando recuperar –así- aquellas actividades que se han hecho invisibles bajo la lógica del capitalismo (Aguirre, 2009a y 2009b; Aguirre, García Sainz, Carrasco, 2005; Arriagada, 2005; Durán, 2005a; Esquivel, 2009). En los últimos años estos estudios han incorporado paulatinamente nuevos e interesantes objetivos, tales como el análisis de las redes económicas de trabajo de la población vulnerable, la mejora en las estadísticas laborales, la mejora en las estimaciones del ingreso nacional y la utilización de los datos obtenidos para el diseño de políticas de reducción de la pobreza, generación de trabajo y promoción del bienestar (Hirway, 2001).

Por otro lado, y siempre dentro de esta segunda vertiente de trabajos, es importante hacer referencia a aquellas investigaciones que abordaron el vínculo entre diferentes poblaciones objetivo y la temporalidad social (Lazarsfeld, Jahoda, Zeisel, 1996; Bourdieu, 1979; Ahn, Jimeno, Ugidos, 2003, Demazière, 2006) De estas cuatro obras sólo dos de ellas –la línea de trabajos inaugurada por Lazarsfeld y la vertiente biográfica de Demazière- problematizan este vínculo tomando como referencia a

² Volveremos sobre este punto en el capítulo siguiente.

poblaciones de desocupados que recibían algún tipo de asistencia del Estado. En ambos casos se trataban de desocupados que momentáneamente estaban recibiendo subsidios al desempleo.

En el análisis de Lazarsfeld, Jahoda y Zeisel (1996), la expresión “un regalo envenenado” es la que mejor podría definir la relación entre los desempleados asistidos por el Estado y el tiempo en la comunidad de Marienthal a principios de la década del 30. De la investigación se desprende que la ruptura del vínculo de trabajo y la disminución del contacto con el mundo exterior, que esta ruptura produce, conllevan la pérdida de toda posibilidad material y psicológica de utilizar este tiempo. Al no tener nada en qué ocuparse, los desocupados tampoco emprenden nada nuevo y se deslizan lentamente de una vida reglamentada a una existencia vacía y sin coerciones. Sin embargo, esta constatación presenta para los autores radicales diferencias en términos de género. Mientras que la utilización más frecuente del tiempo por parte de los hombres consiste en “no hacer nada”, la centralidad femenina en el proceso de socialización primario y la realización del trabajo doméstico no remunerado al interior del hogar imprime en las mujeres adultas de Marienthal una jornada cargada de actividades.

Cincuenta años después del trabajo en la comunidad de Marienthal, la investigadora Marie Jahoda, quien no sólo había participado de aquella experiencia sino que además había sido la encargada de redactar el informe final, retoma la problemática focalizando en la pérdida de las funciones sociales y psicológicas del trabajo (Price, Friedland y Vinokur, 1998).

Desde la perspectiva de Jahoda, el empleo posee dos tipos de funciones. Además de la “función manifiesta” de proveer de ingresos, el empleo, cumple con cinco “funciones latentes” o categorías de experiencia. Ellas son: 1) la imposición de una estructura temporal, 2) la expansión del ámbito de las experiencias sociales hacia áreas donde las relaciones no conllevan tanta emotividad como la vida familiar, 3) la participación en los objetivos y esfuerzos colectivos, 4) la asignación de un status y de una identidad en virtud del empleo y 5) la necesidad de realizar una actividad regular. Derivado de este planteamiento, las evidentes consecuencias del desempleo en términos de pobreza se entrelazaría con otras conexiones no tan fuertes o menos evidentes. Dentro de ellas, la más importante de las consecuencias producidas por la súbita

aparición del desempleo es la inevitable pérdida de la estructura temporal habitual para las horas en que uno está despierto.

En tanto el planteo de Demazière (2005, 2006) parte de considerar que la privación del empleo tiene, en particular en las sociedades fundadas en el trabajo, consecuencias directas sobre el tiempo vivido. El desempleo no sólo conduce a liberar tiempo sino que fundamentalmente da lugar a una desestabilización del tiempo de referencia. Así, el desempleo no puede ser disociado de una perspectiva temporal.

El tiempo de desempleo se caracteriza por una incertidumbre recurrente, marcada por tensiones entre pasado, presente y futuro que se manifiesta en los diferentes tiempos sociales. Los corrimientos que desorganizan los ritmos temporales, destruyen las referencias temporales y excluyen la métrica de la vida social, no funcionan de manera idéntica y uniforme pero sí circunscriben, más allá de la variedad de experiencias vividas, la condición típica de desempleo. Sin embargo, el tiempo de los desempleados es también objeto de encuadres y prescripciones que tienden a imponer una forma específica a la experiencia del desempleo. En este sentido, el status del desempleo enmarca a los desempleados en una “madeja de prescripciones y obligaciones”. El tiempo impuesto (un ejemplo podría ser el tiempo de búsqueda de empleo) adquiere un peso considerable en el ordenamiento temporal de los desocupados. Esas actividades impuestas supuestamente deberían disolver o cuanto menos reducir la incertidumbre temporal.

En los últimos años una serie de autores ha planteado la necesidad de incluir la problemática de la temporalidad social –y más específicamente la noción operativa de uso del tiempo- en el análisis y la evaluación de los programas sociales (Gammage, 2009) y fundamentalmente en aquellos programas que comportan condicionalidad o corresponsabilidad (Cecchini, Leiva, Madariaga y Trucco, 2009; Cecchini y Madariaga, 2011; León Guzmán, 2004). Si bien la necesidad de incorporar la dimensión de la temporalidad social al análisis y a la evaluación de los programas sociales viene siendo puesta de manifiesto en los últimos años, todavía son muy pocos los estudios que efectivamente han incorporado esta óptica. Entre ellos puede mencionarse el trabajo de Martínez Franzoni y Voorend (2008) que analiza el impacto que han tenido en términos de igualdad de género diferentes PTMC de Chile, Costa Rica y El Salvador. Una de las dimensiones que es considerada por los autores es la desigualdad en el uso del tiempo.

En una dirección similar Parker y Skoufias (2003), incorporaron la dimensión del uso del tiempo al análisis del Programa Progresá aplicado en México.

Queda de manifiesto entonces por una parte la importancia de la dimensión temporal y por la otra que si bien actualmente hay una importante proliferación de trabajos direccionados a evaluar los PTMC implementados en Argentina, estos no han sido analizados aun a la luz de la dimensión temporal.

3.- Diseño de la investigación, la metodología, el campo de investigación y las técnicas del campo

Para responder a las preguntas de investigación articulando el análisis de políticas públicas con la sociología del tiempo la presente investigación de tipo exploratoria se propone como un estudio de caso único encastrado (*embedded single case study*), en la medida en que la indagación empírica se centra en describir y analizar un fenómeno social complejo y contemporáneo dentro de su contexto en el mundo social. En este tipo de estudios, los límites entre el fenómeno de estudio y el contexto son difusos (Yin, 1984). Al respecto, se indagó la temática en estudio con relación a la etapa final de aplicación del PJJHD en la ciudad de Rosario, esto es el año 2006.

Para ese momento permanecían dentro del Programa aquellos beneficiarios que todavía no habían podido insertarse en el mercado de trabajo, el cual mostraba ya signos claros de reactivación. Asimismo, los anuncios en torno la reorganización del sistema, que habían comenzado en 2004 pero que finalmente se concretaron en la ciudad de Rosario hacia mediados de 2006, posibilitaron realizar todo el trabajo de campo cuando la migración de beneficiarios hacia otras modalidades de asistencia aún no se había concretado. Esta cuestión resultó central ya que sólo en el marco de PJJHD era posible establecer un contrapunto en el uso diferencial del uso del tiempo entre varones y mujeres.

El abordaje metodológico reúne elementos tanto de la metodología cualitativa como de la cuantitativa, con predominio de esta última.

La caracterización y el análisis del PJJHD a nivel general se desarrollaron a partir de fuentes documentales y estadísticas; en tanto la descripción de la implementación del mismo en la ciudad de Rosario combinó el uso de las fuentes

estadísticas, registros públicos de beneficiarios del Programa y entrevistas a informantes clave.

En relación a la legislación referida a la creación del Programa, la misma permitió dar cuenta no sólo del contexto de creación y de los fundamentos esgrimidos para la implementación del mismo sino también las reformulaciones que se fueron instrumentando a lo largo del tiempo. Asimismo recurrimos a fuentes primarias provenientes de diversas instancias: estudios realizados desde afuera del Estado (CELS, CEPAL), por consultoras externas contratadas por el Programa (Grupo Sophia), por el área que implementa el Programa (Ministerio de Trabajo – MTEySS, en adelante-), por organismos de control del Estado (SIGEN) y por los organismos financiadores (Banco Mundial). En la lectura y el análisis de los documentos se orientó la mirada particularmente a la forma en la cual la formulación (y/o reformulación) del Programa y las evaluaciones realizadas del mismo incorporaron la dimensión temporal.

En tanto, para poder analizar la específica forma de implementación del Programa a nivel territorial en la ciudad de Rosario recurrimos -más allá de las fuentes estadísticas y los registros públicos de beneficiarios del Programa- a entrevistas a informante claves. La utilización de este tipo de metodología supone otorgar un inmenso valor a una interpretación microscópica del discurso social y fijar esos discursos a través de una investigación. Sin embargo, la importancia de esta técnica no se encuentra sólo en abrir las puertas a un análisis micro, sino que permite además abandonar el punto de vista único, central y dominante en que se sitúa generalmente el observador en provecho de una perspectiva que dé cuenta de la pluralidad de puntos de vista coexistentes e incluso, a veces, en conflicto (Bourdieu, 1997).

Los informantes clave fueron identificados durante las visitas a los centros comunitarios y asociaciones civiles. Se trata fundamentalmente de los líderes (presidentes/as, coordinadores/as, secretarios/as generales, etc.) de las organizaciones y/o de las personas que realizan actividades de gestión en las mismas (secretarios/as). En las organizaciones más pequeñas esas actividades confluían en la misma persona. En algunos casos las personas entrevistadas eran a la vez beneficiarias de algún plan social³ -ya sea del PJJHD o de algún otro programa residual-. En esos casos el tipo de actividad

³ La noción de “plan” es una categoría nativa que se usa genéricamente en Argentina para denominar a los PTMC, tanto de parte de la gente como de los técnicos y políticos, más allá de que en su enunciación oficial son nombrados como Programas (Álvarez Leguizamón, Ibarra y Naharro, 2009).

que desempeñaban como contraprestación coincidía con su rol histórico en la institución.

Todas ellas eran personas que no sólo se encontraban en el ámbito donde se realizaba la investigación, sino que además podían brindar información detallada debido a su experiencia y conocimiento sobre el tema⁴. Este tipo de técnica posibilitó, por un lado, apreciar esos fenómenos tal como eran percibidos por los actores que vivían y se relacionaba en un determinado espacio social y, por el otro, aportar una perspectiva desde adentro, próxima a los datos. Así, los datos aportados por los informantes clave abrieron el camino a descripciones amplias y sólidas ancladas en procesos de origen local (Panaia, 2006).

Se realizaron un total de 20 entrevistas. De las cuales 12 corresponden a coordinadores/as y 8 corresponden a secretarios/as o personal de gestión de centros comunitarios y asociaciones civiles. De los 12 coordinadores entrevistados, 3 de ellos eran o fueron en algún momento beneficiarios de planes sociales. Por su parte 4 de las personas entrevistadas que desarrollaban actividades de gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles eran beneficiarios de planes sociales.

Cuadro N° 1: Cantidad de entrevistas a informantes clave por institución

Centro Comunitario / Asociación Civil	Coordinador/a	Secretario/a o Personal de Gestión
Institución Nro. 4	1	3
Institución Nro. 8	1	-
Institución Nro. 10	1	-
Institución Nro. 11	1	-
Institución Nro. 15	1	-
Institución Nro. 19	1	2
Institución Nro. 22	1	-
Institución Nro. 28	1	-
Institución Nro. 30	1	-
Institución Nro. 32	1	2
Institución Nro. 37	1	-
Institución Nro. 45	-	1
Institución Nro. 46	1	-
Total	12	8

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

⁴ Adicionalmente, los coordinadores y las personas que realizan actividades de gestión dentro de las instituciones (entrevistados o no) jugaron un rol de “porteros” en la investigación, en la medida en que actuaron permitiendo u obstaculizando el acceso a los beneficiarios del PJJHD.

Para la realización de las entrevistas se utilizó una guía semiestructurada⁵, es decir un esquema previamente elaborado. Dicha guía contenía los temas y los sub-temas que debían cubrirse en función de poder dar cuenta de la forma en la que se implementaba el Programa a nivel territorial y las características básicas de las actividades de contraprestación. La entrevista fue organizada en tres bloques:

- El primer bloque, organizado con el objetivo de introducir la conversación y de “romper el hielo”, abordaba cuestiones generales relacionadas con la historia de la institución, sus orígenes, las formas de participación y las actividades que en ella se desarrollan.
- El segundo bloque, abordaba el funcionamiento y las prácticas organizacionales en relación a los planes sociales, tales como tipos y cantidades de proyectos de contraprestación, horas de contraprestación, cantidad de beneficiarios contraprestando, formas de control, procedimientos administrativos, relación con las diferentes órbitas estatales gerenciadoras de planes sociales, etc.
- El tercer bloque, intentaba indagar, conocer y analizar las opiniones, las miradas y valoraciones de los informantes clave en relación a la gran distancia existente entre el número de beneficiarios que deberían estar realizando actividades de contraprestación en la organización y los que efectivamente se encontraban realizándolas.

Las entrevistas fueron realizadas en su totalidad en los centros comunitarios y asociaciones civiles, algunas de ellas fueron grabadas y en otras se recurrió al registro con notas. La utilización de una u otra forma de registro dependió de varios factores: la mayor o menor disponibilidad para conversar, la intención de interferir de la menor forma posible en el desarrollo de las actividades de la institución, el hecho de haber conseguido realizar la entrevista en un día diferente al pautado, etc. Adicionalmente, la situación de entrevista comprendió en varias oportunidades mucho más que las grabaciones o los registros de escritos, por eso las notas del campo y las observaciones también fueron de insumo para el análisis.

⁵ La guía utilizada para la realización de las entrevistas puede encontrarse en el Anexo.

Por su parte, el estudio de uso del tiempo fue abordado a través de la metodología homónima⁶ que posibilita la comprensión de las maneras específicas que tienen las sociedades humanas de ordenarse temporalmente. Esta metodología supone la posibilidad de realizar una mensura, un conteo exhaustivo del tiempo asignado a las diversas actividades durante un período específico. Sin embargo, la potencialidad del método no consiste en un simple conteo de las horas asignada a cada actividad, sino en la posibilidad de dotar a la información captada de un análisis verdaderamente sociológico. En este sentido, los estudios de uso del tiempo son una de las formas de análisis del contrato social, o mejor aún, una forma de análisis de la “ejecución real” del contrato social (Durán, 1997).

Lo que define a la metodología de uso del tiempo es el conjunto de elecciones efectuadas al utilizar esa técnica, las finalidades y el ámbito de investigación que le corresponde. Así, el objetivo principal del método se encuentra en proporcionar una ilustración, una descripción de los comportamientos generalizados que aparecen en la población estudiada; además de permitir extraer indicaciones de carácter más orientativo, más causal, a condición de que se exploten con rigor las posibilidades del instrumento (Belloni, 1988).

Dentro de la metodología de uso del tiempo fue aplicada la técnica del diario de actividades auto-administrado (*time-budget survey*). Desde la perspectiva de Durán (1997, 2005c), el diario de actividades es una forma de relato en que el sujeto informa sobre sí mismo o sobre algún acontecimiento con periodicidad diaria, y se caracteriza - como el género literario- por la autonomía del estilo y contenido. Para la autora, la utilización de este tipo de información a los efectos de una observación extensiva y, por tanto, comparable, requiere suprimir las condiciones de libertad de percepción y descripción del sujeto, para someterlo a un formulario muy claramente pautado que precisa exactamente lo que el sujeto ha de observar y transcribir. En definitiva, transforma el diario en una encuesta. Desde el punto de vista técnico, el cuestionario toma la forma de un diario, una grilla -similar a las agendas o a los “libros de contabilidad” (Ramos Torre, 1990b)- donde se encuentran delimitados los intervalos temporales dentro de los cuales el informante consignará, en sucesión, las actividades desarrolladas.

Entre las principales ventajas del uso de esta técnica es posible enumerar:

⁶ Una exhaustiva descripción de la metodología de uso del tiempo y de sus limitaciones puede encontrarse en el Anexo.

- a) por la propia disposición del formulario, las actividades no pueden sumar más de 24 horas diariamente, que es el mayor riesgo de los recuentos de memoria ante listas de actividades (Durán, 1997, 2005c; Ramos Torre, 1990b).
- b) al seguir de cerca las actividades de cada sujeto en uno o varios días, evita cierto sesgo hacia la reconstrucción del día promedio al que pueden tender la técnica de lista de actividades y, en ese sentido, puede lograr mayor precisión y exactitud (Durán, 1997, 2005c; Ramos Torre, 1990b).

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, para algunos autores el diario de actividades no es la panacea ya que requiere una colaboración íntima del entrevistado (Durán, 1997, 2005c) y una familiaridad con la escritura (Aguilar, 1999; Durán, 1997, 2005c; García Sainz, 2005a); la resistencia a informar aumenta en la medida en que disminuye la conciencia del anonimato (Durán, 1997, 2005c) y la desconfianza de los informantes puede aumentar en el caso de acciones indagatorias promovidas por el gobierno (García Sainz, 2005a). Asimismo es una técnica que supone un elevado costo económico (Durán, 1997, 2005c; García Sainz, 2005a; Hirway, 2001), fundamentalmente, porque requiere de la disponibilidad de los investigadores en el campo durante mucho tiempo y porque en el caso de los diarios auto-administrados es frecuente que el investigador deba retornar varias veces a buscarlos (Hirway, 2001).

El operativo de campo (expuesto en detalle en las páginas siguientes) fue diseñado atendiendo a estas dificultades y buscando diferentes estrategias que permitieran minimizar su impacto.

El universo de estudio está conformado por aquellos beneficiarios del PJJHD de la ciudad de Rosario que se encontraban incorporados al Registro de Proyectos de Contraprestaciones del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario. Esto supone desde el punto de vista formal que los beneficiarios incorporados en los diferentes proyectos inscriptos en el Registro deberían estar realizando actividades de contraprestación.

El Registro no se trata de una nómina de beneficiarios, sino de un listado de proyectos en los cuales los beneficiarios realizan la contraprestación laboral o educativa exigida por el Programa. Dicho Registro no guarda ningún criterio clasificatorio y su único orden está dado por el número que el Estado municipal, como miembro del Consejo Consultivo Municipal, le otorgó al proyecto de contraprestación cuando el

mismo fue presentado para su evaluación. Consta de cuatro columnas que contienen además del número del proyecto, la denominación de la actividad (es decir, la característica básica del proyecto, como por ejemplo: copa de leche, comedor comunitario, huerta), la institución que avala el proyecto y la cantidad de beneficiarios que contraprestan en él. El Registro no especifica el sexo de los beneficiarios inscriptos en cada proyecto, sino sólo el número total de beneficiarios inscriptos en cada proyecto.

Este Registro tiene la particularidad de ser la única nomina oficial del PJJHD que permite una localización geográfica de los beneficiarios, ya que el padrón general del Programa -difundido por el MTEySS- no contiene direcciones particulares o teléfonos de los beneficiarios. En este sentido, el Registro de Proyectos de Contraprestaciones del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario permite la localización de los beneficiarios que realizan tareas de contraprestación a través de las instituciones que avalan los proyectos. Adicionalmente, en la mayor parte de los casos la sede de la institución u organización que avala un proyecto de contraprestación oficial también de espacio o lugar físico donde se realizan dichas actividades, esto lleva a que comúnmente se los denomine “centros de contraprestación”.

Fueron entregadas 258 encuestas a beneficiarios del PJJHD⁷ que se encontraban realizando actividades de contraprestación en los centros comunitarios y asociaciones civiles. De ese total de 258 encuestas entregadas fueron recuperadas 119 encuestas. El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Rosario, entre marzo y septiembre de 2006⁸. De las 119 encuestas recuperadas, 107 corresponden a mujeres, mientras que las 12 restantes corresponden a hombres, todos ellos beneficiarios del PJJHD. La distribución por sexo de las encuestas recuperadas guarda relación con las proporciones de beneficiarios de uno y otro sexo para el Gran Rosario para el periodo inmediatamente anterior a la realización del trabajo de campo⁹. Por los objetivos definidos y por el

⁷ Nuestro análisis se centra de forma exclusiva en el beneficiario directo (y no en la familia a la cual está dirigido el PTMC), ya que es sobre quien recae la contraprestación exigida.

⁸ La finalización del trabajo de campo coincidió con la reformulación del PJJHD y el inicio del proceso de migración de los beneficiarios a los nuevos programas surgidos.

⁹ Para delimitar el porcentaje de encuestas correspondientes a cada uno de los sexos se utilizaron como referencia los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el Aglomerado Gran Rosario durante el segundo semestre de 2005 (periodo inmediatamente anterior a la realización del trabajo de campo). Para ese momento, en el Aglomerado Gran Rosario, la población con planes de empleo estaba compuesta por un 92,4% de mujeres y un 7,8% de hombres. Estos datos constituyen la única información pública disponible que muestra la participación diferencial por sexo entre los beneficiarios del Programa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos datos: 1) no refieren sólo a la ciudad de Rosario sino al Aglomerado

tamaño de la muestra, el análisis que se deriva de los datos es de carácter exploratorio, y consecuentemente, de él no es posible desprender inferencias estadísticas.

El instrumento de recolección de la información¹⁰ aplicado contaba con una página inicial que contenía un pequeño listado, a modo de recordatorio, de lo que era necesario tener en cuenta a la hora de completar el formulario y un espacio donde serían consignados los datos del encuestado. En las páginas siguientes la encuesta tomaba la forma de una grilla (similar a una agenda) donde se encontraban delimitados los intervalos temporales dentro de los cuales el entrevistado consignaba las actividades diarias. Incluía, también, un espacio donde el beneficiario encuestado podía informar las denominadas actividades secundarias (aquellas actividades que responden a la pregunta *¿qué más estaba haciendo?*)¹¹. Los intervalos temporales fueron establecidos cada 30 minutos.

La realización de este relevamiento ha presentado una serie de dificultades ligadas al hecho de ser una metodología de escasa difusión en nuestro país. En una primera etapa, se dio mucha importancia tanto a la concepción del instrumento como al diseño y concepción del relevamiento. Se realizó un relevamiento piloto en una asociación civil con dos objetivos específicos:

a) testear con los beneficiarios el instrumento

b) testear con los coordinadores y personal que realizaba tareas de gestión en la organización las técnicas diseñadas para el trabajo de campo.

Con ambos grupos fue importante trabajar en superar o minimizar una serie de barreras surgidas que se relacionaban con la aplicación de la encuesta. La primera de ellas fue la resistencia cultural a utilizar un cuestionario auto-administrado y la segunda estuvo relacionada con el temor que manifestaban tanto los beneficiarios como los

Gran Rosario. Este aglomerado está compuesto por los distritos de Villa Gobernador Gálvez, Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Pérez, Funes, Fray Luis Beltrán, Roldán, Puerto San Martín y Soldini; 2) refieren a población con planes de empleo en general y no sólo a beneficiarios del PJJHD y 3) repetidamente se han señalado las diferencias en los datos respecto de los beneficiarios del PJJHD que surgen de las EPH y de los registros oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según Pautassi (2004), este sub-registro podría ser explicado por diferentes factores: cobertura limitada de la EPH; calidad de los registros; error muestral; subdeclaración en la EPH o distribución no uniforme de los beneficiarios, con mayor concentración en áreas de menor población, entre otros.

¹⁰ El instrumento aplicado puede encontrarse en el Anexo.

¹¹ Las actividades simultáneas son aquellas que se desarrollan al mismo tiempo o en paralelo. El tratamiento dado aquí de estas actividades es de tipo jerárquico; es decir, se definen las actividades simultáneas como actividades “principal” y actividades “secundarias” realizadas en paralelo. El establecimiento de esa jerarquía correspondió al propio beneficiario encuestado.

líderes institucionales a estar siendo controlados en relación a la forma en que el PJJHD estaba siendo implementado dentro de la institución.

La encuesta demandaba un importante compromiso por parte de los beneficiarios ya que estaba diseñada para relevar todas sus actividades durante un mes, sin embargo en muy pocos casos la encuesta fue completada en su totalidad. La mayor parte de los beneficiarios sólo completó los primeros 15 días. Estas dos semanas fueron utilizadas como las semanas de referencia en todos los casos.

Fue necesario, también, capacitar a un grupo de apoyo que pudiera encarar un relevamiento de este tipo, en un tiempo que se había pautado originariamente entre 3 y 4 meses en términos ideales. Sin embargo, las dificultades operativas del trabajo de campo duplicaron el tiempo que demandó la realización del mismo. El relevamiento piloto fue realizado en el mes de febrero de 2006. Se detallan a continuación las técnicas utilizadas en el transcurso del trabajo de campo:

a) Técnicas de abordaje

El abordaje de los beneficiarios del PJJHD se realizó a través de las instituciones que avalan los proyectos en los cuales los beneficiarios participaban. Esto es, el abordaje de los beneficiarios se realiza a través de los denominados “centros de contraprestación”. Primeramente se hizo un contacto telefónico o personal con el objetivo de realizar un primer acercamiento con los líderes de la institución, ya sean coordinadores y/o personas que realizan tareas de gestión. Si el primer contacto es telefónico lo que se busca es concertar un encuentro personal en el espacio institucional.

Allí se le explicó a los líderes de la organización los objetivos del proyecto y lo importante que resultaría su colaboración para poder entablar un vínculo directo con los beneficiarios del Programa que realizaban su contraprestación dentro del espacio de la institución; se acordó la forma y el momento en que se realizaría el encuentro con los beneficiarios y el método que se seguiría en el trabajo. Al finalizar la primera entrevista se le entregó a la persona un folleto que resume los objetivos de la investigación, las instituciones en las cuales se enmarca el proyecto y los teléfonos de contacto del grupo que trabajó en el operativo de campo. De forma adicional, este primer encuentro con los líderes o personas que realizan actividades de gestión dentro de las organizaciones de base territorial permitió localizar a los informantes clave.

En el encuentro con los beneficiarios del PJJHD que realizaban su contraprestación dentro de la institución se explicaron los objetivos del proyecto, se focalizó en la forma en que se debía completar el instrumento, se destacó la importancia de llenar el formulario de la manera más completa posible y de atender a las recomendaciones que se encuentran en la primera página de la encuesta. Se le aseguró al entrevistado, en todo momento, absoluta privacidad sobre los datos que proporcionasen y se les indicó que si bien los formularios se encuentran numerados y se registra en qué centro comunitario se entregó ese formulario y el nombre (no el apellido) de la persona al que se le entregó, esto se hace sólo a los fines organizativos del trabajo de campo. Finalmente, se pautó una nueva visita para la semana siguiente con el objetivo de chequear si los beneficiarios estaban completando el formulario y/o si surgió alguna duda o problema a la hora de completarlo.

b) Técnicas de rastreo

Fue necesario recurrir a diferentes técnicas de rastreo ya que el Registro de Proyectos de Contraprestaciones del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario no contiene la dirección o teléfono de contacto de la institución que avala los proyectos de contraprestación. Esto obligó a un rastreo en el que se utilizaron diferentes técnicas: guías telefónicas, páginas solidarias de los periódicos locales, otros registros oficiales, contactos informales, etc.

c) Técnicas de monitorio y recordatorias

Este tipo de técnica se utilizó para cerciorarnos si los beneficiarios se encontraban completando la encuesta y para ir subsanando los inconvenientes o dudas que se les presentaban durante el tiempo en el que irían completando el formulario. Durante estas visitas para monitorear el proceso de llenado del formulario se pautó el día y la hora en que serían pasadas a recoger las encuestas.

c) Técnicas de recuperación

La recuperación de los formularios fue una de las fases que más inconvenientes acarreó en el trabajo de campo y fue la que condicionó el tiempo de realización del operativo de campo. En muy pocos casos los encuestados respetaron la consigna de la entrega personal, la mayor parte de las veces entregaron la encuesta a los coordinadoras/es o secretarías/os de los centros comunitarios o asociaciones civiles donde realizaban las actividades de contraprestación. Pero el mayor inconveniente fue

que no se respetó la fecha de entrega. Esto motivó a que fuera necesario establecer un límite máximo, de cinco visitas o contactos telefónicos, a la cantidad de veces en que se contactaría a un encuestado para establecer nuevas fechas de entrega¹².

Es importante recordar, que los tiempos que permite captar la metodología son contruidos, a través de las actividades, por sujetos concretos. Las actividades diarias informadas son el resultado de una “elección” dentro de un sistema complejo de relaciones internas y externas al acto que hace efectiva su realización. Así, la utilización el tiempo constituye una referencia estructurante de los niveles de comprometimiento y/o involucramiento de los sujetos en toda una serie de actividades.

4.- Clasificación de actividades para el análisis del uso del tiempo de los beneficiarios

En el análisis de los datos, surgidos de la aplicación de la metodología de uso del tiempo a través de la técnica del diario auto-administrado, utilizaremos un repertorio limitado y simple de índices. Los mismos constituyen los índices más usuales en este tipo de investigaciones. A continuación detallamos las definiciones y operaciones que permiten construir los tres tipos utilizados: tasa de participación, duración media genérica y duración media específica (Ramos Torre, 1990b). Como puede observarse en el siguiente cuadro, los conceptos que se utilizan para su construcción son tres: (N), el número de individuos objeto de la investigación; (P), el número de individuos que participan efectivamente en una actividad; y (D), la duración de una actividad:

	(D) Duración Total	(P) Nro. de Participantes
(N) Nro. total del individuos	(1) = D/N	(2) = P/N
(P) Nro. de participantes	(3) = D/P	

Su cruce permite definir:

- 1) **Duración media genérica:** cantidad media de tiempo que emplea en una determinada actividad el conjunto (o un subconjunto específico) de la población estudiada. Esta forma de medir el tiempo empleado por una

¹² El inconveniente o desventaja de tener que volver varias veces a buscar las encuestas de uso del tiempo también fue señalado por Hirway (2001).

población en una actividad determinada también se llama “tiempo medio social” o “tiempo promedio poblacional” (Esquivel, 2009; García Sainz, 2005a; Ramos Torre, 1990b).

- 2) **Tasa de participación:** porcentaje de individuos que participan realmente en una determinada actividad (Esquivel, 2009; Ramos Torre, 1990b)
- 3) **Duración media específica:** cantidad media de tiempo que emplea en una determinada actividad el conjunto de individuos que participan realmente en ella. También se llama “tiempo medio o promedio por participantes” (Esquivel, 2009; García Sainz, 2005a; Ramos Torre, 1990b).

La distinción crucial es, lógicamente, la que separa la duración media genérica de la duración media específica. La primera toma en consideración la media de tiempo haciendo abstracción de en qué medida la población estudiada participa realmente de la actividad, mientras que la segunda sólo toma en consideración a los participantes reales. La utilización de ambos índices es central para el análisis del tiempo (Ramos Torre, 1990b). En todos los casos serán utilizados índices sintéticos; es decir, aquellos que toman en consideración el tiempo real destinado a varias tareas superpuestas. De este tipo de índices surgen valores menores que los obtenidos por agregación. Por el contrario, los índices obtenidos por agregación plantean algunas dificultades ya que hay tareas que se realizan simultáneamente (Durán, 2005e).

En relación a las actividades que serán analizadas, es necesario señalar, en primer lugar, que la noción de actividad es una noción amplia que abarca todo el dinamismo de la vida humana y requiere esfuerzo. Incluye el desenvolvimiento de todas las facultades humanas en diversas esferas: doméstica, afectiva, deportiva, cultural, asociativa, sindical, política y laboral. Según Ramos Torre (1990b), una actividad es un proceso integrado de acciones-actos. Como proceso, toda actividad se da no sólo en el tiempo sino, sobre todo, a lo largo del tiempo: empieza, dura, acaba. Como proceso formado por actos, se manifiesta en acciones humanas intencionales (no reflejas) y significativas, tanto para el que la realiza (acción) como para cualquier hipotético observador externo (acto). Finalmente, por tratarse de un proceso integrado de actos, se supone que cada uno de ellos (y los acontecimientos que resultan) se relacionan con otros, anteriores y/o sucesivos, hasta conformar justamente eso que llamamos una actividad; o sea, un algo dotado de una identidad diferenciada y susceptible de ser

nombrado. En este marco, aquello que los hombres hacen son manifestaciones variadas de tipos simples o complejos de actividades.

Las actividades humanas están cargadas de significación e intencionalidad (Ramos Torre, 1990b), generalmente se realizan para expresar un dinamismo propio de la vida humana o, más frecuentemente, para obtener de manera directa un bien o para acceder a un servicio con el objeto de satisfacer una necesidad, material o inmaterial (Neffa, 1998b). La significación e intencionalidad de una actividad puede referir tanto a la perspectiva de quien realiza las actividades, lo que busca en ellas o el significado que le otorga, como también a una significación e intencionalidad otorgada por el observador externo. Aquí, es el observador externo quien propone el significado e intencionalidad de un conjunto de actos en la medida en que los reconoce como dando forma a una actividad. Nos limitaremos aquí a esta segunda modalidad de significar las actividades en la medida que centraremos el objetivo del trabajo en la comprensión de las formas y las maneras que tienen los desocupados asistidos por el Estado de ordenar y estructurar temporalmente su cotidianeidad.

Tal como lo señala Ramos Torre (1990b), cuando estudiamos actividades partimos -al igual que el actor inmediato o incluso en mayor medida- de categorizaciones convencionales por las que decidimos que tales y tales actos forman parte de la actividad X, a diferencia de tales y tales otros que conforman la actividad Y. Los problemas que se derivan de esto son: ¿cuáles son los criterios utilizados para distinguir actividades?; ¿cuáles y cuantas son las actividades?; ¿cómo agruparlas en tipos genéricos?

En efecto, la elaboración de una lista de actividades sobre la que se efectuó el trabajo de codificación a partir de la información recogida en los diarios de actividades, constituye una de las principales herramientas para dotar a las encuestas de uso del tiempo de su verdadero potencial de análisis. Tras la relación de actividades subyace un profundo debate acerca de la conceptualización de las principales actividades de los individuos, sobre cómo se designan las actividades, con independencia del nombre que los entrevistados les den, y sobre la necesidad de llegar a acuerdos sobre los términos y las definiciones (García Sainz, 2005a). Además, es posible distinguir entre actividades primarias (actividades principales) y secundarias (actividades simultáneas; es decir aquellas actividades que responden a la pregunta *¿qué más estaba haciendo?*).

Las pautas que se siguieron para ordenar los tiempos dedicados a las distintas actividades consistieron en un agrupamiento en tres niveles. El primer nivel, el más

general, reduce las actividades a dos grupos fundamentales. El segundo nivel adopta el criterio cuatripartito de clasificación de las actividades más extendido en las investigaciones de uso del tiempo (Belloni, 1986; Ramos Torre, 1990b), sin embargo expande las correspondientes categorías relacionadas con el trabajo (en sentido amplio). Finalmente, el tercer nivel agrupa las actividades en subconjuntos que se adecuan a los objetivos de la investigación y permiten organizar una lista limitada de actividades básicas, posibilitando así la operatividad del análisis.

Si bien no todas estas actividades serán objeto de análisis dentro de este trabajo, se presenta el esquema de forma completa permitiendo así justificar el recorte realizado a los efectos de adecuar el análisis a los objetivos planteados en esta investigación. Los cuadros siguientes muestran, de forma gráfica, los grupos de actividades y las actividades básicas incluidas en ellos:

Cuadro N° 2: Actividades instrumentales

1º nivel de agrupam.	2º nivel de agrupam.	3º nivel de agrupamiento	Lista de actividades
Actividades instrumentales	Trabajo remunerado, actividades de contraprestación y estudios	Actividades de Contraprestación	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades de contraprestación - Desplazamientos hacia las actividades de contraprestación
		Trabajo remunerado	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo remunerado - Desplazamientos al trabajo - Búsqueda de trabajo
		Estudios	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a instituciones educativas - Estudiando - Desplazamientos por estudios
	Trabajo no remunerado	Trabajo doméstico (en sentido restringido)	<ul style="list-style-type: none"> - Alimentación - Limpieza y orden del hogar - Limpieza y orden de la ropa y el calzado - Coser, tejer - Reparación y mantenimiento de la vivienda - Cuidado de plantas y mascotas - Cuidado de la huerta y animales de granja - Reparación y mantenimiento de vehículos
		Trabajo de cuidados (no pagados)	<ul style="list-style-type: none"> - A personas enfermas y/o adultos mayores dependientes - A niños - Desplazamientos necesarios para las tareas de cuidado
		Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia	<ul style="list-style-type: none"> - Compras corrientes - Otras compras - Gestiones (en oficinas públicas y privadas) - Desplazamientos para la adquisición de bienes u servicios y la realización de gestiones
		Trabajo voluntario u otras actividades comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo voluntario - Desplazamientos relacionados con el trabajo voluntario

Cuadro N° 3: Actividades expresivas

1º nivel de agrupam.	2º nivel de agrupam.	Lista de actividades
Actividades expresivas	Tiempo libre	Espectáculos, diversiones y rel. sociales Deportes y ocio activo Ocio pasivo
	Necesidades esenciales	Dormir Aseo y cuidados personales Comidas Cuidado de la salud personal

El **primer nivel** de agrupamiento de las actividades, es el más genérico, constituyendo el nivel de mayor abstracción. Este criterio, originariamente planteado por Äs (en Ramos Torre, 1990b), construye dos grupos genéricos de actividades: las expresivas y las instrumentales. Las primeras pueden ser calificadas como aquellas en las que, por un lado, la acción misma satisface la necesidad que la ha suscitado y, por otro lado, priman los resultados sobre las consecuencias, teniendo esos resultados las características de no ser transferibles a otros y hacer al sujeto que los obtienen insustituible. Por su parte, son actividades instrumentales aquellas en las que lo que se hace es medio para obtener algún otro objetivo, las consecuencias priman sobre los resultados y éstas son, a la vez, apropiables por un tercero y producto de una actor sustituible.

Desde la perspectiva de Ramos Torre (1990b), la utilización del contraste entre lo expresivo y lo instrumental permite reducir el complejo multiforme de actividades a dos grupos polares, compuesto uno de ellos por el conjunto formado por el tiempo libre y las necesidades esenciales, y el otro formado por el conjunto de las actividades ligadas al trabajo. Este agrupamiento bipartito se ensambla sin dificultad con el agrupamiento cuatripartito (presentadas en el segundo nivel de agrupamiento) que toma en consideración el contenido y función de las actividades y su grado cambiante de autonomía. Las actividades expresivas son aquellas cuyo contenido y función consiste en saciar las necesidades bio-socio-culturales de la especie y se caracteriza por situarse en los dos polos extremos de las escalas de autonomía: son, por un lado, aquellas en las que hay un máximo de heteronomía, impuesta por la naturaleza, y, por el otro, son las que gozan de un máximo de autonomía y potencialidad para la autoexpresión. Las actividades instrumentales son las que, teniendo por contenido y función la producción y reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la supervivencia de la

especie, se caracterizan por ser socialmente heterónomas, producto de una división social del trabajo que se explica en líneas complejas de diferenciación y desigualdad.

El **segundo nivel** agrupa las actividades en cuatro grandes conjuntos: a) necesidades esenciales; b) trabajo remunerado, actividades de contraprestación y estudios; c) trabajo doméstico-familiar y trabajo voluntario; y finalmente, d) tiempo libre. Estos cuatro conjuntos de actividades están basados en la tipología de actividades propuesta por Äs y retomada por Ramos Torre (1990b), los mismos sintetizan otras tipologías muy extendidas y compartidas en el campo de los estudios de uso del tiempo. Tal como señaláramos, aquellas categorías referidas al trabajo fueron ampliadas de forma tal que se adecuaron a la realidad abordada. Dos son los criterios que intervienen en la formulación de los cuatro conjuntos de actividades: uno toma en consideración el contenido y la función dominantes de las actividades de una determinada área, y el otro atiende al grado cambiante de autonomía que tiene el sujeto que la realiza.

A partir del primer criterio, las **necesidades esenciales** agrupan aquellas actividades referidas a la satisfacción de ciertas necesidades ligadas a nuestra existencia como seres biológicos, tales como alimentarse, descansar, cuidarse con prácticas higiénicas y relacionadas con la salud.

Las actividades del conjunto **trabajo remunerado, actividades de contraprestación y estudios** se relacionan con la producción de bienes y servicios, susceptibles de intercambio en el espacio público del mercado, y con la producción/consecución de los saberes que otorgarán las cualificaciones adecuadas para actuar en esa área. Adicionalmente, se incluyen dentro de este conjunto las actividades de contraprestación del PJJHD. Consecuentemente, en su interior (es decir, constituyendo el tercer nivel de agrupamiento de las actividades) fueron incluidos tres subconjuntos:

- **Actividades de contraprestación:** son todas aquellas actividades realizadas por los beneficiarios de PJJHD como retribución por el subsidio recibido. Según la normativa del Programa, los beneficiarios están obligados a una dedicación diaria no inferior a cuatro horas ni superior a seis, en alguna de las cuatro modalidades o “componentes” en el esquema de contraprestación: actividades comunitarias, capacitación y formación profesional, actividades productivas y reinserción laboral. Incluye el tiempo insumido por los desplazamientos espaciales necesarios para realizar estas actividades.

- **Trabajo remunerado:** dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas actividades orientadas hacia la producción de bienes y servicios con utilidad social, realizadas en el marco del mercado a cambio de dinero.
- **Estudios:** son aquellas actividades que efectúan las personas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Pueden realizarse en el sistema escolar formal, en instituciones de capacitación, cursos libres, charlas educativas, etc. También comprende el tiempo de traslado demandado para la realización de las actividades y el tiempo adicional de estudio y/o realización de tareas derivadas en bibliotecas, el hogar u otros. Se excluyen aquellas actividades realizadas en el marco del componente “Capacitación y formación profesional” (tanto en la línea de implementación “Terminalidad educativa” como en la línea “Formación en oficios”) del PJJHD. Es decir, excluye las actividades educativas y de capacitación realizadas como contraprestación del PJJHD.

El área del **trabajo no remunerado** comprende al trabajo doméstico en términos generales, los cuidados familiares a niños y personas dependientes y la realización de trabajos voluntarios en la comunidad: Cada uno de estos subconjuntos constituyen el **tercer nivel** de agrupamiento de las actividades:

- **Trabajo doméstico (en sentido restringido):** es aquel tipo de trabajo que supone la producción y transformación de mercancías y, el cuidado y el mantenimiento de los espacios, realizado en el interior del hogar de forma no remunerada. Es un tipo de trabajo que está sometido a la orientación de los quehaceres; es decir, sometido al tiempo que exigen las cosas y hace que la jornada no esté sometida a un horario estricto. Desde el punto de vista operativo, uno de los criterios más difundidos para definir y delimitar este conjunto de actividades es el denominado “criterio de la tercera persona” por tratarse de un tipo de trabajo que podría ser realizado remuneradamente por una persona externa al hogar. Es decir, el trabajo doméstico puede ser definido como aquel tipo de trabajo que produce bienes y/o servicios que son susceptibles de transformación en prácticas de trabajo mercantil.
- **Trabajo específico de cuidados familiares:** este subconjunto de trabajos se definen como la acción de cuidar a un niño o una persona adulta o anciana dependiente integrante de la familia para el desarrollo y el bienestar de su vida

cotidiana. Incluye todas las tareas relacionadas con los niños (desde la alimentación al estudio pasando por el juego o la atención sanitaria) y las tareas de cuidados de enfermos o personas ancianas. Si bien implica un trabajo material, se trata de actividades que dependen de manera muy importante de las relaciones interpersonales que se establecen entre la persona que provee los servicios de cuidado y quien los recibe. Al igual que el “trabajo doméstico en sentido restringido”, este tipo de actividades son susceptibles de ser delegadas por los miembros de la familia en personas ajenas a la misma y mercantilizadas.

- **Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con la familia y el hogar:** dentro de este subconjunto se incluyen las compras, pagos y todo tipo de trámites. En términos generales, este conjunto de actividades fueron pensadas como formas de articulación, de enlace entre los ámbitos domésticos y públicos (Picchio, 2001) o como formas de vincular la producción del bienestar, que tiene lugar en las familias, con las prácticas de asignación de recursos mercantiles y públicas (Martínez Franzoni, 2005). Se las ha denominado actividades “articuladoras del bienestar”, “obligatorias”, “servicio de apoyo”, entre otras.
- **Trabajo voluntario u otras actividades comunitarias:** es aquel tipo de trabajo que se presta a la comunidad con un carácter altruista o solidario, sin obligación jurídica o contractual y desarrollado a través de una institución o de una organización pública o privada. Al igual que el trabajo doméstico, supone aportaciones en tiempo que comprenden una amplia gama de actividades (Aguirre, 2005, 2006).

Finalmente, dentro de la categoría **tiempo libre** se agrupan aquellas actividades que son independientes de las tres áreas anteriores y que, de manera más o menos explícita, se relaciona con un ocio autónomamente administrado. En ella se agrupan tanto las actividades de expansión, diversión y consumo cultural que precisan de un espacio público como aquellas que se desarrollan en el espacio privado del hogar.

En todos los casos, los desplazamientos espaciales fueros ubicados en el área de la actividad a la que están subordinados.

Este agrupamiento de las actividades está relacionado con el contenido y función manifiestos de las mismas. Al mismo es posible incorporarle otro criterio más abstracto

que pone énfasis en el grado cambiante de autonomía de que disfruta el sujeto que actúa (Ramos Torre, 1990b). Este criterio permite establecer una jerarquía de actividades que va desde el polo más heterónomo o de más férrea compulsión hasta el polo de mayor autonomía potencial. En el primero aparecerán las actividades ligadas a las necesidades esenciales, caracterizadas por ser fruto de una compulsión natural, sólo susceptible de una variada administración socio-cultural. En un punto intermedio se sitúan, en escalones sucesivos, las áreas del trabajo remunerado, las actividades de contraprestación, los estudios y el trabajo doméstico y familiar, caracterizadas por una compulsión social dependiente de la división social del trabajo. En el último escalón se ubican las prácticas del tiempo libre que ocupan el tiempo que dejan libres las otras tareas y que idealmente sería el espacio de máxima autonomía, materializable en estilos de vida diferenciados¹³.

Este agrupamiento que toma en consideración el contenido y función de las actividades y su grado cambiante de autonomía y que reúne las actividades en cuatro grandes conjuntos, puede ser complementado o ensamblado con el agrupamiento bipartito planteado en el primer nivel.

En términos de actividades, entonces, nuestro análisis se centrará de forma exclusiva en las denominadas actividades instrumentales. Es decir, en aquellas que teniendo por contenido y función la producción y reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la supervivencia de la especie, se caracterizan por ser socialmente heterónomas, producto de una división social del trabajo que se explica en líneas complejas de diferenciación y desigualdad. Tal como señaláramos, dentro de éstas se incluyen dos conjuntos: el primero de ellos constituido por el trabajo remunerado, las actividades de contraprestación y los estudios; y el segundo conjunto integrado por el trabajo doméstico y familiar, y el trabajo voluntario.

5.- La estructura de la tesis

Esta tesis está organizada en cinco capítulos más un apartado con consideraciones finales. Así, el Capítulo 1 presenta el marco teórico y conceptual que guía este trabajo de tesis. La perspectiva desde la cual se busca dar cuenta de los

¹³ Aun cuando construye un agrupamiento de cinco (y no de cuatro) grupos diferentes de tiempos, Belloni (1986) utiliza un criterio idéntico. Los conjuntos que construye son los siguientes: “tiempo forzado”, “tiempo obligatorio”, “tiempo de las necesidades”, “tiempo condicionado” y “tiempo libre”.

objetivos planteados parte de la noción de política social en tanto intervención pública sectorial, para ubicar allí el surgimiento de los PTMC como una modalidad relativamente nueva de programas sociales de alivio a la pobreza y como una de las respuestas a la denominada “nueva cuestión social”. Seguidamente se expone la génesis del concepto de “tiempo social” en la tradición de los estudios sociales del tiempo o estudios de las temporalidades sociales y a partir de allí se deriva los desarrollos teóricos y empíricos relativos a noción operativa de “uso del tiempo”. El capítulo se cierra dando cuenta de las transformaciones que comporta en términos temporales el nuevo capitalismo haciendo especial referencia a la problemática de las temporalidades sociales en las poblaciones asistidas por el Estado.

El Capítulo 2 presenta el surgimiento del PJJHD, sus características y reformulaciones. Se enmarca el surgimiento del Programa en el contexto de la mayor crisis económica, social y política de la historia argentina, dando cuenta de la forma particular en la cual este marco imprime características específicas al PJJHD. Asimismo, se discute el tipo de política que supone y sus diferencias y similitudes con las otras estrategias utilizadas hasta ese momento en Argentina y con los PTMC implementados en algunos países de la región.

En tanto el Capítulo 3 analiza las características específicas de implementación del Programa a nivel territorial en la ciudad de Rosario, deteniéndose de forma particular en la configuración y en las modalidades de las contraprestaciones realizadas por los beneficiarios por constituir, éstas, la forma que toman las obligaciones y prescripciones introducidas por el PJJHD. Son justamente éstas obligaciones las que tienen una incidencia decisiva en la temporalidad de las poblaciones asistidas. A partir del análisis de los datos surgidos del Registro elaborado por el Servicio Municipal de Empleo dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario y de las entrevistas a informantes clave se desprende que la tendencia a descentralizar la implementación de este tipo de programas, con la idea de que los municipios conocen mejor a la población y esto posibilita la construcción de un itinerario de reinserción, a la vez que crea una vigilancia permanente sobre los comportamientos, toma una forma singular.

Los Capítulos 4 y 5 se detienen en el análisis de los datos surgidos de las encuestas de uso del tiempo aplicadas a desocupados asistidos por el Estado y relativos a las denominadas actividades instrumentales. Es decir, el análisis se centra de forma

exclusiva en el ordenamiento temporal de aquellas actividades que teniendo por contenido y función la producción y reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la supervivencia de la especie, se caracterizan por ser socialmente heterónomas, producto de una división social del trabajo que se explica en líneas complejas de diferenciación y desigualdad. Así, mientras el Capítulo 4 presenta los datos referidos al primer grupo dentro de las actividades instrumentales (las actividades de contraprestación, el trabajo remunerado y los estudios), el Capítulo 5 muestra los datos relativos al segundo grupo, el del trabajo no remunerado (tanto del realizado en el ámbito doméstico y familiar como del trabajo voluntario desarrollado en el ámbito extra-doméstico).

En las consideraciones finales, se revisan los principales datos surgidos de la investigación, integrándolos a través de la noción amplia de “protección social”. La misma remite a la seguridad económica y social de las personas, y depende de las modalidades de protección social ante los riesgos y, de modo más global, del acceso a los recursos (Gautié, 2004). Esta noción entrelaza tres formas de reparto: el reparto económico, el reparto doméstico y el reparto social. La articulación de estas tres formas de reparto permitió mostrar cómo la lucha por la supervivencia cotidiana se conjuga con una serie de prescripciones y obligaciones introducidas por el PJJDH dando lugar a una temporalidad específica en ese grupo de desocupados asistidos por el Estado; esa misma temporalidad se caracteriza por la presencia de jornadas fragmentadas, múltiples y simultáneas. Sobre el final de esta sección se presentan algunas líneas de investigación posibles de ser derivadas tanto de los resultados de la investigación como del fructífero campo de análisis que se enmarca en la intersección entre los estudios políticos con los estudios del tiempo.

Capítulo 1: El marco teórico-conceptual

En este capítulo se presenta el marco teórico y conceptual que guía este trabajo de tesis. La perspectiva desde la cual se busca dar cuenta de los objetivos planteados parte de la noción de política social en tanto intervención pública sectorial, para ubicar allí el surgimiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) como una modalidad relativamente nueva de programas sociales de alivio a la pobreza y como una de las respuestas a la denominada “nueva cuestión social”. Seguidamente se expone la génesis del concepto de “tiempo social” en la tradición de los estudios sociales del tiempo o estudios de las temporalidades sociales y a partir de allí se deriva los desarrollos teóricos y empíricos relativos a noción operativa de “uso del tiempo”. El capítulo se cierra dando cuenta de las transformaciones temporales que comporta el nuevo capitalismo y la especificidad de la problemática de las temporalidades sociales en las poblaciones asistidas por el Estado.

1.- La política social como intervención pública sectorial

Partimos de considerar siguiendo a Gautié (2004), que la “protección social”, en un sentido amplio, remite a la seguridad económica y social de las personas, y depende de las modalidades de protección social ante los riesgos, y yendo más allá y de modo más global, de acceso a los recursos.

En las sociedades capitalistas, es posible distinguir tres modalidades. La primera -denominada reparto económico- se refiere a los recursos que los individuos reciben en contrapartida directa por su participación en la actividad productiva que se institucionaliza en una combinación de elementos sociales y jurídicos que definen el “empleo”. La segunda -el reparto doméstico- engloba a todas las manifestaciones basadas en un vínculo personal entre el que da y el que recibe, y por lo tanto, fundamentalmente a la solidaridad familiar. Por último, el reparto social tiene que ver con las transferencias de las que los individuos pueden beneficiarse y que proceden de instituciones que deducen ingresos para ser distribuidos, bien en forma de prestaciones monetarias (subsidios de desempleo, enfermedad, renta mínima, etc.), bien en forma de servicios sociales (salud, guarderías y otros). El reparto social es complementario de las

otras dos formas de reparto. Esta complementariedad se institucionalizó de modo distinto en los países occidentales en el período de entreguerra.

Estas tres esferas de reparto no se excluyen y, muy por el contrario, se articulan según distintas modalidades, tanto en el plano de los individuos como en el plano global de los Estados-Nación. Así, las combinaciones particulares de estas tres formas de reparto darán cuenta de los diferentes niveles de seguridad/inseguridad y, consecuentemente, de accesos diferenciales a los recursos.

Es en el marco de estas tres instituciones fundamentales, el Estado, mercado y familia, que situaremos las nociones de política pública y política social, en tanto serán éstas las que habrán de expresar la dinámica relación entre la política y la estructura socioeconómica, a la vez que impactarán sobre una y otra, contribuyendo a darle forma y contenido (Repetto, 2007).

Las políticas públicas constituyen respuestas a cuestiones problemáticas (demandas, necesidades y/o situaciones consideradas anómalas) que concitan la atención, el interés o la movilización de diversos actores. En este sentido, representan tomas de posición del Estado frente a cuestiones y manifiestan determinada modalidad de intervención del Estado en la sociedad civil (Ozlack y O'Donnell, 1976).

En una dirección similar Lahera Parada (2002) señala que una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Es decir, esto implica que las acciones pueden ser llevadas adelante tanto por los organismos estatales como también por instancias privados (con o sin fines de lucro); sin embargo, la etapa de la decisión sí debe ser ejercida por la autoridad del Estado para darle a determinada intervención la legalidad e implicancia de todo acto estatal (Repetto, 2001).

Siguiendo estas nociones es posible señalar que toda política pública tiene su nacimiento a partir de un problema determinado y la manera de concebir tal problema o cuestión se expondrá en la estructuración de tal política. Tal estructuración se manifestará como un proceso o un ciclo que comprende diferentes estadios o etapas: diagnóstico, identificación del problema – cuestión, análisis del problema, alternativas de intervención, selección de la estrategia de acción, ejecución de la misma y finalmente su evaluación.

Importante es, también, destacar que dicho problema/cuestión no nace sino que se hace. Es decir, es una construcción socialmente problematizada construida, definida y concebida por diferentes actores estratégicos que participan de este proceso complejo en el marco de las arenas de las políticas públicas. De tal manera que el resultado de este juego de poder que se gesta en el presente marco estará determinado por la interacción de un conjunto de actores que presentarán su propia racionalidad y lógica de acción. Por lo cual tales políticas serán el producto del consenso y/o disenso e interpelaciones de los diferentes actores intervinientes que pueden presentar distintos grado de participación y vinculación. Por ende diversos actores estatales, y no estatales, la sociedad civil en general, son parte del proceso de acción, interacción y de construcción de políticas públicas para satisfacer una necesidad colectiva o atender una situación problemática. Quizá valga adentrarse en la red de tramas tejidas dentro del desarrollo de la política para realmente llegar a analizarla en todos sus escondrijos como así también conocer el rol. Y la racionalidad de cada uno de los actores que en ella participan.

A partir de lo anterior, y tal como lo señalamos, el carácter de “públicas” de las políticas radica en la primacía de un actor central que es el Estado en sus diferentes niveles; que adquiere el rol protagónico e incluye las cuestiones sociales en su agenda de gobierno. Las políticas públicas, entonces, resultan tanto de un proceso político como de uno de formulación de políticas. El procedimiento de producción de las políticas es, en esta línea, tan importante como el contenido asignado a las políticas (Levín, Campostrini, Sosa y Voras; 2007).

No obstante, el clásico estudio de Ozlack y O'Donnell pone foco es una cuestión central y desdibujada -en parte- en el análisis de Lahera Parada, la política pública además de constituir una acción puede constituir una omisión; es decir una política pública puede estar constituida por una no-decisión o un “no hacer nada”.

Para los autores las políticas estatales¹⁴ sólo tienen significación en relación a una cuestión, es decir un asunto socialmente problematizado, lo suficientemente relevante para ser considerado por los poderes públicos y formar parte, así, del programa o agenda de esos poderes. Así, lo que busca la política pública es resolver conflictos en torno a un ámbito o actividad cuya situación es percibida como “no

¹⁴ Para Lahera Parada (2002), el concepto de política pública incluye tanto a las políticas de gobierno como a las de Estado. Estas últimas son, en realidad, políticas de más de un gobierno. También es posible considerar como políticas de Estado aquellas que involucran al conjunto de los poderes estatales en su diseño o ejecución.

satisfactoria”. La presión de los actores intervinientes sobre el Estado busca encontrar soluciones y alternativas para enfrentar la situación (Muller, 2000).

En tanto, la noción de política social no tiene un límite preciso, ni tampoco constituye un término técnico con un significado exacto. En un sentido amplio la política social constituye una particular conformación política- institucional destinada a garantizar la cohesión social (Castel, 1997). En las sociedades capitalistas modernas, el problema de la integración/cohesión social no puede ser pensado sin hacer referencia al trabajo, ya que éste se constituyó en un elemento integrador central, tanto como forma fundamental de garantizar la subsistencia como de otorgar reconocimiento social.

Así, la noción de política social es utilizada para hacer referencia a la política de los gobiernos respecto a aquellas actuaciones que tienen impacto directo sobre el bienestar de la población a través de proporcionarles servicios o ingresos. En este sentido, las políticas sociales pueden incidir en generar una sociedad menos inequitativa y cohesionada o limitarse a ayudar a la sobrevivencia de los más vulnerables aceptando y hasta profundizando los niveles de desigualdad social y exclusión existentes (Golbert, 1998). Entonces, y desde la perspectiva de Andrenacci (2002), la política social de los Estados capitalistas presenta una doble lógica. Por un lado, supone intervenciones en el *centro* que actúan reforzando y recomponiendo los mecanismos principales del proceso de integración social, es decir, consolidando los efectos integrativos de las relaciones salariales. Por otro lado, conlleva intervenciones en los *márgenes*, las cuáles actúan sobre sujetos (y no sobre las estructuras) que no pueden acceder a la integración a través de esos mecanismos principales, compensando el no acceso al mercado de trabajo, (re) creando la integración o eventualmente reprimiendo los efectos indeseados de la desintegración.

Una mirada interesante sobre esta cuestión la aportan Barbeito y Lo Vuolo (1998), para quienes la política social puede entenderse como un sistema de distribución de “moneda social”. Es decir, un sistema de distribución de derechos y obligaciones que cumplen la función de “ser” y “representar” un valor capaz de ser “realizado”. El poder de intercambio de esta moneda social se basa en el poder legar (y fiscal) del Estado y requiere “reservas institucionales” que le otorguen garantía. En la moneda social es donde queda reflejado que la moneda está vinculada a la totalidad social; es un elemento clave para articular las distintas esferas heterogéneas de lo social. La moneda social al igual que la moneda económica, está vinculada con el sistema de valores que sostiene

las relaciones sociales. Es decir, detrás de las monedas económica y social, hay compromisos, intercambio de derechos y obligaciones, deuda y confianza. Sin estos ingredientes no existe la moneda.

Hay autores que plantean que la política social no es un sector ni una sumatoria de intervenciones particulares, sino que es un tipo de política estatal (Fernández y Rozas, 1984), mientras otros la consideran un punto de vista, un “enfoque” desde el cual se detecta un conjunto de funciones que cumple el Estado capitalista (Andenacci, 2008; Falappa y Andrenacci, 2009). Para Castel (1997), la política social de un Estado manifiesta la particular forma de resolución de la cuestión social¹⁵ en un determinado momento histórico, dando cuenta de la tensión, propia de la Modernidad, entre igualdad formal y profunda desigualdad real. Se orienta, así, a las regulaciones de la vida social referidas a la participación en la producción social y a las condiciones de vida y de reproducción de los distintos grupos sociales; asimismo, se expresa y materializa en las políticas sectoriales (Grassi, 2000).

Desde la perspectiva de Repetto (2001, 2007) la política social puede ser delimitada a partir de dos coordenadas. La primera de esas coordenadas se desarrolla en torno a los diferentes “objetivos” que se le han adjudicado a la política social. Mientras que la segunda coordenada estaría dada por las “áreas sustantivas” en las cuales se han desarrollado las políticas sociales y que por lo general implican intervenciones y generan efectos directos sobre problemáticas concretas que suelen formar parte de la cuestión social.

A partir de las diferentes tradiciones teóricas es posible reconocer, a grandes rasgos, un grupo de funciones que estarían relacionadas de forma directa con la política social. Veremos que estos objetivos están profundamente imbricados.

La primera de las funciones está referida a las tareas indelegables que debe desarrollar como tal el Estado capitalista. Es decir, la política social juega allí un rol

¹⁵ Para Castel (1997) la cuestión social está constituida por aquella problemática fundamental y de difícil solución en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. La sociedad se enfrenta, a partir de esto, con el desafío de continuar existiendo como un conjunto vinculado de relaciones de interdependencia. Así, la cuestión social se plantea en los márgenes de la vida social pero pone en cuestión a su conjunto. En este sentido, la “nueva cuestión social” (Castel, 1997; Rosanvallon, 1998) refiere al crecimiento del desempleo y del surgimiento de nuevas formas de pobreza, acompañados de nuevos tipos de inseguridad social, causados por modificaciones estructurales y políticas desencadenadas a partir del final de los años 70 del siglo XX. La pérdida del trabajo como eje integrador conlleva el aumento de las incertidumbres, de la vulnerabilidad y de la exclusión social.

central en asegurar la acumulación y en sostener la legitimidad. Un segundo objetivo vinculado con la política social es el asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo; es decir, la función que cumple allí la política social es la de constituir la manera estatal de efectuar la transformación duradera de obreros no asalariados en obreros asalariados. Finalmente, ha sido repetidamente señalado el impacto de la política social en la conformación de sujetos sociales, en especial pero no exclusivamente en la constitución de ciudadanos (Repetto, 2001).

Para Grassi (2000) de lo anterior resulta que el Estado es inmediatamente el ámbito de referencia privilegiado de la reproducción social, entendida ésta en el sentido amplio de la recreación de aquellas premisas del proceso económico, de las instituciones, valores y pautas básicas que orientan la vida social y la consecuente continuidad elemental de las prácticas sociales; pero también en lo que atañe, específicamente, a la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. En ese punto, las políticas sociales son un espacio crítico: como políticas de Estado condensan la hegemonía y tienen capacidad de *normatizar* y *normalizar* el ámbito de la reproducción. Por esa vía, el Estado participa en la definición de problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la determinación de sujetos “merecedores” de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento. Son, en fin, la manera en que la cuestión social es constituida en cuestión de Estado y, en consecuencia, el resultado de la politización del ámbito de la reproducción.

Estas políticas expresan los principios y postulados que organizan la vida social y la medida en que una sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros, así como su capacidad de protección de los mismos. Asimismo, muestran la manera en que se resuelve la cohesión y la integración social, entendida como el derecho que a cada uno le asiste de constituirse (reconocerse y ser reconocido) como un sujeto valioso para su sociedad y de proyectar su vida más allá de la mera supervivencia (Grassi, 2000).

Hay un relativo consenso entre los autores en torno a que serían tres las “áreas sustantivas” (Repetto, 2001, 2007), “regiones” (Andrenacci, 2008) o “grandes grupos de funciones” (Falappa y Andrenacci, 2009) de la política social como función del Estado.

El primer conjunto de intervenciones son aquellas definidas como políticas sociales universales. Refiere a aquellos servicios que el Estado decide que debe prestar por razones históricas y/o por su importancia estratégica en diferentes sectores. La

educación básica y la atención primaria de salud constituyen los exponentes centrales de este tipo de intervención; sin embargo también se pueden mencionar el saneamiento, la energía y el transporte. Con este conjunto de acciones se pretende cubrir a toda la población contra las contingencias en su calidad de ciudadanos; es decir, independientemente de la actividad que desempeñen.

El segundo grupo estaría constituido por las políticas de seguridad social; es decir, aquellas protecciones cuya cobertura se estructuran en función del empleo formal. Su financiamiento es asegurado por el aporte de los trabajadores, los empleadores y el Estado y los beneficios que otorgan están parcialmente vinculados a esos aportes¹⁶.

La última región o área sustantiva de la política social son las políticas asistenciales o políticas frente a la pobreza. La lógica funcional de ésta se pone de manifiesto cuando el Estado presta atención a categorías de riesgo que no entran en las “regiones” anteriores: los sectores sociales que no pueden proveerse ingresos por el mercado de trabajo y que por diferentes razones, a pesar de existir provisión pública de servicios no pueden acceder a ella. La política asistencial sería de todas las ramas de la política social, aquella identificada por la intervención sobre grupos de mayor riesgo relativo (Andrenacci, 2008). Para Repetto (2001) se trata de un conjunto de acciones llevadas adelante por el Estado, que tiene como fin atender a ciertas necesidades básicas de los sectores marginados y más vulnerables, entre las cuales destaca la referida a la alimentación.

Las intervenciones de estas tres áreas tienen en la práctica efectos combinados y su combinación es muy dependiente de la historia y estructura social de cada país.

Según Lo Vuolo (2004) la distinción entre “seguro” o “seguridad social” y “asistencia social” dentro de los sistemas de protección social latinoamericanos se fundamenta en una serie de valoraciones propias de la sociedad moderna en torno al trabajo y a los trabajadores. Para el autor en las sociedades modernas siempre se ha confundido las funciones económica y social del trabajo. Derivado de esto las

¹⁶ Andrenacci (2008) y Falappa y Andrenacci (2009) conciben a esta región de forma más abarcadora, en la medida en que la entienden como todas las formas en las que el Estado interviene sobre la problemática del empleo. En este aspecto, y para los autores, hay dos grandes formas muy visibles de acción del Estado en este sentido, entre otras. La primera -y principal- forma de intervención que el Estado capitalista utiliza es la de regular jurídicamente los contratos de trabajo, y todo lo que estos significan, directa o indirectamente. El otro instrumento central, vinculado al anterior pero con lógica propia, es el de los sistemas de seguridad social. Desde esta perspectiva las políticas laborales y/o de trabajo se encontraría dentro de esta región. Volveremos sobre este punto.

actividades humanas (y las personas) se valoran considerando principalmente el precio que el mercado paga por el empleo de su fuerza de trabajo. Así, la responsabilidad de las personas para con la sociedad es puramente instrumental, esto es, colocar su capacidad de trabajo al servicio de la economía. Esta “obligación” implica que, si no se realizan suficientes esfuerzos para emplearse en el mercado y para adquirir las capacidades que el mismo exige, sobreviene un conjunto de “sanciones sociales”, principalmente, no recibir un ingreso ni beneficios del sistema de protección social. Estas valoraciones se han mantenido más allá de las sustanciales transformaciones en la estructura económica y, consecuentemente, en el mercado de trabajo.

De esta manera, el “seguro social” se dirige a los empleados formales que, supuestamente, son los que hacen esfuerzos para estar empleados, pagan aportes en dinero y así “merecen” beneficios sociales a cambio. Las políticas de “asistencia social” focalizan al resto, quienes supuestamente no se esforzarían lo suficiente y no tienen un empleo formal, no hacen aportes y así no tendrían “derecho” a acceder a los beneficios sociales. En este caso, no son las personas las que tienen derecho a los beneficios, sino que es el poder (político o de otro tipo) el que decide asistirlos (Lo Voulo, 2004).

1.1.- El vínculo entre la política social y la política laboral

Entendemos que la economía en lugar de ser una esfera autónoma está sumergida en una red de relaciones sociales y, por ende, el mercado está arraigado en la sociedad (Polanyi, 2006). Eso lleva a la discusión la relación entre economía y sociedad y la forma por la cual los sistemas económicos afectan la manera en que los individuos se relacionan entre sí. En este marco, el rol que el Estado desempeña en el manejo de los mercados tiene un lugar central (Stiglitz, 2006).

Ese posicionamiento servirá de punto de partida para plantear los ámbitos específicos de operación de las políticas “estrictamente” laborales y sociales y los términos de su articulación en el plano teórico.

Las políticas laborales (de empleo o de mercado de trabajo)¹⁷ y las políticas sociales comparten la cualidad de constituir intervenciones sociales del Estado que inciden de manera directa en las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales. Sin embargo, mientras las políticas laborales (junto

¹⁷ Existe una amplísima variedad de formas y matices para denominar a aquellas políticas dirigidas a regular el funcionamiento del mercado de trabajo y la relación entre el capital y el trabajo.

con las políticas económicas) intervienen en la distribución primaria del ingreso, las políticas sociales lo hacen a través de la distribución secundaria; es decir, vía un circuito de distribución del ingreso que no deriva directamente del proceso de producción, por la retribución a los factores, sino por mecanismo de redistribución que se le superponen (Lindenboim y Danani, 2002). Otros autores han señalado que las instituciones de la política social son instrumentos de distribución del ingreso que se ubican en una zona intermedia entre la distribución “personal” y la “factorial” (Barbeito y Lo Vuolo, 1998)

La regulación directa¹⁸ del mercado de trabajo tiene dos componentes centrales (Cortés y Marshall, 1993). El primero de ellos es el relativo a la legislación laboral, la cual contribuye a determinar las condiciones en que se realiza el trabajo y el poder relativo del trabajo y el capital. En este sentido, comprende disposiciones vinculadas a la contratación y el despido, a los niveles mínimos de remuneración (ya sea en forma directa o estableciendo los mecanismos de negociación), a las prestaciones obligatorias; normativas relativas a la seguridad social y a la seguridad e higiene en el trabajo y todo el cúmulo de aspectos normativos e institucionales que rigen en esta materia.

El segundo componente de la política laboral son las medidas hacia el mercado de trabajo, dirigidas a regular el volumen, las características y la distribución de la oferta de fuerza de trabajo, como por ejemplo el reclutamiento de mano de obra extranjera, incentivos o desincentivos a la movilidad geográfica de la mano de obra, incentivos a la participación en el mercado de trabajo de segmentos específicos de la población, y todas aquellas pautas dirigidas a alentar o desalentar el empleo de grupos específicos de trabajadores (Cortés y Marshall, 1993).

Desde la perspectiva de Neffa (2011a, 2011b) dentro de este tipo de políticas (a las que el autor denomina “políticas de empleo en sentido estricto”), es posible distinguir entre políticas de empleo activas y políticas de empleo pasivas. Las primeras son aquellas que con una perspectiva de mediano y largo plazo actúan sobre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, se proponen reducir el desempleo haciendo frente de manera durable a las causas macroeconómicas estructurales y además promover la

¹⁸ Además de las formas de regulación directa, existen un conjunto de intervenciones del sector público que tienen repercusiones sobre el mercado de trabajo, las mismas pueden producir cambios en su estructura y funcionamiento tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, todos los instrumentos de la política económica (de comercio exterior, de inversiones, cambiaria, de crédito, presupuestaria y fiscal, por sectores específicos, de infraestructura, de ciencia, tecnología y de innovación, educativa, de desarrollo regional, social y de salud) pueden movilizarse para generar efectos

generación de nuevos empleos. Serían entonces activas cuando su objeto es triple: 1) tratar de reducir el desempleo, 2) modificar el nivel y la calidad de la oferta de fuerza de trabajo (para satisfacer las demandas cuantitativas y cualitativas de empleo por parte de los trabajadores), y 3) cambiar la naturaleza de la demanda (para aumentar la cantidad y la calidad de las ofertas de empleo que hacen los empleadores). Pero las políticas activas pueden ser de naturaleza diversa: orientarse a crear empleos temporarios, por tiempo determinado, de carácter coyuntural, con un horizonte de corto plazo y de carácter precario, o por el contrario empleos seguros y estables, registrados ante el sistema de seguridad social, con un contrato de duración por tiempo indeterminado y con un horizonte de mediano o largo plazo.

Las segundas es decir las políticas pasivas serían las que prioritariamente ponen el acento en el comportamiento de la oferta de fuerza de trabajo, operan por lo general en el horizonte de la coyuntura o de ciclos cortos (pero que pueden dar lugar a efectos duraderos), proporcionan subsidios y/u otro tipo de transferencias a los desempleados y procuran contener el desempleo mediante el incremento de la población económicamente inactiva y la reducción o contención de la oferta de fuerza de trabajo. Son por lo general políticas puntuales y focalizadas, dirigidas a la fuerza de trabajo más vulnerable y precaria. Lo que las caracteriza es tratar de garantizar un mínimo de recursos para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo de las personas sin empleo y minimizar o al menos atenuar los efectos de la insuficiencia de empleos disponibles para dar una ocupación a toda la Población Económicamente Activa (PEA). La medida pasiva más importante consiste en otorgar a los desocupados un subsidio por desempleo o en su defecto, otorgar los beneficios de políticas sociales u otorgar una asistencia de contenido alimentario.

Esta distinción entre las políticas pasivas y las activas no es excluyente ya que es posible pensar la existencia de políticas o programas que combinen características de ambas en su diseño o que sus efectos puedan ser pensados en las dos direcciones.

Históricamente, las políticas sociales han cumplido una función indirecta en la en la regulación de las condiciones de uso y venta de la fuerza de trabajo (Cortés y Marshall, 1993). Esa función se ha establecido a partir de las “áreas sustantivas” (Repetto, 2001, 2007) que conforman la política social.

directos o indirectos sobre el empleo, pero con un peso diferenciado según los ámbitos de la intervención del sector público (Neffa, 2011a, 2011b; Samaniego, 2002).

En este sentido, la provisión estatal de bienes, servicios y transferencias (educación, salud, vivienda, asistencia alimentaria, etc.) se lleva a cabo con los recursos que el Estado obtiene de la recaudación tributaria y se destinan al consumo colectivo y a las transferencias monetarias y subsidios. Para Cortés y Marshall (1993), este instrumento actúa como mecanismo de regulación en tres direcciones. Contribuye a adaptar el volumen y calidad de la oferta de fuerza de trabajo a los requerimientos de la acumulación, proveyendo, por ejemplo a través de la educación, las calificaciones requeridas, o frenando, a través de la extensión de los sistemas de salud, la dilapidación de la fuerza de trabajo. Influye sobre el nivel de vida de los asalariados debido a la redistribución del ingreso que se opera desde el Estado, que modifica el estándar de referencia en la determinación del salario al permitir que ciertos bienes y servicios no tengan que ser adquiridos con el salario. Finalmente, incide sobre las tasas de participación en la fuerza de trabajo.

A su vez, el sistema de seguridad social provee un ingreso a los asalariados en situaciones de inactividad forzosa (enfermedades, vejez, desempleo). Históricamente, estas instituciones surgieron como sistemas de seguro para los asalariados, lo que las diferencia de la provisión estatal de otras transferencias. Así, el sistema de seguridad social actúa regulando el volumen de la fuerza de trabajo de dos maneras. Las transferencias monetarias de la seguridad social permiten reducir la responsabilidad de las familias en solventar el consumo de los inactivos y los desempleados, quienes, de este modo, no se ven forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones desfavorables. Al mismo tiempo, la seguridad social establece límites al uso de la fuerza de trabajo a través de los sistemas de jubilación, que acotan el periodo de actividad. Además, las transferencias afectan el estándar de referencia en la negociación salarial tanto desde la perspectiva de los trabajadores como desde la de los empresarios, cuyas contribuciones a la seguridad social tienen un impacto sobre los costos laborales (Cortés y Marshall, 1993).

En los últimos años una serie de autores han propuesto algunas nociones -tales como “políticas socio-laborales” (Grassi, 2012), “políticas sociales de empleo” (Hopp, 2009), “política de asistencia social al desempleo” (Costa, 2005)- que intentan aunar los conceptos de “política social” y “política laboral” en la medida en que consideran que han emergido un conjunto de intervenciones y regulaciones políticas que desbordan

aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral o a las políticas sociales, pero que tienen como objeto el trabajo (Grassi, 2012).

En este punto aparece como pertinente el “enlace” que proponen Minujin y Cosentino (1993). Para los autores, la política específicamente social es parte del conjunto de políticas públicas que afectan la distribución del ingreso y las condiciones de vida de la población. Así es posible relacionarla con aquellas otras políticas orientadas al mercado de trabajo a fin de detectar el papel que la misma juega en relación con ellas, en el marco de un determinado programa político económico.

Así, el concepto de “intervención social del Estado” incluye en forma integral el amplio conjunto de políticas públicas que afectan las condiciones de vida y de trabajo de la población, entendiendo por tales no sólo la política social, sino la política laboral, demográfica, fiscal y aquellos aspectos de la política económica que afectan al mercado de trabajo y por lo tanto a la población en tanto agentes económicos (Minujin y Cosentino, 1993). Esta noción permite pensar las intervenciones sociales del Estado como un todo, poniendo en relación las políticas que operan tanto en la distribución primaria del ingreso como en la distribución secundaria, y a la vez situarlas en el contexto económico, social, político y cultural en el que se despliegan. Consecuentemente, es posible señalar que las políticas sociales y aquellas otras “más propiamente económicas” son dos modalidades de organizar las condiciones de vida de la población, la calidad y extensión de sus derechos y los modos de integración social. Estas dos modalidades son sólo parcialmente separables por técnicas y saberes especializados.

De lo señalado anteriormente es posible derivar una serie de consideraciones que serán de utilidad para el análisis de los programas de transferencia monetarias condicionadas (PTMC), centro de nuestro objeto de estudio:

- 1) El problema del que se ocupa la política social es el problema de la reproducción social y no simplemente el de la pobreza.
- 2) Al constituir la política social la forma política “estatizada” de la cuestión social, supone -de forma intrínseca- la idea que la política que tiene como objeto el trabajo constituyen el eje principal y determinante del sentido de la política social, fijando el sentido de la seguridad y la asistencia. Así, la política social conlleva una definición del trabajo y de los sujetos del mismo (Grassi, 2000).

- 3) Los cambios en el rol del Estado, su funcionamiento y sus intervenciones y las transformaciones en los modos de producción trajeron modificaciones en los modos de integración y en la política social cuyo centro era la extensión de la protección pública a través del empleo formal y de grandes instituciones universalistas. De este modelo se pasa a otro en la cual el centro se sitúa en la lucha contra la pobreza y una red mínima de seguridad del mercado de trabajo (Soldano y Andrenacci, 2006).
- 4) El tipo de política laboral implementado a partir de la década del 90, llevó a la “ampliación de la política de asistencia, convirtiéndola en el rasgo y el sentido predominante de la política social” (Grassi, 2000).

En este marco es necesario comprender la génesis y la implementación de los PTMC y las características particulares que estos asumen en el caso argentino.

1.2- Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en el contexto de las transformaciones sociopolíticas

1.2.1.- El surgimiento de los PTMC

Aun con algunas diferencias sutiles, la mayoría de los autores (Barrientos, 2012; Cecchini y Madariaga, 2011; Midaglia, 2012; Valencia Lomelí, 2008) concuerda en que los programas¹⁹ de transferencias monetarias condicionadas (PTMC)²⁰ se comenzaron a desarrollar y se expandieron en América Latina y en el resto del mundo a mediados de la década del 90.

¹⁹ Entendemos por “programa” a la serie ordenada de operaciones para llevar a cabo un proyecto que se justifica en sí mismo (Barbeito y Lo Vuolo, 1998). Así, es posible denominar “programas sociales” al conjunto planificado de acciones humanas y recursos materiales que tiene el propósito de resolver algún problema, de forma tal que el diseño de las intervenciones expresa una teoría determinada sobre la realidad que se interviene. Éste determina objetivos, resultados previstos, un periodo de tiempo para alcanzar esos resultados, medios y procedimientos, recursos institucionales y financieros (García Trujillo, 2009).

²⁰ La denominación exacta de este tipo de programas presenta una gran variedad de formas. Algunas de ellas son: programas de transferencias de ingresos condicionados (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010), transferencias condicionadas de renta (Midaglia, 2012), programas de transferencias condicionadas de ingresos (Lo Vuolo, 2009), programas de transferencias de ingresos (Barreiros, 2012), programas de transferencias condicionadas o “con corresponsabilidad” (Cecchini y Madariaga 2011), Conditional Cash Transfers (Minujin, Davidaiuk, Delamónica, 2007), transferencias monetarias condicionadas (Soares y Brito, 2008), programas de transferencias de renta condicionadas (Simoes, 2006), programas de transferencias en efectivo condicionadas (Cohen y Franco, 2010), programas condicionados de transferencias de ingresos (CELS, 2010).

Midaglia (2012) ubica este periodo en el marco de un proceso de más largo plazo en el que es posible identificar tres “oleadas” de este tipo de prestaciones claramente diferenciadas, cada una con sus respectivos fundamentos ideológicos, que tienen como característica común la atención de los problemas asociados a la exclusión social. En una primera etapa -que se extendió desde mediados de la década de 1980 hasta los primeros años de la década de 1990- prevalecieron intervenciones sociales compensatorias y coyunturales, dirigidas fundamentalmente a los sectores sociales considerados indigentes. Los argumentos que respaldaban la transitoriedad de estas intervenciones suponían que la propia dinámica de ajuste y saneamiento económico propiciaría el crecimiento y, a la vez, la superación de las situaciones de privación socioeconómica²¹.

La segunda fase se inició avanzados los años 90, con programas que se concibieron como estrategias de cierta permanencia y que pretendieron contemplar la multiplicidad de causas presentes en las situaciones de pobreza. En este contexto, se destacaron las medidas que incluían iniciativas multisectoriales, que si bien mantuvieron una pauta de acción focalizada, ampliaron la cobertura incorporando a nuevos segmentos de población carenciada. Estas iniciativas surgieron luego de que se advirtiera que las etapas de crecimiento económico de la región no habían logrado por sí mismas modificar las condiciones de bienestar de la población más necesitada. Para alcanzar ese objetivo, se requería de estrategias públicas que se sostuvieran en el tiempo y que, a la vez, abordaran los diversos aspectos de la vulnerabilidad social.

Por último, la tercera etapa coincide con la llegada del nuevo siglo y se inició con la promoción de paquetes específicos de protecciones. Si bien un porcentaje de los programas sociales del periodo anterior se mantienen, simultáneamente se impulsó una nueva categoría de protecciones, diseñadas como mega-intervenciones de alcance nacional centradas en los PTMC a los hogares pobres. Estas consisten en una prestación monetaria específica a las unidades familiares que reúnen un conjunto de características que las ubican como pobres según criterios previamente definidos. La recepción de esas transferencias está pautada por una serie de contrapartidas, en la mayoría de los casos relacionadas con la realización de controles sanitarios a las embarazadas y los menores de edad, así como la asistencia de estos últimos a los centros educativos.

²¹ Serrano (2005) también considera que desde mediados de la década del 80 se comenzaron a expandir los programas de asistencia vía entrega de subsidios monetarios.

Los dos programas precursores en nuestro continente fueron el programa Bolsa Escola implementado en Brasilia 1995 y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) lanzado en México en 1997 (posteriormente denominado Oportunidades). El primero comprendía el pago de un salario mínimo a las familias pobres, condicionado a que sus hijos de 7 a 14 años se mantuvieran en la escuela. El éxito de esa iniciativa propició que varios municipios y estados brasileños iniciaran sus propios programas de Bolsa Escola. En 2001 el gobierno federal crea el Programa Nacional de Bolsa Escola y lo implementa en todos los municipios brasileños. En 2004 el programa Bolsa Escola es absorbido junto con tres otros programas de transferencias (Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás) en el Programa Bolsa Familia. En tanto el segundo, fue concebido con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de los más pobres y cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza promoviendo -a través de transferencias monetarias- el acceso a servicios de salud y educación. Inicialmente fue dirigido a familias en zonas rurales altamente marginadas. En 2001 se expandió a zonas semi-urbanas y, finalmente, en 2002 llegó a abarcar las zonas urbanas. En 2001, durante la presidencia de Vicente Fox pasa a denominarse Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Hacia 1997 este tipo de programas se implementaba en 3 países, en 2007 en 16 y llegaban a 18 países en 2010, beneficiando a más de 25 millones de familias –alrededor de 113 millones de personas–, es decir, 19% de la población de América Latina y el Caribe, a un costo de alrededor 0,4% del PIB regional. A lo largo de este período los PTMC lograron consolidarse, aumentando los montos de las transferencias monetarias ofrecidas, incrementando su cobertura y su alcance geográfico, y en muchos casos asegurando su institucionalización dentro de la política social de cada país (Cecchini y Madariaga, 2011). Se constituían, así, en un instrumento privilegiado de la política contra la pobreza que contaba con el apoyo de las instituciones financieras internacionales.

Desde la perspectiva de García Trujillo (2009) son cinco los elementos que permiten entender el surgimiento y expansión de los PTMC en América Latina:

- 1) La evolución de la conceptualización de la pobreza y de las políticas para combatirla: se pasa de una visión basada en la supervivencia de las personas (en la que se consideran casi exclusivamente parámetros de mediación basados en las necesidades materiales básicas) a una visión multidimensional

donde no sólo se busca cubrir las necesidades básicas de los individuos sino que se persigue su integración social.

- 2) La incorporación de nuevos actores de la política social: en gran parte, gracias a los avances teóricos de la perspectiva de género y de la noción de cuidado se ha visibilizado la problemática de la mujer, por un lado, y de la familia, por el otro, concibiéndolos como sujetos de programas sociales.
- 3) La introducción de criterios de focalización y de desarrollo de instrumentos estandarizados y objetivos de medición de la pobreza y la vulnerabilidad para la asignación de beneficios.
- 4) En la última década la política social ha venido operando en forma creciente con una lógica de programas y proyectos de experiencias o iniciativas aisladas ubicadas en escala micro-social. Además, este elemento facilitaría el financiamiento de los PTMC por parte de los organismos de financiamiento internacional.
- 5) Disponibilidades de evaluaciones de impacto.

Una mirada más crítica del surgimiento y expansión de este tipo de intervenciones es aportada por Álvarez Leguizamón, Ibarra y Naharro (2009) y por Álvarez Leguizamón (2011). Para los autores este tipo de programas se enmarcan en las denominadas “políticas de foco” o “focopolítica”; es decir, en un tipo particular de lo que Foucault denomina gubernamentalidad neoliberal. La misma se viene constituyendo en una nueva práctica del derecho político supranacional y un nuevo humanitarismo, bajo la influencia de los organismos supranacionales que dicen promover el desarrollo de la vida. Sin embargo, los dispositivos de intervención promueven la vida a niveles mínimos básicos, a través de diversas formas de focalización de poblaciones de o en “riesgo”, sin atacar los problemas estructurales que producen la exclusión y la pobreza.

Para los autores es posible clasificar a estos programas en dos etapas o generaciones. La primera generación se caracteriza por distintos dispositivos de intervención: gestionan la pobreza territorializada a nivel micro-político a partir de programas de autogestión participativa comunitaria; potencian los activos; promocionan el “capital humano” en actividades poco productivas o el capital social; regulan a nivel meso-político en salud y educación; y finalmente otorgan un ingreso mínimo transitorio a poblaciones con problemas de empleo. En tanto la segunda generación de

focopolíticas, amplía el número de sus poblaciones objeto en relación a las que habían tenido las políticas focalizadas de la primera generación; no pierden su carácter de asistencial y tutelar el cual se mantiene a través de las condicionalidades y están dirigidas a grupos vulnerables, los cuales se encuentran en una situación de mayor “riesgo social”.

La legitimación de este tipo de programas ha descansado en gran medida en la demostración, a través de constantes evaluaciones, de que constituyen estrategias razonablemente eficaces para lograr mejoras en distintos ámbitos. Desde la perspectiva de Barba Solano y Valencia Lomelí (2011), el crecimiento notable de su cobertura a bajo costo se presenta como un aspecto seductor para quienes proponen un enfoque de política social mínimo o defienden el paradigma de bienestar residual.

Más allá de su expansión y consolidación en toda la región estos programas ocupan grados variables de centralidad en los sistemas de protección social y muestran diversos enfoques al interior de los arreglos de la política social de los países que los implementan (Cecchini y Madariaga, 2011), articulándose de diversas maneras con las políticas pre-existentes.

1.2.2.- Los objetivos de los PTMC

En términos generales, es posible señalar, que los PTMC persiguen dos objetivos. Un objetivo de corto plazo relacionado con el alivio a la pobreza a través de la asistencia financiera inmediata a las familias y un objetivo de largo plazo que busca fomentar la acumulación de capital humano en familias pobres, particularmente en los niños, a fin de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (Cecchini y Madariaga, 2010; Minujín, Davidziuk y Delamónica, 2007; Repetto y Díaz Langou, 2010; Valencia Lomelí, 2008; Villatoro, 2007). En este sentido, combinan el rol preventivo tradicional o de “asistencia social” de las redes de seguridad o redes de contención en la medida que previenen que esas familias caigan en condiciones de pobreza aún más extremas con un rol de “desarrollo” o “promoción” social al promover a través de incentivos económicos y condicionalidades la inversión en capital humano de los niños y jóvenes en los hogares pobres, especialmente en educación.

Algunos autores (Villatoro, 2007) consideran también un objetivo de mediano plazo relativo a la reducción de la pobreza a través del aumento de las capacidades de

las familias pobres. Este objetivo habría sido introducido más recientemente en los PTMC y coloca el énfasis en la activación y el desarrollo de capacidades en los adultos en edad de trabajar²².

Es posible observar que los objetivos, así definidos, combinan un eje temporal con las principales variables del bienestar a ser intervenidas.

A los objetivos ya señalados Minujín, Davidziuk y Delamónica (2007) le incorporan otros tres: 1.- pretenden reducir el trabajo infantil en la medida en que requieren que los niños de los hogares beneficiados presenten una mínima asistencia escolar, 2.- algunos de estos programas también buscan alcanzar una mejora institucional más amplia al ofrecer una ayuda financiera complementaria a las escuelas y a los centros sanitarios y finalmente 3.- se busca cambiar el comportamiento de "los pobres" hacia la educación y el cuidado de la salud. El comportamiento esperado o "buen comportamiento" varía según el programa.

Según Soares y Britto (2008), existen contradicciones internas y tensiones potenciales entre los elementos de los PTMC que se han manifestado a medida que se multiplicó la implementación de estos programas en toda América Latina. Estas contradicciones tienden a exacerbarse en países con limitaciones institucionales y financieras para la implementación de PTMC. A primera vista, enfocarse en cualquiera de los dos objetivos principales podría parecer que no incide en el resultado de los programas pero, al analizar detalladamente, el dilema entre los dos objetivos se vuelven muy evidentes y se manifiestan en por lo menos tres dimensiones programáticas: a) en la estrategia de focalización; b) en el monitoreo de las condicionalidades y las limitaciones de implementación que imponen; y c) en las reglas de salida (o 'graduación') y en los mecanismos para la incorporación de nuevos beneficiarios.

Respecto de los criterios de focalización, el enfoque en la acumulación de capital humano podría dejar afuera de los programas a segmentos importantes de la población pobre, especialmente los ancianos y los discapacitados. En un contexto así queda claro

²² Para Villatoro (2007) los instrumentos de transferencias condicionadas creados en la década del 90 se centraban en todos o en alguno de los aspectos de la tríada clásica del capital humano (educación, salud y alimentación). Sin embargo, a partir de inicios del nuevo siglo los PTMC han incorporado la articulación con redes de protección más amplias y la agregación de una mayor diversidad de sectores (por ejemplo: empleo, capacitación para el trabajo, seguridad social, etc.). La implementación de "medidas de activación" tendientes a mejorar las condiciones de empleo actuales y de empleabilidad futuras vinculando a los beneficiarios con programas de generación de ingresos e inserción laboral constituye un elemento clave en torno a la actual discusión respecto a las estrategias de salida o graduación de los programas (Cecchini y Madariaga, 2011).

que los PTMC no pueden ser considerados como una estrategia integral de reducción de la pobreza y/o protección social. Esta característica sería aún más evidente si se adoptara una estrategia de ‘focalización eficiente’, es decir, si los hogares con mayor probabilidad de enviar y retener a sus hijos en la escuela fueran los que más probablemente se convertirían en beneficiarios del programa.

El papel de las condicionalidades es un tema importante en sí mismo. Su relevancia se debe a que se vuelven esenciales en un PTMC cuando la acumulación de capital humano es el interés principal.

En tanto, las contradicciones entre ambos objetivos pueden ser particularmente notorias al diseñar las reglas de salida o de ‘graduación’ del programa y los mecanismos para la incorporación de nuevos beneficiarios. Si el enfoque del programa es la acumulación de capital humano, entonces es razonable argumentar que el apoyo monetario debería prestarse durante la totalidad de los ciclos básicos de educación y salud. Sin embargo, la mayoría de los PTMC en América Latina tienen un límite de tiempo de tres años en promedio para la permanencia de los hogares en el programa. Después de este plazo, se re-evalúa la condición de pobreza de las familias y éstas podrían quedar excluidas del programa. Según Soares y Britto (2008), dos razonamientos justifican este abordaje: a) evitar la dependencia, que termina sacrificando el impacto a largo plazo en el capital humano de los miembros jóvenes del hogar debido a inquietudes en torno a los posibles impactos negativos en la oferta laboral de los miembros adultos; y b) darle la oportunidad a más familias, tal vez más pobres, de participar en el programa en un contexto de financiamiento limitado.

1.2.3.- Las características de los PTMC

Los PTMC surgen como una nueva modalidad de programas de asistencia social focalizados (Simões, 2006) y comparten algunas características comunes. Son programas no contributivos cuyos objetivos son reducir la pobreza y fortalecer el capital humano de los beneficiarios. Su diseño básico consiste en una transferencia de ingreso a familias pobres con niños, a cambio de compromisos en los ámbitos de educación, salud y nutrición. A través de las transferencias buscan cubrir ya sea los costos directos de la asistencia de los niños y jóvenes a la escuela o los costos de oportunidad que genera la pérdida de ingresos por el abandono del trabajo de los estudiantes para asistir a la escuela. Sin embargo, tratan también de “evitar erosionar el incentivo para la autoayuda

o reforzar los incentivos para una mayor fertilidad”. En su diseño se asigna un rol central a las mujeres madres de familia, quienes no sólo administran primariamente las transferencias, sino también son responsables del cumplimiento de las condicionalidades, formato que no ha estado exento de controversias.

Sin embargo, no se puede hablar de un modelo único, porque los programas han sido reapropiados por cada país, según su situación política y entorno institucional. En consecuencia, han surgido enfoques y aspectos operacionales alternativos:

- a) según se apliquen condicionalidades y sanciones fuertes o blandas: al respecto, Cecchini y Martínez (2011) proponen una tipología de PTMC que, según sea el enfoque de los programas, los caracteriza como: i) programas de transferencia de ingresos con condicionalidad blanda; ii) programas de incentivo a la demanda con condicionalidad fuerte y iii) sistemas o redes de coordinación programática con condicionalidades. Además, algunos programas incorporan también “contraprestaciones”, las cuáles si bien son en espíritu similares a las condicionalidades, suponen el involucramiento de los beneficiarios en actividades vinculadas al trabajo, su búsqueda o capacitación para el mismo.
- b) las transferencias sean monetarias o en especie: la transferencia de recursos monetarios constituye una característica común de los PTMC²³; sin embargo, en algunos países esta transferencia se ve complementada con transferencias en especie como suplementos alimenticios y “mochilas” o “bolsones” con útiles escolares. En términos generales estos programas conciben que la modalidad de transferencia en efectivo permite a los hogares receptores ejercer su libertad de “elegir”, a la vez que suponen menores costos que la prestación de bienes alimentario, ya que esta implica fuertes requerimientos logísticos (como el transporte, el almacenamiento y la distribución) y además puede desincentivar la producción local (Villatoro, 2007). Para determinar el monto de las transferencias se utilizan tres aproximaciones: transferencia plana, según composición familiar y según características del destinatario (Cecchini y Madariaga, 2011; Villatoro, 2007). En el primer caso se fija un monto independiente de la composición del grupo familiar²⁴. La segunda modalidad consiste en otorgar mayores beneficios

²³ Los PTMC que sólo proveen dinero también han sido denominados “programas de transferencias puros” (Barrientos, 2012).

²⁴ Uno de los argumentos más fuertes señalados para la adopción de la transferencia plana es que esta permitiría evitar “incentivos perversos” tales como el estímulo a la fecundidad. Tal como señalan

a hogares que cuentan con un mayor número de sujetos elegibles: niños de hasta cierta edad, mujeres embarazadas o dando lactancia, adultos mayores, entre los más comunes. La tercera forma tiene relación con otorgar montos diferenciados según las características de los destinatarios de las transferencias monetarias. Esta forma tiende a privilegiar el objetivo de incentivo a la utilización de los servicios educativos y de salud, estableciéndose los montos en función de los “costos de oportunidad” que enfrentan distintos grupos de la población para acceder a dichos servicios. A ello pueden sumarse también los costos directos de provisión de los servicios.

- c) se provean directa o indirectamente servicios de inserción laboral, de orientación familiar y otros.

La heterogeneidad de experiencias se refleja también en diferentes niveles de inversión y cobertura poblacional de los PTMC según los países. Mayor cobertura y mayores montos de las transferencias implican a su vez mayor impacto sobre la incidencia de la pobreza de ingreso, aunque los resultados más positivos se dan en relación con medidas de brecha y severidad de la pobreza, por su buena focalización en los más pobres. Asimismo, la literatura muestra impactos positivos de los PTMC sobre la matrícula y asistencia escolar, así como en la asistencia a los controles médicos y consumo de alimentos, mientras que se expresan dudas sobre la calidad de los servicios de educación y salud a los que las familias tienen acceso y el impacto en indicadores “finales” de capital humano. No se aprecian impactos negativos ni positivos sobre la oferta laboral.

1.2.4.- Las bases teóricas de los PTMC

Los PTMC diseñados en América Latina muestran una considerable diversidad en su diseño, en el tipo de subsidios, en sus componentes y en los montos transferidos a las familias, entre otros; sin embargo comparten un conjunto de supuestos teórico los cuales se encuentran íntimamente relacionados entre sí:

1.- Concepción de la pobreza como carencia de capacidades (Barba Solano y Valencia Lomelí, 2011; García Trujillo, 2009; Valencia Lomelí, 2008): en estos

Cecchini y Madariaga (2011), parece más plausible pensar en los efectos adversos que tienen estas trasferencias, en la medida en que los beneficios per cápita son menores en las familias más numerosas y no en la generación de comportamientos oportunistas por parte de las familias.

programas la pobreza ha sido interpretada como el resultado de la insuficiente dotación de capital humano que enfrentan los pobres. Los mismos son vistos como potencialmente productivos, pero sin los medios para serlo. En este sentido, se basan en la noción que para desarrollar las capacidades es necesario invertir en estrategias para promover los constituyentes básicos del desarrollo humano (ingreso, salud y educación). Asumen la corresponsabilidad de los individuos con respecto al mejoramiento de su condición de vida. Así, suponen que los individuos responden a incentivos y promueven cambios de comportamiento a partir de las condiciones de la transferencia de ingreso. De esa manera las familias actúan a favor de sus hijos en el mediano y largo plazo. Sin embargo, esta concepción deja de lado la problemática de la insuficiencia y de la precariedad de los empleos y queda en la incertidumbre el fortalecimiento en las capacidades de las personas para asociarse a un mundo cambiante y de riesgos (Barba Solano y Valencia Lomelí, 2011).

2.- Tratan de obtener cambios en las conductas de los hogares pobres otorgando un rol central a las mujeres (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; Cecchini y Madariaga, 2011; Cohen y Franco 2010; Minujín, Davidziuk y Delamónica, 2007; Valencia Lomelí, 2008): tratan de obtener cambios en las conductas de los hogares pobres al condicionar la recepción de transferencias o el acceso a bienes y servicios. Las condicionalidades básicas son asegurar la inscripción y la asistencia de los niños y jóvenes a la escuela, asistir a cursos de salud y nutrición, y a controles periódicos de salud. En este sentido, es posible señalar que condicionar las transferencias parte del supuesto -no explicitado- de que resulta necesario generar un compromiso de parte de los pobres con la superación de la pobreza, además de suponer que estos sectores no necesariamente realizan tareas de cuidado por sí mismos (CELS, 2010). Conciben que los hogares son centrales en la reproducción intergeneracional de la pobreza pero también es allí donde se pueden generar cambios que rompan con el círculo vicioso de la pobreza. En este marco, destacan el rol de las madres dado que tanto las tasas de escolaridad en las familias como la situación nutricional y de salud de los hijos están claramente relacionadas con la escolaridad de las madres. El rol central de las mujeres en los programas, que no sólo administran las transferencias, sino también son responsables del cumplimiento de las condicionalidades, ha tenido lecturas dispares. Por un lado, se ha rescatado que ello permite un mayor empoderamiento de éstas en las decisiones del hogar por ser ellas quienes manejan los ingresos transferidos,

a la vez que otorgarían una mayor visibilidad y participación en la comunidad por su asistencia a cursos y/o talleres en el marco de los PTMC²⁵. Por el otro, se ha destacado que este empoderamiento termina siendo débil si no es acompañado de acciones ulteriores en ámbitos como el desarrollo de capacidades, autonomía, igualdad, influencia y aumento de las posibilidades de decisión. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que las mujeres son incorporadas en estos programas como instrumentos para aumentar el capital humano de sus hijos, y no el propio. Adicionalmente, se ha cuestionado que los diferentes requerimientos de los programas terminan recargando y reforzando las actividades de cuidado que tradicionalmente han limitado la inserción de la mujer en el mercado del trabajo. En este sentido, de la investigación llevada adelante por Martínez Franzoni y Voored (2008) que evaluó tres PTMC se concluye que las condicionalidades presentes en los programas refuerzan la exclusiva responsabilidad de las mujeres en la gestión de los escasos recursos disponibles y deja intacta la organización tradicional del trabajo doméstico y de cuidados.

3.- Focalización del gasto social en los hogares con extrema pobreza (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; García Trujillo, 2009; Valencia Lomelí, 2008): en un marco de restricciones presupuestales, buscan dirigir las acciones a las familias en situación de extrema pobreza. Estos programas son instrumentos típicamente focalizados que buscan concentrar esfuerzos para lograr el máximo de efecto con un presupuesto determinado, o en términos equivalentes, producir un efecto determinado con el menor costo presupuestario.

4.- Inversión en capital humano y capital social en las etapas más críticas del ciclo de vida de los individuos (García Trujillo, 2009; Valencia Lomelí, 2008): tienen la premisa de que una de las razones fundamentales de la reproducción intergeneracional de la pobreza es la falta de inversión en capital humano en los ámbitos de educación, salud y nutrición. Así, se argumenta que la interacción de los diversos déficit en educación, salud y nutrición favorece la creación del círculo vicioso de la pobreza en el que caen individuos y familias. En especial, suponen que los niños de hogares pobres tienen una desventaja adicional por sus bajos logros educativos que redundarán en baja productividad y bajos ingresos futuros. Centran las acciones en los momentos más críticos del ciclo de vida de los individuos a la vez que suponen que los

²⁵ Esta perspectiva ha sido considerada por Barba Solano y Valencia Lomelí (2011) como uno de los “espejismos” o ilusiones que presentan los PTMC.

beneficios obtenidos por la mayor educación de los niños “son permanentes” y de esta manera se conseguirá dotar a los beneficiarios de instrumentos “para generar su propia salida de la pobreza”. Sin embargo, la diferente calidad de los servicios, fundamentalmente, los educativos no es considerada.

5.- Concepción del manejo de los riesgos sociales (Álvarez Leguizamón, Ibarra y Naharro, 2009; García Trujillo, 2009; Midaglia, 2012; Villatoro, 2005): estos programas buscan atender la nueva estructura de riesgos sociales instalada en el continente, así como resolver los problemas de exclusión social. De esta manera pretenden superar la perspectiva centrada en la reducción de la pobreza a corto plazo evolucionando hacia un enfoque de manejo de los riesgos que tiene como objetivo acrecentar el capital humano y superar la pobreza a largo plazo. Según el enfoque de manejo de riesgos sociales, las personas, hogares y comunidades están expuestos a múltiples riesgos. La pobreza implica una mayor vulnerabilidad, ya que los pobres tienen poco acceso a instrumentos adecuados para manejar riesgos y se encuentran en peores condiciones para afrontar situaciones de crisis. Los mecanismos más utilizados por las familias pobres para enfrentar las perturbaciones económicas son las estrategias informales (por ejemplo, sacar a los niños de la escuela), cuya ineficiencia puede reducir de manera irreversible el capital humano y perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza.

6.- Relación directa entre la población focalizada y el gobierno (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; Valencia Lomelí, 2008): estos programas parten de la concepción que a través de la entrega directa de transferencias en efectivo se promueve o facilita una relación más directa entre el gobierno nacional y la población focalizada y que esta relación tendría características de “despolitizada” o “apartidista”. Así, se pretende evitar la intermediación de líderes locales o de redes que pudiesen requerir compromisos diferentes a los establecidos en el programa o capturarlo para otros propósitos. Sin embargo, una serie de trabajos académicos, informes de prensa, encuestas de percepción de usuarios e informes técnicos de diferentes países han permitido observar que la implementación de estas políticas no está exenta de denuncias de corrupción y permeadas por redes clientelares preexistentes.

7.- Subsidio a la demanda con corresponsabilidad (García Trujillo, 2009; Valencia Lomelí, 2008): en este tipo de programas las transferencias de ingresos en efectivo operan como incentivo a la demanda. Son, en este sentido, intervenciones

públicas compatibles con la lógica de mercado que evitan distorsiones en los precios relativos. Conciben que la modalidad de transferencia en efectivo permite a sus receptores ejercer su libertad de “elegir” en qué destinar los recursos que se le entregan y se ajusta mejor a la composición de los hogares. Consideran que la combinación de la transferencia de efectivo y de condicionalidades probablemente conduzca a los hogares a tomar decisiones educativas más eficientes, resultado de un cálculo racional de costo-beneficio. Tratan a través de las condicionalidades, de enfrentar las fallas del mercado y por otra parte de internalizar las externalidades positivas incrementadas a través de mayores inversiones en salud y educación entre los jóvenes.

En síntesis, los principales elementos del cuerpo teórico de los PTMC son producto de la confluencia de diversas tradiciones conceptuales. Sin embargo, estos elementos implican, fundamentalmente, respecto por los mecanismos del mercado con intervenciones preferentes del lado de la demanda y una concepción de la pobreza anclada en una cuestión individual y producto del resultado del déficit de capital humano. En este marco, la pobreza ha sido interpretada como un resultado de la insuficiente dotación de capital humano que enfrentan algunas personas.

Si vinculamos estas dos ideas fuerza presentes en el armazón teórico de los PTMC con la noción amplia de política social de la cual partimos (esto es, la de constituir una particular conformación político-institucional destinada a garantizar la cohesión social) podemos señalar siguiendo a Barba Solano y Valencia Lomelí (2011) que las capacidades cohesivas de este tipo de programas están construidas sobre bases de desigualdad y debilidad de derechos sociales, todavía más sobre bases crecientes de segmentación y limitación de derechos.

2.- La categoría tiempo social

La noción de tiempo social fue utilizada por primera vez en el campo de la teoría social en unos pocos -pero ricos y densos desde el punto de vista conceptual- párrafos de la obra de Durkheim *Las formas elementales de la vida religiosa*. Esta obra, publicada por primera vez en 1912, constituye un verdadero Big Bang en la medida en

que inaugura el campo de reflexión sobre la problemática del tiempo en la teoría social. Hasta ese momento la reflexión sobre el tiempo había estado en manos de la filosofía²⁶.

Sin embargo, *Las formas...* no constituye un hecho aislado; la problemática de la relación entre los marcos sociales y los marcos temporales en sus distintas manifestaciones socio-históricas estaba presente tanto en Durkheim como en sus más cercanos colaboradores (Maus, Hubert, Hertz y Halbwach), conformando un verdadero proyecto colectivo.

El elemento central del análisis durkheimiano sobre el tiempo se centra en considerarlo una representación colectiva. Así, el tiempo es presentado como:

“...un cuadro abstracto e impersonal que no sólo envuelve nuestra existencia individual, sino la de la humanidad. Es como un cuadro ilimitado en el que toda duración se despliega ante la mirada del espíritu y en el que todos los acontecimientos posibles pueden situarse con relación a puntos de referencia fijos y determinados. No es mi tiempo lo que está organizado así; es el tiempo tal como es objetivamente pensado por todos los hombres de una misma civilización” (Durkheim, 2003: 39, subrayado del autor).

“...lo que expresa la categoría tiempo es un tiempo común al grupo, es un tiempo social, por decir así. Esta categoría es en sí misma una verdadera institución social” (Durkheim, 2003: 40).

Este tipo de consideraciones marcan, por un lado, un claro alejamiento de la concepción de un tiempo “natural”, de un tiempo serie “B” y de un tiempo que está en las cosas; y por otro lado, una disputa explícita con la filosofía en torno al objeto de estudio y, concomitantemente, a la construcción de un objeto propio de la teoría social.

Desde la perspectiva de Ramos Torre (1990a), pensar el tiempo de esta manera supone concebirlo como algo externo, previo y constrictivo en relación a cada individuo en particular, supone concebirlo como un hecho social. De manera similar, Gell (1996) señala que el tiempo (así como también el espacio) son tanto derivados de la sociedad como dictados/construidos en sociedad. Esta circularidad en el pensamiento de

²⁶ Una de las más difundidas sistematizaciones y clasificaciones de la reflexión metafísica sobre el tiempo ha sido la de Mc Taggart (citado en Gell, 1996 y Ramos Torre, 1992). Para el autor es posible distinguir dos tipos diferentes de tiempos dentro de la reflexión filosófica: el tiempo serie “A” y el tiempo serie “B”. El tiempo serie “A” está caracterizado por el eje futuro-presente-pasado (diferenciados ontológicamente), por la dinámica, por el devenir como origen del cambio, por las verdades temporales y donde la conciencia subjetiva del tiempo provee esquemas apropiados para comprender el tiempo. La serie “B” supone el tiempo como antes/después, la idea básica es el “ser”, el tiempo es estático, las verdades son atemporales, y, finalmente, ni el “devenir” ni la “conciencia” son objetivos.

Durkheim no es necesariamente viciosa; muy por el contrario, se trata de una interpretación que permite ser descripta como dialéctica, hermenéutica o cibernética (Gell, 1996).

Ahora bien, ¿cómo se ejerce la coacción social sobre los individuos? O, y de forma similar, ¿cómo los individuos no se salen de las normas que le son socialmente impuestas? Las respuestas a estos interrogantes nos llevan a otra de las características distintivas de la noción de tiempo en el pensamiento durkheimiano. Es el calendario ritual el que tiene la función de garantizar la regularidad de las actividades sociales y, así, de plasmar la vida colectiva. El calendario es la materialización de las constricciones colectivas sobre el individuo, y, de forma más específica, es la materialización de las constricciones temporales. Para Durkheim, es el ritmo de la vida social lo que está en la base de la categoría tiempo. Esta identificación entre tiempo y calendario (u otro sistema de cómputo temporal) enlaza de forma casi sinonímica la problemática del tiempo a los aspectos cronológico-duracionales.

Para el autor no es posible imaginar el tiempo prescindiendo de los procedimientos mediante los cuales es posible dividirlo, medirlo y expresarlo por medio de signos objetivos²⁷. Esto es, no es posible concebir el tiempo si no es a condición de distinguir en su interior momentos diferentes. Las divisiones en días, semanas, meses, años, etc., corresponden a la periodicidad de los ritos, fiestas y ceremonias públicas, que no son otra cosa que un conjunto de actividades pautadas que realiza un grupo. Cualquier interrupción al flujo continuo del tiempo es el producto de una necesidad humana fundamental de establecer la diferenciación entre varios dominios existenciales. La necesidad de esta alternancia ha sido probablemente lo que ha conducido a los hombres a introducir en la continuidad y homogeneidad de la duración ciertas distinciones y diferenciaciones que tal duración no posee en forma natural. La ruptura de continuidad más significativa identificada por Durkheim fue aquella entre los dominios sagrado y profano y, consecuentemente, entre los tiempos sagrados y profanos (Beriaín, 2007).

El análisis de Durkheim abrió un importante debate relacionado con los orígenes sociales y con las funciones de la categoría tiempo, así como también, sobre cómo el

²⁷ Para Ramos Torre (1990a), la aproximación durkheimiana es plausible en la medida en que se conecta de forma plena con la institución colectiva del tiempo en sociedades como las contemporáneas, cronificadas por el reloj; sin embargo se trataría de una mirada restringida y sesgada sobre un objeto más amplio y más complejo.

tiempo social puede ser distinguido y diferenciado del tiempo astronómico. Sin embargo, estas ideas permanecerán en un relativo aletargamiento hasta 1937, año en que se publica en los Estados Unidos el artículo de Sorokin y Merton *El tiempo social: un análisis metodológico y funcional*.

Para los autores el cómputo del tiempo basado en premisas físicas transcurre inexorablemente en unidades relativamente homogéneas, mientras que el tiempo social se despliega con diversos ritmos; a veces rápidamente, a veces con lentitud, y, a veces, con interrupciones (por ejemplo, el sueño y las vacaciones). Así, el tiempo social puede ser dividido en intervalos derivados de las actividades sociales colectivas en lugar de mostrar flujos uniformes. La tendencia de los grupos es a localizar en el tiempo los acontecimientos sociales en relación con otros acontecimientos o períodos sociales y a utilizar los mecanismos del cómputo temporal exclusivamente físico simplemente para “marcar el tiempo” entre los acontecimientos sociales de interés.

Tributarios de los principios durkheimianos básicos, los autores subrayan la idea de que los sistemas de cómputo temporal reflejan las actividades sociales del grupo:

“Sus fuentes de iniciación son colectivas; su continuada observancia es demandada por necesidades sociales. Surgen del círculo de vida grupal, están ampliamente determinados por la rutina de las actividades religiosas y el orden diario de actividades, son perpetuados por las necesidades de coordinación social y son esencialmente un producto de la interacción social” (Sorokin y Merton, 1992: 77).

Ahora bien, si por un lado, los sistemas temporales locales varían de acuerdo con las diferencias en extensión, funciones y actividades de los diferentes grupos, todos ellos se pueden reducir a la necesidad de proporcionar medios para la sincronización y coordinación de las actividades y observaciones de los grupos que lo constituyen. Con la generalización de la interacción entre grupos, ha de desarrollarse un sistema temporal común o comprensivo que se superponga a los sistemas temporales locales o, al menos, los amplíe. Los sistemas locales de cómputo temporal dejan de ser adecuados cuando el ritmo de las actividades sociales difiere en los distintos grupos o en el interior de una sociedad altamente diferenciada. Así, la función social de computar y designar el tiempo como un medio necesario para coordinar la actividad social fue el verdadero estímulo hacia los sistemas temporales astronómicos, cuya introducción se hizo imprescindible como resultado de la inadecuación de los sistemas locales, tras la generalización de los

contactos y la interacción organizada y la consiguiente falta de uniformidad en los ritmos de las actividades sociales.

Para los autores, los sistemas temporales locales son cualitativos, llevan la impronta de significados locales diferenciales. Un sistema temporal que aspire a subsumir esos diferentes sistemas locales tiene necesariamente que abstraerse de las cualidades individuales de los múltiples sistemas. En consecuencia, es visible la importancia del factor social en la determinación de la concepción de tiempo puramente cuantitativo, uniforme y homogéneo. El tiempo astronómico unidimensional sustituyó en gran parte al tiempo social multidimensional. La introducción de este tipo de análisis sin lugar a dudas constituye una verdadera actualización o modernización de las primigenias ideas presentadas por Durkheim en *Las formas...*, brindando de forma adicional una potencialidad explicativa mayor para su aplicación al estudio de las formas de estructuración y uso del tiempo en las sociedades contemporáneas. Más de seis décadas después de la publicación del artículo, Nowotny (1990) se preguntaba si la incorporación del tiempo local en un tiempo mundial no constituía uno de los primeros ejemplos hacia la normalización y la integración también sobre la escala del tiempo.

Si bien la obra programática de Sorokin y Merton reclamó, de forma temprana y siguiendo el camino emprendido por Durkheim, al tiempo como un objeto de estudio propio dentro de la teoría social en la medida en que lo proveyeron de un carácter sociocultural, no fue sino hasta la década del 60 cuando la problemática comienza a tener un abordaje más sistemático dentro de la teoría social.

Desde la perspectiva de Ramos Torre (1990a), lo que se entiende por tiempo social nunca se precisa mucho y tal vez lo más claro es que, si se atiende estrictamente a la evidencia presentada a favor de la idea, sus sentidos son variados. El autor encuentra tres sentidos fundamentales:

- 1) la identificación entre tiempo social y relojes sociales, es decir, los sistemas de computación del tiempo -que permiten discriminar momentos-fechas y medir intervalos- en los que se utilizan tan sólo acontecimientos y procesos sociales.
- 2) por tiempo social se denominan a las variadas utilizaciones del tiempo, es decir, al modo en que el formar parte de grupos sociales de distinto tipo determina el uso del tiempo de los humanos, y

- 3) de una manera más genérica que puede englobar a las dos anteriores; el tiempo social es presentado como la ordenación temporal de los procesos sociales y acontecimientos sociales, es decir, la manera específica que tienen las sociedades humanas de ordenarse temporalmente.

Estos tres sentidos de la noción de tiempo social contienen en su interior una característica central y, sin lugar a dudas, indiscutida: el carácter plural del tiempo. Para Valencia García (1999, 2007), la idea de pluralidad temporal representa una estrategia para el tratamiento de la realidad socio-histórica. La distinción entre tiempos estructurales y episódicos, entre ritmos dilatados y ágiles, entre la secuencia y la simultaneidad, permite poner en juego la permanente tensión entre sincronía y diacronía, entre necesidad y azar, entre determinismo y libertad. La idea de multiplicidad del tiempo admite, además, la incorporación de la “subjetividad sobre el tiempo”, tanto como la del “tiempo de la subjetividad” de los actores del mundo real: su riqueza de percepciones temporales, sus memorias y olvidos, sus esperanzas y proyectos.

En este sentido, el tiempo no es uno y siempre el mismo, sino múltiple en sus manifestaciones, lo que abre la posibilidad de construir tipologías de tiempos y eventualmente narrar sus historias y coexistencias (Ramos Torre, 1990a), y de reconocer la trama de temporalidades y de ritmos que se conjugan en una realidad concreta (Valencia García, 1999, 2007).

Fuertemente engarzados en esta idea, Lewis y Weigert (1992) consideran que el tiempo social impregna todas las esferas de la vida social y que esta infiltración puede estructurarse teóricamente mediante la identificación de los diferentes tipos de tiempo social que operan en los distintos niveles de la estructura social. Esta idea constituye el punto de partida para el desarrollo de una “tipología constructivista” de los tiempos sociales:

I).- Micro-nivel de la organización social

- a) *el tiempo personal*: a diferencia del tiempo físico, es un tiempo no homogéneo. Acontecimientos de la vida individual bastante separados en el tiempo físico pueden tener una representación en la conciencia tan vívida como los recuerdos de los que han ocurrido hace cinco minutos.

b) *el tiempo de interacción*: es el marco temporal que reviste parcialmente los tiempos personales de dos o más personas que interaccionan directamente. Dado que se trata de una realidad intersubjetiva, el tiempo de interacción sólo se encuentra parcialmente al alcance de la experiencia y al control de cada yo. El flujo de tiempo de interacción depende de las acciones (no completamente previstas) del otro, así como las reglas vigentes que definen los “giros” adecuados en la interacción. Las posiciones sociales relativas de las personas que interactúan imponen normas que gobiernan la alternancia y otros intervalos temporales en el tiempo de interacción. Un rasgo estructural crítico del tiempo social que influye en la organización temporal de la interacción es el hecho de que todas las acciones sociales encajen temporalmente en otros actos sociales de mayor alcance. Una subcategoría importante de este tipo de tiempo es el tiempo familiar, el cual está reservado para la interacción con los familiares, sobre todo con los más cercanos.

II).- *Macro-nivel de la organización socio-temporal*: no sólo las estructuras del tiempo personal se encuentran encajadas en estructuras del tiempo interaccional, sino que ambas estructuras temporales de micro-nivel se encajan a su vez en los macro-niveles de otros órdenes temporales mayores, los de las instituciones sociales y culturales. Este encaje constituye la integración temporal de los diferentes niveles de la estructura social y es el origen de la necesidad de “estratificación” y “sincronicidad” temporales. La diferenciación en el interior de las estructuras de macro-nivel del tiempo social entre las estructuras institucionales y culturales está basada en sus diferencias tanto formales como de competencias. Dentro del campo institucional, las organizaciones individuales (colegios, fábricas, etc.) que componen cada una de las esferas institucionales elaboran sus propios programas temporales y sus propias reglas. Aunque pueden (y habitualmente lo hacen) tener en cuenta las estructuras temporales de otras organizaciones con las que deben realizar intercambios, las normas y sanciones que rigen el uso del tiempo en cualquier organización en particular afectan directamente sólo a sus propios miembros. Por otra parte, hay estructuras temporales de base cultural (día, semana, estaciones) que afectan de un modo u otro todos los miembros de la sociedad que desempeñan alguna función en ella.

- c) *el tiempo organizacional o institucional*: el tiempo de interacción, como el tiempo personal, se encuentra característicamente subordinado al tiempo organizacional de dos maneras. En primer lugar, el tiempo organizacional impone los momentos en los que puede entrar en juego el tiempo de interacción. En segundo lugar, el tiempo organizacional controla parcialmente el ritmo de interacción. El tiempo organizacional tiene las mismas dimensiones básicas que se encuentran en otras clases de tiempo social. Pero la diferencia principal es que en el tiempo organizacional estas dimensiones están mucho más estructuradas y contienen mucha menor cantidad de tiempo indefinido o libre. Éste es uno de los rasgos del tiempo organizacional que hace difícil la coordinación de los tiempos sociales simultáneos que interfieren continuamente en la vida diaria. Para las personas casadas, sobre todo las mujeres, controlar las presiones producidas por los cruces del tiempo organizacional y el tiempo familiar es un difícil problema de malabarismo temporal.
- d) *el tiempo cíclico*: está constituido por las estructuras culturales que se repiten en ciclos interminables. En las sociedades modernas los ciclos sociales están basados en tres secuencias naturales definidas como unidades temporales significativas: la ronda diaria, la rutina semanal y la temporada anual.

Dentro de esta tipología, el tiempo social es interpretado como una modalidad de sentido humana elaborada en los procesos de interacción, limitada por las realidades físicas del organismo y la naturaleza y estructurado en las instituciones y organizaciones de cada sociedad. Para Lewis y Weigert (1992), tres rasgos del tiempo social constituyen el núcleo de esta tipología:

- 1) *Encaje*: es el reconocimiento de que la vida humana y las acciones sociales que la componen forman un complejo solapamiento de acciones y sentidos en diversas etapas de su realización. Funciona como un mecanismo que hace plausible la experiencia de continuidad del yo, de una identidad permanente que pasa por situaciones diferentes. En la sociedad moderna, está limitado a las realidades mundanas del curso de la vida, la carrera, los horarios institucionales y los planes personales; ofrece una continuidad de la

subjetividad y del yo más precario, pero es el único tiempo de plausibilidad a disposición del hombre moderno.

- 2) *Estratificación*: es el rasgo central estructurador de la vida humana y opera como un mecanismo que hace plausible la experiencia del autocontrol y del control social como realidad única. La objetividad de la vida humana se deriva, en parte, de sus localizaciones en la estratificación de los tiempos sociales, en los cuales el yo actúa en ocasiones como un individuo libre, en otras observando los horarios del Estado y en otras cumpliendo el programa previsto para una carrera en una institución.
- 3) *Sincronicidad*: Es una derivación del encaje temporal y la estratificación y opera como un mecanismo para hacer plausible la racionalidad de la acción y la planificación humanas. La racionalidad supone el ordenamiento de las acciones y expectativas como medio para alcanzar objetivos futuros. Este ordenamiento es un producto intersubjetivo: la racionalidad es esencialmente una realidad pública por medio de la cual un cierto número de individuos entiende el futuro del mismo modo. Sincronizar la propia vida es una realización pública que funde la individualidad insalvable de la experiencia personal, formada por tiempo encajado, con la colectividad irreductible del orden social, constituido por los tiempos sociales estratificados.

A medida que la complejidad de las sociedades industriales aumenta debido a una mayor racionalización de las instituciones, la inserción temporal de los acontecimientos en las estructuras de los tiempos organizativos, interaccional y personal gana en complejidad. En consecuencia, la sincronización de los actos y los actores dentro de los horarios de las organizaciones y las biografías individuales se hace mucho más problemática y, con frecuencia, sólo puede resolverse robándole tiempo de reloj a otra forma de tiempo social. El resultado es que la estratificación de los tiempos sociales se hace más pronunciada y provoca conflictos de tiempo social con ramificaciones que alcanzan a toda la estructura de la sociedad, afectando profundamente la calidad de vida de sus miembros (Lewis y Weigert, 1992). Volveremos sobre este punto cuando analicemos el impacto de las transformaciones en el tiempo de trabajo en la estructuración de la vida cotidiana.

2.1- La noción de uso del tiempo

2.1.1- Aspectos teórico-epistemológicos

El tiempo, al igual que el espacio, puede ser considerado como un vector²⁸ que organiza la vida social. Simultáneamente, estos vectores son producidos y sancionados socialmente a través de un sistema de representaciones que los organizan. Para una vasta literatura socio-antropológica, el tiempo es pensado y experimentado de manera diversa en cada grupo social. Esta diversidad es producto tanto de criterios internos a la estructura simbólica de los grupos sociales, como también a las relaciones de jerarquía que presiden una sociedad basada en las clases.

La utilización del tiempo es expresiva de la forma que toman los diferentes tipos de relaciones sociales. Así, las definiciones sociales de tiempo o temporalidades son fuertemente marcadas por la experiencia de clase social, género y grupo etario. Derivado de lo anterior, los segmentos de tiempo adquirirán significados distintos para cada una de las categorías sociales recortadas por estos ejes clasificatorios.

Desde la perspectiva de Szalai (citado en Bruschini, 2006), el tiempo contabilizado en los estudios de uso del tiempo constituye una “referencia estructurante” de las proporciones del comprometimiento/involucramiento de las personas en toda una serie de actividades diarias. No es, por lo tanto, el tiempo en sí mismo, y sí el uso que las personas hacen de ese tiempo el objetivo de los estudios de uso del tiempo.

Muchos aspectos interesantes de la vida social están asociados con la distribución temporal de las actividades humanas, regularidades de ritmo, duración, frecuencia y orden secuencial. Esto es, ciertas técnicas de recolección de datos permiten el cómputo razonablemente itemizado y mensurado de cómo las personas asignan su tiempo dentro de los límites de un día de trabajo, un fin de semana o cualquier otro período relevante.

La asignación, utilización y significados atribuidos a los usos del tiempo, en tanto sistema de comunicaciones, nos brinda una variable doblemente útil. Por un lado, porque la percepción del tiempo (tiempo de trabajo y tiempo de no-trabajo) está condicionada por la concepción antropológica del trabajo que los agentes poseen, por el

lugar que ocupa en la vida de cada uno y por las expectativas creadas en torno de él. Adicionalmente, permite la comprensión de los procesos de jerarquización de las actividades cotidianas. Es, en este sentido, que la metodología de uso del tiempo o de presupuesto-tiempo se constituye en una herramienta valiosa para dar cuenta de la duración de los diferentes tipos de actividades, sus ritmos y secuencias, así como también, el contexto social en el cual esas actividades son desarrolladas.

3.- Tiempo, desempleo y PTMC

Desde la Modernidad el trabajo asalariado no sólo tuvo la función de proveer ingresos sino que además constituyó la herramienta privilegiada a través de la cual se enlazaron buena parte de las garantías contra las inseguridades. De forma conjunta, supuso la sujeción de los individuos al orden social a través de la interiorización de dispositivos disciplinarios. Tal como señala Polanyi (2006), el mercado de trabajo se constituyó en un “molino satánico” porque su institucionalización extendió el principio de la auto-regulación del mercado al trabajo vivo. Así, la organización social de la vida a través del mecanismo del mercado no sólo tuvo el efecto de neutralizar normativamente la distribución de la mano de obra, sino también el aspecto sistémico de proporcionar una solución a un problema básico de orden social. El desarrollo y consolidación de esta sociedad centrada en el trabajo dependió fundamentalmente de dos variables centrales: crecimiento económico y desarrollo del Estado Social.

En este modelo de sociedad, el trabajo remunerado estable y de jornada completa edificaba una temporalidad que se organizaba de manera cíclica, regular y repetitiva a través de la existencia de prácticas habituales y cotidianas que articulaban la organización de la vida práctica. Esta disciplina orientada por el tiempo de las horas estaba irremediabilmente unida a la relación de trabajo.

Tal como señala Belloni (1986), el tipo de organización social del tiempo que adopta un grupo o una comunidad es indisociable de ciertas condiciones estructurales y, más específicamente, de las formas de organización del trabajo. En este sentido, la introducción del trabajo industrial fue acompañada de una definición más rígida del tiempo y la invención de las tablas horarias. A partir de la Revolución Industrial, un

²⁸ El concepto físico de vector refiere a toda magnitud en la que además del número real que la mide (cuantía) es necesario considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido.

componente importante del valor del trabajo fue calculado en términos de duración. El espacio laboral y la jornada de trabajo delimitada demarcan -de forma material y simbólica- la vida de los trabajadores. Este entramado práctico se articulaba con un horizonte temporal de mediano y hasta de largo plazo, en el cual el esfuerzo personal - que podía ser además, sacrificio- recibía como compensación la posibilidad concreta de una movilidad social ascendente inter e intra-generacional.

Para Thompson (1984), el largo proceso de transformaciones en la noción y percepción del tiempo, que comenzó en la Edad Media, supuso un cambio de enfoque en el tiempo de trabajo, conllevando un pasaje desde el trabajo orientado hacia las tareas de la época preindustrial hacia una nueva situación en la cual el trabajo pasa a ser regulado por el tiempo de las horas. A partir de esta revolución temporal, es el ritmo estandarizado del reloj el que pasa a gobernar la rutina y el tiempo de trabajo.

A partir del siglo XVIII, se intensifica la ofensiva por la consolidación de esa disciplina del tiempo en relación al trabajo, formando parte desde entonces del panorama del capitalismo industrial disciplinado. El trabajo a domicilio no sólo había comenzado a disminuir por razones económicas. El deseo de obtener mayores y más regulares ganancias se acompañaba del deseo de limitar el tiempo dedicado al trabajo: cuando se trabaja en la fábrica, se sabe cuándo se terminará el trabajo. El tiempo que se escapa al patrón, y cuya importancia crece a lo largo de todo el siglo, es un tiempo del que se dispone plenamente y del cual se es propietario. Trabajar fuera de la propia casa es estar plenamente en la casa propia cuando se está en ella. En este sentido, el retroceso del trabajo a domicilio responde a la reivindicación de una vida privada (Prost, 1989).

Siguiendo a Boisard (1984, 1996), podemos señalar que la sociedad industrial, y su intrínseca noción de tiempo, se corresponde con un nuevo “modelo temporal”²⁹, con un modelo temporal específico, el cual consigue imponerse progresivamente al conjunto de la sociedad con la extensión del trabajo asalariado, la urbanización y la difusión de una única hora oficial sobre el conjunto de los territorios nacionales. Este modelo temporal de la sociedad industrial estaría caracterizado por:

²⁹Para el autor el concepto de modelo temporal se define como un método específico de articulación de las cuatro secuencias temporales destinadas a cada una de las cuatro categorías de actividades: alimentación, trabajo remunerado, trabajo doméstico y tiempo de ocio. Cada modelo temporal está asociado con una representación social específica del tiempo que expresa un vínculo -individual y colectivo- particular con el tiempo. Esta forma de entender los modelos temporales permitiría caracterizar los modos históricos de uso del tiempo (Boisard, 1984).

- La ideología del tiempo, es decir la soberanía del tiempo mecánico como valor de uso.
- La centralidad del tiempo de trabajo
- La oposición trabajo-ocio
- La exigencia de precisión basada en la difusión de instrumentos de medida del tiempo, esto es la disciplina temporal
- La rigidez de los repartos temporales de las distintas actividades
- El carácter colectivo de los horarios

Desde la perspectiva del autor, el tiempo industrial es a la vez condición de posibilidad y efecto de la industria. Sin lugar a dudas, la implantación del fordismo-taylorismo, en tanto principio general de la organización de la producción, ha tenido un papel central en este proceso.

Como señaláramos, la sociedad industrial y su -intrínseca- noción del tiempo, a la vez que consagra como hegemónica una noción determinada y específica de trabajo, instaaura un esquema de organización del tiempo que moldea y es moldeado por esa noción de trabajo. Así, el trabajo fijo y a tiempo completo, realizado por los hombres para mantener a sus familias y localizado en grandes empresas del sector industrial o de los servicios, y que supone negociaciones colectivas y una férrea disciplina temporal, coloca a las restantes formas de trabajo en el lugar de “otras”, menos importantes y destinadas a desaparecer.

Desde la perspectiva de Vaiou (1995), la cuestión que se plantea es hasta qué punto esta noción de trabajo ha sido igualmente relevante para a) los países y los lugares en los que el fordismo no ha sido el modo dominante o prevalente de organizar el trabajo y el tiempo. En otras palabras, los lugares en los que las actividades informales y las formas atípicas del trabajo son una parte importante del desarrollo económico y social, y b) para los grupos o personas cuya vida cotidiana no se organiza exclusivamente o principalmente en torno al mercado de trabajo. En este caso se encuentran las mujeres, entre quienes la mayor parte de su tiempo se asocia con el cuidado de otros y con el trabajo no remunerado, y cuya experiencia de trabajo diverge, mucho más que la de los varones, de la noción hegemónica de trabajo. En ambos casos no sólo prevalecen organizaciones del tiempo muy concretas y diferentes, sino que además es posible hablar de experiencias opuestas de estructuración del tiempo entre hombres y mujeres.

Consecuentemente, la existencia de un tiempo dominante no puede ocultar, por un lado, la pluralidad de los tiempos y, por el otro, que las concepciones del tiempo no se expresan uniformemente en los diferentes grupos sociales. Así, a la par del tiempo dominante se despliegan otros tipos de tiempos que no se pueden medir como la forma hegemónica porque son discontinuos, irregulares y no homogéneos. Por otra parte, el tiempo es pensado y experimentado de manera diversa en cada grupo social. Esta diversidad es producto tanto de criterios internos a la estructura simbólica de los grupos sociales como también a las relaciones de jerarquía que presiden una sociedad basada en clases sociales.

De lo anterior es posible desprender varios aspectos de la temporalidad en la sociedad industrial. El primero de ellos está relacionado con la constatación de que el tiempo de trabajo es un tiempo múltiple antes que un fenómeno singular. En este sentido, Bruschini (2006) señala que el trabajo doméstico se caracteriza por la simultaneidad, la multiplicidad y la fragmentación, y por consumir gran parte del tiempo femenino. Todos estos elementos se oponen de forma clara a las características del modelo temporal hegemónico de la sociedad industrial.

El segundo aspecto muestra la necesidad de coordinar múltiples tiempos: tiempo de trabajo remunerado, ocio, escuela, comidas, compras, trabajo voluntario, etc. La interconexión de los diferentes tiempos en la vida cotidiana permite observar, como tercer aspecto, que algunos tiempos son claramente privilegiados y juzgados como más importantes que otros. Este tratamiento diferencial de los tiempos se torna visible en la secuencia o prioridad de ciertos tiempos y en los compromisos en la asignación del tiempo que deben ser alcanzados en el cotidiano.

Sin embargo, no sólo el tiempo gobernado por los imperativos del mercado tiene prioridad por sobre aquellos tiempos que se constituyen por fuera de la economía de las relaciones asalariadas, sino que el dominio del tiempo del reloj llega a permear con sus significados y sentidos a todas las esferas de la vida. Los elementos de rigidez heterodeterminados presentes en la configuración del trabajo reproductivo, y señalados por Del Re (1995), constituyen un ejemplo de esto. Para la autora, la rigidez no se da solamente por las necesidades de los sujetos reproducidos sino que, adicionalmente, es dictada por los horarios o la estructura de las instituciones de reproducción social, por los tiempos de las ciudades, por el tiempo del trabajo asalariado, y por la cantidad y

calidad de los servicios ofrecidos por la reproducción socializada y por el hecho de que estos servicios tengan unos tiempos más o menos rígidos.

Desde el último cuarto del siglo XX se vienen sucediendo profundas modificaciones estructurales producto de la conjunción de cambios sustantivos en los modos de producción junto al debilitamiento y virtual extinción de las protecciones organizadas por el Estado de Bienestar.

Las nuevas formas de organización de la producción han dado lugar a sustantivas modificaciones en las formas de organización del tiempo de trabajo. Las mismas introducen verdaderos desafíos tanto en lo que respecta a la gran reducción en los avances por el control del tiempo de trabajo, como en sus efectos sobre el desempleo o el excedente de fuerza de trabajo. El estado de la relación capital-trabajo se expresa a partir de la proliferación de las formas de subutilización de la fuerza de trabajo, la flexibilización de los tiempos de trabajo, la intensificación de los ritmos de trabajo y la precariedad laboral. Es en este sentido que las nuevas maneras de organizar el tiempo, y en especial el tiempo de trabajo, se constituyen en una de las características distintivas del nuevo capitalismo. Concomitantemente, estas transformaciones se convierten en verdaderos instrumentos para el disciplinamiento de la población tanto al interior de los procesos directos de producción como, en sentido más amplio, en el conjunto del proceso social de producción.

Estas transformaciones ponen en entredicho varios aspectos de la temporalidad vinculada a la sociedad industrial en los cuales se basaban los equilibrios sociales y las formas de vida colectiva. Así, las nuevas formas de organización del tiempo de trabajo posibilitan en algunos casos concentrar el trabajo sobre una fracción limitada del día, liberando franjas de tiempo bastante amplias para otras actividades; pero en otros casos las jornadas de trabajo a tiempo parcial actúan dificultando el desarrollo de esas actividades. Consecuentemente, el tiempo liberado del trabajo no es, necesariamente, un tiempo liberado de toda dificultad en la medida en que suscita problemas organizativos complejos.

A su vez, el tiempo libre de los asalariados es crecientemente invertido en actividades de ocio que demandan un fuerte desarrollo de todo un sector de servicios (deportivos, culturales, de transporte, de comercio, hotelería, gastronomía), el cual promueve -de forma casi paradójal- la instauración de trabajos nocturnos, durante los fines de semanas, períodos de vacaciones, etc. Adicionalmente, la relación con el

tiempo se individualiza a través de los horarios variables y atípicos, y la flexibilización y la desincronización esfuman las fronteras entre las grandes secuencias colectivas de actividades.

Desde la perspectiva de Adam (1995), las personas encuentran grandes dificultades en coordinar los elementos flexibles e inflexibles de sus vidas laborales, familiares, amigos, ocio, actividades culturales, compromiso político, etc. Con la flexibilización y con patrones de trabajo poco predecibles se gasta mayor tiempo en la sincronización de las actividades. Así, lo que para los empleadores es una cuestión de racionalidad y eficiencia, deviene para el trabajador en una carga insoportable por el hecho que los trabajadores no operan exclusivamente en el tiempo mecanizado, mercantilizado y racionalizado del empleo industrial, sino en la complejidad de los tiempos que deben ser sincronizados con los otros tiempos significativos y con la sociedad en la cual estos empleados viven y trabajan.

La flexibilidad se manifiesta en la vida de los trabajadores en el paso de un alto grado de control sobre su tiempo a un creciente aumento de la impredecibilidad del tiempo de trabajo -múltiple complejidad, interpenetración, constitución simultánea-. En adelante, su tiempo de trabajo se rinde, de forma directamente sensible, a las fluctuaciones del mercado, dando lugar a una operación de desencaje entre el tiempo de trabajo y el tiempo de las organizaciones, y de los ritmos colectivos de las actividades públicas y familiares, erosionando las actividades comunales, tanto las de dominio público como privado. Esta caracterización le permite a Adam (1995) retomar la diferenciación realizada por Elchardus entre flexibilidad para el trabajador y flexibilidad del trabajador. Esta idea da cuenta del impacto que las transformaciones en el mercado de trabajo tienen respecto a los mecanismos de disciplinamiento de la mano de obra, y a las formas y maneras en que producen cambios en los ordenamientos temporales de grupos sociales específicos.

La relación con el tiempo se individualiza a través de los horarios variables y atípicos. La necesidad de exactitud y precisión es el corolario obligatorio de este proceso. En este sentido, la flexibilización y la desincronización esfuman las fronteras entre las grandes secuencias colectivas de actividades. La adaptación al tiempo deja de ser dictada enteramente por normas colectivas centralmente impuestas. Los rígidos límites entre trabajo/ocio o trabajo/no-trabajo se desdibujan y la tradicional separación

entre la casa y el trabajo entra en proceso de desgaste a medida que el trabajo pasa a invadir el espacio doméstico.

Asimismo, es posible señalar que el desempleo también tiene profundas consecuencias sobre el tiempo vivido por las personas, dando lugar a corrimientos que desorganizan los ritmos y destruyen las referencias temporales (Bourdieu, 1979, 1999; Demazière, 2005, 2006; Jahoda, 1987; Lazarsfeld, Jahoda y Zeisel, 1996). Así, cualquier perspectiva temporal sobre las dinámicas de la división social de las actividades en nuestras sociedades no debe omitir dos elementos: el deterioro del trabajo y el desempleo masivo (Bouffartigue, 2007, 2012).

En Argentina, el proceso de reestructuración social desarrollado a partir de mediados de la década del 70 supuso la reestructuración del aparato del Estado, transformaciones profundas en la matriz productiva y en el mercado de trabajo, así como también un aumento sin igual de las formas de fragmentación y vulnerabilidad social. Asimismo, el quiebre del modelo conllevó pérdidas intangibles. La pérdida de la posibilidad de dominio sobre el tiempo constituye uno de los rasgos centrales de este proceso.

La profundización de este modelo a partir de 1991 con la aplicación del Plan de Convertibilidad introdujo cambios profundos en la legislación laboral (reduciendo la estabilidad del empleo, promoviendo el empleo legal precario, bajando los costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresariales) y dio lugar a una nueva generación de políticas sociales que buscaba hacer frente a los elevados índices de pobreza y de desocupación y que se articulaba de manera diversa con las políticas pre-existentes (Martínez Franzoni y Voorend, 2008).

Estos programas, denominadas de forma genérica programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC), suponen auxilios monetarios asistenciales y operan con condicionalidades y, en algunos casos, con contraprestaciones. Es decir, la entrega del beneficio tiene como contrapartida el cumplimiento, por parte del/los beneficiarios, de ciertos requisitos (Cohen y Franco, 2010). Sin embargo para el caso argentino, a pesar de introducir una serie de obligaciones y prescripciones sobre los beneficiarios, no contemplan la temporalidad social. Es justamente en este punto crítico en el cual se centrará nuestro análisis: en la incidencia que tienen los PTMC en el uso del tiempo de las poblaciones beneficiarias, a través del estudio del caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJHD).

El diseño del esquema de contraprestaciones de dicho Programa muestra de forma clara que el lugar asignado al trabajo es el de constituir un mecanismo para garantizar las necesidades materiales y una vía para el reconocimiento y la recreación de las identidades individuales y colectivas. El PJJHD incorpora, así, el valor que se apoderaría de toda la sociedad durante el siglo XIX y que otorga al trabajo el lugar de valor moral absoluto, la supremacía del trabajo respecto del ocio y el temor a perder el tiempo. En este esquema, el tiempo fue un ingrediente poderoso en la producción de ese resultado (Sennett, 2003). Sin embargo, en el PJJHD sólo está presente uno de los elementos de esa ecuación.

Asimismo, las contraprestaciones introducidas por el PJJHD actúan como una “madeja de prescripciones y obligaciones” (Demazière, 2006, 2006) que adquiere un peso considerable en el ordenamiento temporal de los beneficiarios. El Estado, a través de las políticas que implementa, incide en las actividades de los beneficiarios, constituyéndose de esta manera en un actor clave en la vida cotidiana de los desamparados (Auyero, 2013). El tiempo, en tanto revelador y estructurador de las actividades, se constituye en una dimensión clave para proporcionar evidencia empírica a este tipo de problemática. Sin embargo, tanto el diseño del esquema de contraprestaciones como las evaluaciones realizadas sobre el desempeño del mismo dejan en evidencia la ausencia de toda consideración sobre la incidencia de este elemento en la temporalidad de los beneficiarios.

Capítulo 2: Los programas de transferencias monetarias condicionadas en Argentina y el surgimiento del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados

1.- El contexto socioeconómico nacional

Durante la década del 60 comienzan a experimentarse en Argentina los primeros síntomas de agotamiento del modelo de acumulación por sustitución de importaciones que había estado vigente a partir de 1930. Por otra parte, el shock petrolero del 73 y la caída de las tasas de ganancias de las principales economías mundiales marcan el fin de la economía regulada y la expansión de un mercado financiero abierto, procesos sustentados desde el plano ideológico por el avance planetario de la ideología monetarista. A partir de entonces, el déficit del sector público intentará ser contenido a través del desmantelamiento del Estado de Bienestar (Nun, 1987).

El modelo de acumulación “aperturista” que había comenzado a esbozarse durante el gobierno de la dictadura militar (1976-1983), se consolida o “exacerba” (Torrado, 2007) a partir de 1991 con la aplicación del denominado Plan de Convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem. Para este momento, la situación internacional favorable se conjuga con la “victoria” de un proyecto político interno aperturista de largo alcance, dando lugar a cambios de enorme rapidez y drástica profundidad que crearán las condiciones para la intensificación del modelo de acumulación surgido en 1976. Entre los principales rasgos del período inaugurado en 1991 pueden señalarse:

- a) El establecimiento, a partir de la sanción de la Ley de Convertibilidad, de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. La tasa de cambio con un peso apreciado cumplió un papel central en la medida en que encareció el trabajo e impulsó las importaciones de todo tipo. Para Neffa (2012) esta paridad cambiaria implicó de hecho la dolarización de la economía y la forma moneda paso a ser la forma institucional dominante en lo alto de la jerarquía, articulada con la inserción en la división internacional del trabajo y con las formas concentradas de competencia en el

mercado, quedando el Estado y la relación salarial en condición de formas institucionales subordinadas y dominadas.

- b) La desregulación de la economía y los mercados. En este sentido, se estableció una amplia libertad para el movimiento de capitales y divisas y una alta tasa de interés en pesos, con una menor intervención del Banco Central.
- c) Una amplia e indiscriminada apertura externa que buscó atraer al capital externo y estimuló el endeudamiento externo -público y privado- al mismo tiempo que la salida de capitales en busca de mayor seguridad en momentos de crisis. Asimismo, una importante reducción en los aranceles y la remoción de la mayoría de las barreras no tarifarias favorecieron las importaciones.
- d) Las privatizaciones de las empresas públicas se llevaron adelante bajo los argumentos de la escasa rentabilidad y/o el déficit crónico, el deficiente funcionamiento, la obsolescencia y el retraso tecnológico y organizacional, las sospechas de corrupción, así como también la baja productividad y la baja calidad de los servicios. Las mismas alcanzaron a las empresas públicas de servicios de uso económico masivo y producciones estratégicas, tales como teléfono, gas, electricidad, agua y saneamiento, transporte ferroviario, subterráneo y aéreo, petróleo, puertos, aeropuertos, bancos provinciales y municipales, seguros y reaseguros, siderúrgica, corredores viales, etc. (Hintze, 2007).
- e) Una profunda reforma laboral modificó las relaciones salariales precedentes dejando sin efecto viejas conquistas laborales y derechos adquiridos por los trabajadores. La re-estructuración de la legislación se orientó a reducir la estabilidad en el empleo, promover el empleo legal precario, bajar los costos de contratación y de despido y aliviar las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresariales. En este sentido, es fundamental hacer referencia a dos reformas de gran magnitud: la creación del sistema privado de jubilaciones de capitalización -en paralelo con el sistema estatal- y la privatización de la prevención de los riesgos profesionales. Asimismo la negociación colectiva se descentralizó pasando del nivel

de la rama y el sector hacia la empresa y el establecimiento (Neffa y colaboradores, 2011; Neffa, 2012).

- f) Cambios en la estructura y en las formas de intervención del Estado nacional y los Estados locales. Este proceso, denominado “retirada del Estado”, fue caracterizado - de forma genérica- como el reemplazo de las funciones de provisión social por las funciones disciplinarias³⁰. Se produce un fuerte cambio en las reglas de juego precedentes, en la medida que se postula la primacía del mercado sobre el Estado. El Estado resigna, de esta forma, su papel en la promoción del desarrollo. Bajo el impulso y la presión de los organismos de crédito internacionales se adoptan sucesivas reformas del Estado buscando disminuir sus funciones, su ámbito de acción y reducir el déficit fiscal, a través del achicamiento de su planta de personal (estimulando los retiros voluntarios, el congelamiento de los puestos estables dejados vacantes por las jubilaciones, retiros y renunciaciones, cubriéndolos con personal contratado de manera transitoria y pasantes universitarios); de la limitación de funciones tradicionales del Estado en calidad de productor, prestador de servicios públicos, regulador y planificador; de la descentralización y federalización del gasto público social; y de la moderación o el freno de los aumentos salariales, sobre todo de los empleados del sector público (Neffa y colaboradores, 2011).
- g) Cambios en las políticas sociales debido a las transformaciones en sus formas de financiamiento, funcionamiento y administración, en el régimen de acceso y el tipo de beneficios con la finalidad de reducir el gasto público y abrir al sector privado nuevos campos de actividad –educación, salud, obras sociales, jubilaciones y pensiones, riesgos del trabajo, etc- (Hintze, 2007).

³⁰Una serie de autores (Grimson, 2003; Trouillot, 2001) señalan que ésta caracterización genérica de la reingeniería del Estado no resulta del todo adecuada para dar cuenta de las órbitas en las que el Estado transformó su rol o se retiró y de las formas que tomó esa retirada. En este sentido, estos postulados desconocerían que los procesos no se han desarrollado de forma unilateral, sino que los cambios son múltiples y a veces también contradictorios. En Argentina, Danani y Lindenboim (2003a) sostienen una tesis similar al afirmar que las expresiones “retirada del Estado” y/o “disminución o desaparición de la intervención del Estado” sustraen del debate y de la comprensión la monumental labor de construcción cotidiana de una nueva sociedad, que sólo pudo llevarse a cabo por y desde el corazón mismo del Estado.

- h) Agravamiento de la vulnerabilidad externa de la economía derivada de las restricciones que impone al crecimiento la imposibilidad de generar un superávit de la balanza de pagos que permitiera hacer frente a los exorbitantes servicios de la deuda externa en continua expansión.

La consolidación de este nuevo modelo de acumulación traerá aparejadas fuertes consecuencias en términos de impactos sobre el sistema productivo y el mercado de trabajo, así como también un drástico aumento de las inequidades sociales. Hacia 1995 el denominado Efecto Tequila marca el inicio del fin. Es entonces cuando el modelo signado por una fuerte ligazón con el mercado mundial comienza a mostrar claras señales de agotamiento.

Con la llegada al gobierno de Fernando de la Rúa en 1999 no se modifican los principios sustantivos del modelo, para ese entonces la crisis económica se había agudizado hasta que finalmente, y en el marco de una profunda protesta social, la declaración de default y la devaluación del peso darán por tierra con ese período.

Los siguientes cuadros (Nº 4 y 5) evidencian, por un lado, el deterioro sostenido de los indicadores relativos al mercado de trabajo que viene desarrollándose desde la década del 70 -los cuales alcanzan su pico máximo con la crisis de 2001-, y por otro, el impacto de ese profundo deterioro en la ampliación de los segmentos poblacionales que ven deteriorarse sus condiciones de vida, lo cual se refleja en la magnitud de los índices de pobreza e indigencia.

Cuadro N° 4: Principales indicadores del mercado de trabajo
Total aglomerados urbanos³¹

	Actividad	Empleo	Desocupación abierta	Subocupación horaria
May-75	40,0%	38,6%	3,5%	5,3%
May-80	38,3%	37,3%	2,5%	5,8%
May-85	37,9%	35,5%	6,3%	7,5%
May-90	39,1%	35,7%	8,6%	9,3%
May-95	42,6%	34,8%	18,4%	11,3%
May-00	42,4%	35,9%	15,4%	14,5%
May-01	42,8%	35,8%	16,4%	14,9%
May-02	41,8%	32,8%	21,5%	18,6%
May-03	42,8%	36,2%	15,0%	18,8%
2do Trimestre-04	46,2%	39,4%	14,8%	15,2%
2do Trimestre-05	45,6%	40,1%	12,1%	12,7%
2do Trimestre-06	46,7%	41,1%	11,1%	12,0%

Fuente: EPH-INDEC

Cuadro N° 5: Pobreza e indigencia
Total aglomerados urbanos

	May-01	May-02	May-03	1º Semestre-04	1º Semestre-05	1º Semestre-06
Bajo la línea de pobreza						
- Hogares	26,2%	41,4%	42,6%	29,8%	24,7%	19,2%
- Personas	35,9%	53,0%	58,4%	40,2%	33,8%	26,9%
Bajo la línea de indigencia						
- Hogares	8,3%	18,0%	17,9%	10,7%	8,4%	6,3%
- Personas	11,6%	24,8%	26,3%	15,0%	12,2%	8,7%

Fuente: EPH-INDEC

Desde la perspectiva de Boyer (2002), la crisis argentina es una crisis claramente sistémica ya que en la misma juegan muchos factores y se refuerzan mutuamente los unos a los otros para explicar por un lado el aparente éxito y la recuperación económica de inicios de los 90, y luego el cambio total de este factor en un círculo que pasó de virtuoso a vicioso. En este

³¹ Es importante señalar que en las mediciones del INDEC las personas que tienen PJJHD u otro plan similar “sólo se consideran ocupadas si realizan una contraprestación laboral por el mismo. En caso de recibir un plan sin realizar un trabajo se consideran inactivos o desocupados según las definiciones habituales” del organismo (INDEC).

sentido, la especificidad más fuerte de la crisis Argentina estaría dada por el derrumbe en simultáneo de la solvencia de los bancos y del régimen cambiario, junto con el aumento de la desocupación y la pauperización y una pérdida considerable de la legitimidad del gobierno y del Estado.

1.1.- El giro en las políticas sociales

Según Isuani (2008) los tres principios básicos que estructuraron los estilos de intervención estatal en los procesos de distribución en Occidente son la discrecionalidad, la contribución y la ciudadanía. Estos principios o enfoques, nacen en diferentes momentos históricos, pero suelen coexistir cual capas geológicas en muchas sociedades contemporáneas. Para el autor, la política social argentina -aun con algunas particularidades- sigue este esquema de evolución general de las políticas sociales occidentales.

Para el autor, hacia mediados del siglo XX, en nuestro país funcionaban simultáneamente los tres principios básicos en materia de política social. Esto es, una acción discrecional de atención a pobres vehiculizada por la labor de las instituciones de la Sociedad de Beneficencia; un extendido sistema público de educación básica moldeado sobre el principio de ciudadanía; y un creciente sistema de seguridad contributiva (o bismarckiana) destinado a los trabajadores formales. En tanto, el periodo entre la posguerra y la década del 90 se caracterizó por la masificación y consolidación del modelo bismarkiano, en coexistencia con políticas discrecionales hacia los pobres, el desarrollo de un sistema universalista de educación pública y un nuevo sistema universalista de salud pública.

En una dirección similar Barbeito y Lo Vuolo (1992) consideran que el sistema de protección social en nuestro país se institucionalizó como un “régimen híbrido” con un fuerte componente corporativo-meritocrático, el cual convivió con influencias propias del régimen socialdemócrata. Así, mientras el primero se basaba en un acuerdo distributivo con eje en la relación de trabajo, el segundo elemento conllevó el establecimiento de instituciones con cobertura universal, fundamentalmente en el sector educación y en menor medida en salud.

Esta trayectoria se ve profundamente transformada a partir de la década del 90. La mayoría de los autores (Acuña, Kessler y Repetto, 2002; Bonvecchi y Smulovitz, 2008; Filguera, 1997; Isuani, 2008) acuerda en que los rasgos centrales de esta etapa son la descentralización de los servicios universales y de la operatoria de programas nacionales, la privatización/desregulación de parte de la seguridad social y la focalización en materia de combate a la pobreza. Los argumentos esgrimidos para llevar adelante estos cambios se centraban en la necesidad de corregir inequidades distributivas, favorecer la eficiencia en la asignación de recursos, y promover la incorporación y la participación ciudadana en el diseño, gestión y evaluación de los programas sociales (Bonvecchi y Smulovitz, 2008).

En Argentina, el proceso de descentralización en materia de políticas sociales había comenzado ya a fines de la década del 70, fundamentalmente en los subsectores de educación y salud. En el transcurso de la década del 90 se produjo la transferencia de los servicios de educación media a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en materia de salud se completó la transferencia de los últimos hospitales nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que el Estado nacional impulsó la figura del “Hospital Público de Autogestión”. Durante este proceso el gobierno central mantuvo o incluso incrementó levemente la proporción del PBI que administraba, pero también creció significativamente el gasto de los gobiernos locales. Fueron entonces las provincias, y en mucho menor medida los municipios, los que acapararon el crecimiento del gasto en salud y en educación en el periodo (Isuani, 2008). Desde la perspectiva de Barbeito y Lo Vuolo (1998), el proceso de descentralización o desconcentración formó parte de la estrategia política de debilitamiento de las políticas más universales y generó competencia entre las distintas jurisdicciones del sector público, debilitó a los grupos de interés aislándolos política y geográficamente, trasladó el ajuste a las provincias y municipios sin transferir recursos y diluyó la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los problemas sociales, traspasándolos a los gobiernos provinciales y municipales.

Un segundo rasgo de la política social en la década del 90 fue la privatización de parte de la seguridad social. La reforma previsional y el surgimiento de un sistema de capitalización que

coexistió con un sistema de reparto reformado, la implementación de las aseguradoras de riesgos del trabajo y la desregulación de las obras sociales constituyen las transformaciones más relevantes en ese sentido. A estos cambios es necesario sumarle el proceso de derivación de responsabilidades en organizaciones de la sociedad, tales como las ONGs y la iglesia católica. Desde la perspectiva de Svampa (2005) este proceso supuso la incorporación de forma activa a las organizaciones de base territorial a la puesta en marcha de las políticas sociales. Asimismo, algunos autores consideran que el aumento del gasto de bolsillo de los individuos en servicios de salud y educación podría ser considerado otro indicador de este fenómeno.

El argumento central a favor de la focalización sostenía que el modelo de política social instaurado a partir de la Segunda Guerra Mundial no había tenido la capacidad de atender a los sectores más pobres. En consecuencia, se postulaba que para alcanzar ese objetivo se debía remodelar el edificio de la política social abandonando el enfoque de la homogeneidad que no discrimina la población objetivo de un determinado programa social y adoptar un enfoque nuevo que segmenta a dicha población de acuerdo a sus carencias. Para Andrenacci (2008) cualquier sistema de política social es focalizado, en tanto todos establecen una frontera entre quienes pueden acceder al beneficio y quienes no, por distintas razones. En tanto, el problema de la focalización neoliberal se centraría en tratarse de una focalización sistémica; es decir, cuando lo que se focaliza es todo el conjunto de políticas sociales y lo que se intenta es que toda política social se oriente a la pobreza, cambiando la función de integración social por la función asistencial. En este marco, los programas sociales de transferencias de ingresos no contributivas para el alivio a la pobreza, constituyen una modalidad relativamente nueva en la política social argentina, ya que se desarrollan fundamentalmente como respuesta a la crisis de 2001-2002.

Este conjunto de reformas profundizaron el carácter estratificado de aquellos servicios que ya presentaban este rasgo, incrementaron la importancia de las políticas focalizadas y aumentaron la inequidad en los servicios prestados en forma universal (Bonvecchi y Smulovitz, 2008; Levín, 2013) a la vez que derivaron en la territorialización de la ayuda social (Merklen, 2005; Svampa, 2005). Este proceso contuvo en su interior un exponencial aumento de los niveles de dependencia por parte de aquellos sectores excluidos (tanto del empleo como de los sistemas

de protección social) de la obtención de recursos estatales para su reproducción material y cotidiana. Mientras que las organizaciones de base local, territorial y comunitaria se constituyeron, así, en espacios de “intermediación”, en espacios de articulación entre la lejanía estatal y la dependencia de sus recursos por parte de los sectores populares (Merklen, 2005).

En este sentido, y como plantea Wacquant (1997), el estudio del rol del Estado en relación a los sectores populares deberá incluir: a) todos los niveles del aparato de gobierno, así como las estrategias y prácticas que hacia él lleva a cabo la población, b) toda la gama de actividades estatales que afectan la estructuración socioespacial de la desigualdad y, finalmente, c) lo que la autoridad pública hace y lo que deja de hacer, porque el Estado moldea la marginalidad urbana no sólo por acción sino también por omisión.

Es en este marco, que deben ser comprendidos los rasgos centrales que adquiere la implementación del mayor PTMC argentino de la época.

2.- Los antecesores del PJJHD: los programas de empleo transitorio de la década del 90

Tal como fue señalado, la década del 90 se caracterizó por nuevo ordenamiento legislativo que introdujo profundas reformas en el ámbito laboral. Esta nueva legislación se orientó a promover contrataciones a tiempo determinado y a tiempo parcial, contratos de aprendizaje y a prueba, posibilitó que se pudieran acordar por convenio colectivo de trabajo superaciones a las restricciones tradicionales, de modo que se establecieran jornadas máximas sobre la base de promedios. Asimismo, y en virtud de la nueva legislación se articuló el desarrollo de toda una serie de programas de emergencia ocupacional implementados a partir de ese momento.

En efecto, la *Ley Nacional de Empleo* (Nro. 24.013) de 1991 incorporó nuevas opciones de contratación al régimen de contrato de trabajo en nuestro país debido a que introdujo la modalidad de contratos promovidos por tiempo determinado. Esta ley constituyó el instrumento legal que permitió la instalación de formas de flexibilización de entrada al mercado de trabajo

por medio de la inclusión de las modalidades de contratos promovidos. La ley creó también el Consejo Nacional del Salario, Empleo y la Productividad y el Fondo Nacional del Empleo, el cual se constituyó con el objetivo de financiar el Seguro de Desempleo y los diferentes programas implementados.

Con posterioridad a la promulgación de la ley y hasta el fin del segundo mandato de Carlos Menem se financiaron 41 programas (Neffa, 2011b) pocos de los cuales fueron de gran magnitud. Entre los programas implementados se puede mencionar el Programa Intensivo de Trabajo (PIT), el Programa de Entrenamiento Ocupacional (PRENO), el Programa de Asistencia Solidaria (PROAS), el PRIDIS (Programa Interinstitucional de Interés Social) y el PROCOPA (Programa de Empleo Coparticipado) (Golbert, 1998).

De los programas ejecutados en este período, es importante resaltar el Programa Trabajar (PT) implementado en 1996. El mismo se constituyó en el programa paradigmático de la década del 90 por tres características esenciales: por el tiempo que estuvo en marcha, porque beneficiaba a un número mayor de desocupados que los demás programas y porque se estableció por medio de una nueva relación entre el gobierno y el movimiento de desocupados (Del Valle, 2008). Existieron tres versiones del PT, el primer PT surgió en 1996, luego desde 1997 hasta 1998 se desarrolló el PT II y por último, entre 1998 y 1999 el PT III. El objetivo de este programa, en sus tres versiones, era brindar ocupación transitoria a desocupados en condiciones de pobreza que no estuvieran recibiendo otro beneficio. La ocupación transitoria con la que los beneficiarios debían contraprestar por el subsidio recibido era con trabajos en obras de infraestructura social y asistencia comunitaria con una duración de tres a seis meses.

Los proyectos eran ejecutados a través de organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y también ONGs. Desde la perspectiva de Neffa (2011b), el involucramiento de los poderes locales, de la sociedad civil y/o de los sindicatos en la ejecución del programa se fundamenta en la desconfianza existente sobre la burocracia estatal. El MTEySS financiaba las transferencias que percibían los beneficiarios, mientras que los ejecutores eran quienes proveían

los materiales para la concreción de las obras³² (Sala, Golovanevsky y Ramínez, 2001). El subsidio consistía en una prestación mensual de \$200 (que en ese momento eran iguales a U\$S200), además tenían asistencia sanitaria y cobertura de riesgos. Desde su primera implementación el PT llegó a cubrir casi el mismo número de beneficiarios de los programas anteriores, este número se incrementó hasta el millón cien mil beneficiarios en 1998. El mismo coexistía con otros programas como el Programa de Servicios Comunitarios.

Según Grondona (2011) el PT fue señalado por el Banco Mundial como el primer programa en Argentina que incorporaba los elementos del esquema del *workfare*. Las políticas de *workfare* refieren a un estilo neoliberal de gobierno de las poblaciones, en el marco de una tendencia a sustituir la seguridad social por políticas de asistencia a la pobreza que “activan” a los sujetos y los “acercan” al mercado de trabajo³³ (Grondona, 2011). En este sentido, el PT se trataba de un programa que requería que los beneficiarios, como contraprestación por la asistencia recibida, trabajasen o se involucrasen en sistemas de entrenamiento, capacitación o intermediación laboral.

En términos generales, los programas de emergencia ocupacional o programas de fomento del empleo implementados durante este período se dirigieron al sector público y al sector no mercantil de la economía, fueron implementados por cortos períodos de tiempo y los ingresos percibidos por los beneficiarios fueron muy bajos y salvo en aquellos pocos programas que específicamente otorgaba alguna cobertura en salud, no otorgaban el derecho de acceder a los bienes y servicios de la Seguridad Social. Los puestos de trabajo creados por estos programas fueron de carácter temporario y de naturaleza precaria. En este sentido, los programas dirigidos a los desocupados no estuvieron destinados a crear puestos de trabajo genuinos y se redujeron a constituir un aporte a la sobrevivencia de los beneficiarios y sus familias. Eran programas que proponían el uso intensivo de la fuerza de trabajo a partir del principio del atraso tecnológico

³² Tanto Grondona (2011) como Kessler y Roggi (2005) señalan que las contraprestaciones del PT consistieron en un “como si” o un “simulacro” ya que en muchos casos los beneficiarios debían cumplir con la asistencia aun cuando no realizaran tareas de ningún tipo, en parte porque el programa carecía de los cuantiosos recursos económicos necesarios para financiar los proyectos. Este “simulacro” debía sostenerse en virtud de que resultaba inaceptable otorgar un beneficio a cambio de nada.

como solución al problema de la desocupación (Grassi, 1997).

Diferentes autores han señalado que el incremento de los programas en época electoral y la forma de selección de los beneficiarios hacía sospechar de un uso clientelístico de los mismos (Golbert, 1998; Neffa, 2011b).

En este período también se implementaron numerosos programas de capacitación laboral, de los cuales se puede destacar el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva, el Proyecto Joven, el Programa de Capacitación y Orientación Laboral, Talleres Protegidos de Producción y Programas de Capacitación para Apoyar el Empleo, entre otros. Estos programas podrían encuadrarse dentro de los denominados *learnfare* y *trainingfare* que actúan complementando al *workfare* y buscan brindar las herramientas necesarias a las personas para que luego de la capacitación puedan conseguir empleo de manera autónoma y con mejores condiciones en materia de calificaciones.

Con el gobierno de la Alianza (1999-2001) se pusieron en marcha nuevos programas, los cuales adoptaron otra configuración (Neffa, 2011b). Los mismos pusieron un énfasis mayor en promover los emprendimientos productivos y la empleabilidad de los beneficiarios. Entre los programas más importantes del periodo se pueden señalar el Programa de Emergencia Laboral (PEL), Desarrollo y Empleo Local (DEL), Programa Crear Trabajo, el Programa Redes y el Programa Especial de Capacitación Laboral.

El primero de ellos, el PEL, se trataba de consorcios productivos locales y autoempleos productivos manejados por municipios y ONGs autorizadas. El subsidio consistía en una ayuda no remunerativa de \$200 para los consorcios y de \$160 para los autoempleos productivos.

3.- Crisis, emergencia nacional y el surgimiento del PJJHD

Con la renuncia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, finaliza el gobierno de la Alianza y se inaugura un periodo signado por la inestabilidad político-institucional y por

³³ Volveremos, más detenidamente, a este punto cuando analicemos los elementos del esquema del *workfare*

cambios en las reglas de funcionamiento de la economía. En los doce días que transcurren desde esa fecha hasta el último día del año 2001 se suceden tres presidentes, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño, todos ellos de extracción peronista. Finalmente, y tras la renuncia de Camaño, la Asamblea Legislativa designa como presidente a Eduardo Duhalde, la “figura más relevante del peronismo bonaerense” (Quiroga, 2010), hasta el 10 de diciembre de 2003 para cumplir con el mandato inconcluso del presidente de la Alianza³⁴. Desde la perspectiva de Quiroga (2005) esa situación revelaba las dificultades para constituir un gobierno de crisis y asegurar estabilidad después del colapso institucional. Este período marca también el abandono del régimen de Convertibilidad y de la relación peso-dólar uno a uno. Las consecuencias centrales de este proceso fueron la devaluación, la pesificación asimétrica y la declaración de default, que dejó a Argentina en condiciones desventajosas frente a los sistemas de crédito internacionales³⁵ (Neffa, 2012).

Para Ansaldi (2003), las crisis son fenómenos históricos usuales y sin embargo la conjunción o soldadura de crisis económica, social y política no lo es tanto. Es, justamente esta soldadura de crisis la idea que caracterizaría la situación argentina hacia 2001. Desde la perspectiva del autor en una situación de crisis se expresan contradicciones y rupturas, tensiones y desacuerdos, de una intensidad tal que los actores -individuales y colectivos- vacilan respecto de las decisiones a tomar, el camino a seguir y las acciones a realizar, al tiempo que las normas, las reglas y las instituciones hasta entonces existentes dejan de ser observadas y reconocidas, en mayor o menor medida, llegando, en el límite, a ser concebidas como un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, al tiempo que las nuevas propuestas no terminan de ser elaboradas o, estándolo, asumidas como eficaces y/o pertinentes. Y esta ambigüedad e irresolución ponen de relieve a ese componente fundamental de toda crisis que es el tiempo. En tiempos de crisis, en

presentes en el PJHD.

³⁴ Duhalde termina entregando su mandato seis meses antes producto de la presión social derivada de la represión a una movilización del movimiento piquetero que provocó dos muertes en el puente Pueyrredón, en junio de 2002 (Quiroga, 2010).

³⁵ El efecto inmediato del salto en el tipo de cambio fue una brutal transferencia de ingresos en detrimento de los trabajadores, quienes vieron reducido su salario real aproximadamente un tercio por el efecto del aumento de los precios internos. El empleo sufrió una fuerte caída y la pobreza creció respecto a su nivel de fines de 2001. Pese a

efecto, quienes las viven experimentan sensaciones confusas derivadas de una comparación entre el presente, el pasado y el futuro, comparación en la cual el presente es percibido como miseria e incluso como drama o tragedia -frente a un pasado con certezas que se ha perdido y que muchos rememoran como mejor de lo que fue o prescindiendo de las razones que provocaron la crisis y, por ende, el presente-, al tiempo que el futuro aparece como angustia o incertidumbre.

Siguiendo la conceptualización de O'Donnell (1982), Basualdo (2001) propone interpretar la crisis argentina a través de la noción de triple crisis (o tres crisis): crisis de gobierno, crisis de régimen y crisis de acumulación³⁶. En este sentido, el agotamiento del régimen de Convertibilidad marca una crisis del patrón de acumulación, junto a una crisis de gobierno, en tanto se registra un relevo de los funcionarios de mayor rango institucional, y una crisis de régimen, ya que los distintos sectores intentan modificar los criterios de representación³⁷.

Hacia fines de 2001 e inicios de 2002 se conjugaban en nuestro país una amplia variedad de fenómenos entrelazados: la fase terminal de un modelo económico asociado a la Convertibilidad, el agravamiento de todos los indicadores sociales y la eclosión de un largo proceso de creciente desencanto y hastío de la población respecto del funcionamiento de la política. Sin lugar a dudas, la incapacidad del sistema político de dar cuenta de las necesidades de la sociedad conduce a un proceso de deslegitimación (Abal Medina (h), 2003; Quiroga, 2010) o de pérdida de legitimidad (del Tronco Paganelli, 2005) de la política. El poder supone siempre determinado consenso o determinada confianza social. Esta relación es la que se ve puesta en cuestión a partir de la disconformidad de los ciudadanos que se sienten mal representados por sus gobernantes.

este sombrío panorama, la devaluación también sentó las bases para un nuevo periodo de acumulación y crecimiento basado en un patrón diferente (CENDA, 2010).

³⁶ Esta forma de entender la crisis argentina también fue adoptada por Ansaldi (2003). Para el autor la crisis argentina de 2001 constituye otra de las exacerbaciones producidas dentro de la crisis orgánica iniciada en 1930 y que para 2003 continuaba sin solución.

³⁷ Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en 1989, durante la crisis de 2001 se pone en evidencia que las dos fracciones de los sectores dominantes enfrentan escollos que intentan superar. Así, mientras la fracción local de los sectores dominantes impulsa un cambio drástico en el funcionamiento económico, la fracción extranjera del bloque de poder persigue la profundización del funcionamiento económico imperante hasta ese momento.

Desde la perspectiva de Abal Medina (h) (2003), las opiniones negativas de los ciudadanos frente al funcionamiento global del sistema político democrático, se inscriben en tres grandes núcleos de sentido interconectados: improductividad, auto-referencialidad y corrupción. La primera de ellas la improductividad de la política supone la percepción ciudadana de que la política es incapaz de mejorar las condiciones de vida de la población; es decir, el fracaso de las organizaciones políticas de traducir en políticas públicas los programas electorales y las demandas de la sociedad. En tanto la auto-referencialidad de la política refiere a la creencia de la ciudadanía que los políticos se ocupan sólo de “sus cosas”, entendiendo por estas a las actividades que les representan a ellos mismo mayor poder, a la vez que se desentienden de los temas que le preocupan al ciudadano común. Por último, la corrupción se corresponde con la certeza social sobre los grandes negociados de la década del 90, sumada a la permanente aparición mediática de políticos y jueces enriquecidos, ambas situaciones terminaron por convencer a los argentinos de que la dirigencia se había dedicado a mejorar su vida a cuenta del futuro de todos.

Según Quiroga (2010) este proceso de deslegitimación de la política se articula con otro fenómeno, el de la desinstitucionalización de la misma. Ambos fenómenos se engloban en el paradigma de la impugnación de la política. En este paradigma, ambos fenómenos se remiten mutuamente sin llegar a coincidir. Así, la desinstitucionalización de la política alude al intento por retirarla de sus canales formales (parlamento, partidos, comicios) para trasladarla a las asambleas populares, a la participación directa.

Tal como fue señalado, el 1 de enero de 2002 se inaugura el “gobierno de transición” (del Tronco Paganelli, 2005) o “gobierno de crisis” (Quiroga, 2010) de Eduardo Duhalde, con el apoyo del radicalismo, principalmente bonaerense, con dirigentes del Frepaso y de sectores empresariales (que no representaban a los bancos ni a las empresas privatizadas). Sin lugar a dudas, el grave deterioro de la institucionalidad política y económica implicaba convocar a distintas fuerzas políticas y sociales a un gobierno de unidad, cuyo objetivo central fuera recuperar la confianza de los ciudadanos para estabilizar la moneda, ordenar políticamente a la

sociedad, contrarrestar el proceso de empobrecimiento y de aumento de las inequidades sociales y alcanzar la paz social.

La profundidad del deterioro de la situación social requirió de políticas públicas de emergencia. La Ley de Emergencia Pública y Reforma de Régimen Cambiario³⁸ constituyó el marco para el establecimiento de una serie de normativas de emergencia en áreas sociales. Pocos días después a través de dos decretos se establece la Emergencia Alimentaria Nacional³⁹ y Emergencia Nacional Ocupacional⁴⁰. Ambos decretos constituyen los paraguas jurídicos que hicieron posible implementar, con importantes grados de discrecionalidad en distintos aspectos de la gestión, los principales programas sociales del momento (Rodríguez Enríquez y Reyes, 2006). La situación de emergencia, y especialmente la emergencia económica asociada a la devaluación de la moneda, aceleraron los procesos y redujeron fuertemente el horizonte temporal de los actores (Torre, 1998). Para Quiroga (2005 y 2010), un gobierno de crisis necesita tomar muy firmemente las riendas del Estado en sus manos para poder obtener mayor libertad de movimiento que le permita transitar la etapa de emergencia. El contexto de emergencia es siempre amplio y ambiguo y los márgenes de libertad que conducen a la autonomización del ejecutivo se fundamentan en la declaración de emergencia.

En enero de 2002, Eduardo Duhalde anuncia la implementación de dos ambiciosos planes sociales: un programa alimentario y un programa de subsidios para desocupados. El bosquejo de ambos programas aparece reflejado en todos los medios de comunicación nacionales hacia mediados de enero de ese año:

“Sin posibilidades de modificar las presiones del corralito, el Gobierno decidió invertir lo poco que queda de dinero en dos ambiciosos programas sociales. Son los planes que declaran la emergencia ocupacional y alimentaria, e implican el reparto de comida y la distribución de subsidios a desocupados. Con ellos se intentará, al menos, frenar la crisis entre los quince millones de pobres que tiene el país. Ambos serán implementados por un decreto de necesidad y urgencia, en total representan un desembolso de 1.350 millones de pesos a lo largo de este año, y serán financiados íntegramente con dinero del Estado. El primero de ellos, el plan

³⁸ Ley Nro. 25.561 sancionada en 2002 y el Decreto 50/2002.

³⁹ Decreto 108/2002.

⁴⁰ Decreto 165/2002.

alimentario, fue firmado el martes por la noche por todos los ministros y fue diseñado por Hilda “Chiche” de Duhalde, a cargo del área social. El programa de subsidios (...), ya fue enviado a la secretaría general de la Presidencia y espera la firma de Duhalde. La intención del Gobierno es tenerlo listo hoy mismo, y representa un salto de los 50 mil planes de empleo actuales a unos 500 mil” (Clarín, 17 de enero de 2002).

Mientras que el programa de emergencia alimentaria estaría orientado a financiar los programas provinciales de asistencia alimentaria destinados a las familias en situación de pobreza, el programa de subsidios a los desocupados brindaría una ayuda económica directa a los jefes de hogar desocupados. El monto previsto de la ayuda variaba entre 150 y 200 pesos. Finalmente, a estos dos programas se le suma un tercero: el Programa Remediar, implementado bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Golbert (2004) señala que, simultáneamente a este anuncio, el gobierno convoca a un diálogo multisectorial para lograr soporte político, mermar la pugna distributiva, generar consensos en una sociedad fragmentada y descreída de la clase política, y acordar políticas que permitan ir superando la crisis institucional. La convocatoria fue direccionada especialmente a la Iglesia Católica y al PNUD⁴¹ y se buscaba lograr un acuerdo marco y luego proponer medidas concretas al Congreso (Arcidiácono y Zibecchi, 2007; Golbert, 2004; Neffa, 2009).

Así, la Mesa de Diálogo Argentino fue un proceso tripartito gestionado entre el gobierno, el PNUD y la Iglesia Católica, al cual se convocó a participar a un conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales⁴². Tanto Golbert (2004) como Neffa (2009) señalan que el espacio rápidamente logró un acuerdo en torno a la necesidad de protección social a los más necesitados.

⁴¹ Los intentos para avanzar en un espacio de concertación ya habían sido impulsados en diciembre de 2001 por el PNUD y la Iglesia Católica (a través de Cáritas). La iniciativa intentaba reunir a los líderes políticos, económicos y sindicales con el presidente De la Rúa; sin embargo, la misma no logró mayores resultados (Golbert, 2004; Neffa, 2009).

⁴² No hay consenso entre los autores respecto a la participación de los diferentes sectores en la Mesa de Diálogo Argentino. Neffa (2009) habla genéricamente de una heterogeneidad de organizaciones y de intereses. Golbert (2004) enfatiza en la alta participación de organizaciones con distintos grado de representatividad. En tanto Arcidiácono y Zibecchi (2007), señalan que la composición de la misma no fue neutral, ya que se seleccionaron un conjunto de “interlocutores válidos”, con trayectorias públicas, con experiencia de interacción con el Estado y predisuestas a participar en el nuevo espacio. Asimismo, las autoras señalan, que existió una deuda pendiente con el movimiento de desocupados, asambleas vecinales, organizaciones de base en general y el sector empresario.

En este marco, el recientemente creado PJJHD ocupaba un rol central y estabilizador a la salida de la crisis (Roca, 2013). En una dirección similar un grupo de autores (Álvarez Leguizamón, Ibarra y Naharro, 2009; Neffa, 2009; Pautassi, 2004) señalan que el Programa había nacido no sólo como una herramienta de la política social, sino principalmente como instrumento para apaciguar y/o neutralizar un conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional. En este sentido Golbet (2006) señala que la celeridad de la puesta en marcha del Programa fue un factor decisivo, no solo para asistir a una población crecientemente empobrecida sino por razones que tenían que ver con la gobernabilidad del país: si el Programa resultaba exitoso en reducir el crecimiento de la conflictividad social, consecuencia de los altos índices de pobreza e indigencia, el gobierno ganarían en legitimidad y mejoraría su capacidad de gobernar. Se observa, así, la forma por la cual en las cuestiones relativas al sistema de bienestar, la pirámide burocrática impulsa la búsqueda de orden (Sennett, 2003). Ésta búsqueda se visualiza con total plenitud cuando se despliegan políticas expansivas (Auyero, 2013).

El diseño del PJJHD y del Programa de Emergencia Alimentaria era similar: los fondos girados desde la Nación a las provincias debían ser distribuidos por los municipios y organizaciones no gubernamentales (ONGs) de acuerdo a un coeficiente conformado en un 60 % con el índice de coparticipación y un 40 % con el porcentaje de pobreza en cada provincia. A cambio de estos planes, las provincias se comprometían a confeccionar un listado único de beneficiarios. El control sobre la manera en que se repartía el dinero quedaba en manos de un Consejo Municipal, conformado por el intendente y por representantes de ONGs. En el caso de los planes de empleo, estaba prevista la participación de trabajadores y empresarios (Golbert, 2004).

Desde la perspectiva de Rodríguez Enriquez y Reyes (2006) los tres programas implementados (PJJHD, Programa de Emergencia Alimentario⁴³, Programa Remediar⁴⁴) marcaron un punto de inflexión respecto a la gestión asistencial implementada hasta entonces.

⁴³ Implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social.

⁴⁴ Llevado adelante por el Ministerio de Salud.

No porque cambiaran radicalmente los valores promovidos o la lógica de funcionamiento de la política asistencial, sino fundamentalmente por la magnitud que dichos programas adquirieron. Se trató de tres programas masivos de transferencia, de dinero y de especie, que focalizaron en grupos poblacionales muy extensos.

4.- Las características generales del PJJHD

El PJJHD se implementa por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 165/02 y tiene por objetivo superar la situación de desprotección de los hogares cuyos jefes se encuentran desocupados. Poco tiempo después, el decreto 565/02, denominado “Derecho Familiar de Inclusión Social”, introduce algunas modificaciones centradas, fundamentalmente, en el alcance que tendría el Programa⁴⁵ (Golbert, 2004; Neffa, 2009). Asimismo, el decreto establece que el PJJHD canalizaría los diversos programas sociales que atendían situaciones particulares existentes en un solo plan, con el objetivo de “economizar y eficientizar los recursos destinados a gastos operativos demandantes de la instrumentación”.

El nuevo Programa se aplicaría, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2002 en todo el país y se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). Posteriormente, la declaración de Emergencia Ocupacional en la cual se enmarcaba el PJJHD fue prorrogada anualmente en tres oportunidades. De esta manera, el Programa que había nacido como una estrategia de emergencia de un gobierno interino se transformó en una orientación de política asistencial de más largo plazo. Desde la perspectiva de Álvarez Leguizamón, Ibarra y Naharro (2009), el hecho que este tipo de programas se implementen a través de decretos presidenciales encuadrados en las denominadas “emergencias sociales o laborales” muestra de forma clara que se tratan de dispositivos de intervención que se traducen en políticas transitorias que actúan hasta que la situación de vulnerabilidad haya pasado, aunque en los hechos la situación se torna cada vez más estructural.

⁴⁵ Estas modificaciones respondían a la propuesta de la Mesa de Diálogo Argentino.

El Derecho Familiar de Inclusión Social⁴⁶ sería garantizado a partir de una serie de propósitos:

- a) asegurar la escolaridad de los hijos/as y el control de la salud,
- b) incorporar a los beneficiarios/as a la educación formal y/o actividades de capacitación laboral que coadyuvasen a su futura reinserción laboral,
- c) incorporar a los beneficiarios/as a proyectos productivos o servicios comunitarios bajo la modalidad de la contraprestación⁴⁷.

El PJJHD aseguraba un ingreso mensual mínimo de 150 pesos⁴⁸ a familias en condiciones de pobreza, cuyo jefe/a de hogar fuera argentino (nativo o naturalizado), se encontrase en condición de desocupación⁴⁹ y tuviera al menos un hijo menor de 18 años o discapacitados de cualquier edad⁵⁰. El beneficiario debía retribuir este ingreso con la realización de una contraprestación, con una dedicación diaria no inferior a cuatro horas ni superior a seis.

⁴⁶ Diferentes análisis del PJJHD desde un enfoque de derechos pueden encontrarse en CELS, 2010; Grondona, 2011 y Kessler, 2011, entre otros.

⁴⁷ Según señala Neffa (2009), en sus inicios el PJJHD no establecía de manera explícita la obligación de llevar a cabo una contraprestación por parte de los beneficiarios. Esa disposición fue adoptada luego de su creación para responder a las críticas formuladas dentro del Diálogo Argentino a una política social que se contentaba con asistir a las víctimas de la crisis con un ingreso monetario sin solicitarles una contrapartida en trabajo que, al mismo tiempo, facilitara su posterior inserción o reinserción en el mercado de trabajo.

⁴⁸ Para ese momento el salario mínimo legal era de 200 pesos. Tanto el monto del subsidio como el del salario mínimo se situaban por debajo de la línea de pobreza (Neffa, 2009).

⁴⁹ La determinación del beneficiario no le correspondía al Programa, sino que era la misma familia la que decidía quién era el miembro al cual se iba a considerar jefe o jefa y, por lo tanto, beneficiario directo del Programa. El potencial beneficiario debía presentar una declaración jura en la que manifestaba estar desocupado. Esta forma de proceder ya había estado presente en el Programa Trabajar. Así, aun cuando en el marco del diseño del Programa se pensó que el beneficiario serían reclamado principalmente por los varones jefes desocupados, en los hechos los requisitos existentes provocaron que se inscribieran en el mismo una gran cantidad de cónyuges mujeres que se encontraban inactivas (Rodríguez Enríquez y Reyes, 2006). El criterio de la autofocalización fue visto por el Banco Mundial (2007, Report Nro. ICR355) como uno de los aspectos del Programa que implicó riesgos relacionados con la inclusión de personas no “elegibles”. En este sentido, el informe también señala que muchas de las mujeres que se presentaban al Programa se suponía que eran inactivas antes de la crisis.

⁵⁰ En una segunda etapa se hizo extensivo a desocupados jóvenes y a mayores de 60 años que no contaban con prestación previsional. En este sentido, es posible señalar que el Plan Mayores surge en 2002 como un programa complementario al PJJHD, teniendo como objetivo paliar el déficit de haber jubilatorio en un importante número de personas mayores de 60 años que no recibían ingreso alguno. En agosto de 2003, el gobierno nacional dispuso universalizar el pago de una pensión mensual de 150 pesos a todos los mayores de 70 años sin jubilación ni pensión. Por esta decisión, el Plan Mayores quedó incorporado en esta nueva iniciativa (Vinocur y Halperín, 2004).

La norma de creación del Programa no establecía topes de fechas de inscripción ni límites al número de beneficiarios. Sin embargo por una disposición interna del MTEySS sólo pudieron acceder al Programa quienes se inscribieron antes del 17 de mayo de 2002. Esta disposición señalaba que las solicitudes de inscripción sólo serían recibidas hasta esa fecha, aunque reunieran todas las condiciones mencionadas⁵¹.

Como es posible observar el criterio focalizador del Programa es la condición de desocupación y jurisdiccionalmente el mismo se ejecutó en la órbita del MTEySS, exigiendo el cumplimiento de contraprestaciones laborales o no laborales. Sin embargo, el mismo también contiene la estructura básica de un PTMC ya que incluye un componente de ingreso no remunerativo y un componente de desarrollo del capital humano. Ambos componentes estarían direccionados a disminuir la pobreza en el corto plazo y a construir capital humano como solución a la pobreza en el largo plazo, al romper su transmisión intergeneracional. Producto de estas características incluiremos al PJJHD dentro de los programas de transferencias monetarias condicionadas a una contraprestación⁵².

4.1.- Las modalidades del esquema de contraprestación

Tal como fue señalado en el apartado anterior el PJJHD exigía el cumplimiento de ciertas condiciones a los beneficiarios. Así, además de exigir el cumplimiento de ciertas “condicionalidades” tales como control de escolaridad de los niños, la cobertura de vacunación y

⁵¹ Sin embargo, de forma paralela a la creación del PJJHD, el MTEySS reflota el Programa de Emergencia Laboral (PEL) con el objetivo de atender a aquellos grupos de trabajadores desocupados que no reunían las condiciones para acceder a dicho programa. El PEL llegó a beneficiar a 287.079 personas en noviembre de 2002 y fueron entregados de forma discrecional y sin ningún tipo de control. En enero de 2003 el PEL es reemplazado por el Programa de Empleo Comunitario (PEC), que mantenía la lógica de los programas sociales típicos de la década del 90. Este programa fue creado por resolución ministerial (Res. 07/2003), con escasa normativa, su implementación fue poco difundida y consistía en el apoyo a proyectos de organizaciones otorgado de manera discrecional y sin duración establecida previamente. El PEC tuvo 330.567 beneficiarios en 2003; 284.137 en 2004; 299.020 en 2005 y 285.965 en 2006 (CELS, 2010; Neffa, 2009).

⁵² Desde el inicio de la implementación del Programa hubo consenso entre los autores en considerar que el mismo operó más bien como un instrumento de transferencia de ingresos (Marshall, 2004; Monza2003). Más recientemente se lo comenzó a considerar dentro de la generación de PTMC, el cual incluía aspectos vinculados al esquema del *workfare* (Álvarez Leguizamón, 2013; Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; Marchionni y Conconi, 2008; Repetto y Díaz Langou, 2010).

el control de salud de las embarazadas⁵³, imponía el cumplimiento de “contraprestaciones”⁵⁴. Es decir, el Programa contenía la condición de que los beneficiarios se involucrasen en actividades vinculadas al trabajo, a la búsqueda de trabajo, a la educación o a la capacitación. Dentro de la normativa se estipulaban cuatro modalidades o “componentes” en el esquema de contraprestación:

a) Actividades Comunitarias: refieren a aquellas tareas o actividades que atienden una amplia gama de problemáticas sociales y necesidades comunitarias. Este tipo de actividades permiten, por un lado, el mantenimiento de comedores, copas de leche, atención y cuidado de niños, discapacitados y ancianos; y por el otro, promueven el desarrollo de actividades que tienden a paliar el déficit de la infraestructura barrial a través del cuidado de plazas y parques o el mantenimiento y la reparación de diferentes establecimientos como escuelas, parroquias o vecinales. De lo antes dicho, es posible observar que, en la mayoría de los casos, este tipo de actividades están vinculadas al espacio social más próximo del beneficiario: el barrio.

El gobierno nacional reconoce que este tipo de actividades -a las que considera como “verdaderos lazos de solidaridad en las comunidades barriales”- se venían realizando desde hace ya mucho tiempo; sin embargo, destaca que la implementación del PJJHD conllevó el incremento de las prestaciones en hospitales, centros de salud, escuelas, etc., reforzando la atención, el mantenimiento y las mejoras en dichos establecimientos (Deibe y Castillo Marín, 2003). Hacia fines de abril de 2003, más del 90% de los proyectos registrados del PJJHD pertenecían a este componente (Neffa, 2009).

b) Capacitación y formación profesional: las contraprestaciones dentro de este grupo de actividades apuntan a mejorar la posibilidad de reinserción o “empleabilidad” del beneficiario del Programa. Contiene en su interior dos líneas de implementación. La primera de ellas es la

⁵³ Tal como señalaremos más adelante el PJJHD presentó serias dificultades para el cumplimiento de estos requisitos.

⁵⁴ Trujillo y Sarabia (2011) denominaron a este tipo de corresponsabilidad incluida en los PTMC “contraprestación compulsiva”.

denominada *terminalidad educativa* y está orientada a propiciar la finalización del ciclo educativo formal (EGB3/ Polimodal o Primaria/ Secundaria a través de los sistemas de educación de adultos) en programas coordinados con el Ministerio de Educación de la Nación. En el diseño del PJJHD se señalaba a éste como un objetivo clave para mejorar los niveles educativos de los beneficiarios. Sin embargo, para abril de 2003, el gobierno nacional consideraba que, producto de “dificultades de implementación”, no se había podido alcanzar la potencialidad que ese componente tenía (Deibe y Castillo Marín, 2003).

La segunda línea de implementación en materia de capacitación y formación profesional es la denominada *formación en oficios*. La misma apunta a que los beneficiarios, a través de cursos técnicos en la red pública de educación, adquieran nuevas capacidades laborales. Este objetivo ha sido puesto en cuestión por algunos autores (Coraggio, 2004), ya que tiende a reproducir una capacitación tradicional en oficios, inútil, en muchos casos, para el desarrollo de determinado tipo de emprendimientos.

c) Actividades productivas: en este tipo de actividades se enmarcan diversas formas de autoempleo de los beneficiarios donde se produce algún bien que se intercambia, o bien, aquellas referidas a generar, a pequeña y mediana escala, producciones locales que puedan tener como destino la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación y servicios de la comunidad (es decir, que son consumidas por aquellos que lo producen). Por su especificidad, este componente requiere, sin lugar a dudas, de un importante acompañamiento técnico para su desarrollo, ya sea de instituciones públicas como de organizaciones del tercer sector.

El gobierno nacional consideró a este tipo de actividad como una “estrategia sustitutiva de desarrollos privados” y una actividad “alternativa y complementaria para las comunidades de los barrios más carenciados” (Deibe y Castillo Marín, 2003).

d) Reinserción laboral: el objetivo del desarrollo de este componente fue “atender las posibilidades de reinserción laboral de los beneficiarios en un empleo privado de carácter permanente y regular” (Deibe y Castillo Marín, 2003). El componente fue incorporado al Programa según la resolución 37/03 del MTEySS. Para ello se reglamentó en forma definitiva el

Registro de Empleadores (RENAE) y el Registro de Historia Laboral de los Beneficiarios y Beneficiarias del Programa. En el primer registro se debían inscribir aquellos empleadores que quisieran participar del mismo. Los empleadores registrados allí debían entrevistar a los beneficiarios que, una vez seleccionados, firman un convenio de adhesión, estableciendo la inducción y el reentrenamiento laboral que debían tener lugar en el mes inicial. El empleador debía capacitar a los beneficiarios y le debía abonar todos los gastos de traslado del trabajador desde el domicilio al lugar de trabajo, así como también otorgarle una cobertura de riesgos de trabajo, quedando a cargo de la unidad ejecutora la implementación y el seguimiento de ese componente (Neffa, 2009; Vinocur y Halperin, 2004). El empleador debía complementar el ingreso que otorga el PJJHD (150 pesos mensuales por beneficiario) con un monto que alcance, como mínimo, la retribución pactada en la categoría que se trate en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector correspondiente, por una jornada de ocho horas diarias y 48 horas semanales. También debía abonar las contribuciones patronales por el monto que la empresa pague a cada beneficiario y debía constatar que el trabajador continúe siendo beneficiario del PJJHD con la exhibición del recibo correspondiente. De este modo, se buscaba la reinserción a través de empleos que cumplieran con los requisitos mínimos de la legislación laboral, los cuales conllevaran adicionalmente una posibilidad efectiva de empleo genuino y permanente.

En el análisis de Perona, Rocchi y Mariani (2004) se destaca que, dentro de este componente, la mayoría de las responsabilidades recaían sobre la empresa que quiere incorporar beneficiarios del PJJHD para el desarrollo de actividades laborales en sus entidades. Sin embargo, en la medida en que este tipo de práctica puede ser utilizada como una forma de subsidio al empleo privado, también se han destacado sus puntos críticos:

- Este tipo de políticas constituyen verdaderas transferencias de recursos del Estado hacia las empresas, lo que terminaría redundando en ventajas para las propias empresas y no, necesariamente, en la creación de nuevos puestos de trabajo (Freyssinet, 1996).
- Se ha planteado la necesidad de limitar el acceso indirecto a la ayuda económica como subsidio al empleo por parte de las empresas privadas, salvo en condiciones probadas de

vulnerabilidad de los puestos de trabajo actuales, que deberán ser preservados y, aún en esos casos, la vinculación deberá ser por un tiempo determinado (Coraggio, 2004).

- Podría generar inequidades hacia otros desocupados que no tienen beneficios y efectos perversos de “sustitución” de trabajadores regulares por otros más baratos que reciben beneficios (Lo Vuolo, 2004).

El gobierno nacional consideraba que todas las experiencias de subsidio al empleo privado a través de exenciones a las contribuciones a la seguridad social, como así también los subsidios mediante el pago por parte del Estado del salario del trabajador, habían sido poco exitosas. Esto obedecía a distintos factores, entre los cuales se destacaban la fuerte cultura del empleo no registrado en las pymes y la lenta recuperación del empleo debido al tenue crecimiento que la economía experimentaba para inicios del 2003. De hecho la importancia relativa del componente dentro del conjunto fue reducida ya que al 10 de marzo de 2003 sólo 221 empresas estaban inscriptas en el RENAE, con 2.365 puestos requeridos, de las cuales 194 empresas se inscribieron en los primeros meses del año 2003 y tan sólo 27 a lo largo de 2002 (Neffa, 2009).

En tal sentido, y por considerar la “reinserción de los beneficiarios en la actividad privada un objetivo estratégico en el marco del Derecho Familiar de Inclusión Social” y una “herramienta útil para la reincorporación de los beneficiarios a la actividad productiva y de servicios en empresas privadas” (Deibe y Castillo Marín, 2003), el gobierno apuntaba, un año después de la puesta en marcha del PJJHD, a flexibilizar los requisitos de incorporación y a ajustar los mecanismos de intermediación.

Hacia fines de 2005, el componente de reinserción laboral ya no era pensado sólo como una forma de inserción permanente y regular al mercado de trabajo, sino que ampliaba sus estrategias hacia la incorporación transitoria al mundo del trabajo, a través, por ejemplo, de empresas vinculadas a la construcción.

La *reinserción laboral* como modalidad o “componente” del esquema de contraprestación constituye, dentro de las formas de gestión estatal de la fuerza de trabajo, una clara política de promoción del empleo mercantil. Para Britos y Caro (2002), este tipo de políticas constituyen

ejemplos acabados de lo que Offe denominó *remercantilización administrativa*. Por medio de estas políticas, se pagan salarios con fondos fiscales y se exige a las empresas del pago de cargas sociales, todo ello por un tiempo determinado. La puesta en contacto administrativo de capital y fuerza de trabajo favorecería -según la perspectiva de quienes diseñan los programas- la creación de nuevos empleos, ya que una vez finalizado el período subsidiado, las empresas incorporarían a estos trabajadores en tanto éstos hayan demostrado sus condiciones para el puesto y su conformidad con las tareas asignadas y con el salario propuesto. Una condición para la remercantilización consiste en que las poblaciones puedan ser empleables por la industria, el comercio o los servicios mercantiles (Britos y Caro, 2002).

Los componentes anteriormente descriptos remiten a las contraprestaciones de los beneficiarios. Sin embargo, es importante señalar que a estos cuatro componentes se les fueron incorporando progresivamente otros tres, los cuales actuaban buscando salvar debilidades y/o fortalecer mecanismos de la implementación del Programa. Desde la perspectiva de Vinocur y Halperin (2004) fue la percepción del MTEySS, la experiencia recogida en la gestión del Programa y en programas de empleo anteriores lo que permitió detectar dificultades en el aporte de recursos por parte de los municipios (que incluyen localidades pequeñas y medianas con altos porcentajes de población en situación de pobreza) para asegurar condiciones que permitan realizar acciones de mejoramiento de la infraestructura local o concretar emprendimientos proveyendo herramientas o insumos. La lectura de estas debilidades constituyó el puntapié para el surgimiento de otros tres componentes dentro del PJJHD:

e) *Componente materiales:* este componente surge a partir de la suscripción, en enero de 2003, de un préstamo con el Banco Mundial, el mismo implicaba un aporte económico no reembolsable para la provisión de materiales y herramientas a proyectos que atendiera demandas prioritarias de la población en situación de pobreza, asegurando de esta manera la efectiva realización de las contraprestaciones por parte de los beneficiarios. El componente se orientaba a promover la participación de beneficiarios del PJJHD en la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria o productiva de pequeña envergadura en localidades cuya población esté comprendida entre 500 y 100.000 habitantes. Para la ejecución de este componente el

MTEySS aportaba el 100% de los fondos monetarios destinados al pago de la mano de obra y el costo de los materiales para la ejecución de los proyectos, que podían ejecutarse en un período entre 3 a 6 meses.

f) Plan nacional de obras municipales: se implementó a través de la realización de obras de infraestructura, propuestas a través de la presentación de proyectos financiados por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, las mismas se ejecutaron en los 1802 municipios de todo el país e incorporaron a los beneficiarios del PJJHD.

g) Convenios especiales: suscriptos por el MTEySS con propósitos específicos (que debían ser aprobados por los Consejos Consultivos y los municipios) para que los beneficiarios se incorporaran a ciertas actividades de apoyo para distintos organismos nacionales, provinciales y privados, sin fines de lucro.

El diseño del esquema de contraprestaciones del Programa muestra de forma clara que el lugar asignado al trabajo es el de constituir un mecanismo para garantizar las necesidades materiales y una vía para el reconocimiento y la recreación de las identidades individuales y colectivas. El PJJHD incorpora, así, el valor que se apoderaría de toda la sociedad durante el siglo XIX y que otorga al trabajo el lugar de valor moral absoluto, la supremacía del trabajo respecto del ocio y el temor a perder el tiempo. En este esquema, el tiempo fue un ingrediente poderoso en la producción de ese resultado (Sennett, 2003). Sin embargo, en el PJJHD sólo está presente uno de los elementos de esa ecuación.

Asimismo, las contraprestaciones introducidas por el PJJHD actúan una “madeja de prescripciones y obligaciones” (Demazière, 2006) que adquiere un peso considerable en el ordenamiento temporal de los beneficiarios. El Estado, a través de las políticas que implementa, incide en las actividades de los beneficiarios, constituyéndose de esta manera en un actor clave en la vida cotidiana de los desamparados (Auyero, 2013). El tiempo en tanto revelador y estructurador de las actividades se constituye en una dimensión clave para proporcionar evidencia empírica a este tipo de problemática.

Tanto el diseño del esquema de contraprestaciones como las evaluaciones realizadas sobre el desempeño del mismo dejan en evidencia la ausencia de toda consideración sobre la incidencia de este elemento en la temporalidad de los beneficiarios.

4.2.- La modalidad de gestión del Programa y el lugar de los consejos consultivos

Tal como fue señalado, el órgano de aplicación era el MTEySS en coordinación, para su ejecución y seguimiento descentralizado, con las provincias y municipios (Pautassi, 2004; Repetto y Díaz Langou, 2010). Para la implementación del Programa no se transfirieron recursos a las provincias, la gestión financiera y la aceptación definitiva de altas de beneficiarios quedó concentrada exclusivamente en el nivel nacional en el MTEySS, aunque la inscripción y el control de las condiciones que debería reunir los postulantes y la propuesta de beneficiarios permaneció a cargo de cada municipio, con la intervención de los Consejos Consultivos. Sin embargo, y según Repetto y Díaz Langou (2010), con el correr de los años, la gestión del Programa se fue centralizando cada vez más en manos del MTEySS nacional.

En este sentido, es posible señalar que la creación de los Consejos Consultivos fue un aspecto novedoso del PJJHD. Los mismos estaban pensados como mecanismos de control y fiscalización; en ese sentido fueron considerados garantes de la eficiencia, de la eficacia y de la transparencia del Programa. Se constituyeron en mecanismos de co-gestión del Programa y en espacios de articulación de los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales. Desde la perspectiva de Pautassi (2004), la medida de incorporar a los Consejos Consultivos a la gestión del PJJHD se basaba en la urgente necesidad de acercar a los destinatarios y prestatarios del servicio que conocían mejor las necesidades de cada región, junto con la promoción de una mayor responsabilidad y participación de la comunidad.

El PJJHD no contemplaba presupuesto para el funcionamiento de los Consejos Consultivos y sus integrantes se desempeñan *ad honorem*. Se crearon tres instancias de Consejos Consultivos con diferentes funciones para cada jurisdicción.

Entre las funciones del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC) se encontraban:

- 1.- adoptar las políticas necesarias destinadas a la efectiva implementación del Programa.
- 2.- la supervisión del desarrollo del mismo, asegurando su control y su transparencia.
- 3.- mantener actualizados los registros del conjunto de los beneficiarios, supervisar la utilización de los fondos destinados al Programa, proyectar y proponer las modalidades de pago de las asignaciones.
- 4.- hacer el seguimiento de las políticas de capacitación y formación.
- 5.- proponer criterios de generación de empleo con el fin de lograr la inserción social y laboral de los beneficiarios.
- 6.- organizar la evaluación externa del Programa a través de universidades nacionales y/o organismos de control del derecho público.
- 7.- promover la constitución efectiva de las mismas instancias a nivel provincial y municipal.

Formaban parte del mismo por el sector empresarial: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimentarios (COPAL) y la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Por el sector sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por los distintos cultos: AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el Consejo Evangélico y Cáritas Nacional. Por las organizaciones no gubernamentales, la Federación Argentina de Municipios (FAM), el Foro del Sector Social y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Por el Gobierno: el MTEySS (Consejo Federal de Trabajo), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales).

A su vez, los Consejos Provinciales se encargaron de controlar y hacer el seguimiento del desarrollo y ejecución del Programa y garantizar el cumplimiento de criterios de accesibilidad de

los beneficiarios. Al igual que el CONAEYC, podían realizar acciones para potenciar el impacto de las actividades que se desarrollaban en el marco del Programa.

En tanto, la principal responsabilidad de los Consejos Municipales y/o Barriales consistía en establecer los criterios de elegibilidad para la presentación de los proyectos productivos de inserción de los destinatarios del Programa, así como de su designación en los proyectos de acuerdo con su perfil y demanda. Debían estar conformados por los organismos representativos del ámbito de la jurisdicción y dar cabida a las organizaciones de trabajadores, empresarios y organizaciones sociales y confesionales y autoridades gubernamentales. Según la reglamentación, los Consejos Municipales debían designar un presidente y un secretario para poder asumir la responsabilidad que les había sido conferida. Cuando la dimensión de los municipios los justificaba se constituían Consejos Barriales. Para Neffa (2009), los Consejos Municipales constituían una instancia de representación institucional de nivel local, que atendiendo a la realidad social y económica de cada lugar, procuraban lograr el mayor impacto social y la mejor ejecución e implementación del PJJHD. Constituyendo, además, el órgano natural de control social sobre el uso de los recursos afectados al Programa en cada municipio⁵⁵. Sin embargo, el autor destaca que no estaba definido de manera específica cuál era la función de los Consejos Consultivos Provinciales y de los Consejos Consultivos Municipales con respecto al control del cumplimiento de la contraprestación.

Asimismo, la normativa del Programa invitaba a que distintos organismos ejecutores presentaran propuestas de actividades donde podrían ser incorporados los beneficiarios. Dichos proyectos deberían ser presentados ante el Consejo Consultivo Municipal, con el compromiso de que los responsables garantizaran la provisión de los insumos básicos necesarios y realizaran el control de asistencia adecuado. En principio, el Programa definió que el Seguro de Responsabilidad Civil para los beneficiarios estuviera bajo la tutela de los ejecutores. Sin embargo, el reiterado incumplimiento de dicha cláusula por parte de las organizaciones obligó a las provincias a asumir estos costos (Pautassi, 2004).

Hacia diciembre de 2002 se habían conformado 22 Consejos Consultivos Provinciales y 1873 Consejos Consultivos Municipales (Lupica *et all*, 2003). Hacia 2004 y desde la perspectiva de Arroyo (2004), entre los Consejos Consultivos conformados era posible identificar cinco tipos:

1) **Consejos Consultivos formalizados con escasa incidencia sobre el ámbito local:** se trataba de los Consejos que se habían constituido formalmente a partir de la puesta en marcha del PJJHD pero que no habían logrado institucionalizar reuniones periódicas ni tuvieron incidencia concreta sobre el control de los beneficiarios o las contraprestaciones requeridas. Se trata de un modelo de Consejo Local generalmente impulsado por las autoridades municipales que terminó sólo constituido por miembros del Ejecutivo Municipal porque la convocatoria original fue hecha así o porque los diversos procesos de crisis fueron alejando a las organizaciones sociales de ese espacio. En la práctica, fueron Consejos Consultivos que casi no funcionaron en lo que hace a la articulación entre Estado y organizaciones sociales, pero que sí cumplieron con los requisitos formales para el PJJHD en términos de trámites y procesamiento de la información.

2) **Consejos Consultivos orientados hacia la auditoría social:** se trató de Consejos Locales constituidos por representantes del Gobierno Municipal y de organizaciones sociales que lograron darle continuidad y periodicidad a la tarea y que pusieron el énfasis de sus acciones tanto en el control de los beneficiarios del PJJHD como en el cumplimiento de las contraprestaciones requeridas. En general, estos Consejos tuvieron baja participación del sector privado (aún de las cámaras locales) y tendieron a concentrar sus esfuerzos en la detección de sus beneficiarios, las tensiones en torno a las bajas del Programa y los requerimientos del Estado Nacional en cuanto a información. Los representantes de las organizaciones sociales sintieron, en gran medida, que el peso de las políticas sociales recaía sobre sus hombros y que corrían el riesgo de ser mano de obra barata para el Estado. De todos modos, rescataron como positiva la propia constitución del Consejo y la ampliación de los niveles de información y, por tanto, vieron a ese espacio como un ámbito importante para auditar la gestión municipal y los

⁵⁵ Bogani (2007) desde una perspectiva más crítica señala que estas instancias supusieron una institucionalidad impulsada “desde arriba” como un requisito de las instancias provinciales y nacionales para asegurar el buen

programas sociales. El énfasis de la tarea estuvo puesto en el control de la transparencia y la rendición de cuentas hacia los vecinos.

3) Consejos Consultivos promotores de proyectos comunitarios o socio-productivos: este modelo de Consejo incluyó, en parte, las características del modelo anterior pero se diferenciaba en el análisis puesto en la formulación de proyectos y en la promoción de emprendimientos productivos. Se trató de un modelo de Consejo que principalmente estaba constituido por el Estado y organizaciones sociales, pero que puso el eje central en el aprovechamiento de los recursos locales. Así, el PJJHD fue uno de los insumos con los que se contó, que, sumado al resto de recursos humanos, económicos y materiales que se pudieron articular, permitió la generación de una cartera de proyectos que apuntaba a la inclusión social tanto desde el plano comunitario (cocina para los comedores, cuidadores domiciliarios, apoyo en actividades escolares, promotores de salud, etc.) como desde la generación del autoempleo (emprendimientos productivos, servicios urbanos de proximidad, etc.). Si bien este tipo de Consejos tuvo como uno de sus roles la auditoría social, su mayor esfuerzo estuvo puesto en generar proyectos para la inserción en el mercado de trabajo formal o informal. La mirada de los miembros del Consejo fue más allá de los requerimientos formales del PJJHD y apuntó a promover un diagnóstico rápido que permitiera definir líneas de proyectos viables.

4) Consejos Consultivos promotores del desarrollo local: se trató de instancias asociativas locales que, en general, tenían un trayecto de al menos tres o cuatro años en el municipio y que se constituyeron a partir de definir el perfil de desarrollo de su territorio. En general, han pasado por instancias de planificación en donde se ha discutido la visión de la ciudad y las prioridades productivas y sociales. Se trató de un modelo de Consejo que tendió a incorporar a los tres sectores (Estado, sector privado y organizaciones sociales) y que definió líneas estratégicas de desarrollo tanto para el sector formal o informal de la economía. En este caso, lo predominante fue la constitución de consensos alrededor del proyecto de ciudad, la legitimidad de los actores intervinientes y la adecuación al contexto macroeconómico luego de la devaluación. Este tipo de Consejos sufrió una parálisis significativa desde la crisis de diciembre

de 2001 y recién a partir de 2003 retomó la práctica de definir líneas estratégicas y proyectos. El liderazgo de estas instancias tendió a surgir por el impulso que le dio la municipalidad, las empresas del lugar o las universidades locales. La participación de las organizaciones sociales pareció tender a consolidarse en la medida en que comenzaron a definirse las prioridades barriales.

5) **Consejos Consultivos sostenidos por propia iniciativa de miembros de organizaciones de la sociedad civil:** este tipo de Consejos sólo se ha corroborado en las áreas metropolitanas, en ciudades de más de 250.000 habitantes y tuvo una manera particular, que consistió en que surgió más por el propio accionar de las organizaciones que por la decisión del poder gubernamental. Se trató de un modelo de hecho en donde las organizaciones sociales sostuvieron al Consejo Consultivo y generan sus propios espacios de intercambio sobre sus líneas de trabajo y sobre la realidad social y al que se fueron acercando, de manera poco sistemática, funcionarios de las áreas sociales con vínculo con estas organizaciones. No se trató de un modelo de Consejo formalizado, sino de una red de organizaciones que tuvieron encuentros periódicos, una problemática en común y en la que participaban funcionarios que sentían que forman parte más de la sociedad civil que del Estado y que buscan resolver los mismos problemas sociales.

Existe coincidencia entre los distintos informes e investigaciones acerca de las debilidades y dificultades que tuvieron los Consejos Consultivos durante los primeros años de funcionamiento⁵⁶:

- 1) **Dificultades para cumplir el control de las contraprestaciones:** los Consejos Consultivos Provinciales tuvieron muchas dificultades para controlar el cumplimiento de las contraprestaciones decididas por los Consejos Consultivos Municipales, en parte debido a problemas de organización, a los costos de movilidad y de las comunicaciones, para los cuales no se disponía de presupuesto específico. Asimismo

⁵⁶ Seguimos en este punto a Arcidiácono y Zibecchi (2007), Bogani (20007), Lupica *et. all.* (2003), Neffa (2009) y The World Bank (2007).

en muy pocos casos los Consejos Consultivos Municipales dieron de baja a beneficiarios que incumplían las contraprestaciones.

- 2) **Problemas de participación y representatividad:** no todos los actores participaron con la misma intensidad. En muchos casos los Consejos Consultivos funcionaron sobre la base de un “como si”, no cumplieron con la participación de los actores de la sociedad civil y sus actividades estuvieron libradas a los criterios de sus pocos integrantes. Además se constató la participación de organizaciones vinculadas a intendentes o gobernadores.
- 3) **Falencias técnicas en relación con las funciones que les fueron otorgadas:** se observó la ausencia de personal idóneo para el desarrollo de tareas específicas y la falta de infraestructura básica para asegurar un funcionamiento eficiente. Los actores locales mostraron también falta de experiencia y capacidad adecuada.
- 4) **Deficiencias en la información y en la comunicación:** la multiplicidad de las normativas regulatorias del PJJHD, las distintas instancias intervinientes en su gestión e implementación y la falta de experiencia de algunas de estas instancias dificultaron los flujos de información tanto desde “arriba” hacia “abajo” (desde el MTEySS hacia los beneficiarios) como también en el sentido inverso. Sin embargo, el principal *déficit* de información/comunicación suele adjudicarse al Estado Nacional.

Desde la perspectiva de Arcidiácono y Zibecchi (2007) los Consejos Consultivos fueron estructuras cargadas de funciones que el Estado les transfirió para co-gestionar el PJJHD pero, a la vez, estuvieron plagadas de deficiencias (de comunicación, de capacidades técnicas y de recursos económicos) que devinieron obstáculos para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas. En algunos casos sufrieron la manipulación del poder político local y, a la vez, fueron fuertemente dependientes del trabajo voluntario y del compromiso de sus integrantes. De allí la brecha existente entre el discurso que impulsó la creación de los Consejos Consultivos y su implementación, atravesada por los problemas propios de la improvisación bajo la cual surgieron y por la falta de institucionalidad formal.

Los elementos anteriormente descriptos permiten confluir en la idea que el PJJHD supone una gestión descentralizada a nivel local de las actividades de contraprestación y que en la misma juegan un rol central las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o más específicamente, y como las denomina Svampa (2005), organizaciones de base territorial. En la misma dirección, Repetto y Díaz Langou (2010) señalan que en el caso del PJJHD la coordinación intersectorial se centra en el componente contraprestaciones. La participación de las organizaciones de base territorial en el Programa tiene un carácter obligatorio y extendido en todo el país y las mismas llegan a adquirir un rol protagónico como espacios para el desarrollo de proyectos en los cuales los beneficiarios se insertan para realizar las contraprestaciones exigidas en la normativa del PJJHD.

En términos operativos el proceso de descentralización es la reforma del rol del Estado y de las políticas públicas mediante la transferencia de funciones, responsabilidades, recursos y autoridad desde el nivel nacional de gobierno hacia los niveles subnacionales -provinciales y/o municipales- (Villarreal, 2007). Este proceso ha contribuido a legitimar la participación de las OSC en el campo político y social. Acuña, Kessler y Repetto (2002) destacan que existen tanto factores endógenos como exógenos que han contribuido a la articulación entre las OSC y los organismos del Estado. Entre los factores endógenos señalan el escenario de crisis social que ha sobrevenido con posterioridad a las reformas económicas y al retiro del Estado de diversas áreas, la descentralización de la política social, y la necesidad de atender en forma eficiente las diversas demandas sociales. En tanto, entre los factores exógenos, subrayan la presencia de las agencias multilaterales de crédito⁵⁷ y las agencias privadas de cooperación para el desarrollo como los factores que han incentivado la participación de la sociedad civil en las políticas sociales. Sin embargo, y siempre para Acuña, Kessler y Repetto (2002), existirían también factores que dificultan esa convergencia de esfuerzos. Entre ellos señalan el temor de las OSC a ser cooptadas para las estrategias gubernamentales y el hecho que la credibilidad de la iniciativa estatal ante la sociedad civil se ve obstaculizada por el hecho que las políticas públicas en Argentina han sido

⁵⁷ De forma clara el informe Nro. ICR355 del Banco Mundial de 2007 señala como uno de los aspectos destacables del PJJHD la promoción de espacios de control de las organizaciones sociales, confesionales, de la producción y del

tradicionalmente teñidas por el clientelismo, la administración de favores con criterios electoralistas y cortoplacistas y la escasa transparencia.

En el caso argentino, la descentralización administrativa se constituye en un elemento clave del nuevo modelo de gestión impuesto por las políticas neoliberales y de las nuevas formas de acceso a la ayuda social. Según Kessler y Roggi (2005), el avance hacia estilos más flexibles de gestión burocrática -que incluían la participación social mediante la delegación de tareas organizativas en la sociedad civil, la cual participaba tanto en la implementación como en la gestión de los recursos económicos- se dio de forma conjunta con la desatención por parte del Estado nacional y de los gobiernos provinciales con respecto al fortalecimiento de las capacidades institucionales, administrativas y técnicas del sector público.

Es, en este marco, que las organizaciones de base territorial adoptan un rol central en este tipo de políticas sociales. Este rol estaría anclado en una mirada que remarca las características “virtuosas” de este tipo de organizaciones (Arcidiácono y Zibecchi, 2007 y 2008), asentadas en una dimensión ético normativa (potencialidad de desarrollar valores como la equidad, la solidaridad, la cooperación, la ciudadanía y la transparencia) y una dimensión económica (potencialidad de conocer mejor la población destinataria y de esa forma de gestionar de forma más eficiente los recursos).

Para finalizar, podemos señalar siguiendo a Cunill Grau (2005) que en el PJJHD es posible observar dos modalidades diferentes de participación de las OSC. Por un lado, se puede señalar la limitada participación de OSC en la formulación de la política, en tanto esa participación fue acotada a algunas recomendaciones realizadas por la Mesa de Diálogo Argentino las cuales dieron lugar a la reformulación del PJJHD; por otro se observa el rol central que las OSC ocuparon en la fase de ejecución del Programa, como parte del proceso de transferencia de funciones del Estado a la sociedad.

trabajo que aseguraba la participación de la sociedad en un momento de alto descrédito de las instancias de poder político.

4.3.- El financiamiento del PJJHD

Inicialmente el PJJHD fue financiado con recursos de la economía nacional, ya que - producto de la declaración de default- Argentina estaba inhabilitada para asumir nuevos compromisos con los organismos de crédito internacional (Arcidiácono, Pautassi, Zibecchi, 2010; Golbert, 2004). La recomposición de las cuentas fiscales que supuso la modificación del régimen cambiario y el establecimiento de un nuevo tributo (retenciones a las exportaciones de cereales e hidrocarburos) fueron los elementos que posibilitaron este proceso. De los recursos utilizados en 2002, \$880 millones provenían de la redistribución de créditos presupuestarios y \$1480 millones de las retenciones a las exportaciones (Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi, 2010; Golbert, 2004; Neffa, 2009; Vinocur y Halperín, 2004; Ramírez, 2006). El Programa obtuvo su financiamiento en el marco de la declaración de “emergencia económica”. Los fondos asignados al PJJHD en 2002 implicaban un incremento superior al 1100% en la participación de los planes de empleo en el Presupuesto Nacional (Cogliandro, 2010).

Desde la perspectiva de Golbert (2004), esta circunstancia marcó una diferencia importante en relación con lo que había ocurrido en la década anterior en la cual los programas sociales habían sido financiados por organismos de crédito internacional, asimismo esta situación conllevó dos “ventajas”. La primera de ellas fue que el hecho de tener que valerse de recursos nacionales permitió al gobierno manejarse con mayor autonomía para diseñar el proyecto. La segunda ventaja fue la celeridad con la que pudo ponerse en marcha el Programa, en la medida en que no fue necesario pasar por la aprobación de los organismos de créditos cuyas burocracias tienen tiempos y mecanismos de resolución no siempre demasiado eficientes⁵⁸.

⁵⁸ Según Schedler y Santiso (1999), los actores políticos tienen que vérselas con las restricciones cuasi objetivas que les impone el tiempo, un recurso escaso y no renovable; y además tienen que enfrentarse a los parámetros cuasi artificiales establecidos por las reglas formales e informales que estructuran los cronogramas políticos. Para manejar esas restricciones pueden desplegar un extenso conjunto de estrategias, entre las cuales se encuentra el manejo de la velocidad. En términos estratégicos, la velocidad representa un recurso valioso en la competencia política, acelerando las cosas los actores políticos pueden redefinir la agenda política, acortar los tiempos de espera, superar la escasez de tiempo, etc. En términos funcionales, la velocidad representa una variable que los actores pueden manipular para manejar las múltiples exigencias del tiempo que encaran día a día. La velocidad adecuada para la adopción de decisiones políticas también varía según la urgencia y la complejidad de los asuntos en discusión. Cuando las líneas de acción son claras y la ausencia de soluciones se traduce en costos elevados, parece necesario y legítimo tomar decisiones rápidas.

Para el financiamiento del Programa en el año 2003 se dispuso de \$3.052 millones provenientes del tesoro nacional y se suscribió un convenio de préstamo con el Banco Mundial (Convenio BIRF 7.157) por un monto de 600 millones de dólares para dos años de ejecución. El vencimiento del préstamo era a 15 años y 5 años de periodo de gracia. Mediante estos recursos se financió el pago de las ayudas económicas a aquellos beneficiarios del PJJHD incluidos en subproyectos de actividades de contraprestación elegibles, así como también los insumos necesarios para la concreción de los subproyectos productivos de carácter asociativo y pequeñas obras de utilidad pública (en particular para las áreas de salud, educación, agua potable, entre otros). Estos recursos posibilitaron financiar, a partir de 2003, un 30% del costo anual del plan y el 100% del componente Materiales (Ramírez, 2006).

Esto supuso que el financiamiento del Banco Mundial estaba dirigido a aquel aspecto del Programa vinculado con la ideología del *workfare*⁵⁹, en la medida en que se centraba en financiar las transferencias monetarias a los beneficiarios incluidos en proyectos de contraprestación (ya sea servicio comunitario, pequeñas obras de construcción o mantenimiento, o actividades de capacitación laboral o educativa), y los insumos necesarios para la concreción de proyectos de carácter asociativos y obras de utilidad pública. Desde la perspectiva del Banco Mundial el componente de *workfare* del PJJHD contribuiría a mejorar los estándares de vida de las comunidades donde las actividades de contraprestación se realizaran a la vez que crearía empleo temporario para trabajadores en condiciones de pobreza. En este eje argumental se centraba el financiamiento direccionado en el componente de *workfare* del Programa (The World Bank, 2002). El aporte del Banco Mundial se hizo extensivo a la evaluación y al monitoreo del Programa. Estos se centraron fundamentalmente en la incorporación de un módulo específico a la E.P.H que permitiera determinar la condición de beneficiarios e identificar las características de esas personas y sus hogares y en las evaluaciones específicas de los subcomponentes “Proyectos Productivos” y “Materiales”.

⁵⁹ Volveremos sobre este punto.

Durante 2003 la participación del PJJHD se incrementó al 6,6% del Presupuesto Nacional, siendo el máximo nivel de participación de los PTMC hasta ese año (Cogliandro, 2010).

5.- La redefinición del PJJHD

Luego de dos años de funcionamiento y bajo la gestión del presidente de la Nación Néstor Kirchner se iniciaron una serie de reformas tendientes a reformular el PJJHD. Es posible establecer entonces que un conjunto de elementos se estaban conjugando, en ese momento, para sedimentar la necesidad de reformas. Mientras que, por un lado, el Programa estaba siendo fuertemente criticado desde diversas posiciones ideológicas, por el otro, la administración del presidente Kirchner intentaba imprimir un “redireccionamiento en las políticas sociales” -según la retórica oficial- anclada en una relectura del pasado⁶⁰.

Para entonces, el gobierno nacional encontraba que el PJJHD reproducía el modelo neoliberal y la condición de pobreza de los beneficiarios, promovía la pasividad de los actores y se condecía con un modelo de Estado paternalista y clientelista. Así lo expresaba, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación:

“La contraprestación es fijada por el estado u organizaciones, lo que indica una práctica de tipo paternalista que, en el mediano y largo plazo no permiten la reconstrucción de otros lazos sociales sino que más bien, legítima -y reproduce- en sus prácticas las formas heredadas del modelo neoliberal, con un abordaje focalizado. Desde la asistencia paternalista recoge a los heridos que dejó este modelo a partir del "gasto social" focalizado sin introducir otros satisfactores que permitan el desarrollo” (Kirchner, 2003: 2).

El gobierno comenzó a impulsar la creación de una Red Federal de Políticas Sociales que se constituyera en el hilo conductor de los diferentes programas, evitando así su superposición. Dentro de este marco, *“revisar los ejes de las políticas sociales evitando homogeneizar lo que no*

es posible uniformar” (Kirchner, 2003: 2) se presentaba como un nuevo desafío. La redefinición de las formas de asistencia a los desocupados se basaba en la visualización de distintas poblaciones o grupos entre los beneficiarios. En este sentido, un relevamiento realizado por el MTEySS en el año 2004 clasificaba a los beneficiarios en cuatro grupos de acuerdo a sus posibilidades de inserción laboral⁶¹:

En el *primer grupo* se encontraban los desocupados con mayores chances de obtener empleo formal. Se trataba en su mayoría de jóvenes menores de 25 años con nivel educativo aceptable y calificación laboral como operarios o técnicos especializados. Quienes integraban este grupo, por lo general, continuaron realizando actividades informales paralelas al cobro del plan, lo que les permitió mantener sus ingresos por encima de la línea de indigencia y, en algunos casos minoritarios, escaparle a la pobreza a través del ejercicio de un oficio, el empleo fabril en negro o actividades comerciales informales. Era el grupo que más chances presentaba de inserción laboral en el corto o mediano plazo. Este grupo representaba el 18,2% de los beneficiarios.

El *segundo grupo* también tenía altas posibilidades de pasar a formar parte del flujo de reingreso al mercado, en la medida en que se fortalecieran las políticas de capacitación y formación, representaban el 20,1% del total de beneficiarios. En su mayoría eran jóvenes-adultos de entre 26 y 45 años, con nivel educativo medio-bajo y sin calificación laboral. Su experiencia previa se reducía en muchos casos al mercado informal, donde tuvieron una inserción relativamente fluida hasta que la crisis del 2001 los expulsó definitivamente, más allá de alguna changa esporádica posterior.

El *tercer grupo* estaba formado en su mayoría por beneficiarios de entre 36 y 60 años con bajo nivel educativo y calificación laboral escasa. Muchos de ellos pobres estructurales que se encontraban fuera del mercado de trabajo desde hacía más de cinco años y que sólo realizaban

⁶⁰ Desde la perspectiva del “tiempo como horizonte” (Schedler y Santiso, 1999), la visión del presente como una ruptura con el pasado es una característica más propia de los periodos de ruptura que de los de reforma (Santiso, 2001).

⁶¹ Seguimos en este punto Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi (2010) y Diario Página/12, Suplemento Cash, 24/04/2005, pag. 2-3.

changas de forma esporádica. El tope de edad que fijan muchas empresas para la incorporación de personal se presentaba como la barrera más difícil de superar para este grupo. El relevamiento del MTEySS de la Nación consideraba a las líneas de apoyo a emprendimientos productivos como una opción válida para este grupo que representaba el 30,3% del total de beneficiarios.

El *cuarto y último grupo* estaba conformado mayoritariamente por madres con varios hijos o mayores de 60 años, muchos de los cuales ni siquiera buscaba empleo. Este grupo era el mayor peso numérico, conformado por el 34,4% de los beneficiarios.

Así, y a partir de la visualización de una población que tenía mayores posibilidades de “empleabilidad”⁶² y otra vinculada con la atención de la calidad de vida de los niños/as (este grupo se correspondía con la población beneficiaria con bajas probabilidades de empleabilidad y comenzaron a ser denominados dentro de la normativa como “vulnerables sociales”), se inició una estrecha articulación con otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, que a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1506/04 culminó con la reestructuración de la nómina de beneficiarios. Así, la noción de “empleabilidad” pasa a constituir el eje a partir del cual se reformulan los PTMC.

Hacia fines de 2005, el esquema de reformulación de los planes sociales diseñado por el gobierno nacional se estructuraba en torno a tres salidas posibles.

La primera herramienta del rediseño de los planes era el fortalecimiento del denominado Plan Manos a la Obra⁶³ (Plan Nacional de Desarrollo y Economía Social), inserto en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Con dicho Plan se intentaba desarrollar una cultura de emprendedores, esto es, personas que a través de la disposición de un capital inicial se

⁶² Para la OIT la empleabilidad es definida como aquellas competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presentan con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en un empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. Es decir, la empleabilidad hace referencia a la noción de adquirir las habilidades para obtener y conservar un empleo (Atucha y Labrunee, 2011; Scarfó, Hopp y Highton, 2009)

⁶³ Este programa fue creado por la resolución N° 1375/04 del Ministerio de Desarrollo Social y su propósito se centraba en constituirse en un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores de bajos recursos. En este sentido, sus ejes se focalizaron en la promoción del

involucraran en aquellos procesos propios de una empresa capitalista para la obtención de recursos. El Plan, diseñado para financiar la compra de insumos, herramientas y maquinarias hasta 15.000 pesos, contaba con una tipología especialmente diseñada para que los beneficiarios/as del PJJHD presentaran proyectos productivos denominada “Herramientas para el Trabajo”⁶⁴. Desde la perspectiva de Svampa (2005, 2007), complementar los planes sociales con el otorgamiento de subsidios para emprendimientos productivos actúa complejizando y transformando el modelo de ciudadanía asistencial-participativa que el neoliberalismo reserva para los excluidos, en la medida en que exige la autoorganización de los pobres. Este nuevo modelo de gestión estatal, vinculado al mandato de los organismos de crédito multilaterales, une de una “manera perversa” -en palabras de la autora- la gestión y el llamado a la eficiencia con la participación y la autoorganización comunitaria.

La segunda salida era la que planteaba la reestructuración más importante. La misma vino de la mano del Plan Familias, plan social al cual se buscaba derivar cerca de 750.000 beneficiarios de todo el país (mujeres con más de 3 hijos) con el objetivo de asegurar un ingreso mínimo, salud y educación. En el diseño de este Plan no estaba prevista la realización de una contraprestación laboral, sino que la contraparte requerida a las beneficiarias por parte del programa era la vacunación de los menores a cargo del titular (de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación), los controles bimestrales de embarazo y la asistencia regular de los niños a la escuela. Las beneficiarias, junto con sus familias, tendrían acceso automático a todos los programas sociales (Plan Remediar, Seguro Materno Infantil, Programa de Alfabetización).

De esta manera, el objetivo del gobierno era que permanecieran en el PJJHD sólo aquellos desocupados con posibilidades de inserción laboral en el corto plazo. Este Programa iría adquiriendo un perfil ligado a la capacitación con vistas a obtener un empleo, con algunas estrategias a largo plazo orientadas hacia los desocupados más críticos.

desarrollo local y la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios.

⁶⁴ Esta tipología tuvo un primer financiamiento del Banco Mundial en 2004, pero debido a la conflictiva relación entre el presidente Néstor Kirchner y el Fondo Monetario Internacional permaneció 10 meses sin recursos. Entre fines del año 2005 y principios de 2006 recibió un segundo financiamiento y pasó a depender del MTEySS (Hopp, 2009)

Los anuncios oficiales del 13 de febrero de 2006 introdujeron algunas modificaciones en este esquema inicial, pero sin lugar a dudas el cambio sustantivo se centró en que los beneficiarios tuvieron la posibilidad de optar por permanecer dentro del PJJHD, o bien mudarse al Seguro de Capacitación y Empleo (dependiente del MTEySS) o al Programa Familias por la Inclusión Social (bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social).

De esta manera, la nueva reingeniería del gobierno introdujo el Seguro de Capacitación y Empleo como la nueva herramienta para insertar a los desocupados en el mercado de trabajo. El mismo contemplaba una duración máxima de dos años⁶⁵ y sus beneficiarios deberían participar de actividades de orientación, formación, capacitación y práctica laboral, asimismo recibirían apoyo para la realización de emprendimientos individuales y asociativos⁶⁶. El monto del subsidio era de 225 pesos durante los primeros 18 meses y de 200 pesos en los seis meses restantes. Desde la perspectiva de Atucha y Labrunée (2011), este programa tenía una doble finalidad, por un lado mejorar las condiciones de empleabilidad y las remuneraciones de las personas con dificultades de inserción laboral y por el otro, el bienestar de los trabajadores y sus familias. Entrelazando de esta manera tanto criterios de eficiencia como de equidad.

En este sentido es importante señalar que el informe realizado en 2008 por el MTEySS sobre el PJJHD señalaba como motivos de desvinculación de los beneficiarios del Programa los siguientes: 38,6% de los casos por traspaso o migración al Plan Familias; 7,1% por adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo; 32,3 % por incorporación al empleo registrado y el 12% por pérdida de los requisitos de admisibilidad⁶⁷.

Según Auyero (2013), las protestas masivas que traen consigo las reformas en el mercado de trabajo se contienen a través de programas de asistencia que luego se mantienen vigentes (con

⁶⁵ En el año 2009 se extendió el periodo posible de permanencia de los beneficiarios en el Seguro de Capacitación y Empleo como paliativo a las repercusiones de la crisis internacional.

⁶⁶ Desde la perspectiva de Álvarez Leguizamón (2013) los programas que promueven la capacitación para adquirir “nuevas habilidades” incorporan los principios del *workfare* norteamericano, en la medida en que incentivan la incorporación al mercado de trabajo con disciplinamiento y contraprestación.

⁶⁷ La pérdida del beneficio por pérdida de los requisitos de elegibilidad ha sido señalada por Cecchini y Madariaga (2011), como la regla de salida más frecuente de los PTMC en América Latina. Para los autores, las familias salen de los programas cuando los hijos superan las edades respectivas, quedando en una situación de vulnerabilidad similar o peor a la que presentaban previo a la intervención.

alteraciones) para promover el trabajo. A medida que la protesta se disipa, el sistema de asistencia se contrae y expulsa a aquellos que son necesarios para poblar el mercado laboral. Sin embargo, la asistencia social también cumple una función reguladora del trabajo dentro de un Estado que ha reducido sus funciones. Así, un cierto número de personas no aptas para el trabajo permanecen en la nómina de asistencia. Sin embargo, el autor considera –siguiendo a Wacquant– que ésta dinámica cíclica de expansión y contracción de la asistencia pública ha comenzado a ser suplantada por una nueva división del trabajo de nominación y dominación de los sectores anómalos y dependientes de la población que coloca a la administración de servicios sociales y de la justicia penal bajo la égida de la misma filosofía conductista y punitivas.

En una línea similar Lo Voulo (2012) señala que la organización de las políticas sociales en base a programas diferenciados que distribuyen y/o segmentan a los beneficiarios diferenciando a los individuos o grupos en función de sus características personales se corresponde con una visión “liberal-subsidiaria” de las mismas consolidada en Argentina a partir de las reformas estructurales de la década del 90.

Son los elementos de esta lógica los que permitirían dar cuenta del surgimiento del PJJHD y la reformulación descripta.

5.1.- El financiamiento de la reformulación del Programa

La reformulación del esquema de asistencia fue financiada con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominado “Proyecto de transición del Jefes de Hogar” de 350 millones de dólares, aprobado el 23 de marzo de 2006.

El año anterior el Banco Mundial había detenido el otorgamiento del préstamo debido a que se detectaban irregularidades y problemas en la implementación del PJJHD⁶⁸. Los problemas detectados estaban asociados con la transparencia del proceso y del sistema de registro de

⁶⁸ En noviembre de 2005 el diario *Clarín* publica la confirmación, por parte de un funcionario del Banco Mundial, del bloqueo de la transferencia del préstamo para el PJJHD, argumentando que de la evaluación del Banco se desprende que el beneficio había sido recibido por personas que tenía empleo y/o que no tenían hijos (es decir, por personas que no reunían los requisitos). Para el funcionario entrevistado, esta situación mostraba a las claras la existencia de favoritismo y clientelismo.

beneficiarios y con el grado de aplicación de los criterios de elegibilidad para ser participante del Programa (Documento PAD, The World Bank, Report Nro. 32463-AR, 21 de febrero de 2006).

Con base en este diagnóstico el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz había ordenado detener el otorgamiento del crédito para la reformulación del PJJHD, que ya contaba con la aprobación técnica de la entidad. El banco envió nuevos consultores antes de destrabar el préstamo. Una vez solucionados los problemas detectados, el préstamo fue otorgado el 23 de marzo de 2006 y declarado efectivo el 18 de mayo de 2006.

El préstamo de 350 millones de dólares del BIRF era de margen fijo, pagadero en 13,5 años e incluía un periodo de gracia de 4,5 años⁶⁹. El financiamiento estaba, específicamente, destinado a los siguientes componentes: 1.- asistir a los beneficiarios en el mejoramiento de su perfil de empleabilidad al apoyarlos en que completen la educación básica, participen en cursos de capacitación, combinando el requisito de contraprestación con las capacidades para conseguir empleo, y que participen en subproyectos diseñados para darles experiencia y capacidades para futuros trabajos; 2.- apoyar a grupos reducidos de beneficiarios para financiar el costo de herramientas, equipos e insumos para actividades productivas y brindar asistencia técnica a los participantes que trabajen en estas actividades; 3.- apoyar el establecimiento de no menos de 100 oficinas de servicio de empleo en municipalidades seleccionadas. Las mismas serían las responsables de entrevistar a los postulantes al empleo dando prioridad a los beneficiarios del Programa, y derivándolos a actividades destinadas a mejorar sus perspectivas de empleo, como educación, capacitación, búsqueda laboral u orientación laboral y 4.- mejorar la gobernabilidad del PJJHD mediante el apoyo a las auditorías continuas, a las mejoras en los registros y bases de datos, a la ampliación de las actividades de monitoreo, a las campañas de información y comunicación, a las actividades con organizaciones locales para realizar consultas, proveerlas de información y promover su participación y a las evaluaciones de impacto.

Adicionalmente, en octubre de 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 700 millones de dólares (AR-L1006) para apoyar la expansión e implementación de Plan Familias. El financiamiento estaba direccionado a solventar tres componentes: 1.-.

financiar la provisión de subsidios monetarios condicionados focalizados a familias estructuralmente pobres; 2.- apoyar dos actividades: (a) la implementación de talleres para las madres en las áreas de educación de adultos, nutrición, prevención del trabajo infantil, salud y organización social y (b) actividades de apoyo escolar para niños en riesgo educativo y 3.- financiar el desarrollo y consolidación de los sistemas de: (a) control de contraprestaciones y actualización del padrón; (b) pagos de subsidios; (c) monitoreo y control de gestión; (d) evaluación; y (e) orientación y alerta de riesgos sociales.

6.- Diferencias y similitudes del PJJHD con los programas de empleo transitorio de la década del 90

La implementación del PJJHD marca una nueva etapa en las estrategias de atención a los grupos más vulnerables, definidos éstos a partir de las situaciones de pobreza y desocupación. Sin embargo, el PJJHD mantenía algunas características de los programas de empleo transitorios implementados en la década del 90⁷⁰. A continuación reseñamos las similitudes y las diferencias que el PJJHD guarda en relación a sus antecesores:

1. Un primer punto de inflexión respecto a la gestión asistencial implementada hasta ese momento es la dimensión cuantitativa del PJJHD (Golbert y Giacometti, 2008; Grondona, 2011; Pautassi, 2004; Rodríguez Enriquez y Reyes, 2006). El mismo tuvo una cobertura masiva y, en este sentido, extiende prestaciones asistenciales a un número significativamente mayor de personas afectadas por niveles inéditos de pobreza e indigencia⁷¹.
2. Los recursos destinados al PJJHD llegaron a representar casi el 1% del PBI, este monto nunca antes se había alcanzado y es superior al destinado a las otras

⁶⁹ El aporte de la contraparte local era de 700 millones de dólares.

⁷⁰ Algunos autores (Grondona, 2011; Neffa, 2009) han señalado que, en buena medida, las similitudes que guardaba el PJJHD con los programas implementados en la década del 90 se debía a un actitud “inercial” de funcionarios y técnicos de los modos de saber y hacer de la década precedente.

⁷¹ Es interesante observar que, tal como lo señala Sennett (2003), históricamente la proliferación en la base del sistema de protección social no ha simbolizado tanto la inclusión social como el parasitismo.

políticas de empleo (Neffa, 2009). También se diferencia por su inclusión en el presupuesto y por la naturaleza de su financiamiento (Freyre, 2013).

3. A diferencia de los programas anteriores no hay en el PJJHD una focalización orientada en función de los organismos ejecutores que seleccionan la población objetivo, sino que se promueve la autofocalización. Esto significa que los propios beneficiarios se reconozcan como tales (Pautassi, 2004).
4. A diferencia de los planes anteriores, en el PJJHD no se establecían criterios de distribución geográfica o cupos por provincia, sino que se realizó primero una inscripción de carácter general y luego se orientó hacia beneficiarios menos empleables y regiones más afectadas por la pobreza y la indigencia (Neffa, 2009).
5. El PJJHD se diferenciaba profundamente del PEL y del PEC, pues en ellos el marco normativo fue prácticamente inexistente, y habían facilitado un manejo discrecional y arbitrario, con un discurso asistencialista por parte de las autoridades estatales, que veían esos planes como una concesión gratuita y no como el cumplimiento de una obligación establecida jurídicamente (Neffa, 2009). Sin embargo, es importante destacar que la normativa del PJJHD fue modificándose con el paso del tiempo por diferentes circunstancias. Asimismo, el Programa no estuvo exento de críticas relacionadas con el reparto discrecional de los beneficios⁷².
6. En relación al requisito de realización de actividades de contraprestación por parte de los beneficiarios, es posible señalar mayores puntos de contacto con los programas anteriores que elementos de diferenciación. En esencia, las contraprestaciones no diferían de las que se habían emprendido en los anteriores

⁷² El vínculo entre el PJJHD y el clientelismo político ha suscitado un amplio debate, el cual llegó a trascender el ámbito académico haciéndose presente de forma recurrente en los medios de comunicación. El informe publicado en el diario Clarín el domingo 11 de septiembre de 2005 y el artículo de Lo Vuolo (2004) constituyen ejemplos en ese sentido. Sin embargo, la problemática del clientelismo en los PTMC no se restringe sólo al caso argentino, ya que la misma fue señalada como una práctica recurrente en América Latina (Barba Solano y Valencia Lomelí, 2001).

programas de empleo transitorio⁷³ bajo de la conducción del MTEySS (Neffa, 2009). No obstante, en el caso del PJJHD la contraprestación no estaba definida previamente, sino que era un trámite posterior a la incorporación al Programa (Pautassi, 2004).

7. Al igual que los programas anteriores el órgano de aplicación era el MTEySS y la implementación del Programa también se realizó de manera descentralizada con la participación de las provincias y los municipios (Pautassi, 2004).
8. Sin embargo, el PJJHD introducía un elemento novedoso en su implementación: incorporaba a la sociedad civil como mecanismo de control y fiscalización a partir de la creación de los Consejos Consultivos (Pautassi, 2004).

7.- El Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, ¿un PTMC criollo?

Desde la perspectiva de Danani y Lindenboim (2003b), la desocupación es la clave principal en la cual la sociedad argentina problematizó la cuestión del trabajo desde mediados de la década del 90. Así, una parte fundamental de la “gran transformación neoliberal” en el plano de la vida social, viene ocurriendo en el punto preciso de cruce entre trabajo y política social.

Es, en este contexto, que el PJJHD se constituye en *el* programa social del período inaugurado con la crisis de 2001. Su centralidad está dada, por un lado, por la magnitud que adquiere el Programa, y por el otro, por la presencia, en algunos casos medular, que cobra en la cotidianeidad de los sectores populares.

El PJJHD se trata de un programa que desde el inicio tiene fijados dos objetivos: el sostenimiento de ingresos y la generación de empleo. Para algunos autores esto supone la falta de un objetivo claro y/o una ambigüedad en los mismos (Neffa, 2009). Lo cierto es que al conjugar los objetivos mencionados plantea el interrogante: ¿se trata de un programa de sostenimiento de

⁷³ Sin embargo, y según Svampa (2007), a diferencia de los planes anteriores, el PJJHD condujo a una individualización de la contraprestación laboral. Para la autora, la medida apuntaba -en parte- a desarticular los

ingresos y de alivio a la pobreza o de una política de empleo? Derivado de esta cuestión central, tampoco queda claro en el diseño del Programa cuál era el mecanismo a través del cual se buscaba alcanzar la integración social: ¿era a través del ingreso o a través del trabajo?

Si es considerado como un programa de sostenimiento del ingreso y de alivio de la pobreza es posible señalar que el PJJHD contiene la estructura básica de un PTMC ya que incluye un componente de ingreso no remunerativo y un componente de desarrollo del capital humano. Ambos componentes estarían direccionados a disminuir la pobreza en el corto plazo y a construir capital humano como solución a la pobreza en el largo plazo, al romper su transmisión intergeneracional (Cohen y Franco 2010; Repetto y Díaz Langou, 2010). Para Álvarez Leguizamón (2013) es, justamente, en este último punto donde se encuentra el fundamento de los PTMC.

En lo que se refiere a las condicionalidades exigidas, los beneficiarios y/o sus familias debían cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, con los controles sanitarios y acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos⁷⁴. En los PTMC la forma de perseguir los objetivos señalados es a través de estas condicionalidades. Sin embargo, el Programa exigía también el cumplimiento de contraprestaciones laborales o no laborales. Es decir, exigía tanto condicionalidades como contraprestaciones. En este sentido, Álvarez Leguizamón (2013) ubica al PJJHD dentro de los programas de transferencias monetarias condicionadas a una contraprestación.

proyectos colectivos desarrollados por las organizaciones piqueteros y contribuyó al debilitamiento de la “cultura del trabajo”.

⁷⁴ En los inicios del Programa se presentaron muchas dificultades para hacer cumplir los requisitos relacionados con el control de la escolaridad de los niños, la cobertura de vacunación y el control de la salud de embarazadas. Con las finanzas de los gobiernos provinciales, responsables primarios de la gestión de los sistemas educativos y de salud en crisis, los atrasos en el pago de haberes de los empleados públicos y una alta conflictividad laboral, era imposible garantizar el acceso a los servicios sociales. Incluso, el momento de inicio del Programa fue un escollo para el cumplimiento de la condicionalidad educativa. Cuando el PJJHD alcanzó su mayor cobertura, en mayo del 2002, las clases ya hacía dos meses que habían comenzado. Esta exigencia del Programa parece, entonces, más vinculada a una estrategia de búsqueda de consensos y necesidad de articular un mensaje de un gobierno que ponía en marcha un país en crisis que a un objetivo real que se pretendiera cumplir. La ausencia de evaluaciones oficiales de impacto en los niveles de escolarización y de acceso a la salud es otro indicador de la poca importancia que el gobierno otorgaba a este requisito (Golbert y Giacometti, 2008).

Tal como ya señaláramos, al momento de la implementación del Programa el monto de la transferencia representaba el 75% del salario mínimo y se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Con el correr del tiempo, la relación entre uno y otro se fue deteriorando: hacia junio de 2005 el monto de la transferencia representaba el 23,8% del salario mínimo (Golbert, 2006).

Derivado de lo anterior y tal como puede observarse en los siguientes cuadros (Nº 6 y 7), el PJJHD ha tenido un escaso impacto en el alivio de la situación de pobreza en la que se encontraban los hogares beneficiados y un impacto algo mayor sobre los indicadores de indigencia⁷⁵.

Cuadro Nº 6: Incidencia del PJJHD en la pobreza e indigencia

	Octubre 2002 *				Segundo semestre 2003 **			
	Indigencia		Pobreza		Indigencia		Pobreza	
	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas
Total Urbano EPH	19,5	27,5	45,7	57,5	15,1	20,5	36,5	47,8
Recálculo excluyendo ingreso proveniente del PJJHD	21,9	30,5	46,2	58,1	17,2	23,5	37,1	48,5

Fuente: INDEC (2006)

* 31 Aglomerados Urbanos

** 28 Aglomerados Urbanos

Cuadro Nº 7: Incidencia del PJJHD en la pobreza e indigencia

	Segundo semestre 2004 **				Segundo semestre 2005 **			
	Indigencia		Pobreza		Indigencia		Pobreza	
	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas
Total Urbano EPH	10,7	15	29,8	40,2	8,4	12,2	24,7	33,8
Recálculo excluyendo ingreso proveniente del PJJHD	13	18,2	30,6	40,9	9,9	14,2	25,3	34,6

Fuente: INDEC (2006)

** 28 Aglomerados Urbanos

⁷⁵ La débil incidencia en el alivio a la pobreza en el corto plazo y su mayor impacto en el descenso de la intensidad de la misma es una característica compartida por los PTMC de la región (Barba Solano y Valencia Lomelí, 20011).

Esta situación ya era señalada en la Segunda Evaluación del PJJHD realizada por el MTEySS en 2004. Según el informe, al momento del relevamiento (junio de 2004) el 90% de los hogares beneficiarios se encontraba por debajo de la línea de pobreza, es decir que no disponían de ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios. A su vez, más de la mitad de los hogares beneficiarios se encontraba en una situación de pobreza extrema (indigencia), ya que con los ingresos percibidos no accedían a una canasta básica alimentaria⁷⁶. Sin la transferencia de 150 pesos los niveles de pobreza y especialmente los de indigencia serían aun más elevados: la pobreza alcanzaría a casi la totalidad de los hogares (96,3%) y la indigencia al 78%.

Sin lugar a dudas, las condiciones económicas, políticas y sociales de surgimiento del Programa incidieron en su diseño confiriéndole características que lo diferencian, no sólo de las estrategias utilizadas hasta el momento en la Argentina, sino también de otros PTMC implementados en algunos países de la región. La rápida incorporación de beneficiarios que en pocos meses alcanzó a casi dos millones de familias y la abrupta clausura de la inscripción a escasos dos meses de haberse iniciado el Programa marcó, sin duda, significativamente su diseño e implementación (Golbert y Giacometti, 2008). En este sentido es posible señalar las siguientes particularidades:

- La definición de beneficiario: la propuesta básica era transferir 150 pesos a las familias con jefes o jefas desocupados. Esta definición como desocupado y no como pobre o vulnerable marca una diferencia con respecto a otros PTMC. No obstante, esta diferencia en cuanto a la población objetivo no supuso, un cambio significativo en el perfil de los participantes con respecto a los otros PTMC en lo que se refiere al nivel de los ingresos ya que la mayor parte de sus beneficiarios se encontraban entre los primeros deciles de la población (Golbert y Giacometti, 2008). Asimismo, dados los criterios de focalización, el Programa excluía de la cobertura a distintos grupos poblacionales que podrían encontrarse en situaciones

⁷⁶ Para el cálculo se utilizaron los valores de las canastas correspondientes al mes de mayo de 2004 (INDEC). La Canasta Básica Alimentaria era de \$106,66 por adulto equivalente y la Canasta Básica Total de \$233,58 por adulto

de vulnerabilidad por ingresos, tales como ocupados pobres o adultos mayores pobres (Neffa, 2009; Rodríguez Enriquez y Reyes, 2006).

- La exigencia de una contraprestación: otra característica que lo diferenciaba de otros PTMC fue que el mismo exigía de sus beneficiarios una contraprestación laboral, la cual no siempre fue de naturaleza productiva. Además, el Programa era implementado por el MTEySS y no por el Ministerio de Desarrollo Social, o instancias ministeriales similares como sucede en otros países de la región (Golbert y Giacometti, 2008).
- Las condiciones de su surgimiento: las estrategias de transferencias condicionadas se presentan como planes de largo plazo. En cambio, la justificación del PJJHD fue la emergencia. La normativa inicial del PJJHD, si bien marcó las líneas generales del Programa, fue modificándose de acuerdo con la situación socio económica, los conflictos y las demandas de distintos actores sociales tanto en las condicionalidades puestas como en las misiones y funciones de las distintas instancias participantes (Cruces, Epele, Guardia, 2008; Golbert y Giacometti, 2008).
- El nivel del beneficio transferido era, incluso en los orígenes del Programa, insuficiente. Su monto se situaba por debajo de la línea de pobreza y era de carácter fijo. En la medida en que no tomaba en consideración la composición de las familias ni las repercusiones de la inflación, su impacto sobre la pobreza se fue reduciéndose sensiblemente (Neffa, 2009; Rodríguez Enriquez y Reyes, 2006)⁷⁷.
- No tiene en cuenta la composición numérica del hogar a pesar de presentarse como un beneficio familiar. De esta manera el beneficio “per cápita” es decreciente cuanto más numeroso es el hogar al cual va direccionado;

equivalente.

⁷⁷ Cecchini y Madariaga (2011), han señalado que la experiencia latinoamericana se caracteriza por la ausencia de mecanismos de indexación automática de las prestaciones y que sus ajustes se realizan generalmente de forma discrecional, teniéndose en cuenta las limitaciones fiscales imperantes y las presiones políticas.

consecuentemente, perjudica a los hogares más numerosos que suelen ser los más pobres (Lo Vuolo, 2004; Neffa, 2009; Rodríguez Enriquez y Reyes, 2006).

Entendido como un programa de empleo, el PJJHD se asemeja a las políticas activas⁷⁸, de activación, programas de ayuda para el trabajo o *workfare*, por tratarse de un programa asistencial condicionado al trabajo⁷⁹. Desde el punto de vista discursivo el Programa instala una visión del trabajo como un mecanismo para garantizar las necesidades materiales y como una vía para el reconocimiento y la recreación de las identidades individuales y colectivas. El trabajo es presentado como un canal para lograr la “inclusión social” incluso por fuera de la tradicional vía del empleo formal (Pautassi, 2004).

Más allá de diferencias de énfasis, de objetos de análisis y/o de puntos de vistas teóricos, varios autores (Britos y Caro, 2002; Danani y Lindenboim, 2003b; Freyssinet, 2006; Handler, 2003; Lo Vuolo, 2001 y 2004; Santos Ortega, 2004) concuerdan que este tipo de políticas se corresponde con las características del Estado neoliberal, en la medida en que el derecho al trabajo es reemplazado por una obligación, la cual se ve reforzada por fuertes dispositivos de control social.

En efecto, y para Lo Vuolo (2001), los fundamentos que se encuentran en la base de este tipo de programas muestran una fuerte consistencia con la ideología que sostienen los regímenes liberales de organización social. El autor reseña los fundamentos o argumentos de este tipo de programas en nueve elementos básicos:

a) *fomentarían la reciprocidad*: porque los derechos sociales estarían condicionados por obligaciones laborales para que el “intercambio con la sociedad” fuera recíproco,

b) *fomentaría una ciudadanía funcional*: porque los excluidos podrían adquirir los valores básicos que sostienen a la sociedad (trabajo, aprendizaje, sostén familiar) y así alejarían a las personas de los vicios sociales (delito, rupturas familiares),

⁷⁸ A diferencia de las políticas pasivas (que no crean directamente empleo), las políticas activas pretenden hacer frente al desempleo ya sea promoviendo nuevos empleos o manteniendo los existentes.

⁷⁹ Según Lo Vuolo (2001), el término *workfare* se ha constituido en un emblema opositor y alternativo al tradicional *welfare*. Así, la noción de *fare*, alude al camino, la senda y, eventualmente, el pago de una tarifa para acceder a algo, en este caso el beneficio social.

c) *combatiría a la dependencia y restauraría la ética del trabajo*: porque sería una suerte de “test de trabajo”, de la voluntad y esfuerzos de las personas para salir por sus propios medios de la situación de necesidad. Aceptar o no este tipo de programas serviría para diferenciar entre “merecedores” y “no merecedores” de la asistencia. La obligación de aceptar empleo se justificaría en el mismo sentido que la obligación de concurrir al sistema educativo hasta cierta edad: sería en beneficio de los asistidos y de la sociedad,

d) *reduciría costos en la política social*: porque, si bien se gastaría el subsidio, el empleo subsidiado generaría mayor valor agregado a la economía y, por lo tanto, ingresos tributarios,

e) *reduciría la economía “negra”*: porque los programas no permitirían acceder al beneficio a quienes trabajan fuera del mercado registrado,

f) *sería más equitativo*: porque actualmente hay gente que hace los mismos trabajos “basura” que ofrece el *workfare* pero a cambio de un salario, mientras que los beneficiarios de programas asistenciales no se les pide nada a cambio y gozarían de tiempo libre,

g) *legitimaría las transferencias sociales*: porque el resto de la sociedad percibirían que los beneficiarios se “esfuerzan” para recibir un beneficio y los empleadores que esas personas son “empleables”,

h) *reduciría la pobreza*: no sólo por el ingreso que se cobraría por el programa sino también porque traería a las personas al mercado de empleo, aumentando las posibilidades de su capacitación, y, finalmente,

i) *reduciría el desempleo*: no sólo directamente por el empleo forzoso que se obligaría a tomar a los desempleados, sino también porque disminuirían los estímulos a registrarse como “buscando empleo” a quienes no quieren siquiera aceptar el *workfare*.

Desde la perspectiva de Handler (2003), el paso hacia políticas activas para el mercado de trabajo en Europa Occidental representa un cambio fundamental tanto en el concepto de ciudadanía social como en la administración del bienestar. El autor considera que los beneficios sociales son derechos a los que se accede en virtud de un status: la condición de ciudadano. Bajo el nuevo régimen, los beneficios se vuelven condicionales: los derechos sólo se adquieren si se

cumplen *obligaciones*. En este sentido la ciudadanía social pasa de status a contrato. “*Para recibir los beneficios, los excluidos sociales ahora tienen obligaciones; éste es el nuevo contrato*” (Handler, 2003: 196). En este tipo de contrato, el beneficiario es dependiente y, prácticamente, carece de poder.

Para el autor, el *workfare* tiene tres componentes básicos: 1) deberían revertirse las políticas existentes que incentivan el abandono de la fuerza de trabajo por parte de los discapacitados y trabajadores de edad avanzada; 2) quienes se encuentran en los márgenes de la fuerza laboral deberían ser ubicados en trabajos o en capacitación, y 3) deberían reforzarse los requisitos de trabajo para los desocupados. En este sentido, lo nuevo serían las medidas de activación aplicadas a los beneficiarios de la asistencia social, buscando así, prevenir que los *merecedores* se vuelvan *no merecedores* y también reinsertar a éstos.

Por su parte, Freyssinet (2006) considera que, para analizar el surgimiento de la política del *workfare*⁸⁰, es necesario considerar dos aspectos. Por un lado, una idea de control social que apareció a fines del siglo XIX, bajo el supuesto de que los pobres son peligrosos y que para disciplinarlos deben ser sometidos al trabajo⁸¹. Esto se implementó mediante el mecanismo por el cual cualquier ayuda pública está condicionada por la demostración de la “voluntad” de trabajar, de la búsqueda efectiva de un empleo y de la total disponibilidad a aceptar cualquier puesto. Para el autor, estos mecanismos desaparecieron, por lo menos en los países desarrollados, en la época del pleno empleo. Pero con la interrupción del crecimiento y la reaparición de un desempleo masivo hubo una reactivación de esta concepción, simétrica al dominio de las ideas neoclásicas en el terreno económico. Así se llegó a que, por un lado, había que reforzar los mecanismos de mercado especialmente en el mercado de trabajo y que, por otro, había que reestablecer los mecanismos de control social para la población marginalizada de ese mercado de trabajo. En una dirección similar, Gaudié (1998) señala que la dupla asistencia-represión -la cual

⁸⁰ Desde la perspectiva de Marshall (1998), el origen de las políticas activas se remonta a los años 50 y 60 cuando, en un contexto muy distinto, se orientaba a un objetivo bien diferente: incrementar la oferta frente a la situación de escasez de mano de obra que caracterizaba a muchos países de Europa y evitar el desarrollo de la denominada “inflación por los costos”.

está en el fundamento de todas las políticas sociales hasta nuestros días- fortalece su costado represivo en las políticas de *workfare*.

De lo anterior se desprende una palpable antropología negativa, la cual se encontraría en la base de este tipo de políticas. Su argumento central supone que si la gente no está vigilada y no trabaja en el marco de obligaciones contractuales formales, cae ineluctablemente en un modo de vida caótico y dañino desde el punto de vista de la comunidad. Al mismo tiempo se asume, implícitamente, la miseria de un orden social que no parece disponer de otro medio, salvo el trabajo fabril, para hacer que los ciudadanos lleven una vida disciplinada y cooperativa (Offe, 1997).

No muy alejado de estas perspectiva, y desde el contexto local, Danani y Lindenboim (2003b) plantean que la “gran transformación neoliberal” encuentra en las políticas “de activación” un gran instrumento, en la medida en que no se tratarían de una respuesta a un problema (la desocupación), sino una nueva manera de concebir el trabajo y el empleo: de concebirlos como asistencia⁸². En este marco, se delimitarían -realizándose o no- varios dispositivos de control social. Los autores señalan:

“Desprovisto el trabajo de su condición productiva y generadora de valor (omitida la relación de explotación de la forma capitalista de organizar el trabajo y la producción en general) se reconoce en él tan sólo aquella propiedad por la cual proporciona a los sujetos sus medios legítimos de vida. El “tener trabajo” es, por lo tanto, en primer lugar un problema de los propios sujetos, y la sociedad parece interpretarlo como tal sólo en la medida en que asocia su “falta” a la superficialidad y a la ilegitimidad... al vandalismo y a la delincuencia. A diferencia de aquel proceso que analizara Offe para cuatro siglos antes, ya no se trata de sujetos que se niegan a “vivir de su trabajo” (definido éste como trabajo asalariado) y que por eso buscan “rutas de escape”, sino que el propio proceso de transformaciones capitalistas (en su etapa neoliberal), llevado a sus límites, sólo presenta rutas de escape como alternativas. Dicho de otra modo: en su compulsión por expulsar la fuerza de trabajo del proceso productivo, el capital arroja a los sujetos y les deja, contradictoriamente, “sólo” formas no capitalistas de supervivencia” (Danani y Lindenboim: 2003b, 261/262).

⁸¹ La idea de la donación decimonónica, que comporta un acto de sumisión para quien recibe el obsequio y se constituye en un método de control social en la medida en que crea una obligación, también es analizada por E. P. Thompson (2000).

⁸² La concepción del trabajo como asistencia, en el caso argentino, también es analizada por Raggio (2003).

Para los autores, este tipo de políticas *asistencializan* el trabajo y no constituyen un programa de inclusión sino una reconceptualización del trabajo, de la que deriva una reconceptualización de la asistencia y de los derechos, sean estos sociales en sentido restringido (derecho del trabajo) o amplio, como parte de la construcción de la ciudadanía. Se trataría, en este sentido, de programas portadores y productores de una integración con mayor subordinación y desigualdad sociales, que a la vez que especifican en otros términos la legitimidad de la vida, redefinen el trabajo mismo, presentándolo como algo cuya obtención debe ser “ganada”.

Es importante destacar que, para el caso de nuestro país, las contraprestaciones realizadas marcan claras singularidades -en comparación con las políticas de activación europeas y norteamericanas- debido a que buena parte de ellas no están orientadas a la participación en programas de entrenamiento laboral o a la inserción en el mercado de trabajo, sino a actividades fuera de él. Esta característica aproximaría al PJJHD a algunos programas franceses de inserción dirigidos a los jóvenes, “quienes están más predispuestos a trabajar fuera del mercado de trabajo regular a cambio de beneficios” (Handler, 2003: 192). En Francia, este tipo de políticas se considera *workfare* (Handler, 2003).

Visto como una política de empleo, el PJJHD ofrece una transferencia monetaria exigua y contraprestaciones de tiempo parcial, lo cual termina repercutiendo en las denominadas “trampa del trabajo no registrado” y/o “trampa del desempleo” en la medida que el acceso a un trabajo formal supondría la pérdida automática del beneficio (Rodríguez Enríquez y Reyes, 2006). Asimismo, una importante cantidad de investigaciones e informes han mostrado que las contraprestaciones laborales realizadas en el marco del Programa se corresponden con puestos de baja productividad, escasa o nula calificación, sin protección social, las cuales poco aportan a la construcción de escenarios de reinserción laboral⁸³. Esta situación se ve convalidada por la evaluación de Programa realizada por el MTEySS a dos años de su implementación. Para ese momento sólo 109.134 beneficiarios habían logrado insertarse en empleos registrados (MTEySS,

⁸³ Volveremos sobre este punto cuando analicemos el tipo de contraprestación realizada por los beneficiarios encuestados.

2004). Según Lo Vuolo (2004), fijar el nivel del pago por debajo del salario de mercado y promover condiciones de empleo inestables y sin los beneficios sociales del trabajo formal son los mecanismos utilizados por el esquema del *workfare* para no “distorsionar” el normal funcionamiento del mercado de trabajo.

Además de suponer la obligación de una contraprestación por el subsidio otorgado como característica central y relativamente novedosa, el PJJHD también se acerca a las políticas de activación aplicadas en Europa occidental en la medida en que no establece plazos para la percepción de los beneficios y en que, buena parte de la gestión y administración del Programa, se realiza a nivel local. Este último elemento, es resaltado tanto por Freyssinet (2006) cuando plantea la tendencia a la descentalización del control social, como por Handler (2003) cuando analiza las transformaciones en los conceptos de administración del bienestar, como características centrales de los programas de ayuda al trabajo⁸⁴.

Sin lugar a dudas, en su diseño el PJJHD supuso una combinación de esquema de empleo con transferencia monetaria condicionada. No obstante, el contexto de emergencia y la forma de implementación lo convirtieron en un programa de alivio a la pobreza (más que en una estrategia de superación de la misma) que actuó posibilitando la supervivencia (o mejor, contribuyendo a la misma) de las familias beneficiarias durante un período de crisis. Ya en los primeros años de aplicación del Programa algunos autores (Marshall, 2004; Monza, 2003) señalan que más que operar como un programa de empleo operó como una transferencia monetaria para atender la situación de extrema pobreza en la que se encontraba buena parte de la población argentina. Asimismo, aquellos componentes que vinculan más propiamente al PJJHD a una política del empleo se van desdibujando con el tiempo (un ejemplo de esto es la excepcionalidad en el cumplimiento de las contraprestaciones).

La reestructuración del PJJHD, anunciada por el gobierno nacional en 2006, podría ser interpretada como una tentativa en doble sentido. Mientras que, por un lado, el Seguro de Capacitación y Empleo apunta a fortalecer la inserción en el ámbito del mercado de trabajo de

aquellos beneficiarios -fundamentalmente hombres- con mayores posibilidades de inserción laboral en el corto plazo, promoviendo el empleo mercantil y su remercantilización administrativa (Britos y Caro, 2002; Offe, 1995); por el otro, el Plan Familias actúa en sentido opuesto, promoviendo la desmercantilización (Britos y Caro, 2002; Offe, 1995) de determinados grupos y, más específicamente, de determinados grupos de mujeres. De forma clara el Estado, a través de las políticas sociales, ocupa un rol central en la configuración de las relaciones de género (Auyero, 2013). Los supuestos ideológicos y culturales contenidos en este esquema actúan reproduciendo patrones de género que asignan lugares diferenciales a hombre y mujeres en el marco de las políticas del bienestar.

Mientras que el Seguro de Capacitación y Empleo profundizaba el proceso de atención individualizada al desempleado, el Plan Familias operaba como una modalidad de gestión de la fuerza de trabajo excedentaria, de la población denominada “inempleable” o “supernumeraria”, es decir, de aquella población trabajadora (en este caso femenina) que carece de las titulaciones, habilidades o conocimientos requeridos para su inserción mercantil (Britos y Caro, 2002) y como una política asistencial dirigida hacia la población pobre, vulnerable y/o en riesgo social desde la salud, la educación y el desarrollo de sus capacidades (Cruces, Epele y Guardia, 2008; Rodríguez Enríquez, 2006).

En la medida en que intentaba cubrir parte de las necesidades básicas, en que la transferencia monetaria está condicionada a ciertos compromisos asociados al mejoramiento del capital humano de las familias beneficiarias, en que varía el monto de la transferencia según el tamaño de las familias y en que permite ser complementado con otros programas sociales, el Plan Familias es visto por la literatura internacional como el programa argentino que más se aproxima a los PTMC desarrollados en América Latina (Lo Vuolo, 2009).

El Plan Familias también recoge parte de las nuevas orientaciones de la asistencia social norteamericana en la medida en que extiende el control social más allá de los comportamientos ligados al trabajo, alcanzando -incluso- los comportamientos familiares. Según Morel (1998),

⁸⁴ Tal como señalamos, la gestión descentralizada de los programas también es una característica de los esquemas de transferencias monetarias condicionadas. Sobre las particularidades de la gestión local del PJJHD volveremos en el

esta característica forma parte de una tendencia manifiesta en los últimos años que podría denominarse “efecto contaminación” de la norma de contrapartida, vinculada al *workfare*, sobre una amplia gama de comportamientos que superan la cuestión de la integración al empleo. Para la autora, la imposición de una contrapartida atraviesa las vivencias de los beneficiarios de la asistencia social, penetrando particularmente en los comportamientos vinculados a la familia, por medio de la experimentación de nuevas reglas incitativas y de obligaciones impuestas a los beneficiarios. Paralelamente, este tipo de programas han sido vistos como estrategias potenciadoras del rol reproductivo de la mujer, fortaleciendo el supuesto que el cuidado de las personas dependientes es una responsabilidad individual y femenina (Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi, 2010; Levín, Campostrini, Sosa y Voras, 2007; Levín, 2013; Pautassi, 2009).

Finalmente, es posible señalar que la responsabilidad compartida entre el MTEySS y el Ministerio de Desarrollo Social en el futuro del Programa confirmaría la bidireccionalidad de esta política. Esta separación jurisdiccional muestra claramente la bifurcación que se plantea en las formas de intervención. Sin embargo, más allá de esta separación se evidencian características asistenciales en las políticas para la población desocupada y simultáneamente la cuestión del empleo atraviesa en buena medida las acciones destinadas a la población pobre (Rodríguez Enríquez y Reyes, 2006).

Capítulo 3: Orígenes, evolución y contraprestaciones del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en la ciudad de Rosario

1.- El contexto rosarino

La posición geográfica privilegiada de la ciudad de Rosario fue un factor determinante de la evolución de las actividades productivas de la ciudad desde su formación. Esta posición le permitió constituirse en una bisagra entre el interior del país -en general- y la región pampeana -en particular-, y los mercados internacionales.

Hasta mediados de la década del 70, el aglomerado mostró una exitosa inserción en los sucesivos modelos de acumulación desarrollados en nuestro país. Así, su estructura productiva se fue conformando al influjo del impulso agro-exportador y en torno a la construcción de grandes obras de infraestructura como el puerto y la extensión de la red ferroviaria.

Durante el período siguiente, es decir durante el modelo de industrialización sustitutiva, el dinamismo en el aparato productivo vino de la mano del surgimiento de un importante número de pequeñas industrias livianas y mano de obra intensivas. Con el comienzo de la segunda etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones o proceso de industrialización “difícil”, la radicación de importantes inversiones de origen nacional y extranjero permitió una diversificación de la estructura económica del área, cuya producción ya no se destinaba solamente al mercado interno sino también, aunque en menor medida, a satisfacer la demanda externa. Esta intensificación del proceso de industrialización se realizó de la mano de la instalación de plantas químicas, petroquímicas y metalmecánicas.

La gran concentración de industrias en esa época, hizo que en esta zona el producto per cápita fuese un 7% superior al del promedio del país y el producto manufacturero de la región representara entre el 55 y 60% del total provincial, brindando en 1960 más de 64.000 puestos de trabajo (Castagna y Woelflin, 2005). Tal como señalan Robin y Crucella (2000/2), en los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado de 1976, el tejido industrial de la región se caracterizaba por el predominio de un sector manufacturero de marcada orientación “mercadointernista”, con la presencia de algunas actividades dedicadas a la exportación. En esa época el rol dinamizador del nivel de actividad estaba concentrado en la industria pesada y semi-

pesada, dedicada a la producción de insumos intermedios, y en la fabricación de bienes de capital y de consumo duradero. A partir de esa fecha, en el marco de la evolución francamente insatisfactoria registrada por la economía nacional a lo largo de los últimos treinta años, la trama productiva de la región experimentó un fuerte deterioro que se tradujo en crecientes niveles de subutilización de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, en un empeoramiento de las condiciones materiales de vida de buena parte de la población.

Las políticas macroeconómicas implementadas en la década del 90 tuvieron fuertes impactos en la ciudad y en la región, provocando una situación de crisis socioeconómica que se manifestó en tasas de desocupación que a lo largo de la década llegaron a ser superiores al 20% y en situaciones de pobreza⁸⁶ no experimentadas anteriormente (tal como se observa en los cuadros N° 8 y 9). La complicada situación del mercado de trabajo en el Gran Rosario fue una consecuencia concreta del impacto del proceso de reestructuración productiva en marcha desde que los planes de ajuste estructural se instalaron en Argentina, a mediados de la década de 70. En 1991, el efecto devastador de la apertura externa, la contracción del consumo interno y la ausencia del apoyo estatal para un ordenado proceso de reconversión se expresaba en las elevadas tasas de desempleo y subempleo.

La producción local resultó especialmente dañada por la apertura económica. El rubro textil acompañó esta tendencia negativa. A ello, se agregaron las irresueltas dificultades de la actividad química y petroquímica durante los primeros cuatro años de la Convertibilidad, imposibilitada de competir internacionalmente por el atraso en el tipo de cambio. En algunos grandes conglomerados productivos comenzaron a implantarse nuevas tecnologías productivas - como en la industria aceitera exportadora- que incidieron negativamente sobre la demanda laboral. Como resultado de esta contracción en el sector dinámico del área, las dificultades económicas se propagaron al comercio y los servicios, que experimentaron fuertes retrocesos en su nivel de actividad y en su capacidad de ofrecer plazas laborales a quienes quedaron fuera del circuito productivo manufacturero (Merlinsky, 2002). Rofman (1996) señala que la muy debilitada situación previa de la región se ve agravada por la apertura externa que daña al sector

⁸⁶ Se presentan datos sobre la incidencia de la pobreza a partir de 2001 ya que es el momento en el cual el INDEC comienza a publicarlos para los diferentes aglomerados urbanos a partir del uso de una metodología de transición (INDEC, 2006).

de producción de bienes de capital y a la elaboración de insumos vinculados con esta actividad, repercutiendo muy negativamente en el área y provocando el cierre de numerosos establecimientos manufactureros dedicados a tales actividades.

Así, a medida que transcurre la década del 90, fueron apareciendo de forma cada vez más nítida signos de un aumento de las condiciones desfavorables en que se desenvuelve la actividad más dinámica del área: la industria metalmecánica en sus más diversas manifestaciones y procesos. Este efecto negativo fue propagándose con gran intensidad a los restantes conglomerados productivos, hasta impactar en el comercio y en la industria. El aumento de la subutilización de la fuerza de trabajo en el área -otrota el principal centro abastecedor de maquinaria agrícola y bienes de capital a gran parte de la Pampa Húmeda- se constituyó en el dato más destacable del mercado de trabajo de la región.

**Cuadro N° 8: Principales indicadores del mercado de trabajo
Aglomerado Gran Rosario**

	Actividad	Empleo	Desocupación abierta	Subocupación horaria
May-85	39,3%	35,0%	10,9%	8,3%
May-90	37,3%	34,0%	10,4%	11,3%
May-91	39,7%	35,4%	14,5%	9,3%
May-92	39,7%	35,7%	9,5%	8,1%
May-93	39,3%	35,1%	13,5%	11,7%
May-94	40,5%	35,2%	16,9%	10,9%
May-95	41,5%	32,5%	20,9%	13,2%
May-96	39,7%	31,9%	19,7%	11,0%
May-97	39,4%	33,1%	16,1%	14,5%
May-98	40,3%	34,8%	13,8%	13,5%
May-99	40,3%	34,3%	14,9%	13,0%
May-00	39,1%	31,8%	18,5%	12,6%
May-01	42,8%	34,2%	20,1%	14,7%
May-02	41,3%	31,3%	24,3%	17,3%
May-03	43,3%	35,6%	17,9%	16,4%
2do Trimestre-04	44,7%	37,7%	15,7%	13,1%
2do Trimestre-05	46,0%	40,2%	12,4%	8,8%
2do Trimestre-06	45,9%	40,1%	12,8%	8,6%

Fuente: EPH-INDEC

La crisis socio-política de 2001-2002 profundiza las tendencias descriptas, dejando -en la ciudad y en la región- huellas más profundas que las señaladas por los indicadores a nivel nacional.

Cuadro N° 9: Pobreza e indigencia
Aglomerado Gran Rosario

	May-01	May-02	May-03	1º Semestre-04	1º Semestre-05	1º Semestre-06
Bajo la línea de pobreza						
- Hogares	27,3%	45,7%	37,5%	27,5%	21,4%	16,6%
- Personas	35,8	56,2%	47,9%	36,5%	28,5%	22,9%
Bajo la línea de indigencia						
- Hogares	10,6	21,0%	16,5%	9,6%	8,8%	6,2%
- Personas	14,6	28,0%	23,9%	14,2%	11,9%	7,5%

Fuente: EPH-INDEC

Las tendencias anteriormente descriptas comienzan a mostrar signos de reversión hacia 2003. A partir de ese momento es posible señalar importantes reducciones en los indicadores de pobreza, indigencia y desocupación abierta. Aunque de forma más tenue también es posible observar una reducción en la tasa de subocupación horaria.

El período que va entre 2004 y 2006 (contexto más próximo a la realización del trabajo de campo) muestra que las tendencias continúan mejorando. Sin embargo, se desacelera el ritmo de esa mejoría e incluso los indicadores correspondientes al segundo trimestre de 2006 marcan una leve reversión de las tendencias mencionadas comparadas con las del año anterior. Así, puede observarse un comportamiento relativamente estable de la tasa de actividad pasando de 44,7% durante el segundo trimestre de 2004 a 46,0% y 45,9% durante los segundos trimestres de 2005 y 2006, respectivamente. Situaciones similares presentan la tasa de empleo y desocupación abierta. Mientras la primera aumenta de 37,7% durante el segundo trimestre de 2004 a 40,2% en el mismo periodo de 2005, el segundo trimestre de 2006 muestra una ínfima caída en relación a igual período del año anterior. En tanto la segunda -desocupación abierta- pasa de 15,7% en el segundo trimestre de 2004 a 12,4% en el segundo trimestre de 2005 y a 12,8% en el segundo trimestre de 2006.

Contrariamente, la tendencia que muestra la tasa de subocupación horaria es la de una constante mejoría durante todo el período 2004-2006. Una situación similar puede observarse con los indicadores de pobreza e indigencia.

En términos de precariedad laboral⁸⁷, es posible señalar que no se vislumbran mejoras significativas para el período 2004-2006. Según datos del Observatorio Económico Territorial de la Universidad Nacional del Litoral⁸⁸, el porcentaje de empleados sin aportes jubilatorios fluctúa constantemente entre el 40% y el 45% para todo el período. Algo similar ocurre con los empleados no permanentes, cuyas cifras varían entre 33,4% y el 37% aproximadamente para igual período.

2.- El PJJHD en la ciudad de Rosario

La implementación del PJJHD en la provincia de Santa Fe se produce bajo la órbita de un convenio marco firmado entre el gobierno provincial y los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación. Dicho convenio regulará la puesta en práctica tanto del PJJHD como del Plan Mayores, los cuales responden a los requerimientos del Derecho Familiar de Inclusión, desde su puesta en marcha en febrero de 2002. Producto de la implementación de este convenio, la provincia de Santa Fe contaba, hacia octubre de 2005, con el 9,2% de los beneficiarios liquidados del PJJHD en el país.

Cuadro N° 10: Beneficiarios liquidados en la Región Centro y en la Provincia de Santa Fe - Octubre de 2005

	Nros. absolutos	Porcentaje
Total País	1.472.187	100,00
Región Centro y Buenos Aires	794.246	53,9
Provincia de Santa Fe	136.321	9,2

Fuente: SIEMPRO

En la ciudad de Rosario, la implementación del PJJHD tuvo un crecimiento acelerado durante los primeros meses, pasando de 18.766 beneficiarios en mayo de 2002 (mes de la primera liquidación) a 43.718 durante el siguiente mes; y, si bien los potenciales beneficiarios al

⁸⁷ Labrunée y Gallo (2005), definen al empleo precario como aquel que no ofrece seguridad sobre su continuidad y no está protegido por la legislación laboral. Para los autores esta caracterización sólo es aplicable al trabajo en relación de dependencia.

⁸⁸ <http://www.unl.edu.ar/oet/>

Programa debían inscribirse con anterioridad al 17 de mayo de 2002, el número de beneficiarios aumentó a lo largo de todo ese año, alcanzando su punto más alto en abril de 2003⁸⁹ con 58.240 beneficiarios. Estas características coinciden con el análisis que Golbert (2004) realiza en relación con las formas que adoptó el Programa para el total del país.

Desde abril de 2003, la evolución de los beneficiarios liquidados del PJJHD en la ciudad de Rosario muestra un lento pero continuo proceso descendente, alcanzando en diciembre de 2005 a 42.626 beneficiarios. Esta cifra marca, hacia fines del 2005, una caída del 26,8% de los beneficiarios del Programa con relación al punto máximo de la curva (abril de 2003). Entre las razones de la reducción del número de beneficiarios pueden señalarse: 1.- la inserción por parte de los beneficiarios en una actividad registrada o regulada en el mercado de trabajo producto de la reactivación económica del último período, con la consecuente quita del beneficio. Esta tendencia es más visible entre los hombres; 2.- el cumplimiento de la mayoría de edad de los hijos y 3.- diferente tipo de desordenes administrativos que ocasionan la injusta baja del subsidio (Arcidiácono y Zibecchi, 2007; Neffa, 2009; Pautassi, 2009).

Junto a esta tendencia a la reducción de beneficiarios se produce también una paulatina feminización del Programa a lo largo del tiempo. Esta tendencia verificable para el total del país, también es posible observarla en Rosario. Según datos de la EPH para el Aglomerado Gran Rosario la población femenina con planes de empleo representa el 78,5% del total para el segundo semestre de 2003, pasando a constituir el 92,4% hacia 2005 y llegando al 97,5% para el segundo semestre de 2006. Desde el inicio de la implementación del PJJHD la cantidad y la proporción de mujeres fueron superiores a la de varones, y esta diferencia fue acentuándose a medida que pasó el tiempo. La mayor inserción femenina en el PJJHD se relaciona con la importancia que tienen las estrategias de supervivencia familiar y las modalidades de obtención de recursos. En el caso de las mujeres de los sectores populares, debido a que poseen bajo nivel de instrucción y carecen de posibilidades de acceder a instancias de capacitación, terminan atrapadas por una condición particular: el trabajo de baja calificación al que pueden acceder se considera residual, pero a su vez están presionadas para realizarlo debido a la necesidad de

⁸⁹ Según datos del MTEySS para el total del país, el mes que registra el mayor número de beneficiarios liquidados es mayo del 2003.

sostén familiar. Para este grupo de mujeres el PJJHD representa una salida temporaria importante, que permite superar esa contradicción (Pautassi, 2003).

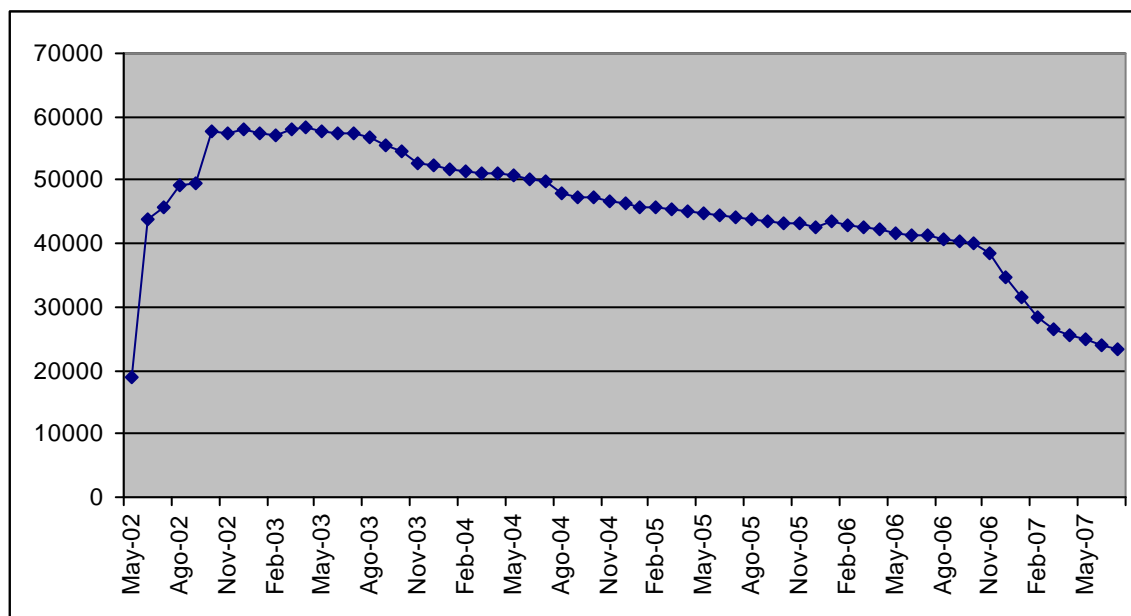
Varias razones han sido señaladas como elementos que permiten explicar la progresiva feminización del Programa:

- a) Una intencionalidad (en un principio latente y con posterioridad manifiesta) desde el Estado de mantener a las mujeres protegidas (Neffa, 2007, 2009).
- b) Mayor difusión y mejor administración e informatización (Pautassi, 2009).
- c) Existencia de una “disposición” femenina a aceptar programas asistenciales en tiempos de crisis, fundamentalmente porque se trata de la única opción disponible (Pautassi, 2009).
- d) Los PTMC apuntan a las mujeres desde su formulación, diseño y modalidad de gestión porque las consideran eficientes administradoras de los recursos y encargadas de cumplir con las condiciones que se exigen (Pautassi, 2009).

Sin embargo, la consecuencia de este fenómeno ha tenido lecturas diferentes. Para algunos autores los PTMC no favorecen la redistribución del cuidado, sino que fortalecen el orden actual; para otros, la lógica que predomina es la de apoyar a las mujeres en su rol como madres y potenciar su rol reproductivo.

El año 2006 constituye un periodo de transición para el Programa. Hasta el mes de octubre es posible observar de forma clara la continuidad de la tendencia descripta; es decir, hasta ese mes la reducción del número de beneficiarios continúa siendo lenta y paulatina, en tanto en los meses de noviembre y diciembre la tendencia se profundiza producto de la migración de beneficiarios a otras modalidades de asistencia.

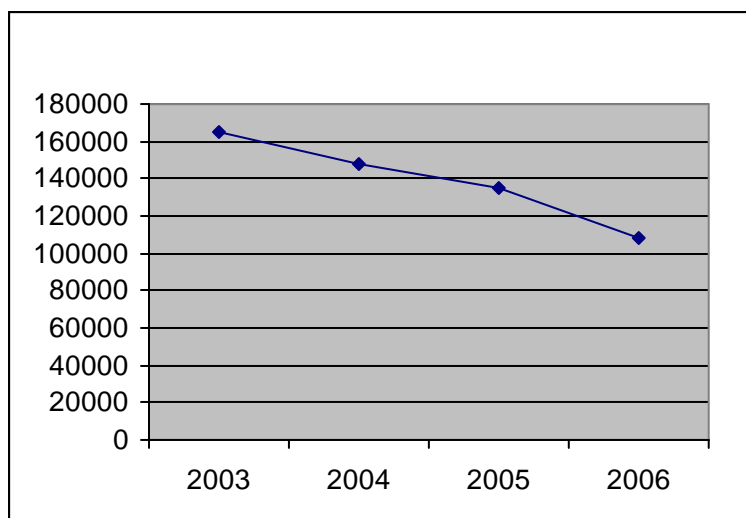
**Gráfico N° 1: Evolución de los beneficiarios liquidados del PJJHD
Ciudad de Rosario. Mayo 2002 – Julio 2007**



Fuente: Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral - Rosario – MTEySS

Los datos de la ciudad de Rosario acompañan una tendencia mayor también verificable tanto para el total de beneficiarios del país como en la provincia de Santa Fe. Según datos del MTEySS (2008b) desde mayo de 2003 a julio de 2007, 1.099.792 beneficiarios dejaron de cobrar el subsidio, cerca de la mitad porque consiguió un empleo y el resto porque pasó a otros planes o dejó de calificar para acceder a este beneficio. En tanto, para fines de 2006, la curva de la provincia de Santa Fe mostraba una caída del 34,65% en relación a diciembre de 2003, lo que equivale a decir que 57.287 santafesinos habían dejado de formar parte del Programa.

**Gráfico N° 2: Evolución de los beneficiarios liquidados del PJJHD
Provincia de Santa Fe. Diciembre de 2003 - Diciembre de 2006**



Fuente: Secretaría de Estado de Trabajo y
Seguridad Social - Prov. de Santa Fe

3.- Las actividades de contraprestación en los registros oficiales: territorialización y actividades de supervivencia

A partir del registro elaborado por el Servicio Municipal de Empleo dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario, y actualizado en 2004, es posible establecer que, del total de beneficiarios del PJJHD, menos del 45% realizan alguna contraprestación en cualquiera de las modalidades o componentes establecidos por el Programa.

Cuadro N° 11: Datos generales PJJHD en la ciudad de Rosario

	Nros. absolutos	Porcentaje
Total beneficiarios liquidados - Julio 2004	49.773	100,0
Total beneficiarios en sistema de contraprestación*	22.162	44,5

Fuente: Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral – Rosario – MTEySS y Municipalidad de Rosario

* Los datos corresponden al re-empadronamiento de beneficiarios de 2004

Estos datos contrastan fuertemente con los resultados de la Segunda Evaluación del Programa llevado adelante en el mes de junio de 2004 por el MTEySS de la Nación. El mencionado estudio fue realizado con base en la información recogida de una muestra probabilística de 3.657 beneficiarios del Programa. A esta muestra se la consideró representativa de un millón de beneficiarios que residen en la Ciudad de Buenos Aires y en cinco provincias, comprendiendo a las siguientes zonas geográficas: partidos del Conurbano Bonaerense, interior de la Provincia de Buenos Aires, Gran Córdoba, interior de la Provincia de Córdoba, ciudad de Formosa, interior de la Provincia de Formosa, alrededores de la ciudad de Rosario, ciudad de Santa Fe, interior de la Provincia de Santa Fe, Gran Tucumán e interior de la Provincia de Tucumán. Tomando como base los datos de esta segunda evaluación, Roca, Schachtel, Berho y Langeri señalan:

“...es destacable el nivel de participación de los beneficiarios en las actividades de contraprestación. Al momento de la realización de la encuesta más del 80% de los beneficiarios estaba participando de ellas. Sin embargo, dada la baja calificación de las tareas realizadas, se deberían concentrar los esfuerzos y las acciones hacia programas de capacitación laboral y reentrenamiento, para lograr una mayor inserción laboral de beneficiarios en puestos de mayor calidad. Sin perjuicio de ello, los resultados del estudio indican que la elevada participación en actividades de contraprestación contribuye al mantenimiento de hábitos laborales y al fortalecimiento de la autoestima” (Roca, Schachtel, Berho, Langeri, 2005: 27).

El informe detalla que, al momento de la realización de la encuesta, más del 80% de los beneficiarios declaró estar participando de actividades de contraprestación. Esa proporción superaba el 90% en los casos de Tucumán y Formosa. En la provincia de Santa Fe, la proporción era del 80,7%.

Estos datos no se alejan en demasía de aquellos surgidos del informe “Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Impacto y características de los beneficiarios” publicado por el SIEMPRO en febrero de 2003. Dicho informe señala que de cada diez beneficiarios del PJJHD, más de siete llevan a cabo una contraprestación laboral, sin distinción por sexo. Los datos surgen tanto de una evaluación realizada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe por el MTEySS, como de la medición de la EPH en el Gran Buenos Aires. Es importante destacar que el informe marca fuertes diferencias entre los partidos del Conurbano -donde el

73,7% de los beneficiarios realizan algún tipo de contraprestación- y la Ciudad de Buenos Aires, en la cual el nivel apenas supera el 40%. Para ese momento, el porcentaje de beneficiarios que realizaba algún tipo de contraprestación laboral en la provincia de Santa Fe rondaba en 73%⁹⁰.

Sin embargo, y para fines de ese mismo año, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, señalaba al clientelismo y al no cumplimiento de la contraprestación laboral por parte de la “gran mayoría” de los beneficiarios como uno de los límites concretos del PJHD (Kirchner, 2003).

El Registro de Proyectos de Contraprestaciones elaborado por el Servicio Municipal de Empleo de la ciudad de Rosario está formado por 3406 proyectos avalados por alguna institución⁹¹. Estas oficiaban, en la gran mayoría de los casos, de *lugar físico* donde se realizan las contraprestaciones; y son las que corrientemente se denominan *centros de contraprestación*. En este sentido, el cuadro N° 12 muestra la distribución de los beneficiarios por institución que avala los proyectos de contraprestación de los cuales forman parte⁹².

Cuadro N° 12: Distribución de beneficiarios por institución que avala los proyectos de contraprestación de los cuales forman parte

	Nros. absolutos	Porcentaje
GRUPO I: Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por la Municipalidad de Rosario	2.274	10,26
GRUPO II: Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por escuelas o centros de capacitación	1.406	6,34
GRUPO III: Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por otras instituciones públicas (provinciales y/o nacionales)	344	1,55
GRUPO IV: Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por centros comunitarios y asociaciones civiles	18.113	81,72
GRUPO V: Beneficiarios en proyectos de contraprestación de reinserción laboral en empresas privadas	18	0,08
Total beneficiarios en sistema de contraprestación	22.162	100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Empleo- Secretaría de Promoción Social- Municipalidad de Rosario

⁹⁰ Neffa (2009) se hace eco de estas encuestas cuando señala que un alto porcentaje (entre un 75% y un 80%) de los beneficiarios cumplían con actividades de contraprestación. Sin embargo, el autor también señala que esa proporción mostraba una clara tendencia descendente a partir de 2003.

⁹¹ Antes de su actualización en 2004, el Registro estaba formado por 9.000 proyectos.

⁹² Es importante destacar que este Registro de Proyectos de Contraprestación no sigue de manera estricta la organización de las actividades o componentes de contraprestación previstos en la normativa. Hemos decidido realizar un primer agrupamiento por institución que avala el proyecto. El objetivo es contornear la dificultad que presenta caracterizar a un proyecto sólo por un nombre.

Del cuadro N° 12 se desprenden algunos datos sumamente relevantes para analizar las formas que toman las contraprestaciones del PJJHD en Rosario:

- 1) La centralidad que poseen los proyectos avalados por centros comunitarios y asociaciones civiles en el sistema de contraprestación, el cual concentra más del 80% de los beneficiarios.
- 2) El segundo grupo en importancia está conformado por los proyectos avalados por el propio municipio (10%).
- 3) El tercer grupo en importancia, que reúne 1.406 beneficiarios, se conforma por los proyectos avalados por escuelas o centros de capacitación laboral. Estos proyectos no son exclusivamente de formación o capacitación laboral sino que además reúnen contraprestaciones en tareas tales como mantenimiento y limpieza, apoyo escolar y administración.
- 4) Finalmente, es importante destacar la irrelevancia, en términos numéricos, que cobra la cantidad de beneficiarios que participan en el componente de reinserción laboral en empresas privadas. El volumen de este componente, para la ciudad de Rosario, es de un escasísimo 0,08 %. De la comparación de este dato con los resultados de la segunda evaluación del programa realizada por el MTEySS podemos establecer que, tanto a nivel local como a nivel nacional, este componente es el que ha demostrado menor eficacia en su implementación. Si bien a nivel nacional la cifra es un poco más significativa (2%) que a nivel local, de igual manera representa el menor porcentaje dentro del total de las modalidades de contraprestación.

Es interesante destacar que entre los beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por la Municipalidad de Rosario, prácticamente el 30% lo hacía en los Centros

Crece⁹³, dependientes de la Secretaría de Promoción Social; mientras que el 54,3 % estaba incluido en proyectos de escolarización avalados por el municipio.

Cuadro N° 13: Distribución de beneficiarios al interior del grupo de beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por la Municipalidad de Rosario (GRUPO I)

	Nros. Absolutos	Porcentaje
Beneficiarios en proyectos de escolarización avalados por la Municipalidad de Rosario	1.213	53,34
Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por los Centros CRECER (Sec. de Promoción Social)	672	29,55
Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por otras reparticiones municipales	389	17,1
Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por la Municipalidad de Rosario	2.274	100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Empleo- Secretaría de Promoción Social- Municipalidad de Rosario

Un importante número de las actividades realizadas por los beneficiarios del PJJHD en los Centros Crece están relacionadas con el apoyo y la colaboración en las tareas que allí se desarrollan, centradas fundamentalmente en la alimentación básica y estimulación psico-motriz de los niños como formas de combatir la desnutrición y de garantizar el ingreso a la educación formal. Junto a estas actividades, los beneficiarios también desarrollan talleres de capacitación y llevan adelante diferentes emprendimientos vinculados, fundamentalmente, con la salud y la alimentación.

Si a los beneficiarios en proyectos de escolarización avalados por el municipio le sumamos aquellos beneficiarios que participan de proyectos avalados por escuelas y centros de capacitación (excluyendo aquellos beneficiarios que realizan actividades de administración, mantenimiento y limpieza) es posible establecer que el componente capacitación y formación

⁹³ El Programa Crece se implementa en 1997 y tiene como objetivo llevar adelante acciones de asistencia directa y promover procesos de inclusión en las zonas más carenciadas de la ciudad de Rosario. En los mismos se desarrollan actividades de estimulación, capacitación y emprendimientos productivos que incluyen tanto a los niños como a las familias y a las organizaciones del barrio donde se establecían los centros. Hacia 2010 funcionaban en la ciudad de

profesional en la ciudad de Rosario incluye alrededor del 8% de los beneficiarios que realizan algún tipo de contraprestación⁹⁴.

Un apartado especial merece el importante número de beneficiarios que se concentran en proyectos de contraprestación avalados por centros comunitarios y asociaciones civiles (81,72%). Dentro de este grupo, cuatro tipos de proyectos concentran más del 72% de los beneficiarios. Ellos son: roperos y costureros comunitarios (21,2%), comedores comunitarios y copas de leche (19,6%), limpieza y mantenimiento (17,4%) y huertas (13,9%).

Cuadro N° 14: Beneficiarios en proyectos de contraprestación avalados por centros comunitarios y asociaciones civiles por tipo de proyecto

	Nros. Absolutos	Porcentaje
Beneficiarios en proyectos de huertas	2524	13,93
Beneficiarios en proyectos de cría de animales	48	0,26
Beneficiarios en proyectos de prevención de salud y medio ambiente	351	1,93
Beneficiarios en proyectos culturales y educativos	645	3,56
Beneficiarios en proyectos deportivos y recreativos	105	0,57
Beneficiarios en proyectos de limpieza y mantenimiento	3.164	17,46
Beneficiarios en proyectos de oficios	286	1,57
Beneficiarios en proyectos de desarrollo comunitario y social	348	1,92
Beneficiarios en proyectos de apoyo escolar	324	1,78
Beneficiarios en proyectos administrativos y afines	388	2,14
Beneficiarios en proyectos de reciclado y tratamiento de residuos	74	0,40
Beneficiarios en proyectos de cuidado de niños, ancianos y discapacitados	351	1,93
Beneficiarios en proyectos de artesanías y manualidades	1.312	7,24
Beneficiarios en proyectos de roperos y costureros comunitarios	3.857	21,29
Beneficiarios en proyectos de comedores comunitarios y copas de leche	3.565	19,68
Beneficiarios en proyectos de servicios varios y/o sin especificar	499	2,75
Sin datos	272	1,5
Total	18.113	100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Empleo- Secretaría de Promoción Social- Municipalidad de Rosario

Rosario 29 centros que dependían del Programa Crecer. El Programa Crecer funcionó hasta 2011, cuando el gobierno municipal comenzó a ensayar un rediseño de estas políticas.

⁹⁴ Desde la perspectiva de Neffa (2009), la normativa del MTEySS que intentó regularizar el componente educación, no tuvo mucho efecto. Para el total nacional sólo el 8,4% de los beneficiarios cumplía este tipo de contraprestación en 2004 y luego el porcentaje fue disminuyendo.

Del análisis de Neffa (2009) para el total del país surge una caracterización similar del tipo de contraprestaciones realizadas por los beneficiarios. En este sentido el autor señala que la mayor parte de las contraprestaciones bajo la forma de trabajo tenían lugar en proyectos comunitarios y tareas administrativas provinciales o municipales y que prácticamente la totalidad de los beneficiarios se concentraban en tareas operativas y en tareas poco o nada calificadas del sector terciario.

De los datos surgidos del Registro de Contraprestaciones elaborado por el Servicio Municipal de Empleo de la ciudad de Rosario, se desprenden dos ejes analíticos centrales. El primero de ellos, relacionado con la localización geográfica de las actividades de contraprestación, hace referencia al *fuerte asentamiento territorial* de las mismas. Mientras que el segundo de los ejes, referido al tipo de actividades, da cuenta *del predominio de actividades relacionadas con la supervivencia material* de los beneficiarios y de la comunidad a la cual pertenecen.

Varios autores (Grimson, 2003; Merklen, 2004, 2005; Salvia, 2004; Svampa, 2005, 2006) han hecho hincapié en el fuerte *anclaje territorial* que vienen cobrando una serie de prácticas e iniciativas ligadas a los sectores populares⁹⁵.

Según Svampa (2005), en Argentina, la reconfiguración de la matriz popular en términos territoriales/comunitarios apareció como una exigencia -y una creación, a la vez desde arriba y desde abajo- para contener el conflicto social, frente a la destrucción del mundo obrero popular.

Para la autora, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal constituyó el telón de fondo de la inflexión de la política en los barrios, la cual tendió a recluirse en su dimensión más asistencial. Dicha inflexión debería explicarse también a la luz de los cambios impuestos por el nuevo modelo de gestión, basado en tres presupuestos centrales: la división del trabajo político

⁹⁵ Siguiendo a Santillán y Woods (2005) entendemos por territorialización las transformaciones operadas tanto en los dispositivos de intervención social como en las formas de organización de los sectores populares, ligada al crecimiento del desempleo y de la pobreza desde la década del 70. Indica el desplazamiento al espacio barrial de conflictos y luchas, no centrados en la producción, y el desarrollo de mecanismos de procesamiento de estos conflictos en el terreno, tales como la descentralización estatal, el clientelismo y la nueva filantropía. Así, en la definición de “territorialización de las prácticas” se entrecruzan distintos intereses contradictorios pero que paradójicamente coinciden en incentivarla: por un lado, el tipo de política social y las características del proceso productivo actual que traslada el conflicto a los barrios y, por otro lado, las posturas de las organizaciones sociales y

por medio de la profesionalización de las funciones, la política de descentralización administrativa y la focalización de la ayuda social. Estos tres ejes de la política neoliberal constituyen, para Svampa, la clave para la reformulación desde el Estado de la relación con las organizaciones sociales -peronistas y no peronistas-. Así, el pasaje de la fábrica al barrio se fue consolidando a través de la articulación entre descentralización administrativa, políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias, lo cual trajo consigo una reorientación de las organizaciones locales.

Por su parte, Merklen (2005) destaca que uno de los elementos del viraje que experimentan las políticas sociales -producto de la deficiencia institucional y del aumento del número de individuos que no encuentran soportes suficientes en el mercado de trabajo- se encuentra en su anclaje o inscripción territorial. En este sentido subraya “la incorporación activa de las organizaciones de base territorial en la puesta en marcha de las políticas sociales” (Merklen, 2005: 57) y observa la manera en la cual el Estado encuentra en las organizaciones barriales un nuevo actor social y, por sobre todo, un interlocutor válido que permitiría re-articular a los sectores más vulnerables con el Estado⁹⁶. Para el autor, la descentralización y el enfoque de las políticas sociales son los elementos centrales que contribuyeron a territorializar el acceso a la ayuda social⁹⁷. La territorialización se presenta, así, como una última etapa o corolario (Alvarez, 1998; Castelnuovo *et al*, 2009) de los procesos anteriormente descriptos.

de los propios sujetos que ante el derrumbe de las pautas de referencia establecidas que sugerían un entorno social más duradero y digno buscan la seguridad perdida en el barrio.

⁹⁶ Los movimientos de desocupados también han tenido un papel relevante en este proceso. Sin embargo, ese papel no ha sido homogéneo en todo el país. Las características particulares de las organizaciones piqueteras en la ciudad de Rosario y la relación que mantuvieron con las diferentes instancias gubernamentales pueden encontrarse en Iglesias (2008).

⁹⁷ Estas transformaciones pueden ser comprendidas dentro de lo que Castel (2004) denominó “nuevo régimen de protección social” orientado a los dejados-de-lado de las protecciones clásicas. Este nuevo referente de protecciones comporta diferencias sustantivas con el esquema de la propiedad social caracterizado por la hegemonía de las protecciones incondicionales fundadas en el trabajo. La oposición entre estos dos registros podría sintetizarse de la siguiente manera: apertura generalizada e igualitaria *versus* objetivos y discriminación positiva; prestaciones uniformes *versus* definición de las prestaciones a partir de necesidades sociales; sectores separados unos de otros *versus* tratamiento transversal del conjunto de los problemas sociales experimentados por una misma persona; administración generalizada de la gestión de un riesgo o de un problema *versus* gestión participativa sobre la base de relaciones contractuales con el conjunto de los actores susceptibles de intervenir; administración de gestión *versus* administración de misión; centralización y administración piramidal *versus* descentralización y territorialización.

De lo anterior es posible desprender que este proceso no puede ser analizado desde la sola retirada del Estado, sino que es preciso dar cuenta de los mecanismos y sentidos mediante los cuales el Estado se ha retirado y en cuales se ha transformado (Grimson, 2003). Más aún, y en este marco, el eje central de la cuestión se encontraría en la manera específica de articulación histórica que se produjo entre los efectos de las transformaciones del mundo del trabajo con las políticas sociales neoliberales de fuerte matriz asistencial:

“.....el círculo vicioso por el que, cuanto más dependientes de la asistencia se volvían los pobres, más disminuían los recursos de que disponía el Estado, puede ser visto desde otra óptica: este círculo giraba entonces en el sentido contrario. Paradójicamente, cuanto más restringidos eran los rendimientos del sistema político, más indispensables se volvían en los barrios pobres. La espiral de la dependencia avanza así sobre la base de recursos cada vez más escasos” (Merklen, 2005: 57)

Por el otro lado, el barrio constituye una importante fuente de identidad en los sectores populares argentinos. Para Merklen (2005), el barrio conquistó ese lugar con el arribo masivo de inmigrantes de ultramar a principios del siglo XX, eclipsándose con la consolidación de una estructura salarial y el desarrollo del Estado Social a partir de los años 40, para reaparecer hacia los 80.

En efecto, y de manera similar a la de otros países de América Latina, Argentina desarrolló desde fines de la dictadura militar un conjunto de asociaciones de base territorial nucleadas en torno a la lucha y a la gestión de los servicios y las necesidades más básicas, orientando sus demandas fundamentalmente hacia el Estado. Es, desde el comienzo de los años 80, y en especial a partir de los años 90, que se desarrollan en nuestro país episodios de cooperación, movilización y protestas colectivas que encontraron su centro organizativo en el barrio (Merklen, 2005).

Este planteo aparece un tanto matizado en la visión de Feijoó (2001). Para la autora, la acción del Estado (como proveedor de consumos colectivos), junto con la familia (como unidad mediadora entre el individuo y la estructura social), y una “compleja trama de relaciones comunitarias” formaron parte de la red que sostenía el progreso. Claro que el objetivo de esa acción comunitaria era complementar o sustituir la acción del Estado allí donde era insuficiente,

llegaba tarde o no atendía la demanda debido a sus particularidades o por su rápida expansión. Ese país integrado, ese “viejo país”, tenía un escenario privilegiado: el barrio, presencia palpable en la materialidad de la sociedad de fomento, la parroquia, las viejas comisiones barriales y el jardín de infantes vecinal. Desde la perspectiva de la autora, el barrio sobrevive, pero sobrevive debilitado, ya no lo hace en carácter de centro de interacción monopólica como ocurrió en el pasado. Sin embargo, “la apelación al barrio como principio organizador de la cotidianeidad y de las relaciones sociales no parece haber sido fácilmente sustituido por otros escenarios” (Feijoó, 2001: 20).

Svampa (2005, 2006) señala que, durante la década del 90, y, en el marco de una matriz social más comunitaria, el trabajo territorial fue adquiriendo una cierta “autonomía relativa” respecto de los sindicatos y la militancia política. Las nuevas estructuras de gestión desarrolladas a lo largo de esta década apuntaron a reformular la relación de las organizaciones populares preexistentes, y tendieron a definir el grado o los límites de esa “autonomía relativa”, en el marco de una militancia local, de tipo social y deliberadamente despolitizada. El predominio de la participación de las mujeres en este contexto no sería casual:

“El pasaje que va de “la unidad básica al comedor comunitario” arranca en los 80, con los primeros planes sociales que instaura el gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, y en el nivel nacional, el gobierno de Alfonsín; pero estos forman parte de una política más sistemática a lo largo de los 90, y finalmente entran en una nueva etapa en el año 2002, a partir de la masificación de los planes sociales, realizada bajo el gobierno de Duhalde y reconfirmada por Kirchner” (Svampa, 2005: 194-195).

En el medio de la crisis y de la desaparición de las instituciones típicas de la sociedad salarial, estas redes territoriales se fueron densificando y orientaron cada vez más sus acciones al mundo de los pobres urbanos, proceso que suponía el apartamiento progresivo del mundo de los trabajadores urbanos. En este contexto, el barrio llegó a constituirse en la muralla sin la cual la supervivencia habría resultado verdaderamente amenazada para muchos en los años 2001, 2002 y 2003 (Merklen, 2005).

De esta manera, el concepto de territorialidad de las prácticas se presenta como una herramienta sumamente útil para dar cuenta de uno de los rasgos centrales que tomaban las

actividades de contraprestación realizadas por los beneficiarios de los PJJHD en la ciudad de Rosario.

La cercanía y la familiaridad que brinda el barrio, en tanto espacio social más próximo, se convierte en un elemento clave para poder explicitar la forma que toman buena parte de las actividades de contraprestación. Derivado del fuerte peso de las estrategias de supervivencia de los hogares en las trayectorias laborales y vitales de los sectores populares, el hecho de contraprestar en el barrio se presentaba como un camino de salida o una estrategia de conciliación, ante la dificultad de integrar las obligaciones familiares con la necesidad de aportar un ingreso al hogar. Sin lugar a dudas, este elemento aparece fortalecido en el caso de las mujeres, principales beneficiarias del Programa.

Ambas características -el fuerte arraigo territorial y el predominio de las actividades relacionadas con la supervivencia material en la realización de las contraprestaciones- aparecen también reflejadas en una investigación que explora las experiencias de vida de los jóvenes en Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires, en torno a los planes sociales. De la investigación se desprende:

“La cercanía, el factor espacial desempeña un papel importante al momento de evaluar la funcionalidad del plan en la vida de estas jóvenes. El desarrollo del plan al interior del barrio no sólo brinda accesibilidad empírica al mismo, también les permite satisfacer sus necesidades en relación a su propia responsabilidad familiar” (Correa y Hermida, 2005: 9)

Junto a la cercanía y familiaridad que aporta el barrio, el tipo de actividad que se realiza como contraprestación permite cerrar un círculo mínimo de contención a la vulnerabilidad social en la que se encuentran estos sectores. Las huertas, comedores, copas de leche y roperos permiten, a los beneficiarios y sus familias, nutrirse económicamente, *redondear* sus ingresos, en la medida en que las actividades comunitarias posibilitan el funcionamiento y la articulación de redes de circulación y distribución de bienes entre los vecinos-beneficiarios.

Desde la perspectiva de Merklen (2005), el entrelazamiento de los círculos de sociabilidad en los barrios obedece a una necesidad semejante a un “seguro multirriesgo” de los habitantes. Así, el barrio se configura como un espacio en el que varias formas de intercambio y

de cooperación coexisten de manera superpuesta, estructurando la vida colectiva. A medida que los sectores sociales se empobrecen y que las protecciones sociales son deficitarias, si no inexistentes, la supervivencia depende de la distribución directa de toda suerte de bienes y de productos (ir)regularmente repartidos en los barrios. Esta regularidad del carácter irregular de la distribución de bienes y servicios conlleva la conversión de lo irregular en regla.

En este sentido, para el autor, las solidaridades locales no producen prácticamente ningún recurso. Ellas más bien distribuyen y hacen circular medios que las organizaciones barriales recuperan fuera. Más aún, las estructuras de solidaridad local de gran consistencia que se observan en los barrios populares no pueden en ningún caso suplir a las protecciones sociales y a las formas de socialización aportadas por las instituciones y el trabajo.

Cuando más amplias y comprensivas son las estructuras universales, más pierde el barrio en importancia como sostén de los individuos y de las familias, y menor se hace también su presencia en la identidad de aquellos. En contraposición, el barrio puede resultar la vía privilegiada de formación de la identidad cuando los lazos de integración social no son lo suficientemente sólidos, como en el caso de todos los barrios asociados a formas de exclusión o de fractura social, e incluso de marginalidad, donde los lazos tejidos en el marco de las solidaridades barriales ocupan los espacios vacantes dejados por las instituciones.

No obstante, y siempre desde esta perspectiva, el barrio presenta dos límites claros. El primero de ellos está relacionado con el supuesto de que las regularidades de la vida del barrio se realizan en gran medida fuera de éste. La mayoría de las regulaciones de la vida social corresponden al dominio institucional, especialmente al Estado, incluso en las sociedades en las que el Estado está poco presente. El segundo límite supone que la participación de los individuos en sociedad no puede hacerse exclusivamente en el dominio de lo local. Si el barrio puede constituir un territorio de inscripción, no basta para organizar por entero la vida del individuo.

3.1.- Los microemprendimientos productivos como forma de contraprestación

Otro dato interesante a tener en cuenta para el análisis de la forma que toman las contraprestaciones que realizan los beneficiarios de los PJJHD en la ciudad de Rosario surge

del trabajo llevado adelante por Abella (2005), sobre el Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales de la Municipalidad de Rosario⁹⁸ creado en el marco del Programa de Promoción de Emprendimientos Productivos Sociales⁹⁹. La importancia de este trabajo para nuestro análisis está dada fundamentalmente porque, como ya señaláramos, del Registro de Proyectos de Contraprestación confeccionado por el Servicio de Empleo no es posible separar cuáles de esos proyectos se constituyen como emprendimientos productivos.

Del trabajo de Abella surge que del Registro forman parte emprendedores con características socio-económicas muy diversas. No obstante, el perfil del emprendedor que prima es el de una mujer que vive dentro de los límites del Distrito Oeste de la ciudad de Rosario, cuya edad oscila entre los 20 y los 40 años, y que posee estudios primarios completos. Los rubros fundamentales en los cuales desarrolla su actividad son la panificación y/o la elaboración de pastas caseras. A este perfil se suma un dato central para nuestro análisis: es beneficiaria del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Cuadro N° 15: Participación de beneficiarios PJJHD en el Registro de Emprendimientos Productivos Locales - 2004

	Nros. absolutos	Porcentaje
Cantidad de beneficiarios PJJHD	2.131	70,26
Independientes	902	29,73
Total de micro-emprendedores	3.033	100,00

Fuente: Abella (2005)

En este sentido, el trabajo refleja el alto porcentaje de beneficiarios del PJJHD que forman parte del Registro Municipal de Emprendimientos Productivos y atribuye este hecho a la necesidad de los beneficiarios de realizar una contraprestación para poder recibir la transferencia monetaria.

⁹⁸ El Registro tiene por finalidad recolectar y almacenar los datos pertenecientes a los distintos emprendimientos productivos de la ciudad. El mismo se conforma a partir de la sistematización de las fichas de Identificación de Emprendimientos Productivos.

⁹⁹ El programa fue creado el 18 de julio de 2002 por medio de la ordenanza N° 7358 del Concejo Municipal de Rosario. Entre sus objetivos es posible mencionar la promoción de emprendimientos productivos dentro del marco de políticas activas locales generadoras de actividades económicas y empleo; así como también, el fomento de los mismos para su incorporación en el sistema formal de la economía.

Diferentes posiciones se han desarrollado en torno al creciente impulso de la denominada “economía social”, “economía popular” o “economía de la pobreza”. Las perspectivas más optimistas han ponderado su expansión, su potencial autonomía, su creciente empoderamiento y su capacidad de reafirmación de una particular identidad; también por constituirse en un factor “socializante” y de resignificación de lo colectivo. No se trataría de una mera economía asistencial, provisoria en la emergencia, pobre y para los pobres, sino un sistema que, bien impulsado, tiene el potencial para incluir a los desocupados y subocupados, y sentar las bases firmes de una economía mixta competitiva. Así, este sector de la economía debería ser promovido y valorado por el Estado y las políticas sociales (Coraggio, 2004).

Sin embargo, frente a estos planteos hay autores que llaman la atención en torno al hecho de que tales prácticas de autogestión se desarrollan en espacios cada vez más locales, sin otro horizonte de integración que no sea el sector informal y los encadenamientos corporativos o clientelares tradicionales. En este tipo de experiencias, el eje de sentido dominante de la acción sigue siendo la descarnada lucha por la subsistencia. A lo sumo, para los propios protagonistas la economía social constituiría la primera estación –y no la última– de una estrategia de reinserción laboral y movilidad social (Lo Vuolo, 2004; Salvia, 2004, 2005).

Desde esta perspectiva, los márgenes de libertad y autonomía de estas iniciativas se desdibujarían en la medida en que actúan reforzando la marginalidad y las relaciones de fuerza que las hacen posible.

4.- Gestión descentralizada del PJJHD en Rosario y ausencia de contraprestaciones: una mirada desde los informantes clave

Un elemento de análisis que surge del trabajo de campo está relacionado con la enorme distancia existente entre los registros oficiales de beneficiarios del PJJHD que deberían realizar algún tipo de contraprestación y los beneficiarios efectivamente encontrados realizando esas tareas dentro de centros comunitarios y asociaciones civiles (o por lo menos manteniendo algún tipo de vínculo con las instituciones que avalan los proyectos de contraprestación). En el cuadro N° 16 se expone la brecha o distancia relevada durante el trabajo de campo, existente entre uno y otro término por centro comunitario y asociación civil visitada.

Si bien, y como ya fue señalado, la evolución de los beneficiarios liquidados muestra para la ciudad de Rosario un lento pero continuo proceso descendente, este proceso no permite explicar por sí solo la marcada distancia existente entre los registros oficiales de beneficiarios confeccionados en 2004 y el relevamiento realizado durante el trabajo de campo en 2006. Del mismo surge que para ese momento, sólo el 21% de los beneficiarios relevados en los registros de 2004 permanecían realizando sus actividades de contraprestación o manteniendo algún tipo de vínculo con la institución que avala el proyecto de contraprestación del cual el beneficiario participa. Se desprende de lo anterior que una proporción importante de esta distancia sólo puede explicarse por el elevado ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Ya en 2003, una investigación que tenía como objetivo dar cuenta de la representatividad y funcionamiento de los Consejos Consultivos (y que había sido financiada por la Fundación Grupo Sophia, Cáritas Argentina, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico y la AMIA) señalaba que el grado de incumplimiento de las contraprestaciones era muy elevado. Entre las razones de estos incumplimientos se señalaban: enfermedades, la realización de changas temporarias, embarazo, gran número de niños a cargo, la lejanía a los lugares donde debían realizarse las contraprestaciones y la falta de insumos. En tanto Neffa (2009), haciendo referencia a datos para el total del país, señala que el porcentaje de beneficiarios que realizaban actividades de contraprestación al inicio del Programa era alto (entre un 75% y un 80%); sin embargo, con el paso del tiempo se constató que cada vez era menor la proporción de quienes realizaban estas actividades.

Cuadro N° 16: Particip. efectiva de beneficiarios del PJJHD en act. de contraprestación -- 2006

Centro Comunitario/Asociación Civil	Cantidad de contraprestadores – 2004 (en números absolutos)	Cantidad de beneficiarios contraprestando - 2006 (en números absolutos)	Cantidad de beneficiarios contraprestando – 2006 (en %)
1	5	1	20%
2	12	Sin datos	Sin datos
3	39	14	36%
4	167	60	36%
5	4	0	0%
6	12	0	0%
7	16	3	19%
8	8	3	38%
9	1	1	100%
10	15	7	47%
11	46	17	37%
12	3	2	67%
13	16	2	13%
14	10	4	40%
15	185	20	11%
16	16	0	0%
17	19	1	5%
18	8	8	100%
19	159	60	38%
20	65	4	6%
21	9	6	67%
22	2	7	350%
23	77	10	13%
24	50	6	12%
25	18	18	100%
26	6	13	217%
27	5	0	0%
28	4	4	100%
29	5	0	0%
30	39	1	3%
31	296	20	7%
32	23	10	43%
33	4	4	100%
34	11	0	0%
35	53	7	13%
36	17	8	47%
37	9	5	56%
38	27	2	7%
39	207	0	0%
40	8	0	0%
41	3	0	0%
42	4	0	0%
43	4	Sin datos	Sin datos
44	15	0	0%
45	114	90	79%
46	34	5	15%
47	17	0	0%
48	23	0	0%
49	48	0	0%
50	122	0	0%
Totales	2060	423	21%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Empleo de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario (datos de 2004) y trabajo de campo (datos 2006)

Una situación similar es descripta por Jahoda (1987) cuando da cuenta de las experiencias desarrolladas durante la crisis del 30 en relación a la desocupación. Una de estas experiencias data de 1935 cuando un pequeño grupo de cuáqueros, profundamente preocupados por la vacuidad de las vidas de los antiguos mineros que llevaban años sin empleo, fundaron una Sociedad Productiva de Subsistencia en el sur de Gales. La idea básica era organizar y financiar una empresa cooperativa en la que trabajaran los desempleados para producir bienes y servicios para su propia subsistencia, pero no para la venta en el mercado. Los 400 miembros del proyecto no recibían ningún sueldo por lo que se les permitía seguir cobrando su subsidio de desempleo regular. Desde la perspectiva de la autora, el proyecto mostró prontamente su incapacidad para eliminar las consecuencias psicológicas del desempleo. En este sentido, son señalados los elevados niveles de ausentismo (los cuales llegaba al 24% en una semana normal) como elementos que muestran que un importante número de voluntarios no pudieron incorporar la estructura temporal diaria que el proyecto proporcionaba. Asimismo, el no cumplimiento de los horarios, los largos momentos de “holgazanería”, la venta de productos a personas ajenas al proyecto, el robo y el despilfarro de las materias primas dejaban entrever que dos de los problemas psicológicos causados por el desempleo -el deterioro del status y de la identidad y la exclusión de los objetivos de una sociedad más amplia- tal vez se intensificaban al participar en el proyecto.

El ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación y el relato de Jahoda recuerdan con un fuerte aire de proximidad a algunos de los planteos realizados por Durkheim a principios del siglo XX. En la línea argumental del autor, el sentimiento de obligación varía sin cesar y para que ese sentimiento tenga todo su relieve es preciso que haya una moral claramente constituida y que se imponga a todos sin contestación. Durkheim consideraba que, para el momento que escribía estas reflexiones, la moral tradicional estaba quebrantada sin que se hubiese formado ninguna otra que ocupara su lugar. En ese momento de crisis los antiguos deberes habían perdido su fuerza de imposición, sin que fuera posible observar de forma clara cuáles eran los nuevos deberes; las reglas morales no se sentían tan apremiantes como en el pasado. De esta manera, la moral se presentaba menos como un

código de deberes, como una disciplina definida que obligara, que como un ideal entrevisto, pero indeterminado que atrajera (Durkheim, 2000).

Contemporáneamente, y vinculado de forma estrecha con el mundo del trabajo, Sennett (1998) introduce la noción de “carácter”. El autor llama “carácter” al valor ético que atribuimos a nuestros deseos y relaciones con los demás. Cobrando en él particular importancia “el compromiso y la gratificación para un plan futuro”. Sin embargo, en las nuevas condiciones que plantea el capitalismo a nivel planetario en cuanto al tiempo y la organización del trabajo, el largo plazo -el plan futuro- aparece como una nueva utopía. Esta permanencia siempre intermitente en el mundo del trabajo actuaría corroyendo los principios de compromiso y lealtad y desdibujando los vínculos sociales entre los individuos y de estos con las instituciones. Como menciona Sennett, “unos vínculos sólidos dependen de una disposición a establecer compromisos con los demás” (1998: 23). Esta “disposición” es una gran ausencia en las actividades de contraprestación que analizamos. Las mismas se enmarcan en un programa que reproduce la incertidumbre cotidiana y perpetúa la “inestabilidad” como cosa de todos los días. No existe en estos casos un deseo por el pasado como referente de estabilidad laboral - porque en muchos casos es un modelo desconocido incluso por la generación inmediata anterior- pero tampoco “a venir”.

De esta manera, el trabajo como factor determinante de la vida cotidiana navega en aguas inciertas, dejando de constituir una instancia de conducción y protección. Sin embargo, las situaciones anteriormente descriptas tampoco liberan a los individuos de los avatares del destino. No garantizan integridad física ni seguridad económica, es decir no posibilitan un marco de certidumbre.

Consecuentemente y con el objetivo de indagar y analizar esta brecha existente, entre los registros oficiales de beneficiarios del PJJHD que deberían estar realizando actividades de contraprestación y los que efectivamente se encontraban en las organizaciones realizándolas, se recurrió a la técnica de los informantes claves. La realización de las contraprestaciones y el tiempo dedicado a las mismas constituyen elementos centrales en el análisis del lugar que este tipo de encuadres y obligaciones adquiere en la temporalidad de las poblaciones asistidas por el Estado.

Desde la mirada de los informantes clave, el nudo explicativo central que da cuenta de esta brecha se encuentra en el espacio de articulación y rearticulación entre las características intrínsecas de los PTMC a una contraprestación y la forma en que estos programas se implementan tanto en Argentina como en Rosario. Así, la descentralización administrativa y el control social se articulan, en este caso particular, con la inscripción territorial de los sectores populares y la centralidad de las organizaciones locales en esa territorialidad. A continuación revisaremos este tema desde la mirada de los informantes clave.

4.1.- Descentralización administrativa y control social

En programas de gran envergadura -como el PJJHD- la descentralización administrativa permite por un lado mayores niveles de ejecutabilidad a través de la mediación de las jurisdicciones provinciales y municipales, abre instancias locales de participación y posibilita una relación de mayor proximidad con los beneficiarios, pero conlleva de forma conjunta la descentralización del control social¹⁰¹.

En el caso específico del PJJHD, sólo algunas áreas se ejecutaban de manera descentralizada mientras otras (tales como el pago a los beneficiarios, la articulación con otros programas del MTEySS y de Desarrollo Social, el registro de personas que cobran la transferencia monetaria y la determinación de las “bajas” de beneficiarios) permanecían bajo la órbita de los organismos nacionales. Un elemento central de la descentralización que comportaba el Programa está relacionado con la gestión a nivel local de las actividades de contraprestación¹⁰². Este proceso actúa erigiendo al Estado municipal y a un sinnúmero de organizaciones de base territorial en actores centrales tanto en la implementación y ejecución a

¹⁰¹ En términos generales, el control social forma parte del proceso de dominación, pero “una parte que consiste en la construcción de hegemonía; una parte que se maneja en los registros discursivos de la regulación, conformidad, acuerdo, participación y balance, antes que en los niveles de represión, pacificación, conquista y censura” (Sumner, 2003: 10). En este sentido, y en términos foucaultianos, puede ser visto como interno al proyecto disciplinario cuyo mecanismo central fue siempre “docilidad-producción-ganancia” y cuyo objeto central era/es la autodisciplina. Hay referencias que este término ya había sido empleado por Herbert Spencer en su obra *Principios de Sociología* de 1876-1896 (Breiger, 2000).

¹⁰² El funcionamiento por separado de las oficinas de beneficios, es decir de pagos y de servicios de empleo ha sido visto como un elemento destacable de la aplicación de las políticas de *workfare*. En este sentido, se reconoce que el papel fundamental de las oficinas de servicio de empleo es tomar decisiones profesionales, individualizadas y basadas en juicios, mientras que las oficinas de pagos deben centrarse en la velocidad y exactitud (Handler, 2003).

nivel cotidiano como en el control molecular de la retribución a la que se comprometían los beneficiarios del PJJHD.

La amplia brecha existente entre los beneficiarios contabilizados en los registros oficiales realizando tareas de contraprestación y los que fueron relevados durante el trabajo de campo como efectivamente contraprestando en las instituciones, aparece refrendada por los relatos de los informantes clave:

“A partir de 2001 comenzamos a recibir a personas que contraprestaban en el Centro. Al comienzo había muchas personas, cerca de 100 aproximadamente. Hoy tenemos sólo 5, entre comedor y limpieza” (vicepresidente de institución Nro. 46).

“Cerca de 100 personas contraprestaban tres horas por día (...).actualmente hay dos personas con el plan Jefes y Jefas que están trabajando aquí” (coordinadora de institución Nro. 37).

“Cercanamente a 100 personas frecuentemente concurrían a trabajar. Pero en los últimos meses han dejado muchas personas. Todos los meses se van cayendo. Podríamos decir que, ahora, casi siempre vienen cerca de 60-70 personas nada más” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

A partir de los relatos de los informantes clave, esta brecha se explicaría por la falta de realización de uno de los dispositivos de control social delimitados: el control local sobre el cumplimiento de las actividades de contraprestación¹⁰³. Dentro de los PTMC que incorporan elementos del esquema del *workfare*, la contraprestación -laboral o educativa- por beneficio otorgado constituye una forma de alejar a los desocupados de las conductas desviadas reintegrándolos a través del trabajo. Como veremos más adelante, este dispositivo de control se yuxtapone en buena parte de los beneficiarios con mecanismos disciplinarios propios de la Modernidad, incorporadas a través de la lógica del trabajo remunerado (informal y precario en estos casos en particular). Los dispositivos de control recaen en manos de la administración local en virtud de los mecanismos de las políticas de descentralización:

“Como no hubo control, estamos muy pocos trabajando. Por suerte, hubo varias personas que consiguieron trabajo...en el Centro también ayudamos en este rubro” (coordinadora de institución Nro. 37).

¹⁰³ Este planteo se vincula con la dimensión planificada, pública y formal que contiene el control social.

“Supuestamente, según lo que se informa en la página [web] de la Municipalidad, el requisito es que cada beneficiario contrapreste por 4 horas. Pero nadie lo controla. Nosotros cuando empezamos teníamos cerca de 250 personas. Teníamos mucho trabajo. Había grupos que se encargaban de la limpieza del barrio, otros pintaban plazas y demás, grupos de mujeres haciendo manualidades que luego podían vender. Pero todo eso se perdió. Cuando empezaron a ver que nadie controlaba empezaron a dejar. "Yo no vengo porque fulana no viene y sigue cobrando. ¿Para que voy a ir yo?", eso nos dicen” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

“Al no controlar, no hay manera de que no haya injusticia” (coordinadora de institución Nro. 37).

“La Municipalidad anteriormente controlaba a la gente que contraprestaba, ahora eso no ocurre más. El proyecto antes decía que tenían que trabajar para poder cobrar, ahora eso se desvirtuó. El control se hacía con unas planillas” (vicepresidente de institución Nro. 46).

“La gente dejó de ir a trabajar a las instituciones cuando les dieron la tarjeta para cobrar el plan, porque a partir de ese momento los controles fueron cada vez menos” (presidenta de institución Nro.10).

“Querés que tu hijo siga estudiando y no tenés cómo poder hacerlo económicamente. Mi hija nunca fue becada. Hay una injusta total y todo es sin control. Hay gente que gana 1500 pesos por mes y tiene a sus hijos becados en las escuelas. Esa plata, la necesita mucha gente y es injusto que todos los años sigan dando la beca a las mismas personas. Así, el vivo vive de zonzo, y el zonzo de su trabajo. Esto te enseña a ser sinvergüenza. No hay control. Lo mismo pasa con los planes” (secretaria de institución Nro. 32).

De los relatos se desprende una clara vinculación entre el escaso número de beneficiarios realizando actividades de contraprestación y la ausencia de un mecanismo efectivo de control de estas actividades por parte del Estado municipal. La “lectura” realizada por los informantes clave de la situación reduce el funcionamiento y los mecanismos de control a las acciones del Estado municipal, sin embargo los dispositivos de control establecidos por la normativa del Programa presentaban un entramado de gran complejidad y del cual participaban múltiples actores.

En rigor, el control sobre las actividades de contraprestación no debía ser realizado a través de una única acción ni de un único actor. Mientras que por un lado los Consejos Consultivos Municipales (del cual el Estado municipal forma parte) debían realizar el

seguimiento de las contraprestaciones de los beneficiarios, recibir e investigar las denuncias por irregularidades y solicitar las bajas correspondientes de comprobarse las mismas, por el otro, eran las organizaciones de base territorial en tanto organismos ejecutores de los proyectos de contraprestación las que debían realizar el control de la asistencia de los beneficiarios¹⁰⁴. El nudo problemático parecería centrarse en los mecanismos de articulación de esas dos lógicas¹⁰⁵. En efecto, y desde la perspectiva de Handler (2003), “la capacidad administrativa a nivel de campo” aparece como un elemento crucial en la implementación de los PTMC que incorporan elementos del esquema de *workfare*, el cual actúa realizando demandas nuevas y significativas a las administraciones locales. Es así como, a partir de ese momento, los funcionarios deben pasar a tomar decisiones individualizadas y discrecionales acerca del cumplimiento de las obligaciones, de qué puede considerarse excusa y de qué sanciones a imponer, si es que se decide sancionar.

La posibilidad de decidir a nivel local la aplicación o no de sanciones es un elemento que no puede ser obviado en el análisis de la implementación del PJJHD en la ciudad de Rosario, sobre todo si se tiene en cuenta que la única sanción posible es la salida o la “baja” del beneficiario del Programa con los consecuentes costos en términos sociales y políticos de la aplicación de esas sanciones. En términos sociales, la reducción del número de beneficiarios que implicaría la aplicación de sanciones en Rosario actuaría repercutiendo de forma verdaderamente negativa en los ya elevados índices de pobreza e indigencia de la ciudad, cuyos promedios para el periodo 2001-2006 rondaban el 39% y el 17% de los hogares respectivamente. Mientras que a nivel político, es de prever, que los costos –tanto en términos electorales como de gobernabilidad del sistema- no sólo afectarían al gobierno nacional, sino que actuarían repercutiendo sobre la administración local, ya que esta última constituye la esfera gubernamental con la cual los beneficiarios referencian en primera instancia la gestión de las actividades de contraprestación.

Este tipo de práctica muestra claras diferencias con la forma que toma la reforma de la asistencia en Estados Unidos. Allí la mayoría de los Estados decidieron implementar sanciones estrictas por violaciones al trabajo y otros requisitos de responsabilidad personal. Las sanciones toman varias formas. Mientras algunas son aplicadas a toda la familia, otras alcanzan al

¹⁰⁴ La dificultad para cumplir con el control de las contraprestaciones por parte de los Consejos Consultivos también fue señalada por Arcidiácono y Zibecchi (2007).

¹⁰⁵ Volveremos sobre este punto en el apartado siguiente.

incumplidor adulto sin afectar la asistencia a los niños. También existe la posibilidad de ser sancionado con una reducción de la asignación como advertencia o de ser lisa y llanamente excluido de los programas de asistencia de por vida cuando los incumplimientos laborales son continuos o repetidos (Handler, 2003). Sin embargo, este tipo de acciones no ha estado exento de críticas. Handler (2003) señala que mientras algunos sostienen que las sanciones son necesarias para dejar sentado en los beneficiarios la seriedad de los requisitos del *workfare*, existen considerables pruebas que las mismas no modifican los comportamientos y que se abusa de ellas. Así, las sanciones actuarían como una política simbólica que reasegura a la mayoría social que “esos vagos no van a recibir algo a cambio de nada” (Handler, 2003: 200).

A partir de las entrevistas realizadas a los informantes clave, se puede percibir que esa “ausencia de controles” (y, consecuentemente, de sanciones) relacionada con la realización de las actividades de contraprestación convive con una serie de “regulaciones computarizadas” (Handler, 2003) que actúan excluyendo a los beneficiarios del Programa a partir de un procedimiento burocratizado¹⁰⁶. En el caso del PJJHD este mecanismo acontece de forma prácticamente automática cuando la edad de todos los hijos del beneficiario pasaba a ser superior a 18 años¹⁰⁷ o cuando el sistema de entrecruzamiento de datos con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) detectaba algún aporte realizado al sistema:

“Algunas mujeres se caen del plan, porque el marido trabaja de albañil por 400 pesos o porque consiguen un reemplazo por un día como porteras en las escuelas y se lo sacan. Así, perjudican a personas que se esfuerzan” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

Estos elementos permiten observar una estrecha correspondencia entre la visión de los informantes clave y los fundamentos de los PTMC a una contraprestación. La apropiación de los discursos neoliberales por parte de los coordinadores o de las personas que cumplen roles de gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles (muchos de ellos beneficiarios del

¹⁰⁶ Procedimientos de este tipo requieren la conformación de sistemas de información y la presentación de documentación probatoria de las condiciones de elegibilidad por parte de los beneficiarios. En la ciudad de Rosario se realizaron dos re-empadronamientos de beneficiarios del PJJHD con el objetivo de completar los legajos individuales con la documentación requerida: “De la Municipalidad hubo dos re-empadronamientos. Uno en la Rural donde había que ir a re-empadronamiento. Avisamos que las personas nos tenían que mandar las documentaciones que nos solicitaban. Hubo otro re-empadronamiento dentro de la Vecinal, donde la Municipalidad sólo nos dijo cómo teníamos que hacer” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

Programa), es claramente visualizada a través de una “palpable antropología negativa” (Offe, 1997). Esta supone que si las personas no están vigiladas o controladas no trabajan, perdiendo de esta manera los valores básicos que sostienen la sociedad. Dentro de esta lógica, el esfuerzo y la voluntad personales se convierten en las conductas más valoradas porque conllevan poder demostrar que se “merece” el beneficio y que se está dispuesto a retribuir por la asistencia recibida. Así, la actividad clasificatoria que distingue entre “buen pobre” o “pobre merecedor” y “mal pobre” o “pobre no merecedor” se encuentra en el fundamento de la representación y del tratamiento de la pobreza¹⁰⁸.

4.2.- Los instrumentos de control

Sin embargo, la sola idea de ausencia de controles por parte del Estado municipal sobre la realización de las actividades de contraprestación no da cuenta en forma completa de un proceso que reviste una serie de aristas por demás de complejas. Un elemento a tener en cuenta es que, aun en un marco caracterizado por los informantes como de ausencia total de controles sobre las actividades de contraprestación, de la mayor parte de los relatos surge de forma clara la existencia de un instrumento administrativo de control. Este dispositivo toma la forma de una planilla (elaborada por los entes oficiales) en la cual los beneficiarios registraban su asistencia diaria en el lugar donde realizaban la contraprestación. De hecho, y como señaláramos anteriormente, la normativa del PJJHD señalaba que debían ser los centros comunitarios y asociaciones civiles en tanto organismos ejecutores quienes debían realizar el control de la asistencia:

“El control que se realiza es con las planillas. Aquí no pasa nadie de la Municipalidad, ni nada...” (secretaria de institución Nro. 45).

“La Municipalidad no nos pide que le informemos si los beneficiarios vienen o no vienen. (...) Tenemos la planilla mensual de asistencias al día. Teóricamente la tendrían que hacer todas las instituciones, pero casi nadie las realiza” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

¹⁰⁷ Tal como ya señalamos en el capítulo anterior, esta característica es compartida por buena parte de los PTMC implementados en América Latina (Cecchini y Madariaga, 2011)

¹⁰⁸ Volveremos sobre este punto cuando analicemos la idea existente entre los informantes clave de la percepción del beneficio como un contrato basado en un vínculo recíproco más que en un derecho ciudadano.

“Mary [coordinadora del centro comunitario] lleva el control de las planillas como en los inicios. Una vez que completa estos datos los llevamos a la Municipalidad” (secretaria de institución Nro. 45).

La existencia de planillas de asistencia como instrumentos de control es clara. Sin embargo, los entrevistados, manifiestan dudas respecto a cómo debían proceder con ellas una vez que estaban completas, si debían enviarse a las oficinas municipales donde se gestiona el Programa o si debían ser retiradas por agentes del Estado de los lugares donde los beneficiarios realizaban las actividades de contraprestación. Incluso en algunos centros comunitarios y asociaciones civiles manifiestan que el control a través de las planillas fue desapareciendo a medida que se reducía la cantidad de beneficiarios realizando actividades de contraprestación. Consecuentemente, el escenario que se deriva de esto es más complejo que la sola ausencia de mecanismos formales de control. Lo que puede percibirse es la existencia de un instrumento diseñado con el objetivo claro de registro y control cuya forma de aplicación e implementación no sigue un protocolo establecido y se presenta de forma más bien confusa y caótica.

Por otra parte, la forma en la que deben proceder las instituciones ante los beneficiarios que no cumplían con la contraprestación no se encontraba reglada, consecuentemente eso daba lugar a un amplio abanico de situaciones.

Mientras algunas instituciones informaban al Estado municipal sobre las ausencias de los beneficiarios por considerar que como institución no podían avalar situaciones irregulares¹⁰⁹ o para diferenciarse de determinados mecanismos clientelistas:

“No hay control en las instituciones que reciben los planes. Me gustaría que el mismo control que hay en los impuestos o en otras cuestiones, se presente en las instituciones que reciben los planes Jefas y Jefes. Yo conozco personas que en algunas instituciones hacían firmar a los beneficiarios en una planilla que tenía a 500 personas. Esta gente solamente firmaba la planilla, no hacía nada más. Y en los momentos de elecciones recibían algunas cajas a cambio del voto” (coordinadora de institución Nro. 32).

En otras instituciones consideraban que la tarea de fiscalización sobre las actividades de contraprestación no le correspondía a sí mismas sino al Estado municipal. En virtud de esta

¹⁰⁹ De hecho las instituciones pueden ser intimadas por no cumplir con los proyectos de contraprestación.

consideración, sólo llevaban a cabo el seguimiento de las asistencias de los beneficiarios sin denunciar las ausencias:

“Nosotros no le hemos dado de baja a los que ya no vienen. Yo considero que no soy quien para dar de baja” (presidente de institución Nro. 15)

La comunicación defectuosa o pobre y las barreras cognitivas entre las instituciones estatales y las organizaciones de base territorial, por un lado y entre las primeras y los beneficiarios de los PTMC por otro, constituyen elementos que, sin lugar a dudas, actúan reforzando los mecanismos anteriormente descriptos:

“A veces llamábamos a Promoción Social ...o hablábamos con N.N. de Gerencia de Empleo. Pero siempre nos enterábamos por los medios sobre estas cosas [procedimientos administrativos, controles, re-empadronamientos] porque nadie venía aquí. La institución se enteraba por los medios de lo que tenía que hacer. No hay contacto directo entre Promoción Social, o sea la Municipalidad con la Institución...” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

Esta problemática está presente de forma recurrente en las descripciones y análisis de la implementación de las políticas de *workfare*¹¹⁰ (Handler, 2003); pero se trata también de una problemática más amplia y más extendida en el tiempo, la cual ya había sido señalada por Sheppard (1967). Recientemente, Auyero (2013) señaló a la “no comprensión del lenguaje estatal” como uno de los mecanismos que imperan en la relación entre los “burócratas de la calle” y los desposeídos.

4.3.- Las formas en que opera el control social

La ausencia de control efectivo¹¹¹ por parte del Estado municipal de las actividades de contraprestación, no implica una ausencia total del control de los comportamientos de los individuos. Muy por el contrario el control social opera por una doble vía: a través del

¹¹⁰ De hecho ha sido señalada como una de las dificultades y debilidades que tuvieron los Consejos Consultivos en nuestro país (Arcidiácono y Zibecchi, 2007).

¹¹¹ Es decir, de un control plasmado en procedimientos administrativos claros y eficaces.

mecanismo del miedo y a través de la vigilancia que ejercen sobre los beneficiarios los líderes y/o dirigentes de las organizaciones de base territorial.

De las entrevistas realizadas a los informantes clave se desprende que el miedo actúa, entre los beneficiarios del Programa, como un mecanismo de control y regulación sobre los comportamientos y como un elemento, relativamente eficaz, que lleva a los beneficiarios a continuar su contraprestación:

“El miedo es la principal causa por la que las personas continúan contraprestando. Las personas que vienen son las más temerosas. Para un gran número, es la única razón por la que siguen viniendo. Nosotros lo potenciamos amenazando una baja desde la Vecinal, pero, igualmente, todos ya saben que desde el plan no las tocan” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

“El gobierno no fiscaliza nada, no da la baja a gente que no trabaja y eso perjudica al que viene a la Vecinal a contraprestar. Ahora todos perdieron el miedo a que los den de baja porque conocen que no hay control” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

Sin lugar a dudas, el temor a perder la transferencia monetaria se ve reforzado, por el esquema de funcionamiento de los PTMC a una contraprestación en nuestro país. Es importante tener en cuenta que el surgimiento del PJJHD supuso el paulatino debilitamiento o incluso la desaparición de programas similares anteriormente existentes. A su vez, sólo podían ser beneficiarios del PJJHD aquellas personas (que reuniendo todos los requisitos) se hubieran incorporado al mismo al momento de su creación. El Programa no admitía incorporaciones posteriores. Si a esto le sumamos que la única sanción posible por no cumplir alguno de los requisitos es la exclusión del Programa, la situación termina derivando en una exclusión de todo el esquema de asistencia.

Consecuentemente, la nueva disciplina del trabajo que se instaura para estos desocupados que reciben asistencia es la disciplina que se deriva de las condiciones que impone la lucha por la sobrevivencia cotidiana (Grassi, 1997). La realista postal de Galeano (1998) cuando expresa “... los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo” puede ser resignificada en este contexto. Al temor a no encontrar nunca trabajo se le suma el miedo a perder la asistencia.

La realización de las actividades de contraprestación sólo por el temor a perder la asistencia se ve fortalecida, en algunas oportunidades, por una serie de prácticas llevadas adelante por los actores que ejercen lugares de dirección o coordinación en las instituciones que avalan los proyectos de contraprestación. De esta manera, el control social no aparece ejercido por el aparato del Estado o por los Consejos Consultivos Municipales, sino por una serie de actores de las organizaciones que forman parte de la cotidianeidad de los beneficiarios¹¹²:

“Amenazamos a las personas diciendo que le vamos a dar de baja desde la Vecinal, pero igual no tenemos resultados buenos” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

“Dentro del Centro el control [de las actividades de contraprestación a través de las planillas] es bastante estricto, el que viene a trabajar cobra el plan y al que no se le consulta por qué no viene y, luego, puede darse de baja. No podemos certificar qué se hacen con los datos que nosotros damos [al municipio], pero por lo menos aquí hay mucha gente que dejó de cobrar el plan” (secretaria de institución Nro. 45).

“Muchas veces obligamos a los beneficiarios a que concurran aquí y que contrapresten realizando cursos de capacitación gratuita o cuando hay charlas informativas sobre algún tema. Como es gratis y les sirve, pueden cumplir con las horas de esa manera” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19).

“En este último tiempo les estuve hablando....avisando a las mujeres que tienen que venir, y si no vienen tienen que avisar.....decir porqué están faltando, porque ahora nosotros vamos a empezar a dar de baja a las que no vienen. Los otros días una de las chicas me llamó y yo le dije “hace como un año que no sabemos nada de vos”,...yo pensé que ya no iba a venir más...ella me dijo que la habían tenido que operar...” (operadora comunitaria de institución Nro. 4)

“[Para dar de baja a algún beneficiario] concurrimos al Correo, a Secretaría de Empleo de la Municipalidad. Algunas personas que dimos de baja igualmente siguen figurando como incluidas en la institución. No hay control desde allí. Casi todos siguen cobrando. Hay personas que están trabajando en blanco y siguen figurando en el plan. Ante esto, tendría que haber sanciones a las instituciones, con eso se podría dar algún tipo de aumento a la gente que viene a trabajar siempre. En toda la ciudad el problema de la deserción es por la falta de control. Genera

¹¹² La existencia de procesos y prácticas características del Estado que predominan cada vez más en espacios no gubernamentales como ONGs o instituciones trans-estatales como el Banco Mundial, es señalada por Trouillot (2001) como uno de los elementos contradictorios contenidos en el proceso de redefinición de la intervención del Estado. Para el autor, estas prácticas producen efectos de Estado tan poderosos como aquellos de los gobiernos nacionales.

rivalidad entre los beneficiarios y dentro de la institución, y el esfuerzo que uno hace no se valora” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

Muy lejos del planteo de Park que consideró para la década del 60, que la familia, el barrio y la comunidad local –en tanto instancias de control social- estaban viendo minadas sus bases y disminuida su influencia, aquí esas “viejas formas de control social” se presentan revitalizadas. No se trata, entonces, de un control estatal planificado, público y formal, sino de un control comunal relativamente espontáneo e informal. Así, es posible observar una forma de influencia basada en la interacción y las relaciones mutuas (en ambos sentidos) entre los grupos sociales. La interacción no sólo configura el control, sino que “es” el control. Claro que esa influencia mutua contiene elementos de desigualdad y desequilibrio propios de la relaciones sociales (Breiger, 2000).

Según Álvarez Leguizamón (2002), y desde una perspectiva fuertemente enraizada en los postulados foucaultianos, estos cambios en las formas del control social estarían dando cuenta de una nueva tecnología de poder, la “focopolítica”. La misma ya no estaría centrada en hacer de las fuerzas vitales fuerzas útiles, en aumentar la productividad y la vida de los trabajadores, sino en fijar en la comunidad local a aquellas poblaciones excluidas del trabajo estable o de la dinámica dominante para neutralizarlas¹¹³. Se trataría de territorializar y de producir formas de autocontrol comunitario sobre las poblaciones pobres, aún cuando se mantienen algunas de las técnicas de la biopolítica¹¹⁴.

Dentro de este esquema neoliberal, la producción de un excedente de población, que no puede sobrevivir por la vía de la mercantilización de su fuerza de trabajo y sin la protección del

¹¹³ Esta idea no es singular del caso argentino, también fue planteada a nivel global bajo el concepto de “localizar a los pobres” por Beck y Bauman.

¹¹⁴ La exigencia de territorialización para obtener socorro, fue señalada por Castel (1997), como una característica que se agudizaba para fines del Antiguo Régimen. Para ese momento una ordenanza francesa señalaba: “Entre los diversos medios propuestos para destruir la mendicidad, ninguno parece reunir más sufragios que el que envía a los mendigos a sus lugares de nacimiento (...) Cada parroquia responderá por sus pobres como un padre de familia por sus hijos” (citado en Castel, 1997: 57). El ejercicio de la tutela comunitaria representaba uno de los ejes de la estructuración de lo social-asistencial, dando lugar a que los beneficiarios del socorro quedaran ligados de una manera casi inquebrantable a su territorio de origen, bajo la dependencia de los notables locales, a tal punto que se ha podido hablar de vasallaje parroquial. En una dirección similar Gauthier (1998) señala que para fines de la Edad Media la cuestión social remite al lugar de los pobres en la sociedad. Ese lugar refiere tanto al posicionamiento en el sistema social como de localización geográfica.

Estado, no pretende revertirse. En la etapa de la “focopolítica” los objetos de saber de los expertos sociales son la precisa identificación de las poblaciones excluidas, las “poblaciones objetivo” y lo que se denomina las poblaciones de “riesgo”. Los saberes que se generan para su identificación y para incentivar la autogestión y el autocontrol son los nuevos campos de la “focopolítica”.

Si por un lado el mercado regula la vida de los “más capaces”, por el otro lado el Estado – a partir de la gestión focalizada de la pobreza- se desentiende de la vida de los pobres, dejándola reposar en la moral individual filantrópica y en los “capitales”¹¹⁵ de los propios pobres. Ya no es más la población en su sentido genérico el objeto de las tecnologías de poder, sino los más vulnerables entre los pobres, los “beneficiarios” o sea los que constituyen un peligro para el sistema, bajo el estímulo de la autosubsistencia y el autocontrol. El objetivo de este tipo de política es, entonces, autonomizar a las poblaciones del Estado y compensar su débil, escasa o nula relación con el mercado a través de fortalecer sus capacidades de autosubsistencia y de autogestión.

La amenaza -por parte de la dirección o coordinación en las instituciones que avalaban los proyectos de contraprestación- a los beneficiarios se relaciona con la posibilidad de informar a las autoridades municipales sobre la no concurrencia de los mismos a contraprestar, es decir de denunciar a aquellos beneficiarios que no cumplen con la normativa. La expresión “dar de baja” supone la exclusión o mejor el intento de exclusión del beneficiario del Programa a través de la denuncia del incumplimiento. Decimos el “intento” porque los mismos informantes manifiestan no conocer de forma fehaciente si son sancionados los beneficiarios denunciados. De esta manera el control social, propio de este tipo de programas, opera bajo la forma de una vigilancia de los comportamientos realizada por grupos de proximidad de los beneficiarios e incluso por grupos de pares. Este último caso acontecía cuando los coordinadores o las personas que cumplían roles de gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles que avalaban los

¹¹⁵ El concepto de “capital social” ha sido incorporado -junto a la noción de “participación”- como una herramienta central dentro de los programas de “alivio” a la pobreza auspiciados por los organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) durante la década del 90. Este concepto presenta paralelismos importantes con el concepto de reciprocidad, en la medida en que remite a relaciones de reciprocidad no mercantiles basadas en vínculos informales de base local y se constituye en prácticas para convertir los recursos autogenerador por las redes en capitales para la supervivencia, en recursos para la autogestión de programas focalizados (Álvarez Leguizamón, 2002)

proyectos de contraprestación eran a la vez beneficiarios del Programa. En este caso específico se produce además una situación paradójica: quienes controlan deberían ser además los “controlados”.

Esta cuestión podría ser pensada como un elemento disruptor dentro del entramado de relaciones sociales existentes dentro del barrio. De forma contraria, el PJJHD había sido visto como una instancia que permitió la configuración de nuevas redes sociales colectivas en los barrios, reforzando relaciones vecinales y actividades comunitarias (Correa y Hermida, 2005; Trujillo y Sarabia, 2011). Si bien no es posible plantear que la vigilancia sobre los comportamientos llevada adelante por algunos dirigentes barriales ponga en cuestión estas consideraciones, es factible pensar que actúen reforzando o construyendo relaciones de poder asimétricas entre los integrantes de una comunidad.

Así, es posible observar que la mayor parte de las nociones teóricas anteriormente señaladas en relación a los PTMC que incorporan elementos de *workfare* se presentan de forma clara en los relatos de los informantes clave. En un momento en el que el número de personas asistidas aumentaba exponencialmente en la historia argentina, la descentralización administrativa se conjugaba con la deficiencia institucional dando lugar a la activa incorporación de las organizaciones de base territorial en la implementación de las políticas sociales. Como señaláramos, y desde la perspectiva de Merklen (2005), este nuevo actor se presenta para el Estado como un interlocutor válido que permite re-articular a los sectores más vulnerables con el aparato del estado. En este caso en particular, la acción de las organizaciones de base territorial se realiza por una doble vía: mientras que por un lado constituyen un engranaje fundamental en la producción de la cotidianeidad y de las relaciones sociales de los sectores populares, por el otro actúan ejerciendo una serie de dispositivos de vigilancia y control sobre los comportamientos de esos mismos sectores.

4.4.- Trabajo comunitario y planes sociales: la centralidad del territorio

A partir de los relatos de los informantes clave es posible observar que la incorporación activa de las organizaciones de base territorial a la implementación de los PTMC las coloca en el centro mismo de los vaivenes, de las configuraciones y re-configuraciones de esas políticas.

La amplia cobertura alcanzada por el PJJHD en los primeros meses de implementación imprimió en las organizaciones una necesidad de adaptarse y sobre todo de “abrirse” a recibir beneficiarios necesitados de espacios donde realizar la contraprestación requerida por el Programa. Esta situación llevó a algunas organizaciones surgidas con la crisis de 2001 a consolidarse en los que respecta a su inserción comunitaria, en la cantidad de proyectos y en el número de personas que colaboraban en diferentes actividades:

“Todo comenzó en plena crisis. Alrededor del 2001 en un garage de una vecina comenzamos a juntarnos entre 20 y 30 personas. Las principales actividades que hacíamos se relacionaban con el Día del Niño (realizábamos regalos a los chicos del barrio), concurríamos a un hospital a ayudar con pequeñas cosas y hacíamos costura que nos servía para nuestra familia. A pocos meses aparecen los planes y ahí el Centro quedó asentado como institución” (secretaria de institución Nro. 45).

En el caso de las organizaciones existentes muchas de ellas se encontraron desbordadas por la cantidad de beneficiarios del PJJHD y se vieron enfrentadas con la necesidad de diseñar diferentes estrategias para contenerlos:

“Hubo tiempos donde realizábamos tres turnos. Había mucha gente que nos ayudaba y trabaja aquí. A través de Carlos Bermudez formalizamos el Centro y, así, muchas mujeres comenzaron a contraprestar aquí trabajando en la copa de leche. Cerca de 100 personas contraprestaban tres horas por día. Tuvimos una huerta muy importante, donde nunca se vendió nada ni se sacó una ganancia exterior, y que permitía tener muchos alimentos. Ahora no tenemos casi nada de eso” (coordinadora de institución Nro. 37).

“El espacio que tenemos dentro de la institución es muy chico por eso funcionan algunas cosas en otros lugares” (presidenta y secretarias de institución Nro. 19)

A la problemática de cómo incorporar a la gran cantidad de beneficiarios del PJJH, a las organizaciones de base territorial rápidamente se les sumó una nueva dificultad: la falta de recursos para implementar y sostener los proyectos dentro de los cuales los beneficiarios ejecutarían sus actividades de contraprestación¹¹⁶. Aquellas instituciones que recibían aportes financieros de organismos gubernamentales o partidos políticos contaron con una herramienta

¹¹⁶ Recordemos que son los organismos ejecutores los responsables de garantizar los insumos básicos necesarios.

relativamente fuerte para darle continuidad a los proyectos de contraprestación y, en alguna medida, para comprometer a los beneficiarios en esas tareas:

“Tenemos constantes apoyos, tanto de Bermúdez como de Reutemann. Los aportes de la provincia nos permitieron crecer y en la actualidad seguir estando con la actividad” (coordinadora de institución Nro. 37).

De forma contraria, aquellas organizaciones que no recibían ningún tipo de aporte financiero solventaban las actividades con donaciones, materiales reciclados o incluso con aportes de los propios beneficiarios. En este sentido, la falta de recursos para financiar las actividades actuaba condicionando los tipos de proyectos de contraprestación que las organizaciones presentaban para la evaluación de los Consejos Consultivos Municipales¹¹⁷. Prácticas tales como recurrir a donaciones y a aportes de los beneficiarios demostraron ser muy difíciles de sostener en el tiempo y terminaron alimentando el ausentismo de los beneficiarios. Se creaba así una especie de círculo vicioso entre escasez o falta de recursos y, consecuentemente, de actividades concretas y ausencia de beneficiarios:

“Nos faltan muchas cosas, no hay materiales aquí. Todos los gastos que tenemos los pagamos entre todos los que trabajamos acá.” (coordinadora de institución Nro. 32).

“De la cantidad de actividades que teníamos, hoy sólo nos quedan la copa de leche y la peluquería. La provincia sigue mandando los insumos para la copa de leche... ¿Con los otros grupos que pasó?

El grupo de las chicas de las mermeladas empezaron a dejar de a poco...ellas pedían frutas en las verdulerías y compraban el azúcar y el gas....pero no siempre podían comprar esas cosas....” (presidenta institución Nro.10).

“Hay momentos en los que te bajoneas mucho [por no tener los insumos para realizar los trabajos]. Tenemos que hacer todo con mucho esfuerzo y a veces no tenemos con qué hacer nuestras cosas” (secretaria de institución Nro. 32).

“Si vos no le das a la gente un suponer... haces una huerta y no le das la posibilidad de las palas... o haces un proyecto de tejido y no le das telas... para mi la única posibilidad de que los planes sean efectivos es hacer microemprendimientos. Nosotros acá armamos hasta una fábrica de pelotas... tenemos las maquinarias, tenemos todo... pero nunca tuvimos una ayuda económica... entonces si nosotros

¹¹⁷ La imposibilidad del propio Programa para ofrecer condiciones para la realización de la contraprestación también surge de la investigación realizada por Rodríguez Enríquez (2007b). Para la autora, esta situación actúa reforzando el incumplimiento de la contraprestación.

queremos armar pelotas y no tenemos cuero, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no podemos hacerlo. Está la maquinaria, está todo... Debería ser un subsidio bien controlado, que por ejemplo le digas 'ustedes con esto tienen que hacer 200 pelotas' y después buscar mercados y controlar que no se coman el capital... pero si vos no le das nada la gente con 150 pesos no puede hacer nada tampoco. El costurero comunitario tampoco funciona más. El club que nosotros controlamos y otro club grande de aquí en la esquina que se hacía mantenimiento, había siete personas, esas siete ya no van más. Teníamos muchos proyectos de capacitaciones varias (herrería, carpintería), teníamos un montón de beneficiarios anotados para hacer los cursos y presentamos proyectos para conseguir máquinas pero nunca tuvimos eco. Yo pienso que ahí falló el Estado. Te doy algunos ejemplos de lo que nos pasó. En el ropero comunitario la gente conseguía ropa y arreglaba para los niños, pero fijate lo que nosotros pedimos en 'Descripción de Materiales, Herramientas, Insumos, etc.' cuando presentamos ese proyecto: hilo, aguja, tela, máquinas, centímetros, tijeras... pero nunca tuvimos esos insumos. También teníamos una persona que quería enseñar, él era técnico electricista y quería enseñar. Organizamos un proyecto de 'Enseñanza para Salida Laboral' y pedimos cable, martillo, cinta aisladora, cable. Finalmente nunca tuvimos ese curso porque no hubo insumo. En el curso de cerámica teníamos 19 inscriptos pedimos arcilla, pinceles, yeso... hasta nos habían prestado un horno de cerámica eléctrico pero como el curso no funcionó la dueña del horno esperó dos o tres meses y después se lo llevó porque no lo usábamos. Y después dicen 'no vienen'... pero a qué va a venir. Tendría que haber habido una oficina de Desarrollo Social en cada región para que uno tuviera un lugar donde ir a reclamar este tipo de cosas, porque en calle Mendoza¹¹⁸ sólo saben de las altas y las bajas" (presidente institución Nro. 15).

El impacto del amplio número de beneficiarios necesitados de poder contraprestar por la transferencia monetaria recibida fue muy importante en las organizaciones de base territorial. Las mismas se vieron enfrentadas a las necesidades de tener que tramitar personerías jurídicas, aprender a elaborar proyectos y a buscar fuentes de financiamiento para los mismos. Con el paso del tiempo, el número de beneficiarios del Programa se redujo y las ausencias a las actividades de contraprestación de los que permanecían se hicieron cada vez más prolongadas e importantes. Esta situación actuó impactando nuevamente en las organizaciones barriales, sólo que el impacto no estaba ahora relacionado con encontrar los mecanismos para ampliarse sino en buscar la forma de sobrevivir. Muchas de ellas (fundamentalmente las que habían nacido al calor de la crisis de 2001) no lo consiguieron, y para el año 2006 estaban en pleno proceso de cerrar sus puertas:

¹¹⁸ El entrevistado refiere a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral dependiente del MTEySS de la Nación.

“Las instituciones están todas en la misma situación, con cada vez menos gente y en algunos casos ya hay instituciones que desaparecieron” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

La participación activa de las organizaciones de base territorial en la puesta en marcha del PJJHD se constituyó en la válvula fundamental que posibilitó a los beneficiarios la realización de las actividades de contraprestación, a la vez que imprimió en estas actividades características distintivas. Esta fuerte presencia de las organizaciones en la implementación del Programa las subsumió en los vaivenes que los PTMC sufrían en Argentina. Si en un principio la masividad del Programa dio lugar a los esfuerzos por contener a los beneficiarios, la paulatina reducción de su número y las ausencias a las actividades de contraprestación llevaron a muchas de las organizaciones que contenían a los beneficiarios al aletargamiento y a la desaparición.

4.5.- Planes y reciprocidad social

Entre los dirigentes barriales consultados (algunos de ellos beneficiarios del PJJHD) existe un consenso generalizado respecto a la exigencia de contraprestar; es decir a lo justo de retribuir por la transferencia monetaria recibida:

“Nosotros cobramos el plan y esa plata va a los impuestos. El Gobierno no se da cuenta de eso. Siguen dando beneficio a personas que no pagan nada y que usan la plata para ‘chupar’. Es totalmente injusto que le saquen el plan a personas que se lo devuelven al Estado” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

“Eso [que las personas no realicen la contraprestación] da mucha bronca, porque hay personas que se sacrifican mucho y otras no lo hacen y cobran lo mismo” (presidenta y secretarías de institución Nro. 19).

“Mientras que otras personas no hacen nada y reciben el beneficio del plan, nosotros seguimos trabajando” (secretaría de institución Nro. 32).

A partir de los relatos surge con fuerza la idea que la posibilidad de obtener recursos (la transferencia monetaria) a cambio de nada, es decir sin contribuir en absoluto a la producción y/o a la reproducción de la sociedad, viola el principio de reciprocidad social esencial a cualquier

comunidad. Esta noción recorre los relatos de todos los dirigentes barriales consultados sean o no beneficiarios del PJJHD¹¹⁹.

Desde la perspectiva de Mingione (1993), el concepto de la reciprocidad social hace referencia a un tipo de relación social en la cual el intercambio no concluye en un único acto; las transacciones son potencialmente no equitativas y el compromiso con la reciprocidad es vago o, como máximo, implícito. Esto equivale a decir que se trata de un movimiento “viceversa” entre las partes, una relación “entre”, la acción y la reacción de las partes. Por su parte Gouldner (1960, 1979) resalta que dentro esta noción los intercambiantes son titulares, a la vez, de derechos y deberes, y que lo que unos reciben y que otros dan es un viaje de ida y vuelta en el que idealmente se intercambian equivalentes. En este sentido, habría reciprocidad cuando las contraprestaciones cumplen con el principio de simetría de forma que si doy (o recibo) es porque he recibido o recibiré (o porque me han dado o me darán). La presencia de las expresiones “pagar” y/o “devolver” en los relatos de los informantes clave dan cuenta del arraigo de esta noción en los dirigentes barriales.

El punto que ha generado mayor discusión en torno a los PTM es el de la condicionalidad/incondicionalidad de los mismos. Este debate, que opuso y todavía opone a los defensores y a los detractores del esquema de funcionamiento de los PTMC, se asienta justamente sobre el principio de reciprocidad social.

Para los defensores de estos programas un intercambio o transacción de este tipo supone cumplir con el compromiso de la reciprocidad social a la vez que se demuestra que se “merece” la transferencia monetaria. Dentro de esta corriente, tanto la práctica como el discurso de la reciprocidad suponen un proceso de creación de culturas de responsabilidad, en el cual la referencia a la moralidad es crucial para la valoración tanto de la relación que sustenta esa transferencia como de la que emerge de éstas. En efecto, y desde la perspectiva de Mead (1997), los programas sociales de bienestar necesitan ser infundidos de un nuevo paternalismo. Así, si

¹¹⁹ Una serie de investigaciones, que contaban entre sus objetivos abordar la percepción de los beneficiarios del PJJHD sobre las contraprestaciones, se han desarrollado en los últimos años. Sus hallazgos fueron en varios sentidos. Mientras que algunas corroboran la noción de reciprocidad social (Rodríguez Enríquez, 2007a y b) otras van en dirección contraria (Correa y Hermida, 2005). De estas últimas investigaciones se desprende que los beneficiarios encuentran “justa la intervención del Estado, y consideran que sus 150 pesos están justificados por su condición ciudadana” (Correa y Hermida, 2005: 17).

por un lado estos programas ayudan a los necesitados, por otro requieren de ellos cierto tipo de conductas que los programas imponen a través de sanciones y controles cercanos.

Para Mead (1997), obligar a quien se encuentra en una situación de dependencia a cumplir con las mismas obligaciones que los demás es algo esencial para alcanzar la igualdad, no es algo que se oponga a ella. De esta manera, una política social efectiva debe colocar a los beneficiarios bajo las obligaciones comunes a todos los ciudadanos, en lugar de eximirlos de ellas. Se muestra aquí un rechazo explícito a fomentar o extender, por parte del Estado, derechos sin responsabilidades. Contrariamente, se promueve el establecimiento de un nuevo contrato entre el Estado y la ciudadanía. El mismo debe promover conductas responsables, especialmente, en lo referente a las políticas sociales. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de responsabilidades es una condición previa para poder gozar de derechos. Además, para la ideología liberal que subyace en esta interpretación, sólo los bienes privados logrados con el fruto del esfuerzo y sacrificio puesto en el trabajo, son aquellos legítimamente obtenidos.

Desde una perspectiva opuesta, las contraprestaciones impuestas por los PTMC son visualizadas como un mecanismo que limita y contradice el concepto moderno de ciudadanía, ya que no respeta la elección individual en la búsqueda de empleo y confunde el derecho a la asistencia con derechos relativos a la adhesión a un Estado-Nación concreto. Segall (2005), considera que, contrariamente a las objeciones hechas, las políticas de bienestar incondicionales (o no condicionadas) no violan el principio de reciprocidad. Por el contrario, las consideraciones en relación a la reciprocidad no justifican la imposición de condiciones laborales a la recepción de los beneficios. En este sentido, el autor considera que para que el trabajo se aplique como una obligación cívica tendría que imponerse en toda la ciudadanía y no sólo a los ciudadanos necesitados. Así, el principio de la reciprocidad apuntaría a la obligación de trabajar, sólo si los beneficios se otorgan sin condiciones.

Adicionalmente, estos programas son visualizadas como reproductores de los mecanismos de exclusión social en la medida en que crean una fuerte división entre trabajadores con empleos estables, y sus derechos asociados, y aquellas personas en una multiplicidad de situaciones precarias oscilando entre el desempleo y formas flexibles e inestables de subempleo (Cattacin, Gianni, Mänz y Tattini, 1999). Dentro de esta línea argumental sólo un programa de

ingresos no condicionados permitiría revertir la violación del principio de reciprocidad existente en las sociedades mercantiles modernas (Widerquist, 1999).

La clara condena a quienes cobran el beneficio sin realizar ninguna contraprestación a cambio, presente en los relatos de los informantes clave, es considerada por Wacquant (2001) como uno de los principales efectos de la estigmatización; esto es la estimulación constante en los sectores vulnerables de prácticas de diferenciación y distanciamiento sociales internos que contribuyen a reducir la confianza interpersonal y socavar la solidaridad social local. En el análisis que el autor realiza de los barrios marginales de Francia y Estados Unidos, es posible observar cómo sus habitantes desarrollan una serie de prácticas tales como destacar en exceso su valor moral como individuos (o como integrantes de una familia) y adherir al discurso dominante de denuncia de quienes “se benefician” sin merecerlo con los programas de asistencia social como formas de recuperar la dignidad y reafirmar la legitimidad de su status a los ojos de la sociedad. Es como si sólo pudieran ganar en valor devaluando su barrio y sus vecinos. Para el autor, estos sectores también adoptan una diversidad de estrategias de distinción y retraimiento sociales que coinciden en socavar la cohesión vecinal. Dichas estrategias asumen tres formas principales: la evitación mutua, la reconstitución y la elaboración de “infra-diferencias” o microjerarquías y el desvío del oprobio público hacia chivos emisarios, tales como las personas que reciben asistencia cuando, “al contrario de ellos” no necesitan una genuina asistencia.

Una de las características básicas de los sistemas de reciprocidad es su multiplicidad y variedad (Mingione, 1993). A partir de ello resulta fundamental tener en cuenta que la noción de reciprocidad social presente en los relatos de los informantes clave se enmarca en un escenario con algunas características particulares.

La primera de esas características es que se despliega en un contexto de elevado ausentismo a las actividades de contraprestación y que, incluso, es sostenida por aquellos que en algún momento han dejado de cumplir con la retribución¹²⁰. Es decir, la noción de reciprocidad social convive con su ausencia (Gouldner, 1979) o con su polo más lejano: la reciprocidad negativa (Sahlins, 1976). Este tipo de transacción es un intercambio asimétrico, donde uno recibe

sin dar o da sin recibir (ya sea en el pasado o de cara al futuro), o donde se busca recibir más dando menos, este es de intercambio que predomina entre personas desvinculadas entre sí, generalmente entre quienes se consideran a sí mismos integrantes de grupos distintos.

No todos los beneficiarios que no realizan actividades de contraprestación se encontraban comprendidos dentro de esta línea de análisis ya que algunos beneficiarios se encontraban eximidos transitoriamente de la obligación de contraprestar por razones de enfermedad prolongada, obligación de asistencia familiar, con hijos discapacitados u otras que impiden el ejercicio de las actividades previstas por la normativa. Estas situaciones se encuentran comprendidas en resoluciones del PJJHD. Su situación se aproximaría a la descrita por Sahlins (1976) en relación a aquellas personas que a lo largo del tiempo son incapaces de sostenerse a sí mismos o de ayudar a los demás. Este continuo fluir en una dirección sería un signo pragmático de reciprocidad generalizada. La incapacidad de corresponder o de dar tanto como se recibió, no determina la interrupción de las entregas por parte del donante original: los bienes caminan en una dirección, en favor de los desposeídos, durante largo tiempo.

La segunda característica está relacionada con el hecho de que una de las partes está constituida por el Estado. Este elemento hace necesario centrar las relaciones de reciprocidad en el ámbito de la política. Aquí la reciprocidad se refiere a la producción, reproducción y transformación de relaciones dependientes del poder y de obligaciones basadas en concepciones de justicia e injusticia. La reciprocidad se desarrolla en un marco de posiciones que implican asimetría y verticalidad (Álvarez Leguizamón, 2002; Gouldner, 1979; Lomnitz, 2005). En este sentido, Michaud (2005) llega a denominar a la reciprocidad contenida en las políticas de *workfare* como “reciprocidad obligatoria”. Si bien este tipo de reciprocidad actúa incrementando ciertas formas de dependencia, reproduce desigualdades y permite el resurgimiento de formas de clientelismo no significa, necesariamente, una dominación a secas. Este tipo de intercambios se constituye como un verdadero campo de fuerzas, como un espacio de regateo entre fuerzas sociales desiguales donde es posible poner a prueba y descubrir los límites de la obediencia y la

¹²⁰ Este es el caso de los coordinadores o de las personas que desempeñaban funciones de gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles que habían dejado de cumplir con la contraprestación porque las instituciones en las que se desempeñaba dejaron de funcionar.

desobediencia. El elevado ausentismo a las actividades de contraprestación también debe ser interpretado en este marco.

La tercera característica a tener en cuenta es que de los relatos puede inferirse una especie de acuerdo tácito entre los coordinadores de los centros comunitarios y asociaciones civiles y los beneficiarios donde la reciprocidad no es necesariamente fuerte o estricta; es decir, un acuerdo tácito donde las horas y días de contraprestación no necesariamente se corresponden con lo dispuesto por la normativa. En este sentido, no existiría una correspondencia o proporcionalidad estricta entre la contribución de los beneficiarios (una dedicación diaria a las actividades de contraprestación no inferior a cuatro horas ni superior a seis) y el subsidio otorgado por el Estado, sino simplemente la necesidad de contribuir “en alguna medida” para tener derecho a recibir una porción de recursos.

“Hay veces que le damos algunas actividades, pero en general no vienen... menos ahora que tuvimos que dejar el local que alquilábamos... la vez pasada los llamamos [a los beneficiarios] para que nos dieran una mano con unos relevamientos...” (presidente de institución Nro. 8).

“N.N. viene cuando lo necesitamos... los sábados a hacer algún arreglo, de electricidad, pintura... algo de eso” (presidenta de institución Nro. 28).

Desde la mirada de Gouldner (1979), lo relevante no está dado por el hecho de que se cumpla o no la reciprocidad en términos absolutos, sino por fijar hasta qué punto se cumple, en qué contextos es especialmente operativa y qué otros mecanismos y normas de interacción actúa al lado o en contra de ella. Así, y planteada en términos cuantitativos, la reciprocidad social no es algo que pueda estar simplemente presente o ausente. No es una cuestión de “todo o nada”; no es una cuestión donde, en un extremo, los beneficios intercambiados pueden ser idénticos e iguales y, en el otro extremo lógico, una parte puede no dar a la otra nada en retribución por los beneficios que ha recibido. Para el autor, probablemente, ambos extremos sean raros en las relaciones sociales, y el caso intermedio -en el cual una parte da a la otra un poco más o menos de lo que ha recibido- mucho más habitual que cualquiera de los casos límite. Ésta parece ser la forma como es entendida la contraprestación laboral por los coordinadores y por las personas que desempeñan funciones de gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles entrevistados.

La noción de reciprocidad social se presenta, sobre todo en el caso de aquellos entrevistados que a la vez que desempeñan roles de coordinación o de gestión en las organizaciones de base territorial son beneficiarios del PJJHD, yuxtapuesta con valores promovidos desde la ética del trabajo:

"No es subsidio esto, yo lo tomo como un sueldo. Como algo por lo que tengo que venir un par de horas a trabajar. La situación que vivimos se debe a la falta de educación que nos dan. Si todo es regalo no le enseñamos al ciudadano a tener conciencia. A tener el orgullo de decir: "me lo gano" (secretaria de institución Nro. 32).

"Algunas personas nos dicen que somos estúpidas por venir a trabajar cuando ellas no lo hacen y reciben igualmente los 150 pesos. Lo que no tendrán ellas es el orgullo que sentimos porque nos ganamos esa plata esforzándonos. Tenemos una actitud diferente hacia el trabajo" (secretaria de institución Nro. 32).

Si, tal como señalara Michaud (2005), uno de los objetivos centrales en la puesta en marcha de las políticas de *workfare* es la preservación de la ética del trabajo a partir de la restauración de su tejido, la obligatoriedad de la reciprocidad parece ser el mecanismo con el cual se intenta materializarla.

De la misma forma que señaláramos en relación a las formas y mecanismos del control social, es posible desprender de todas estas nociones una marcada correspondencia entre la visión de los informantes clave y los fundamentos de los PTMC que incorporan elementos del *workfare*. En este sentido, se puede señalar que los valores promovidos por estos programas resultan coincidentes con los valores expresados por aquellos agentes que desempeñan roles de coordinación y gestión en los centros comunitarios y asociaciones civiles en relación a: 1) la necesidad de control y vigilancia sobre las conductas, como mecanismos que garantizan la permanencia de valores sociales básicos; 2) la necesidad de condicionar los derechos sociales a obligaciones laborales, como formas de asegurar intercambios sociales más justos; y, finalmente, 3) la idea de que el esfuerzo y la voluntad son las maneras de demostrar que se "merece" el beneficio.

5.- La redefinición del Programa en la ciudad de Rosario

La visualización por parte del gobierno nacional de “distintas poblaciones” o grupos con diferentes “grados de empleabilidad” dentro del PJJHD, había aparecido, en un principio, como el elemento fundamental a partir del cual el gobierno imprimiría una nueva dirección a los programas sociales implementados. Sin embargo, al introducir la posibilidad de opción por parte de los beneficiarios de permanecer dentro del PJJHD o bien “migrar” al Seguro de Capacitación y Empleo o al Programa Familias por la Inclusión Social, es el mismo gobierno quien habilita el espacio para que los objetivos planteados se desdibujen.

En la ciudad de Rosario y para mediados de 2007, más del 60% de los beneficiarios opta por permanecer dentro del PJJHD, mientras que la “migración” más importante se produce hacia el Programa Familias. Sin lugar a dudas, es la mayoritaria participación femenina en el PJJHD la que permite dar cuenta de la importancia numérica de esta opción.

Cuadro N° 17: Migración de beneficiarios desde el PJJHD hacia las nuevas modalidades Rosario - Agosto 2007

	Nros. absolutos	Porcentaje
Beneficiarios que permanecen en el PJJHD	21.884	60,8
Beneficiarias que migraron al Programa Familias	11.752	32,7
Beneficiarios que migraron al Seguro de Capacitación y Empleo	2.328	6,5
Total beneficiarios	35.964	100,0

Fuente: Servicio de Empleo- Secretaría de Promoción Social- Municipalidad de Rosario

Por su parte, el Seguro de Capacitación y Empleo muestra una escasa elegibilidad por parte de los beneficiarios y en su interior se encontraban tanto los beneficiarios que participaba de planes de búsqueda de empleo o en actividades de orientación y formación como aquellos otros que optaron por retirar el dinero del Seguro de forma total, sea para iniciar un microemprendimiento (individual o asociativo) o fortalecer uno ya existente. Este último grupo ascendía a 400 beneficiarios, aproximadamente, de un total de 2.328 beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo.

Los datos de la ciudad de Rosario acompañan la tendencia nacional ya que de acuerdo con datos del MTEySS de la Nación de 2008, un 38,6% de los beneficiarios a nivel nacional habían migrado al Programa Familias, en tanto sólo un 7,1% de los beneficiarios se desvincularon del PJJHD por adhesiones al Seguro de Capacitación y Empleo. Según señala Levy (2009), esta escasa cantidad de traspasos desde el PJJHD al Seguro de Capacitación y Empleo se explica por el hecho que la duración del Seguro sólo sería de dos años¹²¹.

6.- Contraprestaciones, inserción laboral y control social

Finalmente, es posible señalar que la tendencia a descentralizar la implementación de este tipo de programas, con la idea de que los municipios o las provincias conocen mejor a la población y esto posibilita la construcción de un itinerario de reinserción, a la vez que crea una vigilancia permanente sobre las conductas, toma -para el caso analizado- una forma singular. Estas particularidades están dadas, fundamentalmente, por tres elementos:

- 1) El elevado ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación.
- 2) El tipo de actividades de contraprestación -por tratarse en su gran mayoría de tareas comunitarias- poco aportan a la construcción de escenarios de reinserción laboral. Sólo quedarían exceptuados de esta caracterización aquellos beneficiarios que participan de programas de reinserción laboral o en la modalidad educativa (capacitación laboral o escolarización) del esquema de contraprestación.¹²²
- 3) La no existencia de una correspondencia o proporcionalidad estricta entre la contribución de los beneficiarios y el subsidio otorgado por el Estado, sino simplemente la necesidad de contribuir “en alguna medida” para tener derecho a recibir una porción de recursos¹²³.

¹²¹ Tal como señalamos este periodo fue, con posterioridad, prorrogado.

¹²² Esta consideración ya estaba presente en el análisis que Pautassi (2004) realizó de la implementación del Programa con base en datos de la EPH-INDEC de 2002 y en el análisis de Neffa (2009). Lejos de haberse modificado, estos elementos se han visto fortalecidos con el paso del tiempo.

¹²³ Volveremos sobre este punto cuando analicemos las horas dedicadas a las actividades de contraprestación.

Estos elementos no actúan sólo brindando el contexto dentro del cual pueden ser analizados y comprendidos los mecanismos en los que opera el control social característico de este tipo de políticas y las formas y modalidades de asignación del tiempo en relación a las contraprestaciones, sino que también permiten establecer relaciones entre los elementos recogidos y dotar de significación a esos procesos.

Desde el punto de vista de la dimensión planificada, pública y formal que contiene el control social es posible señalar como dato central la falta de realización del dispositivo de control local sobre las actividades de contraprestación por parte del Estado municipal. Sin embargo, la ausencia de este control efectivo por parte del Estado no implica una ausencia total del control de los comportamientos de los individuos. Muy por el contrario, ese control es transferido a los centros comunitarios y asociaciones civiles y actúa operando por una doble vía: la del miedo y la de la vigilancia que ejercen sobre los beneficiarios los líderes y/o dirigentes de las organizaciones de base territorial; es decir, una vigilancia de los comportamientos ejercida por grupos de proximidad de los beneficiarios e incluso por grupos de pares.

Esta lógica de funcionamiento, que presenta un entramado complejo, no se puede inscribir de forma completa dentro de un sistema de protección social consistente en una burocracia impersonal y sin alma que se reduce a calcular el dinero que la gente necesita, dárselo y dejar que se las arregle por sí misma, ni a una pirámide burocrática firme regida por regulaciones estrictas (Sennett, 2003).

Esta situación deriva en un escenario local complejo y contradictorio ya que, por un lado, las actividades comunitarias constituyen el componente cuantitativamente más importante de las modalidades del esquema de contraprestación y actúan recreando y reforzando los mecanismos de solidaridad local permitiendo, incluso, la supervivencia material de buena parte de los miembros de la comunidad; mientras que, por el otro lado, la transferencia de los mecanismos de control social desde el Estado a la comunidad actúa creando fisuras, asimetrías y microjerarquías en un tejido social ya debilitado. Asimismo, y tal como señala Neffa (2009), las contraprestaciones que ejecutaban los beneficiarios implicaban diversas formas de trabajo, pero no constituían propiamente empleo. Tratándose de trabajos precarios básicamente de servicios, en puestos con pocos requerimientos de calificaciones, no “calificantes”, que con frecuencia se

reducían a tareas manuales y administrativas simples y operativas, de carácter periférico respecto de las actividades centrales de mayor jerarquía, o realizadas en un tiempo parcial muy reducido.

En este sentido, Sennett (2003) se cuestiona si forzar a las personas al trabajo, lejos de cerrar el capítulo de la degradación de su vida, no se estaría abriendo un nuevo capítulo; ya que al insertarse el trabajador en el nivel más bajo del sector ocupacional podría alimentarse sentido de inferioridad.

Una interesante mirada de cómo todos estos procesos confluyen en el caso argentino ofrece el análisis de Halperin Weisburg (2006). Para el autor, salvo contadas excepciones, (expresadas en algunos movimientos de carenciados y/o desocupados) en la generalidad de los casos cualquier forma de transferencia es recibida por los hogares como una ayuda del poder político, que mediante este acto se hace merecedor de retribución y adhesión política por parte de los asistidos, generándose una suerte de intercambio en el que la asistencia efectiva o la expectativa de recibirla tiene como contraparte formas de adhesión hacia quién ejerce el poder de asignación de la asistencia. Así, este tipo de política genera una estructura piramidal en la que, hasta que llega el beneficio a manos de un destinatario, recorre una serie escalonada e inevitable de jerarquías políticas que culminan en los operadores (punteros, manzaneras u otros), contactos finales y directos barriales, zonales, de los hogares objeto de la transferencia.

Dentro de este esquema, cualquier acción u omisión al margen de las reglas establecidas con la jerarquía “beneficiante” pone en peligro la continuidad del beneficio. Independientemente que estas sanciones grupales o individuales se concreten o no en la conciencia del pobre la sola posibilidad de poner en riesgo lo que recibe por su fidelidad a la jerarquía política limita y condiciona su imaginario.

Capítulo 4: Uso del tiempo y actividades instrumentales: las actividades de contraprestación, el trabajo remunerado y los estudios

En este capítulo y en el capítulo siguiente nos centramos en el análisis de los datos surgidos de las encuestas de uso del tiempo aplicadas a beneficiarios del PJJHD. Tal como ya señalamos, las contraprestaciones introducidas por el PJJHD actúan incorporando una serie de obligaciones y prescripciones que adquiere un peso considerable en el ordenamiento temporal de los beneficiarios. El Estado, a través de las políticas que implementa, incide en las actividades de los beneficiarios, constituyéndose de esta manera en un actor clave en la vida cotidiana de los desamparados (Auyero, 2013). El tiempo en tanto revelador y estructurador de las actividades se constituye en una dimensión clave para proporcionar evidencia empírica a este tipo de problemática.

Desde el punto de vista operativo, se mantuvo el agrupamiento de actividades tradicionalmente utilizado en los estudios de uso del tiempo. Esta tradicional clasificación reúne a las actividades en dos grandes conjuntos: las actividades instrumentales y las actividades expresivas.

Sin embargo, a los efectos de acotar el análisis a los objetivos planteados, nos centraremos exclusivamente en las denominadas actividades instrumentales. Es decir, el análisis se restringirá a aquellas actividades que, teniendo por contenido y función la producción y reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la supervivencia de la especie, se caracterizan por ser socialmente heterónomas, producto de una división social del trabajo que se explica en líneas complejas de diferenciación y desigualdad (Ramos Torre, 1990b). Tal como fue mostrado en el cuadro N° 2, dentro de las actividades instrumentales se incluyen dos grupos: el grupo del trabajo remunerado, las actividades de contraprestación y los estudios; y el grupo del trabajo no remunerado que incluye el trabajo doméstico y familiar y el trabajo voluntario.

En este capítulo presentaremos, en primer lugar, algunas características generales de los beneficiarios encuestados y, en segundo lugar, nos centraremos en el análisis del uso del tiempo de los beneficiarios del PJJHD relativo al primer grupo de actividades dentro de las actividades instrumentales: las actividades de contraprestación, el trabajo remunerado y los estudios. El segundo grupo de actividades será analizado en el siguiente capítulo.

1.- Algunas características generales de los beneficiarios encuestados

En este apartado, y antes de comenzar a presentar los datos surgidos de las encuestas de uso el tiempo aplicadas a los beneficiarios del PJJHD, se muestra una somera caracterización del grupo de beneficiarios encuestados¹²³.

Tal como señaláramos en el Capítulo 2, el PJJHD estaba direccionado a los jefes de hogar que se encontrasen en situación de desocupación. Los potenciales beneficiarios debieron presentar una declaración jurada en la cual manifestaban estar desocupados y no se les exigía demostrar que habían trabajado en alguna oportunidad. Tomando el criterio utilizado por Kessler (1996), podríamos señalar que a partir de este procedimiento la condición de desocupación es reconocida por las instituciones especializadas de acción social. Asimismo, dentro del PJJHD la determinación del beneficiario le correspondía a la familia y no al Programa. Es decir, era la misma familia la que decidía quien era el miembro al cual se iba a considerar jefe/a desocupado.

Por las características propias del Programa y/o por los “criterios de elegibilidad” de los perceptores, los beneficiarios encuestados conjugan una serie de características particulares:

- 1) todos los encuestados son argentinos
- 2) excepto una beneficiaria, todos tienen al menos un hijo menor de 18 años a cargo o discapacitados de cualquier edad. La excepción señalada es producto del hecho que en una segunda etapa el Programa se hizo extensivo a desocupados jóvenes y a mayores de 60 años que no contaban con prestación previsional.
- 3) para la fecha en la cual fue desarrollado el trabajo de campo (de marzo a septiembre de 2006), los beneficiarios llevaban entre tres y cuatro años de permanencia dentro del Programa.

En relación a la edad de los beneficiarios encuestados, es posible señalar que hay diferencias marcadas entre las mujeres y los hombres. Las primeras se encuentran concentradas fundamentalmente entre los 25 y los 49 años. Dentro de este rango, la

¹²³ Ya señalamos en el apartado metodológico que a pesar de que los PTMC están dirigidos a las familias, nuestro análisis se centra de forma exclusiva en el beneficiario o perceptor directo, ya que es sobre quien recae la contraprestación exigida.

mayor presencia es de las beneficiarias con edad entre 30 y 34 años. En el caso de los hombres la situación es diferente ya que predominan los hombres mayores a 45 años¹²⁴.

Cuadro N° 18: Beneficiarios encuestados por grupos de edad

	Mujeres		Hombres	
	Beneficiarios	Porcentaje	Beneficiarios	Porcentaje
Entre 20 y 24	8	7,0	0	0,0
Entre 25 y 29	18	15,7	3	21,4
Entre 30 y 34	21	18,3	1	7,1
Entre 35 y 39	15	13,0	1	7,1
Entre 40 y 44	18	15,7	1	7,1
Entre 45 y 49	14	12,2	3	21,4
Entre 50 y 54	11	9,6	1	7,1
55 y mas	5	4,3	4	28,6
Sin datos	5	4,3	0	0,0
Total	115	100,0	14	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Respecto del nivel de escolaridad de los beneficiarios encuestados, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, priman los beneficiarios con primaria completa¹²⁵, seguidos por los de secundaria incompleta en el caso de las mujeres y de secundaria completa en el caso del los hombres. Entre las mujeres también se observa la presencia de los niveles de escolaridad más bajos (una beneficiaria no tiene instrucción) y de los niveles más altos (dos beneficiarias tienen terciario completo).

Cuadro N° 19: Beneficiarios encuestados por nivel de escolaridad

	Mujeres		Hombres	
	Beneficiarios	Porcentaje	Beneficiarios	Porcentaje
Primaria incompleta	20	17,4	2	14,3
Primaria completa	47	40,9	7	50,0
Secundaria incompleta	25	21,7	2	14,3
Secundaria completa	18	15,7	3	21,4
Terciario completo	2	1,7	0	0,0
Sin instrucción	1	0,9	0	0,0
Sin datos	2	1,7	0	0,0
Total	115	100,0	14	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

¹²⁴ Estas tendencias van en la misma dirección que las presentadas por Neffa (2009) para el total país.

¹²⁵ Este dato se corresponde con las cifras para el total del país (Neffa, 2009).

En relación al estado conyugal de las beneficiarias, y si consideramos de forma agregada a las casadas y unidas de hecho, este grupo constituiría el más representativo, seguidas por las solteras. El único grupo con escasa presencia es el de las viudas, situación que puede ser explicada claramente por la edad de las beneficiarias que son fundamentalmente jóvenes y adultas. Entre los hombres beneficiarios entrevistados también predominan los casados y unidos de hecho.

Cuadro N° 20: Beneficiarios encuestados por estado conyugal

	Mujeres		Hombres	
	Beneficiarios	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Soltero	40	34,8	2	14,3
Casado	26	22,6	7	50,0
Viudo	3	2,6	1	7,1
Unido de hecho	19	16,5	3	21,4
Separado-divorciado	24	20,9	1	7,1
Sin datos	3	2,6	0	0,0
Total	115	100,0	14	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Las preguntas relacionadas con el número de hijos y de la cantidad de personas convivientes en el hogar presentaron altos niveles (alrededor del 50%) de no respuesta o de errores, lo cual no permite elaborar tendencias claras. Entre los que respondieron priman los hogares con cinco miembros y los beneficiarios con 2 y 3 hijos.

Antes de finalizar este apartado y pasar al análisis de los datos derivados de las encuestas de uso del tiempo, es necesario recordar que se toma a los beneficiarios PJJHD como un caso a través del cual se ilustra la temporalidad de desocupados asistidos por el Estado. Así, el universo de estudio está conformado por aquellos beneficiarios del PJJHD de la ciudad de Rosario que se encontraban incorporados al Registro de Proyectos de Contraprestaciones del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario. Por los objetivos definidos y por el tamaño de la muestra, el análisis que se deriva de los datos es de carácter exploratorio, y consecuentemente, no es posible hacer inferencias estadísticas. Por esa razón la información en los cuadros será presentada tanto en términos de tasas como en números absolutos.

2.- Las actividades de contraprestación

Las actividades de contraprestación son aquellas actividades realizadas por los beneficiarios de PJJHD como retribución por la transferencia monetaria recibida. Según la normativa del Programa, los beneficiarios estaban obligados a una dedicación diaria no inferior a cuatro horas ni superior a seis, en alguna de las cuatro modalidades o “componentes” en el esquema de contraprestación¹²⁶. Pensadas desde los elementos del *workfare* que incorpora el PJJHD, estas actividades pueden ser interpretadas como elementos constitutivos de la “madeja de prescripciones y obligaciones” que enmarcaba el status del desempleo a la que refiere Demazière (2006). Como veremos, este tiempo impuesto adquiere un peso considerable en el ordenamiento temporal de algunos de los beneficiarios encuestados.

2.1.- Las horas de contraprestación

De los diarios de actividades surge que los beneficiarios dedican 2,64 horas a las actividades de contraprestación a lo largo de un día promedio semanal, es decir 13,2 horas semanales¹²⁷ son insumidas por estas actividades. Estos datos presentan diferencias con los surgidos del análisis de Monza y Giacometti (citado en Neffa, 2009). Los autores señalaban que hacia 2003 el 81,4% de los beneficiarios que realizaban algún tipo de actividad de contraprestación dedicaban a las mismas entre 15 y 24 horas semanales, mientras que el 11,1% dedicaba menos de 15 horas. Estas diferencias radicarían en la progresiva disminución del tiempo asignado a estas tareas, documentado en una serie de investigaciones (Neffa, 2009).

En términos diferenciales por sexo, estas actividades insumen 2,84 horas para el caso de los hombres y 2,62 horas para las mujeres. Si consideramos la duración media específica¹²⁸, el tiempo dedicado a las actividades de contraprestación se eleva a 3,06 horas para el caso de los hombres y a 3,1 horas para el caso de las mujeres.

¹²⁶ En los Capítulos 1 y 2 ya fueron señaladas las diferencias existentes entre las condicionalidades y las contraprestaciones incorporadas a los PTMC, en general, y al PJJHD, en particular.

¹²⁷ El cálculo de las horas semanales surge de multiplicar por siete los tiempos promedios diarios. En este caso específico se ha multiplicado por cinco por ser una actividad que se desarrolla sólo en días hábiles.

¹²⁸ Como señaláramos en el Introducción, la duración media específica de una actividad es la cantidad media de tiempo que emplean en ella aquel conjunto de individuos que realmente participan de la actividad.

Cuadro N° 21: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades de contraprestación. Promedio diario y semanal (lunes a viernes)

	Hombres	Mujeres	Total
Media genérica - promedio diario	2,84	2,62	2,64
Media específica - promedio diario	3,06	3,1	3,09
Media genérica semanal	14,18	13,08	13,2
Media específica semanal	15,27	15,51	15,48

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

*En horas y centésimas de hora

Varias consideraciones merecen ser realizadas a la luz de los datos. Un primer elemento de análisis que se desprende es el claro alejamiento de las normativas del Programa que establecen un cumplimiento no inferior a cuatro horas diarias en las actividades de contraprestación. El promedio diario dedicado a estas actividades es inferior a lo establecido por la normativa tanto si consideramos el tiempo medio genérico (2,64 horas para el total de los beneficiarios encuestados) como el tiempo medio específico (3,09 horas para el total de los beneficiarios encuestados). Esto es producto tanto del hecho de que las actividades se realizan sólo algunos días a la semana¹²⁹ como del hecho de que, cuando se realizan todos los días hábiles, en pocos casos se alcanzan las cuatro horas.

Cuadro N° 22: Tiempo* semanal de las actividades de contraprestación en hombres y mujeres

Hs.de Contraprest.	Hombres		Mujeres		Total	
	Beneficiarios	Porcentaje	Beneficiarios	Porcentaje	Beneficiarios	Porcentaje
0 hs.	1	7,1	18	15,7	19	14,7
2 hs.	0	0	6	5,2	6	4,7
4 hs.	1	7,1	2	1,7	3	2,3
6 hs.	0	0	1	0,9	1	0,8
8 hs.	1	7,1	6	5,2	7	5,4
10 hs.	0	0	2	1,7	2	1,6
12 hs.	2	14,3	8	7,0	10	7,8
14 hs.	0	0	2	1,7	2	1,6
15 hs.	3	21,4	15	13,0	18	14,0
16 hs.	0	0	9	7,8	9	7,0
17,3 hs.	0	0	1	0,9	1	0,8
17,5 hs.	1	7,1	0	0,0	1	0,8
20 hs.	5	35,7	45	39,1	50	38,8
Total	14	100,0	115	100,0	129	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

¹²⁹ Este dato también fue señalado por Rodríguez Enríquez (2007b).

Una mirada del tiempo semanal dedicado a las actividades de contraprestación permite introducir otros elementos que aportan a una descripción más integral de la problemática. Los datos muestran que sólo el 38,8% de los beneficiarios encuestados (el 35,7% para el caso de los hombres y el 39,1% para el caso de las mujeres) ha realizado actividades de contraprestación todos los días durante las semanas de referencia y, esos días, ha dedicado al menos cuatro horas a las mismas. Dentro de este grupo han sido incluidos cinco beneficiarias que participaban de componentes particulares dentro del Programa, tales como los microemprendimientos o el componente de reinserción laboral. En ambos casos, la percepción del beneficio ha permitido construir una incipiente trayectoria de reinserción laboral, ya sea por el autoempleo (microemprendimiento) o a través del trabajo asalariado (componente de reinserción laboral). En estas trayectorias, el tiempo dedicado a la realización de las actividades de contraprestación y al trabajo remunerado no puede ser claramente separado o seccionado; consecuentemente, se optó por computar a las actividades de contraprestación un máximo de cuatro horas diarias los cinco días hábiles de la semana¹³⁰, mientras que el resto de las horas fueron computadas a la categoría “trabajo remunerado”.

Dentro del grupo de beneficiarios que declaran haber dedicado a las actividades de contraprestación 20 horas semanales durante las semanas de referencia, es probable que un número no menor de ellos haya condicionado su respuesta: por el temor a perder el beneficio en caso de no cumplir con los requisitos establecidos, por la duda (manifestada en varias oportunidades por los beneficiarios) en relación a las instituciones que aplicaban la encuesta, y por la difusión de los datos surgidos de la misma. Este análisis puede ser refrendado por tres elementos señalados anteriormente: 1) el entramado de control social que hemos podido reconocer en la implementación de los PTMC que incorporan elementos del *workfare*; 2) la dificultad o el obstáculo enfrentado en la realización del trabajo de campo de tener que volver varias veces a buscar las encuestas porque los beneficiarios no eran encontrados en los días y horarios señalados como de realización de las actividades de contraprestación¹³¹; y 3) las

¹³⁰ Esta decisión se tomó atendiendo al hecho de que en ningún caso los beneficiarios encuestados superan el límite mínimo pautado en la normativa del Programa de dedicación a las actividades de contraprestación.

¹³¹ Es interesante observar que cuando se le consultaba a algún beneficiario sobre sus ausencias o las de alguno de sus compañeros, las respuestas más habituales se relacionaban con enfermedades propias, de sus hijos u otros familiares. Estos datos se contraponen de forma clara con las características de las estrategias defensivas, descritas por Dejours (1992), creadas por el subproletariado para protegerse del sufrimiento. Para el autor, esta estrategia defensiva se asienta en una reticencia generalizada a hablar de

limitaciones propias de este tipo de metodología que lleva a los encuestados a ejercer una especie de auto-censura ante aquellos actos juzgados como reprobables.

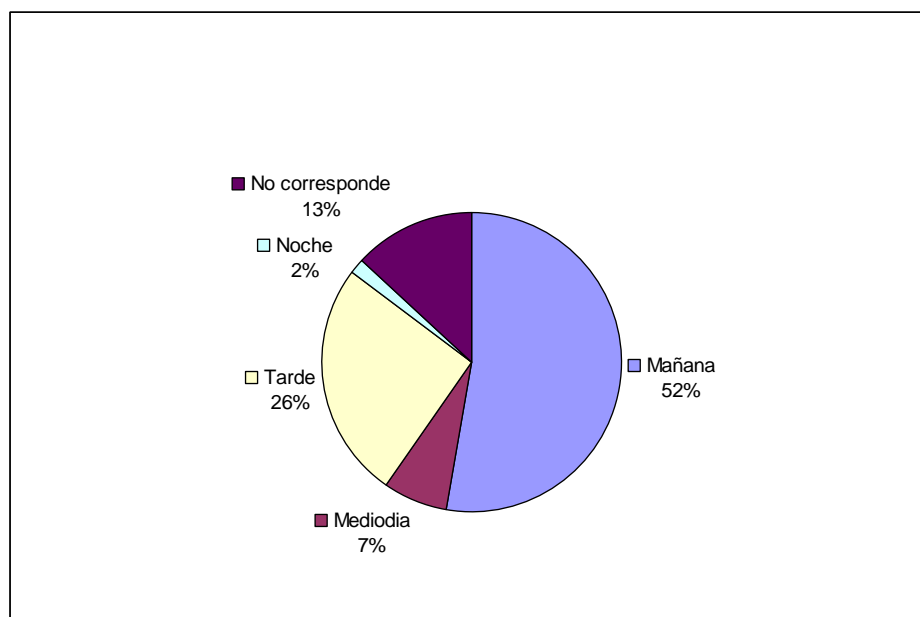
Otro elemento interesante para señalar es que 19 de los beneficiarios encuestados (el 14,7%) no participaron realmente de las actividades de contraprestación en las semanas de referencia. De esos 19 beneficiarios, 18 son mujeres. El único hombre que durante las semanas de referencia no asistió a realizar las actividades de contraprestación manifiesta para todo el período haber permanecido en la cama por enfermedad. En el caso de las 18 beneficiarias restantes no hay motivos aparentes para la ausencia. Como veremos en el apartado siguiente la mayor parte de estas beneficiarias (14) están vinculadas a centros comunitarios pero no realizan concretamente ninguna actividad y en todos los casos asisten esporádicamente a firmar las planillas de asistencia. Las cuatro beneficiarias restantes abarcan situaciones heterogéneas: realizan las actividades de contraprestación en sus domicilios, han estado realizando alguna otra actividad remunerada, etc. Parte de este grupo de 19 beneficiarios constituiría una especie de “zona gris” o “zona intermedia” entre los beneficiarios no encontrados en los centros comunitarios realizando tareas de contraprestación y aquellos que, habiendo respondido la encuesta, manifiestan a través de los diarios de actividades una dedicación real y efectiva a la realización de las actividades¹³².

No es posible establecer relaciones significativas entre las horas de dedicación a las actividades de contraprestación y los grupos de edad. Tanto la efectiva participación en las actividades de contraprestación como la ausencia a las mismas se distribuyen de manera relativamente uniforme entre los distintos grupos etarios. Estos datos se contraponen con la experiencia de la Sociedad Productiva de Subsistencia descrita por Jahoda (1987) anteriormente referenciada. Del relato de esta experiencia surge que fueron los mayores quienes acogieron de forma más favorable la estructura temporal diaria proporcionada por el proyecto.

enfermedad y de sufrimiento, intentando esconder el hecho a los otros, pero también a la familia y a los vecinos. Así, la vivencia de la enfermedad se confirma como un sentimiento colectivo de vergüenza. Esta relación sólo se vuelve más flexible en relación a la enfermedad de los niños: “en el subproletariado, todo es organizado, todo es estructurado, todo converge para salvaguardar la vida de los niños” (Dejours, 1992:30).

¹³² Esta característica no es propia del PJJHD, sino que ya había sido señalada para otros programas implementados con anterioridad (Grondona, 2011; Kessler y Roggi, 2005).

Gráfico N° 3: Momento del día en el que se realizan las actividades de contraprestación



Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

En cuanto al momento del día en que se desarrollan las actividades, es posible observar en el gráfico anterior que más de la mitad de los beneficiarios encuestados las realizan en el transcurso de la mañana y en menor medida durante la tarde. Como señalamos anteriormente la dificultad para poder acceder a los beneficiarios que realizaban sus actividades durante la noche da lugar a una escasa representatividad dentro de los encuestados. Finalmente, son consignados como “no corresponde” aquellos beneficiarios que no realizan de forma efectiva tareas de contraprestación.

Los datos surgidos de los diarios de actividades marcan una serie de tendencias coincidentes con los elementos de análisis que se hicieron presentes a partir de los relatos de los coordinadores y personal de gestión de los centros comunitarios y asociaciones civiles. A los efectos de poder hacer confluir estas dos lógicas ensayamos una “lectura” del tiempo medio genérico que los beneficiarios dedican a las actividades de contraprestación desde el concepto de reciprocidad social. En este sentido, lo que se busca no es medir la reciprocidad sino explorar el peso diferencial que los encuadres y prescripciones impuestos por los PTMC que incorporan elementos del *workfare* (y que, son expresivos de la reciprocidad exigida a los beneficiarios en virtud de la transferencia monetaria percibida) tienen en término de uso del tiempo.

Cuadro N° 23: Relación entre tiempo medio de las actividades de contraprestación y el concepto de reciprocidad social

Tipo de Reciprocidad*	Hombres		Mujeres		Total	Porcentaje
	Nros. Absolutos	Porcentaje	Nros. absolutos	Porcentaje		
Reciprocidad Negativa	1	7,1	18	15,7	19	14,7
Reciprocidad Débil	8	57,1	45	39,1	53	41,1
Reciprocidad Estricta	5	35,7	52	45,2	57	44,2
Total	14	100,0	115	100,0	129	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Del cuadro se desprenden, una vez más, la ausencia de una correspondencia o una proporcionalidad estricta entre la contribución de los beneficiarios y la transferencia otorgado por el Estado, y la fuerte presencia de una necesidad de contribuir “en alguna medida” para tener derecho a recibir una porción de recursos. Tres situaciones son comprendidas dentro del grupo de beneficiarios que reciprocando no llegan a cumplir con la dedicación mínima establecida por la normativa: 1) aquellos beneficiarios que asisten sólo algunos días a realizar las tareas de contraprestación (50,9%); 2) aquellos beneficiarios que asisten todos los días a realizar las tareas de contraprestación pero le dedican menos de cuatro horas diarias (28,3%); y finalmente 3) aquellos beneficiarios que sólo asisten algunos días y que permanecen menos de cuatro horas los días que asisten (20,8%).

La gama de situaciones descripta junto con los niveles de ausencia de los beneficiarios a las actividades de contraprestación presentada en el capítulo anterior da cuenta -una vez más- de la heterogénea presencia de encuadres y prescripciones impuestos por los PTMC que incorporan elementos del *workfare*.

2.2.- Descripción de los proyectos donde contraprestan los beneficiarios encuestados

En este apartado se analizan los diferentes proyectos de contraprestación en los cuales se encuentran insertos los beneficiarios encuestados. En este sentido, es importante señalar que no existe una división, entre los participantes, de las tareas o

* Fueron comprendidos dentro del concepto de “reciprocidad estricta” aquellos beneficiarios que cumplieron con el mínimo establecido por la normativa (20 horas) en las semanas de referencia; dentro del concepto de “reciprocidad débil” fueron englobados los beneficiarios que contraprestaron entre 1 y 19 horas; y finalmente la “reciprocidad negativa” comprende a aquellos beneficiarios que no contraprestaron ni siquiera una hora dentro del mismo período.

trabajos intrínsecos a un proyecto, sino que todos los beneficiarios participantes de un proyecto comparten los diferentes tipos de tareas o actividades que le son propios.

De los proyectos de contraprestación de los que participan los beneficiarios encuestados se desprenden tres ejes analíticos centrales. El primero de esos ejes es que la gran mayoría de los beneficiarios permanecía realizando actividades de contraprestación en tres de los cuatro tipos de los proyectos considerados más significativos, en términos numéricos, dentro de los proyectos avalados por centros comunitarios y asociaciones civiles. Ellos son: “limpieza y mantenimiento”, “comedor y copa de leche” y “roperos y costureros”. Junto a ello es posible señalar también la virtual extinción del cuarto tipo de proyecto más significativo, en términos numéricos respecto de los datos del Registro de Proyectos de Contraprestaciones elaborado por el Servicio Municipal de Empleo, los proyectos de “huertas” y el surgimiento de nuevos proyectos en los que participan algunos beneficiarios, tales como microemprendimientos, peluquería, manualidades, etc¹³³.

El segundo eje de análisis da cuenta del predominio de proyectos relacionadas con las necesidades vitales de los beneficiarios y de la comunidad a la cual pertenecen (copa de leche, comedores comunitarios, roperos, huertas, atención sanitaria)¹³⁴. El tercer eje refiere al importante número de proyectos referentes a actividades técnicas o de servicios que posibilitan el funcionamiento y gestión de las organizaciones de base territorial y, consecuentemente, actúan como estructuras de apoyo y/o mecanismos que posibilitan el resto de las actividades (limpieza y mantenimiento, secretaría administrativa de las instituciones).

¹³³ El elemento que permite dar cuenta de estas variaciones es el paso del tiempo que media entre la última actualización del Registro de Proyectos de Contraprestación elaborado por el Servicio Municipal de Empleo (2004) y el momento de realización del trabajo de campo (2006).

¹³⁴ Desde la perspectiva de Trujillo y Sarabia (2011), los bienes y servicios producidos pueden incluirse dentro de la categoría nativa de “ayuda”.

Cuadro N° 24: Beneficiarios encuestados en proyectos de contraprestación por sexo

Actividades de contraprestación	Hombres		Mujeres		Total	
	Benefic.	%	Benef.	%	Benef.	%
Atención de niños (en guarderías o jardines)	0	0,0	4	3,5	4	3,1
Copa de leche-comedor	5	35,7	44	38,3	49	38
Secretaría administrativa de las instituciones	1	7,1	2	1,7	3	2,3
Microemprendimiento	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Ropero	0	0,0	8	7,0	8	6,2
Limpieza-mantenimiento	8	57,1	18	15,7	26	20,2
Cuidado de ancianos	0	0,0	5	4,3	5	3,9
Manualidades	0	0,0	9	7,8	9	7
Peluquería	0	0,0	5	4,3	5	3,9
Atención sanitaria	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Huerta	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Contraprestación educativa	0	0,0	1	0,9	1	0,8
No consignado	0	0,0	14	12,2	14	10,9
Participa en dos proyectos	0	0,0	2	1,7	2	1,6
Total	14	100	115	100	129	100

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Los dos últimos ejes de análisis pueden ser señalados dentro de lo que Mingione (1993) considera como estructuras recíprocas que siguen limitando la difusión de la mercantilización¹³⁵. Para el autor, las comunidades locales, de parentesco y de vecindad continúan funcionando hasta cierto punto -por estar atravesando un fuerte proceso de debilitamiento- guiadas por fundamentos que son alternativos con respecto a las tensiones competitivas y las regulaciones asociativas. Dentro de estas estructuras, los individuos y sus familias (para el caso analizado sería importante sumar las organizaciones de base territorial) logran obtener parte de los recursos en condiciones que difieren de las impuestas por los modelos principales de mercantilización. Es interesante ver que el tipo de actividades con las que el autor ejemplifica su relato

¹³⁵ Tal es así que muchas de estas actividades fueron vistas por la literatura europea fundamentalmente como verdaderos “yacimientos de empleo”. Es decir, como actividades pasibles de una transformación sistemática en empleos. Muchos de estos “nichos” surgirían de las nuevas necesidades ligadas a los cambios que acontecen en las sociedades actuales y de la ruptura de las formas de ayuda recíproca. Esta ruptura estaría generada por la urbanización, el estrechamiento de las relaciones familiares a la vida conyugal y las coacciones de la organización del trabajo, entre otros. Desde la perspectiva de Castel (1997), resulta curioso que estas posiciones sean sostenidas incluso por aquellas tradiciones de pensamiento críticas al Estado Social, del que denuncian sus intervenciones burocráticas y las regulaciones generales que han roto las formas anteriores de solidaridad. Estos “nuevos yacimientos de empleo” están muy por debajo de la relación salarial moderna, se trata de subempleos, empleos subcalificados y mal remunerados que no pueden desprenderse de una dependencia servil. Estos “servicios de proximidad” corren el riesgo de oscilar entre una filantropía paternalista y formas posmodernas de explotación de la mano de obra (Castel, 1997).

(reparaciones domésticas, trabajos de construcción en pequeña escala, atención de niños y/o ancianos) son actividades con presencia significativa dentro de los proyectos de contraprestación en los que participan los beneficiarios del PJJHD encuestados.

Sin embargo, en el contexto argentino posterior a la crisis de 2001, estos datos están dando cuenta de una verdadera crisis de la reproducción social enmarcada en una transformación profunda de las instituciones de bienestar y en una crisis sin precedentes de los mecanismos de movilidad social. En este sentido, los datos aportan un elemento revelador: el proyecto de contraprestación con mayor presencia de beneficiarios da cuenta de uno de los componentes más importantes de la reproducción social de la vida, la alimentación. El 38% de participación directa de beneficiarios en los comedores comunitarios y copas de leche (al que habría que sumarle el 0,8% de las huertas comunitarias) está dando cuenta de una forma de resolución de la subsistencia individual que ya no puede pasar por el ámbito de la familia y/o del mercado. Adicionalmente, buena parte de las actividades enmarcadas en los proyectos de “limpieza y mantenimiento” se relacionan de forma indirecta con la comida por suponer tareas de higiene o reparación de utensilios y de higiene de los espacios donde se cocina y donde es servida la comida, la merienda o el desayuno.

La forma en que el Estado argentino fue asistiendo a los sectores populares¹³⁶ en materia de alimentación fue adoptando diferentes modalidades. Así, la modalidad más difundida por los programas de asistencia durante la década del 80 fue la entrega directa de alimentos, en la modalidad de “cajas”, “bolsas” o “bolsones”. Sin embargo, este tipo de política presenta un límite claro: no es posible garantizar que el beneficio llegue a los más necesitados, es decir a los niños, las embarazadas y a los adultos mayores (Polischer, 2006).

La figura del comedor comunitario se extiende con fuerza en nuestro país a partir de la crisis hiperinflacionaria de fines de la década del 80. Para ese momento la denominación más usual (tanto académica como cotidiana) de este tipo de práctica era la de “olla popular”. Durante la década del 90, desde el Estado comienza a incentivarse la creación de comedores con el argumento de poder controlar quién consume los alimentos. A partir de ese momento, la divulgación del fenómeno comienza a dar cuenta

¹³⁶ No se asimila aquí a los beneficiarios del PJJHD con “sectores populares” en general, sino que se trata de encuadrar las problemáticas planteadas dentro de un marco más general de las formas de supervivencia cotidiana y material en los grupos de rentas insuficientes.

de una transformación en las formas de resolver la reproducción de la vida cotidiana en los sectores populares. Esta transformación refiere a la paulatina adopción de métodos de resolución colectiva de la subsistencia individual.

Los comedores comunitarios y copas de leche funcionan a partir del procesamiento o transformación (con trabajo voluntario o como contraprestación de beneficiarios de planes sociales) de alimentos secos y/o húmedos provenientes del Estado. En términos generales, los recursos con los que funcionaban los comedores comunitarios, en los centros comunitarios y asociaciones civiles donde se realizó el trabajo de campo, provenían de programas alimentarios del gobierno nacional, mientras que las copas de leche funcionaban con recursos provenientes de la Provincia y, en algunas ocasiones, del Estado municipal. Los receptores directos son los niños del barrio y, en menor medida, los adultos mayores o las familias completas. Los beneficiarios del PJJHD y sus hijos son, consecuentemente, receptores de estos recursos, los cuales son consumidos en los centros comunitarios o llevados como ración a sus hogares.

Este tipo de política crea la necesidad de un contacto medianamente fluido y constante con los aparatos del Estado, convirtiendo, de esta manera, a algunas de las actividades de servicio realizadas en las organizaciones de base territorial (tales como las tareas administrativas y de secretariado) en eslabones fundamentales de funcionamiento de este sistema¹³⁷.

En el análisis de Polischer (2006) la expansión de los comedores comunitarios supone un avance de la intervención del Estado sobre la familia en la medida en que actúa desdibujando por completo la ya limitada capacidad en los sectores populares de decidir sobre los alimentos a consumir. A diferencia de otro tipo de políticas mediante las cuales el Estado históricamente ha cubierto las necesidades de los sectores carenciados, la alimentación permanecía como un acto privado.

La pérdida de la capacidad familiar de hacerse cargo de las necesidades alimenticias de sus miembros conlleva, en el mejor de los casos, una mayor presencia del Estado, el cual comienza a ocupar el lugar de la misma. Dentro de la tendencia a la precarización de la función socializadora de la familia, el histórico acto privado de la

¹³⁷ Este tipo de actividades recaen en los líderes de las organizaciones o en personas de su confianza. En el primero de los casos, el líder de la organización puede o no ser beneficiario del Programa; en el segundo de los casos, el colaborador siempre realiza la tarea como forma de contraprestación del PTMC.

alimentación se hace público¹³⁸; más aun -y siempre desde la perspectiva de la autora-, el Estado “normativiza” este acto, lo define y lo determina. Este proceso no hace sino enfatizar la vulnerabilidad de los receptores o beneficiarios:

“La dependencia que tienen los sujetos señala la contradicción existente entre la proclamada obligación del Estado de dotar a las familias de los recursos necesarios para asumir la responsabilidad de sus hijos y la efectiva imposibilidad de realizarlo. La modalidad, la calidad de la alimentación y las características de los comedores comunitarios hablan más del ‘abandono’ al que el Estado somete a las familias que de la protección que les brinda” (Polischer, 2006: 31)

Un análisis de la presencia diferencial en términos de género de los beneficiarios en proyectos de contraprestación muestra que para el caso de los hombres los dos conjuntos de proyectos de contraprestación planteados como más relevantes aparecen reforzados. Así, puede observarse que los proyectos de contraprestación relacionadas con las necesidades vitales de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades, y las actividades técnicas y de servicios vinculadas al funcionamiento y gestión de las organizaciones de base territorial, aparecen como los únicos tipos de proyectos realizados por los hombres. Dentro de ambos grupos de proyectos el peso específico mayor está dado por los proyectos relativos a las actividades técnicas y de servicios, los cuales representan poco menos del 65% (limpieza y mantenimiento 57,1% y secretaría administrativa de las instituciones 7,1%).

En el caso de las encuestadas mujeres, la variedad de proyectos en los que participan es mayor; sin embargo, el peso de algunos de estos proyectos es poco significativo (tal es el caso de microemprendimientos y contraprestación educativa). El predominio de proyectos de contraprestación vinculadas con la supervivencia material y de proyectos relacionados con actividades técnicas y de servicios se mantiene para el caso de las mujeres. Sin embargo -y a la inversa de lo que pasa con el caso de los hombres- aquí la supremacía entre ambos está dada por los proyectos relacionados con las necesidades vitales, los cuales llegan a superar el 57%¹³⁹. Sin lugar a dudas, estos datos confluyen con las investigaciones que daban cuenta del lugar central de las

¹³⁸ La tendencia -observada durante la realización del trabajo de campo- a permitir a las familias llevar las raciones alimenticias a sus casas se basaba justamente en un intento por revertir estos procesos y en pensar a la “mesa familiar” como un espacio de socialización y de transmisión de valores.

¹³⁹ De los cuales 38,9% corresponden a copa de leche-comedor, 0,9% atención sanitaria, 0,9% huerta y 7,0% ropero comunitario.

mujeres de los sectores populares en términos genéricos como gestoras y organizadoras del trabajo comunitario para la provisión de los servicios básicos como forma de hacer frente a las duras condiciones de vida.

Otras dos consideraciones merecen ser realizadas dentro del grupo de beneficiarias mujeres en relación al tipo de proyectos de contraprestación en los cuales participan. La primera es que, en un caso, dos beneficiarias no participan sólo de un proyecto sino que combinan la participación en dos proyectos diferentes dentro de las horas fijadas por la normativa del PJJHD. Una de las beneficiarias combina la participación en un proyectos de limpieza y mantenimiento con el cuidado de ancianos; la restante asiste a la escuela (proyecto de contraprestación educativa) y realiza tareas de costura y planchado en un ropero comunitario.

La segunda consideración que merece ser señalada es que más de un 12% de las beneficiarias (las cuales aparecen contabilizadas como en proyectos “no consignados”) no realizan ningún tipo de actividad de manera concreta en ningún proyecto. Se trataba, en todos los casos, de beneficiarias vinculadas a proyectos de contraprestación avalados por un sindicato, las cuales sólo asisten a la sede sindical una vez al mes o cada dos meses a firmar las planillas de asistencia del PJJHD. La planilla de asistencia les es entregada a las beneficiarias previo pago de la cuota sindical obligatoria.

En términos generales, es posible señalar que la mayor parte de los proyectos de contraprestación en los que se insertan las beneficiarias como forma de retribuir al Programa supone la realización de actividades asociadas con tareas reproductivas o con ocupaciones denominadas como “típicamente femeninas”. Es decir, se trataba de proyectos que suponen actividades de contraprestación que refuncionalizan las “habilidades femeninas” generadas a partir de rol doméstico asignado a la mujer en el marco de la división sexual del trabajo y que reproducen los mecanismos de segregación horizontal por tipo de tareas propios del mercado de trabajo. Elementos similares de análisis surgieron de la investigación de Perona, Rocchi y Mariani (2004). Sin embargo, en este caso, las autoras señalan que la concentración en actividades “típicamente femeninas” convive con la participación en “una multiplicidad de actividades e incluso en trabajos que, a priori, se piensan realizados por los hombres. Sólo a modo de ejemplo, el trabajo en bloqueras, en trabajos de mantenimiento, en carpintería” (Perona, Rocchi y Mariani, 2004: 8).

Todos los elementos antes mencionados se relacionan de forma directa con una de las problemáticas que ha atravesado con más fuerza las discusiones socio-antropológicas desde la década del 70 en relación a los denominados sectores populares en general: la problemática de la supervivencia cotidiana y material de los grupos con rentas insuficientes o directamente privados de esa renta.

La obra *Cómo sobreviven los marginados* de Lomnitz, publicada originalmente en 1974, fue la punta de lanza de la discusión en el contexto latinoamericano. Basada en una investigación realizada en una barriada de la ciudad de México, la autora caracterizaba a los marginados positivamente a partir de las estrategias de supervivencia, apartándose así de toda una tradición de pensamiento que definía a los pobres en términos predominantemente pasivos y negativos (de la Peña, 1994). Para Lomnitz (1998), el recurso básico de los pobladores de las barriadas mexicanas era su mano de obra, pero éste recurso representaba una base insuficiente para la supervivencia física. La situación de inseguridad crónica era afrontada por la población a partir de la construcción de dos estrategias. La primera de ellas era la adaptación a un nivel de consumo mínimo (equivalente a una economía urbana de subsistencia), mientras que la segunda estrategia estaba relacionada con la creación de un sistema de organización social basado en redes de intercambio de bienes y servicios. Cuando la supervivencia física o social de un grupo se encontraba en juego, las personas movilizaban sus recursos sociales y los convertían en recursos económicos.

Así, la respuesta central a aquel interrogante inicial se encontraba en las redes de intercambio desarrolladas por los pobladores, las cuales constituían un mecanismo efectivo para suplir la falta de seguridad económica que prevalecía en la barriada. En el análisis de Lomnitz (1998), las redes sociales se constituían en las estructuras económicas que maximizaban seguridad.

Esta obra inauguró toda una línea de investigación que se extendió con fuerza por buena parte de América Latina por aproximadamente veinte años. Durante todos estos años, el eje de análisis continuó centrado en las redes sociales de intercambio recíproco y de ayuda mutua como una de las estrategias más exitosa para sobrevivir cuando se es pobre en la ciudad. Sin embargo, la persistente aplicación de políticas de corte neoclásico en toda la región, con sus significativos impactos en las condiciones sociales y materiales de vida de la población, profundizaron los condicionantes del contexto e invitaron a nuevos debates teóricos. Ante este panorama, han surgido

trabajos sumamente interesantes que buscan confrontar y poner en la mesa de discusión la validez actual de la tesis que plantea a los mecanismos de intercambio recíproco y de ayuda mutua como estrategias exitosas para mitigar y amortiguar el problema de la pobreza en poblaciones urbanas (Enríquez Rosas, 2000).

Desde mediados de la década del 90, una serie de investigaciones desarrolladas fundamentalmente en México ha puesto en cuestión las posibilidades actuales de un intercambio recíproco en un contexto de deterioro y de agudización de la pobreza, producto de sus costos en tiempo, disponibilidad y, sobre todo, en inversiones materiales de bienes y servicios. Desde estas perspectivas los escasos recursos de los pobres urbanos obstaculizan las posibilidades de reciprocitar los favores y apoyos recibidos. No contar con un capital mínimo para asegurar y mantener la pertenencia a la red social, ha favorecido situaciones de aislamiento social que dejan en condiciones de vulnerabilidad y desamparo social a muchos hogares urbanos pobres. En este sentido, las redes sociales en general, pero sobre todo las familiares, enfrentaron límites muy graves en su capacidad para brindar apoyo. La escasez de dinero y de trabajo presiona de manera doble la base de esta relación. Por un lado, cada vez hay menos bienes que se pueden repartir entre los parientes, mientras que por otro, las necesidades crecen sin cesar.

Es, justamente, en este último elemento donde parece centrarse buena parte de la argumentación de esta corriente de pensamiento. El proceso de erosión de los sistemas de apoyo en contextos de exclusión haría referencia, fundamentalmente, a los cambios que la familia -como instancia que resuelve los problemas de la escasez- ha experimentado en su organización y en su posibilidad de responder con sus estrategias tradicionales de sobrevivencia. Las repercusiones de esta imposibilidad de mantener el intercambio recíproco, que se había venido practicando anteriormente, no sólo afectan las condiciones materiales de vida de los pobres urbanos, sino también los patrones socioculturales que están detrás de la lógica del intercambio y la solidaridad. El límite de los recursos que viven muchos hogares pobres urbanos en la actualidad, está también generando nuevos patrones de comportamiento familiar, doméstico y social (Enríquez Rosas, 2000).

Entre estos nuevos patrones de comportamiento, las investigaciones dan cuenta del debilitamiento de las unidades familiares extensas (ampliadas y trigeracionales) y el aglutinamiento de la familia nuclear, la diversificación de funciones de los hogares

(dando lugar a tareas tanto productivas como reproductivas), los reajustes en el espacio, tiempo y rutinas domésticas producto de la masificación y mayor perdurabilidad del desempleo y, finalmente, el deterioro de la confianza. Todos estos elementos llevarían a resolver los problemas cotidianos de manera autónoma y autosuficiente, y establecer límites espaciales definidos para evitar la cercanía social.

El aislamiento social y el desdibujamiento de los vínculos sociales en los que focalizan este grupo de investigaciones son, sin lugar a dudas, subsidiarios del análisis de Castel (1997). Partiendo de considerar al trabajo como el soporte privilegiado de inscripción en la estructura social, Castel (1997) considera que existe una fuerte correlación entre el lugar ocupado en la división social del trabajo, y la participación en redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que “cubren” a un individuo ante los riesgos de la existencia. De allí la posibilidad de construir lo que el autor denomina “zonas” de cohesión social. Así, la asociación “trabajo estable / inserción relacional sólida” caracteriza una zona de integración. Contrariamente, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión, o la desafiliación.

La desafiliación, tal como la entiende el autor, es en un primer sentido una ruptura de las redes de integración primaria, un primer corte con las regulaciones dadas a partir de la inserción en la familia y del sistema de interdependencias fundadas en la pertenencia comunitaria. El riesgo de desafiliación se produciría cuando el conjunto de las relaciones de proximidad que mantiene un individuo sobre la base de su inscripción territorial, que es también su inscripción familiar y social, tiene una falla que le impide reproducir su existencia y asegurar su reproducción. Dentro de este esquema, la vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad.

Dos consideraciones merecen ser señaladas en relación al esquema construido por el autor. La primera de ellas es que “estas configuraciones no están dadas de una vez y para siempre” (Castel, 1997: 15). En este sentido, el interés del autor no se encuentra en ubicar a los individuos en estas “zonas”, sino en despejar los procesos que los llevan de una zona a otra.

La segunda consideración es de particular interés para nuestro análisis en tanto supone que “éstas asociaciones no actúan de una manera mecánica” (Castel, 1997: 15). El esquema de lectura desarrollado por Castel (1997) no coincide exactamente con la

estratificación social, en la medida en que pueden existir grupos fuertemente integrados aunque cuenten con pocos recursos. Este sería el caso de numerosos grupos de los sectores populares donde la precariedad de las condiciones de trabajo es a menudo compensada por la densidad de las redes de protección cercana. Castel (1997) ejemplifica su análisis con dos situaciones: 1) la estructura de tipo corporativa de los artesanos, que por lo general, a pesar de los ingresos mediocres, asegura la estabilidad del empleo y protecciones sólidas contra los riesgos sociales, y 2) las poblaciones asistidas, en las cuales la ausencia de recursos suscita el socorro en forma de protección cercana (indigencia integrada). Aquí la dimensión económica no es el rasgo distintivo esencial, y la cuestión planteada no es la pobreza, aunque los riesgos de desestabilización pesen más sobre quienes carecen de reservas económicas.

El importante número de proyectos de contraprestación relacionados directamente con la supervivencia material (copa de leche y comedores comunitarios, huertas, roperos comunitarios, atención sanitaria) y con tareas técnicas o de servicios que posibilitan el funcionamiento y gestión de las organizaciones de base territorial estaría dando cuenta de una lógica que se aparta del modelo que conjuga precariedad del trabajo y fragilidad de los soportes de proximidad. Es decir, estamos en presencia de una situación mucho más próxima de aquellas lógicas descriptas por Castel (1997) que se apartan de esta asociación mecánica, pero por sobre todas las cosas de una situación que conjuga una serie de elementos de características heterogéneas.

Como señaláramos anteriormente, el modelo neoliberal supuso en Argentina el debilitamiento de las instituciones especializadas de protección, y la transferencia de parte de esas protecciones hacia formas de sociabilidad primaria, filantrópicas y de beneficencia. De forma simultánea, este proceso se fue conjugando paulatinamente con una creciente dependencia por parte de los sectores populares de determinados recursos provenientes de las políticas sociales. Sin lugar a dudas, el punto máximo de esta espiral ascendente está constituido por la crisis de 2001 y sus devastadoras consecuencias en términos de reproducción social.

La retirada generalizada por parte del Estado de la provisión de determinados bienes y servicios considerados básicos contiene en su interior un exponencial aumento de los niveles de dependencia por parte de aquellos sectores excluidos (tanto del empleo como de los sistemas de protección social) de la obtención de recursos estatales para su reproducción material y cotidiana. Las organizaciones de base local, territorial y

comunitaria se constituyen en espacios de “intermediación”, en espacios de articulación de la lejanía estatal con la dependencia de sus recursos por parte de los sectores populares. Es decir, y en palabras de Merklen (2005), los sectores populares acceden a los recursos provenientes de las políticas sociales bajo la forma de dinero o en especie (leche, alimentos) a través de la inscripción en estas estructuras de vecinazgos. Pero estas organizaciones no producen recursos, sino que son las encargadas de distribuir y hacer circular esos recursos a los que, en la mayoría de los casos, se accede en las diferentes esferas estatales.

La participación o “afiliación”, en palabras del autor, a diferentes organizaciones de base territorial permite que las relaciones sociales estructuradas en el barrio se transformen en recursos económicos que aportan a la subsistencia material y posibilitan hacer frente a las carencias cotidianas. Esta solidaridad local, estructurada en torno a las organizaciones sociales barriales actúa brindando algunos reaseguros mínimos a los individuos y sus familias en la medida en que se constituyen en las únicas instancias de protección. Sin embargo, y de manera concomitante, esta estructura de solidaridad localmente organizada presenta signos de dominación basados en jerarquías muy marcadas.

A partir de esto, el propio Merklen (2005) se cuestiona si el barrio popular constituye una forma de “protección social” para los individuos y sus familias, o se trata más bien de un refugio en el que se repliegan los que se quedan fuera de los sistemas sociales.

Sin lugar a dudas, la ayuda brindada por los centros comunitarios y organizaciones civiles a través de los recursos puestos en disponibilidad por las actividades de contraprestación del PJJHD constituye un resguardo, un refugio -tal vez el único- ante las situaciones de pobreza y precariedad que atraviesan los propios beneficiarios y la comunidad en la que se insertan. Estas estructuras de solidaridad local no pueden en ningún caso suplir a las protecciones y a las formas de socialización aportadas por las instituciones y el trabajo, sino que son sólo sistemas de intercambios y de participación estructurados por normas locales (Merklen, 2005).

Un planteo que va en una dirección similar es aportado por Superville y Quiñones (2005). Para los autores, el debate en torno a la exclusión/inclusión se estructura en torno a dos órdenes. El primero, denominado exclusión primaria, refiere a la diferenciación funcional de las sociedades que delimitan los contornos de la

exclusión/inclusión. Estos límites serían producto de las específicas consecuencias del desarrollo capitalista en los países de la periferia, relacionadas con el empleo precario y la mano de obra siempre disponible, no organizada y barata. En el segundo orden, la inclusión/exclusión secundaria está relacionada con el funcionamiento de pequeñas y grandes redes: redes de favores, de venta de ventajas, de intercambio de influencias, de actividades parasitarias cuyo recurso básico es conocer a alguien que conozca a alguien y que el intercambio de favores y acciones imponga relaciones cara a cara. Consecuentemente, la exclusión secundaria supone el no acceso a redes de interacción de influencias.

La consideración de estos dos órdenes y la labilidad de las fronteras entre la exclusión y la inclusión permiten plantear un escenario de “inclusión dentro de la exclusión”, en donde a pesar de no poder acceder a muchos de los sistemas básicos de bienestar social existe acceso a redes de interacción y autoayuda que configuran a veces un verdadero sistema alternativo (Superville y Quiñones, 2005). Las redes de apoyo vecinal, familiar, de género, de amistad o estrictamente solidarias conforman un tejido que permite paliar de alguna forma la exclusión primaria.

En este sentido, el planteo de Superville y Quiñones (2005) se aproxima al de Merklen (2005) y permite plantear para nuestra realidad de análisis un escenario en el cual las “zonas de vulnerabilidad” lo son en relación al trabajo y no, necesariamente, en relación a los soportes de proximidad. El predominio de actividades de contraprestación relacionadas con las necesidades vitales de los beneficiarios y de la comunidad a la cual pertenecen, y la relevancia de las actividades técnicas o de servicios que posibilitan el funcionamiento y gestión de las organizaciones de base territorial (las cuales, consecuentemente actúan como estructuras de apoyo y/o mecanismos que posibilitan el resto de las actividades) permiten plantear un escenario en el cual los beneficiarios que no pueden organizar la reproducción de su vida cotidiana a partir de los frutos de su trabajo se nutren -parcialmente- de los recursos puestos en disponibilidad por las estructuras comunitarios barriales y vecinales. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta situación se enmarca en un contexto generalizado de quiebre o debilitamiento de los lazos que unen a los individuos con la sociedad. Así, el fortalecimiento y la resignificación de las estructuras de protección cercana se producen en un contexto de debilitamiento y transformación de las formas de protección secundaria.

Derivado de lo anterior, es posible pensar que la única respuesta correcta al problema de cómo se las arreglan los grupos sociales de renta insuficiente para sobrevivir fue la elaborada por Minguione (1993): “depende del contexto histórico y social específico en que se hallen insertos”.

A modo de síntesis, podemos señalar que los datos -vinculados a las actividades de contraprestación- que se desprenden de los diarios de actividades van en la misma dirección que aquellos surgidos tanto de los registros oficiales como de las entrevistas a los informantes claves. En primer lugar, la mayoría de las actividades de contraprestación se realizan en proyectos comunitarios y, fundamentalmente, refieren a actividades vinculadas (directa o indirectamente) con las necesidades vitales de los beneficiarios y de la comunidad a la que pertenecen. Este tipo de proyectos son sumamente dependientes de una serie de recursos de duración limitada. Esta consideración es válida, incluso, en el caso de aquellos proyectos financiados con recursos provenientes de diferentes órbitas del Estado. La escasez o falta de recursos son elementos que juegan un rol decisivo en el hecho de que muchos de los emprendimientos comunitarios dejen directamente de funcionar¹⁴⁰. Como fue posible observar, un claro ejemplo de este tipo de situaciones son los proyectos de “huertas”, los cuales muestran tener una escasísima vigencia real. La desarticulación de proyectos existentes explica también que algunos beneficiarios deban buscar nuevos espacios donde insertarse o recurrir a diferentes estrategias -como las donaciones o aportes de los propios participantes- para poner a funcionar nuevos proyectos. Los beneficiarios que participan de proyectos de “peluquería”, “cuidado de enfermos” y “manualidades” se encuentran comprendidos dentro de estos procesos.

En los proyectos anteriormente descriptos, la gran mayoría de los beneficiarios no llega a cumplir un mínimo del requerimiento horario establecido por la normativa del Programa. La lógica que parece desprenderse de estos datos es la de contribuir “en alguna medida” o “hacer algo a cambio” (Rizzo, 2013) para tener derecho a recibir la transferencia monetaria.

En tanto, las actividades de contraprestación vinculadas a la “terminalidad educativa” y a los microemprendimientos productivos tiene poco peso siendo modalidades que podrían estar más vinculadas con el objetivo de generar herramientas y experiencia para quienes se encontraban fuera del mercado laboral, a fin de que

¹⁴⁰ Datos similares surgen del análisis de Rodríguez Enríquez (2007b).

pudieran revertir la situación en la que se encontraban y/o mejorando sus condiciones de “empleabilidad”. La participación de los beneficiarios en este tipo de actividades contraprestación es producto de líneas que tanto el Estado nacional como los Estados provinciales y locales estaban buscando fortalecer en el momento de la realización del trabajo de campo.

Asimismo, fue posible detectar algunas claras situaciones de falseamiento de datos y de utilización del sistema de contraprestaciones para sostener redes clientelares y para hacer uso de recursos humanos y económicos en función de beneficios privados.

3.- El trabajo remunerado

Como señalamos anteriormente los beneficiarios del PJJHD conjugan una situación particular. Por un lado, su condición de desocupados es socialmente reconocida; es decir, las instituciones especializadas de acción social los han reconocidos como tales (Kessler, 1996). No obstante, a diferencia de un tradicional subsidio a los desempleados, la percepción de una transferencia monetaria en el marco del PJJHD es ilimitada en el tiempo y sus beneficiarios están obligados a retribuir contraprestando con diferentes tareas entre 4 y 6 horas por el subsidio percibido. Adicionalmente, la transferencia monetaria tiene una escasa significación económica¹⁴¹ y en algunas oportunidades es complementada con algún trabajo informal.

Una situación similar es descripta por Wacquant (2001) cuando analiza las formas de supervivencia en el gueto negro norteamericano. Para el autor, la preponderancia de la desocupación y subocupación crónica entre los residentes del gueto los fuerza a buscar la asistencia pública. A su vez la “inadecuación insigne” de la ayuda pública, aun para la mera supervivencia, los empuja a buscar actividades adicionales no denunciadas o indenunciables que generan dinero. Del análisis se desprende que la mayoría de los habitantes del gueto tienen pocas opciones salvo trabajar de “sol a sol” en varios empleos o “rebuscarse” dinero mediante una serie de procedimientos. Sin lugar a dudas, la aclaración realizada por Merklen (2005) es bien valedera:

¹⁴¹ Los bajos subsidios provistos son tanto una característica de las políticas de *workfare* implementadas en Europa y en Estados Unidos como de los PTMC implementados en América Latina. En el caso específico del PJJHD, ni siquiera al momento de su implementación el monto de la transferencia llegó a equipararse con el salario mínimo.

“...los barrios pobres de Argentina no se distinguen en nada de los de otras sociedades en las cuales ni las instituciones ni el mercado son suficientes para la reproducción social de los sectores populares” (Merklen, 2005:60).

Cuadro N° 25: Beneficiarios que poseen ocupación en el mercado por sexo

	Ocupados		No ocupados		Total	
	Nros. Absolutos	Porcentaje	Nros. Absolutos	Porcentaje	Nros. Absolutos	Porcentaje
Hombres	11	78,6	3	21,4	14	100,0
Mujeres	35	30,4	80	69,6	115	100,0
Total	46	35,7	83	64,3	129	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

El cuadro precedente muestra que el 35,7% de los beneficiarios encuestados manifiesta -a través de las actividades consignadas en el diario de actividades- tener una ocupación en el mercado¹⁴² durante las semanas de referencia. Este dato va en consonancia con los surgidos de los informes del MTEySS hacia 2005 para el total del país. Según estos informes los beneficiarios del PJJHD que declaran tener una ocupación en el mercado (ya sea principal o secundaria) ronda el 33% (Neffa, 2009).

Para nuestro caso de análisis, esta proporción contiene en su interior importantes diferencias según género. Mientras que más del 78% de los hombres encuestados tienen un trabajo remunerado, esta cifra se reduce en el caso de las beneficiarias a poco más del 30%. Analizaremos separadamente una y otra situación.

3.1.- La situación de las mujeres

Dentro de las variables analizadas, el estado conyugal¹⁴³, la edad y, en mucha menor medida, el nivel de escolaridad fueron las variables que presentaron mayor peso explicativo para dar cuenta del comportamiento diferencial de las beneficiarias en relación al mercado de trabajo.

Es importante tener en cuenta que, producto de los criterios de elegibilidad del Programa, la gran mayoría de las beneficiarias (97,4% de las entrevistadas) poseen al menos un hijo menor de 18 años, hijos discapacitados de cualquier edad o tienen un

¹⁴² A diferencia de la metodología utilizada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC no se incluye aquí dentro de la ocupación a las actividades de contraprestación que los beneficiarios del PJJHD realizan como retribución por la percepción del beneficio.

¹⁴³ Como lo hicieran los censos de 1980 y 1991 esta variable subsume en un solo conjunto el estado civil/legal y el conyugal, distinguiendo entre: soltero, casado, unido (de hecho), separado, divorciado y viudo.

nieto a cargo¹⁴⁴. Consecuentemente, este criterio no puede ser tomado como una variable explicativa de la propensión de las beneficiarias a concurrir al mercado de trabajo. Lamentablemente, no se ha podido trabajar con las variables relacionadas con el número de hijos convivientes en el hogar y con el número total de miembros del hogar por haber presentado un muy alto nivel de no respuesta (cercano al 50%).

3.1.1.- Las beneficiarias que realizaban un trabajo remunerado

Dentro del grupo de mujeres, sólo 35 de las 115 beneficiarias encuestadas poseen un trabajo remunerado en el mercado. Esto es, poco más del 30% de las beneficiarias combina la realización de actividades de contraprestación con un trabajo informal remunerado. Sólo una de las beneficiarias encuestadas manifiesta a través de sus actividades la búsqueda activa de trabajo. Esta beneficiaria, que también posee un trabajo remunerado, ha ocupado 5,50 horas durante las semanas de referencia en actividades relacionadas con la búsqueda de empleo¹⁴⁵.

Tres tendencias principales pueden reconocerse entre las beneficiarias que, además de realizar tareas de contraprestación, tienen una ocupación en el mercado. El primer rasgo característico del grupo es el predominio de las beneficiarias solteras, divorciadas o separadas y viudas; es decir, entre las beneficiarias que posee un trabajo remunerado predominan aquellas que, teniendo uno o más hijos, no posee cónyuge. Los ingresos percibidos por las beneficiarias a través del plan social y de los trabajos informales se constituyen en los soportes económicos básicos de estos hogares monoparentales de jefa mujer.

¹⁴⁴ Una única beneficiaria encuestada, de 55 años de edad, no se encuentra comprendida en ninguna de estas tres situaciones.

¹⁴⁵ La actividad de búsqueda y el tiempo global invertido por la beneficiaria en ella se puede desgranar en las siguientes actividades básicas: lectura de clasificados en el periódico (1,0 hora), entrevista laboral (2,0 horas) y desplazamiento por búsqueda (2,50 horas).

Cuadro N° 26: Distribución por estado conyugal de las beneficiarias que posee trabajo remunerado

Estado conyugal	Beneficiarias	Porcentaje
Soltera	11	31,4
Casada	5	14,3
Viuda	1	2,9
Unida de hecho	5	14,3
Separada/divorciada	12	34,3
Sin datos	1	2,9
Total	35	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Las beneficiarias solteras, divorciadas o separadas y viudas que poseen un trabajo remunerado representan poco menos del 70% del total de las beneficiarias que trabajan. Asimismo, es posible señalar que el 50% de las beneficiarias separadas o divorciadas encuestadas trabajan; en tanto entre las viudas y entre las solteras esa proporción llega al 33,3%¹⁴⁶ y al 27,5%, respectivamente. No se puede desconocer, sin embargo, que estas últimas participan en una proporción similar a las unidas de hecho (26,3%).

Este dato no llega a opacar o desdibujar la tendencia que estamos resaltando ya que, si consideramos en términos agregados la participación en el mercado de trabajo de las beneficiarias sin cónyuge, la misma ronda el 35,8%, mientras que la proporción en la que participan las beneficiarias con cónyuge se encuentra próxima al 22%.

Cuadro N° 27: Porcentaje de beneficiarias con ocupación en el mercado en relación al total por estado conyugal

Estado conyugal	Total de beneficiarias	Total beneficiarias que trabajan	Porcentaje
Solteras	40	11	27,5
Casadas	26	5	19,2
Viudas	3	1	33,3
Unidas de hecho	19	5	26,3
Separadas/divorciadas	24	12	50
Sin datos	3	1	33,3
Total	115	35	30,4

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

¹⁴⁶ Este dato necesariamente debe ser relativizado en función de su escasa significación en términos numéricos.

Un segundo elemento de análisis que se desprende de los datos en relación con la inserción laboral de las beneficiarias es que las mayores tasas de participación se encuentra entre las jóvenes (entre 20 y 24 años) y entre las adultas mayores de 35 años y menores de 50 años. En estos tramos de edad, la participación de las beneficiarias en actividades laborales remuneradas es próxima al 40% mientras que, en la franja comprendida entre los 25 y 34 años, la participación apenas llega a superar el 20%. Los niveles de participación caen bruscamente a partir de los 50 años, para llegar a ser nulos entre las beneficiarias mayores a 55 años.

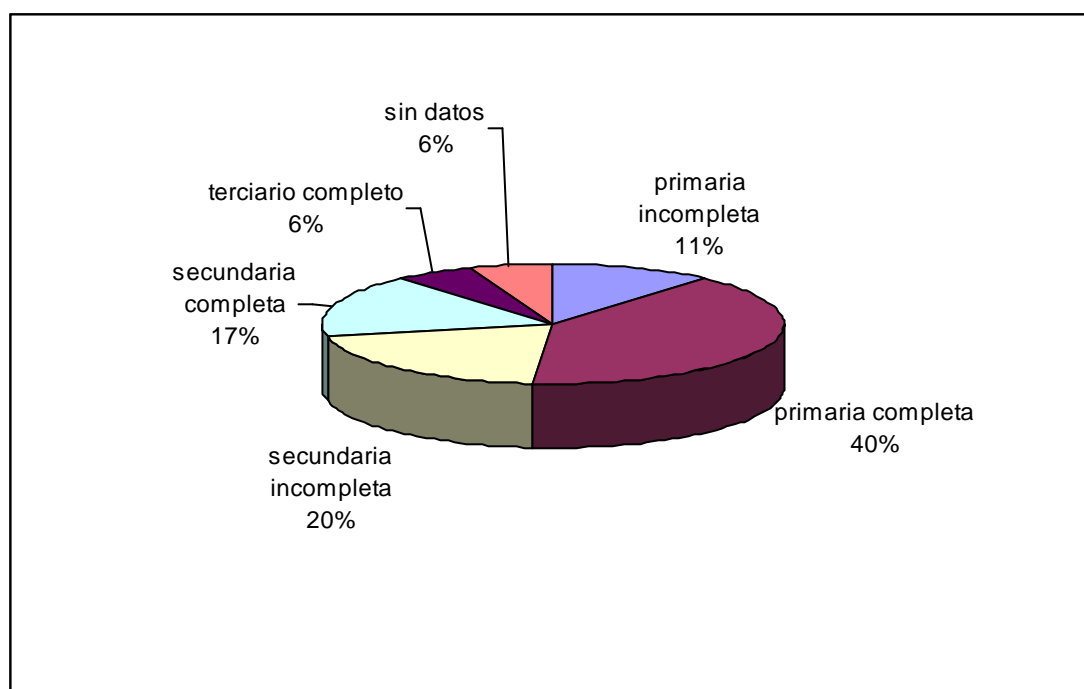
Cuadro N° 28: Porcentaje de beneficiarias que trabajan en relación al total por tramo de edad

Grupo etario	Total beneficiarias	Total beneficiarias que trabajan	Porcentaje
Entre 20 y 24	8	3	37,4
Entre 25 y 29	18	4	22,2
Entre 30 y 34	21	5	23,8
Entre 35 y 39	15	7	46,7
Entre 40 y 44	18	7	38,9
Entre 45 y 49	14	6	42,85
Entre 50 y 54	11	1	9,1
55 y más	5	0	0,0
Sin datos	5	2	40,0
Total	115	35	30,4

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Finalmente, entre las que realizan algún trabajo remunerado es posible observar una importante presencia de beneficiarias con primaria completa (40%), seguida -a una distancia importante- por la de las beneficiarias con secundaria incompleta (20%) y secundaria completa (17%).

Gráfico N° 4: Distribución de las beneficiarias que poseen un trabajo remunerado por nivel educativo



Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Sin embargo, es posible observar una participación similar en el mercado de trabajo de las beneficiarias con primaria completa (29,8%), secundaria incompleta (28%) y secundaria completa (33,3%). En ambos extremos de la escala, las beneficiarias con primaria incompleta muestran una participación sensiblemente menor (20%), en tanto entre las beneficiarias con terciario completo es posible observar una participación del 100% en el mercado de trabajo¹⁴⁷.

Cuadro N° 29: Porcentaje de beneficiarias que trabajan en relación al total por nivel de instrucción

Nivel educativo	Total beneficiarias	Beneficiarias que trabajan	Porcentaje
Sin instrucción	1	0	0,0
Primaria incompleta	20	4	20,0
Primaria completa	47	14	29,8
Secundaria incompleta	25	7	28,0
Secundaria completa	18	6	33,3
Terciario completo	2	2	100,0
Sin datos	2	2	100,0
Total	115	35	30,4

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

¹⁴⁷ Es necesario relativizar este último dato por su escasa significación en términos numéricos.

De los datos se desprenden dos ejes de análisis centrales. El primero de ellos señala que -como ya lo había resaltado García de Fanelli (1991)-, el efecto de la edad sobre el comportamiento laboral de las mujeres está asociado además con el estado civil y, en particular, con la presencia en la unidad doméstica de un compañero. Derivado de esto, el segundo eje muestra la permanencia de un patrón “tradicional” de inserción de la mujer en el mercado de trabajo, o de un patrón donde no es posible ver con fuerza las recientes transformaciones o tendencias del mercado de trabajo femenino argentino.

Como señalan una serie de autores (Chiroleu y Delfino, 2007; García de Fanelli, 1991; Wainerman, 1995, 2007), en Argentina el aumento de la población económicamente activa femenina (PEAF) se produce a la par de una tendencia global a la disminución de la población económicamente activa (PEA) iniciada en 1947. En este sentido, el aumento de la participación femenina se produce en el marco de una tendencia global a la reducción de la fuerza de trabajo. Dos son los factores que explican este último proceso. El primero de ellos está relacionado con el aumento progresivo, entre 1947 y 1980, de la edad de incorporación a la actividad económica. Esta tendencia coincide con la continua ampliación y extensión de la cobertura del sistema educativo. El segundo factor hace referencia a la disminución de la edad de retiro, efecto directo de la expansión del sistema previsional.

La distribución de la población femenina por edad refleja la intermitencia de la participación femenina en el mercado de trabajo que está determinada por el rol doméstico de las mujeres. La tasa de actividad femenina más alta tiene lugar entre los 20 y 24 años, etapa en la cual son mayormente solteras. En las edades entre 25 y 44 años, las mujeres tienden a participar menos activamente en el mercado de trabajo.

No obstante, es posible visualizar importantes transformaciones en los patrones de inserción femenina en el mercado de trabajo particularmente desde 1960. En términos generales, las mujeres que protagonizaron estos cambios fueron las casadas y unidas, en su mayoría cónyuges del jefe de hogar, con niveles medios y altos de instrucción, de entre 25 y 55 años de edad y, entre ellas más especialmente, las de 35 a 55 años. Este proceso

de mayor incorporación fue acompañado de periodos más prolongados de permanencia en el mercado de trabajo¹⁴⁸ (García de Fanelli, 1991; Wainerman, 1995, 2007).

La década del 80 marca importantes transformaciones. Si por un lado, la curva de la participación femenina continúa su tendencia ascendente, el incremento que se constata en el periodo inter-censal 1980-1991 supera, por primera vez, los dos dígitos, alcanzando los 13 puntos¹⁴⁹. Adicionalmente, este aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo se produce frente a hombres que mantienen o aumentan su participación. Esta tendencia se explicaría fundamentalmente a partir del fenómeno del trabajador complementario, fenómeno que impulsa a las mujeres (y también a los jóvenes) -en mayor medida que antes- a integrarse a la fuerza de trabajo para aportar ingresos a los depreciados presupuestos familiares. Un dato significativo, para las décadas del 80 y 90, es que -en un número importante- el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo fue vía desempleo o subocupación.

En este último tramo, la acentuación de la tendencia a la feminización de la fuerza de trabajo fue protagonizada por mujeres de entre 35 y 64 años de edad (y, entre ellas, más especialmente las de 55 a 64 años), es decir, fue protagonizado por mujeres maduras con familias ya formadas. De la misma forma que aconteciera en el período anterior, estas mujeres son casadas o unidas, en su mayoría cónyuges del jefe de hogar. Los datos señalados permiten observar que los perfiles de participación femeninos se asemejan cada vez más a los masculinos, lo que equivale a decir que sus trayectorias laborales son cada vez menos sensibles a las transiciones en el ciclo de vida familiar¹⁵⁰.

Hacia mediados de la década del 90, y como resultado de las reformas que acompañaron el Plan de Convertibilidad, el crecimiento a niveles inéditos de la desocupación abierta se constituye en el fenómeno más destacado de la evolución de la situación ocupacional en Argentina. Para este período, las tasas de empleo femenino muestran un comportamiento sumamente estable que se mantiene en torno al 34,7%. Sin embargo, es posible establecer que esta tasa constituye un indicador insuficiente de

¹⁴⁸ Estas tendencias deben necesariamente ser leídas de manera conjunta con ciertas transformaciones socio-demográficas tales como la postergación de la edad del matrimonio y la reducción del tamaño de la familia.

¹⁴⁹ Este incremento es producto tanto del ritmo de crecimiento de la PEA F como de los cambios que se producen en los criterios de medición utilizados.

¹⁵⁰ En las páginas siguientes veremos que esta tendencia presente a nivel agregado, no se verifica en el grupo de beneficiarias encuestado.

la fuerza de trabajo ocupada, en la medida en que no discrimina ni es corregida por la incidencia de la subocupación.

Otro dato a tener en cuenta es que el impacto de las tasas de desocupación fue diferencial en los diversos tramos de edad, presentando, las más jóvenes, las tasas más altas, tanto al inicio como al finalizar la década, junto con el mayor porcentaje de crecimiento en el transcurso de la misma. Entre las desocupadas, una proporción importante eran nuevas trabajadoras; mientras que, en su mayoría, los varones desocupados provenían de una ocupación anterior.

La participación más elevada y más permanente de las mujeres en el mercado de trabajo constituye una transformación inédita en las pautas de comportamiento dirigidas al mercado de trabajo en nuestro país. Sin embargo, es probable que estas tendencias no se manifiesten con la misma fuerza en todos los sectores sociales.

Sin lugar a dudas, el nivel educativo de quienes ingresan al mercado de trabajo juega un rol central en la consolidación de estas tendencias. El mismo actúan a través de distintos mecanismos (Contartese y Maceira, 2005). En primer lugar, las mujeres con mayores niveles educativos acceden a inserciones laborales de mayor calidad, lo que incentiva su permanencia en el mercado de trabajo. En segundo lugar, un mayor nivel educativo tiende a acompañarse de niveles más altos de autonomía y mayores expectativas con respecto a su participación extra-doméstica, orientándose en esa dirección. En tercer lugar, si bien no de forma unívoca, las mujeres con mayores niveles educativos provienen, y forman a su vez, hogares de estratos socio-económicos medios o altos, lo que involucra también mayores recursos para sostener, vía contratación de servicios privados de cuidados de los mayores y los niños, su participación en el mercado.

Este escenario permite por un lado elevadas tasas de participación y por el otro trayectorias más constantes a lo largo del ciclo vital. En esta misma dirección, mientras la tasa de actividad de las mujeres más educadas alcanza su punto máximo en coincidencia con la edad reproductiva, la etapa de máxima actividad de las mujeres menos educadas sobreviene con posterioridad a la misma.

Tal como lo rescatan Contartese y Maceira (2005), el condicionamiento doméstico de los niveles de participación femenina, observado en las investigaciones empíricas de diversos casos nacionales de América Latina, ha sido sistematizado en distintos modelos:

- Un modelo con una máxima participación laboral en edades tempranas, muy alta en el período previo al matrimonio y de reproducción familiar (20-45 años) y con posterior descenso rápido y sostenido.
- Un modelo con dos picos de participación, el primero en el período previo al matrimonio; seguido de una caída importante durante el período reproductivo, y el segundo después del término de éste y la educación de los hijos, con un suave declive posterior.
- Un modelo con comportamiento similar en todos los tramos de edad, con un leve descenso durante los períodos reproductivo y posterior, baja que lo diferenciaría del comportamiento de la tasa de actividad masculina.

Para los autores, las mujeres argentinas -a diferencia de los modelos esquematizados- muestran actualmente una participación máxima y prácticamente homogénea en las edades centrales entre 25 y 44 años, advirtiéndose sin embargo una pequeña disminución en el tramo de 31 a 34 años. Se observa luego un descenso (gradual pero sostenido) entre las mujeres de 45 a 60 años y una drástica contracción posterior.

Cuadro N° 30: Distribución por grupo etario y estado conyugal de las beneficiarias que trabajan

Grupo etario	Estado Conyugal						Total
	Solteras	Casadas	Viudas	Unidas	Sep/Divor	Sin datos	
Entre 20 y 24	3	0	0	0	0	0	3
Entre 25 y 29	3	0	0	1	0	0	4
Entre 30 y 34	1	1	0	1	2	0	5
Entre 35 y 39	2	1	0	0	4	0	7
Entre 40 y 44	1	1	0	3	2	0	7
Entre 45 y 49	1	1	0	0	4	0	6
Entre 50 y 54	0	0	1	0	0	0	1
Sin datos	0	1	0	0	0	1	2
Total	11	5	1	5	12	1	35

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Como surge de forma clara del cuadro, es posible observar que la situación familiar y la edad tienen una fuerte y clara incidencia en el patrón de participación laboral en las beneficiarias del PJJHD. La misma es significativamente mayor entre aquellas beneficiarias que son el principal sostén del hogar (separadas o divorciadas, viudas y madres solteras), ya que son las jefas de hogar sin compañero, quienes tienen las probabilidades más bajas de permanecer fuera de la fuerza de trabajo. Esta tendencia

aparecería matizada por la proporción de las unidades de hecho que trabajan (26,3%) próxima a la de las solteras (27,5%).

De igual forma, los patrones de actividad de las beneficiarias entrevistadas se presentan visiblemente ligados a los tránsitos vitales, mostrando una participación laboral que apenas llega a superar el 20% en los grupos de edad entre 25 y 29 años y entre 30 y 34 años, es decir en los tramos de edad reproductiva. Esta caída en la participación se vuelve a manifestar -aunque con una fuerza mucho más pronunciada- a partir de los 50 años, para llegar a ser nula entre las beneficiarias mayores a 55 años.

Este patrón de comportamiento conjugaría tendencias estructurales propias de otras realidades latinoamericanas con elementos característicos del escenario argentino. Si por un lado, es posible ver dos picos de participación (el primero en el período previo al establecimiento de las uniones seguido de una caída importante durante el período reproductivo, y el segundo pico posterior a la finalización de éste y coincidente con una edad más avanzada de los hijos); por el otro, se puede apreciar un abrupto declive de la misma participación una vez acabado el segundo pico, al punto que ésta se extingue en sólo cinco años.

3.1.2.- Las beneficiarias que no poseen una ocupación en el mercado

Como fue resaltado anteriormente, de los datos surgen dos elementos centrales para dar cuenta de la disminución de la participación económica de las beneficiarias encuestadas. El primer elemento se relaciona con la presencia de un compañero, de un cónyuge en el seno del hogar. En tanto, el segundo elemento hace referencia a la incidencia de la edad en los patrones de participación femenina en el mercado de trabajo. Esta incidencia se manifiesta, en términos generales, tanto en el retiro de las mujeres de la fuerza de trabajo en el período de crianza de los hijos como en la escasa participación de las beneficiarias cercanas a la edad de retiro, la cual estaría relacionada -fundamentalmente- con la dificultad para obtener empleo a dichas edades.

Si bien estas dos variables muestran una capacidad explicativa central para dar cuenta de los patrones de inserción/no inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, el nivel educativo es un elemento que confluye para dar cuenta de la situación de forma integral. En este sentido, es posible destacar que las beneficiarias sin instrucción y con estudios primarios incompletos son las que participan en menor proporción en el mercado de trabajo.

3.2.- La situación de los hombres

Producto del universo de casos y la importante diferencia en términos numéricos de encuestas realizadas a los beneficiarios hombres, los datos que se desprenden para el análisis son sólo indicativos de las tendencias. En ese sentido los datos que presentado deben ser leídos en esa dirección.

En función de lo anterior podemos señalar que los beneficiarios hombres entrevistados muestran mayores niveles de participación en el mercado de trabajo que las mujeres. Si como señalábamos anteriormente las tasas de actividad de las beneficiarias entrevistadas apenas llega a superar el 30%, en el caso de los hombres entrevistados la misma supera el 78%. Sólo un beneficiario manifiesta a través de las actividades realizadas estar buscando trabajo de forma activa. El beneficiario, que también posee un trabajo remunerado, asistió durante las semanas de referencia a una entrevista laboral.

La situación de coexistencia de la inserción en el mercado de trabajo -a través de la realización de “changas” o búsqueda de empleo- con la participación en el PJJHD, también fue señalada por Bogani, Grosso, Philipp, Salvia y Zelarayán (2005). Para los autores, este comportamiento estaría indicando que la inclusión en el PJJHD no conforma una actividad “refugio” a la que los participantes se retiren dejando otras actividades sino que, en muchos casos, es esencialmente un complemento de ingresos, dada la nula o precaria inserción laboral que estos hombres pueden lograr en el mercado de trabajo. Esta situación de doble ocupación, se produciría en un contexto laboral con alta proliferación de empleo no registrado, junto con una fuerte debilidad de los mecanismos de fiscalización, posibilitando, de esta manera, que los requisitos gubernamentales fijados no siempre logren ser cumplimentados.

De este razonamiento se desprenden dos problemáticas vinculadas de forma general con PTMC y de forma específica con el PJJHD. La primera de estas problemáticas está relacionada con el vínculo entre desempleo/asistencia/pobreza, en tanto la segunda se vincula con el debate en torno al posible efecto desaliento de los PTMC sobre el mercado de trabajo. Estas dos problemáticas sólo pueden ser escindidas con fines analíticos, ya que ambas están indisolublemente unidas en la cotidianeidad de los beneficiarios del PJJHD.

En relación a la primera de estas problemáticas, es posible señalar que el estrecho vínculo mostrado por el estudio sobre Marienthal entre pobreza y desempleo -y

que en las relecturas europeas se presenta como una limitación, o mejor, como un rasgo del pasado-, en el caso argentino toma la forma de una posibilidad analítica de total actualidad.

En Europa, el crecimiento del excedente económico, de la productividad del trabajo y del Estado de Bienestar hicieron posible que aproximadamente los dos tercios de la población vivieran sin trabajar, que el tiempo de trabajo fuere una parte cada vez más pequeña del tiempo total de vida y que se relajara la estrecha relación en otro tiempo existente entre desempleo y pobreza (Sanchis, 2002). En este contexto, se reduce el riesgo de la privación absoluta y se vuelve más razonable la utilización del concepto de privación relativa. Contrariamente, la amenaza de la privación absoluta acerca las experiencias europea y americana de entre guerras al presente argentino (Kessler, 1999). Como señalara Kessler (1999), en nuestro país la tradición de derechos sociales está vinculada casi exclusivamente a la condición de ocupado y el seguro de desempleo tiene una escasa cobertura y significación económica. En este sentido, las cifras son reveladoras y de una realidad contundente: el 90% de los beneficiarios del PJJHD se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 53% se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Asimismo, el 20% de los hogares beneficiarios tienen como único ingreso el beneficio de 150 pesos (Galazo y Ravallión, 2003). Estos datos permiten dar cuenta de cómo la escasa significación económica de la transferencia monetaria hace que en muchas oportunidades ésta deba ser necesariamente complementada con algún trabajo informal. El mercado actúa, así, ocupando el espacio dejado libre por las políticas públicas y por el Estado.

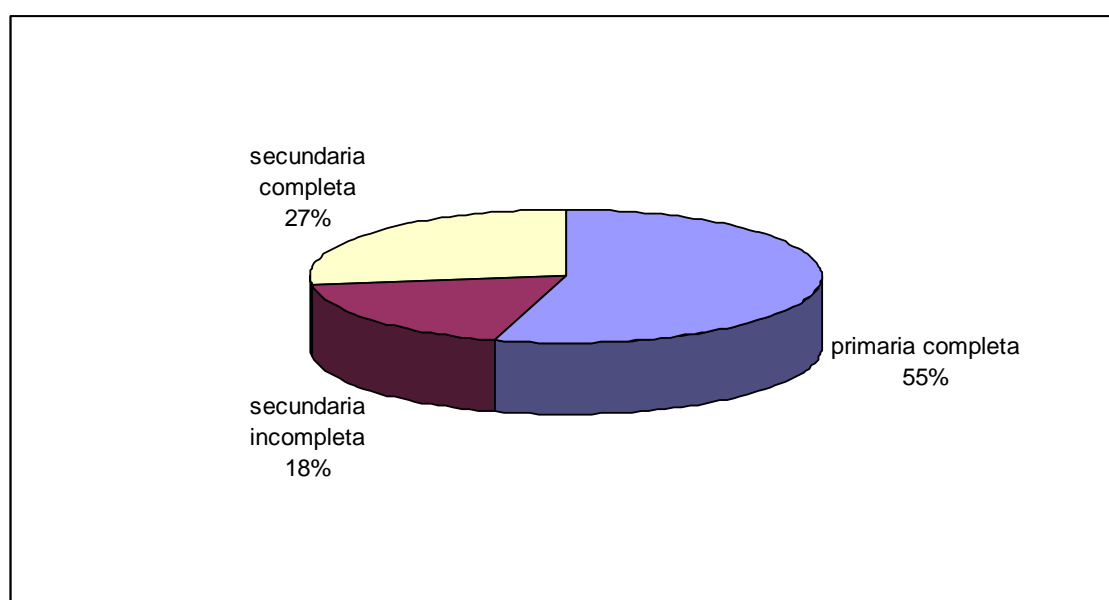
La segunda de las problemáticas, es decir la vinculada con los efectos distorsivos sobre el mercado de trabajo de los PTMC, se centran, por un lado, en el supuesto impacto disuasivo que este tipo de programas tendría sobre la búsqueda de trabajo y la aceptación de un empleo genuino por parte de los beneficiarios y, por otro, en sus efectos perjudiciales sobre la motivación para el trabajo. Sin embargo, los datos surgidos del trabajo de campo van en sentido contrario a estos supuestos, ya que en la mayor parte de los casos de los hombres beneficiarios del PJJHD es posible constatar la realización de una serie de trabajos informales o una búsqueda de empleo relativamente activa, mientras se percibe el beneficio¹⁵¹. Así, y desde la perspectiva de Bogani,

¹⁵¹ En una dirección similar se dirigieron los planteos de Jahoda (1987) para quien -si bien es cierto que en toda época existe una minoría que se aprovecha de las políticas de asistencia- las sospechas en relación a la generalización de esta situación es casi siempre mayor de lo que los hechos justifican.

Grosso, Philipp, Salvia y Zelarayán (2005), los enfoques que parten de las críticas anteriormente enumeradas no parecen considerar el extendido deterioro que afecta al mercado de trabajo en Argentina y a millones de hogares pobres, “de modo que convierte en ilusorios los supuestos de racionalidad y utilidad a partir de los cuales se interpreta el comportamiento laboral de los participantes del Programa” (op. cit.: 186-7). Análisis posteriores y referidos al impacto de Asignación Universal por Hijo (AUH), señalan tendencias similares. De los trabajos de Garganta y Gasparini (2012) y Gasparini y Cruces (2012), se desprende que no existe evidencia empírica para sostener la hipótesis de un desincentivo a la oferta laboral, sin embargo este tipo de asignaciones constituyen un desincentivo a la formalización. Este efecto sería inevitable, siendo mayor cuanto mayor es el monto de la transferencia.

El escaso número de encuestas completadas por beneficiarios hombres atenta contra la posibilidad de marcar tendencias sólidas relacionadas con su inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, y en términos generales, es posible señalar que las mayores proporciones en la participación en el mercado de trabajo se dan en aquellos beneficiarios que poseen mayores niveles de escolaridad.

Gráfico N° 5: Distribución de los beneficiarios con una ocupación en el mercado por nivel educativo



Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Como es posible observar en el cuadro N° 31, quienes manifiestan no haber realizado ninguna actividad remunerada durante las semanas de referencia son sólo tres beneficiarios: dos con primaria incompleta (es decir, la totalidad del grupo) y uno con primaria completa. Estos datos contradicen aquellos argumentos que sostienen que el grado de escolaridad formal no tiene valor para trabajar en actividades informales o en establecimientos de estas características y que lo que prima en este sector es el aprendizaje en la práctica¹⁵².

Cuadro N° 31: Porcentaje de beneficiarios con una ocupación en el mercado en relación al total por nivel de instrucción

Nivel de escolaridad	Total beneficiarios	Beneficiarios que trabajan	Porcentaje
Primaria incompleta	2	0	0
Primaria completa	7	6	85,7
Secundaria incompleta	2	2	100
Secundaria completa	3	3	100
Total	14	11	78,5

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Como veremos en el apartado siguiente, el tipo de actividades realizadas por la totalidad de los beneficiarios permite inferir que el aprendizaje por la práctica juega un lugar muy importante en la inserción laboral informal. Sin embargo, de los datos se desprende que la educación formal también constituye una variable con un relativo peso en la inserción en el mercado de trabajo.

Cuadro N° 32: Porcentaje de beneficiarios con una ocupación en el mercado en relación al total por estado conyugal

Estado Conyugal	Total beneficiarios	Beneficiarios que trabajan	Porcentaje
Solteros	2	2	100
Casados	7	5	71,4
Viudos	1	1	100
Unidos de hecho	3	2	66,6
Separados/divorciados	1	1	100
Total	14	11	78,5

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

¹⁵² Una afirmación en ese sentido puede encontrarse en Bueno (1990).

La distribución de los beneficiarios que realizan algún tipo de actividad remunerada por estado conyugal y por tramo de edad no permite mostrar tendencias claras en prácticamente ninguna dirección. En términos generales, sólo es posible señalar que entre los beneficiarios casados y unidos de hecho se encuentran los mayores niveles de desempleo.

Cuadro N° 33: Porcentaje de beneficiarios con una ocupación en el mercado en relación al total por tramo de edad

Tramo de edad	Total beneficiarios	Beneficiarios que trabajan	Porcentaje
Entre 25 y 29	3	2	66,6
Entre 30 y 34	1	1	100
Entre 35 y 39	1	1	100
Entre 40 y 44	1	0	0
Entre 45 y 49	3	3	100
Entre 50 y 54	1	1	100
55 y mas	4	3	75
Total	14	11	78,5

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

3.3.-El tipo de trabajo

Como señaláramos anteriormente, la escasa significación económica de la asignación monetaria que reciben los beneficiarios del PJJHD es complementada en muchas oportunidades con la realización de una amplia y heterogénea variedad de trabajos informales. Este tipo de actividades conforman el único camino posible dentro de una estrategia de complementación de ingresos, ya que, por tratarse de actividades no reguladas por el Estado, posibilitan la continuidad del subsidio. En este sentido, es importante recordar que dentro del esquema de asistencia cualquier aporte detectado en la ANSES supone la automática exclusión o “baja” del beneficiario del sistema. Consecuentemente, la realización de trabajos informales o no regulados permiten contornear los mecanismos de fiscalización y constituirse -junto a la magra asistencia monetaria- en un colchón amortiguador del desempleo. Los beneficios emergentes de las actividades en el sector informal dependen, entonces, de la no observancia de las regulaciones estatales (Bayón, Roberts, Saraví, 1998).

Desde el punto de vista conceptual es necesario señalar que la noción de “economía informal” fue utilizado por primera vez por el antropólogo británico Keith Hart en un estudio sobre los mercados de trabajo urbanos de África, editado a principios de la década del 70 y rápidamente difundido por el hoy clásico *Informe sobre Kenya*. El mismo fue publicado por el Programa Mundial de Empleo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

El escenario descrito por este informe era el de sociedades caracterizadas por fuertes procesos de migración rural-urbana, cuyo impacto en las grandes ciudades no se daba a través del desempleo abierto sino, más bien, a través del desarrollo de actividades de pequeña escala que proveían de medios de subsistencia a los migrantes rurales y a los pobladores urbanos incapaces de conseguir empleo en el sector moderno. Dentro de este contexto, el sector informal abarcaba las unidades productivas de pequeña escala en el medio urbano, las cuales se caracterizaban por una organización rudimentaria basada en el trabajo intensivo, con tecnología anticuada, bajos niveles de productividad, escaso monto de capital utilizado y baja capacidad de acumulación. Así, las investigaciones desarrolladas en esta época enfatizaban la importancia del sector informal en la generación de empleos (Charmes, 1991). Según Portes (1999), el concepto ideado por Hart ponía énfasis en el notable dinamismo y la diversidad de este tipo de actividades. Sin embargo, y según el mismo autor, esta característica del sector informal va a ir desdibujándose hasta prácticamente desaparecer en la década del 80.

Años después de su surgimiento, el término comenzó a utilizarse para caracterizar los mercados de trabajo en otros países del Tercer Mundo, convirtiéndose así en un concepto clave para este tipo de análisis. Sin embargo, y a la par de la difusión de su uso, esta herramienta teórica se fue tornando cada vez más compleja y polisémica.

Sin lugar a dudas, la denominada economía informal incluye una notable variedad de actividades cuyo único punto en común es el factor negativo de quedar por fuera de la economía oficial controlada por el Estado. Este proceso es producto tanto de transformaciones de larga duración como de consecuencias temporales de la crisis económica y social. Desde la perspectiva de Mingione (1993), las crisis económicas largas y profundas producen como reflejo típico un incremento del trabajo por cuenta propia y del trabajo estacional o irregular, y un retorno a las actividades tradicionales, a las actividades del mercado local o a aquellas ajenas al mercado como consecuencia del elevado desempleo. Pero los problemas actuales del trabajo no serían sólo un resultado

de la recesión económica o un crecimiento lento. A largo plazo, la automatización, la reestructuración y la redistribución geográfica de la industria reducen de manera creciente los niveles de empleo formal en las áreas industrializadas, tanto en términos numéricos como de duración. Para el autor, la difusión de las actividades informales es en gran medida un producto del ritmo de la terciarización y del modo de expansión de los servicios, no puede interpretarse en absoluto como un acontecimiento contingente.

En este sentido, los diferentes tipos de procesos de informalización no constituirían más que aspectos parciales dentro del cuadro global del cambio social. En consecuencia, sólo pueden ser explicados a partir de una comprensión de la lógica general subyacente a la nueva división internacional del trabajo, de los procesos a través de los cuales se está llevando a cabo la reestructuración del trabajo y de la economía, y de las nuevas formas de marginación o promoción social de los diferentes estratos. Sin embargo, las diferencias existentes en los procesos hace necesario situar el debate en el proceso socio-histórico-económico de la sociedad que se analiza.

En Argentina, el rastreo histórico de las actividades por cuenta propia permite observar su existencia desde fines del siglo XIX¹⁵³. Sin embargo, es recién en los últimos 25 años que han pasado a constituir una de las principales tensiones dentro del mercado de trabajo en nuestro país.

Así, el modelo de acumulación aperturista instaurado en 1976 conllevó el aumento de los niveles de desocupación abierta, de subocupación y de las ocupaciones informales, el cual fue acompañado por un mínimo crecimiento del empleo productivo. Este proceso se inició a ritmo lento y desde 1983 se fue acelerando hasta convertirse en un fenómeno estructural de la sociedad argentina en los 25 años posteriores.

Para nuestro caso específico de análisis, y según se desprende del cuadro, es posible señalar dos tipos diferentes de actividades remuneradas realizadas por las y los beneficiarios del PJJHD. El primer grupo, minoritario, está formado por cinco beneficiarias que han podido construir una incipiente trayectoria de reinserción laboral a partir de su inclusión en el PJJHD. Como señaláramos, la participación de estas beneficiarias en componentes específicos del Programa les granjeó la posibilidad de una nueva inserción en el mercado de trabajo, ya sea a través del autoempleo

¹⁵³ El cuentapropismo es la categoría ocupacional más importante dentro del grupo de los informales. Sin embargo, no todos los trabajadores que se encuentran aludidos por esta categoría son informales, ya que sería preciso excluir a los profesionales y técnicos.

(microemprendimiento) o del trabajo asalariado (componente de reinserción laboral). Al momento de la realización del trabajo de campo, las cinco beneficiarias continuaban percibiendo el beneficio del plan social al que se le sumaban los ingresos obtenidos por el funcionamiento de un comercio (locutorio-cyber), en el caso de la beneficiaria titular del microemprendimiento, o el monto que permitía equipar la retribución a la pactada en la categoría por el Convenio Colectivo de Trabajo, en el caso de las restantes cuatro beneficiarias que participaban del componente reinserción laboral. En términos de empleo, sólo en este pequeño grupo de cinco beneficiarias es posible observar el cumplimiento de aquellos objetivos planteados dentro del PJJHD relacionados con una política de empleo.

Cuadro N° 34: Tipo de trabajo remunerado realizado por las y los beneficiarios

Tipo de trabajo	Hombres		Mujeres		Total	
	Benefic.	%	Benefic.	%	Benefic.	%
Servicio doméstico	0	0,0	6	17,1	6	13,0
Comercio	0	0,0	2	5,7	2	4,3
Venta de productos ya elaborados	0	0,0	7	20,0	7	15,2
Changas sin especificar	6	54,5	1	2,9	7	15,2
Changas de electricidad o albañilería	2	18,2	0	0,0	2	4,3
Peluquería	0	0,0	1	2,9	1	2,2
Venta/intercambio de productos de elaboración doméstica	1	9,1	6	17,1	7	15,2
Cirujero	1	9,1	1	2,9	2	4,3
Trabajos varios	0	0,0	1	2,9	1	2,2
Remisería	1	9,1	0	0,0	1	2,2
Cuidado de ancianos	0	0,0	1	2,9	1	2,2
PJJHD-reinserción laboral	0	0,0	4	11,4	4	8,7
Promotora	0	0,0	1	2,9	1	2,2
PJJHD-microemprendimiento	0	0,0	1	2,9	1	2,2
Podología	0	0,0	1	2,9	1	2,2
Sin datos	0	0,0	2	5,7	2	4,3
Total	11	100,0	35	100,0	46	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

El segundo grupo conformado por 41 beneficiarios (30 mujeres y 11 varones) complementa la percepción de la asignación monetaria del plan social con ingresos provenientes de una variada gama de actividades informales. La complementariedad es sólo posible por tratarse justamente de actividades no reguladas; es decir, actividades no sujetas a la reglamentación de las instituciones de la sociedad, en un ambiente legal y societal en el que las actividades están reglamentadas. A partir de lo expuesto, queda de manifiesto de forma clara el proceso circular planteado por Beck (2007). Para el autor,

la percepción de las prestaciones por desempleo obliga a los beneficiarios a “no hacer nada”. Si esto no es cumplido, el beneficiario será considerado un “mentiroso social” que se hace culpable del hundimiento del espíritu comunal. Así, los procesos se refuerzan circularmente, favoreciendo y acelerando la propagación del trabajo y la economía informal.

En el caso de los hombres, el tipo de trabajo remunerado realizado está constituido de forma casi excluyente por las “changas”. Es decir, se trata en la gran mayoría de los casos de trabajos esporádicos, realizados por cuenta propia, carentes de protección y sujetos a la demanda fluctuante de los “clientes” en un marco de informalidad. Al tratarse de trabajos inestables, no brindan un ingreso fijo y generan incertidumbre económica no sólo sobre el futuro sino, incluso, sobre el presente.

El tipo de trabajo remunerado realizado por las mujeres beneficiarias se concentra fundamentalmente en dos grandes ramas de actividad: el servicio doméstico y la venta de diferentes tipos de productos (ya elaborados o de elaboración propia). La preponderante inserción laboral de las beneficiarias del PJJHD en el sector terciario y, fundamentalmente, en el comercio y en el servicio doméstico, se corresponde con los tradicionales patrones de inserción laboral de las mujeres de los sectores populares en nuestro país. En una buena parte de los casos puede observarse una estrecha conexión entre las actividades laborales realizadas por las beneficiarias y el entorno doméstico. El papel de proveedoras de cuidados parece influir de forma decisiva en este aspecto.

Tal como se desprende del cuadro N° 34, el 17,1% de las beneficiarias que realizan algún tipo de trabajo remunerado lo hacen dentro de los denominados servicios personales como empleadas domésticas. En nuestro país, el servicio doméstico ha constituido, desde la década del 40, el principal rubro de inserción laboral de las mujeres de los sectores de bajos ingresos con escasa o nula educación que no podían insertarse como obreras. Para la década del 60, y producto de las tensiones que comienza a experimentar el mercado de trabajo, el servicio doméstico fue perdiendo peso en el empleo y el sector menos estructurado del comercio minorista fue absorbiendo esa mano de obra de baja calificación. Esta incorporación de las mujeres al comercio minorista coincide con la caída en el nivel de ingresos del sector y con el retiro de la mano de obra masculina de éste (García de Fanelli, 1991). Finalmente, el notorio impacto de las políticas des-industrializadoras implementadas sistemáticamente desde 1976 repercutirá en un aumento de la participación femenina en el mercado de

trabajo. Entre las mujeres de sectores de bajos ingresos, el aumento de la participación significó, por un lado, el crecimiento del desempleo y, por otro, la incorporación al mercado bajo relaciones de trabajo precarias como el servicio doméstico, el trabajo a domicilio o el micro-comercio.

En este sentido, otro dato relevante que se desprende del cuadro es que las beneficiarias muestran una alta participación como trabajadoras independientes en el sector de comercio informal y, en mucha menor medida, como dependientes de comercio. Esta creciente participación de las mujeres en el micro-comercio por cuenta propia ha sido señalada también como una de las características distintivas de los mercados de trabajo en toda América Latina. En ese sentido, Krawczyk (1993) señala que este tipo de inserción responde a estrategias de supervivencia, se instala muchas veces en la misma vivienda o en mercados y calles de la ciudad, y se concentra en la venta de artículos que componen la canasta básica de consumo familiar, especialmente productos alimenticios.

En el caso de las beneficiarias del PJJHD, puede notarse una presencia similar de “venta/intercambio de productos de elaboración propia”¹⁵⁴ como de “venta de productos ya elaborados”. Dentro de los primeros se incluyen fundamentalmente los productos alimenticios pero también manualidades, como por ejemplo souvenirs¹⁵⁵. En el caso de la “venta de productos ya elaborados”, lo que prima es la venta de cosméticos por catálogo.

Es posible observar que, tanto en los rubros donde la inserción laboral de las beneficiarias es preponderante como en aquellos que muestran un peso menor, se tratan de ocupaciones casi exclusivamente “femeninas”. Es decir, se trata de grupos ocupacionales con un contenido de tareas que son claramente una extensión de los roles domésticos femeninos. Esta tendencia muestra de forma clara que el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en muchos casos no implica cambios o transformaciones en las relaciones de género. En este sentido es importante recordar que una tendencia similar se desprendía de

¹⁵⁴ Si bien lo predominante es la venta de productos, dentro de esta categoría también fue incluida una beneficiaria que intercambia sus productos en un trueque.

¹⁵⁵ Tal como lo señala Bueno (1990), este tipo de producción que utiliza, la mayor parte de las veces, utensilios de uso doméstico como recursos productivos de vital importancia, constituye un buen ejemplo del tipo de abordaje del sector informal pasible de ser realizado desde la antropología. Para la autora, la imposibilidad de disociar el menaje doméstico del capital de trabajo es uno de los tópicos que se escapan de la aproximación metodológica de la economía.

las actividades desarrolladas como contraprestación por el subsidio obtenido. Consecuentemente, ambos procesos, lejos de contraponerse, actúan reforzándose.

En términos generales, la inserción laboral de los beneficiarios (tanto de los hombres como de las mujeres) se produce en el sector informal de la economía como una forma de contornear las regulaciones estatales y de complementar los magros aportes de los mecanismos de asistencia. Este tipo de trabajo, informal, intermitente, carente tanto de seguridad como de entradas fijas, constituye el único complemento posible y viable a la asignación monetaria recibida. Una estrategia organizada de esta manera no permite construir un horizonte de largo plazo; todo lo contrario, lleva a los beneficiarios a vivir su existencia día a día, a semejanza de unos “cazadores y recolectores” en el medio urbano (Lomnitz, 1994; Merklen 2005).

Los datos recogidos en el trabajo de campo van en consonancia con el trabajo de Trujillo y Saravia (2011). De la investigación realizada en hogares beneficiarios de PTMC surge que las ocupaciones en el mercado que predominan entre los beneficiarios son aquellas vinculadas a la construcción, la seguridad, el comercio o a servicios generales poco calificados en condiciones de trabajo precario o por medio de changas. Las trayectorias laborales de los beneficiarios se caracterizan, así, por su alta vulnerabilidad frente a las distintas variaciones o alteraciones macroeconómicas y del mercado de trabajo.

Estas situaciones se aproximan a las descritas por Wacquant (2001) y por Wilson (1996/7) quienes señalaban que para amplias capas de la población el trabajo asalariado -al ser tan escaso- se constituye en algo poco confiable para constituir el anclaje principal de sus vidas.

Adicionalmente, y en términos generales, la mayor parte de las actividades realizadas por los beneficiarios corresponden al sector servicios. Sin embargo, y para este caso específico, la explicación no puede ir de la mano del argumento funcionalista de la expansión del sector de servicios como producto de una necesidad o demanda creciente de desempeño especializado de sus funciones sintetizantes o normalizantes (Offe, 1995). Muy por el contrario, la explicación parece estar más cercana del argumento opuesto; es decir, del argumento que plantea que la expansión presente y futura del sector de servicios (fundamentalmente en los países del Tercer Mundo) puede ser interpretada exclusiva o principalmente desde el punto de vista de la absorción de una oferta de trabajo que de otra forma sería no absorbible. En esta dirección, el

desempleo de masas de las grandes ciudades asumiría la forma de “desempleo oculto”, o sea desempleo disfrazado por detrás de servicios de varias especies (Offe, 1995).

Dentro de este argumento, la absorción de los trabajadores (aunque innecesarios directa o indirectamente en el proceso de acumulación) en el sector de servicios constituye un requisito de estabilidad, en la medida en que impediría las consecuencias indeseables derivadas de la no participación de esos individuos en el mercado de bienes y en las formas de vida centradas en el trabajo. En este sentido, se podría argumentar que el trabajo en el sector de servicios crea un orden social, no por los efectos de sus productos sobre la economía y sobre la organización económica, sino porque regula y disciplina las motivaciones y aspiraciones de los trabajadores; o sea, condiciona sus *inputs* en la vida social (Offe, 1995).

3.4.- La jornada de trabajo

El tiempo medio de la jornada de trabajo semanal de los beneficiarios es de 18,34 horas. Sin embargo, esta cifra contiene en su interior importantes diferencias en términos de género y fuertes fluctuaciones que dan cuenta de jornadas diarias marcadas por profundas irregularidades.

El primer elemento de análisis muestra para el caso de las mujeres beneficiarias que el tiempo medio insumido por el trabajo remunerado ronda las 16 horas semanales, mientras que para los hombres éste supera las 25 horas semanales.

Cuadro N° 35: Mínimo, máximo y media de tiempo específico del trabajo remunerado (jornada semanal)

	Beneficiarios	Mínimo	Máximo	Media
Hombres	11	1,00	84,00	25,72
Mujeres	35	1,00	52,00	16,02
Total beneficiarios	46	1,00	84,00	18,34

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

En tanto, la irregularidad de las jornadas de trabajo diarias -tanto para el caso de los hombres como para las mujeres beneficiarias- se deriva de las vicisitudes de su actividad económica fundada básicamente en una perpetua y constante adaptación a la demanda. De forma clara, la irregularidad en la jornada se corresponde con inestabilidad

en los ingresos, ambas características, sumadas a la ausencia de seguridades y protecciones, construyen un marco cotidiano caracterizado por la precariedad. Las condiciones de trabajo se desarrollan en un contexto de ausencia de certezas respecto de la subsistencia. Sin embargo, y para Bourdieu (1979), en la ausencia de un empleo regular lo que hace falta no es solamente una renta asegurada, sino también un conjunto de sujeciones que definan una organización coherente del tiempo y un sistema de expectativas concretas. Los siguientes cuadros ejemplifican la forma que toman las jornadas laborales irregulares en cuatro beneficiarios (dos hombres y dos mujeres):

Cuadro N° 36: Tiempo de la jornada laboral diaria a lo largo de dos ciclos semanales – Beneficiarias mujeres

Benef. Nro.		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
279	Semana 1	3,5	2,0	0	1,5	2	0,5	0
279	Semana 2	4,0	3,5	2	3,5	0	3,0	0
129	Semana 1	2,5	1,5	3,5	2	0	0	0
129	Semana 2	feriado	0	0	0	6	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Cuadro N° 37: Tiempo de la jornada laboral diaria a lo largo de dos ciclos semanales – Beneficiarios hombres

Benef. Nro.		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
261	Semana 1	4	8,5	4	8,5	4	0	0
261	Semana 2	3,5	7,5	2,5	8	2,5	5	0
54	Semana 1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0
54	Semana 2	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

En estos sectores, la irregularidad y la precariedad son constitutivas de su vida cotidiana y terminan por conformarse como una regularidad. Según Bourdieu (1979), la ausencia de previsibilidad y de calculabilidad constituye el elemento que rige las conductas de estos sujetos económicos y es ese mismo elemento el que brinda la posibilidad de construir un equilibrio precario a través del auxilio mutuo en dinero o en especie entre vecinos o parientes en épocas de desempleo. Desde la perspectiva de Merklen (2005), la inestabilidad se expresa en la vida cotidiana, pero encuentra su origen en las formas en las que las instituciones organizan la cohesión social.

El tiempo de trabajo de los beneficiarios requiere algunas otras consideraciones. En primer lugar, es necesario recordar que para poder constituirse en beneficiarios del Programa, estas personas fueron previamente reconocidas como “desocupados” por las instituciones especializadas de acción social. A partir de su inclusión en el PJJHD, los beneficiarios que declaraban haber participado de alguna contraprestación laboral o quienes no realizándola tenían otra ocupación, pasaron a ser considerados “ocupados” por el sistema estadístico.

En segundo lugar, es importante señalar que por el tiempo semanal de trabajo estos beneficiarios podrían ser incluidos dentro de la categoría “subocupados” visibles u horarios ya que trabajan menos de 35 horas y, en términos generales, es posible señalar que desearían trabajar más¹⁵⁶. No obstante, la búsqueda activa de empleo sólo está presente en los diarios de actividades de dos beneficiarios (un hombre y una mujer), los cuales manifiestan haber asistido a entrevistas de trabajo y haber realizado lectura de los clasificados en el diario. Sin embargo, en el grupo de 38 beneficiarios que -además de realizar las actividades de contraprestación- poseen otra ocupación remunerada, el tiempo medio de trabajo es próximo a la jornada laboral de los “ocupados plenos”¹⁵⁷.

Poniendo en relación el tiempo medio insumido por el trabajo remunerado con la forma en la que los beneficiarios reciprocán por el subsidio otorgado, es posible señalar que en el caso de los hombres beneficiarios no se observa ningún tipo de tendencia para ser destacada.

Cuadro N° 38: Mínimo, máximo y media de tiempo específico del trabajo remunerado de los hombres beneficiarios según tipo de reciprocidad (jornada semanal)

Tipo de Reciprocidad*	Beneficiarios	Mínimo	Máximo	Media
Reciprocidad estricta	4	4,00	84,00	29,87
Reciprocidad débil	7	10,00	31,00	23,35
Reciprocidad negativa	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

¹⁵⁶ Este dato surge de conversaciones informales mantenidas con los beneficiarios durante el trabajo de campo y no de los diarios de actividades.

¹⁵⁷ La categoría ocupacional “ocupados plenos” puede ser definida como aquel conjunto de los ocupados que trabajan un lapso considerado “socialmente normal”. En nuestro país ha sido establecido entre 36 y 45 horas semanales.

* En horas y centésimas de hora

* Recordamos que fueron comprendidos dentro del concepto de “reciprocidad estricta” aquellos beneficiarios que cumplieron con el mínimo de horas establecido por la normativa (20 horas) en las semanas de referencia; dentro del concepto de “reciprocidad débil” fueron englobados los beneficiarios que contraprestaron entre 1 y 19 horas; finalmente la “reciprocidad negativa” comprende a aquellos beneficiarios que no contraprestaron ni siquiera una hora dentro del mismo período.

Sin embargo, en el caso de las mujeres beneficiarias se presenta de forma clara una relación inversa entre tiempo invertido en la ocupación remunerada y tiempo dedicado a las actividades de contraprestación. La tendencia que se verifica es que a medida que caen las horas insumidas por las actividades de contraprestación aumenta las horas ocupadas en la realización de actividades remuneradas.

Cuadro N° 39: Mínimo, máximo y media de tiempo específico del trabajo remunerado de las mujeres beneficiarias según tipo de reciprocidad (jornada semanal)

Tipo de Reciprocidad	Beneficiarios	Mínimo	Máximo	Media
Reciprocidad estricta	15	2,00	52,00	13,93
Reciprocidad débil	12	1,00	42,00	15,95
Reciprocidad negativa	8	4,50	41,00	20,06

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

Es importante tener en cuenta que, en el caso específico de las mujeres, al tiempo demandado por las actividades de contraprestación y por el trabajo remunerado se le suma una importante carga de tiempo invertido en el trabajo doméstico. En este sentido, Antunes (1999) sostiene que el capital ha sabido apropiarse en forma intensificada de la polivalencia y multiactividad del trabajo femenino, de la experiencia que las mujeres trabajadoras traen de sus actividades realizadas en la esfera del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico. Para el autor, en la medida en que los hombres muestran más dificultades para adaptarse a las nuevas dimensiones polivalentes (que conforman niveles más profundos de explotación), el capital ha utilizado ese atributo social como una fuente más de desigualdad.

3.5.- El tiempo de traslado

De los diarios de actividades de los beneficiarios que trabajan se desprende que una gran mayoría no realiza grandes desplazamientos en la ciudad para realizar sus actividades laborales. Más del 75% de los beneficiarios que trabajan asignan menos de 3,50 horas a la semana a los desplazamientos hacia los espacios de trabajo. Esto es producto de una serie de situaciones. Desde el punto de vista metodológico, es probable que se trate de un tipo de actividad subestimada por los encuestados y que, consecuentemente, no aparezca reflejada en los diarios de actividades con su real

magnitud. Desde el punto de vista de los encadenamientos de actividades, la inestabilidad de las jornadas laborales, el tipo trabajo y el espacio físico donde las actividades laborales son realizadas por los beneficiarios colabora en la explicación.

Los trabajos informales realizados por los beneficiarios, caracterizados fundamentalmente por las “changas” de diferente tipo y ventas al menudeo de comidas¹⁵⁸ y/o productos cosméticos, aunados a los escasos o nulos desplazamientos relacionados con las actividades laborales permiten pensar en una demanda de estos bienes y servicios que se genera dentro de los límites del espacio territorial más próximo: el barrio. Este elemento actúa profundizando y reforzando la noción de “territorialidad de las prácticas” desarrollada precedentemente y asociada a las actividades de contraprestación.

Finalmente, es importante destacar que aquellos 11 beneficiarios (23,91%) cuyos desplazamientos por cuestiones laborales les demandan entre 4 y 7 horas semanales, son aquellos cuyas jornadas laborales presentan una regularidad mayor (servicio doméstico) o aquellos que participan del componente de reinserción laboral del PJJHD.

3.6.- La relación entre el trabajo remunerado y las horas de contraprestación

El disciplinamiento social constituye uno de los soportes sobre los cuales se asienta del proceso de acumulación. La interiorización de las disciplinas en torno al trabajo supuso la sujeción de los individuos al orden social. Tal como señalara Thompson (1984), la producción industrial capitalista impuso la necesidad de pautar y cronometrar el tiempo de trabajo a través de ritmos regulares y continuos, impulsando un largo proceso de disciplinamiento social que fue, fundamentalmente, un proceso cultural. Este proceso supuso la construcción de hábitos de vida específicos.

Desde la perspectiva de Offe (1995), dos fueron los mecanismos principales que garantizaron que el trabajo desempeñe un papel central en la organización de la existencia individual: 1) a nivel de la integración social, el trabajo puede ser normativamente sancionado como un *deber*. Convirtiéndose, de esta manera, en el punto central de una vida honesta y moralmente buena y, 2) a nivel de la integración del sistema, puede ser establecido como una *necesidad*. En este sentido, es la mera condición de la sobrevivencia física. La valorización del trabajo durante el ascenso de la

¹⁵⁸ En este caso específico, es importante destacar que la preparación y elaboración de los alimentos que se comercializan (milanesas, pastelitos, sándwiches, etc.) se realiza en el espacio doméstico.

burguesía se debió a este doble movimiento, ya que la implantación del trabajo remunerado se convirtió en un instrumento decisivo para combatir la pobreza y también para ligar a los individuos al orden social. La sociedad del trabajo significó, así, sociedad del orden. En este marco, el desempleo comenzó a actuar -esencialmente- como un mecanismo de disciplinamiento.

A esta mirada es interesante incorporarle el planteo de Jahoda (1987), quien considera que -a lo largo de por lo menos dos siglos- dos aspectos de la estructura del empleo han permanecido casi invariables. El primero de esos aspectos supone que esta estructura proporciona los medios a través de los cuales la inmensa mayoría de las personas se ganan la vida; en tanto el segundo refiere a la imposición de cinco categorías particulares de experiencia a quienes participan de ella. Estas cinco categorías de experiencia son: 1) la imposición al día de una estructura temporal, 2) la expansión del campo de las relaciones sociales más allá de las relaciones familiares y del vecindario más inmediato, 3) la participación en intereses que trascienden los objetivos individuales, 4) la asignación de un status social y de una identidad personal, y finalmente 5) la obligación de realizar una actividad regular. Para la autora, algunas de estas categorías de experiencia pueden llegar a ser impuestas por otras instituciones; sin embargo, ninguna de ellas las combina a todas con el respaldo de un motivo tan convincente como puede ser la necesidad de ganarse la vida.

Ahora bien, la nueva dinámica social conllevó la necesidad de reconstruir y/o construir nuevas formas de asegurar el orden social requiriendo una constante búsqueda y aplicación de métodos idóneos para conseguir la adecuación laboral más eficiente por parte de los trabajadores, así como la neutralización de todas aquellas prácticas que pudieran afectar el funcionamiento de las lógicas del sistema.

La expansión del sector servicios, el aumento del desempleo y del tiempo de desempleo, la flexibilización, la polarización y la heterogeneización del mercado de trabajo conllevó la dualización y la segmentación de las formas de regulación. Para Fraser (2003), “al separar al trigo capaz y competitivo del bagazo incapaz y no competitivo”, la política de bienestar postfordista construye cursos diferentes para los diferentes grupos sociales resultantes de esta transformación del mercado de trabajo y de la dinámica social en general; el resultado de esto es una “nueva clase de gubernamentalidad segmentada”.

Para aquellas “zonas” de la sociedad completamente interconectadas e hiper-competitivas, esta nueva gubernamentalidad es la de la autorregulación y de la responsabilidad individual. Ya lo recordaba Sorj (1999) en relación a la expansión del sector servicios, la cual introdujo nuevas formas de control sobre los trabajadores enmarcadas en la producción de bienes muchas veces intangibles, surgiendo un modelo de trabajo que escapa completamente al patrón prevaleciente en la sociedad industrial. En este marco, el trabajador -más que un apéndice de la máquina- se vuelve parte del producto, ya que la calidad de la interacción entre quien detenta una ocupación en ese sector y el consumidor es relevante para conformar el valor del producto. Así, las características personales de los empleados, mucho más que sus calificaciones profesionales, pasan a ocupar un lugar importante en el mercado. Dentro de esta “zona”, la inseguridad, el miedo a perder el trabajo, la flexibilidad y la mayor intensidad que acompaña a la sofisticación tecnológica resultan los recursos más eficaces del disciplinamiento en esta nueva etapa del capitalismo para dedicar la vida al trabajo.

Pero las necesidades de asegurar formas nuevas o transformadas de disciplinamiento social no se restringen sólo a los trabajadores. La nueva dinámica socio-político-económica necesita definir y construir formas de disciplinamiento de las masas compulsivamente expulsadas de los procesos de producción. En nuestro país, la cotidianeidad del “vivir al día” -es decir la necesidad de asegurar un sustento para el mero mantenimiento de la vida humana- por un lado, y las políticas que incorporan elementos del *workfare* por otro, constituyeron los instrumentos básicos del disciplinamiento de los desplazados¹⁵⁹. Estos instrumentos se entrelazan en la cotidianeidad de los beneficiarios en la medida en que la escasa significación económica del ingreso proporcionado por el PTMC hace necesario su complemento con algún tipo de trabajo informal.

Esta relación de complementariedad de los ingresos monetarios -que es a la vez una complementariedad de los mecanismos de regulación y disciplinamiento- se presenta en la cotidianeidad de los beneficiarios encuestados tomando una variada gama de situaciones.

¹⁵⁹ Sin lugar a dudas, estos mecanismos se ven reforzados en determinadas situaciones y/o determinados contextos por la represión abierta (Fraser, 2003; Torrado, 2004; Wacquant, 1997, 2001).

Cuadro N° 40: Forma de reciprocitar de los beneficiarios que poseen un trabajo remunerado

Tipo de Reciprocidad	Nro. Absoluto	Porcentaje
Reciprocidad estricta	19	41,3
Reciprocidad débil	19	41,3
Reciprocidad negativa	8	17,39
Total	46	100

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

En este sentido, es posible señalar básicamente tres grupos. Un primer grupo comprendido por aquellos beneficiarios que realizan algún tipo de actividad remunerada a la vez que asisten de forma más o menos regular a las actividades de contraprestación; este grupo estaría formado por aquellos 38 beneficiarios¹⁶⁰ que, trabajando, reciprocitan de forma estricta (19 beneficiarios) o de forma débil (19 beneficiarios). La sumatoria de ambas actividades (trabajo remunerado más actividades de contraprestación) les demanda a las mujeres beneficiarias una jornada de trabajo semanal algo superior a las 30 horas. En el caso de los hombres la jornada de trabajo es más amplia, llegando a sobrepasar las 40 horas semanales.

Cuadro N° 41: Mínimo, máximo y media de tiempo* específico del trabajo remunerado y de las actividades de contraprestación (jornada semanal)

	Beneficiarios	Mínimo	Máximo	Media
Hombres	11	24,00	104,00	40,31
Mujeres	27	11,00	72,00	30,77
Total beneficiarios	38	11, 00	104,00	33,53

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

Este grupo se distancia claramente de la experiencia temporal tanto de los desocupados de la crisis del 30 descrita por Lazarsfeld, Jahoda y Zeisel (1996), como de la experiencia contemporánea de la desocupación europea descrita por Ahn, Jimeno y Ugidos (2003).

¹⁶⁰ Representan el 29,45% de los beneficiarios encuestados.

Según el informe sobre Marienthal, en la época de la Gran Crisis existían dos tiempos, el de los hombres y el de las mujeres. Así, la utilización más frecuente del tiempo por parte de los hombres consistía en “no hacer nada”; ésta era la ocupación que dominaba. Al no tener nada en qué ocuparse, los hombres tampoco emprendían nada nuevo y se deslizaban lentamente de una vida reglamentada a una existencia vacía y sin coerciones. Cuando se les preguntaba cuáles habían sido sus ocupaciones, durante un periodo determinado, no encontraban nada que valiese la pena de ser mencionado. La idea de un horario para los hombres hacía tiempo que carecía de sentido. Levantarse, comer, acostarse eran los únicos puntos de referencia que seguían existiendo durante la jornada. En los intervalos, el tiempo pasaba sin que se sepa muy bien en qué se lo empleaba. Algunas actividades ligadas a la subsistencia material, tales como recoger leña, criar conejos y trabajar en la huerta, constituían las únicas actividades más o menos regulares de los hombres de Marienthal. Sin embargo, la pérdida de la noción del tiempo no estaba presente en la cotidianeidad de las mujeres; las cuales pasaron a reorganizar su temporalidad en función del trabajo no remunerado al interior del hogar de forma casi exclusiva.

Si el estado de resignación generalizado en el que se encontraba la población constituía el telón de fondo de la experiencia de la desocupación en la década del 30, la experiencia contemporánea descrita por Ahn, Jimeno y Ugidos (2003) se centra, paradójicamente, en los efectos “positivos” del desempleo. En este sentido, los autores consideran que las pérdidas en la capacidad de consumo que conlleva el desempleo no son tan altas si se las relaciona con las ganancias; las cuales se expresan tanto en una mayor disponibilidad de tiempo libre (ya sea en descanso activo como pasivo) como en un uso alternativo del tiempo (mayor dedicación a la producción doméstica).

De forma contraria, en el caso de los 38 beneficiarios del PJJHD que -a la vez que realizan las actividades de contraprestación estipuladas en la normativa del Programa- complementan sus transferencias monetarias con trabajos informales, sus jornadas diarias se asimilan más a las de los ocupados plenos. Para estos beneficiarios el tiempo no ha perdido el papel de estructurador de las actividades cotidianas; sin embargo, son las múltiples jornadas las que actúan desorganizando/precarizando la cotidianeidad. La escasez de recursos llega a poner en peligro la mera supervivencia física y reintroduce con fuerza la relación entre desempleo y pobreza. Consecuentemente, y como veremos más adelante, el aumento del tiempo dedicado al

trabajo no remunerado en el hogar está lejos de constituir una ganancia o un aspecto positivo del desempleo. La fuerte reestructuración del mercado de trabajo y del aparato del Estado actúa imprimiendo una presión constante en el trabajo no remunerado y mostrando claros impactos diferenciales en términos de género.

El segundo grupo estaría formado por aquellos beneficiarios que muestran en su ordenamiento temporal la presencia de sólo una de las formas de regulación señaladas; es decir estaría formado por aquellos beneficiarios que poseen un trabajo remunerado sin realizar tareas de contraprestación (8 beneficiarios) o por aquellos que realizan actividades de contraprestación sin realizar un trabajo remunerado (38 beneficiarios que reciprocán de forma estricta y 34 beneficiarios que reciprocán de forma débil).

Cuadro N° 42: Forma de reciprocación de los beneficiarios que no poseen un trabajo remunerado

Tipo de Reciprocidad	Nro. Absoluto	Porcentaje
Reciprocidad estricta	38	45,78
Reciprocidad débil	34	40,96
Reciprocidad negativa	11	13,25
Total	83	100

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo

Finalmente, en el tercer grupo pueden ser comprendidos los 11 beneficiarios restantes, los cuales no realizan un trabajo remunerado ni asisten de forma más o menos periódica a realizar las actividades de contraprestación exigidas por la normativa del Programa. De estos 11 beneficiarios, 10 son mujeres. Tal como veremos más adelante - y como ya fue resaltado por el informe sobre Marienthal (Lazarsfeld, Jahoda y Zeisel, 1996)- el trabajo no remunerado en el hogar (actividades que se ven acrecentadas en un marco de escasez de recursos) ocupa la mayor parte del día en la vida de las beneficiarias de este grupo y actúa proporcionando una importante cantidad de puntos de referencia, con obligaciones y funciones regularmente establecidas.

Los datos anteriores nos permiten afirmar junto a Beck (2007) que, hasta hoy, rige el principio que quien trabaja vence la pobreza, la drogadependencia, la criminalidad, etc. El ritmo del trabajo cotidiano, su disciplina, sus valores, su comprensión de la responsabilidad personal y la colaboración responden también a una voluntad de dominio por parte de los capitalistas de la sociedad laboral respecto de sus

trabajadores y empleados. Esta exigencia del orden de la sociedad laboral se ha mantenido, más aún, se ha revalorizado y convertido en una visión antropológica del hombre según la cual éste logra su identidad y personalidad sólo en y a través del trabajo.

En una dirección similar, Offe (1997) señala que un argumento a favor del “pleno empleo”, y que encuentra cada vez más eco aunque en ocasiones sea abiertamente cínico, manifiesta que no es la justicia social el motivo primario por el que debería integrarse al mayor número posible de personas en el mercado de trabajo, sino el control social. Este argumento se asienta en la idea que si la gente no está vigilada y no trabaja en el marco de unas obligaciones contractuales formales, cae ineluctablemente en un modo de vida caótico y dañino desde el punto de vista de la comunidad. Así, se desacredita el valor humano del progreso técnico y económico que ha permitido la liberación de muchas personas de un trabajo duro y pesado. Y al mismo tiempo se asume implícitamente la miseria de un orden social que no parece disponer de otro medio, salvo el trabajo, para hacer que los ciudadanos lleven una vida disciplinada y cooperativa. Para Beck (2007), el miedo a la libertad hace apelar a una política proteccionista de reducción de la productividad.

Este es el marco que hace inteligible a los programas de empleo que proponen el uso del “pico y la pala” y no de maquinarias como formas de intensificar el uso de la mano de obra. Sin embargo, no parece que pueda sostenerse la solución al problema del desempleo sobre el principio del atraso tecnológico o postulando el puro uso de la fuerza física, salvo que se acepte una demanda de nula calificación, precariedad y salarios de subsistencia (Grassi, 1997).

4.- Los estudios

Son muy pocos los beneficiarios que al momento de la realización de la encuesta manifiestan a través de los diarios de actividades estar realizando algún tipo de estudios. Se trata en total de 8 beneficiarias mujeres que llevan adelante actividades relativas a instancias de educación formal o cursos de capacitación para el trabajo. Todas ellas realizan estos estudios por fuera de las actividades de contraprestación. Es importante recordar que otras dos beneficiarias realizaban estudios en el marco de las actividades de contraprestación.

El tiempo medio asignado por estas 8 beneficiarias a los estudios es de 12,85 horas. Sin embargo esta media contiene en su interior un amplio abanico de situaciones y de asignaciones de tiempo. La beneficiaria que menos tiempo asigna a esta actividad ha dedicado sólo 2 horas a la asistencia a una institución educativa mientras que a la beneficiaria que más horas le ha insumido esta actividad ha pasado más de 42 horas estudiando.

Cuadro N° 43: Media de tiempo* específica de los estudios en las mujeres beneficiarias (en horas semanales de lunes a viernes)

	Beneficiarias	Media específica
Total estudios	8	12,87
Asistencia a instituciones educativas	7	6,14
Estudiando	2	26,75
Desplazamiento por estudios	3	2,17

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

Es interesante observar que de las beneficiarias que realizan estudios por fuera de las actividades de contraprestación 5 de ellas tienen completos los estudios primarios y las otras 3 han completado la educación secundaria. Esta característica se contrapone con la situación de las beneficiarias que estudiaban en el marco de las actividades de contraprestación. Las mismas estaban intentando completar su educación primaria en el marco de las actividades del PJJHD.

5.- Tiempo, trabajo y disciplina

De los datos relativos a las actividades de contraprestación es posible señalar que a nivel general no existiría una correspondencia o proporcionalidad estricta entre la contribución de los beneficiarios y la transferencia monetaria otorgada a través del PJJHD; a su vez la presencia de los encuadres y prescripciones muestra características heterogéneas entre los beneficiarios. Sin embargo, las actividades de contraprestación adquieren un peso considerable en el ordenamiento temporal de los mismos. Es claro como el Estado, a través de las políticas que implementa, incide en las actividades de los beneficiarios, constituyéndose de esta manera en un actor clave en la vida cotidiana de los desamparados (Auyero, 2013).

El esquema de funcionamiento del Programa les otorga a los beneficiarios un ingreso mínimo y la posibilidad de acceder a una serie de recursos básicos en los centros comunitarios donde se realizan las actividades de contraprestación. Sin embargo, estos ingresos deben ser complementados con otros provenientes de la inserción en el mercado de trabajo. Dicha inserción -tanto para el caso de los hombres como de las mujeres- se produce en el sector informal de la economía como una forma de contornear las regulaciones estatales y, así, poder complementar los magros aportes de los mecanismos de asistencia. El trabajo remunerado se desarrolla en un contexto de ausencia de certezas respecto de la subsistencia, imposibilitando la construcción de un horizonte a largo plazo y, consecuentemente, constriñendo a los beneficiarios a vivir su existencia día a día.

Así, el entrecruzamiento de dos lógicas: las prescripciones y obligaciones introducidas por el PJJHD por un lado y la lucha por la sobrevivencia cotidiana por el otro inciden en el cotidiano de los beneficiarios profundizando su precarización, fragmentación y desestructurando las formas de organizar temporalmente la vida práctica. A su vez, en la articulación de estas dos lógicas se constituyen los instrumentos básicos del disciplinamiento de aquellos individuos que han sido compulsivamente expulsados de los procesos de producción.

Capítulo 5: Uso del tiempo y actividades instrumentales: el trabajo no remunerado

En este capítulo nos centraremos, fundamentalmente, en los diferentes modos de regulación de los usos del tiempo del trabajo no remunerado -tanto del realizado en el ámbito doméstico y familiar como del trabajo voluntario desarrollado en el ámbito extra-doméstico-; es decir, el capítulo presenta los datos derivados de las encuestas de uso del tiempo relacionados con el segundo conjunto de actividades dentro de las denominadas actividades instrumentales (cuadro N° 2). Asimismo, se analizan los datos surgidos de las simultaneidades registradas por los encuestados y las temporalidades asumidas por el trabajo (en sentido amplio) desde la perspectiva de las relaciones entre la producción y la reproducción social. Los datos presentados en este capítulo surgen de las encuestas de uso del tiempo aplicadas a beneficiarios del PJJHD.

1.- El trabajo no remunerado

En el pionero estudio de Margareth Reid de la década del 30 sobre la producción dentro del hogar, ésta era definida como aquellas actividades no remuneradas que son llevadas a cabo por y para sus miembros, actividades que podrían ser reemplazadas por bienes del mercado o servicios pagados, si circunstancias tales como los ingresos, las condiciones del mercado y las inclinaciones personales permiten que el servicio fuese delegado en alguien fuera del grupo familiar. En este sentido, el trabajo doméstico no remunerado se define por el denominado criterio de la tercera persona, esto es, por tratarse de un tipo de trabajo que podría ser realizado de forma remunerada por una persona externa al hogar.

Se trata esta de una conceptualización centrada, fundamentalmente, en las transformaciones más frecuentes y elementales del entorno físico del hogar, que sólo incorpora una definición restringida de cuidados, ciñéndose a la prestación concreta y activa de cuidados personales (Durán, 2005e). En este sentido, una serie de autores (Aguirre, 2005; Del Re, 1995; Durán, 2005e; Vaiou, 1991/2) señalan que este tipo de definición desconoce conceptos esenciales para entender el trabajo de los responsables del hogar, tales como los conceptos de “dirección”, “gestión” y “disponibilidad”, difícilmente traducibles en estimaciones de esfuerzo, intensidad o tiempo. Este tipo de actividades relacionadas con los dominios simbólicos están próximas a tareas de

dirección y a condiciones de disponibilidad y son por ello mucho más difíciles de observar por observadores externos y de conceptualizar y percibir por los propios sujetos que las realizan.

El trabajo no remunerado, también denominado trabajo no pagado o no monetarizado¹⁶¹, es aquel que indica que no existe pago directo por el tiempo de trabajo aplicado (Durán, 2005e). El concepto de trabajo no remunerado ha venido a reemplazar en los últimos tiempos al concepto inicialmente utilizado de trabajo reproductivo. Desde la perspectiva de Benería (2005), la preferencia por el uso de esta noción se debe tanto a cuestiones conceptuales como prácticas. Para la autora, una parte creciente del trabajo reproductivo se transforma en trabajo remunerado cuando las sociedades se mercantilizan. Asimismo, el trabajo doméstico tiene componentes que no se pueden considerar estrictamente como reproductivos, aunque se trate de actividades que contribuyan a la reproducción de la fuerza de trabajo. De forma adicional el concepto de trabajo no remunerado permite incluir actividades que en sentido estricto no son reproductivas, como el trabajo de reparaciones del hogar o el trabajo comunitario.

Desde la perspectiva de Picchio (2001), el contenido del trabajo de reproducción social no remunerado es el cuidado del mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, así como el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento de relaciones sociales y el apoyo psicológico a los miembros de la familia. En lo que respecta a las actividades concretas desarrolladas y a su peso relativo, éste refleja los cambios históricos y culturales, mientras, en lo que se refiere a sus funciones de fondo, sigue manteniendo una posición central en el proceso de reproducción social de la población, que interacciona con el papel de los servicios públicos y la producción de los bienes y servicios de mercado necesarios para la subsistencia de la población. Este trabajo, necesario tanto para quien lo recibe como para quien lo asigna, forma parte de la organización profunda de las condiciones de vida, sedimentada en prácticas históricas de relación entre hombres y mujeres, clases y generaciones.

Para la autora, las grandes funciones del trabajo de reproducción social no remunerado diferenciadas a escala del sistema son las siguientes:

¹⁶¹Según Durán (2005e), algunos autores prefieren esta noción a la de trabajo no remunerado porque la legislación reconoce que en el régimen de bienes gananciales los esposos comparten el patrimonio conseguido por el trabajo por cualquiera de ellos y en ese sentido puede considerarse que existe una remuneración indirecta vía patrimonial.

1) *ampliación* de la renta monetaria en forma de nivel de vida ampliado, que también incluye la transformación de bienes y servicios por medio del trabajo de reproducción social no remunerado. La ampliación tiene en cuenta los aspectos cuantitativos del trabajo de reproducción no remunerado y permite sumarlo a la renta monetaria para definir el nivel de vida en término de bienes y servicios bajo la forma en la que efectivamente se utilizan,

2) *expansión* del nivel de vida “ampliado” en forma de una condición de bienestar efectiva, que consiste en el disfrute de niveles específicos, convencionalmente adecuados, de educación, salud y vida social. Esta tiene en cuenta los aspectos cualitativos del trabajo de reproducción social y, en particular, la inversión de sentido inherente al trabajo de cuidado de las personas; y, finalmente,

3) *reducción* cuantitativa y cualitativa de la población trabajadora a los trabajadores y trabajadoras efectivamente empleados; en este caso, el trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito doméstico y familiar sirve de apoyo para la selección, realizada en el mercado de trabajo, de las personas y las capacidades personales efectivamente utilizadas en los procesos productivos, facilitando, material y psicológicamente, los procesos de adaptación a los mismos y/o absorbiendo las tensiones que generan.

La ausencia de un intercambio mercantil en el caso del trabajo de reproducción social familiar ha determinado la invisibilidad de una contribución fundamental a la riqueza social, pero también ha permitido ocultar una parte significativa de los costos de reproducción. En este sentido, Bruschini (2006) señala que es fundamental considerar el tiempo del trabajo doméstico como tiempo para la reproducción social, entendiéndolo como básico para resolver algunos problemas de la acumulación capitalista que no se ecuacionan en el sistema generalizado de intercambios realizados a través de la moneda.

En una dirección similar a la planteada por Picchio (2001), Durán (1997) señala que el trabajo no remunerado es, sobre todo, trabajo de cuidados. La idea de cuidados - como noción relativa a aquellos bienes, servicios, actividades o relaciones más básicas para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en las que viven- es de desarrollo relativamente reciente¹⁶². Estas primeras aproximaciones igualaron la

¹⁶² Impulsados por las corrientes feministas en el campo de las ciencias sociales, los primeros debates sobre el contenido del concepto de cuidados en el debate académico se remontan a la década del setenta en los países anglosajones (Batthyány, 2009).

noción de cuidados a la de trabajo no remunerado realizado en el ámbito del hogar (Rodríguez Enríquez, 2007c).

Sin embargo, tal como plantea Batthyány (2009), las actividades de cuidado pueden ser realizadas de manera honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia pero también puede ser realizado de manera remunerada en el marco de la familia o fuera de ella. Así, la naturaleza de la actividad variará según se realice o no dentro de la familia y también de acuerdo a si se trata o no de una tarea remunerada. Esta definición más amplia comprende, entonces, el trabajo no remunerado realizado en el hogar y la oferta de servicios de cuidado extra-doméstico emanados tanto de instituciones públicas como del servicio privado mercantil.

Para Durán (1997), los cuidados en el ámbito público o remunerado se convierten en “servicios” y entablan una relación constante de complementariedad y sustitución con los trabajos de cuidados no pagos. Así, la investigación sobre cuidados es, en realidad, investigación sobre el contrato implícito que liga a unos y otros en el seno de la familia o comunidad política. El cuidado traspasa las relaciones inter-generacionales y las de género, pero también las de clase y las inter-regionales, y afectan a la conducta económica (el ahorro, el consumo, a los sistemas de transmisión de la propiedad) y a la conducta laboral (la disponibilidad, los perfiles biográficos, la promoción), al mercado de la vivienda (los que viven solos, los que viven en compañía), al sector sanitario, educativo, alimentario y de ocio. La pregunta subyacente en los estudios sobre cuidados, de pura raíz política, es: ¿quién cuida a quién, y por qué? (Durán, 1997).

Desde la perspectiva de Adam (1995, 1998), el tiempo de trabajo de las mujeres constituye un ejemplo de tiempo vivido, dado y generado a las sombras de la hegemonía universal del tiempo del reloj. Esto estaría demostrando que no todas las relaciones humanas están exclusivamente gobernadas por el tiempo racionalizado del reloj, ni todos los tiempos son iguales.

Los tiempos del trabajo no remunerado y de las actividades relacionadas con la maternidad (alumbramiento, amamantamiento), al estar constituidos por fuera de la mercantilización y del tiempo racionalizado del reloj de las relaciones laborales, son incompatibles con el tiempo de trabajo de unidades finitas, con el tiempo uniforme y abstracto que puede ser medido, cuantitativamente evaluado, controlado e intercambiado por dinero y delimitado contraponiéndose al tiempo de ocio. Al no operar de acuerdo a principios económicos, estas temporalidades no pueden ser forzados en

tablas de horarios, rutinas pre-establecidas, ni es posible otorgarles valor monetario. Muy por el contrario, por el hecho de estar definidas a través de la organización de la vida cotidiana se desarrollan sin límites de tiempo claramente fijados.

Estas consideraciones, dan cuenta de varios aspectos de la temporalidad en la sociedad industrial. El primero de ellos está relacionado con la constatación de que el tiempo de trabajo es un tiempo múltiple antes que un fenómeno singular. En este sentido, Bruschini (2006) señala que el trabajo doméstico se caracteriza por la simultaneidad, la multiplicidad y la fragmentación, y por consumir gran parte del tiempo femenino. Todos estos elementos se oponen de forma clara a las características del modelo temporal hegemónico de la sociedad industrial.

El segundo aspecto muestra la necesidad de coordinar múltiples tiempos: tiempo de trabajo remunerado, ocio, escuela, comidas, compras, trabajo voluntario, etc. La interconexión de los diferentes tiempos en la vida cotidiana permite observar, como tercer aspecto, que algunos tiempos son claramente privilegiados y juzgados como más importantes que otros. Este tratamiento diferencial de los tiempos se torna visible en la secuencia o prioridad de ciertos tiempos y en los compromisos en la asignación del tiempo que deben ser alcanzados en el cotidiano.

Sin embargo, no sólo el tiempo gobernado por los imperativos del mercado tiene prioridad por sobre aquellos tiempos que se constituyen por fuera de la economía de las relaciones asalariadas, sino que el dominio del tiempo del reloj llega a permear con sus significados y sentidos a todas las esferas de la vida. Los elementos de rigidez heterodeterminados presentes en la configuración del trabajo reproductivo, y señalados por Del Re (1995), constituyen un ejemplo de esto. Para la autora, la rigidez no se da solamente por las necesidades de los sujetos reproducidos sino que, adicionalmente, es dictada por los horarios o la estructura de las instituciones de reproducción social, por los tiempos de las ciudades, por el tiempo del trabajo asalariado, y por la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por la reproducción socializada y por el hecho de que estos servicios tengan unos tiempos más o menos rígidos.

En este apartado nos centraremos en los diferentes modos de regulación de los usos del tiempo en estas actividades, no remuneradas relacionadas con los cuidados, realizadas tanto en el ámbito doméstico y familiar como aquellas otras referidas al trabajo voluntario desarrolladas en el ámbito extra-doméstico. Mientras las primeras están direccionadas a los miembros de la familia, los beneficiarios de las segundas no

son familiares próximos. Agrupar o clasificar al trabajo de esta manera no supone considerar la existencia en su interior de esferas separadas y completamente autónomas. Tal como ya fue señalado por Picchio (2001) y Pouw (1998), la familia interactúa e intercambia con actores del mercado, del Estado y con otros actores de la sociedad civil.

En este apartado específico fueron computadas algunas encuestas menos (12 de hombres beneficiarios y 107 de mujeres beneficiarias) por presentar las restantes insalvables problemas de orden metodológico.

1.1.- El trabajo doméstico y familiar

El trabajo doméstico (en sentido restringido) junto al trabajo de cuidados (no pagados), constituyen el núcleo del proceso de reproducción social. En este sentido, la noción de reproducción social no sólo hace referencia a la procreación y crianza de la prole (reproducción biológica) y a su posterior “conversión” en trabajadores (reproducción de la fuerza de trabajo), sino también al proceso más amplio de reproducción de las condiciones ideológicas y materiales que sostiene el sistema social.

Para Durán (2005a), el conjunto del trabajo no remunerado que se realiza en las familias en un momento dado es el resultado del ajuste entre demanda y oferta. La demanda de trabajo no remunerado parte de cinco categorías sociales principales: los niños, los enfermos, los ancianos, los sobreocupados en la producción para el mercado y los autoconsumidores. Las tres primeras categorías tienen en común que son en gran medida insolventes, es decir, no pueden pagar a precio de mercado el trabajo de asistencia que necesitan, por lo que alguien (el Estado a través de los servicios públicos, los familiares y amigos, u otros) ha de hacerlo por ellos. Parte de la población que vende su tiempo en el mercado sí puede comprar trabajo de atención; este trabajo es generalmente provisto por personas de los niveles sociales más bajos. En tanto, el autoconsumo de trabajo es la respuesta de la mayor parte de la población de rentas medias y bajas -especialmente de las mujeres-, porque su nivel de salarios, la cantidad de trabajo que venden al mercado y otros componentes de tipo cultural no le permiten adquirir trabajo para su propia atención; pero en cambio, está en condiciones de producirlo por sí misma. En tanto, la oferta de trabajo no remunerado es producida principalmente por mujeres.

Tal como señaláramos, las actividades no remuneradas realizadas en el ámbito del hogar abarcan un amplio espectro de tareas. Sin embargo, a los efectos de convertirlas en

categorías analíticamente operativas se las agrupó en un número limitado de subconjuntos. El primero de ellos denominado “trabajo doméstico (en sentido restringido)” incluye las tareas de alimentación¹⁶³, limpieza y orden del hogar, limpieza y orden de la ropa y el calzado, coser y tejer, reparación y mantenimiento de la vivienda, cuidado de plantas y mascotas, cuidado de la huerta y animales de granja y reparación y mantenimiento de vehículos. El segundo subconjunto es el denominado “trabajo específico de cuidados (no pagados)”, el mismo agrupa las siguientes actividades: cuidado de personas enfermas y/o adultos mayores dependientes y a niños¹⁶⁴, así como también los desplazamientos necesarios para las tareas de cuidado. Finalmente, el subconjunto “adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia” incluye las compras, pagos y todo tipo de trámites.

Las encuestas de uso del tiempo se convirtieron desde la década del 70 en el instrumento privilegiado tanto para evidenciar y mostrar la importancia del trabajo no remunerado al interior del hogar como para recoger la información adecuada relacionada con este tipo de trabajo. Así, este tipo información estadística permitió recuperar aquellas actividades que se han hecho invisibles bajo la lógica del capitalismo (Carrasco, 2005a). Sin embargo, el análisis de este tipo de trabajo a partir de la variable tiempo, requiere una serie de consideraciones desde el punto de vista metodológico.

Así, es importante destacar que tanto el trabajo doméstico (en sentido restringido) como el trabajo de cuidados no pagos carecen de horarios definidos, y la cantidad de tiempo de trabajo destinada a dichas actividades estará determinada por las necesidades de los miembros de la unidad familiar. Además, la disponibilidad se extiende a fines de semana y días feriados. De ahí que ni uno ni otro estén sujetos a horario fijo y requieran la disponibilidad de él o los agentes que los realizan todo el tiempo (Rodríguez Chaurnet, 2004).

Adicionalmente, es muy habitual que las tareas del hogar se realicen en forma simultánea, densificando el ritmo de trabajo. Desde la perspectiva de Aguirre (2005), una de las mayores dificultades encontradas en la medición del trabajo no remunerado

¹⁶³ Dentro de esta actividad se incluye la preparación de los alimentos y de la mesa, así como también la limpieza de la cocina y/o de los utensilios.

¹⁶⁴ Siempre que fue posible, es decir, siempre que fue especificado por el beneficiario encuestado, el tiempo invertido en dar la comida a los niños fue contabilizado dentro de las tareas de cuidado. La adopción de este criterio responde a la necesidad de ampliar la mirada sobre el trabajo doméstico y familiar apartándose de las visiones más materiales ligadas a la transformación e incluir las numerosas actividades de gestión, disponibilidad, cuidados, etc.

tiene que ver con la variabilidad de la ejecución de tareas y, sobre todo, en la acumulación de tareas simultáneas¹⁶⁵. Reforzando esta complejidad, diferentes investigaciones han señalado la fuerte tendencia por parte de los encuestados a no registrar la simultaneidad de tareas en el trabajo doméstico y familiar.

Finalmente, y muy relacionado con este último punto, es importante considerar que el trabajo de cuidados es un tipo de actividad que depende en gran manera de las relaciones interpersonales. Esta característica intrínseca hace que el mismo no sea fácilmente visualizado y/o reconocido, incluso por quienes lo realizan. De esto se deriva la tendencia por parte de los encuestados o informantes a subestimar su participación y el tiempo medio empleado. Dos razones podrían ser encontradas en la base de esta dificultad. La primera de ellas se encontraría en que es una actividad difusa y típicamente secundaria (Ramos Torre, 1990b). Es difusa porque se puede presentar en múltiples variantes, situadas en ese amplio espectro que va desde el trabajo doméstico-familiar propiamente dicho al ocio. Esto determina que en muchas situaciones el cuidado de la prole no se considere una actividad laboral propiamente dicha. Asimismo, y siempre desde la perspectiva de Ramos Torre (1990b), el trabajo de cuidados es una actividad típicamente secundaria porque no tiende a realizarse de forma segregada, sino simultáneamente con otras y además subordinándola a ellas. Esto hace que no se perciba como tal y que quede desplazada por la relevancia de la actividad principal.

La segunda razón, de orden más general, puede ser encontrada en lo que Murillo (2000) denominó “domesticidad”. Para la autora, esta concepción que supone la plena disposición para el otro, se ha visto “encerrada en una urna de nobles celofanes” que ocultan una serie de servicios traducibles en términos productivos, pero intencionalmente diluidos en la excelsa valoración de lo femenino unido al desprendimiento de sí, a olvido de sí, en un ritual más cercano al don, al regalo, conforme a la regla social que otorga al significado “hogar” una calidez desprovista de trabajo y obligaciones.

Derivado de estas consideraciones metodológicas debemos reconocer que es factible medir con mayor o menor precisión el tiempo dedicado a las tareas domésticas típicas, pero que esta posibilidad de captación está, generalmente, ceñida a las

¹⁶⁵ En la actualidad, estas características no sólo son peculiares de los hogares y situaciones parecidas, sino que se producen también en el ámbito mercantil. Cada vez más el trabajo remunerado y el no remunerado tienden a parecerse en términos de discontinuidad y difusividad (Aguirre, 2005).

transformaciones más frecuentes del entorno físico del hogar y a la prestación concreta y activa de los cuidados. Sin embargo, y como ya fue señalado, resulta difícil de captar, la llamada “carga mental” (Aguirre, 2005) que conlleva la gestión, disponibilidad, dirección y armonización de estas actividades en el tiempo y en el espacio. Este tipo de actividades relacionadas con los dominios simbólicos están próximas a tareas de dirección y a condiciones de disponibilidad, y son por ello mucho más difíciles de captar por observadores externos y de conceptualizar y percibir por los propios sujetos que las realizan.

Para el establecimiento de los diferentes índices en los tres subconjuntos de actividades (trabajo doméstico en sentido restringido, trabajo de cuidados, y adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia) fue contabilizado el tiempo demandado por cada una de las actividades consignadas por los beneficiarios encuestados como actividad principal. Adicionalmente, se hace referencia a las pocas simultaneidades registradas¹⁶⁶.

En relación al trabajo no remunerado al interior del hogar, surgen de los diarios de actividades dos elementos fundamentales. El primero de ellos -de larga constatación en estudios que privilegian los enfoques de género- se relaciona con la distribución de las tareas y del tiempo asignado, diferenciales por sexo en el trabajo doméstico y familiar en general. De los datos surgidos de los diarios de actividades es posible observar una amplia desigualdad existente en los tres subconjuntos de actividades tanto en lo que respecta a las tasas de participación como a las medias genéricas de tiempo. Si bien la mayor participación femenina es innegable en el trabajo doméstico (en sentido restringido) y en el trabajo de cuidados, ésta se acentúa aún más en las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia.

¹⁶⁶Si bien en los últimos años se llevaron adelante dos Encuestas de Uso del Tiempo (una en la ciudad de Rosario en 2010 y otra a nivel nacional en 2013) no es posible hacer comparaciones con las mismas, fundamentalmente por tres razones: 1.- las poblaciones objetivo son diferentes, 2.- los años de realización difieren y 3.- la clasificaciones de actividades utilizadas en las tres encuestas no son coincidentes.

**Cuadro N° 44: Media de tiempo* genérica y específica del trabajo no remunerado al interior del hogar de las mujeres beneficiarias
(en horas semanales de lunes a viernes)**

Trabajo no remunerado al interior del hogar	Benefic.	Media genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media específica
Trabajo doméstico (en sentido restringido)	107	19,77	100,00	107	19,77
Trabajo de cuidados (no pagados)	107	8,79	87,85	94	10,00
Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia	107	4,01	88,79	95	4,52

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

En este sentido y de forma clara, los comportamientos económicos de las familias exceden las orientaciones del mercado (Pouw, 1998) y se presentan como el resultado de un proceso social complejo que requiere bienes y trabajos, y que está regulado por normas sociales que se han sedimentado a lo largo del tiempo y están connotadas por sus contextos locales (Picchio, 2001).

**Cuadro N° 45: Media de tiempo* genérica y específica del trabajo no remunerado al interior del hogar de los hombres beneficiarios
(en horas semanales de lunes a viernes)**

Trabajo no remunerado al interior del hogar	Benefic.	Media genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media específica
Trabajo doméstico (en sentido restringido)	12	8,45	66,6	8	12,68
Trabajo de cuidados (no pagados)	12	4,54	58,33	7	7,78
Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia	12	1,02	33,33	4	3,06

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

El segundo elemento de análisis se desprende de la tensión creciente entre los recursos distribuidos y disponibles en la familia y los niveles de vida sedimentados en las costumbres, gustos y convenciones sociales, la cual hace pensar que las reestructuraciones en curso en el mercado de trabajo y en los sistemas de bienestar se están traduciendo en un incremento del trabajo no remunerado realizado por las mujeres en los núcleos familiares. La presión sobre el trabajo no remunerado es permanente, ya que a éste le corresponde cubrir el desfase entre las rentas disponibles y las normas

sociales de consumo y, en particular, entre las condiciones laborales y las condiciones de vida (Picchio, 2001).

En adelante nos detendremos en un análisis más detallado de cada uno de los tres subconjuntos.

1.1.1.- Trabajo doméstico (en sentido restringido)

Al interior de este subconjunto es posible observar una amplia variedad de situaciones. Mientras algunas de las actividades básicas que lo componen muestran elevadas tasas de participación y un número importante de horas asignadas, en otras la participación o dedicación a ellas es nula.

Las tareas relacionadas con la preparación de la comida, y en menor medida las relacionadas con la limpieza y orden del hogar y de la ropa, son las actividades que muestran las tasas más altas de participación tanto de las beneficiarias mujeres como de los beneficiarios hombres. Sin embargo y de forma conjunta, es posible observar, en estas mismas actividades, importantísimas desigualdades entre uno y otro sexo, ya que en los tres casos la participación de las mujeres supera a la de los hombres en una franja que va entre los 60 y los 65 puntos porcentuales. En resumidas cuentas, las tasas de participación masculinas más altas se encuentran en las tareas relacionadas con la preparación de la comida y, en menor medida, en las actividades relacionadas con la limpieza y orden del hogar y de la ropa, pero justamente se trata de actividades en las cuales las mujeres alcanzan tasas muy altas de participación superando ampliamente el 80%.

Cuadro N° 46: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con el trabajo doméstico (en sentido restringido) de las mujeres beneficiarias (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total trabajo doméstico	107	19,77	100,0	107	19,77
Alimentación	107	9,42	99,07	106	9,51
Limpieza y orden del hogar	107	4,88	88,79	95	5,5
Limpieza y orden de ropa y calzado	107	3,13	84,11	90	3,72
Coser y tejer	107	0,52	26,17	28	2
Reparación y mant. de la vivienda	107	0,00	0,00	0	0,00
Cuidado de plantas Y mascotas	107	0,35	15,89	17	2,21
Cuidado de la huerta Y animales de granja	107	0,06	2,80	3	2,00
Reparación y mant. de vehículos	107	0,00	0,00	0	0,00
Trabajo doméstico sin especificar	107	1,62	14,02	15	11,57

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

Teniendo en cuenta el tiempo medio específico insumido por estas tres actividades es interesante señalar que en dos de ellas (limpieza y orden del hogar, y limpieza y orden de ropa y calzado) el tiempo invertido por los hombres es mayor que el invertido por las mujeres.

En este sentido, los datos surgidos de los diarios de actividades muestran, en las tareas relacionadas con la preparación de alimentos y en aquellas relacionadas al orden y la limpieza (tanto del hogar como de la ropa), importantes desigualdades relativas a la participación diferencial de los sexos. De esta manera, se corrobora en todas esas actividades cotidianas centrales en la organización del hogar los resultados de una larga tradición de investigaciones. No acontece lo mismo si consideramos el tiempo medio específico asignado a estas actividades. En las dos actividades relacionadas con la limpieza y el orden (de ropa y del hogar), los hombres que se involucran en estas actividades lo hacen por más tiempo que las mujeres.

Cuadro N° 47: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con el trabajo doméstico (en sentido restringido) de los hombres beneficiarios (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total trabajo doméstico	12	8,45	66,66	8	12,68
Alimentación	12	2,46	33,33	4	7,38
Limpieza y orden del hogar	12	2,25	25,00	3	9,00
Limpieza y orden de ropa y calzado	12	1,00	25,00	3	4,00
Coser y tejer	12	0,08	8,33	1	1,00
Reparación y mant. de la vivienda	12	0,00	0,00	0	0,00
Cuidado de plantas Y mascotas	12	0,00	0,00	0	0,00
Cuidado de la huerta Y animales de granja	12	0,00	0,00	0	0,00
Reparación y mant. de vehículos	12	0,08	8,33	1	1,00
Trabajo domestico sin especificar	12	3,04	33,33	4	9,12

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

En tanto, aquellas actividades vinculadas con la autoproducción, como podrían ser las englobadas en coser y tejer, y en cuidado de la huerta y animales de granja, son actividades que presentan una participación del 26,17 % y el 2,80 %, respectivamente, de las beneficiarias mujeres y una nula o escasísima participación de beneficiarios hombres. Según Aguirre (2005), la expansión de la pobreza en las áreas urbanas actualiza el interés por tener presente estas actividades desarrolladas fundamentalmente por las mujeres como forma de contribuir al bienestar de sus familias. Para la autora, un interrogante a responder sería en qué medida algunas actividades domésticas han sido propulsadas fuera del hogar en los últimos años (mercantilizadas) y en qué medida han vuelto a ser “familiarizadas” como estrategia de bajar costos frente a la disminución de los ingresos de los hogares.

En este sentido, una amplia literatura latinoamericana ha puesto en evidencia que los hogares adaptan sus estrategias de vida para hacer frente al desempleo y a la caída de los ingresos familiares a consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas en la región. Así, el aumento de los precios de los bienes de consumo habría incentivado la autoproducción y orientado a los sectores de bajos ingresos hacia los mercados informales, más adaptados a su capacidad de compra. Los datos surgidos de los diarios

de actividades, relacionados con las actividades de autoconsumo y la participación de los beneficiarios en trabajos remunerados informales relacionados con la venta o intercambio de productos ya elaborados o de elaboración doméstica, confluyen en confirmar para nuestro caso de estudio las tendencias más generales señaladas para América Latina.

Esta tendencia constituye el polo opuesto a las transformaciones experimentadas por el trabajo doméstico (en sentido restringido) en los sectores con alto nivel educativo. En estos sectores el trabajo doméstico (en sentido restringido), viene mostrando una paulatina reducción del tiempo asignado producto de una combinación de compra de servicios, desarrollos tecnológicos y nuevos hábitos relacionadas con las comidas que incluye la compra de importantes cantidades de comidas ya elaboradas (Hufton, 1997).

Finalmente, las actividades ocasionales (tales como la reparación y el mantenimiento de vehículos y de la vivienda) presentan una participación nula de las mujeres pero también una participación muy escasa de los hombres. Las actividades relacionadas con el mantenimiento y la reparación de vehículos son las únicas actividades (tanto al interior del subgrupo como considerando al conjunto del trabajo no remunerado al interior del hogar) en las cuales la participación masculina supera a la femenina. Aún cuando es necesario relativizar esta participación por su escaso peso numérico, se trata de una tendencia corroborada por otras investigaciones. Tanto para Ramos Torre (1990b) como para Wainerman (2007) son pocos los hogares en los que los varones no se ocupan de algo o mucho de las pequeñas reparaciones de plomería o electricidad que demanda el funcionamiento de la casa, del mantenimiento de vehículos y de otras tareas que no requieren ser hechas cotidianamente aunque sí precisan de ciertas “técnicas” o “calificaciones” supuestamente más extendidas entre los hombres que entre las mujeres.

1.1.2.- Trabajo específico de cuidados

En este apartado analizaremos todas aquellas actividades de cuidado que son realizadas de manera “honoraria o benéfica” (Batthyány, 2009) por parientes en el marco de la familia. Dentro de este grupo son consignados también los desplazamientos derivados de esas tareas de cuidados.

En términos generales, las tareas específicas de cuidados no remunerados pueden estar dirigidas a adultos mayores, a enfermos y también a niños. Si bien es posible observar en los diarios de actividades de los beneficiarios tareas de cuidados destinadas a estos tres grupos de población, es innegable la supremacía que cobran las tareas de cuidados dirigidas a los niños en la cotidianeidad de los beneficiarios de planes sociales. Los denominados “criterios de elegibilidad de la población objetivo”, es decir los criterios que definían quienes podían convertirse en beneficiarios del PJJHD, actúan reforzando la centralidad de estas actividades ya que uno de los requisitos era que el o la jefe/a de hogar desocupado/a tuviera al menos un hijo menor de 18 años o discapacitados de cualquier edad.

Desde la perspectiva de Ramos Torre (1990b), el cuidado de la prole constituye una actividad social de primera importancia dada su trascendencia biológica y cultural. El “tiempo parental”, como lo denominaron Barrère-Maurisson, Rivier y Marchand (2001), agrupa todas las actividades efectuadas por los padres con o para sus hijos. Se trata, por una parte, del tiempo dedicado a ocuparse de los hijos: vestirlos y bañarlos, darles de comer, jugar con ellos, pasar con ellos tiempo fuera de casa, llevarlos a la escuela, acompañarlos en sus actividades extraescolares, ayudarlos con sus deberes escolares; por otra parte, se trata también del tiempo dedicado a los adolescentes: hablar, mirar juntos un programa de televisión, etc. En este sentido, sería posible diferenciar entre estas actividades a aquellas más vinculadas con la sociabilidad, con el trabajo doméstico en sentido restringido, con las actividades de seguimiento escolar y con los desplazamientos necesarios para estas tareas¹⁶⁷. Al reagrupar esta amplia gama de actividades de características tan diferentes es posible observar que el trabajo específico de cuidados (sobre todo en el caso de los niños) aúna tanto componentes instrumentales como componentes expresivos si, como ocurre típicamente, los que lo realizan son el padre y la madre que encuentran una gratificación inmediata y no condicional en su práctica (Ramos Torre, 1990b).

¹⁶⁷ Barrère-Maurisson, Rivier y Marchand (2001) denominan a estas últimas “tiempo parental taxi”.

Cuadro N° 48: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con el trabajo específico de cuidados de las mujeres beneficiarias (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total trabajo de cuidados	107	8,79	87,85	94	10,00
A personas enfermas y adultos mayores dependientes	107	0,16	5,61	6	2,83
A niños	107	4,94	80,37	86	6,15
Desplazamientos necesarios para las tareas de cuidados	107	3,66	71,96	77	5,08

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

A partir de los diarios de actividades puede observarse la permanencia de un patrón tradicional de comportamiento en relación a aquellas actividades vinculadas con el cuidado de los niños. Las tasas de participación de los beneficiarios en las actividades relativas al cuidado de los niños muestran una de las mayores distancias dentro de las denominadas actividades básicas, esa diferencia supera los 63 puntos porcentuales. La media de tiempo específica destinada por las mujeres y por los hombres beneficiarios actúa confirmando la permanencia de este patrón. Mientras que las beneficiarias que declaran dedicar tiempo a tareas de cuidados de sus hijos lo hacen por más de 6 horas semanales (de lunes a viernes), en el caso de los hombres el tiempo dedicado cae a poco más de 4 horas.

Asimismo, es posible observar la recurrencia a inversiones de tiempo de otras mujeres (de la familia generalmente) como instancias de ayuda y colaboración en la crianza de los hijos. Es el caso de tres beneficiarias que manifiestan colaborar en el cuidado de sus nietos y de una beneficiaria que manifiesta (a través de las actividades registradas) desplazamientos constantes a la casa de su madre que la ayuda en el cuidado de su hija.

Cuadro N° 49: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con el trabajo específico de cuidados de los hombres beneficiarios (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total trabajo de cuidados	12	4,54	58,33	7	7,78
A personas enfermas y adultos mayores dependientes	12	1,75	16,66	2	10,5
A niños	12	0,71	16,66	2	4,25
Desplazamientos necesarios para las tareas de cuidados	12	2,08	50,00	6	4,17

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

En el caso de los desplazamientos necesarios para las tareas de cuidados, la mayoría de ellos se vinculan con el cuidado de los niños y refieren a los traslados a la escuela, a las actividades de apoyo escolar (que los niños generalmente realizan en centros comunitarios del barrio), y a los comedores comunitarios, traslados para la búsqueda de turnos y/o controles médicos y traslados a actividades deportivas, como por ejemplo fútbol. En estas actividades las distancias entre las tasas de participación de las mujeres y de los hombres beneficiarios se acortan superando apenas los 21 puntos porcentuales. De igual manera se acortan las distancias en las medias de tiempo específicas, siendo en el caso de las beneficiarias de 5,08 horas y en el caso de los hombres beneficiarios de 4,17 horas semanales (de lunes a viernes). En cuanto al tipo de traslados, los hombres generalmente participan en aquellos hacia o desde la escuela y las prácticas deportivas.

La situación descripta se distancia de forma clara de la tendencia -observada por serie de investigaciones sobre los sectores medios urbanos- a una paternidad más activa, afectiva y conciente, verificable a partir de la construcción de la paternidad como un proyecto de “a dos”. Este tipo de prácticas -que puede ser pensada, en alguna medida, como una aproximación masculina de la experiencia femenina- asume la forma de un nuevo modelo familiar sustentado en la igualdad y en los cambios, y fundamentalmente, contrastante con un modelo familiar tradicional (Delfino, 1999).

En relación al trabajo de cuidados a personas enfermas o adultos mayores es la única actividad de la que participando tanto hombres como mujeres, la mayor tasa de

participación es la masculina¹⁶⁸. La media de tiempo específica de la actividad también es mayor para el caso de los hombres llegando a superar las 10 horas semanales (de lunes a viernes).

De los diarios de actividades de los beneficiarios del PJJHD se desprende que, en relación al trabajo específico de cuidados no remunerados, el lugar central está ocupado por los cuidados a los niños y adolescentes, y por los desplazamientos derivados de esas tareas de cuidados¹⁶⁹. Esta situación es clara en el caso de las mujeres beneficiarias. Los hombres beneficiarios, en cambio, muestran una participación equitativa en el cuidado de los niños y adolescentes, y en el cuidado de los enfermos y adultos dependientes; sin embargo, las asignaciones de tiempo son mayores en este último caso.

En este tipo de actividades es fundamental considerar que los contactos entre familiares que residen en distintos hogares no sólo son afectivos. En muchos casos conllevan fuertes transferencias de dinero y/o de trabajo no remunerado que hace posible la subsistencia de los hogares dependientes. Las transferencias las reciben sobre todo los hogares con personas ancianas, enfermas o con niños pequeños. Aunque no se moneticen, las transferencias de trabajo tienen una importancia mayor para el bienestar colectivo que las transferencias familiares de patrimonio y rentas (Durán, 2005a)

1.1.3.- Adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia

Este subgrupo no sólo contempla todas aquellas actividades cuya realización permite la obtención de bienes y servicios externos imprescindibles para el consumo privado del grupo doméstico, sino también todas aquellas gestiones relacionadas con la familia y el hogar, tales como la búsqueda de tickets de alimentación¹⁷⁰, gestiones relacionadas con la procura de turnos médicos en centros de salud públicos, pago de impuestos, etc. Estas actividades, también denominadas “articuladoras del bienestar”, “obligatorias” y/o “servicio de apoyo”, fueron pensadas como formas de articulación, de

¹⁶⁸ Como señalamos anteriormente la actividad básica que también mostraba una mayor participación masculina era de la “reparación y mantenimiento de vehículos” dentro del subgrupo “trabajo doméstico (en sentido restringido)”. Sin embargo, en esta actividad la participación femenina era nula.

¹⁶⁹ Esta situación contrasta con las investigaciones de uso del tiempo desarrollada en las últimas décadas en Europa. Allí, el creciente porcentaje de personas mayores plantea cuestiones relativas a las fuentes de cuidados, tanto en tiempo como en dinero (Hufton, 1997).

¹⁷⁰ El gobierno de la provincia de Santa Fe reemplazó en 2005 las prestaciones alimentarias de los programas “Santa Fe Vale” y “Nutrir Más”, realizadas hasta ese momento a través de las tradicionales cajas alimentarias, por un sistema de tickets o vales que permitía a los beneficiarios canjearlos por comestibles en los comercios adheridos.

enlace entre los ámbitos domésticos y públicos (Picchio, 2001) o como formas de vincular la producción del bienestar, que tiene lugar en las familias, con las prácticas de asignación de recursos mercantiles y públicos (Martínez Franzoni, 2005). Para Martínez Franzoni (2005), estas actividades pueden ser clasificadas en delegables¹⁷¹ y no delegables; entre las primeras se podrían incluir el pago de servicios, trámites y compras, y entre las segundas quedarían comprendidas la planificación y organización, el control de las finanzas y la distribución de tareas del hogar.

Este conjunto de actividades es el que menor tiempo insume en horas semanales (de lunes a viernes) en relación con los otros dos subconjuntos de actividades (trabajo doméstico en sentido restringido y trabajo específico de cuidados). Esta característica se puede observar tanto para el caso de las mujeres como para el caso de los hombres. Tal como señaláramos, las mujeres beneficiarias dedican 19,77 horas semanales (de lunes a viernes) al trabajo doméstico en sentido restringido, 8,79 horas al trabajo de cuidados y sólo 4,01 horas a la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia. El menor tiempo invertido en este tipo de actividades también puede ser observado en el caso de los hombres beneficiarios, quienes les dedican 8,45 horas, 4,45 horas y 1,02 horas, respectivamente.

En términos globales y agregados surgen otros dos elementos de análisis. El primero de ellos a ser señalado es que en las actividades vinculadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia se producen las menores tasas de participación masculinas. Sólo el 33,33% de los hombres beneficiarios encuestados han dedicado tiempo a este tipo de actividades durante las semanas de referencia. Si a este dato lo ponemos en relación con las tasas de participación femenina surge un segundo elemento de análisis. La “crónica desigualdad que estructura el trabajo doméstico y familiar en su conjunto” (Ramos Torre, 1990b: 128) aquí se ve reforzada. Las actividades vinculadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia son las que muestran una mayor distancia entre uno y otro sexo en lo relativo a sus tasas de participación. Esa distancia supera los 55 puntos porcentuales.

¹⁷¹ La delegación supone la interrupción de un servicio para trasladarlo a otra persona o grupo.

Cuadro N° 50: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones de las mujeres beneficiarias (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total adquisición bienes y servicios y gestiones	107	4,01	88,79	95	4,52
Compras corrientes	107	2,71	85,05	91	3,19
Otras compras	107	0,13	6,54	7	1,93
Gestiones	107	0,76	42,99	46	1,77
Desplazamiento por gestiones	107	0,41	25,33	27	1,61

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

Desagregando el subconjunto en sus actividades básicas, es posible señalar que son las compras corrientes las que alcanzan las mayores tasas de participación y, consecuentemente, ocupan una mayor cantidad de tiempo tanto para las mujeres como para los hombres¹⁷² beneficiarios del PJJHD encuestados, aun cuando se mantiene una amplia diferencia en la participación de unos y otros. Los hombres y las mujeres que participan de estas adquisiciones lo hacen con tiempos muy similares (3,19 horas en el período de lunes a viernes para las mujeres y 2,93 horas en el mismo período para los hombres beneficiarios)¹⁷³.

Es interesante observar que este tipo de comportamiento presenta algunos elementos comunes pero también otros completamente opuestos al caso español analizado por Ramos Torre (1990b). Allí era posible observar el estrechamiento de las desigualdades entre varones y mujeres en sus respectivas tasas de participación y sus medias de tiempo específico.

Para Ramos Torre (1990b) esto no se trataría del funcionamiento de un cierto principio de igualación de situaciones sino del hecho que estas actividades tienen ciertas

¹⁷² La tasa de participación masculina en las compras corrientes constituye una de las más altas tasas de participación de los hombres considerando todas las actividades básicas incluidas en los tres subconjuntos. Sólo es igualada por la participación en las actividades relacionadas con la alimentación y superada por la participación en los desplazamientos relacionados con las tareas de cuidados. De forma similar, del módulo básico sobre “Uso del tiempo y trabajo no remunerado”, que la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay incluyó en septiembre de 2007, surgía que la mayor tasa de participación de los hombres en el trabajo doméstico y familiar se encontraba en las compras de alimentos y bebidas (INE, UNIFEM, INMUJERES, UDELAR, 2008).

¹⁷³ Entre las mujeres se evidencia una alta dispersión. Lo más frecuente (19,8% de las beneficiarias) es una dedicación de 2,0 horas. Cuatro beneficiarias (4,4%) son las que menos dedican (0,5 horas) y sólo una beneficiaria es la que dedica el máximo de tiempo a las compras corrientes (9,5 horas).

características que generan, con independencia de condicionamientos sexistas, este relativo estrechamiento de diferencias. Estas características distintivas están dadas por su periodicidad y rigidez temporal. Así, las compras -incluso las compras corrientes- no precisan realizarse con una periodicidad diaria, mientras que las actividades domésticas fundamentales sí lo requieren. Esto permite que las tasas de participación diaria de los sujetos directamente implicados en ellas se reduzcan de forma considerable. Consecuentemente, las mujeres, que son las que las realizan, alcanzan tasas de participación inferiores a las propias de trabajo doméstico, estrechando sus diferencias con los varones. Por otro lado, los condicionamientos espaciales a los que las actividades de compras están sometidas determinan un mínimo de tiempo muy rígido para la realización de la tarea. Ir de compras supone un desplazamiento fuera del hogar e invertir un mínimo innegociable de tiempo; contrariamente, en las actividades domésticas la fluctuación del tiempo para realizarlas es mucho mayor. Además, una vez invertido ese mínimo de tiempo imprescindible, las actividades de compra no precisan una alta inversión de tiempo diario. La conjunción de ambos factores define sus características de rigidez temporal: aquellos que las realizan se mueven en franjas de tiempo muy delimitadas. Esto explica que los varones y las mujeres inviertan, al realizarlas, cantidades muy similares de tiempo. Por esta razón, la igualdad que aparece en este campo es resultado de su específica rigidez temporal.

El comportamiento de los beneficiarios del PJJHD en relación a la adquisición de bienes corrientes se aproxima, justamente, a la situación española descrita por Ramos Torre (1990b) ya que las medias específicas de tiempo son similares para los hombres y las mujeres. La rigidez temporal característica de este tipo de actividades también puede ser aplicada para nuestro caso de análisis, constituyéndose así en el elemento central para explicar este dato. Sin embargo, no parece ocurrir lo mismo con la otra característica que Ramos Torre (1990b) le adjudica a las compras corrientes: la periodicidad. Esta característica constituía en el caso español la lógica explicativa fundamental que permitía dar cuenta del estrechamiento de las desigualdades entre varones y mujeres en las tasas de participación en las actividades relacionadas con la adquisición de bienes.

Las compras corrientes de los beneficiarios encuestados lejos de ser periódicas se caracterizan por ser diarias, al menudeo y en diferentes comercios, incluso en muchos casos se realizan dos veces al día. Sin lugar a dudas, los magros ingresos obtenidos a

través de las asignaciones monetarias estatales y el tipo de trabajo remunerado realizado por los beneficiarios que conlleva ingresos irregulares no posibilitan la existencia de un día específico semanal destinado a las adquisiciones. La incorporación de este tipo de hábitos relacionados con las compras en los sectores medios y altos viene siendo señalado como uno de los elementos que permiten la reducción del tiempo asignado a este tipo de actividades (Hufton, 1997) y el estrechamiento de las desigualdades entre varones y mujeres en las tasas de participación (Ramos Torre, 1990b). Contrariamente, para los beneficiarios del PJJDH, la periodicidad diaria de las compras corrientes asimila estas actividades a aquellas otras, propias del trabajo doméstico (en sentido restringido) que también requieren de una periodicidad diaria.

Cuadro N° 51: Media de tiempo* genérica y específica de las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones de los hombres beneficiarios (en horas semanales de lunes a viernes)

	Benefic.	Media Genérica	Tasa de Participación	Benefic.	Media Específica
Total adquisición bienes y servicios y gestiones	12	1,02	33,33	4	3,06
Compras corrientes	12	0,98	33,33	4	2,93
Otras compras	12	0,00	0,00	0	0,00
Gestiones	12	0,04	8,33	1	0,50
Desplazamiento por gestiones	12	0,00	0,00	0	0,00

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

* En horas y centésimas de hora

En relación con las otras actividades básicas que conforman el subgrupo, es posible observar que los hombres prácticamente sólo participan de las compras corrientes, ya que muestran una participación casi insignificante en la realización de gestiones y una participación nula en las actividades relacionadas con la compras no corrientes (en decir, con otras compras) y en los desplazamientos necesarios para la realización de las gestiones.

La insignificante participación masculina en las gestiones exteriores del grupo familiar llama en un principio la atención. Una serie de investigaciones (INE, UNIFEM, INMUJERES, UDELAR, 2008; Ramos Torre, 1990b) habían señalado la participación igualitaria de hombres y mujeres o incluso la mayor participación masculina en este tipo de actividades. Esta diferencia puede ser comprendida por el tipo de gestiones mayoritariamente realizado por las y los beneficiarios del PJJHD, las cuales están

fundamentalmente relacionadas con la procura de turnos médicos en los centros de salud públicos (actividad íntimamente ligada a las tareas de cuidado) y, en mucho menor medida, por pagos de impuesto y búsquedas de tickets o vales de alimentación. Es decir, en las tareas de gestión el peso mayoritario está constituido por gestiones relacionadas con los cuidados.

Si tenemos en cuenta que los desplazamientos que suponen las gestiones son contabilizados en una categoría aparte, es factible suponer que buena parte del tiempo invertido en estas actividades está relacionado con las esperas. Desde la óptica de Schwartz (1992), esperar es una señal reveladora de las relaciones de poder en los escenarios de interacción. La falta de coordinación de los horarios sociales lleva a que alguien deba esperar; quien espera es la persona que tiene relativamente poco poder y cuyo tiempo puede ser malgastado por los más poderosos. Para el autor, el análisis de las decisiones relativas a la espera es una manera útil de llegar a comprender el proceso mediante el cual se resuelven las incoherencias de los horarios sociales en la vida diaria. En una dirección similar Lewis y Weiget (1992) señalan que las esperas son una de las formas en que se resuelven los desajustes y los conflictos entre los diferentes tipos de tiempo social que operan en los distintos niveles de la estructura social.

En este sentido, la espera constituye una forma específica de relacionamiento del Estado con los sectores populares. A través de ella se crea y se recrea la cultura de la espera y de la sumisión; que no es otra cosa que decir que a través de ella se crea y se recrea el proceso de dominación. La espera es el único proceso que puede posibilitar participar en la distribución del bienestar social (Auyero, 2013).

1.2.- El trabajo voluntario

El trabajo voluntario es aquel tipo de trabajo que se presta a la comunidad con un carácter altruista o solidario, cuyos beneficiarios no son familiares próximos y que no puede retribuirse (Benería, 2005). El mismo es desarrollado a través de una institución o de una organización pública o privada; es decir, es un tipo de trabajo que debe enmarcarse en un programa ordenado. Al igual que el trabajo doméstico, supone aportaciones en tiempo que comprenden una amplia gama de actividades (Aguirre, 2005, 2006; Benería, 2005).

Los elementos anteriormente señalados permiten caracterizar el trabajo voluntario, fundamentalmente, a partir de aquellos elementos que lo distinguen del

trabajo doméstico en sentido amplio. Sin embargo, la forma específica que ha adoptado este tipo de trabajo en América Latina, y en particular en Argentina, desdibuja esas diferencias, emparentándola con el trabajo no remunerado realizado en el interior del hogar. En América Latina, la mayor parte del trabajo voluntario se efectúa en un barrio o en una comunidad, y entre los beneficiarios de ese trabajo se encuentran a menudo la familia más cercana y los vecinos del barrio¹⁷⁴. Asimismo, aquí se plantea la problemática de hasta qué punto en los sectores populares se elige libremente participar del trabajo voluntario dadas las necesidades apremiantes de supervivencia y la incapacidad de los hogares de satisfacer por sí solos las de sus componentes (Benería, 2005).

En la ciudad de Rosario, al igual que en buena parte de Argentina, la participación de los sectores populares -fundamentalmente de las mujeres- en el denominado “trabajo voluntario” se ha canalizado históricamente a través de organizaciones de base territorial y ha estado relacionado con las estrategias de supervivencia de los hogares de estos sectores.

Si, tal como señalamos, tenemos en cuenta que las actividades de contraprestación realizadas por los beneficiarios del PJJHD adoptaron características similares a las realizadas en el marco del trabajo voluntario desempeñado por los sectores populares, sería posible señalar a manera de hipótesis que la introducción de los PTMC que incorporan elementos del *workfare* reconfigura el trabajo voluntario, llevándolo incluso a su virtual extinción. Si bien en ninguno de los diarios de actividades de los beneficiarios encuestados fue posible observar tiempo asignado a actividades relativas al trabajo voluntario, esto no significa plantear que las actividades realizadas hayan desaparecido sino que continúan realizándose, sólo que ahora se enmarcan dentro de las actividades de contraprestación.

Es factible suponer que no todos los beneficiarios del PJJHD encuestados hayan participado con anterioridad a la implementación del Programa de actividades ligadas a la subsistencia material y realizadas en el marco de organizaciones de base territorial, pero también es bien probable que muchos realizaran con anterioridad estas actividades -formando parte de un trabajo de tipo voluntario- y que con posterioridad a la

¹⁷⁴ De hecho en algunos diarios de actividades pudo constatarse esta característica en la medida en que algunas beneficiarias manifestaban para la hora de la cena “calentar la comida que traía del comedor” en el cual realizaban las actividades de contraprestación.

implementación del Programa hayan continuado realizándolas sólo que ahora como parte de su retribución por la percepción del subsidio recibido.

2.- Las simultaneidades

Aun cuando el instrumento diseñado para la recolección de la información relacionada con las actividades cotidianas de los beneficiarios del PJJHD contenía un espacio específico para aquellas actividades secundarias que se estaban realizando de forma simultánea a la actividad principal fueron muy pocos los beneficiarios encuestados que realizaron este tipo de registros. En todos los casos, esas simultaneidades fueron registradas por beneficiarias mujeres.

De las pocas actividades consignadas por los beneficiarios que se realizan en forma simultánea se pueden reconocer tres grandes grupos. Un primer grupo estaría conformado por lo que podría denominarse simultaneidades “típicas”, las cuales refieren fundamentalmente a la realización de alguna actividad relacionada con el trabajo doméstico o familiar a la vez que se escucha música o radio, se mira televisión y/o se mantiene una conversación con alguna persona. Este tipo de simultaneidades es el que menor número de registros presentó entre los beneficiarios encuestados. Es bien probable que esta falta de registro esté relacionada con no percibir estas actividades secundarias como “actividades” y no al hecho de que las mismas no se desarrollen de forma habitual.

El segundo grupo está relacionado con la realización de forma simultánea de actividades que forman parte del trabajo doméstico o familiar. Ejemplos de esto serían realizar compras corrientes cuando producen desplazamientos relacionados con las tareas de cuidados, limpiar mientras se lava ropa utilizando máquinas de lavado o también asistir a los niños en sus tareas escolares mientras se cuida del proceso de cocción de los alimentos. Tal como hemos señalado la acumulación de tareas realizadas de forma simultánea y la variabilidad de las mismas constituyen una de las características más habituales del trabajo no remunerado realizado en el hogar.

Finalmente el tercer grupo de simultaneidades registradas se relaciona con la realización de actividades vinculadas al trabajo remunerado a la vez que se desarrollan tareas de cuidados o tareas domésticas. Ejemplos de este tipo de simultaneidades son las beneficiarias que declaran haber atendido clientes a la vez que se lava ropa, haber hecho compras corrientes a la vez que se visitan clientes o armar cajas para la venta a la vez

que se cuida de familiares. Sin lugar a dudas, el tipo de trabajo remunerado realizado por los beneficiarios y las características con las que este trabajo se desenvuelve son los que permiten la existencia de este tercer grupo de simultaneidades registradas por los beneficiarios encuestados.

3.- Necesidades materiales, Estado y desigualdad

Considerar al trabajo, así como también sus lógicas y sus temporalidades, desde la perspectiva de las relaciones entre la producción y la reproducción social posibilita no sólo una visión más integral sino también más compleja del ordenamiento temporal de las prácticas cotidianas vinculadas con la sobrevivencia material de los beneficiarios del PJJHD.

En este sentido, los diarios de actividades de los beneficiarios encuestados permiten un acercamiento, una “referencia estructurante” -de la que hablaba Szalai-, a la vida cotidiana. En la misma se encuentra -en un contexto de reestructuración del aparato del Estado- el núcleo de la articulación entre vida laboral y vida familiar, entre las necesidades productivas y reproductivas de la sociedad (Poveda Rosa, 2006). En este sentido, las proporciones del involucramiento y/o comprometimiento de los beneficiarios con aquellas actividades vinculadas con la sobrevivencia material permiten observar, por un lado, el lugar que ocupa el trabajo en los esquemas temporales de los beneficiarios del PJJHD y, derivado de esta cuestión, las transformaciones o la persistencia de las disposiciones relacionadas con la definición social y a la interiorización de los roles de género y; por otro lado, los impactos que ha tenido sobre la vida cotidiana de los sectores populares la reingeniería del Estado.

En los beneficiarios del PJJHD se conjuga la particular situación de haber sido reconocidos socialmente como desocupados por las instituciones especializadas de acción social; sin embargo “la inadecuación insigne de la ayuda pública” -aun para la mera supervivencia- empuja a los beneficiarios a buscar actividades no denunciabiles que generen dinero (Wacquant, 2001).

Entre las beneficiarias fue posible observar que una alta proporción de ellas provenían de la inactividad¹⁷⁵. En este sentido, la incorporación de las mujeres inactivas

¹⁷⁵ Este dato no surge de las encuestas de uso del tiempo realizadas sino de las conversaciones informales mantenidas con los beneficiarios.

al Programa se presenta como una práctica enmarcada en una estrategia familiar de obtención de un ingreso complementario o adicional. Este ingreso, más allá de la escasa significación económica, constituye en muchos casos el único ingreso monetario regular de las familias. Sin lugar a dudas, la falta de oportunidades laborales, los mecanismos de segregación ocupacional y el desempeño en el ámbito del trabajo no remunerado en el hogar son elementos que confluyen en dar cuenta de esta situación.

En tanto, entre aquellas beneficiarias, que además de realizar tareas de contraprestación tienen un trabajo remunerado, predominan las beneficiarias solteras, divorciadas o separadas y viudas; es decir, prevalecen aquellas que teniendo uno o más hijos, no poseen cónyuge. Así, los ingresos percibidos por las beneficiarias a través del plan social y de los trabajos informales se constituyen en los soportes económicos básicos de estos hogares monoparentales de jefa mujer.

En el caso de los beneficiarios hombres es posible observar tasas de participación mayores en el mercado de trabajo que las mujeres beneficiarias. Si como señalábamos anteriormente la tasa de actividad de las beneficiarias encuestadas apenas llega a superar el 30%, en el caso de los hombres entrevistados la misma supera el 78%. La situación de coexistencia de la inserción en el mercado de trabajo -a través de la realización de “changas” o búsqueda de empleo- con la participación en el PJJHD, estaría indicando que la inclusión en el PJJHD es esencialmente un complemento de los ingresos, dada la nula o precaria inserción laboral que estos hombres pueden lograr en el mercado de trabajo.

De esta diversidad de situaciones se desprenden una serie de elementos de análisis. En primer lugar, y si bien nuestra exploración refiere sólo al uso del tiempo en los beneficiarios del PJJHD y no contempla las prácticas de sus familias, es posible señalar la persistencia de las disposiciones relacionadas a la definición social y a la interiorización de los roles de género. De los datos relativos a la inserción laboral de los beneficiarios surge la persistencia del modelo tradicional que asigna las funciones productivas a los hombres y las reproductoras a las mujeres. Desde la mirada de Poveda Rosa (2006) todo indica que en muchos casos, incluso cuando la situación de desocupado cuestiona la identidad de “mantenedor principal”, la división tradicional de roles sexuales resiste.

Las beneficiarias, que a la vez que realizan las actividades de contraprestación poseen algún trabajo remunerado, lejos de contradecir esta lógica la refuerzan, pues se

trata fundamentalmente de jefas de hogares monoparentales y, en términos generales, sus trabajos remunerados pueden ser englobados en la categoría de trabajos “típicamente femeninos”. En este sentido, es posible señalar la existencia de un patrón “tradicional” de inserción de la mujer en el mercado de trabajo o de un patrón donde no es posible ver con fuerza las recientes transformaciones o tendencias del mercado de trabajo argentino.

Un segundo elemento de análisis, profundamente relacionado con el anterior, señala la centralidad de la familia y del espacio doméstico en las prácticas de los beneficiarios, aunque de manera mucho más profunda en las beneficiarias mujeres. En este sentido, y en una dirección similar a los hallazgos de investigaciones que han tenido como objeto de estudio el uso del tiempo en desocupados españoles, la familia se presenta como una opción ante la falta o la inestabilidad del trabajo y la disminución o ausencia de algunos servicios estatales. En este marco, las transferencias intergeneracionales (fundamentalmente de servicios) juegan un rol central, y actúan demandando fuertes inversiones en términos de tiempo. Tal como señala Poveda Rosa (2006), la familia juega un papel primordial en las vivencias de los desocupados no sólo por cuestiones económicas. El género marca diferencias muy significativas en las vivencias del espacio doméstico.

De los datos surgen algunas diferencias en la temporalidad de los hombres y las mujeres beneficiarias, sin embargo esas diferencias no llegan a ser tan profundas y marcadas como las descriptas en otras investigaciones (Lazarsfel, Jahoda y Zeisel, 1996; Merlinsky, 2002; Poveda Rosa, 2006).

Entre las beneficiarias, el trabajo no remunerado realizado en el hogar y, en menor medida, el “tiempo impuesto” (Demaziere, 2006) por las actividades de contraprestación llenan la jornada. Tal como ya fue señalado, la escasez e insuficiencia de los recursos supone la necesidad de realizar mayores aportes en términos de tiempo como forma de suplir los bienes y/o servicios que no pueden ser adquiridos en el mercado o no son provistos por el Estado. En este sentido, el día tiene muchos puntos de referencia, con obligaciones y funciones regularmente establecidas. En algunos casos, a estas actividades es necesario sumarles las horas asignadas al trabajo remunerado. Las investigaciones de Demazière (2005, 2006) también daban cuenta de la problemática articulación de los diferentes tiempos sociales en la vida cotidiana de las

poblaciones asistidas que se encontraban inmersas en una serie de prescripciones impuestas por las políticas regulatorias del desempleo.

En el caso de los hombres beneficiarios, la actividad que mayor tiempo insume es el trabajo remunerado, seguido por las actividades de contraprestación y, finalmente, el trabajo no remunerado al interior del hogar. Sin embargo, es necesario aquí hacer dos consideraciones. La primera de ellas es que la actividad que mayor tiempo insume, esto es el trabajo remunerado, se caracteriza por ser profundamente irregular. Así, aun cuando el trabajo remunerado se convierta -por momentos- en la actividad que más tiempo demanda, su carácter irregular desdibuja aquellas prácticas habituales que se constituyen en referentes centrales de la organización individual; perdiéndose, en parte, un conjunto de sujeciones que definen una organización coherente del tiempo. De esta manera, el trabajo remunerado pierde su capacidad de construir una temporalidad cíclica, caracterizada por la repetición y la regularidad.

La segunda consideración es que, en buena medida, las actividades relacionadas con el trabajo no remunerado al interior del hogar realizadas por los hombres se constituyen en tareas de “ayuda” o “apoyo” a las desempeñadas por las mujeres; consecuentemente, la esfera doméstica no llega a constituir un eje central a partir del cual organizar la temporalidad.

Estos dos elementos permitirían dar cuenta en buena medida de la existencia de grandes espacios en blanco en los diarios de actividades de los hombres. Sin embargo, esta situación está lejos de aproximarse a las descripciones realizadas por Lazarsfel, Jahoda y Zeisel (1996) sobre la desocupación que recibían un seguro de desempleo en la década del 30.

Del informe de Marienthal se desprendía que, en el caso de los hombres, dominaba el “no hacer nada” como forma de ocupación. Para los autores los desocupados asistidos por el estado de esa pequeña comunidad sólo recordaban un número limitado de cosas que pasaban. Todo aquel tiempo que transcurría entre los tres momentos fijos de levantarse, comer y acostarse no era algo que los desocupados no podían comunicar en qué se empleaba. Ese sería el tiempo en el que los desocupados pasaban sin realizar ninguna actividad concreta. En este marco, la vuelta parcial a la economía de subsistencia proporcionaba a los desocupados una serie de actividades que seguían teniendo sentido, tales como cuidar la huerta, recoger leña y criar conejos. La presencia de espacios vacíos en los diarios de actividades ejemplificaba, para Lazarsfel,

Jahoda y Zeisel (1996), la ausencia de una ocupación con sentido. Esta situación daba cuenta de las manifestaciones en la vida cotidiana de la ausencia de estructura temporal que conllevaba el deslizamiento lento de una vida reglamentada a una existencia vacía y sin coerciones.

Las diferencias entre los hallazgos de nuestra investigación y de otras investigaciones que han tenido como objeto de análisis la temporalidad de los desocupados asistidos por el Estado podrían ser explicadas por las características particulares de los programas o políticas en los cuales se enmarca la intervención del Estado. En este caso específico, el análisis se centró en la incidencia que un tipo de programa específico -los PTMC que incorporan elementos del *workfare*- tienen en moldear las temporalidades -mediadas a través de la noción de uso del tiempo- de los beneficiarios de esos programas. Tal como hemos expuesto, este tipo de programas inciden en el cotidiano de los beneficiarios tanto en términos laborales como en términos temporales ya que los beneficiarios deben retribuir con diferentes actividades por el subsidio recibido y además -dada la escasa significación económica del subsidio- complementan sus ingresos con una variada gama de actividades informales. Adicionalmente, el hecho que una gran parte de las beneficiarias no realicen ningún tipo de actividad remunerada permite inferir que en alguna medida un grupo de ellas provendrían de la inactividad¹⁷⁶.

De forma clara, y tal como señala Gautié (2004), las transformaciones económicas y sociodemográficas (a las que sería necesario incorporarles las transformaciones en el aparato del Estado) implicaron, por un lado, la multiplicación de las transiciones (entre desempleo-trabajo remunerado-inactividad) para las categorías más frágiles y, por otro, conllevaban una nueva configuración de los riesgos y las desigualdades. En paralelo al incremento de los riesgos de origen económico, han aumentado también los riesgos vinculados a los accidentes del ciclo de la vida privada y han aparecido nuevos riesgos como la exclusión o la dependencia.

¹⁷⁶ Este hecho fue repetidamente constatado en investigaciones y en evaluaciones realizadas sobre el PJJHD. Asimismo, y según datos de la EPH, más del 30% de quienes estaban ocupados a través de un plan de empleo en octubre de 2002 se encontraban inactivos en mayo de ese mismo año; pero mientras que entre las mujeres ese porcentaje ascendía a 40% se reducía apenas al 7,9% en el caso de los varones. Así, del total de beneficiarios provenientes de la inactividad, el 92% eran mujeres y el 8% varones (Rodríguez Enríquez y Reyes 2006).

Consideraciones finales

Tanto la tradición marxista como la tradición clásica de la sociedad burguesa comparten el punto de vista de que el trabajo es el hecho social principal en la sociedad moderna. Ambas tradiciones atribuyen al trabajo una posición clave como principio organizador de las dinámicas internas de la estructura social. En este sentido, la sociedad moderna y su dinámica principal son concebidas como una “sociedad del trabajo”.

A diferencia de órdenes sociales anteriores, la Modernidad estatuye un sistema central de clasificaciones de individuos y actividades claramente distinto. A partir de esta nueva época el trabajo va a convertirse en la categoría central entre las actividades y los trabajadores en el grupo social central de los miembros de la sociedad (Prieto, 2000). Tal como señala Castel (1997), la construcción de esta sociedad fue ante todo la respuesta política a la cuestión social que arrastraban las sociedades europeas desde fines del siglo XVI y que no era posible reabsorber dentro de las estructuras de funcionamiento del Antiguo Régimen. El aumento del vagabundeo y la exacerbación del pauperismo por el largo período de dos o tres siglos fueron los elementos que impusieron (a través del temor) la necesidad de un nuevo orden.

De esta manera, la naciente sociedad liberal supone un proyecto de orden social centrado en el trabajo. Separado de las formas de asociación familiares y tradicionales, y destituido de protección política, el trabajo asalariado fue ligado a la organización capitalista y a la división del trabajo, así como a los procesos de pauperización, alienación, racionalización y a las formas organizadas y no organizadas de resistencia (económica, política y cultural) inherentes a esos procesos (Offe, 1995).

Dos cuestiones centrales se desprenden de este proceso. La primera de ellas nos lleva a interrogarnos sobre la relación establecida en las teorizaciones -tanto marxistas como burguesas- entre la noción de trabajo y la categoría durkhemiana de hecho social. La segunda fuerza a una explicitación central: ¿qué trabajo es ese; es decir, qué tipo particular de actividad fue reconocido en ese momento histórico como trabajo?

Dentro de la noción de hecho social sólo es posible comprender un grupo determinado de fenómenos. Estos son pasibles de ser reconocidos por el poder de coerción externa que ejercen o que son susceptibles de ejercer sobre los individuos. La presencia de ese poder se reconoce en la

existencia de alguna sanción o en la resistencia que ese hecho opone a toda empresa que tienda a violarlo. Considerar al trabajo como un hecho social supone, entonces, pensarlo como aquel orden de hechos que presenta estas características especiales.

Sin embargo no es cualquier tipo de trabajo el que ha ocupado este lugar en el proyecto de la Modernidad. El trabajo que ha ocupado el lugar de actividad central creadora del vínculo social en el proyecto liberal es el trabajo inscripto en la economía de mercado. Es decir, sólo aquellas actividades que se realizan en el espacio público de la economía de mercado y que, por consiguiente, se realizan a cambio de una retribución monetaria son las contenidas en la idea de trabajo forjada a partir de la sociedad industrial.

Desde la perspectiva de Polanyi (2006), es lógico que así fuera, ya que en el pensamiento liberal es, precisamente, en la economía donde se sitúa la matriz de la nueva sociabilidad ordenada. Para el autor, lo peculiar de las sociedades modernas no es que su economía sea una economía de mercado, sino que sean “sociedades de mercado”. Dado el papel central que la economía juega en el orden social liberal y el trabajo en esa economía, de igual manera es posible decir que las sociedades modernas son sociedades de mercado como que son sociedades de trabajo (Prieto, 2000).

Desde la perspectiva de Offe (1995), la existencia de dos mecanismos principales permitió garantizar que el trabajo desempeñara un papel central en la organización de la existencia individual durante la Modernidad. El primero de esos mecanismos corresponde a los niveles de integración del sistema y refiere al establecimiento del trabajo como una “necesidad”. En este sentido, el trabajo asumió la “función manifiesta” (Jahoda, 1987) de proveer los ingresos necesarios para posibilitar la mera sobrevivencia física. El segundo mecanismo, referido a la integración social, sanciona normativamente al trabajo como un “deber” en el marco de una vida caracterizada como honesta y moralmente buena.

Este doble mecanismo edificó una temporalidad que se organizaba de manera cíclica, regular y repetitiva a través de la existencia de prácticas habituales y cotidianas que articulaban la organización de la vida práctica. Esta disciplina orientada por el tiempo de las horas está irremediablemente unida a la relación de trabajo. Tal como señala Belloni (1986), el tipo de organización social del tiempo que adopta un grupo o una comunidad es indisociable de ciertas condiciones estructurales y, más específicamente, de las formas de organización del trabajo. En

este sentido, la introducción del trabajo industrial fue acompañada de una definición más rígida del tiempo y la invención de las tablas horarias. A partir de la Revolución Industrial, un componente importante del valor del trabajo fue calculado en términos de duración. El espacio laboral y la jornada de trabajo delimitada demarcan -de forma material y simbólica- la vida de los trabajadores. Este entramado práctico se articulaba con un horizonte temporal de mediano y hasta de largo plazo, en el cual el esfuerzo personal -que podía ser además, sacrificio- recibía como compensación la posibilidad concreta de una movilidad social ascendente inter e intra-generacional.

La erosión y el quiebre de este modelo actúa expulsando a los sujetos del mundo del trabajo; concomitantemente, desestructura las formas de organizar temporalmente la vida práctica, derriba los horizontes temporales y arrasa con el principal vector de control y socialización de la sociedad moderna.

En este marco, esta tesis tuvo como objetivo central indagar la incidencia que los PTMC tienen en moldear el uso del tiempo de los beneficiarios, centrando el análisis en el estudio de caso del Programa jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Se partió de considerar que la utilización del tiempo es expresiva de la forma que toman los diferentes tipos de relaciones sociales y que la misma constituye una referencia estructurante de los niveles de comprometimiento y/o involucramiento de las personas en toda una serie de actividades. Los segmentos de tiempo adquieren relevancia para los análisis sociales en la medida en que no son sólo el resultado de una elección individual sino que son adoptados de forma colectiva por la comunidad e institucionalizados, adquiriendo estabilidad, consistencia y desarrollando un complejo sistema interno de regulación. Este tipo de análisis posibilitó, por un lado, reflexionar sobre el lugar que las prescripciones, encuadres y obligaciones introducidos por los PTMC adquieren en el esquema temporal de las poblaciones asistidas, y por el otro, permitió repensar el lugar que ocupa el trabajo dentro del ordenamiento temporal de los desocupados asistidos por el Estado.

Este objetivo debió ser, necesariamente, abordado en la confluencia de dos procesos los cuales sentaron las bases de un escenario inédito en la historia de nuestro país. Para fines de la década del 90, Argentina transitaba por un proceso de fuerte reestructuración social asentado tanto en transformaciones decisivas en la matriz productiva y en el mercado de trabajo como en

cambios producidos en la estructura y en la forma de intervención del Estado nacional y de los Estados locales.

En relación al primero de estos procesos, la estrategia aperturista -exacerbada con la aplicación del Plan de Convertibilidad y caracterizada por un claro sesgo desindustrializador, concentrador y excluyente, sin atisbos de modernización- introdujo cambios profundos en la legislación laboral, redujo la estabilidad en el empleo, promovió el empleo legal precario, toleró el empleo “en negro” y bajó los costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresariales. Estas nuevas regulaciones laborales derivaron en un crecimiento exponencial de los niveles de desocupación abierta, subocupación y de precarización laboral. Estas transformaciones afianzan un nuevo escenario caracterizado por la polarización, dualización y heterogeneización del mercado de trabajo y, consecuentemente, de la sociedad argentina toda. Dentro de este escenario cada vez son más aquellos individuos a los que sólo puede definírseles por sus carencias, por sus faltas, por la exacerbación de los niveles de precariedad, incertidumbre y vulnerabilidad social.

Paralelamente, la década del 90 marcó un fuerte viraje en la orientación de las políticas sociales producto de la deficiencia institucional y del aumento del número de individuos que no encuentran soportes suficientes en el mercado de trabajo. El viraje de las políticas sociales en nuestro país comportó una serie de elementos tales como: la descentralización de los servicios universales y de la operatoria de los programas nacionales; la privatización /desregulación de parte de la seguridad social; la focalización en materia de combate a la pobreza; la incorporación de forma activa de las organizaciones de base territorial a la puesta en marcha de las políticas sociales; y por último y derivado de los elementos anteriores, la territorialización de la ayuda social.

Es, en este contexto, que el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados se erige en el programa social insignia del período inaugurado con la crisis de 2001, a la vez que ocupa un rol central y estabilizador a la salida de la misma. La centralidad del Programa estaba dada por varios elementos. En primer lugar porque se constituyó en el PTMC de mayor alcance implementado hasta ese momento. En segundo lugar porque instaló la noción de “contraprestación” como una de las características centrales, incorporando así elementos del *workfare*. Finalmente, y en tercer

lugar, por la presencia, en algunos casos medular, que cobró en la cotidianeidad de los sectores populares.

Estos elementos dan cuenta de una nueva estrategia en la atención de los grupos más vulnerables, definidos estos a partir de las situaciones de pobreza y desocupación. Sin embargo, el PJJHD mantenía algunas características de los programas de empleo transitorio implementados en la década del 90; en buena medida, esas similitudes se debían a una actitud “inercial” de funcionarios y técnicos en los modos de saber y hacer de la década precedente. Así, el PJJHD es un programa de características particulares ya que supuso una combinación de programa de sostenimiento de los ingresos y de alivio a la pobreza con esquema de empleo. Asimismo, el contexto de emergencia en el que se creó marcó significativamente tanto su diseño como su implementación.

Al interior del Programa, la estructura básica de un PTMC era incluida a través del establecimiento de un ingreso no remunerativo que estaba direccionado a disminuir la pobreza en el corto plazo y un componente de desarrollo del capital humano como mecanismo para hacer frente a la pobreza en el largo plazo, buscando así romper su transmisión intergeneracional. Las condicionalidades exigidas a los beneficiarios se direccionaban al cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio, de los controles sanitarios y a acreditar la concurrencia a establecimientos educativos. Por diferentes circunstancias, tales como el momento del año en que se comenzó a implementar el Programa, por involucrar a diferentes órbitas del Estado, entre otras, el control de estas condicionalidades presentó un sinnúmero de dificultades. Asimismo, el PJJHD ha tenido un escaso impacto en el alivio de la situación de pobreza en la que se encontraban los hogares beneficiados y un impacto algo mayor sobre los indicadores de indigencia.

Sin embargo, además de incorporar una serie de condicionalidades (en línea con los PTMC implementados en América Latina) el PJJHD exigía también el cumplimiento de contraprestaciones laborales o no laborales. De esta manera el Programa incorporaba uno de los elementos centrales del esquema del *workfare*; es decir incorporaba la noción de la asistencia condicionada al trabajo. Buena parte de esas contraprestaciones laborales desarrolladas por los beneficiarios y realizadas en el marco del Programa se corresponden con puestos de baja productividad, escasa o nula calificación, sin protección social, las cuales poco aportan a la

construcción de escenarios de reinserción laboral. Además, visto desde la óptica de las políticas de empleo las exiguas transferencias monetarias y las contraprestaciones a tiempo parcial terminan repercutiendo en las denominadas “trampa del trabajo no registrado” y/o “trampa del desempleo” en la medida que el acceso a un trabajo formal supondría la pérdida automática del beneficio.

Desde la perspectiva de Merklen (2005), la evolución que articula históricamente los efectos de la desafiliación con las nuevas políticas sociales, la inscripción de base territorial y la heterogeneidad social de las pobreza constituyen los tres elementos unificadores de las experiencias populares. En este sentido, existen dos líneas de fuerza que cruzan la historia y la variabilidad del fenómeno de la pobreza. La primera viene dada por la relación de los pobres con la asistencia. Recuperando a Simmel, Merklen (2005) señala que históricamente se ha considerado como pobres a las poblaciones que recurren a la ayuda, generalmente en forma de asistencia pública. Según esta definición, los pobres no pueden constituir un colectivo, excepto cuando está basado en la solicitud de ayuda. Pueden, no obstante, desarrollar una “cultura” resultante de compartir condiciones de vida, pero estos individuos son incapaces de constituir una fuerza social en tanto pobres.

La otra gran línea de fuerza viene dada por la territorialidad, lo que deriva en la problemática de las organizaciones locales incorporadas como actores centrales de las nuevas políticas. En el centro de las formas de solidaridad que rodean la figura del pobre se encuentran efectivamente siempre organizaciones afianzadas en un territorio preciso. En principio porque, como indica Castel (1997), la asistencia tiene siempre contornos locales, y después porque, a falta de otros vínculos de pertenencia y de solidaridad institucionalizados, las clases populares construyen a menudo su identidad alrededor de una comunidad local, aspecto éste reforzado por el carácter comunitario de la asistencia.

El aumento exponencial de los niveles de subocupación, desocupación abierta y oculta, y la proliferación de situaciones signadas por la intermitencia laboral disciplinan, por un lado, a quienes necesitan de un trabajo para poder vivir, pero también arrasan con el principal vector de control y de socialización de largo plazo de la sociedad moderna. Así, la nueva dinámica social conllevó la necesidad de reconstruir y/o construir nuevas formas de asegurar el orden social, requiriendo una constante búsqueda y aplicación de métodos idóneos para conseguir la

adecuación laboral más eficiente por parte de los trabajadores, así como la neutralización de todas aquellas prácticas que pudieran afectar el funcionamiento de las lógicas del sistema.

Derivado de lo anterior, es posible establecer que la política de bienestar postfordista construye cursos de acción diferenciales para los distintos grupos sociales resultantes de esta transformación del mercado de trabajo y de la dinámica social en general. El resultado de esto es una “nueva clase de gubernamentalidad segmentada” (Fraser, 2003). Para aquellas “zonas” de la sociedad completamente interconectadas e hiper-competitivas, esta nueva gubernamentalidad es la de la autorregulación y de responsabilidad individual. La inseguridad, el miedo a perder el trabajo, la flexibilidad y la mayor intensidad que acompaña a la sofisticación tecnológica se convierten en los recursos más eficaces del disciplinamiento, en esta nueva etapa del capitalismo, para dedicar la vida al trabajo (Grassi, 2003). Pero esa misma dinámica necesita definir y construir nuevas formas de disciplinamiento de las masas compulsivamente expulsadas de los procesos de producción.

Este proceso tiende a generar dos tipos de exclusiones que amenazan la cohesión social (Gautié, 2004). A la figura del “individuo por exceso” -que ha sabido sacar partido de las mutaciones actuales y que, al creerse autoinstituido y atribuir sus éxitos únicamente a sus méritos, se desentiende de toda implicancia social hasta el punto de cuestionar las solidaridades, en particular a través de su protesta por las contribuciones fiscales obligatorias- se oponen los “individuos por defecto”, constituidos por los desafiados, por los “individuos negativos” (Castel, 1997), es decir aquella periferia precaria que se encuentra en estado de desprotección.

En nuestro país, los PTMC que incorporan elementos del *workfare*, por una lado, y las “trayectorias temblorosas hechas de búsquedas inquietas para arreglárselas día por día” (Castel, 1997), por otro, constituyeron los instrumentos básicos del disciplinamiento de los desplazados. Estos instrumentos se entrelazan en la cotidianeidad de los beneficiarios del PJJHD en la medida en que la escasa significación económica del ingreso proporcionado por el plan social hace necesario su complemento con algún tipo de trabajo informal.

En este sentido, consideramos que de nuestra investigación surgen dos grandes tendencias de análisis. La primera de ellas se relaciona con el alto nivel de ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación. La segunda tendencia, la cual se desprende de los datos surgidos de los diarios de actividades, señala que las características que adoptan los PTMC que a

su vez incorporan elementos del *workfare* inciden en el cotidiano de los desocupados asistidos por el Estado profundizando su precarización, fragmentación y desestructurando las formas de organizar temporalmente la vida práctica. En este sentido, la lucha por la sobrevivencia cotidiana se conjuga con una serie de encuadres, obligaciones y prescripciones –introducidas por los PTMC- para terminar imponiendo múltiples, simultáneas y/o fragmentadas jornadas.

La primera de estas tendencias, el alto nivel de ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación, puede encontrar su explicación en la confluencia de dos procesos: la implementación de los PTMC que incorporan elementos del esquema del *workfare* a partir de la década del 90 y la noción de reciprocidad social contenida en estos programas en general y en el PJJHD en particular, por un lado, y del quiebre de la sociedad salarial, por otro.

El elevado ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación otorga a la noción de reciprocidad social presente en el PJJHD una característica particular. En este sentido es posible señalar que la misma convive con su ausencia (Gouldner, 1979) o con su polo más lejano: la reciprocidad negativa (Sahlins, 1976). Este tipo de transacción supone un intercambio asimétrico, donde uno recibe sin dar o da sin recibir (ya sea en el pasado o de cara al futuro) o donde se busca recibir lo más dando lo menos; y es el tipo de intercambio que predomina entre personas desvinculadas entre sí, generalmente entre quienes se consideran a sí mismos integrantes de grupos distintos.

Esto no es casual si pensamos que una de las partes está constituida por el Estado. La presencia del Estado, como uno de los agentes entre los que se produce la relación social de intercambio, hace necesario centrar las relaciones de reciprocidad en el ámbito de la política. Dentro de este ámbito la reciprocidad se refiere a la producción, reproducción y transformación de relaciones dependientes del poder y de obligaciones basadas en concepciones de justicia e injusticia. La reciprocidad se desarrolla en un marco de posiciones que implican asimetría y verticalidad (Álvarez Leguizamón, 2002; Gouldner, 1979; Lomnitz, 2005). En este sentido, Michaud (2005) llega a denominar a la reciprocidad contenida en las políticas de *workfare* como “reciprocidad obligatoria”. Si bien este tipo de reciprocidad actúa incrementando ciertas formas de dependencia, reproduciendo desigualdades y permitiendo el resurgimiento de formas de clientelismo, no significa, necesariamente, una dominación a secas. Este tipo de intercambios se constituye como un verdadero campo de fuerzas, como un espacio de regateo entre fuerzas

sociales desiguales donde es posible poner a prueba y descubrir los límites de la obediencia y la desobediencia. El elevado ausentismo a las actividades de contraprestación también debe ser interpretado en este marco.

Paralelamente, y en el marco de las nuevas condiciones que plantea el capitalismo a nivel planetario en cuanto al tiempo y la organización del trabajo, el ausentismo de los beneficiarios a las actividades de contraprestación puede ser interpretado como una manifestación de la corrosión de los principios de compromiso y lealtad, y un desdibujamiento de los vínculos sociales entre los individuos y de éstos con las instituciones. El elevado ausentismo al trabajo o a otro tipo de actividades ha sido repetidamente señalado como un indicador de un bajo nivel de identificación con la tarea. Desde la mirada de Sennett (1998), es justamente la dimensión temporal del nuevo capitalismo lo que más directamente afecta las vidas emocionales de las personas. El lema “nada a largo plazo” impide la construcción de vínculos sólidos, limita la posibilidad de que madure la confianza informal, corroe la confianza, la lealtad, el compromiso mutuo y las prácticas basadas en el sacrificio.

El capitalismo a corto plazo amenaza con corroer el carácter; es decir, amenaza con debilitar al valor ético que atribuimos a nuestros deseos y relaciones con los demás, en especial aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible. El resquebrajamiento del “yo sostenible” aparece expresado en el temor a estar al borde de la pérdida del control de la propia vida, un miedo que se enraíza en historias laborales flexibles y quebradas. Como menciona Sennett: “unos vínculos sólidos dependen de una disposición a establecer compromisos con los demás” (1998: 23). Esta “disposición” es una gran ausencia en el volumen global de las actividades de contraprestación que analizamos. Sucede que éstas se enmarcan en un programa que actúa reproduciendo la incertidumbre cotidiana y perpetuando la “inestabilidad” como cosa de todos los días. No existe en estos casos un deseo por el pasado como referente de estabilidad laboral -porque en muchos casos es un modelo desconocido incluso por la generación inmediata anterior- pero tampoco “a venir”.

Es interesante observar que estas transformaciones presentan un aire de similitud con las problemáticas y/o las preocupaciones presentes en los escritos referidos al período de transición a la Modernidad. En este sentido, y para Durkheim (2000), el sentimiento de obligación varía sin

cesar y para que ese sentimiento tenga todo su relieve es preciso que haya una moral claramente constituida y que se imponga a todos sin contestación. Durkheim consideraba que para el momento que escribía estas reflexiones, la moral tradicional estaba quebrantada sin que se hubiese formado ninguna otra que ocupara su lugar. En ese momento de crisis, los antiguos deberes habían perdido su fuerza de imposición, sin que fuera posible observar de forma clara cuáles eran los nuevos deberes; las reglas morales no se sentían tan apremiantes como en el pasado.

A partir de lo expuesto sería posible derivar que la vieja ética del trabajo se encontraría quebrantada -para algunos sectores de la sociedad- sin que se hubiese formado una nueva. Profundizando esta línea de análisis, algunos autores (Salles, 1999; Offe, 1995) han llegado a señalar la formación en el centro mismo del desempleo estructural de subculturas de una economía informal próxima a la pauperización, cuyos participantes adquieren una aversión como mínimo pasiva en relación a los valores y a las reglas legales de la sociedad del trabajo, pudiendo derivar en una cultura del desempleo.

Desde el punto de vista metodológico, la ausencia de los beneficiarios a las actividades de contraprestación repercutió en las posibilidades de implementar las encuestas de uso del tiempo en los beneficiarios del PJJHD. Sin embargo, esta situación permitió dar cuenta de la heterogénea presencia de encuadres y prescripciones impuestos por los PTMC que incorporan elementos de *workfare* en la vida cotidiana de los beneficiarios, posibilitando así, dar cuenta de una forma acabada de la complejidad y heterogeneidad de las formas de uso del tiempo.

La segunda tendencia de análisis que surge de nuestra investigación -a través de los datos que se desprenden de los diarios de actividades de los beneficiarios del PJJHD, señala que las características que adoptan los PTMC que a su vez incorporan elementos del *workfare* inciden en el cotidiano de los desocupados asistidos por el Estado profundizando su precarización, fragmentación y desestructurando las formas de organizar temporalmente la vida práctica. En este sentido, la lucha por la sobrevivencia cotidiana se conjuga con una serie de encuadres, obligaciones y prescripciones -introducidas por los PTMC- para terminar imponiendo múltiples, simultáneas y/o fragmentadas jornadas. En este sentido, la metodología de uso del tiempo permitió mostrar que el tiempo de desempleo -tal como lo señaló Demazière (2006)- lejos de ser

un tiempo vacío es un tiempo pleno que puede generar problemas de competencia en los usos del tiempo de los desocupados, en este caso asistidos por el Estado.

Tal como señaláramos, y desde la perspectiva de Gauthier (2004), la “protección social”, en un sentido amplio, remite a la seguridad económica y social de las personas, y depende de las modalidades de protección social ante los riesgos, y yendo más allá y de modo más global, de acceso a los recursos. En las sociedades capitalistas desarrolladas, es posible distinguir tres modalidades. La primera -denominada reparto económico- se refiere a los recursos que los individuos reciben en contrapartida directa por su participación en la actividad productiva que se institucionaliza en una combinación de elementos sociales y jurídicos que definen el “empleo”. La segunda -el reparto doméstico- engloba a todas las manifestaciones basadas en un vínculo personal entre el que da y el que recibe, y por lo tanto, fundamentalmente a la solidaridad familiar. Por último, el reparto social tiene que ver con las transferencias de las que los individuos pueden beneficiarse y que proceden de instituciones que deducen ingresos para ser distribuidos, bien en forma de prestaciones monetarias (subsidios de desempleo, enfermedad, renta mínima, etc.), bien en forma de servicios sociales (salud, guarderías y otros). El reparto social es complementario de las otras dos formas de reparto. Esta complementariedad se institucionalizó de modo distinto en los países occidentales en el período de entreguerra. Los fundamentos de los derechos sociales podrían diferir, entre otras cosas, según el estatus económico (existencia o no de condiciones de empleo y/o de ingreso) y familiar (derechos individualizados o, al contrario, familiarizados).

Estas tres esferas de reparto no se excluyen y, muy por el contrario, se articulan según distintas modalidades, tanto en el plano de los individuos como en el plano global de los Estados-Nación. Así, las combinaciones particulares de estas tres formas de reparto darán cuenta de los diferentes niveles de seguridad/inseguridad y, consecuentemente, de accesos diferenciales a los recursos.

En la realidad de los beneficiarios del PJJHD, el trabajo remunerado como factor determinante de la vida cotidiana navega en aguas inciertas, dejando de constituir una instancia de conducción y protección. Asimismo, la forma que adoptó el PJJHD tampoco liberó a los individuos de los avatares del destino. No garantiza integridad física ni seguridad económica; es decir, no posibilita un marco de certidumbre. De forma más específica, si por un lado el

Programa provee un escaso margen de certidumbre (a través de un ingreso regular mínimo y de la ayuda brindada por los centros comunitarios y asociaciones civiles a través de los recursos puestos en disponibilidad por las actividades de contraprestación enmarcadas en el PJJHD), por el otro refuerza otras irregularidades, y habilita y potencia una serie de mecanismos de control social. El aumento de las tensiones derivadas de la escasez e insuficiencia de recursos distribuidos y/o puestos en disponibilidad por estas dos formas de reparto, junto a las formas de vida sedimentadas en las costumbres, gustos y convenciones sociales, actúan aumentando la carga de trabajo no remunerado que realizan hombres y mujeres (pero especialmente estas últimas) en los hogares.

En relación a lo que Gautié (2004) denominó reparto económico, es posible señalar que los beneficiarios del PJJHD encuestados se caracterizan por ocupar un lugar precario, informal e inestable en la división social del trabajo. Además, la inserción laboral de los beneficiarios muestra un comportamiento diferencial por sexo que perpetúa los patrones tradicionales.

La inserción laboral de los beneficiarios (tanto de los hombres como de las mujeres) se produce en el sector informal de la economía como una forma de contornear las regulaciones estatales y de complementar los magros aportes de los mecanismos de asistencia. La mayor parte de esas actividades se incluyen en el sector servicios, cuya expansión se corresponde, principalmente, con la absorción de una oferta de trabajo que de otra forma sería no absorbible. En tanto, la irregularidad de las jornadas de trabajo diarias se deriva de las vicisitudes de una actividad económica fundada básicamente en una perpetua y constante adaptación a la demanda. De forma clara, la irregularidad en la jornada se corresponde con inestabilidad en los ingresos, la cual, sumada a la ausencia de seguridades y protecciones, construyen un marco cotidiano caracterizado por la precariedad.

Este tipo de trabajo, informal, intermitente, carente tanto de seguridad como de entradas fijas constituye el único complemento posible y viable a la transferencia monetaria recibida a través del PTMC. Las condiciones de trabajo se desarrollan en un contexto de ausencia de certezas respecto de la subsistencia, imposibilitando la construcción de un horizonte a largo plazo y, consecuentemente, constriñendo a los beneficiarios a vivir su existencia día a día. Sin embargo, en la ausencia de un empleo regular, lo que hace falta no es solamente una renta asegurada, sino también un conjunto de sujeciones que definen una organización coherente del tiempo y un sistema de expectativas concretas (Bourdieu, 1979).

El establecimiento de una cierta continuidad entre el pasado, el presente y el futuro es uno de los objetivos que persiguen los planes de vida diseñados por los individuos. Es decir, existe una estrecha relación entre las decisiones cotidianas y las expectativas biográficas. Esta relación sufrió transformaciones en un contexto de cambios de los aspectos temporales del trabajo en el que no existen “mapas temporales” claros y precisos, es decir, expectativas confiables con respecto al comportamiento de los parámetros socio-temporales (de Castro, 2008). Muy por el contrario, la realidad laboral de los beneficiarios muestra una localización temporal de la jornada de trabajo a lo largo del día y de la semana que no es ni confiable ni estable.

En términos diferenciales por sexo, fue posible observar entre las beneficiarias que una alta proporción de ellas provenía de la inactividad. En tanto, entre las pocas beneficiarias que, además de realizar tareas de contraprestación enmarcadas en el PJJHD, tienen un trabajo remunerado predominan las beneficiarias solteras, divorciadas o separadas y viudas; es decir, sobresalen aquellas que teniendo uno o más hijos, no poseen cónyuge. En el primero de los casos, el ingreso proveniente de la transferencia monetaria actúa como una práctica enmarcada en una estrategia familiar de obtención de un ingreso adicional o complementario; mientras que en el segundo, los ingresos percibidos por las beneficiarias a través del PTMC y de los trabajos informales se constituyen en los soportes económicos básicos de los hogares monoparentales de jefa mujer. En tanto, los hombres beneficiarios muestran tasas de participación en el mercado de trabajo más altas que las beneficiarias. De igual manera, la media de tiempo específica asignada al trabajo remunerado también es mayor en el caso de los hombres.

Del patrón ocupacional de los beneficiarios se derivan dos elementos de análisis. Por un lado es posible observar la persistencia del modelo tradicional que asigna las funciones productoras a los hombres y las reproductoras a las mujeres. Este dato actuaría indicando que la división tradicional de roles sexuales resiste incluso cuando la desocupación pone en cuestión la identidad masculina construida en torno a la idea de proveedor principal. Por el otro lado, el patrón ocupacional de los beneficiarios sugiere que el trabajo informal muestra una fuerte segregación ocupacional por género, la cual posiblemente exacerba la encontrada en el trabajo formal. Esta segregación horizontal dentro del trabajo informal es significativamente diferente de acuerdo a la clase social. La segregación ocupacional por género es “una de las maneras en las que el género procesa la función a través de la organización del trabajo informal” (Whitson, 2007). Este tipo de clasificación supone un proceso que hace que los trabajos sean vistos como

apropiados para hombres o mujeres y, así, constituidos para encarnar las características de masculinidad y feminidad socialmente sancionadas.

La absorción de los trabajadores (aunque innecesarios directa o indirectamente en el proceso de acumulación) en este tipo de trabajos constituye un requisito de estabilidad social en la medida en que actúa impidiendo las consecuencias indeseables derivadas de la no participación de esos individuos en el mercado de bienes y en las formas de vida centradas en el trabajo. En este sentido, se podría argumentar que el trabajo en el sector de servicios crea un orden social, no por los efectos de sus productos sobre la economía y sobre la organización económica, sino porque regula y disciplina las motivaciones y aspiraciones de los trabajadores; o sea, condiciona sus *inputs* en la vida social (Offe, 1995).

El punto de partida para analizar el reparto doméstico es considerar que los hogares adaptan sus estrategias de vida para hacer frente al desempleo y a la caída de los ingresos familiares como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas. Así, el aumento de los precios de los bienes de consumo genera cuatro tipos de prácticas concluyentes: 1) “familiariza” (es decir, re-introduce en el hogar) actividades que habían sido propulsadas fuera del hogar, esto es mercantilizadas, 2) incentiva la autoproducción, 3) orienta a los sectores de bajos ingresos hacia mercados informales, más adaptados a su capacidad de compra, y 4) propulsa hacia el ámbito comunitario actividades típicamente familiares como la comida.

Estos cuatro comportamientos impactan en el tiempo que necesita ser asignado para la realización de actividades dentro del hogar. Pero ese impacto es diferencial en términos de género. Las reestructuraciones en curso en el mercado de trabajo y en los sistemas de bienestar acarrearán una tensión creciente entre los recursos distribuidos y disponibles en la familia y los niveles de vida sedimentados en las costumbres, gustos y convenciones sociales, conllevando un incremento del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en los núcleos familiares. La presión sobre el trabajo no remunerado es permanente ya que a éste le corresponde cubrir el desfase entre las rentas disponibles y las normas sociales de consumo y, en particular, entre las condiciones laborales y las condiciones de vida (Picchio, 2001).

A partir de los datos surgidos de los diarios de actividades es posible observar una amplia desigualdad existente en los tres subconjuntos de actividades relativas al trabajo no remunerado realizado en el interior del hogar (trabajo doméstico en sentido restringido, trabajo de cuidados no

pagados, y adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia) tanto en lo que respecta a las tasas de participación como a las medias genéricas y específicas de tiempo. Si bien la mayor participación femenina es innegable en el trabajo doméstico (en sentido restringido) y en el trabajo de cuidados, ésta se acentúa aún más en las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia.

En este tercer subconjunto, la “crónica desigualdad que estructura el trabajo doméstico y familiar en su conjunto” (Ramos Torre, 1990b: 128) se ve reforzada, mostrando la mayor distancia entre uno y otro sexo en lo relativo a sus tasas de participación. Estos datos van a contrapelo de una serie de investigaciones que mostraban el estrechamiento de las desigualdades entre varones y mujeres en las tasas de participación y en las medias específicas de tiempo en las actividades vinculadas con la adquisición de bienes y servicios y gestiones relacionadas con el hogar y la familia.

Esta tendencia podría ser explicada, fundamentalmente, por las características que adquieren dos de las actividades básicas que conforman este subgrupo en la vida cotidiana de los beneficiarios del PJJHD. La primera de ellas, las compras corrientes, se caracterizan por ser diarias, al menudeo y en diferentes comercios e, incluso, en muchos casos se realizan dos veces al día. La segunda está relacionada con el tiempo de gestiones externas realizadas por las y los beneficiarios del PJJHD, las cuales están mayoritariamente direccionadas a la procura de turnos médicos en los centros de salud públicos (actividad íntimamente ligada a las tareas de cuidado) y en mucho menor medida por pagos de impuesto y búsquedas de tickets o vales de alimentación. Es decir, en las tareas de gestión, el peso mayoritario está constituido por gestiones relacionadas con los cuidados. Sin lugar a dudas, los magros ingresos obtenidos a través de las transferencias monetarias estatales, el tipo de trabajo remunerado realizado que conlleva ingresos irregulares y la precariedad general en la que discurre la existencia de los beneficiarios son los elementos básicos en los que se asientan este tipo de prácticas.

Finalmente, y en relación a la última forma de reparto denominada por Gautié (2004) “reparto social”, es posible señalar que las formas que adoptaron los PTMC no consiguieron liberar a los individuos de los avatares del destino. Ya que si bien actúan proveyendo un ingreso mínimo y posibilitando la disponibilidad de una serie de recursos básicos para la supervivencia material -a través de las actividades de contraprestación realizadas mayoritariamente en centros

comunitarios y asociaciones civiles-, también refuerzan una serie de irregularidades y habilitan y potencian diferentes mecanismos de control social.

De forma mayoritaria las actividades de contraprestación realizadas por los beneficiarios se relacionan directamente con la supervivencia material (copa de leche y comedores comunitarios, huertas, roperos comunitarios, atención sanitaria) y con tareas técnicas o de servicios que posibilitan el funcionamiento y gestión de las organizaciones de base territorial en las cuales se desarrollan las actividades de contraprestación. Los recursos (alimentos y vestimenta, fundamentalmente) puestos en disponibilidad por estas actividades constituyen un resguardo y un refugio ante las situaciones de pobreza y precariedad que atraviesan los beneficiarios y la comunidad en la que se insertan.

Esas actividades de contraprestación se realizan mayoritariamente en el contexto del espacio social más próximo, el barrio. Así, el tipo de actividades de contraprestación realizado junto con la cercanía y la familiaridad que aporta el barrio permiten cerrar un círculo mínimo de contención a la vulnerabilidad social en la que se encuentran los beneficiarios. Tal como fue señalado, la fuerte presencia de lo territorial/comunitario en la vida de los sectores populares fue producto de una exigencia y una creación -a la vez desde arriba y desde abajo- que permitió contener el conflicto social, frente a la destrucción del mundo obrero popular (Svampa, 2005). Dos tendencias se entrecruzaron para potenciar este proceso producto del crecimiento del desempleo y de la pobreza desde la década del 70. Es posible señalar el viraje que experimentan, a partir de entonces, por un lado las políticas sociales y por el otro las prácticas de los propios sujetos que ante el derrumbe de las pautas de referencia establecidas buscan la seguridad perdida en el barrio.

Estos elementos estarían dando cuenta de una lógica que se aparta del modelo que conjuga precariedad del trabajo y fragilidad de los soportes de proximidad. Es decir, estamos en presencia de una situación mucho más próxima de aquellas lógicas descriptas por Castel (1997) que se apartan de esta asociación mecánica.

Sin embargo, ni estas estructuras de solidaridad local pueden en ningún caso suplir a las protecciones y a las formas de socialización aportadas por las instituciones y el trabajo, por un lado, ni el acceso a estos recursos ni la transferencia monetaria recibida por los beneficiarios permiten construir un escenario de certidumbre, por otro lado. Más aún la escasa significación de

la transferencia monetaria proporcionada por el plan social y la insuficiencia de los recursos puestos en disponibilidad por las actividades de contraprestación hace necesario su complemento con algún trabajo informal. A partir de lo expuesto queda de manifiesto de forma clara el proceso circular planteado por Beck (2007). Para el autor la percepción de las prestaciones por desempleo obliga a los beneficiarios a “no hacer nada”. Si esto no es cumplido el beneficiario pasará por un “mentiroso social” que se hace culpable del hundimiento del espíritu comunal. Así, los procesos se refuerzan circularmente, favoreciendo y acelerando la propagación del trabajo y la economía informal.

Concomitantemente, el PJJHD habilita y potencia una serie de mecanismos de control social. La trama de la implementación del Programa se construye teniendo al Estado nacional como su vértice superior, a los gobiernos municipales como los gestores a nivel local de las actividades de contraprestación y, finalmente, a las organizaciones de base territorial (centros comunitarios, asociaciones vecinales, clubes barriales, etc.) como los núcleos a nivel del terreno donde las actividades de contraprestación se realizan de forma práctica y material.

Así, la ausencia o retirada del Estado constituye el marco de una red compleja, asimétrica y jerárquica de políticas y prácticas que construyen una vigilancia permanente sobre las conductas de los beneficiarios. A través de los mecanismos de la descentralización administrativa, ese control es transferido a las organizaciones de base territorial y actúa operando por una doble vía: la del miedo y la de la vigilancia que ejercen sobre los beneficiarios los líderes y/o dirigentes de los centros comunitarios y/o asociaciones civiles; es decir, una vigilancia de los comportamientos ejercida por grupos de proximidad de los beneficiarios e incluso por grupos de pares.

Esta situación deriva en un escenario local complejo y contradictorio, ya que, por un lado, las actividades comunitarias constituyen el componente cuantitativamente más importante de las formas de contraprestación y actúan recreando y reforzando los mecanismos de solidaridad local permitiendo, incluso, la supervivencia material de buena parte de las miembros de la comunidad; mientras que, por el otro lado, la transferencia de los mecanismos de control social desde el Estado a la comunidad actúa creando fisuras, asimetrías y micro jerarquías en un tejido social ya debilitado.

Las tres modalidades de reparto o de acceso a los recursos, descritas por Gautié, se articulan en la cotidianeidad de los beneficiarios de una manera específica. En términos

generales, es posible señalar que ni el mercado ni los recursos provistos por el Estado son suficientes para asegurar la reproducción social de estos sectores, y si bien el ámbito comunitario/barrial y la familia constituyen una suerte de espacios mínimos de reaseguro, no llegan a suplir a las otras instancias ni a proporcionar a los sujetos sus condiciones de existencia, cualquiera sea la solidaridad existente entre los miembros. Tal como señalaba Bourdieu (1979), estas instancias, en todo caso, ofrecen un sinnúmero de protecciones que posibilitan un “equilibrio precario, al nivel más bajo posible”.

La situación descripta se corresponde en buena medida con uno de los niveles señalados por Castel (1997) en los cuales se manifiesta el proceso de degradación de la sociedad salarial. Para el autor, el primer nivel corresponde a la “desestabilización de los estables”, que comenzó por alcanzar a una parte de la clase obrera clásica (textil, metalúrgica, minera) implicada en la flexibilización económica, y que hoy extiende sus efectos mucho más allá (por ejemplo, el de los cuadros superiores de las empresas). El segundo nivel da cuenta de la “aparición de un nuevo perfil de gente: los supernumerarios”, son aquellos que se encuentran en una situación de inutilidad social, no son integrables, ni siquiera están explotados en el sentido habitual del término. El obrero era explotado pero, como contrapartida, el proceso productivo estaba basado en él, por lo tanto podía luchar y, a veces ganar, cosa que no sucede ahora. Finalmente, el tercer nivel, el cual se aproxima a la situación de los beneficiarios asistidos por el Estado, da cuenta de la “instalación en la precariedad” de importantes grupos sociales. Estos se caracterizan por “vivir al día” con aquello que las personas logran arreglándoselas solas, la ayuda social, el trabajo en negro y la solidaridad familiar. Para Castel (1997), estas situaciones pueden servir de aprendizaje para algunos, pero muchos otros quedan apresados como en un torniquete y no llegan nunca a insertarse verdaderamente.

Tal como describimos, la lucha por la sobrevivencia cotidiana de los desocupados asistidos por el Estado y las actividades impuestas por el PTMC terminan imponiendo múltiples, simultáneas y/o fragmentadas jornadas (tanto dentro como fuera del hogar), las cuales lejos de organizar el cotidiano terminan por desorganizarlo. La irregularidad y la fluctuación de los ingresos, por un lado, y la ausencia de protecciones, por otro, configuran una forma de administrar el tiempo en la vida cotidiana que da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad social en la cual se hallan insertos los beneficiarios del PJHD.

La vida vinculada al trabajo remunerado parece estar formada por un número indefinido de etapas de duración e intensidad variables que describen un movimiento arrítmico y desacompañado. La falta de predictibilidad en la temporalidad relativa al trabajo remunerado se evidencia en trayectorias marcadas por la precariedad laboral, por los reducidos salarios, por el encadenamiento de trabajos temporales de baja calidad (en el mejor de los casos) y/o por la intermitencia ocupacional.

Este tipo de temporalidad coexiste con otras temporalidades, todas ellas con características muy diversas. Lo específico entonces de la sociedad contemporánea es la pluralidad de los tiempos sociales y su interdependencia. Se produce así un tipo específico de articulación del tiempo de trabajo (remunerado y no remunerado) con el resto de los tiempos sociales junto con los cuales se conforma la estructura temporal de la sociedad. Cualquier cambio en la organización de uno de los tiempos sociales supone una modificación en la coordinación entre ellos. De este modo, los beneficiarios del PJJHD, a través de sus operaciones de articulación, convierten esa informe masa de tiempos en un orden temporal personalizado en el que discurre sus existencias (de Castro, 2008).

Para los beneficiarios del PJJHD en general, pero para las beneficiarias mujeres de forma particular, las posibilidades de articulación de los diferentes tiempos sociales presenta limitados márgenes de maniobra. El trabajo doméstico en sentido amplio y las tareas de cuidado exigen un tiempo de dedicación muy específica que no admiten desplazamientos. Si bien estas actividades pueden ser externalizadas al Estado, al mercado o a la familia desde el plano teórico, esa posibilidad de externalización no es del todo real para los beneficiarios. Por un lado, los servicios públicos de cuidados no se encuentran muy extendidos y por otro la insuficiencia e irregularidad de los ingresos de las familias de los beneficiarios no permiten recurrir a la contratación de un servicio de cuidado en el mercado. Así, sólo el ámbito privado de la familia constituye en algunos casos una opción. En lo que respecta a las posibilidades de articulación de los diferentes tiempos sociales, a esta problemática es necesario sumarle la obligatoriedad de las actividades de contraprestación exigidas por el PJJHD.

De esta manera, las estrategias de articulación temporal remiten a las diferentes formas en las que los individuos ordenan prácticamente las múltiples propiedades temporales de los procesos sociales en los que se encuentran inmersos. Al constituirse la irregularidad y la

precariedad las principales característica de la vida cotidiana de estos sectores, terminan por establecerse en una forma de regularidad. Esta inestabilidad se expresa en la vida cotidiana, pero encuentra su origen en las formas en las que las instituciones organizan la cohesión social.

La construcción de un problema de investigación en el punto de inflexión de la ciencia política y de los estudios de las temporalidades sociales (a través de la metodología de uso del tiempo fundamentalmente, pero que también se nutre de entrevistas en profundidad y el análisis de documentos) mostró una serie de potencialidades tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. Por un lado, permitió dar cuenta de procesos escasamente explorados y, por el otro, la información construida a partir de la metodología de uso del tiempo brindó evidencia empírica que permitió mostrar la incidencia que tiene un tipo particular de políticas de lucha contra la pobreza y regulatorias del desempleo en moldear la temporalidad de los beneficiarios. Tal como señala Auyero (2013), en la “etiología” de la experiencia del tiempo de los que viven en lo más bajo del orden socio-simbólico, lo que hacen (y lo que no hacen) los agentes del Estado y las fuerzas del mercado tiene su importancia. De la misma forma, esta metodología permitió caracterizar el “tiempo pleno” (Demazière, 2006), en el cual se encuentran inmersos los desocupados asistidos por el Estado, mostrando los problemas de competencia en los usos del tiempo.

Sin lugar a dudas, la confluencia de estos dos campos disciplinares posibilita un amplio espacio para problematizar la “tempografía” (Auyero, 2013) de las poblaciones desposeídas y el rol que las políticas de lucha contra la pobreza y regulatorias de desempleo tienen en la construcción de una temporalidad específica.

Prieto (2007) señala que el objeto de las ciencias sociales son las actividades que se realizan en la sociedad y/o sobre los sujetos que las realizan; o sea el objeto de las ciencias sociales no se centra en la actividades sin más, sino sobre las reglas, los principios y las pautas según las cuales esas actividades se articulan unas con otras, se unen, se separan, se acomodan, se relacionan de mil maneras. Consecuentemente, las ciencias sociales se centrarían en la comprensión y explicación de las actividades y de los sujetos que las realizan y sus relaciones, lo cual no es otra cosa que la comprensión y explicación del ordenamiento social. Dentro de este esquema, la noción de tiempo puede ser pensada como un revelador y, a la vez, un estructurador de las determinaciones más hondas tanto de los sujetos como de las actividades que realizan. Sin

embargo los estudios políticos han sido esquivos en el análisis de las formas por las cuales el Estado y las políticas cumplen un rol decisivo en la prácticas cotidianas de los beneficiarios directos de esas políticas.

Dentro de este esquema es imposible abandonar la “hipótesis estratégica” (Ramos Torre, 1992) de la pluralidad de los tiempos. En este sentido, la propuesta teórica que realiza Mc Taggart (citado en Gell, 1996 y Ramos Torre, 1992, 1992) es la que mejor sintetiza una propuesta realista que pueda ser plasmada en un campo de investigación. Para el autor, y tal como señaláramos, se deben diferenciar dos series temporales. La serie “A”, dinámica, constituida a partir del conjunto estratégico de presente-pasado-futuro, caracterizada por las verdades temporales y cuya clave es el devenir o “serie de los hombres”. Dentro de esta serie la conciencia subjetiva del tiempo provee esquemas apropiados para comprender el tiempo.

Por su parte, la serie “B”, es estática y conformada por relaciones ordinales temporales (sucesión y simultaneidad), así como por los aspectos topológicos y cronométricos del tiempo. Supone el tiempo como antes/después, la idea básica es el “ser”, las verdades son atemporales, y, finalmente, ni el “devenir” ni la “conciencia” son objetivos. Esta serie constituye la serie de las cosas.

Tal como señala Ramos Torre (1992) la idea de dualidad dicta que ambas series no se pueden reducir o derivar la una de la otra, sin que esto suponga que existan totalmente aparte y sin entremezclarse. En este sentido, lo interesante de esta idea en el campo de análisis de la multiplicidad del tiempo es que, arrancando de ella, puede determinarse en qué consiste un tiempo múltiple, como se puede concretar tal multiplicidad y cuáles son los límites de las variaciones. Este marco brinda un esquema plausible para analizar los rasgos temporales que exhiben los variados aspectos de la realidad social, es decir que exhiben los procesos sociales y, en este sentido, abren la posibilidad de dar cuenta de cómo las transformaciones operadas a nivel global impactan en el cotidiano de los sujetos jerárquicamente posicionados en toda la estructura de la sociedad.

Referencias bibliográficas

- ABAL MEDINA (h), Juan (2003), “La crisis política argentina y la reforma institucional pendiente”, en VI Congreso Nacional de Ciencia Política de la SAAP. Rosario.
- ABELLA, María Flor (2005), “Los micro-emprendimientos como estrategia de supervivencia. Una mirada sobre el Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales de la Municipalidad de Rosario”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- ACUÑA, Carlos, KESSLER, Gabriel y REPETTO, Fabián (2002), “Evolución de las políticas sociales argentinas en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer política social”. CLAPSO – The University of Texas at Austin.
- ADAM, Barbara (1995), *Timewatch. The social analysis of time*. Polity Press, Cambridge.
- ADAM, Barbara (1998), “When time is money. Contested rationalities of time and challenges to the theory and practice of work”. Working paper series. Paper 16. Disponible en internet vía: <http://www.cf.ac.uk/socsi/publications/workingpapers/pdf-files/wrkpaper16.pdf>.
- ADORNO, Theodor (1993), “Tiempo libre”, en ADORNO, Theodor *Consignas*. Amorrortu, Buenos Aires.
- AGUIAR, Neuma (1999), “Time Use Analysis in Brazil: How far will time use studies have advanced in Brazil by the year 2000?” Paper presented at the 1999 IATUR Conference “The State of Time Use Research at the End of the Century”, University of Essex, 6-8 October.
- AGUILAR VILLANUEVA, Luis (1992), “Estudio introductorio”, en AGUILAR VILLANUEVA, Luis (Ed.) *La hechura de las políticas*. Porrúa, Mexico.
- AGUILAR VILLANUEVA, Luis (1994), “Estudio introductorio”, en AGUILAR VILLANUEVA, Luis (Ed.) *Problemas públicos y agenda de gobierno*. Porrúa, Mexico.
- AGUIRRE, Rosario (2005), “Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances empíricos. La encuesta Montevideo 2003”, en AGUIRRE, Rosario, GARCÍA SAINZ, Cristina y CARRASCO, Cristina, *El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad*. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo N° 65, Santiago de Chile, Julio.
- AGUIRRE, Rosario (2006), “El uso del tiempo y el trabajo no remunerado en Uruguay”, en VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en el Marco de las Metas del Milenio. Aguascalientes, México, del 19 al 21 de septiembre.
- AGUIRRE, Rosario (2009a), “Introducción general”, en Aguirre Rosario (Ed.) *Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay*. INE, INMUJERES, UDELAR, UNIFEM, Montevideo.
- AGUIRRE, Rosario (2009b), “Uso del tiempo y desigualdades de género en el trabajo no remunerado”, en AGUIRRE, Rosario (Ed.) *Las bases invisibles del bienestar social. El*

trabajo no remunerado en Uruguay. INE, INMUJERES, UDELAR, UNIFEM, Montevideo.

AGUIRRE, Rosario, GARCÍA SAINZ, Cristina y CARRASCO, Cristina (2005), *El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad*. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo N° 65, Santiago de Chile, julio.

AHN, Namkee, JIMENO, Juan F, UGIDOS, Arantza (2003), “Mondays at the sun: unemployment, time use, and consumption patterns in Spain”. Paper prepared for the IZA Conference of the International Research Consortium in the Economics of Time Use, May 26-27, 2003, St. Gerlach, The Netherlands. Disponible en internet vía: www.iza.org/iza/en/webcontent/events/timeuse/ahn_jimeno.pdf

ALBARRACIN, Dalma y D'ERAMO, Daniel (2001), “Temporalidades e investigación sociológica”, en *Anuario 2001, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco*. Disponible en internet vía: www.economicasunp.edu.ar/06-publicaciones/informacion/anuario%2001/Albarracin.PDF

ALONSO, Luis Enrique (2004), “La sociedad del trabajo: debates actuales. Materiales inestables para lanzar la discusión”, en *REIS*, N° 107, pag. 21-40.

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia (2002), “La transformación de las instituciones de reciprocidad y control: del don al capital social y de la biopolítica a la foco política”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 8, N° 1, enero-abril, pag. 57-89.

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia (2011), “Gubernamentalidad neoliberal y focopolítica en América Latina: los programas de transferencias condicionadas” en BARBA SOLANO, Carlos y COHEN, Néstor (Coord.) *Perspectivas críticas sobre la cohesión social. Desigualdad y tentativas fallidas de integración social en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Buenos Aires, julio.

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia (2013), “La nueva economía política de la pobreza: diagnóstico y asistencia”, en *Voces en el Fénix*. Año 4, N° 22, marzo, UBA, Buenos Aires, pag: 26-34. Disponible en internet vía: <http://www.vocesenelfenix.com/>

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia, IBARRA, Pedro y NAHARRO, Norma (2009), “Comparación entre el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo (Caso: Salta, Argentina)”. Proyecto “La reforma social en América Latina en la encrucijada. Transferencias condicionadas de ingreso o universalización de la protección social”. Fundación Carolina/CLACSO.

ÁLVAREZ, Sonia (1998), “Solidaridad privada e indiferencia pública, la nueva cara de la política social para los excluidos”, en 3° Jornadas Internacionales Estado y Sociedad: La Reconstrucción de Esfera Pública, Buenos Aires, Argentina, del 30 de septiembre al 2 de octubre.

ÁLVAREZ-URÍA, Fernando y VARELA, Julia (1996), “Presentación. El efecto Marienthal”, en LAZARSELD, Paul, JAHODA, Marie, ZEISEL, Hans, *Los Parados de Marienthal*. La Piqueta, Madrid.

- ALVARO, José Luis y CORNIERO, María (1987), “Apéndice a la edición española. Hábitos lingüísticos y representación social del desempleo”, en JAHODA, Marie, *Empleo y desempleo. Un análisis socio-psicológico*. Morata, Madrid.
- ANDORKA, Rudolf (1987), “Time budgets and their uses”, en *Annual Review of Sociology*, N° 13, pag. 149-164.
- ANDRENACCI, Luciano (2002), *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*. Ed. Al Margen. UNGS. Buenos Aires.
- ANDRENACCI, Luciano (2008), “Notas acerca de la política asistencial en América Latina”, en *Cátedra Paralela* N° 6, pag.7-30, Rosario.
- ANDREU, María Cristina, BUCCAFUSCA, Sandra y PÉREZ RECALDE, Guadalupe (2008), “Nuevos enfoques metodológicos: las encuestas de uso del tiempo en la provincia de Buenos Aires”, en IX Jornada de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género “Los caminos de la igualdad”. Del 30 de julio al 1 de agosto, Rosario, Argentina.
- ANSALDI, Waldo (2003), “El faro del fin del mundo. La crisis argentina de 2001 o cómo navegar entre el riesgo y la inseguridad”. Texto preparado para participar, en calidad de profesor visitante, en “La crisi que no acaba: Argentina des de la història i des de l’economia”, curso ofrecido en la XX Edició de la Universitat d’Estiu de Gandia.
- Antunes, Ricardo (1996), “¿Crisis de la sociedad del trabajo?”, en *Herramienta*, N° 1, agosto, pag.77-95, Buenos Aires.
- Antunes, Ricardo (1998), “La centralidad del trabajo hoy”, en *Herramienta*, N° 8, Buenos Aires. Diponible en internet vía: www.herramienta.com.ar.
- ANTUNES, Ricardo (1999), *Os sentido do trabalho*. Biotempo Editorial, São Paulo.
- ANTUNES, Ricardo (2001), “Los nuevos proletarios del mundo en el cambio de siglo”, en *Revista Realidad Económica*, N° 177, enero - febrero. Buenos Aires, pag. 34-47.
- ANTUNES, Ricardo (2004), “Algumas teses sobre o presente (e o futuro) do trabalho”, en DOWBOR, Ladislau, FURTADO, Odair, TREVISAN, Leonardo y SILVA, Helio (orgs.) *Desafios do trabalho*. Editora Vozes, Petrópolis.
- ARAYA, María José (2003), *Un acercamiento a las encuestas sobre uso del tiempo con orientación de género*. Naciones Unidas, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo N° 50, Santiago de Chile, noviembre.
- ARCIDIÁCONO, Pilar (s/f), “Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y Trueque: ¿el trabajo como vía para la “inclusión social”. s/d. Disponible en internet vía: http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/arcidiacono-programa_jefas_y_jefes.pdf
- ARCIDIÁCONO, Pilar y ZIBECCHI, Carla (2007), “Programas sociales desde la perspectiva de derechos. Una mirada sobre el rol de la sociedad civil y las estrategias de resistencia de los ‘beneficiarios’”, en *Estudios del trabajo*, N° 34, julio-diciembre, Buenos Aires.
- ARCIDIÁCONO, Pilar y ZIBECCHI, Carla (2008), “La sociedad civil y los programas sociales: alcances, limitaciones y desafíos desde un enfoque de derechos” en *Revista electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”*, año II N° 2, otoño.

- ARCIDIÁCONO, Pilar, PAUTASSI, Laura y ZIBECCHI, Carla (2010), “La experiencia comparada en materia de ‘clasificación’ de desempleados y destinatarios de programas de transferencias de ingresos condicionados”, en *Trabajo y Sociedad*, N° 14, vol. XIII, Verano, Santiago del Estero, Argentina.
- ARRIAGADA, Irma (2005), “Los límites del uso del tiempo: dificultades para las políticas de conciliación familia y trabajo”, en *Reunión de Expertos: “Políticas hacia las familias, protección e inclusión social”*. Naciones Unidas, CEPAL, 28 y 29 de noviembre, Santiago de Chile.
- ARROYO, Daniel (2004), “Prólogo. El rol de los Consejos Consultivos en el marco del Desarrollo Local”, en GONZÁLEZ BOMBAL, Inés (Comp) *Fortaleciendo las relaciones Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local*. CEDES, CENOR, UNGS.
- ARTEMOV, Victor (1997), “Los estudios del uso del tiempo en Rusia”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 123-142.
- ATUCHA Ana Julia y LABRUNEÉ, María Eugenia (2011), “La empleabilidad y los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo en Mar del Plata”, en *Trabajo y Sociedad*, N° 17, vol. XV, Invierno, Santiago del Estero, Argentina.
- AUTRAND, Anne (1987), “A propos de la division syndicale sur le temps de travail”, en *Temporalistes*, N° 7, octubre, pag. 4-7. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- AUYERO, Javier (1997), “Wacquant en la villa”, en *Apuntes de investigación*, año 1, N° 1, octubre, pag.7-12.
- AUYERO, Javier (2013), *Pacientes del Estado*. Buenos Aires, Eudeba.
- BARBA SOLANO, Carlos y VALENCIA LOMELÍ, Enrique (2011), “Hipótesis no comprobadas y espejismos de las transformaciones monetarias condicionadas” en BARBA SOLANO, Carlos y COHEN, Néstor (Coord.) *Perspectivas críticas sobre la cohesión social Desigualdad y tentativas fallidas de integración social en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Buenos Aires, julio.
- BARBEITO, Alberto y LO VUOLO Rubén (1992), *La modernización excluyente. Transformaciones económicas y Estado de Bienestar en Argentina*. Ed. Losada, Buenos Aires.
- BARBEITO, Alberto y LO VUOLO, Rubén (1998), *La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al neoconservador*. Miño y Dávila Editores-CIEPP, Buenos Aires.
- BARLASSINA, María José (2012), “Repensando la incidencia en las políticas sociales: el rol de las organizaciones sociales dentro de los Consejos Consultivos en Morón”, en XI Seminario de la RedMuni: “Repensando la Agenda Local”, 19 y 20 de octubre, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
- BARRERE-MAURISSON, Marie-Agnes, RIVER, Sabine y MARCHAND, Olivier (2001), *Tiempo de trabajo, tiempo parental. La carga parental: un trabajo de media jornada*. CEIL-PIETTE, Trabajo y Género N° 2, Buenos Aires, Argentina.
- BARRIENTOS, Armando (2012), “Dilemas de las políticas sociales latinoamericanas ¿Hacia una protección social fragmentada?”, en *Nueva Sociedad* Nro. 239, mayo-junio.

- BASSOLS, Mario (1990), "La marginalidad urbana: una teoría olvidada", en *Polis. Anuario de Sociología*, N° 90, Universidad Autónoma Metropolitana, pag. 181-198.
- BASUALDO, Eduardo (2001), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino y la valorización financiera (1971-2001)*. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, Buenos Aires.
- BATTHAYÁNY, Karina (2009), "Cuidado de personas dependientes y género", en AGUIRRE Rosario (Ed.) *Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay*. INE, INMUJERES, UDELAR, UNIFEM, Montevideo.
- BATTISTINI, Osvaldo (2005), "El valor de ser trabajador frente al valor de sí", en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: "Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades". Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- BAYÓN, María Cristina (2002), *Coping with job insecurity: the experience of unemployment in contemporary Argentina*. Tesis de doctorado, University of Texas at Austin.
- BAYÓN, María Cristina (2003), "La erosión de las certezas previas: significados, percepciones e impactos del desempleo en la experiencia argentina", en *Perfiles Latinoamericanos*, N° 22, junio, pag. 51-77.
- BAYÓN, María Cristina, ROBERTS, Bryan y SARA VÍ, Gonzalo (1998), "Ciudadanía social y sector informal en América Latina", en *Perfiles Latinoamericanos*, N° 13, diciembre, pag. 73-111.
- BECCARIA, Luis, CARPIO, Jorge y ORSATTI, Álvaro (1999), "Argentina: informalidad laboral en el nuevo modelo económico", en CARPIO, Jorge, KLEIN, Emilio y NOVACOVSKY, Irene (Comp) *Informalidad y exclusión social*. FCE, Siempro, OIT.
- BECK, Ulrich (2007), *Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Paidós, Buenos Aires.
- BELLONI, Maria Carmen (1986), "Social time dimensions as indicators of class distinction in Italy", en *International Social Science Journal*, Vol. 38, Issue I, feb., pag. 65-76.
- BELLONI, Maria Carmen (1988), "Les limites de recherche des budgets-temps", en *Temporalistes*, N° 8, avril, pag. 21-24. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- BELVEDERE, Carlos (1997), "El inconcluso "Proyecto Marginalidad". Una lectura extemporánea a casi treinta años", en *Apuntes de investigación*, año 1, N° 1, octubre, pag.97-115.
- BENERÍA, Lourdes (1984), *Reproducción, producción y división sexual del trabajo*. Ediciones Populares Feministas, Colección Teoría, Ediciones CIPAF, República Dominicana.
- BENERÍA, Lourdes (2005), "El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado", en Rodríguez, Dinha y Cooper, Jennifer (Comps.) *El debate sobre el trabajo doméstico*. UNAM, México.
- BENNHOLDT-THOMSEN, Verónika (1981), "Marginalidad en América Latina. Una crítica de la teoría", en *Revista mexicana de sociología*, N° 4, vol. 43, oct-dic, pag. 1505-1546.

- BENSUSÁN, Graciela (2003), "Reformas laborales en países desarrollados y en desarrollo: entre el conservadurismo y la innovación institucional", en *Perfiles Latinoamericanos*, N° 22, junio, pag. 11-49.
- BERGESIO, Liliana, GOLOVANEVSKY, Laura y MARCOLERI, María E. (2007), "Debate teórico metodológico y un nuevo intento de medición del sector informal urbano para el caso del barrio Alto Comedero (San Salvador de Jujuy, Argentina)" en *Laboratorio: revista de estudio sobre cambio social*, N° 20, pags. 16-23, Buenos Aires.
- BERGMANN, Werner (1992), "The problem of time in sociology. An overview of the literature on the state of theory and research on the sociology of time, 1900-82", en *Time & Society*, N° 1, Cardiff, United Kingdom, pag. 81-134.
- BERIAIN, Josetxo (2007), "Prologo. El puro suceder y el acontecimiento apropiador", en VALENCIA GARCÍA, Guadalupe *Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico*. Anthropos, México.
- BLASS, Leila Maria da Silva (1998), "Jornada de trabalho: uma regulamentação em múltipla escolha", en *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 13, N° 36, São Paulo, Fevereiro.
- BLEKESAUNE, Morten (2001), "Working conditions and time use" Paper presented at the IATUR-Conference Time Use 2001: *Statistics Norway*. Oslo, October 3-5.
- BOGANI, Esteban (2007), *De desocupados a "desplanados" y beneficiarios: la revisión de un acuerdo para la implementación local del Programa Jefes de Hogar*. Tesis de Maestría. Grin Verlag, Alemania.
- BOGANI, Esteban, GROSSO, Marco, PHILIPP, Ernesto, SALVIA, Agustín y ZELARAYÁN (2005), "Aunque no alcance se trata de sumar. El comportamiento de las mujeres, hombres y hogares particulares en el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados", en *Revista Argentina de Sociología*, Año 3, N° 5.
- BOISARD, Pierre (1984), "Réduction de la durée du travail et transformation du modèle temporel", en *Temporalistes*, N° 2, pag. 4-6. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- BOISARD, Pierre (1993), "L'aménagement du temps de travail entre tyrannie du marché et choix individuels", en *Temporalistes*, N° 25, Temps de travail, décembre, pag.. 6-9. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- BOISARD, Pierre (1996), "Temporalité industrielle et temps libre", en *Temporalistes*, N° 33, septembre, pag. 23-24. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- BOISARD, Pierre (1998), "Las políticas del reparto del tiempo de trabajo en la Unión Europea", en Gautié, Jérôme y Neffa, Julio César (comps.) *Desempleo y Políticas de Empleo en Europa y Estados Unidos*. Lumen/Humanitas/Trabajo y Sociedad/PIETTE, Buenos Aires.
- BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève (2002), *El nuevo espíritu del capitalismo*. Ediciones Akal, Madrid.
- BONKE, Jens (1997), "Cambio social y organización del tiempo en los países escandinavos", en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 99-121.

- BONVECCHI, Alejandro y SMULOVITZ, Catalina (2008), “Atender necesidades, crear oportunidades o garantizar derechos. Visiones sobre la política social”, en CRUCES, Guillermo, MORENO, Juan Martín, RINGOLD, Dena y ROFMAN, Rafael (Eds.) *Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario*. Banco Mundial, Buenos Aires.
- BORGES, Ângela (2007) “Mercado de trabalho, família e cuidado: a precarização da vida” em V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- BOUFFARTIGUE, Paul (2007), “División sexual del trabajo profesional y doméstico. Algunos apuntes para la perspectiva temporal”, en *Estudios del trabajo*, N° 34, julio-diciembre, Buenos Aires.
- BOUFFARTIGUE, Paul (2012), *Temps de travail et temps de vie. Les nouveaux visages de la disponibilité temporelle*. Presses Universitaires de France, París.
- BOURDIEU, Pierre (1979), *O desencantamento do mundo: estruturas econômicas e estruturas temporais*. Editora Perspectiva, São Paulo.
- BOURDIEU, Pierre (1981), “Préface”, en LAZARSFELD, Paul, JAHODA, Marie, ZEISEL, Hans *Les Chômeurs de Marienthal*. Minuit, París.
- BOURDIEU, Pierre (1988), *Cosas Dichas*, Buenos Aires, Ed. Gedisa
- BOURDIEU, Pierre (1999), *Meditaciones Pascalianas*. Anagrama, Barcelona.
- BOURDIEU, Pierre (2001), *Las estructuras sociales de la economía*. Manantial, Buenos Aires.
- BOURDIEU, Pierre (coordinador) (1997), *A Miséria do Mundo*. Editora Vozes, Petrópolis.
- BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc (1995), *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Anagrama, Barcelona.
- BOYER, Robert (2002), “La crisis argentina: un análisis desde la teoría de la regulación”, en *Realidad Económica*, N° 192, nov-dic, Buenos Aires.
- BRAZ DE AQUINO, Cássio (2003), “A temporalidade como elemento chave no estudo das transformações no trabalho”, en *Athenea Digital*, N° 4, pag. 151-159. Disponible en internet vía: <http://antalya.uab.es/athenea/num4/braz.pdf>.
- BREEDVELD, Koen , VAN DEN BROEK, Andries and HUYSMANS, Frank (2002), Background to the methods used in the Time Budget Survey (TBO). Social and Cultural Planning Office of the Netherlands. Disponible en internet vía: <http://www.scp.nl/onderzoek/tbo/english/achtergronden/history.pdf>
- BREIGER, Ronald L. (2000), “Control social y redes sociales: un modelo a partir de Georg Simmel”, en *Política y Sociedad*, N° 33, pag. 57-72, Madrid.
- BRITOS, Nora y CARO, Rubén (2002), “Workfare: sufrimiento social y disciplinamiento laboral”, en Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Asociación Argentina de Políticas Sociales y Universidad de Quilmes. Del 30 al 31 de mayo, Quilmes, Argentina.
- BROCHARD, Catherine (s/d), “L’impact des divers changements de régime temporel de travail sur la vie des salariés”, en *Temporalistes*, N° 7, pag. 1-3. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>

- BRUSCHINI, Cristina (2006), “Trabalho doméstico: inatividade econômica ou trabalho não-remunerado?”, en *Revista Brasileira de Estudos de População*, vol. 23, N° 2, São Paulo, July/Dec.
- BUENO, Carmen (1990), “Una lectura antropológica del sector informal”, en *Revista Nueva Antropología*, abril, año/vol. XI, N° 037, pag. 9-22.
- CACCIAMALI, María Cristina (2000), “Proceso de informalidad y sector informal. Reexamen de una discusión”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 6, N° 3, sep-dic., pag. 95-110.
- CALLEJO GALLEGOS, Javier (2005), “Estrategias temporales: relaciones entre tiempo de trabajo remunerado y tiempo de trabajo doméstico”, en *Cuaderno de Relaciones Laborales*, vol. 23, N° 1, pag. 175-2004.
- CALVI, Gabriel y ZIBECCHI, Carla (2006), “¿El epitafio del Plan Jefes de Hogar o una nueva orientación de la política social? Evaluando algunos de los escenarios sociolaborales posibles ante la consolidación del Plan Familia”, en *Laboratorio/n line*, año VII, N° 19, Otoño/Invierno. Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires - Argentina. Disponible en internet vía: <http://laboratorio.fsoc.uba.ar>.
- CAMERLO, Marcelo (2002), “¿Qué es la economía social? Indagaciones preliminares a partir de un abordaje comparativo”, en Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Asociación Argentina de Políticas Sociales y Universidad de Quilmes. Del 30 al 31 de mayo, Quilmes, Argentina.
- CAPECCHI, Victor (1990), “La economía informal y el desarrollo de la especialización flexible en Emilia Romagna”, en PORTES, Alejandro (Ed.) *La economía informal*. Planeta, Buenos Aires.
- CARBONETTO, Daniel (1997), “El sector informal y la exclusión social”, en VILLANUEVA, Ernesto (Ed.) *Empleo y globalización. La nueva cuestión social en Argentina*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
- CARIOLA, Cecilia (Coord.) (1992), *Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión*. CENDES/Ed. Nueva Sociedad, Caracas.
- CARIOLA, Cecilia y otros (1988), *Crisis, sobrevivencia y sector informal*. ILDIS-CENDES-Nueva Sociedad, Caracas.
- CARRASCO, Cristina (1995), “El treball domèstic y la reproducció social”, en *Documents d'analisi geogràfica*, N° 28, pag. 73-81.
- CARRASCO, Cristina (2005a), “Tiempo de trabajo, tiempo de vida. Las desigualdades de género en el uso del tiempo”, en AGUIRRE, Rosario, GARCÍA SAINZ, Cristina y CARRASCO, Cristina, *El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad*. Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo N° 65, Santiago de Chile, julio.
- CARRASCO, Cristina (2005b), “Hacia una metodología para el estudio del tiempo y del trabajo”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo

- Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- CARRASCO, Cristina y DOMÍNGUEZ, Marius (2003), “Género y uso del tiempo: nuevos enfoques metodológicos”, en *Revista de Economía Crítica*, N° 1, pag. 9-25.
- CASTAGNA, Alicia y WOELFLIN, María Lidia (2005), “El gran rosario: cambios socioeconómicos posconvertibilidad y posibles estrategias futuras”, en Segundas jornadas de historia regional comparada. Del 3 al 6 de octubre, Porto Alegre, Brasil.
- CASTEL, Robert (1997), *La metamorfosis de la cuestión social*. Paidós, Buenos Aires.
- CASTEL, Robert (1999), “Vulnerabilidad social, exclusión: la degradación de la condición salarial” CARPIO, Jorge y NOVACOVSKY, Irene (comps) *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*. FCE, FLACSO, Buenos Aires.
- CASTEL, Robert (2004), *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?* Manatí, Buenos Aires.
- CASTEL, Robert (2007), “Los desafíos de las mutaciones sociales, políticas y económicas del siglo XXI”, en *Temas y Debates*, año 11, N° 13, Universidad Nacional de Rosario.
- CASTELLS, Manuel y PORTES, Alejandro (1991), “El mundo debajo: orígenes, dinámica y efectos de la economía informal”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- CASTILLO CASTILLO, José (1997), “La irresistible ascensión de las máquinas del tiempo”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 39-56.
- CASTRONUOVO, Luciana, FISZMAN, Laura, FORNI, Pablo, LORENZO, Cristian y NARDONE, Mariana (2009), *La sociedad civil en Argentina. Una aproximación desde las políticas sociales*. IDICSO, Serie documentos de trabajo, Universidad del Salvador.
- CATTACIN Sandro, GIANNI, Matteo, MÄNZ, Markus y TATTINI, Veronique (1999), “Workfare, citizenship and social exclusion”, en BUSSEMAKER, Jet (ed.), *Citizenship and welfare state reform in Europe*. Routledge, London/New York.
- CECCHINI, Simone y MADARIAGA, Aldo (2011), *La trayectoria de los programas de transferencias con corresponsabilidad (PTC) en América Latina y el Caribe*. División de Desarrollo Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Disponible en Internet vía: www.eclac.cl
- CECCHINI, Simone, LEIVA, Alicia, MADARIAGA, Aldo y TRUCCO, Daniela (2009), *Desafíos de los programas de transferencias con corresponsabilidad: los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua*. CEPAL, ASDI, Santiago de Chile.
- CELS (2003), “Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos? Buenos Aires.
- CELS (2010), *Derechos humanos en Argentina: informe 2010*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- CENDA (2010), *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual: la economía argentina período 2002-2010*. Cara o ceca, Buenos Aires.

- CERRUTTI, Marcela (2000), “Determinantes de la participación intermitente de las mujeres en el mercado de trabajo del área metropolitana de Buenos Aires”, en *Desarrollo Económico*, vol. 39, N° 156, enero-marzo, pag. 619-638.
- CHARMES, Jaques (1991), “Una revisión crítica de los conceptos, definiciones y estudios del sector informal”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- CHIROLEU, Adriana, DELFINO, Andrea (2007), “Estructura social y desigualdades de género. La situación de las mujeres en la Argentina de principios de siglo”, en CARBONERO GAMUNDÍ, María Antonia y LEVÍN, Silvia (comps.) *Entre familia y trabajo, Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina*. Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- CHIROLEU, Adriana, DELFINO, Andrea, GANDINI, Luciana, VORAS, Claudia (2000), Transformaciones socioeconómicas en la provincia de Santa Fe en la década menemista. Material de Cátedra, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales -U.N.R., Rosario.
- CHIROLEU, Adriana, DELFINO, Andrea, NOGUEIRA, María Elena (2003), “Sentados sobre el miedo de correr. El comportamiento de algunos indicadores sociales en veinte años de democracia”, en *Desarrollo y Región ¿Hay una nueva Argentina?* Editorial Amalevi, Rosario, pag 135 -148.
- COGLIANDRO, Gisell (2010), “El programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social y los cambios en los Programas de Transferencias Condicionadas”. Fundación Siena, Apuntes 12, Marzo. Disponible en internet vía: www.fundacionsiena.org.ar
- COHEN, Ernesto y FRANCO Rolando (2010), “Programas de transferencias condicionadas ¿pidiendo peras al olmo?”, en *Persona y Sociedad* N° 3, vol. XXIV, Universidad Alberto Hurtado.
- CONTARTESE, Daniel y MACEIRA, Verónica (2005), “Diagnóstico sobre la situación laboral de las mujeres. Segundo semestre de 2005”, en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. *Trabajo, ocupación y empleo. Relaciones laborales, territorios y grupos particulares de actividad*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Buenos Aires
- CORAGGIO, José Luis (2004), “Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social”, en DANANI, Claudia (Comp.), *Política social y Economía Social*. Colección Lecturas de Economía Social, UNGS, Altamira, OSDE, Buenos Aires.
- CORIAT, Benjamin (1994), *Pensar pelo Averso. O modelo japonês de trabalho e organização*. Editora da UFRJ/Revan, Rio de Janeiro.
- CORREA, María Eugenia y HERMIDA, Mariano (2005), “Vivir del Plan. Estudio de caso de jóvenes beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar del barrio Rafael Castillo de la provincia de Buenos Aires: experiencias de vida en torno a planes sociales”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: "Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades". Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.

- CORTÉS, Fernando (1988), “La informalidad comedia de equivocaciones”, en *Nueva Sociedad*, N° 97, sep-oct., pag. 41-49.
- CORTÉS, Fernando (2000), “La metamorfosis de los marginales: la polémica sobre el sector informal en América Latina”, en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (Coord.) *Tratado latinoamericano de sociología del Trabajo*. FCE, México.
- CORTÉS, Fernando (2006), “Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad, marginalidad económica y exclusión social”, en *Papeles de Población*, N° 047, enero-marzo, Universidad Autónoma del Estado de México, pag. 71-84.
- CORTÉS, Rosalía y MARSHALL, Adriana (1993), “Modelo de crecimiento, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo. Argentina, 1890-1990” en OIT *Reestructuración y regulación institucional del mercado de trabajo*. Ginebra.
- COSTA, María Ignacia (2005), “Crisis del trabajo, políticas sociales y propuestas alternativas”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- CRAVINO, María Cristina; FOURNIER, Marisa; NEUFELD, María Rosa y SOLDANO, Daniela (2002), “Sociabilidad y micropolítica en un barrio ‘bajo planes’”, en ANDRENACCI, Luciano (org.), *Cuestión social y política social en la Argentina contemporánea*. UNGS / Ed. Al Margen, La Plata.
- CRUCES, Guillermo, EPELE, Nicolás, GUARDIA, Laura (2008), *Los programas sociales y los objetivos de desarrollo del milenio en Argentina*. CEPAL, Serie Políticas Sociales N° 142, Santiago de Chile.
- CUNILL GRAU, Nuria (2005), “La intersectorialidad en el gobierno y la gestión de la política social” en X Congreso Internacional de CLAD sobre reforma del Estado y de la Administración Pública. Santiago, Chile, del 18 al 21 de octubre.
- CYRINO, Rafaela (2009), “Trabalho, temporalidade e representações sociais de gênero: uma análise da articulação entre trabalho doméstico e assalariado”, en *Sociologias*, Porto Alegre, año 11, N° 21, jan/jun.
- DA SILVA, Josué Pereira (1996), *Três discursos, uma sentença. Tempo e trabalho em São Paulo –1906-1932*. Annablume, FAPESP, São Paulo.
- DAL ROSSO, Sadi (2004), “Dilemas do tempo de trabalho no Brasil e no mundo globalizado”, en DOWBOR, Ladislau, FURTADO, Odair, TREVISAN, Leonardo y SILVA, Helio (orgs.) *Desafios do trabalho*. Editora Vozes, Petrópolis.
- DAL ROSSO, Sadi (2006a), “Jornada de trabalho: duração e intensidade”, en *Ciência e cultura*, vol. 58, N° 4, São Paulo, out./dez.
- DAL ROSSO, Sadi (2006b), “Longas jornadas: o tempo de trabalho na construção da sociedade brasileira”, en *Guanicus. Revista da Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns*. FECHA/FEA, N° 03/04, pag. 27-62, Goiás. Nov. 2005/Jun.
- DAL ROSSO, Sadi (2006c), “Intensidade e imaterialidade do trabalho e saúde”, en *Revista Trabalho, Educação e Saúde*. FIOCRUZ, Vol 4 N° 1, março.

- DANANI, Claudia y GRASSI, Estela (2008), “Ni error, ni omisión. El papel de la política de estado en la producción de las condiciones de vida y de trabajo social. El caso del sistema provisional de la Argentina (1993-2008)”, en LINDENBOIM, Javier (comp), *Trabajo, ingresos y políticas públicas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*. Eudeba, Buenos Aires.
- DANANI, Claudia y LINDENBOIM, Javier (2003a), “Presentación”, en LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (coord.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Editora Biblos, Buenos Aires.
- DANANI, Claudia y LINDENBOIM, Javier (2003b), “Trabajo, política y políticas sociales en los 90: ¿hay algo de particular en el caso argentino?”, en LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (coord.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Editora Biblos, Buenos Aires.
- De CASTRO, Carlos (2008), “La influencia de las expectativas en la organización temporal de la vida laboral”, en *Política y sociedad*, vol. 45, N° 2, pag. 169-188.
- DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (2000), “Presentación”, en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (Comp.), *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo*. FCE, México.
- DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (2008), “Del concepto ampliado de trabajo al de sujeto laboral ampliado”, en LÓPEZ PÓINO, Carmen *et. al* (2008), *Vías y escenarios de la transformación laboral: aproximaciones teóricas y nuevos problemas*. Editorial Universidad Nacional del Rosario, Bogotá.
- DE LA PEÑA, Guillermo (1994), “Presentación”, en LOMNITZ, Larissa *Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana*. FLACSO, México.
- DE SOTO, Hernán (1991), “¿Por qué importa la economía informal”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- DEIBE, Enrique y CASTILLO Marín, Luis (2003), “Políticas sociales en Argentina: derecho de inclusión social familiar. Programa Jefes/as de Hogar”, en *Revista Socialis*, vol. 7, pag. 101 -114, Rosario.
- DEJOURS, Chistophe (1992), *A loucura do trabalho. Estudo de psicopatologia de trabalho*. Cortez Editora-Oboré, São Paulo. (Edición original: 1980).
- DEJOURS, Chistophe (2006), *A banalização da injustiça social*. Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro. (Edición original: 1998).
- DEL RE, Alisa (1995), “Tiempo del trabajo asalariado y tiempo del trabajo de reproducción”, en *Política y Sociedad* N° 19, Madrid, pag. 75-81.
- DEL VALLE, Alejandro (2008), *Estado, ciudadanía y bienestar*. Elaleph.com, Buenos Aires.
- DELFINO, Andrea (1999), *Mulheres e executivas: Trajetórias de gênero no Brasil*. Tesis de Maestría. Mestrado em Sociologia com Concentração em Antropologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) del Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil. Directora: Prof. Alice Rangel de Paiva Abreu

- DELFINO, Andrea (2002), "Informalidad", en CHIROLEU, Adriana, DELFINO, Andrea y VORAS Claudia *Glosario de términos de uso frecuente en Estructura Social*. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales –Universidad Nacional de Rosario, Serie Cuadernos de Cátedra N° 39, Rosario.
- DELFINO, Andrea (2006), "Territorialización de los sectores populares y planes sociales. Un análisis de las contraprestaciones del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en la ciudad de Rosario", en VI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales "Escenarios prospectivos acerca del desarrollo del territorio, una reflexión estratégica". Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y Universidad Nacional del Litoral (UNL). Del 15 al 17 de noviembre, Santa Fe, Argentina.
- DELFINO, Andrea (2007), "Trabajo y subsidios: orígenes, evolución y contraprestaciones del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la ciudad de Rosario", en PANAIÁ, Marta (Coord.), *Transformaciones territoriales y productivas en el mercado de trabajo Litoral*. Impresiones Buenos Aires, Buenos Aires.
- DELFINO, Andrea (2009a), "La metodología de uso del tiempo: sus características, limitaciones y potencialidades", en *Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología*. Vol. 18, N° 2 (abril-junio). Universidad de Zulia, Venezuela.
- DELFINO, Andrea (2009b), "La territorialización del control social a través de las políticas de workfare", en *Avaliação de Políticas Públicas*. Universidade Federal do Ceará, Brasil (en prensa).
- DELICH, Francisco (1999), *Hacia una sociología del desempleo*. Serie documentos e informes de investigación. FLACSO, Argentina.
- DEL TROCO Paganelli, José (2005), "Entre la equidad distributiva y la legitimación política: el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en Argentina" en *Perfiles Latinoamericanos*, N° 26, julio-diciembre, FLACSO, México.
- DEMAZIERE, Didier (1995), *Le chômage de longue durée*. Presses Universitaires de France, Paris.
- DEMAZIERE, Didier (2005), *Le chômage de longue durée a l'empire du temps*. Comunicación presentada en el encuentro "Desempleados de longa duração: trajetórias e peripecias" organizado por el Instituto de Sociología de la Facultad de Letras de la Universidade de Porto.
- DEMAZIERE, Didier (2006), "Ni tiempo vacío ni sobrante de tiempo: el desempleo como prueba fragmentada" en *Revista de Trabajo*, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina, enero-junio.
- DOMBOIS, Rainer (1998), "Erosiones de las relaciones laborales y nuevas formas de trabajo remunerado. Notas desde Alemania", en *Nueva Sociedad*, N° 158, noviembre-diciembre, pag. 185-2005.
- DRAIBE, Sonia y RIESCO, Manuel (2009), *El estado de bienestar social en América latina. Una nueva estrategia de desarrollo*. Madrid, Fundación Carolina.
- DUBAR, Claude (2002a), "Présentation: Quelles temporalités?", en *Temporalistes*, N° 44, septembre. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>.

- DUBAR, Claude (2002b), “L’articulation des temporalités dans la construction des identités personnelles: questions de recherche et problèmes d’interprétation”, en *Temporalistes*, N° 44, septembre. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>.
- DUFOUR, Pascale (2002), “La vie quotidienne des sans-emploi: des formes communes de résistance, au-delà des frontières”, en *Nouvelles pratiques sociales*, Volume 15, N° 1, “La solidarité internationale”. Disponible en internet vía: <http://www.erudit.org/revue/nps/2002/v15/n1/008268ar.html>
- DURÁN, María Ángeles (1997), “La investigación sobre uso del tiempo en España: algunas reflexiones metodológicas”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 163-189.
- DURÁN, María Ángeles (2002), “La contabilidad del tiempo”, en *Praxis Sociológica*, N° 6, Universidad de Castilla, La Mancha.
- DURÁN, María Ángeles (2005a), “El trabajo no remunerado y las familias”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- DURÁN, María Ángeles (2005b), “Invitación al análisis sociológico de la contabilidad nacional”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- DURÁN, María Ángeles (2005c), “La investigación sobre uso del tiempo en España en la década de los noventa. Algunas reflexiones metodológicas”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- DURÁN, María Ángeles (2005d), “Los tiempos de la ciudad. Notas del diario de trabajo: de 6 de noviembre a 13 de diciembre”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- DURÁN, María Ángeles (2005e), “Sociopsicología del trabajo no remunerado”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.

- DURKHEIM, Emile (2000), *Sociología y filosofía*. Miño y Dávila Editores, Madrid. (Edición original: 1924).
- DURKHEIM, Emile (2003), *Las forma elementales de la vida religiosa*. Alianza, Madrid. (Edición original: 1912).
- EGUÍA, Amalia (1997), “Sector del trabajo y situación familiar en barrio pobres del Gran La Plata”, en V Congreso Argentino de Antropología Social. Del 29 de julio al 1 de agosto, La Plata, Argentina.
- ELÍAS, Norbert (1998), *Sobre o tempo*. Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro.
- ELLEGARD, Kajsa (2001), “The individual and her household in the population. A VR-visualisation of activity patterns” Paper presented at the IATUR-conference Time Use 2001: Statistics Norway. Oslo, October 3-5.
- ENRÍQUEZ ROSAS, Rocío (2000), “Redes sociales y pobreza: mitos y realidades”, en *La ventana*, N° 11, julio.
- ESQUIVEL, Valeria (2009), *Uso del tiempo en la ciudad de Buenos Aires*. UNGS, Los Polvorines.
- FAIRRIIS, David (2002), “Towards a theory of work intensity”. Colloque Intensification du Travail. Centre d' études de l'Emploi, Paris.
- FALAPPA, Fernando y ANDRENACCI, Luciano (2009), *La política social de la Argentina democrática: 1983-2008*. UNGS, Buenos Aires.
- FALCÓN, Ricardo (1984), *Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899)*. CEAL, Buenos Aires.
- FEIJOÓ, María del Carmen (2001), *Nuevo país, nueva pobreza*. FCE, Buenos Aires.
- FÉLIX, Mariano (2005), “La reforma económica como instrumento de disciplinamiento social: la economía política de las políticas contra la pobreza y la desigualdad en Argentina en los 90”, en ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia (comp), *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras discursivas y actores*. CLACSO, Buenos Aires.
- FERNÁNDEZ, Arturo y ROZAS, Margarita (1984), *Políticas sociales y trabajo social*. Humanitas, Buenos Aires.
- FERNÁNDEZ, Ma. Liliana, FLORES, Luciana, LAGGER, Patricio y MORELLI, Juan (2007), “La promoción del trabajo decente en el Aglomerado Gran Rosario”, en 11 Jornadas “Investigación en la Facultad”. Facultad de Ciencias económicas y Estadísticas – Universidad Nacional de Rosario. Noviembre.
- FIERRO MORALES, Alexandra (2010), “Experiencia de desempleo en hombres y mujeres en la ciudad de Bogotá”, en VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, México DF, México, del 20 al 23 de abril.
- FILGUERA, Fernando (1997), “El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada”, en Centroamérica en reestructuración: ciudadanía y políticas sociales. FLACSO, Políticas Sociales, San José de Costa Rica.

- FLORES, Fabián (2002), "Trabajo, género y rutinas temporales", en *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, Vol. VI, N° 119 (48). Disponible en internet vía: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-48.htm>.
- FRASER, Nancy (2003), "¿De la disciplina hacia la flexibilización? Releyendo a Foucault bajo la sombra de la globalización", en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, año/vol. XLVI, N° 187, UNAM, México, pag. 15-33.
- FREEMAN, Richard y SCHETTKAT, Ronald (2005), "Jobs and homework. Time-use evidence", en *Economic Policy January*, Great Britain, pag. 5-50.
- FREYRE, María Laura (2013), "Políticas de empleo. Programas sociales con condicionalidad: el caso del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en la localidad de Malvinas Argentinas", en *Trabajo y Sociedad*, N° 21, vol. XVII, Invierno, Santiago del Estero, Argentina.
- FREYSSINET, Jacques (1996), "El desempleo y sus perspectivas", en *Herramienta*. Buenos Aires, agosto, N° 1, pag. 111-119.
- FREYSSINET, Jacques (1998), "Definición y medición del desempleo", en NEFFA, Julio y GAUTIÉ, Jérôme (comp.), *Políticas contra el desempleo en Europa y Estados Unidos*. Lumen/Humanitas/Trabajo y Sociedad/PIETTE, Buenos Aires.
- FREYSSINET, Jacques (2006), "Mecanismos del control social", entrevista publicada en *Página 12*, Suplemento Cash. Domingo, 1 de octubre.
- FURTADO, Odair (2004), "Trabalho e subjetividade. O movimento da consciência do trabalhador desempregado", en DOWBOR, Ladislau, FURTADO, Odair, TREVISAN, Leonardo y SILVA, Helio (orgs.) *Desafios do trabalho*. Editora Vozes, Petrópolis.
- GALASSO, Emanuela y RAVALLIÓ, Martín (2003) "Social Protection in a Crisis: Argentina's Plan Jefes y Jefas". World Bank Policy Research Working Paper 3165, Development Research Group, November 2003, Washington D.C.
- GALEANO, Eduardo (1998), *Patas arriba. La escuela del mundo al revés*. Siglo XX, México. Poema: El miedo global, pag. 83.
- GALLARDO LEÓN, Claudio y PEDRERO Nieto, Mercedes (2006), "Algunos resultados de la encuesta de uso del tiempo de Ecuador 2005", en VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en el Marco de las Metas del Milenio. Aguascalientes, México, del 19 al 21 de septiembre.
- GALLIE, Duncan y PAUGAM, Serge (2000), "The experience of unemployment in Europe: the debat" en GALLIE, Duncan y PAUGAM, Serge *Welfare regimes and the experience of unemployment in Europe*. Oxford University Press. New York.
- GAMMAGE, Sarah (2009) *Género, pobreza de tiempo y capacidades en Guatemala: un análisis multifactorial desde una perspectiva económica*. Cepal; Ciudad de México.
- GANAM, Javier; GIUSTINIAN, Patricia; PEINADO, Guillermo; EZPELETA, Laura; SINTES Paula (2012), "Análisis del trabajo reproductivo no remunerado por nivel de ingresos y tipo de hogar en la ciudad de Rosario" en Decimoséptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario, Noviembre.

- GARCÍA DE FANELLI, Ana (1991), “Empleo femenino en Argentina: de la modernización de los 60 la crisis de los 80”, en *Desarrollo Económico*, vol. 31, N° 123, octubre-diciembre, pag. 396-414.
- GARCÍA DE LA RED, Victorino (1997), “La Encuesta de Presupuestos de Tiempo en el País Vasco”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 205-218.
- GARCÍA SAINZ, Cristina (2005a), “Aspectos conceptuales y metodológicos de las encuestas de uso del tiempo. Aplicación al caso de España”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- GARCÍA SAINZ, Cristina (2005b), “Trabajo no remunerado versus mercantilización”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- garcía trujillo, Andrés (2009), “Los programas de transferencias condicionadas: mecanismos de legitimidad política del orden neoliberal en América latina. El caso de Familias en Acción”. Tesis de Maestría. Maestría en Política Social. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
- GARDNER, Jean (1993), El trabajo doméstico revisitado: una crítica feminista de las economías neoclásica y marxista. Ponencia presentada en la Conferencia Internacional Out of the margin. Perspectivas feministas en la teoría económica. Ámsterdam, del 2 al de 5 de junio.
- GARGANTA, Santiago y GASPARINI, Leonardo (2012), “El impacto de un programa social sobre la informalidad laboral: el caso de la AUH en Argentina” en *II Jornadas Nacionales Sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo*, Santa Fe, julio.
- GASPARINI, Giovanni (1993), “Temps de travail”, en *Temporalistes*, N° 23 Chercheurs italiens, mars, pag. 22-24. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- GASPARINI, Leonardo y CRUCES, Guillermo (2010), Las Asignaciones Universales por Hijo. Impacto, discusión y alternativas. *CEDLAS, Documento de Trabajo* N° 102, La Plata.
- GAUTIÉ, Jérôme (1998), “Da invenção do desemprego à desconstrução”, en *Mana*, vol. 4, N° 2, Rio de Janeiro, outubro.
- GAUTIÉ, Jérôme (2004), “Repensar la articulación entre mercado del trabajo y la protección social en el postfordismo”, en *Cuadernos de relaciones laborales*, vol. 22, N° 1.
- GELL, Alfred (1996), *The anthropology of time: cultural constructions of temporal maps and images*. Berg, Oxford, Washington, D. C.
- GERMANI, Gino (1980), *El concepto de marginalidad*. Nueva Visión, Buenos Aires.

- GERSHUNY, Jonathan (1987), “Estilo de vida, estructura económica y uso del tiempo”, en *REIS*, N° 38, pag. 163-191.
- GERSHUNY, Jonathan y SULLIVAN, Oriel (1998), “The sociological uses of time-use diary analysis”, en *European Sociological Review*, Vol 14, N° 1, pag. 69-85.
- GIDDENS, Anthony (1989), *A constituição da sociedade*. Martins Fontes, São Paulo.
- GIDDENS, Anthony (1991), *As conseqüências da modernidade*. Editora UNESP, São Paulo.
- GIMENEZ, Sandra y ZIBECCHI, Carla (2005), “El sentido del trabajo y la subjetividad de los “beneficiarios”. Desafíos para futuras orientaciones en materia de políticas sociales”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- GLORIEUX, Ignace (1998), “Que signifie votre temps? Quelques arguments pour inclure, dans la recherche sur les budgets-temps, des indicateurs sur le signification du temps”, en *Temporalites*, N° 39, pag. 18-25. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- GLORIEUX, Ignace y ELCHARDUS, Mark (1999), “What does your time mean? Some arguments for including indicators on the meaning of time use in time budget research”. Paper prepared for de 1999 IATUR Conference “The state of time use research at the end of century”. University of Essex, Colchester, UK, 6-8 october.
- GOLBERT, Laura (1998), “El problema del empleo y las políticas sociales”, en *Boletín Informativo Techint*, N° 296, octubre/diciembre.
- GOLBERT, Laura (2004), *¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados*. CEPAL, Serie Políticas Sociales N° 84, Santiago de Chile, abril. Disponible en internet vía: www.eclac.cl/.../publicaciones/xml/4/14574/P14574.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt
- GOLBERT, Laura (2006), *Aprendizajes del Programa de Jefes y Jefas de Argentina..* CEPAL, Reunión de Expertos. Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias. Disponible en internet vía: http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/4/26924/paper_LauraGolbert.pdf
- GOLBERT, Laura y GIACOMETTI, Claudia (2008), *Los programas de transferencias de ingresos condicionados: el caso argentino*. IFHC, CIEPLAN. Disponible en internet vía: <http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/222.pdf>
- GOLOVANEVSKY, Laura (2008), *Vulnerabilidad y transmisión intergeneracional de la pobreza. Un abordaje cuantitativo para Argentina en el siglo XXI*. Colección de tesis doctorales de la Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría de Investigación y Doctorado, UBA, Año II, N° 1, Buenos Aires.
- GONZÁLEZ García, José M. (1997), “Flecha del tiempo y rueda de la fortuna”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 7-79.
- GONZÁLEZ, Mariana (2003), “Transformaciones de hecho y de derecho en las relaciones laborales en los 90”, en LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (coord.), *Entre el*

trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada. Editora Biblos, Buenos Aires.

- GORBÁN, Débora (2006), “Trabajo y cotidianidad. El barrio como espacio de trabajo de los cartoneros del Tren Blanco”, en *Trabajo y Sociedad*, N° 8, Vol. VII, otoño, Santiago del Estero.
- GORZ, André (1994) “Salir de la sociedad salarial”, en *Debats* N° 50, diciembre. Disponible en internet vía: www.nodo50.org.
- GORZ, André (1997), “La declinante relevancia del trabajo y el auge de los valores post-económicos”, en *Herramienta*, N° 2, marzo, pag. 27-38, Buenos Aires.
- GOULDNER, Alvin (1960), “The norm of reciprocity: a preliminary statement”, en *American Sociological Review*, N° 25, pag. 161-178.
- GOULDNER, Alvin (1979), *La crisis de la sociología occidental*. Amorrortu, Buenos Aires.
- GRANA, Juan y KENNEDY, Damián (2005), “Mercado de trabajo en el período 1998 – 2004: Asalariados y extensión de la jornada de trabajo”, en *Laboratorio/n line. Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, año VI, N° 17-18. Otoño/Invierno. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en internet vía: <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm>.
- GRASSI, Estela (1997), “Políticas sociales, necesidades y la cuestión del trabajo como capacidad creadora del sujeto humano”, en VILLANUEVA, Ernesto (coord.), *Empleo y Globalización. La nueva cuestión social en Argentina*. Universidad Nacional de Quilmas, Buenos Aires.
- GRASSI, Estela (2000), “Procesos políticos culturales en torno al trabajo. Acerca de la problematización de la cuestión social en la década del 90 y el sentido de las soluciones propuestas”, en *Revista Sociedad*, N° 16, UBA, Buenos Aires.
- GRASSI, Estela (2002), “El asistencialismo en el estado neoliberal. La experiencia argentina de la década del 90”, en Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Asociación Argentina de Políticas Sociales y Universidad de Quilmes. Del 30 al 31 de mayo, Quilmes, Argentina.
- GRASSI, Estela (2003), “Condiciones de trabajo y exclusión social. Más allá del empleo y la sobrevivencia”, en *Revista Socialis*, vol.7, pag. 27-47, Rosario.
- GRASSI, Estela (2012), “Política sociolaborales en la Argentina contemporánea. Alcances, novedades y salvedades”, en *Revista de Ciencias Sociales*, N° 135-136 (I-II), pag. 185-198, Costa Rica.
- GRASSI, Estela y ALAYÓN Norberto (2005), “Condición de empleo y pobreza en Argentina. Las consecuencias de las políticas neoliberales de los años 90”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas Universidad Mayor de San Marcos*, año 10, N° 25, junio, pag. 111-128.
- GRIMSON, Alejandro (2003), “La vida organizacional de zonas populares de Buenos Aires”. Project “Latin American urbanization in the late 20th century: a comparative study” – Center for the study of urbanization and internal migration in developing counties.

Population Research Center, University of Texas at Austin. Working Paper Series 02. Project Second Meeting. Montevideo, Uruguay, agosto.

- GRISCI, Carmem Ligia Iochins (2002), "Tempos modernos, tempos mutantes: produção de subjetividade na reestruturação do trabalho bancário". Working paper N° 3. SOCIUS-UFRGS, Brasil. Disponible en internet vía: <http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/index.htm>
- GRONDONA, Ana Lucía (2011), "Tradición y traducción: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en Argentina. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, UBA. Directora: Dra. Susana Murillo.
- GROSSIN, William (1991), "Vers quelle durée du travail?", en *Temporalistes*, N° 16, janvier, pag. 3-4. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- GROSSIN, William (1993a), "Une maladie obsessionnelle: 'gagner du temps!'", en *Temporalistes*, N° 25, Temps de travail, decembre. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- GROSSIN, William (1993b), "Les durées de travail il y a cent ans", en *Temporalistes*, N° 25, Temps de travail, decembre, pag. 14-17. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- GROSSIN, William (1998), "Limites, insuffisances et artifices des études de budgets-temps", en *Temporalistes*, N° 39, mars, pag. 8-17. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- HALPERIN WEISBURG, Leopoldo (2006), "La política social del nuevo siglo en Argentina: entre el desempleo y la marginación, el mecanismo del clientelismo político", en *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, año 11, N° 11, pag. 147-169.
- HANDLER, Joel F. (2003), "Ciudadanía social y workfare en Estados Unidos y Europa occidental: de status a contrato", en LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (coord.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Editora Biblos, Buenos Aires.
- HEILBORN, Maria Luiza (1997), "O Traçado da Vida: Gênero e Idade em Dois Bairros Populares do Rio de Janeiro", en REICHER MADEIRA, Felícia (org.) *Quém Mandou Nacer Mulher?* UNICEF, Editora Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro.
- HINTZE, Susana (2007), "Políticas sociales argentinas 1990-2006", en VUOTTO, Mirta *La co-construcción de políticas públicas en el campo de la economía social*. Prometeo, Buenos Aires.
- HIRATA, Helena, (2001), "¿Sociedad del ocio? El trabajo se intensificó", entrevista publicada en *Página 12*, año 11, N° 11, pag. 147-169. www.pagina12.com.ar
- HIRATA, Helena y ZARIFFIAN, Philippe (2007), "El concepto de trabajo", en *Revista de Trabajo*, año 3, N° 4, pag. 33-36.
- HIRWAY, Indira (2001), "Time Use Studies: Conceptual and Methodological Issues with Reference to the Indian Time Use Survey". Paper sent to the 2001 meeting of the International Association of Time Use Research, Oslo, Norway 2001.
- HOPENHAYN, Martín (2001), *Repensar el trabajo. Historia, profusión y perspectivas de un concepto*. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.

- HOPP, Malena Victoria (2009), “Políticas sociales de empleo en la Argentina 2003-2008: un estudio comparativo de planes de promoción del auto-empleo”, en 9 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “El escenario postconvertibilidad y los desafíos frente a la crisis económica mundial”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 05 al 07 de agosto.
- HUFTON, Olwen (1997), “La investigación europea sobre tiempo y género”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 83-98.
- HUMPHRIES, Jane y RUBERY, Hill (1994), “La autonomía relativa de la reproducción social: su relación con el sistema de producción”, en BORDERÍAS, Cristina, CARRASCO, Cristina y ALEMANY, Carmen *Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales*. Fuhem-Icaria, Barcelona.
- HUSSON, Michel (2001), “¿Fin del trabajo o reducción de su duración?”, en *Veredas* N°2, UAM Xochimilco, México.
- IGLESIAS, Esteban (2008), Democracia y acción colectiva. Construcción teórica de un enfoque politológico a partir de un estudio de caso. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario.
- IMBRIZI, Jaqueline María (2005), *A formação do indivíduo no capitalismo tardío*. Editora Hucitec, FAPESP, São Paulo.
- ISUANI, Ernesto Aldo (2008), “La política social argentina en perspectiva”, en CRUCES, Guillermo, MORENO, Juan Martín, RINGOLD, Dena y ROFMAN, Rafael (Eds.) *Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario*. Banco Mundial, Buenos Aires.
- JAHODA, Marie (1987), *Empleo y desempleo. Un análisis socio-psicológico*. Morata, Madrid. (Edición original: 1982).
- KESSLER, Gabriel (1996), “Algunas implicancias de la experiencia de la desocupación para el individuo y la familia”, en BECCARIA, Luis y LÓPEZ, Néstor (comps.) *Sin Trabajo*. UNICEF/Losada, Buenos Aires.
- KESSLER, Gabriel (1999), “El impacto social del desempleo. Aportes de la experiencia internacional”, en *Revista Socialis*, N° 1, pag. 117-137.
- KESSLER, Gabriel (2011), “Exclusión social y desigualdad, nociones útiles para pensar la estructura social argentina?”, en *Laboratorio*, N° 24, UBA.
- KESSLER, Gabriel y ROGGI, María Cecilia (2005), “Programas de superación de la pobreza y capital social: la experiencia argentina”, en ARRIAGADA, Irma (Ed.) *Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza*. CEPAL, N° 25, Santiago de Chile.
- KIRCHNER, Alicia (2003), “Combatiendo la pobreza junto a la sociedad civil”, en VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá. Del 28 al 31 de octubre.
- KRAWCZYK, Miriam (1993), “Mujeres en la región. Los grandes cambios”, en *Revista de la CEPAL*, N° 49, abril, pag. 7-19.
- LABORIE, Jean-Paul (2006), “Escenario acerca del desarrollo del territorio: una reflexión prospectiva”. Conferencia inaugural de la VI Bienal del Coloquio de Transformaciones

- Territoriales “Escenarios prospectivos acerca del desarrollo del territorio, una reflexión estratégica”. Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y Universidad Nacional del Litoral (UNL). Del 15 al 17 de noviembre, Santa Fe, Argentina.
- LABRUNÉE, María Eugenia y GALLO, Marcos (2005), “Informalidad, precariedad y trabajo en negro: distinción conceptual y aproximación empírica”, en *Realidad Económica* N° 210, IADE, Buenos Aires.
- LAHERA PARADA, Eugenio (2002). *Introducción a las políticas públicas*. FCE, México.
- LAUTIER, Bruno (1994), *L'économie informelle dans le tiers monde*. Éditions La Découverte, Paris.
- LAZARSFELD, Paul (1996), “Una pequeña ciudad obrera en paro”, en LAZARSFELD, Paul, JAHODA, Marie, ZEISEL, Hans (1996), *Los Parados de Marienthal*. La Piqueta, Madrid. (Edición original del artículo 1932)
- LAZARSFELD, Paul, JAHODA, Marie, ZEISEL, Hans (1996), *Los Parados de Marienthal*. Madrid, La Piqueta (Edición original: 1933).
- LEÓN GUZMÁN, Mauricio (2004), Asignación de recursos y responsabilidades al interior del hogar: lineamientos para su consideración en la evaluación de impacto de los programas sociales en el Ecuador. S/D. Disponible en Internet vía: www.eclac.cl
- LEVÍN, Silvia (2013), “El género en las políticas públicas: ¿una opción o una obligación?”, en *Revista Cátedra Paralela*, N° 10. UNR.
- LEVÍN, Silvia, CAMPOSTRINI, Adela, SOSA, Ruth y VORAS, Claudia (2007), “La política de género de las políticas públicas en Argentina”, en CARBONERO GAMUNDÍ, María Antonia y LEVÍN, Silvia (comps.) *Entre familia y trabajo, Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina*. Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- LEVY, Esther (2009), “Políticas públicas y formación de trabajadores desocupados en Argentina. Entre el derecho y la compensación”, en XXVIII Congreso internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericana (LASA) “Repensando las desigualdades”. Del 11 al 14 de junio, Rio de Janeiro, Brasil.
- LEWIS, David y WEIGERT, Andrew (1992), “Estructura y significado del tiempo social”, en RAMOS TORRE, Ramón (Comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid. (Edición original del artículo: 1981).
- LINDENBOIM, Javier (comp) (2008), *Trabajo, ingresos y políticas publicas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*. Eudeba, Buenos Aires.
- LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (2002), “La escasez de lo que sobra: sobre la articulación entre política económica y política social”, en Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Asociación Argentina de Políticas Sociales y Universidad de Quilmes. Del 30 al 31 de mayo, Quilmes, Argentina.
- LIPITZ, Alain (1991), *Las relaciones capital-trabajo en los comienzos del siglo XXI*. Instituto de Estudios sobre Estado y Participación – ATE.
- LO VUOLO, Rubén (2001), *Alternativas. La economía como cuestión social*. Altamira. Buenos Aires.

- LO VUOLO, Rubén (2004), “¿Hacia dónde va la política social en la región? Los caminos alternativos de la Argentina y Brasil”, en *Revista Tesis 11*, N° 73, junio-julio.
- LO VUOLO, Rubén (2009), “Asignación por hijo”. Serie Análisis de Coyuntura N° 21, CIEPP, Buenos Aires, Noviembre.
- LO VUOLO, Rubén (2012), “La política social, a base de fichas” en *Clarín*, 27 de febrero.
- LOMNITZ, Claudio (2005), “Sobre reciprocidad negativa”, en *Revista de Antropología Social*, N° 14, pag. 311-339.
- LOMNITZ, Larissa (1994), *Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana*. FLACSO, México.
- LOMNITZ, Larissa (1998), *Cómo sobreviven los marginales*. Siglo XXI, México (Edición original 1974).
- LONGO, María Eugenia (2005), “Un tiempo incierto. La socialización en el trabajo en un contexto de transformaciones”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- LOPEZ PINO, Carmen *et. al* (2008), *Vías y escenarios de la transformación laboral: aproximaciones teóricas y nuevos problemas*. Editorial Universidad Nacional del Rosario, Bogotá.
- LOPEZ ZADICOFF, Pablo y PAZ, Jorge (2003), “El Programa Jefes de Hogar. Elegibilidad, participación y trabajo”. *Documento de Trabajo N° 242*. Universidad del CEMA.
- LOZANO, Claudio (2001) “Comentario”, en BASUALDO, Eduardo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino y la valorización financiera (1971-2001)*. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, Buenos Aires.
- LUCHTERHAND, Elmer (1967), “La investigación y los conflictos que surgen al desarrollar programas sociales”, en LAZARSELD, Paul, SEWELL, William y WILENSKY, Harold (Comps.), *Planificación sociológica de los problemas sociales*. Paidós, Buenos Aires.
- LUCI, Florencia (2003), “Los programas de empleo en la Argentina de los noventa. Una aproximación comparada”, en 6 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 13 al 16 de agosto.
- LUHMANN, Niklas (1992), “El futuro no puede empezar: estructuras temporales en la sociedad moderna”, en RAMOS TORRE, Ramón (Comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid.
- LUHMANN, Niklas (1996), *Introducción a la teoría de los sistemas*. Anthropos, México DF. Lección 8: Tiempo.
- LUPICA, Carina *et. all.* (2003), “Representatividad y funcionamiento de los Consejos Consultivos- Programa Jefas y Jefes de Hogar. Análisis y Agenda de Reformas”. Fundación Grupo Sophia, Cáritas Argentina, Consejo Nacional Cristiano Evangélico, AMIA.

- MANTERO DE SAN VICENTE, Osvaldo (1988a), “La limitación del tiempo de trabajo”, en Calero, Fernando (coord.), *Nuevos retos del sindicalismo*. ILDIS, Editora Nueva Sociedad, Caracas.
- MANTERO DE SAN VICENTE, Osvaldo (1988b), “Flexibilización del trabajo”, en Calero, Fernando (coord.), *Nuevos retos del sindicalismo*. ILDIS, Editora Nueva Sociedad, Caracas.
- MARCHIONNI, Mariana y CONCONI, Adriana (2008), “¿Qué y a quién? Beneficios y beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas de ingresos”. Documentos de Trabajo N° 76, octubre, CEDLAS, Universidad Nacional de la Plata.
- MARSHALL, Adriana (1998), “Exposición”, en LINDENBOIM, Javier (Comp) *El desafío del empleo a finales del siglo XX*. Cuadernos del CEDEP N° 2, Instituto de Investigaciones Económicas – FCE- UBA.
- MARSHALL, Adriana (2004), *Labor market policies and regulation in Argentina, Brazil and Mexico*. Programmes and Impacts Employment Analysis Unit. Employment Strategy Papers, N° 13, ILO. OIT, Gnebra, Marzo.
- MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana (2005), “La pieza que faltaba: uso del tiempo y regímenes de bienestar en América Latina”, en *Nueva Sociedad*, N° 199, septiembre-octubre. Lima, Perú, pag. 35-52.
- MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana y VOOREND, Koen (2008), “Transferencias condicionadas e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises?”, en *Revista de Ciencias Sociales* N° 122, vol. IV, Costa Rica.
- MARX, Karl (1973), *El capital*. FCE, México (Edición original: 1867). Tomo I, Capítulo VIII “La jornada de trabajo”.
- MAZZEO, Miguel (2006), “Los límites del desempleo estructural como disciplinador social”, en *Ephemera. Theory y politics in organization*, vol 6(3), pag. 349-374.
- MCCONNELL, Campbell R. y BRUE, Stanley L. (1997), *Economía Laboral*. Ed. McGraw-Hill, Madrid.
- MEAD, Lawrence (1997). “The rise of paternalism”, en MEAD, Lawrence (Ed.), *The new paternalism*. Brooking INSt. Pr, Washington DC.
- MÉDA, Dominique (1998), *El trabajo. Un valor en peligro de extinción*. Gedisa, Barcelona.
- MERKLEN, Denise (1997). “Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio; entre las condiciones y las prácticas”, en *Revista Sociedad*, N° 11. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Buenos Aires, pag. 21-64.
- MERKLEN, Denise (1999), “La cuestión social en el sur desde la perspectiva de la integración”, en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Centro de Documentación en políticas sociales. Documentos/20. Disponible en internet vía: www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/documentos/politicas.php?menu_id=195.
- MERKLEN, Denise (2004), “Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción”, en *Laboratorio/n line. Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, año IV, N° 16, verano. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias

- Sociales. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en internet vía: www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm
- MERKLEN, Denise (2005), *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática. Argentina, 1983-2003*. Ed. Gorla, Buenos Aires.
- MERLINSKY, María Gabriela (2002), “Las consecuencias sociales de la desocupación en Argentina”, en *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, vol. VI, N° 119 (36). Disponible en internet vía: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-36.htm>.
- MERTON, Robert (1992), “Las duraciones esperadas socialmente: un estudio de caso sobre la formación de conceptos en sociología”, en RAMOS TORRE, Ramón (Comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid. (Edición original del artículo: 1984).
- MICHAUD, Jacinthe (2005), “Political discourses on workfare and feminist debates on the recognition of unpaid work”, en *Atlantis. A women's studies journal*, Vol. 28, N° 2.
- MIDAGLIA, Carmen (2012), “Un balance crítico de los programas sociales en América Latina. Entre el neoliberalismo y el retorno del Estado”, en *Nueva Sociedad* N° 239, mayo-junio.
- MIGUÉLEZ, Faustino y TURNS, Teresa (1998), “Introducción al análisis del trabajo y la vida cotidiana”, en *Papers*, N° 55, pag. 9-25.
- MINGIONE, Enzo (1993), *Sociedades Fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del paradigma del mercado*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
- MINUJÍN, Albeto, COSETINO, Estela (1993), “Crisis y futuro del estado de bienestar. Aportes a un debate”, en MINUJIN, Alberto (Ed.) *Desigualdad y Exclusión*. UNICEF/Losada, Buenos Aires.
- MINUJÍN, Albeto, DAVIDZIUK, Alejandra y DELAMÓNICA, Enrique (2007), “El boom de las transferencias de dinero sujetas a condiciones. ¿De qué manera estos programas sociales benefician a los niños y niñas latinoamericanos?,” en *Salud Colectiva*, Nro. 3(2), mayo-agosto.
- MONT'ALVÃO, Arnaldo, NEUBERT, Luiz Flávio NEUBERT, Souza, Márcio Ferreira Souza y AGUIAR, Neuma (2007), “Tempo de trabalho e desigualdade ocupacional em Belo Horizonte”, en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- MONTES CATÓ, Juan y PICCHETTI, Valentina (2001), “De la jornada determinada a la indeterminación del tiempo de trabajo. Estudio sobre los cambios en la jornada laboral”. Ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Antigua. Guatemala.
- MONZA, Alfredo (2003), *Los dilemas de la política de empleo en la coyuntura argentina actual*. Ed. Fundación OSDE/CIEPP. Colección Diagnóstico y Propuestas N° 2, Buenos Aires.
- MONZA, Alfredo y GIACOMETTI, Claudia (2003), Los beneficiarios del Plan jefas y Jefes de Hogar. Serie Documentos de Trabajo, Proyecto de Cooperación Técnica OIT/Gobierno Argentino (MTEySS), citado en NEFFA, Julio César (2009), “El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD). Análisis de sus características y objetivos. Fortalezas y

- debilidades”, en Neffa, Julio César, De la Garza Toledo, Enrique y Muñiz Terra, Leticia (comps), *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. II*. Clacso, Buenos Aires.
- MOREL, Sylvie (1998), “Empleo y pobreza en los Estados Unidos: las políticas de workfare”, en Neffa, Julio y Gautié, Jérôme (comp.), *Políticas contra el desempleo en Europa y Estados Unidos*. Lumen/Humanitas/Trabajo y Sociedad/PIETTE, Buenos Aires.
- MULLER, Pierre (2002), *Las políticas públicas*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- MURILLO, Soledad (2000), *El tiempo de trabajo y el tiempo personal: un conflicto de intereses*. Emakunde, Vitoria-Gasteiz.
- MURMIS, Miguel (1969), “Tipos de marginalidad y posición en el proceso productivo”, en *Revista latinoamericana de sociología*, N° 2, pag. 413-421.
- NAREDO, José Manuel (2005), “Configuración y crisis del mito del trabajo”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AECI, Buenos Aires, mayo.
- NAVARRETE LORENZO, Montserrat, PAC SALAS, David y SOLANS SOLANO, José Ramón (2001), “¿Reducción o reordenación del tiempo de trabajo? La percepción de los trabajadores sobre las estrategias de los empresarios y de los trabajadores”, en *Revista Catalana de Sociología*, N° 15, pag. 117-139.
- NEFFA, Julio César (1998a), “Exposición”, en LINDENBOIM, Javier (Comp) *El desafío del empleo a finales del siglo XX*. Cuadernos del CEDEP N° 2, Instituto de Investigaciones Económicas – FCE- UBA.
- NEFFA, Julio César, (1998b), “Actividad, trabajo y empleo. Algunas reflexiones sobre un tema en debate a partir de la experiencia francesa”, en NEFFA, Julio y GAUTIÉ, Jérôme (comp.), *Políticas contra el desempleo en Europa y Estados Unidos*. Lumen/Humanitas/Trabajo y Sociedad/PIETTE, Buenos Aires.
- NEFFA, Julio César (2001), “Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo”, en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y NEFFA, Julio César (compiladores) *El trabajo del futuro, el futuro del trabajo*. CLACSO, Buenos Aires.
- NEFFA, Julio César (2007), “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y su evolución en Argentina (2002-2006)”, en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- Neffa, Julio César (2008), “Macroeconomía, instituciones y normas como determinantes y condiciones de las políticas de empleo”, en LINDENBOIM, Javier (comp), *Trabajo, ingresos y políticas públicas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*. Eudeba, Buenos Aires.
- NEFFA, Julio César (2009), “El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD). Análisis de sus características y objetivos. Fortalezas y debilidades”, en NEFFA, Julio César, DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y MUÑIZ TERRA, Leticia (comps), *Trabajo, empleo,*

calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. II. Clacso, Buenos Aires.

- NEFFA, Julio César (2011a), *Empleo, desempleo y políticas de empleo*. Documento de Trabajo N° 8, CEIL-CONICET, Buenos Aires.
- NEFFA, Julio César (2011b), “Políticas de empleo”, en *Revista Voces en el Fénix*. N° 6, UBA, Buenos Aires, pag: 74-81. Disponible en internet vía: <http://www.vocesenelfenix.com/>
- NEFFA, Julio César y colaboradores (2011), “Modelos productivos y su impacto sobre la relación salarial. Reflexiones a partir del caso argentino”, en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y NEFFA, Julio Cesar *Trabajo y modelos productivos en América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del modelo de desarrollo neoliberal*. Colección Grupos de Trabajo, CLACSO/CEIL-PIETTE-CONICET/Casa Abierta al tiempo (Universidad Autónoma Metropolitana)/Trabajo y Sociedad, Buenos Aires.
- NEFFA, Julio César (2012), “La evolución de la relación salarial durante la post-convertibilidad (2002-2012), en IV Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina. Del 15 al 17 de agosto.
- NOVICK, Marta (2006), “¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso argentino 2003-2006”, en *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, año 11, N° 18, pag. 53-77.
- NOWOTNY, Helga (1990), “Changement social et recherches sur le temps”, en *Temporalistes*, N° 13, janvier, pag. 21-22. Disponible en Internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>.
- NOWOTNY, Helga (1992a), “Estructuración y medición del tiempo: sobre la interrelación entre los instrumentos de medición del tiempo y el tiempo social”, en RAMOS TORRE, Ramón (Comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid. (Edición original del artículo: 1975).
- NOWOTNY, Helga (1992b), “Time and social theory. Towards a social theory of time”, en *Time & Society*, N° 3, Cardiff, United Kingdom, pag. 421-453.
- NUN, José (1969a), “Presentación”, en *Revista latinoamericana de sociología*, N° 2, pag. 174-177.
- NUN, José (1969b), “Informe sobre el proyecto de marginalidad”, en *Revista latinoamericana de sociología*, N° 2, pag. 410-413.
- NUN, José (1969c), “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, en *Revista latinoamericana de sociología*, N° 2, pag. 178-236.
- NUN, José (1987). “Cambios en la estructura social de la Argentina”, en NUN; José y PORTANTIERO, Juan Carlos (comp) *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*. Puntosur, Buenos Aires.
- NUN, José (1995), “¿Cómo será el trabajo del siglo que viene?”, entrevista publicada en *Clarín*, Domingo 31 de diciembre.
- NUN, José (1999), “El Futuro del Empleo y la Tesis de la Masa Marginal”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 38, N° 152. Buenos Aires, Argentina.

- O'DONNELL, Guillermo (1982), *1966-1973. El estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis*. Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
- OFFE, Claus (1995), *Capitalismo Desorganizado*. Brasiliense, São Paulo.
- OFFE, Claus (1996), “El trabajo heterogéneo”, en *Herramienta*, N° 1, agosto, pag. 96-100, Buenos Aires.
- OFFE, Claus (1997), “¿Pleno empleo? Para la crítica de un problema mal planteado”, en AAVV, *El paro y el empleo: enfoques alternativos*. Germania, Valencia.
- OLIVEIRA, Rosiska Darcy de (2003), *Reengenharia do tempo*. Rocco, Rio de Janeiro.
- OSZLAK Oscar y O'DONNELL, Guillermo (1976), *Estado y políticas sociales en América Latina*. CEDES, Buenos Aires.
- PANAIA, Marta (2005), “El desafío de incorporar la medición de la duración del empleo en el mercado de trabajo” en *Laboratorio/n line Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, año VI, N° 17-18, Otoño/Invierno. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires- Argentina. Disponible en internet vía: <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm>.
- PANAIA, Marta (2006), *Trayectorias de ingenieros tecnológicos. Graduados y alumnos en el mercado de trabajo*. Miño y Dávila, Buenos Aires.
- PARKER, Susan W. y SKOUFIAS Emmanuel (2003), “El impacto del Progreso sobre el trabajo, el ocio y el uso del tiempo”, en SEDESOL *Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación 2000. Impacto en el trabajo y en las relaciones intrafamiliares*. SEDESOL/PROGRESA, México.
- PAUTASSI, Laura (2003), *Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos?* CELS, Buenos Aires, Mayo.
- PAUTASSI, Laura (2004), “Beneficios y beneficiarias: análisis de Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en Argentina”, en VALENZUELA, María Laura (Edit.) *Políticas de empleo para superar la pobreza*. OIT, Santiago del Chile.
- PAUTASSI, Laura (2009), “Programas de transferencias condicionadas de ingresos. Quien pensó en el cuidado? La experiencia en Argentina.”, en Seminario Regional. Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Santiago de Chile, 29 y 30 de octubre, CEPAL.
- PEATIE, Lisa (1991), “Un buen circulante y cómo creció: el sector informal”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- PEDRERO NIETO, Mercedes (2003), “Distribución del tiempo entre trabajo doméstico y extradoméstico según la posición en la familia”, en Consulta técnica sobre contabilización de la producción no remunerada de servicios de salud en el hogar, Organización Panamericana de la Salud, Washington DC, 4-5 de diciembre.
- PEÑALVA, Susana y ROFMAN, Alejandro (comp.) (1996), *Desempleo estructural, pobreza y precariedad*. Nueva Visión, Buenos Aires.
- PEREIRA, Luiz (Org.), (1978), *Populações “marginais”*. Duas cidades, São Paulo.

- PERELMAN, Mariano (2008), “De la vida en la Quema al trabajo en las calles: el cirujeo ciudad de Buenos Aires” en *Avá. Revista de Antropología*, N° 12, julio, pag. 117-135, Universidad Nacional de Misiones.
- PERONA, Nélica, ROCCHI, Graciela y MARIANI, Sonia (2004), “El Programa Jefas y Jefes de Hogar ¿de qué política social se trata?”, en *Revista Kairos*, año 8, N° 13. Disponible en internet vía: www2.fices.unsl.edu.ar/~kairos/indices_acumulados.htm.
- PIAZZE, Juan (2001), “La paradoja del tiempo libre”, en *A Parte Rei. Revista de Filosofía*. N° 15, mayo. Disponible en internet vía: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/adorno.pdf>.
- PICCHIO, Antonella (2001), Un enfoque macroeconómico “ampliado” de las condiciones de vida. Conferencia inaugural de las Jornadas “Tiempos, trabajo y género”, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, reproducidas en “Género, equidad y reforma de la salud en Chile. Apuntes desde el Género para una economía de la salud.” OPS/OMS. Santiago.
- PICÓ, Josep (1998), “Teoría y empiria en el análisis sociológico: Paul F. Lazarsfeld y sus críticos”, en *Papers*, N° 54, pag. 9-48.
- PINILLA GARCÍA, Francisco Javier (2004), “Intensificación del esfuerzo de trabajo en España”, en *Cuadernos de Relaciones Laborales*, Vol. 22, N° 2, pag. 117-137.
- POLANYI, Karl (1976), “El sistema económico como proceso institucionalizado”, en Godelier, Maurice (Comp) *Antropología y Economía*. Anagrama, Barcelona.
- POLANYI, Karl (2006), *La gran transformación*. FCE, México. (Edición original: 1944)
- POLISCHER, Gabriela (2006), “Paradojas del asistencialismo: una mirada a partir del caso de un comedor comunitario”, en *Cuadernos de Clapso-Argentina* N° 8, Buenos Aires.
- PORTES, Alejandro (1999), “La economía informal y sus paradojas”, en Carpio, Jorge, Klein, Emilio y Novacovsky, Irene (Comp) *Informalidad y exclusión social*. FCE, Siempre, OIT.
- POUW, Nicky R. (1998), *La economía doméstica: desarrollo de una perspectiva alternativa*. WIDE, Coordinadora Estatal de ONGDS, Madrid.
- POVEDA ROSA, María M. (2006), “Los lunes al sol o los lunes en casa. Roles de género y vivencias del tiempo de desempleo”, en *Cuaderno de Relaciones Laborales*, 24, N° 2, pag. 85-110.
- PRICE, R. H., FRIEDLAND, D.S. y VINOKUR, A.D. (1998), “Job Loss: Hard Time and Eroded Identity” en HARVEY, J.H. (ed.), *Perspectives on Loss: a Sourcebook*. PA: Taylor & Francis, Philadelphia.
- PRIETO, Carlos (2000), “Trabajo y orden social: de la nada a la sociedad de empleo (y su crisis)”, en *Política y sociedad*, N° 34, Madrid.
- PRIETO, Carlos (Ed.) (2007), *Trabajo, género y tiempo social*. Ed. Complutense, Madrid.
- PRONOVOST, Gilles (1995), “Medios: elementos para el estudio de la formación de los usos sociales”, en *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, Universidad de Colima, México, pag. 47-70.
- PRONOVOST, Gilles (1997), “Manquons-nos de temp? Structure et conceptions du temps”, en *Internacional Review of Sociology*, Vol. 7, N° 3, pag. 365-373.

- PRONOVOST, Gilles (1998), “Manquons-nos de temp?”, en *Temporalistes*, N° 37, mai, pag. 4-8.
- PRONOVOST, Gilles (2002), “Le temps, toujours le temps”, en *La Presse*, Montréal, mardi 10 décembre 2002, page A17.
- PRONOVOST, Gilles (2003), “Temps de travail, temps familial, temps sociau”. Communication présentée au 15è congrès annuel du Carrefour Action Municipale Famille, Conférence nord-américaine sur la famille, Longueuil, 23 mai 2003.
- PROST, Antonie (1989), “Fronteras y Espacios de lo Privado”, en ARIES, Philippe y DUBY, Georges, *Historia de la Vida Privada*. Taurus, Buenos Aires.
- QUIROGA, Hugo (2005), *La Argentina en emergencia permanente*. Edhasa, Buenos Aires.
- QUIROGA, Hugo (2010), *La república desolada*. Edhasa, Buenos Aires.
- RAGGIO, Liliana (2003), “Evaluación de programas sociales desde una perspectiva cualitativa. En torno de la definición de las necesidades a partir de los destinatarios”, en LINDENBOIM, Javier y DANANI, Claudia (coord.), *Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Editora Biblos, Buenos Aires.
- RALDÚA Martín, Eduardo (2001), “Comparación internacional de los empleos del tiempo de mujeres y hombres”, en *REIS*, N° 94, abril-junio, pag. 105-126.
- RAMÍREZ, Alfredo (2006), “Programa Jefes y Jefas de Hogar en Argentina: un modelo de política social universal”, en *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, N° 2, SIMEL-CEUR.
- RAMOS, Ramón (2004), “De la sociedad del riesgo a la sociedad de la incertidumbre”, en LUJÁN, José Luis y ECHEVERÍA, Javier *Gobernar los riesgos: Ciencias y valores en la sociedad del riesgo*. Biblioteca Nueva, OEA, Madrid.
- RAMOS TORRE, Ramón (1989a), “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkheimiana (I)”, en *REIS*, N° 46, pag. 23-50.
- RAMOS TORRE, Ramón (1989b), “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkheimiana (II)”, en *REIS*, N° 48, pag. 53-77.
- RAMOS TORRE, Ramón (1990a), “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkheimiana (y III)”, en *REIS*, N° 49, pag. 77-102.
- RAMOS TORRE, Ramón (1990b), *Cronos Dividido. Uso del tiempo y desigualdad entre mujeres y hombres en España*. Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid.
- RAMOS TORRE, Ramón (1992), “Introducción”, en RAMOS TORRE, Ramón (comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid.
- RAMOS TORRE, Ramón (1997a), “La ciencia social en busca del tiempo”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 11-37.
- RAMOS TORRE, Ramón (1997b), “Nota sobre la sociología del tiempo en España” en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 219-231.

- RAMOS TORRE, Ramón (1998), "El desvanecimiento de Cronos: aspectos de la temporalidad en las sociedades actuales", en GONZÁLEZ ORDOVÁS, M. J., RAMOS TORRE, R., GÓMEZ, M. V., DOLÇ, C., CORTÉS ALCALÁ, L. y SARAVIA MADRIGAL, M. *El malestar urbano en la gran ciudad*. Talasa, Madrid, pag. 33-44.
- RAMOS TORRE, Ramón (s/d), "Cambios en la crono-estructura de las sociedades contemporáneas". Mimeo, s/d.
- REPETTO, Fabián (2001), *Gestión pública y desarrollo social en los noventa: Las trayectorias de Argentina y Chile*. Prometeo; Buenos Aires.
- REPETTO, Fabián (2007), "Nueva matriz socio-política, problemas sociales y políticas públicas. América Latina a inicios del Siglo XXI" en SARAVÍ, Gonzalo (Ed.) *De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina*. Prometeo Libros, Buenos Aires.
- REPETTO, Fabián y DÍAZ LANGOU, Gala (2010), "El papel de la Asignación Universal en la construcción de un Sistema de Protección Social Integral". *Documento de Trabajo N° 55*, CIPPEC, Buenos Aires.
- RIZZO, Nadia (2013), "Política social y estratificación: una mirada sobre el *workfare* y las transferencias monetarias condicionadas", en CHÁVEZ MOLINA, Eduardo (Comp) y PLA, Jélica (Col.) *Desigualdad y movilidad en el mundo contemporáneo. Aportes empíricos y conceptuales. Argentina, Chica, España y Francia*. Imago Mundi, Buenos Aires.
- ROBIN, Silvia y CRUCELLA, Carlos (2000/20002), "Empleo y pobreza en el segundo aglomerado urbano del interior de la Argentina durante el segundo semestre de 1998", en *La trama de la comunicación. Anuario del departamento de ciencias de la comunicación*. Escuela de Comunicación Social – Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Rosario. Laborde Editor, Rosario.
- ROCA, Emilia (2013), "Políticas de protección social y su impacto en la reducción de la pobreza en la Argentina 2003-2012", en *Revista Voces en el Fénix* N° 23, UBA, Buenos Aires, pag: 52-59. Disponible en internet vía: <http://www.vocesenelfenix.com/>
- ROCA, Emilia, SCHACHTL, Lila, BERHO, Fabián, LANGERI, Marcelo (2005), "Resultados de la segunda evaluación del Programa Jefes de Hogar e inserción laboral de los beneficiarios en empleos registrados", en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: "Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades". Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de agosto.
- RODRÍGUEZ CHAURNET, Dinah (2004), "Valoración económica y social del trabajo doméstico", en CHÁVEZ CARAPIA, Julia del Carmen (comp.) *Perspectiva de Género. Género y Trabajo Social N° 1*. UNAM, México. Disponible en internet vía: www.modemmujer.org.
- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2005), "Economía del cuidado y política económica: una aproximación a sus interrelaciones", en Trigésima octava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 7 y 8 de septiembre.

- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2007a), “Trabajo, empleo y políticas de asistenciales de transferencia monetaria. Una mirada de género a partir del caso argentino”, en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2007b), “Trayectorias laborales y políticas asistenciales de empleo. El caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHD) y la inserción laboral femenina”, en 8vo. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de agosto.
- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2007c), “Economía del cuidado, equidad de género y nuevo orden económico internacional”, en GIRÓN, Alicia y CORREA, Eugenia *Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico internacional emergente*. CLACSO, Buenos Aires. Octubre. Disponible en internet vía: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/giron_correa/22RodriguezE.pdf
- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2007d), “Empleo femenino, economía del cuidado y políticas públicas. Algunas consideraciones desde la evidencia argentina”, en CARBONERO GAMUNDÍ, María Antonia y LEVÍN, Silvia (comps.) *Entre familia y trabajo, Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina*. Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- RODRÍGUEZ Enríquez, Corina y REYES, María Fernanda (2006), “La política social en la Argentina post-convertibilidad: políticas asistenciales como respuesta a los problemas de empleo”. *Documento de Trabajo N° 55*, diciembre, CIEPP.
- ROFMAN, Alejandro (1996), “El desempleo en la capital y en el interior: perfiles actuales del desempleo estructural en la Argentina. La situación diferencial del Gran Buenos Aires y el interior”, en PEÑALVA, Susana y ROFMAN, Alejandro (comp.) (1996), *Desempleo estructural, pobreza y precariedad*. Nueva Visión, Buenos Aires.
- RUBINICH, Lucas (1997), “Touraine y la “cultura de la pobreza”, en *Apuntes de investigación*, año 1, N° 1, octubre, pag.116-120.
- RUPNIK, Alejandro y COLOMBO, Pimpi (2005), “Las mujeres cuentan. Contemos el trabajo de las mujeres. Investigación sobre la distribución del uso del tiempo entre las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires”, en Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales *Decir mujer es decir trabajo. Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género. Capacitación*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, Consejo Nacional de la Mujer, Embajada de España, AEI, Buenos Aires, mayo.
- SAHLINS, Marshall (1976), “Economía tribal”, en GODELIER, Maurice (Comp) *Antropología y Economía*. Anagrama, Barcelona.
- SALA, Gabriela, GOLOVANEVSKY, Laura y RAMIREZ, Alfredo (2001), “El programa trabajar en Jujuy: una mirada posible”, en 5 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, del 01 al 04 de agosto.

- SALLES, Vania (1999), “El trabajo y el no-trabajo: un ejercicio teórico–analítico preliminar desde la sociología de la cultura”, en DE LA GARZA, Enrique (comp.) *Los Retos Teóricos de los Estudios del Trabajo hacia el Siglo XXI*. CLACSO, Buenos Aires.
- SALVIA, Agustín (2000), “Hacia un balance de las políticas de empleo y capacitación laboral en los '90. Elementos para el diagnóstico y la discusión”, en *II Semana de Políticas Sociales, Servicio UNICION*, Buenos Aires. Disponible en internet vía: www.geocities.com/territoriosocial/Articulos.html
- SALVIA, Agustín (2004), “Crisis del empleo y nueva marginalidad en tiempos de cambio social. Génesis de una catástrofe anunciada”, en *Revista Argumentos*, N° 4, septiembre. Disponible en internet vía: www.argumentos.fsoc.uba.ar/n04/articulos/salvia.pdf
- SALVIA, Agustín (2005), “Crisis del empleo y nueva marginalidad: El papel de las economías de la pobreza en tiempos de cambio social”, en MALLIMACI, Fortunato y SALVIA, Agustín (comps), *Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados*. Biblos, Buenos Aires.
- Salvia, Agustín (coord.) (2002), “Estudios diacrónicos de varones beneficiarios del seguro de desempleo y pago único”. *Documentos de Trabajo N° 31, Instituto de Investigaciones Gino Germani*. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
- SALVIA, Agustín, FRAGUGLIA, Luciana y METLIKA, Ursula (2005), “¿Una mejor calidad ocupacional en los mercados laborales de la Argentina post devaluación?”, en *Laboratorio/n line. Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, año VI, N° 17-18. Otoño/Invierno. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en internet vía: <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm>.
- SAMANIEGO, Norma (2002), *Las políticas de mercado de trabajo y su evolución en América Latina*. CEPAL, Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 19, Santiago de Chile.
- SAMUEL, Nicole (1998), “Pour ou contre les budgets-temps?”, en *Temporalistes*, N° 39, pag. 4-7. Disponible en internet vía: <http://www.sociologics.org/temporalistes>
- SANCHIS, Enric (2002), “La experiencia del paro”, en VIII Jornadas de Economía Crítica. Globalización, Regulación Pública y Desigualdades. Valladolid, España, del 28 de febrero al 02 de marzo. Disponible en internet vía: www.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Sanchis%20Enric.PDF
- SANTILLÁN, Laura y WOODS, Marcela (2005), “Iglesia y cuestión social: la intervención de la iglesia Católica en la construcción de las demandas de educación, tierra y vivienda en el Gran Buenos Aires”, en *Revista de Antropología*, vol. 48, N° 1, Sao Paulo, Jan./Jun.
- SANTISO, Javier (2001), “La democracia como horizonte de espera y campos de experiencia: el ejemplo chileno”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. XXI, N° 2.
- SANTOS ORTEGA, Antonio (2004), *Trayectorias sociales del paro de larga duración*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Director: Dr. Carlos Prieto Rodríguez.

- SARALEGUI, Jorge (1997), "Proyecto del Instituto Nacional de Estadística para la Encuesta Europea de Empleo del Tiempo en España (EET) EUROSTAT", en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 193-204.
- SCARFÓ, Gabriela, HOPP, Malena y HIGHTON, Catalina (2009), "Reflexiones sobre el concepto de empleabilidad", en *Plaza Pública*, N° 2, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil.
- SCHEDLER, Andreas y SANTISO, Javier (1999), "Democracia y tiempo. Una invitación" en SCHEDLER, Andreas y SANTISO, Javier (Comps) *Tiempo y democracia*. Ed. Nueva Sociedad, Venezuela.
- SCHOR, Juliet (1991), *The overworked American: the unexpected decline of leisure*. Basic Books, USA, citado en NEFFA, Julio César (2001), "Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo", en DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y NEFFA, Julio César (compiladores) *El trabajo del futuro, el futuro del trabajo*. CLACSO, Buenos Aires.
- SCHWARTZ, Barry (1992), "Colas, prioridades y proceso social", en RAMOS TORRE, Ramón (comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid. (Edición original del artículo: 1978).
- SEGALL, Shlomi (2005), "Unconditional welfare benefits and the principle of reciprocity" en *Politics, philosophy & economics*, 4(3), pag. 331-354.
- SEN, Amartya (1992), "Sobre conceptos y medidas de pobreza", en *Comercio Exterior*, vol. 42, N° 4, México, abril.
- SENNETT, Richard (1998), *La Corrosión del Carácter*. Anagrama, Barcelona.
- SENNETT, Richard (2003), *El Respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*. Anagrama, Barcelona.
- SHEPPARD, Harold (1967), "La desocupación, la mano de obra y el desarrollo regional", en LAZARSFELD, Paul, SEWELL, William y WILENSKY, Harold (comps.), *Planificación sociológica de los problemas sociales*. Paidós, Buenos Aires.
- SIEMPRO (2003), Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Impacto y características de los beneficiarios. Febrero. Disponible en internet vía: www.siempro.gov.ar
- SIMÕES, Armando A. (2006), "Los programas de transferencia: una complementariedad posible y deseable", en MOLINA, Carlos Gerardo *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*. BID, Editorial Planeta, Washington D.C.
- SOARES, Fábio Veras y BRITTO, Tatiana (2008), "Encarando las limitaciones en la capacidad para transferencias monetarias condicionadas en Latinoamérica: los casos del El Salvador y Paraguay". Centro Internacional de Pobreza Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- SOLDANO, Daniela y ANDRENACCI, Luciano (2006), "Aproximaciones a las teorías de la política social a partir del caso argentino", en ANDRENACCI, Luciano (Comp.), *Problemas de la política social contemporánea*. Prometeo, Buenos Aires.
- SORJ, Bila (1999) "Sociologia e Trabalho: Mutações, Encontros e Desencontros". Conferencia presentada para el concurso público de profesor Titular de Sociología del Trabajo del Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

- SOROKIN, Pitirim y MERTON, Robert (1992), “El tiempo social: un análisis metodológico y funcional”, en RAMOS TORRE, Ramón (comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid. (Edición original del artículo: 1937).
- SOUZA, Paulo Renato y TOKMAN, Victor (1991), “El sector informal y la pobreza urbana en América Latina”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- STIGLITZ, Joseph (2006). “Prólogo”, en POLANYI, Karl. *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- ŠUBRT, Ju í (2001), “The problem of time from perspective of social sciences”, en *Czech Sociological Review*. Vol. 9, N° 2, pag. 211-224. Disponible en internet vía: http://www.soc.cas.cz/casopisy/sreview/upl/archiv/files/170_211SUBRT.pdf.
- SUMNER, Colin (2003), “Control social: historia y política de un concepto central en la sociología anglo norteamericana”, en *Delito y Sociedad*, año 12, N° 18-19, Buenos Aires-Santa Fe, pag. 5-35.
- SUPERVILLE, Marcos y QUIÑONES, Mariela (2005), “De la marginalidad a la exclusión social: cuando el empleo desaparece”, en ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia (comp), *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras discursivas y actores*. CLACSO, Buenos Aires.
- SVAMPA, Maristella (2005), *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Taurus, Buenos Aires.
- SVAMPA, Maristella (2006), “Modelo de dominación, tradiciones ideológicas y figuras de la militancia”, en *Revista Pampa. Pensamiento/acción política*, año 1/ N° 1/julio. Instituto de Estudios e Investigación, CTA, Buenos Aires.
- SVAMPA, Maristella (2007), “Las fronteras del gobierno de Kirchner: entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo”, en *Cuadernos del CENDES*, año 21, N° 65, Tercera Época, mayo-agosto.
- SZLECHTER, Diego (2009), “Tiempo y disciplina en gerentes de empresas transnacionales en Buenos Aires”, en *Revista de Ciencias Sociales*, N° 125, III, Universidad de Costa Rica.
- THOMPSON, E. P. (1984), “Tiempo, disciplina de trabajo y capital industrial”, en *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Crítica, Barcelona.
- THOMPSON, E. P. (2000), *Agenda para una historia radical*. Crítica, Barcelona.
- TIRIBA, Lia (2002), “Tempos de ócio e de trabalho em tempos de desemprego - A versão angrense do paraíso tropical”, en *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona. Vol. VI, N° 119 (131), El Trabajo. Número extraordinario dedicado al IV Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio), agosto. Disponible en internet vía: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119131.htm>.
- TOKMAN, Victor (1991a), “Introducción: dos décadas de sector informal en América Latina”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

- TOKMAN, Victor (1991b), “Las relaciones entre los sectores formal e informal. Una exploración sobre su naturaleza”, en TOKMAN, Victor (Comp) *El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
- TOKMAN, Victor (1999), “El sector informal posreforma económica”, en CARPIO, Jorge, Klein, Emilio y NOVACOVSKY, Irene (Comp) *Informalidad y exclusión social*. FCE, Siempro, OIT.
- TORNS, Teresa (2004), “Las políticas de tiempo: un reto para las políticas del Estado de Bienestar”, en *Trabajo, Revista Andaluza de Relaciones Laborales*, N° 13, pag. 145-164.
- TORRADO, Susana (2004), “Ajuste y cohesión social. Argentina: el modelo para no seguir”, en *Revista Tareas*, N° 117, mayo-agosto. CELA, Panamá, pag. 15-24.
- TORRADO, Susana (2007), “Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad”, en Torrado, Susana (comp.), *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una historia social del siglo XX*. Tomo I. Editorial Edhasa, Buenos Aires.
- TORRE, Juan Carlos (1998), *El proceso político de las reformas estructurales en América Latina*. Paidós, Buenos Aires.
- TORREGROSA PERIS, José (1987), “Prólogo a la edición española”, en JAHODA, Marie, *Empleo y desempleo. Un análisis socio-psicológico*. Morata, Madrid.
- TROUILLOT, Michel-Rolph (2001), “The anthropology of the state in the age of globalization. Close encounters of deceptive kind”, en *Current Anthropology*, vol. 42, N° 1.
- TRUJILLO, Lucía y SARABIA, Marianela (2011), “El mundo del trabajo y la territorialidad en la Argentina a partir de los hogares con programas de transferencias monetarias”, en MTEySS *La complejidad del empleo, la protección social y las relaciones laborales*. Serie: Trabajo, ocupación y empleo N° 10.
- VAIOU, Dina (1991/2), “Hogar y lugar de trabajo: la experiencia de las mujeres en el desarrollo urbano de Atenas”, en *Documents d’analisi geografica* N° 19-20, pag. 123-140.
- VAIOU, Dina (1995), “El treball de les dones y la vida cotidiana al sud d’Europa”, en *Documents d’analisi geografica* N° 26, pag. 219-231.
- VALENCIA GARCÍA, Guadalupe (1999), “El tiempo social: una dimensión fundante”, en XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Concepción, Chile, del 12 al 16 de octubre.
- VALENCIA GARCÍA, Guadalupe (2007), *Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico*. Anthropos, México.
- VALENCIA LOMELÍ, Enrique (2008), “Las transferencias monetarias condicionadas como política social en América Latina. Un balance: aportes límites y debates”, en *The Annual Review of Sociology*, Nro. 34, pag. 499-524.
- VILLARREAL, Federico (2007), “Participación y control político”, en Manzanal, Mabel, Arzeno, Mariana y Nussbaumer, Beatriz (comps.) *Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto*. CICCUS, Buenos Aires.
- VILLARREAL, Juan (1999), “Estado del arte y derivaciones actuales sobre la informalidad”, en *Laboratorio/n line*, año I, N° 3. Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de

- Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires - Argentina. Disponible en internet vía: <http://lavboratorio.fsoc.uba.ar>.
- VILLATORO, Pablo (2005), "Programas de transferencias. Experiencias en América Latina", en *Revista de la CEPAL* Nro. 86, pag. 87-102.
- VILLATORO, Pablo (2007), "Las transferencias condicionadas en América Latina: luces y sombras". Documentos de la CEPAL para el Seminario internacional Evolución y desafíos de los programas de transferencias condicionadas. Brasilia, 20 y 21 de noviembre.
- VINOCUR, Pablo y HALPERÍN, Leopoldo (2004), *Pobreza y políticas sociales en Argentina en los años noventa*. CEPAL, Serie Políticas Sociales N° 85, Santiago de Chile.
- WACQUANT, Loïc (1995), "Introducción", en BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc, *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Anagrama, Barcelona.
- WACQUANT, Loïc (1997), "Elias en el ghetto", en *Apuntes de investigación*, año 1, N° 1, octubre, pag. 7-12.
- WACQUANT, Loïc (2001), *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Manantial, Buenos Aires.
- WAINERMAN, Catalina (1995), "De Nairobi a Pekín. Las mujeres y el trabajo en Argentina", en *Revista Sociedad*, N° 6, abril. Facultad de Ciencias Sociales-UBA.
- WAINERMAN, Catalina (2007), "Familia, trabajo y relaciones de género", en CARBONERO GAMUNDÍ, María Antonia y LEVÍN, Silvia (comps.) *Entre familia y trabajo, Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina*. Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- WEBER, Lílían y IOCHINS GRISCI, Carmem Ligia (2007a), "Subjetividade e trabalho imaterial em serviços de saúde: um olhar sobre o cotidiano de auxiliares de enfermagem", en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- WEBER, Lílían y IOCHINS GRISCI, Carmem Ligia (2007b), "Modos de trabalhar, modos de ser: implicações dos modelos de produção na vida social e individual", en V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril.
- WEBER, Max (1989), *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Premiá editora, Puebla. (Edición original: 1905)
- WHITSON, Risa (2007), "Lugar, género y la estructura del trabajo informal", en *Lavboratorio/nline*, año VIII, N° 20. Verano/Invierno. Instituto de Investigaciones "Gino Germani" Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Disponible en internet vía: <http://lavboratorio.fsoc.uba.ar>.
- WIDERQUIST, Karl (1999), "Reciprocity and guaranteed income", en *Politics & Society*, vol 27, N° 3, pag. 387-402.
- WILSON, William Julius (1996/7), "When work disappears", en *Political Science Quartely*, Vol. 111, N° 4, winter, pag. 567-595.

- YIN, Robert (1984), *Case study research. Design and methods*. California, Ed Sage.
- ZARINA, Inna (1997), “Uso del tiempo y cambios sociales en Letonia”, en *Revista Internacional de Sociología*, N° 18, septiembre-diciembre, pag. 143-161.
- ZEISEL, Hans (1996), “La escuela vienesa de investigaciones de la motivación” (año de la conferencia 1967), en LAZARFELD, Paul, JAHODA, Marie, ZEISEL, Hans (1996), *Los Parados de Marienthal*. La Piqueta, Madrid.
- ZERUBAVEL, Eviatar (1992), “El calendario”, en Ramos Torre, Ramón (comp.), *Tiempo y Sociedad*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI Ed., Madrid.
- ZUZANEK, Jiri (1990), “Social time as a theoretical concept and everyday reality”, en *Sixth Canadian Congress on Leisure Research*. May 9-12. Disponible en internet vía: <http://www.lin.ca/resource/html/cclr%206/CCLR6-58.pdf>

Documentos públicos/oficiales

- CONVENIO MARCO entre el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y la provincia de Santa Fe para la implementación de los Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Buenos Aires, febrero de 2002. Disponible en internet vía: <http://www.santafe.gov.ar/gobierno/tecnica/ley12129.htm>
- INDEC (1997), *¿Cómo se mide el desempleo?* Argentina, abril.
- INDEC (2006), Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 28 aglomerados urbanos. Buenos Aires, marzo.
- INDEC (2014), *Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo. Resultados por jurisdicción*. Buenos Aires, julio.
- INE, UNIFEM, INMUJERES, UDELAR (2008), *Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay*. Montevideo, Uruguay, septiembre.
- INEC-MECovi (1998), *Uso del tiempo de las y los nicaraguenses*. Nicaragua.
- INMUJERES (2003), *La encuesta de uso del tiempo y sus potencialidades para conocer las inequidades de género*. Dirección de Estadísticas, México, diciembre.
- INMUJERES (2005), *Pobreza, género y uso del tiempo*. Dirección de Estadísticas, México, diciembre.
- MTEySS (2004), Segunda Evaluación del Programa Jefes de Hogar. Resultado de la Encuesta de Beneficiarios. Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Disponible en internet vía: www.trabajo.gov.ar/left/biblioteca/files/estadisticas/4_encuesta.pdf
- MTEySS (2008a), Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Resumen. Secretaria de Empleo, marzo, Buenos Aires.
- MTEySS (2008b), Programas de Acciones de Empleo de Transferencia Directa. Evolución de Beneficiarios. Secretaria de Empleo del MTEySS.
- THE WORLD BANK (2002), “Project appraisal document on a proposed loan in the amount of US\$600 million to the Argentine Republic for the Jefes de Hogar (Heads of Household)

program project”. Report No. 23710-AR. October 22. Sector Management Unit for Human Development Country Management Unit for Argentina, Chile, Uruguay and Paraguay Latin America and Caribbean Region. Washington D.C.

THE WORLD BANK (2006), “Project appraisal document on a proposed loan in the amount of US\$350 million to the Argentine Republic for the Heads of Household transition project”. Report No. 32463-AR. February 2. Human Development Sector Management Unit Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay Country Management Unit Latin America and the Caribbean Regional Office.

THE WORLD BANK (2007), “Implementation completion and result report (Loan 073578) on a loan in the amount of US\$6000 million to the Argentine Republic for the Heads of Household”. Report No. ICR: 355. September 27. Human Development Sector Management Unit Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay Country Management Unit Latin America and the Caribbean Regional Office.

Publicaciones Periódicas

CLARÍN, 17 de enero de 2002, 11 de septiembre de 2005. Buenos Aires.

CLARÍN, “Menos trabajo, más tiempo libre: los europeos defienden su modelo”, Suplemento Económico, 8 de agosto de 2004. Buenos Aires.

CLARÍN, “El Banco Mundial también frenó créditos para el Plan Jefas y Jefes”, 28 de noviembre de 2005. Buenos Aires.

LA CAPITAL, 15 de febrero de 2006, 24 de marzo de 2006 y 18 de septiembre de 2006. Rosario.

O GLOBO, quinta-feira 13 de março de 2008

PÁGINA/12, Suplemento Cash, 24 de abril de 2005. Buenos Aires.

Washington Monthly, “When work disappear: the world of the new urban poor – Book reviews” by WHITMAN, David. November, 1996. Disponible en internet vía: www.findarticles.com

Páginas web consultadas

INDEC: www.indec.mecon.ar

Observatorio Económico Territorial – Universidad Nacional del Litoral: www.unl.edu.ar/oet

Otras Fuentes

Instrumento de la Encuesta de Empleo del Tiempo, s/f, INE-España. Documento no publicado.

Instrumento de la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo, 1996, INEGI-México. Documento no publicado.

Instrumento de Encuesta de Uso del Tiempo, s/f, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-España. Documento no publicado.

Anexo

Los estudios y encuestas de uso del tiempo: sus características, historicidad, límites y potencialidades

1- La historicidad de los estudios de uso del tiempo

1.1.- Los primeros estudios

Poder datar históricamente el surgimiento de los primeros estudios de uso del tiempo no parece ser una tarea fácil. Un recorrido por la literatura específica nos enfrenta con lo que podríamos denominar dos etapas iniciáticas.

La primera de esas etapas se remontaría a 1845, con la publicación de Friedrich Engels de *The situation of the working class in England*. En esa obra es posible encontrar algunas estimaciones sobre cómo los obreros distribuían su tiempo. La noción de presupuesto-tiempo también está presente en los estudios de Frédéric Le Play sobre la vida de los obreros europeos. Asimismo, es posible citar como un “pionero tardío” a Frederic Taylor, quien en 1911, quiso establecer la distribución del tiempo de trabajo con el objetivo de instaurar una gestión científica del mismo. Para esa misma época, Franklin Henry Giddings, uno de los fundadores de la sociología en los Estados Unidos, intentaba establecer el uso del tiempo de sus estudiantes de la Universidad de Columbia para analizar el impacto de la pertenencia a las diferentes clases sociales en los comportamientos temporales cotidianos (Samuel, 1998).

La segunda etapa se inauguraría con las encuestas y los estudios dirigidos por George Esdras Bevens. En 1913, el autor publica en Estados Unidos *How working men spend their time*, trabajo que incluye los resultados de una encuesta realizada, en 1912 en Nueva York, a obreros manuales sobre la distribución del tiempo en actividades y días de la semana. Hay quienes consideran a este estudio como la primera aplicación de la metodología de uso del tiempo para el estudio de cuestiones sociales (Breedveld, Van den Broek y Huysmans, 2002). Es posible encontrar, también, referencias a una encuesta que el autor dirigiera, en Inglaterra, sobre el uso del tiempo de los desocupados (Samuel, 1998).

Ese mismo año, Maud Pember Reeves publica el estudio *Round about a pound a week*, llevado a cabo en Lambeth (Londres) por un grupo de mujeres de la Sociedad

Fabiana entre 1909 y 1913. El estudio recogía los datos surgidos de los diarios de actividades de un grupo de mujeres trabajadoras pobres con tres o más hijos. El objetivo de la encuesta era revelar las estrategias de supervivencia de las mujeres trabajadoras con familia numerosa, para, a partir de allí, indagar sobre los pasos para eliminar la pobreza.

Más allá de la exacta delimitación temporal de su surgimiento, es posible establecer que el origen de los estudios de uso del tiempo data de cuando en la emergente sociedad industrial surgió la preocupación por conocer y disponer de datos sobre la vida cotidiana de las familias urbanas, su dedicación a actividades económicas mercantiles y a actividades no remuneradas (García Sainz, 2005a).

1.2.- Las décadas del 20 y 30: la Revolución Rusa y el rol de los exiliados

Desde la perspectiva de Araya (2003), el considerable potencial informativo de las encuestas y de los estudios de uso del tiempo ya se estimaba entre los investigadores en los años 20. Para esta época los objetivos planteados y las orientaciones de las investigaciones no difieren mucho de la etapa anterior, ya que se centraban en los estudios demográficos, los destinados a conocer el funcionamiento de la industria y la estructura de las comunidades rurales y poblaciones urbanas, investigaciones sobre patrones de trabajo en las aldeas, estudios psicológicos sobre actividades de los hombres desempleados en relación con los tiempos de ocio, etc.

La técnica se vuelve popular en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en las décadas del 20 y 30, donde los estudios de uso del tiempo son usados con fines de planificación y de medida del progreso desde la revolución (Breedveld, Van den Broek y Huysmans, 2002). Entre los estudios más conocidos de esta etapa figuran los realizados por la Oficina Central de Estadística y dirigidos, entre 1922 y 1924, por S. G. Strumilin. El objeto de estos estudios eran los trabajadores y granjeros soviéticos, teniendo entre sus fines dar cuenta de los cambios que conllevó la implementación del socialismo en la vida de los trabajadores soviéticos y la difusión de un uso más utilitario del tiempo.

Las ulteriores purgas estalinistas interrumpieron -para algunos autores de manera total- las investigaciones en este campo en la URSS (Raldúa Martín, 2001; Samuel, 1998).

No obstante, la emigración a los Estados Unidos de Pitirim Sorokin, discípulo de Strumilin, permitió que los estudios sobre el empleo del tiempo prosiguieran.

Sin embargo, Samuel (1998) señala que por esos años en Estados Unidos ya se venían desarrollando una serie de investigaciones. Hacia fines de la década del 20 se habían realizado cinco estudios de presupuestos de tiempo de propietarios rurales, dirigidos por un organismo gubernamental ligado a la economía doméstica y a la agricultura. En 1934, se había publicado la obra de G. Lundberg, M. Komarovsky y M. Mc Inerny que utiliza la metodología de los estudios del tiempo para analizar el ocio y su evolución posterior a 1857, en una localidad cercana a Nueva York.

Sin lugar a dudas la publicación, en 1934, de *Time budgets and human behavior* de Sorokin y Beger le dará un gran espaldarazo a todo ese campo disciplinar dentro de los Estados Unidos. La obra, basada en una encuesta realizada a alrededor de cien personas en el marco de un programa gubernamental contra el desempleo, comprendía cuatro áreas principales: los componentes temporales, los contactos sociales informales, la posibilidad de previsión de las conductas humanas, así como también las motivaciones. Superando la mirada puramente cuantitativa de los presupuestos de tiempo, los autores intentan desentrañar la estructura de las motivaciones en la asignación del tiempo, para revelar las motivaciones conscientes. Consideran que el método de los presupuestos de tiempo les permite, sobre la base de la investigación empírica, comprender el significado del comportamiento humano.

1.3.- La Segunda Guerra Mundial y la proliferación de los estudios de uso del tiempo

Hay consenso generalizado entre los autores (Araya, 2003; Breedveld, Van den Broek y Huysmans, 2002; Samuel, 1998) que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial los estudios de uso del tiempo proliferan, adquiriendo gran extensión.

A partir de entonces, el objetivo de estas encuestas fue derivado hacia el conocimiento de las pautas de consumo, la cultura y el ocio, el desarrollo de la industrialización y urbanización, las necesidades de planificación y la distribución del tiempo por género, fundamentalmente.

En la URSS, después de la interrupción estalinista, son abiertos entre 1954 y 1955 ocho centros de investigación sobre uso del tiempo. G. A. Prudenski es quien toma el relevo de la tradición iniciada por Strumilin. Entre 1958 y 1968 se llevan a cabo más de un centenar de estudios de uso del tiempo. Samuel (1998) señala que el economista V. Patrushev es el encargado de elaborar un marco teórico sobre los presupuestos de tiempo. En él distingue cinco categorías de tiempo, definidas por dos funciones económicas del tiempo (producción y reproducción) y por dos conceptos prestados de la contabilidad (beneficio y gasto), aplicando estas categorías a los recursos físicos y mentales. Al igual que en la etapa anterior, los estudios en la URSS continúan teniendo como objetivo estudiar los resultados de la revolución sobre la vida social y cultural.

Por su parte, en los Estados Unidos, Europa y Japón son los organismos gubernamentales y las empresas privadas los encargados de desarrollar encuestas y estudios de uso del tiempo. En las décadas del 50 y 60, muchas de esas encuestas son organizadas con el propósito de programar las emisiones de radio y televisión. Son ejemplos de esta etapa las encuestas encargadas por Radiotelevisión Española, Mutual Broadcasting Company y Nakanishi en Japón.

En este período, y a la par de esta serie de encuestas y estudios locales y/o nacionales con objetivos puntuales, se lanza un ambicioso proyecto internacional que tenía como objetivo la “comparación sincrónica” (Raldúa Martín, 2001) de las actividades diarias de las poblaciones urbanas y suburbanas de doce países. El “Proyecto de Investigación Multinacional y Comparada de Presupuestos de Tiempo”, patrocinado por la UNESCO y la Secretaría General del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, fue presentado en 1964 y dirigido por Alexander Szalai.

Los representantes de los doce países intervinientes (Bélgica, Francia, República Federal Alemana, URSS, Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Persia y EEUU) debieron establecer un procedimiento estandarizado en relación con la elección de los lugares de estudio, consensuar las características de la población a ser observadas, la administración de los cuestionarios, el método de muestreo y el registro, la clasificación y la codificación de los datos obtenidos. Para García Sainz (2005a), estos aspectos

metodológicos ensayados son, justamente, los que convierten al “Proyecto Szalai” en el antecedente directo de las actuales encuestas de uso del tiempo¹⁷⁶.

Raldúa Martín (2001) apunta que ante la singularidad del proyecto, la Secretaría de la Asociación Internacional de Sociología propone la creación de una mesa redonda especial en el Sexto Congreso Mundial de Sociología, de septiembre de 1966, celebrado en la ciudad francesa de Evián, para debatir allí los hallazgos de esta investigación internacional sobre el empleo del tiempo. Los resultados definitivos del proyecto fueron publicados en el informe *The Use of Time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries*, el cual consta de cuatro partes. La primera revisa el consenso multinacional alcanzado respecto a las técnicas de investigación, a los principios de organización aplicados y a los nuevos análisis a efectuar. La segunda parte se dedica a presentar los diversos puntos de vista y los resultados nacionales obtenidos. La tercera parte ofrece varias tablas de datos para estimular el análisis secundario y para que el lector establezca su propia interpretación. La cuarta parte proporciona la bibliografía sobre los documentos relevantes del proyecto y las investigaciones sobre uso del tiempo realizadas en las distintas partes del mundo.

Como balance de esta etapa es fundamental destacar que las investigaciones de uso del tiempo recibieron, con el Proyecto Szalai, su mayor empuje y a partir de entonces los presupuestos de tiempo se establecen como método de investigación¹⁷⁷ (Breedveld, Van den Broek y Huysmans, 2002).

1.4.- La década del 70: institucionalización e impacto de las reivindicaciones feministas en los estudios de uso del tiempo

A mediados de los 70 se produce la definitiva institucionalización del método establecido durante la etapa anterior. Por estos años se crea la Internacional Association for

¹⁷⁶ El “Proyecto Szalai” también es utilizado como referencia obligatoria por los críticos del método de los presupuestos-tiempo. En este sentido, el estudio comparativo internacional les permite hacer hincapié en las debilidades existentes en la recolección de los datos, destacar la “particular fragilidad del testimonio” de los encuestados y poner en duda la validez de medir los hechos por un patrón arbitrario, como serían la hora y el día (Grossin, 1998).

¹⁷⁷ Algunos autores, entre los cuales es posible nombrar a Grossin (1998), consideran que los presupuestos-tiempo no constituyen un instrumento de conocimiento científico y que su uso debe quedar restringido a la tendencia habitual a la cuantificación temporal de las dificultades y de los apremios impuestos por la vida diaria. Para el autor “uno no dejará de contar el tiempo mientras continúe siendo una medida de valor material”.

Time Use Research (IATUR) que constituye el RC-13 de la Asociación Internacional de Sociología. Con la labor desarrollada por la IATUR, se afianza el tratamiento científico de las encuestas de uso del tiempo en torno a propuestas de carácter metodológico y de unificación de procedimientos para la recopilación de información (García Sainz, 2005a). También se crea un banco de datos de investigaciones sobre uso del tiempo (The International Time Budget Archive).

Las reivindicaciones feministas de la década del 70, que plantean con fuerza las desigualdades de género en el orden social, evidencian que el trabajo doméstico no remunerado al interior del hogar representa una importante producción económica en cada país. Es así que comienzan los esfuerzos por medir el trabajo no remunerado e incluir este tipo de producción en los sistemas de cuentas nacionales. Las encuestas de uso del tiempo se convierten, en este contexto, en el instrumento privilegiado tanto para evidenciar y mostrar la importancia del trabajo de reproducción social no remunerado como para recoger la información adecuada relacionada con este tipo de trabajo. La información estadística aparece, entonces, brindando la evidencia empírica que permite confirmar la desigualdad al proporcionar elementos que den cuenta del tamaño de las diferencias (Araya, 2003).

En los últimos años, estas líneas de análisis se vieron reforzadas con los desarrollos teóricos direccionados a revisar el concepto de trabajo, ambas perspectivas confluyen en la intención de recuperar aquellas actividades que se han hecho invisibles bajo la lógica del capitalismo (Carrasco, 2005a).

Hacia la década del 80, la mayor parte de los países de la Europa occidental había desarrollado algún tipo de operación estadística que permitiera captar el reparto del tiempo entre la población. La mayor parte de esas encuestas se realizaron como operaciones estadísticas diferenciadas, mientras que en otros casos formaron parte de otras encuestas o censos que habían ganado un desarrollo anterior.

1.5.- La década del 90: la internacionalización de los estudios de uso del tiempo y el fortalecimiento de su aplicación en América Latina

La década del 90 marca, a nivel de los estudios y de las encuestas de uso del tiempo, tres aspectos que merecen ser destacados. El primero de ellos refiere a los contenidos del plan de acción elaborado en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, China, de

1995. Dicho plan de acción recomendaba a todos los países a realizar encuestas de uso del tiempo con el objetivo de proveer un mapa de actividades, incluidas las relacionadas con el trabajo doméstico y la división del trabajo por género (Aguilar, 1999). Sin lugar a dudas, este elemento se constituye en el telón de fondo de los otros dos aspectos destacables de las encuestas de uso del tiempo en la década del 90.

El segundo aspecto se relaciona con la sucesiva incorporación de otras regiones del planeta (fundamentalmente países latinoamericanos y asiáticos) a la tendencia a desarrollar encuestas de uso del tiempo. Finalmente, el tercer aspecto está vinculado con el trabajo de homologación de las encuestas existentes en los distintos países europeos que viene desarrollando la oficina de estadísticas de la Unión Europea, EUROSTAT. El ambicioso proyecto de la EUROSTAT tiene como objetivo unificar metodologías y posibilitar la comparabilidad de los resultados.

Para Durán (1997, 2005c), *armonización* es la palabra clave que define este último proceso ya que permite comprender el esfuerzo internacionalizador de los últimos años en investigación empírica y hace sugerir los aspectos más positivos y deseables del fenómeno general de globalización:

“Puesto que la armonía se produce tanto en lo grande como en lo pequeño, acepta la diversidad interna y resalta el carácter procesual del fenómeno, ésta palabra hace emerger resonancias favorables en el plano ético y estético”
(Durán, 1997: 183)

El proyecto EUROSTAT tendería, de esta manera, a equilibrar la disponibilidad de datos sobre uso del tiempo que es mucho mayor en los países del norte y centro europeo, que en los países sureños, lo que provoca importantes problemas de periferialidad en el análisis.

Siguiendo con la perspectiva de la autora (1997, 2005c), la expansión de los estudios sobre uso del tiempo forma parte del crecimiento de los estudios sociales y económicos que se ha producido en todos los países desarrollados en las últimas décadas, como medio para facilitar la toma de decisiones políticas y la gestión de necesidades y recursos humanos. Así, las causas que contribuirían a explicar al auge o consolidación de los estudios de uso del tiempo serían las siguientes:

1. El cambio en la estructura demográfica y productiva de los países desarrollados. Con proporciones crecientes de jubilados, desocupados y estudiantes, hacen falta nuevos tipos de análisis de indicadores de la vida y cambio social. El tiempo aparece como una opción relativamente sencilla de medir, con buena capacidad descriptiva y explicativa.
2. La insatisfacción de amplios colectivos, especialmente las mujeres, con la invisibilidad a que el uso casi exclusivo de otras variables (como trabajo remunerado o ingresos) condena a algunos grupos y a algunas actividades que son centrales para el bienestar colectivo.
3. La expansión de un gran sector económico de actividades de ocio y medios de comunicación, que necesita y puede pagar una considerable información sobre sus consumidores y sobre el tiempo consumido en sus actividades. Los análisis de audiencia, vinculados a la publicidad, estimación de franjas horarias, etc. han dado gran impulso a los estudios generales de actividades.
4. El aumento del tiempo invertido en actividades no directamente productivas, como transporte y gestiones burocráticas.
5. La necesidad de cooperación internacional. Durante la década del 90 se ha profundizado la construcción de la sociedad europea, y se han reforzado los intercambios de todo tipo; entre otros, los de investigaciones y estadísticas.
6. El cambio tecnológico ha posibilitado el tratamiento de datos por equipos reducidos de investigadores o incluso por investigadores que trabajan individualmente.

Desde una perspectiva fuertemente crítica al método de los presupuestos de tiempo, Grossin (1998) interpreta que la multiplicación de este tipo de investigaciones (dentro de las cuales incluye los estudios emprendidos por institutos e investigadores profesionales, los realizados por empresas comerciales, así como también los sondeos permanentes y especializados de índice de audiencias) puede ser considerada como una verdadera “vigilancia de nuestras actividades” y sería producto de la carencia de marco teórico e incluso de cuestionario estructurado que este método supone.

2.- La metodología de uso del tiempo

2.1.- Las características básicas de la metodología

El objetivo básico de los estudios de uso del tiempo o presupuestos de tiempo es viabilizar la comprensión de las formas y de las maneras específicas que tienen las sociedades humanas de ordenarse temporalmente. Es decir, este tipo de metodología intenta dar cuenta del modo en que formar parte de un grupo social específico determina el uso del tiempo de las personas. Las diferentes técnicas utilizadas para dar cuenta de este objetivo suponen la posibilidad de realizar una mensura, un conteo exhaustivo del tiempo asignado a las diversas actividades durante un período específico. Si bien la forma más desarrollada intenta captar la totalidad de actividades durante un período de 24 horas, esta metodología también se utiliza para relevar sólo algún tipo específico de actividades (trabajar, leer, por ejemplo) durante períodos de tiempo variables (parte de un día o varios días).

Desde la perspectiva de Belloni (1988), lo que define el método de los presupuestos de tiempo es el conjunto de elecciones efectuadas al utilizar esa técnica, las finalidades y el ámbito de investigación que le corresponde. Así, el objetivo principal del método se encuentra en proporcionar una ilustración, una descripción de los comportamientos generalizados que aparecen en la población estudiada; además de permitir extraer indicaciones de carácter más orientativo, más causal, a condición de que se exploten con rigor las posibilidades del instrumento.

Sin lugar a dudas, en una dirección similar a estos postulados camina el énfasis puesto por Gershuny y Sullivan (1998) a la necesidad de dotar de un análisis verdaderamente sociológico a la información captada con la metodología de uso del tiempo. Este tipo de análisis, abriría la puerta a un estudio en profundidad de los diferentes aspectos de la temporalidad de la experiencia humana, aspectos que serían soslayados con un simple conteo de las horas asignadas a cada actividad.

Las principales contribuciones de los estudios de uso del tiempo se centran en permitir relevar y aprehender en detalle la vida cotidiana de una manera específica, no alcanzada por ninguna otra metodología. En este sentido, el método permitiría aprehender

el estilo de vida de las personas, incluyendo su vida social, sobre la base de los patrones a partir de los cuales usan su tiempo (Hirway, 2001).

Centrada en una perspectiva que brinda un peso mayor a la dimensión política, Durán (1997, 2005c) señala que los estudios de uso del tiempo son una de las formas de análisis del contrato social, o mejor aún, una forma de análisis de la “ejecución real” del contrato social. En este sentido, el crecimiento de los estudios sociales y económicos, de los que formaría parte el desarrollo sin igual de los estudios de uso del tiempo, constituiría un medio para facilitar la toma de decisiones políticas y la gestión de necesidades y recursos humanos.

Esta metodología fue utilizada fundamentalmente para explorar aquella parte de la vida de las personas sobre las cuales no había otra información disponible e, incluso, sobre aquellas áreas que eran sistemáticamente oscurecidas por otras metodologías. Es así que, en las últimas décadas, fue utilizada para medir el trabajo no remunerado, el trabajo “invisible” realizado por hombres y mujeres (pero esencialmente por estas últimas), y estimar la contribución de ese tipo de trabajo al bienestar de la población. Así, el trabajo no remunerado, y en particular el trabajo doméstico, se convirtieron en el foco en torno al cual se desarrollaron buena parte de los estudios y encuestas de uso del tiempo en los países desarrollados.

Para Carrasco (2005b), las macroencuestas de uso del tiempo llevadas adelante en Europa colaboraron en la construcción de bancos de datos que muestran la multiplicidad de tareas que componen el trabajo del hogar, los tiempos de cada una de ellas y el desigual reparto del trabajo familiar doméstico entre hombre y mujeres. De esta manera, las encuestas de uso del tiempo aportaron un elemento esencial a la concreción de un cuadro estadístico capaz de medir la “carga global de trabajo” a la que se enfrentan hombres y mujeres y un marco integrado bajo el que sea posible observar las interrelaciones entre el trabajo remunerado y el trabajo familiar doméstico y se pueda analizar -desde una perspectiva global y realista- el funcionamiento del mercado de trabajo, la forma de vida y de reproducción de las personas y la división sexual del trabajo.

El trabajo doméstico como núcleo fuerte de análisis se ha mantenido en los estudios de uso del tiempo desarrollados en América Latina y en los países asiáticos. Sin embargo,

estos últimos han incorporado paulatinamente nuevos e interesantes objetivos, tales como el análisis de las redes económicas de trabajo de la población vulnerable, la mejora en las estadísticas laborales, la mejora en las estimaciones del ingreso nacional y la utilización de los datos obtenidos para el diseño de políticas de reducción de la pobreza, generación de trabajo y promoción del bienestar. Dentro de este último objetivo, la gran contribución de los estudios y encuestas de uso del tiempo consistiría en “proveer bases sólidas para entender, medir y monitorear la sociedad sobre la cual deben ser formuladas, basadas y rediseñadas las políticas sociales” (Hirway, 2001).

2.2.- Las críticas a la metodología, sus límites e insuficiencias

La metodología de uso del tiempo, como cualquier otra metodología de investigación en el campo de las ciencias sociales, presenta una serie de limitaciones, las cuales lejos de invalidarla enfrentan al investigador con desafíos y recaudos tanto desde el punto de vista teórico como técnico. En el caso particular de la metodología de uso del tiempo varios de esos puntos débiles han sido recogidos en las últimas décadas con el objetivo de perfeccionar los instrumentos de captación y análisis de los datos.

Las limitaciones y las críticas a la metodología pueden ser agrupadas en dos grandes núcleos. El primero de ellos está relacionado con la falta de información sobre los aspectos más subjetivos del tiempo y el segundo refiere al tipo de testimonios recogidos o a lo que Durán (2002) denominó “la intermediación del sujeto”.

Una de las críticas más incisivas realizadas a la metodología de los presupuestos de tiempo fue la desarrollada por William Grossin en 1998. El artículo publicado en un número temático de la revista francesa *Temporalistes* centra su hilo argumental en la arbitrariedad del patrón de medida utilizado. Para el autor, en las investigaciones de presupuestos de tiempo se considera a la hora como un envase, el día igual para todos, el fraccionamiento como válido y las operaciones aritméticas como posibles. Este “a priori indiscutido” sería el que actúa otorgando validación al método.

De forma contraria, Grossin (1998) considera que tanto el día como la hora constituyen imposiciones de la sociedad industrial que actúa recortando artificialmente el tiempo. En este sentido, la definición del día como unidad periódica resulta de un efecto de

imposición social, consustancial a las sociedades industriales cuyo desarrollo está muy vinculado al factor tecnológico. Es el imperio de la máquina y de la tecnología, implícito en la ideología productivista, el que condiciona esta división biofísica del día en unidades temporales precisamente recortadas. Eso es lo que justifica la adopción de una escala por hora para dar cuenta de los "sistemas de actividades" que sirven de síntesis descriptiva de los comportamientos previstos en la perspectiva de las veinticuatro horas recurrentes, de los individuos y grupos.

Esta crítica referida a la teoría implícita es trasladada consecuentemente al método utilizado. En lo expuesto por Grossin (1998), la medida abstracta de horas y minutos empleados en actividades deja de lado la forma en que el actor efectúa esas actividades, las experimenta y las considera. Esto hace que desde el punto de vista económico, sociológico y personal las horas no sean intercambiables o equivalentes. De forma contraria, el cálculo de horas de actividades aparentemente similares reduce a las personas interrogadas a una población de individuos estadísticamente intercambiables. Las adiciones, oposiciones y comparaciones de actividades en términos de horas y minutos serían intrínsecamente falsas, tratándose más bien de una aberración inducida por una representación típicamente contemporánea del tiempo. Esta representación actuaría confirmando al tiempo un valor material.

Para el autor, son los hombres los que producen el tiempo de su actividad, un tiempo específico al que le otorgan su propia medida. Dentro de este postulado, el reparto artificial del tiempo asignado o pasado desarrollando una u otra actividad elimina las secuencias y articulaciones que les dan valor y sentido, así como también las yuxtaposiciones y las influencias que se ejercen inevitablemente entre las actividades en el cotidiano.

Desde la perspectiva de Gershuny y Sullivan (1998), la idea de la existencia de dos tipos contrapuestos o tipos duales de temporalidades, una "científica o matemática" y otra "social", es cuestionable. Para los autores, la segmentación lineal del tiempo y la conformación del denominado "tiempo del reloj", es un aspecto distintivo de cualquier sociedad compleja y tecnológicamente desarrollada, consecuentemente cualquier persona que viva en un sistema social de estas características será, necesariamente, afectado por esta

manifestación de la experiencia del tiempo¹⁷⁸. Este aspecto temporal de la experiencia humana, caracterizado por una secuencia lineal o progresiva de actividades, convive o se manifiesta de forma conjunta con la percepción relacionada con ese tiempo. Esta percepción, es fuertemente dependiente de un gran número de significados simbólicos y atributos emocionales que se corresponden con significaciones específicas y prioridades relacionadas con actividades o eventos específicos.

De esta manera, el imperio, en los sistemas sociales urbanos y desarrollados, de una segmentación lineal del tiempo en unidades fácilmente medibles que constituye, por un lado, un aspecto necesario de su funcionamiento, y por el otro, un componente fundamental de la experiencia humana en estas sociedades, no supone desconocer la existencia de una pluralidad de tiempos. Dentro de esta coexistencia de diferentes temporalidades, cualquiera de ellas puede tomar prioridad en un punto particular dentro de la existencia individual cotidiana.

Más que centrarse en el debate sobre si la existencia de un “tiempo científico o matemático” y un “tiempo social” posibilitarían la construcción de un objeto de estudio sociológico, Gershuny y Sullivan (1998) prefieren reconocer que las personas experimentan el tiempo en diferentes y, potencialmente, simultáneas formas, todas ellas imbuidas de significación sociológica. En este sentido, una forma apropiada de medir el tiempo sería tratarlo como una secuencia lineal de actividades que permita, a su vez, medir la duración y la densidad de las actividades que constituyen esta secuencia. En este estudio del significado de las actividades, ni la cualidad del tiempo, ni el reparto interno de las actividades pueden ser ignorados sin sesgar la investigación. Ambos elementos caminan en forma conjunta y cada uno otorga significado al otro.

¹⁷⁸ Esta noción es largamente compartida dentro de la sociología del tiempo e incluso Aguiar (1999) señala que en aquellas sociedades con una relativa capacidad de lecto-escritura existen suficientes signos temporales en todas partes, dando cuenta de cómo un sector de esa sociedad con capacidad de leer y escribir es responsable de la mediación del tiempo a través de relojes. Las tablas de horarios del transporte, los programas de radio, las campanas de la iglesia, las sirenas de las fábricas, etc., constituyen marcas temporales desarrolladas por organizaciones, las cuales son reconocidas por el conjunto de la población y no sólo por el grupo con capacidad de leer o escribir. Como fue señalado anteriormente, desde la perspectiva de la autora, incluso aquellos grupos, que dentro de la sociedad, poseen una capacidad parcial de lecto-escritura y una escasa accesibilidad a los relojes, se ven forzados a usar números, incluso antes de aprender a escribir. De la misma manera, investigaciones desarrolladas en Brasil dan cuenta de cómo estos grupos son capaces de presupuestar, de gerenciar su tiempo.

Como es posible observar, las respuestas a la feroz crítica planteada por Grossin (1998) terminan incorporando algunas de sus líneas de análisis, particularmente aquellas que van en la dirección de incorporar la valoración que hacen los actores, los protagonistas de sus propias actividades; así como también la dinámica y el contexto en el cual las desarrollan. Estas respuestas han tenido, en los últimos años, su correlato en diversas reformulaciones realizadas a los instrumentos de recolección y análisis de la información con el objetivo de superar buena parte de este núcleo de limitaciones y críticas.

El segundo núcleo en torno al cual se han desarrollado una serie de críticas, y que sin lugar a dudas es fundamental considerar para poder realizar el análisis de los datos dentro de determinadas limitaciones, está relacionado con el tipo de testimonios recogidos.

En este sentido, una primera cuestión a considerar está relacionada con lo que Belloni (1988) denominó la “incapacidad de evidenciar la anomia”. Dentro de las investigaciones de presupuestos de tiempo no se deben esperar informaciones sobre los comportamientos que ridiculizan la moral corriente, a propósito de los cuales las personas entrevistadas emiten juicios de valor aceptables por el entrevistador. Aparte de los comportamientos verdaderamente criminales, la censura de los protagonistas se ejerce sobre los actos, no necesariamente ilegales, sino juzgados reprobables. En el mismo sentido, Grossin (1998) señala que ni siquiera la garantía del anonimato logra que el entrevistado reconozca la realización de aquellas actividades juzgadas como reprobables. “Los entrevistados son modelos de virtud y asexuales. No tienen pereza, no *vagean*, no tienen conversaciones amorosas y no dedican ningún tiempo a sus relaciones íntimas” señala el autor irónicamente.

Para Durán (2002), este tipo de limitaciones no sólo se refiere a la metodología de uso del tiempo sino que puede hacerse extensible a las encuestas en general. La autora considera que la intermediación del sujeto en ciencias sociales es inevitable, tanto por parte de los observadores como de los observados. Las encuestas (tanto de opinión como descriptivas de hechos) requieren de la cooperación de informantes cuyas declaraciones no equivalen exactamente a su conducta real o a los hechos descriptos. En este sentido, el deseo de ocultación, la consciencia de los hechos y el grado de conocimiento son algunos elementos que mediatizan las respuestas. Según Durán (2002), un tipo especial de sesgo es

el denominado “deseo políticamente correcto”, que empuja al entrevistado a decir lo que cree que debe decir, y que se suma a la “declaración interesada” o sesgo a favor de respuestas que el entrevistado percibe como más conveniente para sí mismo, o al efecto “congraciamiento” que presiona al entrevistado a decir lo que cree que desea escuchar el entrevistador.

Una segunda cuestión, relacionada con el tipo de testimonio que permite recoger la metodología de los presupuestos de tiempo es que “sólo informan sobre lo que se manifiesta abiertamente” (Belloni, 1988) y, más aun, que esos “testimonios son frágiles” (Grossin, 1998). La “fragilidad” estaría relacionada, en parte, con la inexactitud de la memoria en recordar el período de referencia (incluso cuando ese período de referencia es el día anterior). Este postulado plantea desde el punto de vista práctico tres inconvenientes: 1.- la tendencia a informar sobre las actividades de un día “típico” y no sobre las actividades realmente realizadas durante el día anterior o incluso sobre las actividades “anormales” realizadas; 2.- una tendencia a infravalorar determinadas actividades por considerarlas banales, usuales y rutinarias o intersticiales a dos actividades principales y/o aquellas actividades realizadas en solitario; y 3.- contrariamente, el tiempo consignado en el desarrollo de otras actividades se presenta largamente superior al tiempo demandado para su realización.

Finalmente, una última crítica se relaciona con el hecho de que los presupuestos de tiempo no tienen en cuenta los elementos que sobredeterminan las condiciones materiales de existencia y la cultura de los encuestados. Comprendiendo, así, situaciones fijas, mientras que los grupos sociales se des-estructuran y se re-estructuran sin cesar, ya que toda vida social es reorganización y cambio. No distinguen lo que permanece, lo que está incluido en la tradición y la rutina, de aquello que pertenece a la dinámica social, a los cambios y a la movilidad (Grossin, 1998).

En una dirección similar, Belloni (1988) enfatiza que toda actividad diaria informada es el resultado de una “elección” dentro de un sistema complejo de relaciones internas y externas al acto, que hace efectiva su realización. De esta manera, en los protagonistas existiría una actitud cambiante que los lleva a definirse frente a esas

“elecciones” y a someterse a normas impuestas por un medio ambiente normativo, institucional y culturas o por prácticas en las cuales se inscriben.

2.3.- La reformulación crítica de la metodología

Desde sus inicios tres núcleos de información se constituyen en los elementos básicos de la metodología de los presupuestos de tiempo o uso del tiempo: el tipo de actividades desarrolladas por las personas, la ubicación temporal de esas actividades (es decir, el momento del día en el que fue realizada) y el tiempo demandado en su realización. Más recientemente una serie de autores (Belloni, 1988; Carrasco, 2005b; Durán, 1997 y 2005c; Glorieux, 1998; Glorieux y Elchardus, 1999) vienen remarcando la necesidad de ampliar el tipo de información recolectada a fin de posibilitar un análisis más complejo, más cualitativo, pero por sobre todo más cargado de “significación” del uso del tiempo. Los autores han sugerido ampliar la mirada hacia cuatro ejes fundamentales:

- **El estudio de las simultaneidades o intensificación de uso del tiempo** (actividades distintas realizadas dentro de la misma franja horaria): intenta observar, dentro de lo que permite la información, cuáles son las simultaneidades más habituales y quiénes las realizan. Desde la perspectiva de García Sainz (2005a), la reiterada ausencia de esta dimensión se fundaría en el modelo de tiempo lineal presente en las encuestas de uso del tiempo. Dentro del modelo de tiempo lineal, expresado en los diarios de actividades a partir de la cuantificación cronométrica, las acciones se suceden en el tiempo de una manera secuencial y ordenada. Sin embargo, el tiempo no sólo fluye linealmente sino que también se vive y se percibe como cíclico, adquiriendo su representación una dimensión circular (García Sainz, 2005a; Luhmann, 1996; Ramos Torres, 1997a). Esta forma de entender el tiempo le permite a Luhmann (1996) introducir la distinción entre sucesión/causalidad (unas cosas suceden antes y otras después) y simultaneidad (todo ocurre a la vez). Es, justamente, este modelo de entender el tiempo y, consecuentemente, la posibilidad que ofrece de establecer la distinción entre sucesión y simultaneidad, el que brinda el marco conceptual a los desarrollos teóricos centrados en la necesidad de introducir la captación y el análisis de los simultaneidades en los estudios de uso del tiempo. Desde estas perspectivas, las personas acostumbran a realizar más de una actividad al mismo tiempo; o mejor, buena parte de las actividades

cotidianas se realizan de manera simultánea y compartida. La expresión luhmanniana “todo lo que acontece, acontece simultáneamente” (Luhmann, 1996:160) mostraría que cualquier actividad se produce en un entorno con el que se relaciona en simultaneidad. Así, la captación del contexto en el que se realizan las acciones ofrece un universo analítico más amplio que la descripción cronométrica para interpretar los datos temporales (García Sainz, 2005a). En esta misma línea de análisis, Ramos Torres (1997a) señala que la simultaneidad no hace sino mostrar las dificultades de un presente que resulta demasiado complejo¹⁷⁹. La simultaneidad es un hecho importante a estudiar por lo que ella refleja, tanto desde una vertiente positiva -vinculada con la capacidad de organización y realización simultánea- como desde una vertiente negativa -relacionada con su falta de reconocimiento y valoración social, así como también por las repercusiones que puede tener en la salud y calidad de vida de las personas que las realizan (Carrasco, 2005b)-. El fortalecimiento de esta dimensión en los estudios de presupuestos de tiempo permitiría profundizar los análisis centrados en la utilización del tiempo como ilustrativa de la forma en la que operan los patrones de género. En este sentido, diversos estudios han señalado que la realización simultánea de tareas -no remuneradas o remuneradas y no remuneradas- es, en general, un hecho diferencial de las mujeres. Por otra parte, la introducción de la simultaneidad en los análisis enfrenta al investigador con un problema de orden metodológico: ¿quién define cuál es la actividad principal y cuál es la actividad accesoria? Durán (1997, 2005c) señala que en algunos casos se ha pedido expresamente al sujeto entrevistado que decida por sí mismo y priorice, pero habitualmente la estructura del cuestionario o el tipo de institución que promueve el estudio, así como también el nombre, favorecen una perspectiva concreta y no otra. No muy alejadas de esta mirada se encuentran las consideraciones de García Sainz (2005a), para quien la distinción entre actividades principales y secundarias presupone un consenso en torno a lo que informantes y estadísticos consideran como principal y secundario. De ahí que las posibilidades de que las personas que rellenan el diario de actividades consideren principales algunas de las rúbricas reservadas para actividades secundarias sean escasas. La mayor parte de la población seguirá la

¹⁷⁹ En el marco de esta complejidad, la simultaneidad conlleva selección. No todo puede hacerse a la vez, sino sólo unas pocas cosas y las otras deben esperar un tiempo o someterse al destino de nunca ser realizadas (Ramos Torres, 1997a).

orientación marcada, reproduciendo el guión establecido. Así, lo que el cuestionario sitúa como principal aparecerá como tal con independencia de que el individuo lo considere más o menos importante. La posibilidad de que los individuos construyan o interpreten el tiempo de acuerdo con su propio criterio es reducida; más aún bajo la aplicación de técnicas de investigación cuantitativas.

- **Centrar la atención en los momentos del día en el cual las actividades son realizadas y su encadenamiento secuencial:** más allá de la simple cuantificación del tiempo invertido en cada una de las actividades, el análisis de las actividades por franjas horarias permite la posibilidad de reconstruir el desarrollo de un día en la vida de las personas (Carrasco, 2005b).
- **La incorporación del lugar donde se realizan las actividades:** hacia fines de la década del 80, Belloni (1988) destacaba que los estudios de presupuestos de tiempo habían permanecido alejados de la necesidad de situar las actividades en relación a los lugares donde se ejecutan. Esta circunstancia impedía, por un lado, comprender mejor los comportamientos y, por el otro, elaborar un mapa lógico que permitiera redefinir las actividades y el significado al cual están ligadas, de una forma que incorporara la movilidad espacial de los sujetos. La incorporación de la dimensión espacial, se convertiría, para la autora, en un elemento fundamental en los estudios relativos al entorno urbano. Sin embargo, desde la década del 90, han venido realizándose una serie de intentos por incorporar las variables referidas al lugar en la metodología de los presupuestos de tiempo. Mientras que por un lado algunas investigaciones realizadas con la técnica del diario de actividades han simplemente incorporado esta dimensión en los instrumentos de recolección, por el otro están desarrollándose intentos más abarcadores que comienzan a explorar la posibilidad de conjugar los supuestos teórico-metodológicos de los presupuestos de tiempo con el enfoque de la *time geography*¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Esta corriente, desarrollada por Torsten Hagerstrand se basa en la reconstrucción de las trayectorias individuales en el espacio y sitúa los lugares y los momentos en los que se asumen los diferentes roles, focalizando en la identificación de los factores que influyen, cercenan y/o restringen la actividad humana. Estas influencias proveen las fronteras globales que limitan el comportamiento de los agentes en el tiempo y en el espacio. Para poder concretar sus proyectos, los agentes deben utilizar los recursos inherentemente limitados de espacio y tiempo con el objeto de superar las restricciones con que son confrontados. Dentro de esta perspectiva se confiere especial atención a las restricciones a las actividades derivadas de las propiedades físicas del cuerpo y de los ambientes en los cuales los agentes se mueven (Ellegard, 2001; Flores, 2002; Giddens, 1989). Desde la perspectiva de Giddens (1989), la *time geography* es la única vertiente de la

Es, justamente en esta dirección, que se encamina el planteo de Ellegard (2001), el cual busca testear la utilización de nuevas tecnologías para el desarrollo de un método que permita, por un lado, mejorar las oportunidades de presentar y de ilustrar el uso del tiempo y, por el otro, comprender el resultado de las regulaciones y restricciones a las que están sometidas las actividades. La aplicación del programa VR¹⁸¹ le permitirá a Ellegard representar el tiempo y el patrón de actividades de una población de una manera diferente pero complementaria a los promedios de tiempo utilizados por los presupuestos de tiempo y a los dioramas utilizados por la *time geography*. Así, el planteo se orienta a sortear algunos límites de la metodología de los presupuestos de tiempo centrándose en situaciones más detalladas y más complejas de la vida cotidiana, como serían el contexto de las actividades y proyectos en los cuales se insertan las actividades específicas, o incluso sobre la distribución de las actividades entre los miembros de una familia. En resumidas cuentas, es posible establecer que para la mayoría de los autores la incorporación de la ubicación o el lugar donde se realizan las actividades actúan aportando información de tipo cualitativa para interpretación de las descripciones temporales.

- **Recabar información de las personas junto a las cuales se realizó la actividad:** el aprovechamiento de los diarios de actividades con una ampliación de las variables referidas a la compañía, junto con las referidas al lugar y la valoración subjetiva que los informantes otorgan a las actividades, viene siendo resaltada por diferentes autores (García Sainz, 2005a) como los ejes que aportarían una dimensión más cercana al

geografía que ha podido construir su armazón conceptual en torno a los modos por los cuales los sistemas sociales son constituidos a través del espacio-tiempo; apartándose, así, de la concepción del espacio y tiempo como meros contextos de acción. Para el autor, al centrar el análisis en las restricciones que dan forma a las rutinas de la vida cotidiana, la *time geography*, comparte con la teoría de la estructuración el énfasis en la centralidad del carácter práctico de las actividades para la constitución de la conducta y de las instituciones sociales. Sin embargo el autor encuentra que este enfoque posee, por un lado, una concepción simplista de los agentes y de los escenarios de interacción y, por el otro, una teoría del poder débilmente desarrollada.

¹⁸¹ Los programas VR (Realidad Virtual) son herramientas informáticas que intentan sumergir al usuario en un espacio virtual que le hace perceptible (por medio de técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes, la manipulación de periféricos que permiten la interacción y el desplazamiento multidimensional, así como el diseño de una rica interfase gráfica) un extenso conjunto de datos. Permiten de esta manera visualizar, manipular e interactuar con computadoras y con datos en extremo complejos. Sus aplicaciones son vastas y variadas y van desde la educación, la investigación, el arte y el diseño y la capacitación de personal, hasta la publicidad y el entretenimiento.

tiempo social y que brindaría una mayor posibilidad para comprender el contexto de las actividades y las vivencias que tiene la ciudadanía sobre su vida cotidiana.

Desde el punto de vista teórico-metodológico todos estos ejes van en la dirección de dotar de “significación” al uso del tiempo (Belloni, 1988; Glorieux, 1998; Glorieux y Elchardus, 1999) y están orientados a la tentativa de establecer relaciones ente los elementos recogidos (Belloni, 1988). En tanto, desde el punto de vista técnico, es importante resaltar que mientras algunos de ellos pueden resolverse redefiniendo o afinando la etapa del análisis de los datos, para otros es esencial la reformulación del instrumento de recolección de la información.

2.4.- Las diferentes técnicas dentro de la metodología de uso del tiempo

Aun cuando la metodología del uso del tiempo se constituye por antonomasia a partir de la técnica del diario de actividades -a tal punto que en los países anglosajones las expresiones *time budget studies* y *time budget surveys* suelen usarse de forma intercambiable-, se han desarrollado y aplicado diferentes técnicas para recabar información sobre las formas en las cuales una comunidad o un grupo de personas distribuye sus actividades y les asigna tiempo para su realización a lo largo de un día. A continuación se detallan las diferentes técnicas, sus principales características, sus potencialidades y límites.

*a) Diario de actividades*¹⁸²

Desde la perspectiva de Durán (1997, 2005c), el diario de actividades es una forma de relato en que el sujeto informa sobre sí mismo o sobre algún acontecimiento con periodicidad diaria, y se caracteriza -como el género literario- por la autonomía del estilo y contenido. Para la autora, la utilización de este tipo de información a los efectos de una observación extensiva y, por tanto, comparable, requiere suprimir las condiciones de libertad de percepción y descripción del sujeto, para someterlo a un formulario muy

¹⁸² Diario de actividades, encuesta de uso del tiempo, encuesta de presupuestos de tiempo o *time-budget survey* son expresiones equivalentes.

claramente pautado que precisa exactamente lo que el sujeto ha de observar y transcribir. En definitiva, transforma el diario en una encuesta.

Desde el punto de vista técnico, el cuestionario toma la forma de un diario, una grilla -similar a las agendas o a los “libros de contabilidad” (Ramos Torres, 1990b)- donde se encuentran delimitados los intervalos temporales dentro de los cuales el informante consignará, en sucesión, las actividades desarrolladas. Puede, de forma adicional, contener espacios donde informar las denominadas actividades secundarias (aquellas actividades que responden a las pregunta *¿qué más estaba haciendo?*), la ubicación espacial donde las actividades se desarrollan y si la actividad fue realizada en solitario o si el informante estaba en compañía de otras personas. Los instrumentos se complementan con información demográfica de los informantes y otros relativos a la vivienda, familia, etc. y pueden ser administrados externamente (por un entrevistador o supervisor) o auto-administrados; de igual manera, las diferentes actividades relevadas pueden estar codificadas o ser agrupadas con posterioridad.

Entre las principales ventajas del uso de esta técnica es posible enumerar:

- a) por la propia disposición del formulario, las actividades no pueden sumar más de 24 horas diariamente, que es el mayor riesgo de los recuentos de memoria ante listas de actividades (Durán, 1997, 2005c; Ramos Torres, 1990b).
- b) al seguir de cerca las actividades de cada sujeto en uno o varios días, evita cierto sesgo hacia la reconstrucción del día promedio al que pueden tender la técnica de lista de actividades y, en ese sentido, puede lograr mayor precisión y exactitud (Durán, 1997, 2005c; Ramos Torres, 1990b).

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, para algunos autores el diario de actividades no es la panacea y entre los inconvenientes o desventajas más resaltados cabe señalar:

- a) requiere una colaboración íntima del entrevistado (Durán, 1997, 2005c), y una familiaridad con la escritura (Aguiar, 1999; Durán, 1997, 2005c; García Sainz, 2005a) y la auto-observación que para algunos grupos sociales puede ser disuasoria.
- b) en aquellas oportunidades en que se recoge información sobre varias personas del mismo hogar, la observación yuxtapuesta posibilita análisis muy enriquecedores,

pero también genera problemas relevantes, porque la resistencia a informar aumenta en la medida en que disminuye la conciencia del anonimato (Durán, 1997, 2005c). Para algunos autores, la desconfianza de los informantes aumentaría en el caso de acciones indagatorias promovidas por el gobierno (García Sainz, 2005a).

- c) el elevado costo económico (Durán, 1997, 2005c; García Sainz, 2005a; Hirway, 2001), fundamentalmente, porque requiere de la disponibilidad de los investigadores en el campo durante mucho tiempo y porque en el caso de los diarios auto-administrados es frecuente que el investigador deba retornar varias veces a buscarlos (Hirway, 2001).
- d) la cuantificación cronométrica en la que se basa la técnica del diario de actividades constituiría la mayor expresión del modelo de tiempo lineal. Este modelo es visto como poco ilustrativo de las vivencias que experimentan los individuos en sus vidas cotidianas (García Sainz, 2005a).
- e) no considera el esfuerzo de los agentes y la eficiencia en la realización de las actividades (Hirway, 2001).
- f) no tiene en cuenta la tecnología usada o los obstáculos que se presentan en la realización de las actividades (Hirway, 2001).

b) Lista o encuesta de actividades

Este tipo de técnica, constituye más una alternativa (García Sainz, 2005a; Ramos Torres, 1990b) que una variante a los diarios de actividades o encuestas de uso del tiempo. Lo que se busca es establecer si una determinada población ha realizado, en el día anterior a la entrevista o en un período temporal más amplio (semana, mes, etc.), un conjunto previamente fijado de actividades sobre el que se pregunta directamente.

Tiene la ventaja de poder sacar a la luz la participación en actividades poco frecuentes, secundarias o de duración muy corta, que no aparecen o están sub-representadas en las encuestas de uso del tiempo¹⁸³. También puede ser superior a estas últimas en

¹⁸³ En este sentido García Sainz (2005a) señala que respecto al concepto de trabajo las listas o encuestas de actividades tratan de hacer visible lo que ha permanecido oculto a los indicadores sociales y económicos; por ello, se pone el énfasis en el trabajo no remunerado, tratando de neutralizar la hegemonía de lo mercantil y sus efectos discriminantes (ingresos, prestaciones, etc.).

capacidad para determinar la participación real en los distintos tipos de actividades (Ramos Torres, 1990b). Las potencialidades mencionadas llevan a algunos autores a considerar que aun cuando las encuestas o listas de actividades se apoyan también en técnicas distributivas están menos ceñidas que las encuestas de uso del tiempo a procedimientos estandarizados, posibilitando de esta manera una perspectiva más conceptual y analítica, así como también una percepción dinámica de lo social (García Sainz, 2005a).

No obstante, la encuesta o lista de actividades es considerada un instrumento imperfecto para determinar la duración de las actividades; la razón de este argumento estaría relacionada con los mecanismos de la memoria (Ramos Torres, 1990b). En este sentido, la reconstrucción de las actividades realizadas durante la jornada anterior siguiendo la secuencia temporal de su desarrollo (encuesta de uso del tiempo) es más precisa que el establecimiento de la duración de una actividad sin tener ningún punto de referencia temporal (lista o encuesta de actividades), hecho que llevaría a consignar las actividades en términos normativos (lo que suele durar o debe durar). Adicionalmente, cuantas más sean las actividades sobre las que se pregunte tanto más probable es que el día acabe durando más de 24 horas, cosa imposible en los diarios o en las encuestas de uso del tiempo (Durán, 1997, 2005c; Ramos Torres, 1990b).

Buena parte de los estudios de uso del tiempo realizados en España y en América Latina se apoyan en este tipo de técnica.

c) Observación participante

Existen referencias de realización de estudios de uso del tiempo basados en la técnica de la observación participante en Brasil en comunidades indígenas y campesinas. Este tipo de estudios tenía como objetivo cronometrar la organización social de comunidades cuya población no poseía educación formal (Aguiar, 1999).

Este tipo de técnica presenta entre sus limitaciones que muy pocos casos pueden ser observados al mismo tiempo, así como también que la propia metodología interfiere en las actividades que están siendo observadas. Sin embargo, aun cuando estas investigaciones se vean restringidas en los estudios de gran escala, aportan un gran valor exploratorio para la realización de estudios más sistemáticos (Aguiar, 1999).

d) Entrevistas grabadas

De forma similar a la técnica de la observación participante, los estudios de uso del tiempo basados en entrevistas grabadas son de gran utilidad cuando se trabaja con poblaciones con bajo o ningún nivel de instrucción, con poblaciones indígenas o campesinas o con poblaciones de edad avanzada. En tanto, sus límites se relacionan con la tendencia de los entrevistados a relatar un día típico en sus vidas y no las actividades del día previo (que generalmente es la información solicitada) y con las dificultades que presentan para una medición estandarizada.

e) Diarios o encuesta de actividades combinados con entrevistas

La combinatoria de la técnica del diario o de la lista de actividades con entrevistas se ha comenzado a utilizar con mayor sistematicidad en las últimas décadas. El objetivo fundamental de esta combinatoria de técnicas es lograr una comprensión más cabal de las actividades cuantificadas y dotar de “significación” al uso del tiempo. En la medida en que una actividad y/o su realización no siempre está cargada de la misma significación, el recurso de la entrevista actúa permitiendo su comprensión dentro de un contexto específico.

Encuesta de Uso del Tiempo

Universidad Nacional de Rosario - CONICET

Tener en cuenta para el llenado del diario:

1.- Al finalizar el día usted completará el diario, desde la hora del **desayuno** hasta la hora de la **cena**.

2.- Los días **sábados** y **domingos** usted completará el diario **solamente** si trabaja esos días. En el caso de las amas de casa, deberán anotar los días sábados y domingos aquellas actividades que realizan para toda la familia (como por ejemplo: cocinar, planchar, lavar, etc.)

3.- No olvide anotar el tiempo que pasa en los colectivos o caminando de un lugar a otro.

4.- En los horarios en los que está trabajando diga cuál es la tarea que está realizando (como por ejemplo: cortando el pelo a una clienta, limpiando en una casa, trabajando en la huerta).

**LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN ESTOS FORMULARIOS
ESTÁN PROTEGIDAS POR EL SECRETO ESTADÍSTICO
LEY NRO. 17622/68 Y NO SERÁN UTILIZADAS
MAS QUE EN FORMA EstrictAMENTE ANÓNIMAS**

ESCRIBA AQUÍ SUS DATOS:**EDAD:****SEXO:****ESTADO CONYUGAL:**

SOLTERO/A

CASADO/A

VIUDO/A

UNIDO/A DE HECHO

SEPARADO/ DIVORCIADO

ESCOLARIDAD

PRIMARIA INCOM..... SECUN. INCOM.

PRIMARIA COMPL.....SECUN. COMPL.

NO FUE A LA ESCUELA

CON QUIEN VIVE?

PADRES

MARIDO/MUJER

HIJOS

OTROS

HERMANOS/AS

TIOS

TIENE ALGÚN OFICIO?

PELUQUERA/ DEPILACIÓN

CARPINTERO

PANADERO/A

OTRO:

ALBAÑIL

HERRERO

GASISTA/PLOMERO

NO TENGO OFICIO

Semana 1

Hora	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00-7:30										
7.30-8:00										
8:00-8:30										
8.30-9:00										
9:00-9:30										
9.30-10:00										
10:00-10:30										
10.30-11:00										
11:00-11:30										
11.30-12:00										
12:00-12:30										
12.30-13:00										
13:00-13:30										
13.30-14:00										
14.30-15:00										
15:00-15:30										
15.30-16:00										
16:00-16:30										
16.30-17:00										
17:00-17:30										
17.30-18:00										
18:00-18:30										
18.30-19:00										
19:00-19:30										
19.30-20:00										
20:00-20:30										
20.30-21:00										
21:00-21:30										
21.30-22:00										

Hora	Sábado		Domingo	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00 - 7:30				
7.30 - 8:00				
8:00 - 8:30				
8.30 - 9:00				
9:00 - 9:30				
9.30-10:00				
10:00-10:30				
10.30-11:00				
11:00-11:30				
11.30-12:00				
12:00-12:30				
12.30-13:00				
13:00-13:30				
13.30-14:00				
14.30-15:00				
15:00-15:30				
15.30-16:00				
16:00-16:30				
16.30-17:00				
17:00-17:30				
17.30-18:00				
18:00-18:30				
18.30-19:00				
19:00-19:30				
19.30-20:00				
20:00-20:30				
20.30-21:00				
21:00-21:30				
21.30-22:00				

Semana 2

Hora	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00-7:30										
7.30-8:00										
8:00-8:30										
8.30-9:00										
9:00-9:30										
9.30-10:00										
10:00-10:30										
10.30-10:00										
11:00-11:30										
11.30-12:00										
12:00-12:30										
12.30-13:00										
13:00-13:30										
13.30-14:00										
14.30-15:00										
15:00-15:30										
15.30-16:00										
16:00-16:30										
16.30-17:00										
17:00-17:30										
17.30-18:00										
18:00-18:30										
18.30-19:00										
19:00-19:30										
19.30-20:00										
20:00-20:30										
20.30-21:00										
21.30-22:00										

Hora	Sábado		Domingo	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00 - 7:30				
7.30 - 8:00				
8:00 - 8:30				
8.30 - 9:00				
9:00 - 9:30				
9.30-10:00				
10:00-10:30				
10.30-11:00				
11:00-11:30				
11.30-12:00				
12:00-12:30				
12.30-13:00				
13:00-13:30				
13.30-14:00				
14.30-15:00				
15:00-15:30				
15.30-16:00				
16:00-16:30				
16.30-17:00				
17:00-17:30				
17.30-18:00				
18:00-18:30				
18.30-19:00				
19:00-19:30				
19.30-20:00				
20:00-20:30				
20.30-21:00				
21.30-22:00				

Semana 3

Hora	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00-7:30										
7.30-8:00										
8:00-8:30										
8.30-9:00										
9:00-9:30										
9.30-10:00										
10:00-10:30										
10.30-10:00										
11:00-11:30										
11.30-12:00										
12:00-12:30										
12.30-13:00										
13:00-13:30										
13.30-14:00										
14.30-15:00										
15:00-15:30										
15.30-16:00										
16:00-16:30										
16.30-17:00										
17:00-17:30										
17.30-18:00										
18:00-18:30										
18.30-19:00										
19:00-19:30										
19.30-20:00										
20:00-20:30										
20.30-21:00										
21:00-21:30										
21.30-22:00										

Hora	Sábado		Domingo	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00 - 7:30				
7.30 - 8:00				
8:00 - 8:30				
8.30 - 9:00				
9:00 - 9:30				
9.30-10:00				
10:00-10:30				
10.30-11:00				
11:00-11:30				
11.30-12:00				
12:00-12:30				
12.30-13:00				
13:00-13:30				
13.30-14:00				
14.30-15:00				
15:00-15:30				
15.30-16:00				
16:00-16:30				
16.30-17:00				
17:00-17:30				
17.30-18:00				
18:00-18:30				
18.30-19:00				
19:00-19:30				
19.30-20:00				
20:00-20:30				
20.30-21:00				
21:00-21:30				
21.30-22:00				

Semana 4

Hora	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00-7:30										
7.30-8:00										
8:00-8:30										
8.30-9:00										
9:00-9:30										
9.30-10:00										
10:00-10:30										
10.30-10:00										
11:00-11:30										
11.30-12:00										
12:00-12:30										
12.30-13:00										
13:00-13:30										
13.30-14:00										
14.30-15:00										
15:00-15:30										
15.30-16:00										
16:00-16:30										
16.30-17:00										
17:00-17:30										
17.30-18:00										
18:00-18:30										
18.30-19:00										
19:00-19:30										
19.30-20:00										
20:00-20:30										
20.30-21:00										
21:00-21:30										
21.30-22:00										

Hora	Sábado		Domingo	
	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?	¿Qué estaba haciendo?	¿Qué más estaba haciendo?
7:00 - 7:30				
7.30 - 8:00				
8:00 - 8:30				
8.30 - 9:00				
9:00 - 9:30				
9.30-10:00				
10:00-10:30				
10.30-11:00				
11:00-11:30				
11.30-12:00				
12:00-12:30				
12.30-13:00				
13:00-13:30				
13.30-14:00				
14.30-15:00				
15:00-15:30				
15.30-16:00				
16:00-16:30				
16.30-17:00				
17:00-17:30				
17.30-18:00				
18:00-18:30				
18.30-19:00				
19:00-19:30				
19.30-20:00				
20:00-20:30				
20.30-21:00				
21.00-21:30				
21.30-22:00				

Guía de entrevista a los coordinadores y/o personal de gestión de los centros comunitarios y asociaciones civiles
--

Nombre de la institución:

Dirección de la institución:.....

Nombre del entrevistado:

Función que ocupa en la institución:.....

1. ¿Cuánto tiempo hace que funciona la institución?
2. ¿Cómo se creó?
3. ¿Cuáles fueron los objetivos que se propuso la institución en sus orígenes?
4. ¿Qué tipo de trabajo realizan las personas?
5. ¿Cuántos beneficiarios de planes sociales realizan actividades de contraprestación en este momento en la institución?
6. ¿Cuántos de ellos son beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados?
7. ¿Cuando se inició el PJJHD, cuantos beneficiarios contraprestaban?
8. (En caso que el número sea menor) ¿Qué pasó con los otros beneficiarios?
9. ¿Qué tipo de trabajo realizan los beneficiarios en la institución?
10. ¿Cómo se proveen de los insumos necesarios para las actividades?
11. ¿Han dejado de realizar alguna actividad por falta o escasez de insumos?
12. ¿El Consejo Consultivo, la Municipalidad o algún otro nivel del Gobierno les pide que se le informe si los beneficiarios asisten o no a realizar las actividades de contraprestación?

13. ¿Hubo alguna fiscalización por parte del Gobierno o la Municipalidad? ¿Ha pasado alguien por la vecinal?
14. ¿Qué ocurre cuando, desde la institución, le dan de baja a alguna persona?
15. ¿Hubo algún tipo de re-empadronamiento en el marco del PJJHD en alguna ocasión?
¿Quiénes lo organizaron?
16. ¿Es el miedo la principal causa para que algunas personas sigan realizando las actividades de contraprestación?
17. ¿Los beneficiarios que asisten a la institución intentaron formar algún emprendimiento con las líneas de crédito que en algún momento tuvo el plan?
18. ¿Algunas de las beneficiarias están optando por pasarse el Programa Familias?